

CHILE:

un ensayo de
**COMPROMISO
HISTORICO**

JORGE PALACIOS



Edita: EDITORIAL 7 1/2, S.A.
(Reservados todos los derechos para todos los países)

Cubierta: MARCO PEREZ OLIVAN
Imprime: GRAFIQUES AVIA
ISBN: 84-85411-04-8
Depósito legal: B 30145 - 1978

CHILE:

un ensayo de
**COMPROMISO
HISTORICO**



JORGE PALACIOS

INDICE

INTRODUCCION

Primera Parte: LAS PREMISAS IDEOLOGICAS DEL FRACASO POLITICO DE LA UNIDAD POPULAR.

I.	La prehistoria de la "vía chilena" al socialismo	17
	1. El por qué de la democracia burguesa en Chile.	17
	2. La política de los Frentes Populares.	19
	3. La línea de la postguerra	21
	4. El XX Congreso del PCUS y la "vía pacífica"	24
II.	La ideología de la derrota: la "vía pacífica al poder"	27
	1. Los argumentos de Corvalán.	28
	2. La oposición marxista-leninista.	30
	3. El nacimiento de un verdadero Partido Comunista	32
III.	La prédica de falsas ilusiones	34
	1. El elogio de la "vía pacífica"	35
	2. Influencia del P"C" en Allende y en la Unidad Popular	38
	3. Especulación internacional con la "vía chilena"	41

Segunda Parte: LA DISPUTA DE LAS DOS SUPERPOTENCIAS POR CHILE.

IV.	La estrategia del socialimperialismo en Chile.	47
	1. La implantación del capitalismo de Estado	47
	2. La línea de alianza con el populismo pro-yanki	50
	3. La política del socialimperialismo frente al triunfo de la Unidad Popular	56
	4. La búsqueda del Pacto UP-DC durante el gobierno de Allende	59
V.	La política de EE.UU. frente al gobierno de la UP	69
	1. El fracaso de la Alianza para el Progreso en Chile	69
	2. Nixon y Kissinger se juegan por el golpe de Estado contra Chile	75
	3. Las condiciones económicas y sociales destinadas a facilitar el golpe	85

Tercera Parte: LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO DE LA UP

VI.	¿Qué intereses atacó el programa de la Unidad Popular?	103
	1. Los intereses del capitalismo norteamericano en Chile.	104
	2. La oligarquía terrateniente.	106
	3. La burguesía monopolista y financiera.	108
VII.	Las raíces del desabastecimiento y del "mercado negro"	110
	1. La "huelga" de inversiones de la industria privada	111
	2. La debilidad genera el aislamiento	113
	3. Desequilibrio entre la oferta y la demanda y crisis en la Balanza de Pagos	114
	4. Un intento frustrado de control de la distribución	119
VIII.	El desarrollo del capitalismo de Estado	124
	1. Procedimientos de estatización de las empresas	124
	2. Algunos antecedentes de la crisis fiscal	128

Cuarta Parte: LAS INSTITUCIONES BURGUESAS QUE ENFRENTO EL GOBIERNO ALLENDISTA.

IX. La oposición desde el Parlamento, Contraloría y Tribunales.	133
1. La obstrucción parlamentaria	133
2. Las Acusaciones Constitucionales	135
3. La Reforma Constitucional de la Democracia Cristiana	139
4. La guerrilla del gobierno contra la Contraloría y los Tribunales.	145
X. Las fuerzas armadas y policiales chilenas	151
1. Los planes yankis de militarización de América Latina	151
2. El prontuario represivo de las FF.AA. chilenas.	156
3. La campaña de tergiversación sobre las FF.AA. y policiales	160
4. ¿FF.AA. "constitucionales" y meramente "profesionales"?	163
5. La Aplicación de la ley del control de armas	176
6. Oposición a toda preparación del pueblo para el enfrentamiento armado	179
Quinta Parte: LAS CONTRADICCIONES EN EL SENO DE LAS FUERZAS DE OPOSICION Y GOBIERNO.	
XI. Las pugnas internas en las fuerzas golpistas y antigolpistas.	191
1. Las fuerzas de oposición reaccionarias	191
2. Las pugnas en el interior de la Unidad Popular	195
3. Los errores de la oposición pequeño-burguesa	211
4. El Partido Comunista Revolucionario de Chile.	221
XII. La evolución de los partidos opuestos a la Junta después del golpe	230
1. La posición de la DC.	230
2. La posición del Partido "Comunista".	232
3. Las tendencias en el Partido Socialista	237
4. La discusión ideológica en el Mapu	240
5. La línea post-golpe del MIR	246
6. La posición antifascista del Partido Comunista Revolucionario	249
XIII. Dos líneas en la lucha contra la Junta Militar	252
1. La línea capitulacionista del P"C".	252
2. La Junta fascista puede y debe ser derrocada por el pueblo	256
3. Es preciso forjar una dirección unitaria a las luchas.	260
Citas del libro	266
Siglas	270

DEDICATORIA

Dedico este libro a nuestro querido e inolvidable camarada Guillermo Arévalo, dirigente sindical y miembro del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario de Chile, torturado hasta la muerte sin que de su boca saliera una palabra que sirviera a los fascistas

INTRODUCCION

Chile ha sido tristemente famoso en el mundo entero por sus devastadores terremotos que se desencadenan, por lo general, cada media docena de años. No obstante, el 11 de septiembre de 1975, el pueblo chileno ha sido víctima de una calamidad muchísimo peor que la suma de esos siniestros: el golpe de Estado militar. En un país de sólo 10 millones de habitantes fueron asesinados más de 30 mil tan sólo en los seis primeros meses de dictadura, más de 150 mil han pasado por las cárceles o por campos de concentración. Más de medio millón de chilenos han debido abandonar el país, ya sea por la persecución política o contrainformación por la represión económica. Las torturas más brutales y refinadas copiadas de los más sanguinarios regímenes fascistas son empleadas sistemáticamente como procedimiento "normal" de interrogatorio o como medios de venganza y de intimidación.

La represión, sin embargo, no se expresa a través de actos de violencia directa contra las personas. Ella ha significado la destrucción completa de las instituciones y garantías democráticas de tipo burgués, que existían en Chile desde hace decenios. Han sido suprimidos: el Parlamento, las elecciones, la actividad legal de todos los partidos, la Central Unica de Trabajadores, la casi totalidad de los órganos de prensa, radio y programas de televisión no adictos a la dictadura. Incluso organismos humanitarios creados por la Iglesia Católica para ayudar a los familiares de los perseguidos, como el Comité Pro-paz, han sido disueltos.

De los 110 artículos de la Constitución Política en vigencia antes del golpe de Estado, sólo restan en aplicación poco más de una docena. A través del Decreto Ley del 16 de Noviembre de 1975, la Junta del Gobierno ha asumido el ejercicio de los poderes constituyente, legislativo y ejecutivo". Cada vez que uno de sus decretos viola la Constitución se considera ésta modificada por el tal decreto, en virtud del poder constituyente que se ha atribuido la Junta. Como cobertura "legal" de los procesos represivos se ha utilizado la legislación y los procedimientos judiciales más rigurosos: aquellos que correspondían a tribunales militares operando en tiempos de guerra. Sin embargo, ni siquiera esas leyes y procedimientos de extremo rigor han sido respetados y en la práctica ha reinado la arbitrariedad más absoluta en materia de represión. Después de más de tres años de consumado el golpe de Estado, se mantiene al país en situación de excepción: Estado de sitio o Estado de guerra y continua en vigor de toque de queda permanente en las noches.

Los derechos sindicales más elementales han sido abolidos: derecho de petición, de huelga, de elección de los dirigentes, de reunión. En cuanto a este último, no sólo han sido prohibidas las reuniones en lugares públicos, sino que se ha llegado al extremo de exigir autorización para reuniones privadas de más de seis personas. Decenas de miles de trabajadores han sido expulsados arbitrariamente de sus trabajos sin reconocérseles ninguna de las garantías legales a las que tenían derecho en un caso semejante.

La enseñanza en todos sus niveles ha sido intervenida por las autoridades militares. La autonomía universitaria ha sido suprimida por completo, nombrándose a interventores militares en reemplazo de los rectores y procediendo a expulsar entre un 25 y un 60 por ciento (según el centro universitario) de los profesores y alumnos. Numerosas cátedras y aún carreras completas han sido cerradas arbitrariamente, por considerárselas subversivas. Al igual que en la Edad Media se ha procedido a quemar los libros e impresos considerados como peligrosos.

Los atropellos de la Junta militar fascista en Chile contra los derechos humanos más elementales le han valido la condenación de numerosos gobiernos y organismos internacionales, entre ellos, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización Internacional del Trabajo y otras. Leopoldo Torres, Secretario General del Movimiento de Juristas Católicos y miembro de la Comisión Internacional de Juristas, después de la encuesta realizada en Chile en octubre de 1973, es decir, cuando la represión recién comenzaba, expresó: "... La situación y los actos criminales de la Junta en Chile pueden ser calificados de tentativa de genocidio de acuerdo a como éste es definido en la Convención de las Naciones Unidas".

La destrucción de las instituciones y de los más elementales derechos de la democracia burguesa en Chile, los crímenes, las torturas y la represión en general aplicada por la Junta fascista, no son más que una cara de la moneda. Toda esa represión es utilizada para ex-

propiar de un modo drástico y brutal a los trabajadores y a vastos sectores medios de artesanos, industriales y comerciantes, en beneficio del capital monopolista interno e imperialista y de la oligarquía terrateniente. El genocidio económico de la Junta contra el pueblo es aún peor que el genocidio político represivo.

La Junta fascista, no sólo se ha esforzado a través de la represión por ofrecer mano de obra barata a los grandes explotadores internos e inversionistas extranjeros, sino que, ha operado una de las más monstruosas transferencias de poder adquisitivo de los trabajadores al gran capital, que se conozcan en nuestra época. La participación del sector "asalariados" en la repartición del ingreso ha caído de 15 328 millones de dólares en el período 1970-73, a sólo 6.275 millones de dólares en el período 1974-76. Es decir, han perdido en sus ingresos 9.053 millones de dólares, lo que corresponde a una rebaja de un 60 por ciento. Por su parte, el sector "pequeños empresarios y trabajadores por cuenta propia", han perdido 179 millones de dólares en ingresos.

Uno de los mecanismos para expropiar a los trabajadores y sectores medios en beneficio del gran capital ha consistido en la aplicación de impuestos discriminatorios. Los dos sectores sociales mencionados más arriba han visto aumentados sus impuestos en más de 400 millones de dólares, mientras los latifundistas, monopolios nacionales y capital extranjero, han disminuido sus impuestos en una suma semejante. Otro de los sistemas de expropiación ha consistido en decretar la "libertad de precios" que, dada la estructura monopólica de las principales ramas de la producción, se ha traducido en una alza continua y acelerada de ellos. Tan sólo en los 12 meses que siguieron al golpe de Estado, la inflación aumentó en más de un 1.000 por ciento. Al mismo tiempo, los militares fascistas, han elevado continuamente (dos o más veces por mes) el precio del dólar, favoreciendo así a los monopolios imperialistas y a la alta burguesía exportadora e intensificando el proceso inflacionista. Por último, la expropiación se ha realizado reduciendo intensamente los gastos públicos y el Presupuesto en todo lo relacionado con servicios de beneficio popular. Basta decir que en 1977, el Presupuesto destinado a Salud Pública fue reducido a la mitad, mientras el Presupuesto militar fue aumentado 4 veces.

Como era de esperarlo, la brutal rebaja de poder adquisitivo de vastos sectores populares, el aumento de impuestos a ellos y a los sectores medios, la reducción del crédito a pequeños y medianos industriales y comerciantes y la eliminación de las barreras de protección frente a los productos importados, han generado una profunda recesión de la actividad productiva y de las ventas y un proceso masivo de quiebra de empresas pequeñas y medianas. Este hecho ha sido también deliberadamente buscado por la Junta fascista, para promover la concentración de capitales por parte de los sectores monopolistas. Esa concentración se ha complementado con la devolución a sus antiguos propietarios (o la venta a nuevos inversionistas) de las empresas estatizadas por el gobierno de Allende, así como los latifundios expropiados y con el pago de cuantiosas indemnizaciones a los monopolios imperialistas afectados por las reformas de dicho gobierno. En 1976 ya había sido devuelta a sus antiguos propietarios el 25 por ciento de las tierras expropiadas durante los gobiernos de Frei y Allende, es decir, más de 1 millón 200 mil hectáreas. Sobre un total de 494 empresas (sobre todo industrias) bajo control estatal han sido devueltas ya 457. Fueron incluso privatizadas empresas que nacieron como empresas estatales en períodos anteriores al gobierno de Allende. Han sido pagados al mismo tiempo, ya sea como indemnizaciones o como reducción de impuestos, más de 500 millones de dólares a los monopolios norteamericanos afectados por las reformas del gobierno allendista.

Si bien la quiebra de la pequeña y mediana empresa formaba parte de la política de la Junta en beneficio del gran capital, así como la reducción brutal del nivel de vida de las masas, los militares fascistas se han propasado en su servilismo hacia quienes promovieron el golpe de Estado, generando una profunda y casi incontrolable crisis económica. Una inflación desbocada y una gravísima recesión se han combinado para demoler la economía chilena, generando la crisis más grave de su historia. El producto interno bruto disminuyó ya en 1975 en cerca de un 15 por ciento, alcanzando el nivel más bajo desde 1969; y el ingreso nacional real ha disminuido por lo menos en un 26 por ciento, reduciendo el ingreso per-cápita a menos del que existía hace 10 años. Tan sólo la producción industrial tuvo una baja promedio de un 25 por ciento en 1975. Las quiebras comienzan a afectar ya a empresas de gran tamaño e incluso a las empresas financieras desde las que especula-

han los favoritos del régimen

Lo que ha hecho en Chile el gobierno de Pinochet ha sido ampliamente conocido y condenado internacionalmente. El semanario liberal inglés "The Observer", sintetiza la opinión generalizada en un artículo titulado: "No al general Pinochet", cuando señala que éste "se muestra no solamente como un tirano cruel, sino también como un administrador incompetente". También son conocidos en general los intereses políticos y económicos, tanto internos como internacionales, que se coaligaron para derribar al gobierno de Allende. Por su parte, la Comisión del Senado norteamericano presidida por Church, nos ha familiarizado hasta en sus detalles con la participación que tuvo la CIA en la preparación del golpe de Estado. Numerosos libros, folletos, artículos y films han aparecido en los que se describe y se analiza la ofensiva económica, política y armada que desarrollaron los sectores más reaccionarios de Chile, secundados por el gobierno norteamericano, para poner fin a la experiencia reformista ensayada por la Unidad Popular, luego de conquistar la Presidencia de la República en 1970.

No obstante, mientras más antecedentes salen a luz acerca de la ofensiva reaccionaria, legal e ilegal, abierta y clandestina, institucional y francamente subversiva, propagandística así como de sabotajes, atentados y acciones armadas que pusieron fin a dicha original experiencia de "socialismo", más incomprensible resulta para todo el mundo la conducta del gobierno allendista y del equipo dirigente de los partidos que lo apoyaban. Particularmente, resulta incomprensible la conducta de la dirección del llamado Partido Comunista de Chile, que se dice marxista y que jugó un papel dominante en la actuación tanto de la Unidad Popular como del Gobierno. No se comprende que teniendo a la mitad de la población del lado del gobierno —en especial a su sector más vital y decisivo: los obreros y campesinos, no los haya movilizado para aplastar la ofensiva reaccionaria; no se comprende su apego suicida y su sometimiento a leyes e instituciones, que no sólo eran controladas y utilizadas por la oposición sediciosa, sino continuamente violadas por ella en función de sus planes golpistas, no se entiende la ilimitada confianza que profesaron (y divulgaron en el pueblo) y las atribuciones desmedidas que otorgaron a Fuerzas Armadas dependientes del imperialismo, conocidamente represivas y cuyos afanes golpistas y aún intentos de golpes frustrados eran cada vez más evidentes; resultan incomprensibles los esfuerzos permanentes del Gobierno y de la dirección de la Unidad Popular —aún apelando en algunas ocasiones a la represión— por extinguir el vigoroso espíritu combativo que demostraron las masas populares; no se entiende por qué no se aprovechó el bloqueo económico y las diversas formas de agresión que puso en práctica el gobierno norteamericano, para desarrollar una movilización popular anti-imperialista que podría haber alcanzado incluso ecos continentales; no se comprende, por último, los desesperados esfuerzos realizados (en particular por los dirigentes del P"Com") por llegar a un pacto (en realidad una rendición en la que se ofrecía trazar puntos decisivos del Programa de gobierno), con el Partido Demócrata Cristiano, manejado en los hechos por un reconocido equipo de agentes del imperialismo norteamericano liderado por Frei y activos promotores del golpe de Estado. ¿Es que realmente los dirigentes del P"Com", que inspiraban de hecho la política de la Unidad Popular y del Gobierno, eran tan ingenuos que creían poder avanzar hacia el socialismo suscitando el "suicidio" político y económico de los sectores dominantes, tan sólo empeñándose en mantenerse dentro de la ley? ¿Es que creían realmente en el espíritu "constitucionalista" y "meramente profesional" de FF.AA., que desde comienzos de siglo habían masacrado a más de 10 mil trabajadores y que ya en 1964, ante la eventualidad de que Allende saliera elegido, realizaron numerosas ofertas de golpe de Estado a la Embajada norteamericana? Más aún, al presenciar la ofensiva feroz y multifacética de las fuerzas de oposición y las maquinaciones golpistas, ¿pusieron su confianza para defender al Gobierno en el "espíritu legalista" de los chilenos, despreciando todo intento de apelar a las masas populares para hacerlo? Todas estas preguntas y muchas otras quedan sin respuesta por parte de quienes siguen pretendiendo que con el Gobierno de Allende se intentó realmente implantar el socialismo en Chile. La política de los dirigentes de la Unidad Popular (en particular los del P"Com"), que se dicen marxistas, resulta más paradójica aún, si se considera que las fuerzas de la oposición reaccionaria y la CIA montaron y desplegaron su ofensiva contra el gobierno allendista con una táctica mucho más cercana a la "marxista" que la de tales sedicentes marxistas: combinaron la lucha legal con la ilegal;

el trabajo abierto con el clandestino; movilizaron masas en torno a sus reivindicaciones específicas, pero con claros propósitos de derribar al gobierno; utilizaron las leyes e instituciones contra áquel y pasaron por sobre ellas, cuando así convenía a sus fines, etc..

En este libro nos proponemos esclarecer las razones de fondo de todos esos "misterios", que caracterizan la política dominante en la Unidad Popular y en su gobierno. Para hacerlo es preciso denunciar las verdaderas motivaciones que inspiraban las dos formulaciones básicas, los dos pilares de la estrategia del P"C" de Chile, que fueron determinantes en dicha experiencia: su pretendida "vía pacífica" al poder; y sus empeños para lograr una suerte de "compromiso histórico" con los dirigentes de las fuerzas populistas pro-yanquis. Los "errores" que implicaba una tal estrategia y su fracaso cada vez más evidentes —evidentes claro está para quienes sinceramente pensaban a raíz del triunfo electoral de Allende avanzar hacia el socialismo— generaron profundas pugnas en el seno de la Unidad Popular, que acentuaron el desconcierto, la paralización, las actuaciones contradictorias y, en última instancia, la vulnerabilidad del gobierno de Allende. No obstante, el equívoco fundamental se basaba en pensar que a través de la "vía pacífica" y del "compromiso histórico", los dirigentes del P"C" perseguían alcanzar un auténtico socialismo; en pensar que se trataba de meros "errores" estratégicos, de "desviaciones ideológicas" de tales dirigentes. De este modo no se comprendió la verdadera raíz reaccionaria plenamente consciente de la política de los dirigentes del P"C" de Chile; su servil subordinación a la estrategia preconizada en América Latina por la Unión Soviética en su disputa hegemónica con Estados Unidos; sus propósitos de establecer en Chile tan sólo un remedo de socialismo, semejante al que existe en la URSS y en los países afiliados al pacto de Varsovia. Precisamente, porque dicha estrategia con motivaciones reaccionarias fue considerada como una "equivocación", como una mera "desviación oportunista" y se la combatió como tal, es que dicha tendencia pudo mantener su influencia dominante en el seno de la Unidad Popular y del Gobierno, conduciendo al pueblo chileno a la tragedia actual.

Desde el momento en que uno considera el modelo de "socialismo" perseguido por los dirigentes del P"C" pro-soviético de Chile: un capitalismo de Estado semejante al que han arribado por degeneración del socialismo la URSS y los países de Europa oriental dependientes de ésta; resulta plenamente coherente y clara la estrategia de "vía pacífica" predicada por ellos al pueblo. Precisamente, porque se proponen tan sólo cambiar un sistema de explotación por otro y sustituir por una burguesía burocrática salida de sus filas, a la alta burguesía tradicional y a ciertos monopolios imperialistas, están forzados —ante todo y por sobre todo— a oponerse a la movilización revolucionaria del pueblo, a todo lo que conduzca a una real conquista del poder por éste. Por lo mismo, están obligados a mantener las leyes o instituciones del Estado burgués y a impedir que ellas sean destruidas por el pueblo en su avance revolucionario. Ello frustraría sus propósitos de sustituir un sistema de explotación y opresión por otro. Por eso se limitan a presionar a los sectores tradicionales de la burguesía movilizándolo en forma demagógica a las masas, pero tan sólo para negociar luego su capacidad de frenarlas en los límites establecidos por las instituciones y leyes vigentes y chantajearlos con la amenaza de que el pueblo caiga bajo una dirección realmente revolucionaria. La necesidad de oponerse a la revolución para abrir paso a una farsa de socialismo, constituye la esencia de la estrategia de "vía pacífica" al "socialismo" predicada al pueblo por los falsos comunistas. Si a través de la prédica de dicha estrategia, los sedicentes comunistas pro-soviéticos, han abandonado por completo el marxismo, debe quedar en claro que no lo han hecho como consecuencia de meras desviaciones o errores ideológicos, sino que, debido a que sus objetivos mismos son anti-marxistas y reaccionarios. Es ocioso e ingenuo, por lo mismo, intentar convencerlos de su oportunismo.

Por otra parte, es preciso dejar en claro que una cosa es la estrategia que predicaban estos falsos comunistas al pueblo de respetar la "vía pacífica" al poder y otra muy distinta los procedimientos que ellos se permiten cuando se trata de implantar su capitalismo de Estado disfrazado de socialismo. La formulación de la "vía pacífica" está destinada a impedirle al pueblo rebelarse y conquistar el poder en forma violenta, pero no los inhibe en absoluto a ellos para apelar, como lo hicieron en Checoslovaquia o en Angola, a sus fuerzas armadas para conservarlo o controlarlo: no les impide utilizar a ese objeto merecniarios armados como lo intentaron en Zaire; no les impide el apelar a golpes de Estado, infiltrando las FF.AA., burguesas, como trataron de hacerlo en el Congo; o bien la infiltración en un

gobierno anti-imperialista, como fue el caso de Cuba. Si bien el objetivo perseguido es el mismo: regímenes de explotación estatizada del pueblo, bajo la dependencia del social-imperialismo soviético, los caminos varían según el momento histórico y la región de que se trate. En el área directa de dominación de la URSS, es empleada la intervención armada del social-imperialismo (como fue el caso de Checoslovaquia), para aplastar todo intento independentista o de subversión del capitalismo de Estado. En regiones en que la dominación de la otra super-potencia, el imperialismo norteamericano, es débil, como en África y ciertas regiones de Asia, el poder es disputado también apelando a medios violentos, aunque la URSS lo hace, por lo general, ocultando la mano. En cambio, en Europa y en América Latina, zonas de influencia dominante de Estados Unidos, la estrategia consiste, según parece, no en desafiar (por ahora) en forma abierta al imperialismo norteamericano y a las fuerzas que le son afines a través de la implantación directa del modelo de "socialismo" a la Europa oriental, sino, en forzar una alianza con sectores populistas influidos por EE.UU., e infiltrarse así en el gobierno y en el aparato estatal, ejerciendo una co-explotación del pueblo con los sectores dominantes tradicionales o con parte de ellos a expensas de otros. Esto es, precisamente, lo que tenían (y tienen) instrucciones de implantar en Chile los sedicentes comunistas pro-soviéticos. De allí que aplicaran activamente la línea de "vía pacífica" para impedir toda movilización popular destinada a salirle al paso a la ofensiva reaccionaria y utilizaran, al mismo tiempo, activamente la acción devastadora de dicha ofensiva para tratar de imponer a cualquier precio el pacto con Frei y su equipo. Esta misma orientación explica que aún hoy en día continúen oponiéndose activamente a toda resistencia destinada a derrocar a la Junta militar en Chile y propicien como "única solución" el reemplazo de la dictadura por un gobierno demócrata-cristiano, en el que aspiran a participar aunque sea a largo plazo. Siguen, pues, fieles a las bases de su estrategia "vía pacífica", es decir, prohibición de que el pueblo se rebelara contra la dictadura; y "compromiso histórico" con las fuerzas populistas pro-yanquis. Si durante el gobierno de Allende prefirieron la inmólación del pueblo al fascismo a la alternativa de que éste combatiera y se abriera paso al poder; hoy también, prefieren su sometimiento a la dictadura y la prolongación de sus sufrimientos a la posibilidad de una rebelión, que pueda frustrar sus proyectos. Sólo aceptan un reemplazo de la dictadura por una "dictablanda", en la que se mantenga intacto el aparato estatal burgués, incluyendo a las FF.AA., que han ejercido la dictadura.

Junto a las tesis básicas recién formuladas, en la presente obra, se demuestra el abierto desinterés que existió por parte de la Unión Soviética en cuanto a la posibilidad de defender al régimen de Allende (económica y menos aún militarmente), pues no correspondía al modelo estratégico que propician para América Latina. Se muestra como el gobierno de la Unidad Popular, bajo hegemonía de la dirección del P" C", aún si hubiera logrado llevar a término su programa, no habría conducido a un auténtico socialismo, salvo que el pueblo bajo dirección revolucionaria se hubiera revelado y hubiera combatido contra su dirección oportunista. Se refuta, así mismo, la cínica interpretación de la dirección del P" C", que pretende culpar a la "ultra-izquierda" del fracaso del gobierno de Allende, para ocultar su sabotaje abierto a todo avance real hacia el socialismo y su responsabilidad en la implantación del fascismo. Se muestra cómo los sectores medios volvieron la espalda al gobierno allendista, no por meros errores tácticos con ellos, sino, por el control del poder por parte de los sectores más reaccionarios y por la negativa de la dirección oportunista de la Unidad Popular a combatirlos a la cabeza del pueblo. Se analiza en detalle a través de varios capítulos el carácter de las FF.AA., chilenas, mostrando su pasado represivo y antipopular, denunciando en detalle la campaña de elogios que realizó en particular el P" C" de ellas, se muestra su dependencia del imperialismo norteamericano y se refuta la tesis de que eran "constitucionalistas", por encima de su papel de clases. Se refuta, así mismo, la tesis de que "sólo unos pocos traidores terciaron su rumbo meramente profesional" y de que hasta los últimos meses se mantuvieron reticentes a desencadenar un golpe de Estado.

Al margen del interés y de las opiniones que puedan generar las tesis defendidas en la presente obra, hemos hecho el esfuerzo de demostrar todo lo afirmado con un minucioso y vasto acopio de antecedentes, basado en la revisión completa de los principales diarios de oposición y gobierno durante los tres años de la gestión de Allende, de numerosas publicaciones de ese período y aparecidas después del golpe de Estado. De este modo, por lo menos, el presente estudio tendrá el valor de documental aún para quienes no compartan las

conclusiones que se intenta demostrar en él. Ese análisis documental, comprende un estudio sobre los orígenes en Chile de las tesis sobre la "vía pacífica" y una vasta exposición de documentos de como fue utilizado el triunfo de Allende, en Chile y en el exterior, para promover esta tesis. Se documenta y se analiza, así mismo, la política económica del gobierno allendista, el proceso de estatización, la crisis de la economía estatal, los efectos del sabotaje económico de la oposición y del gobierno norteamericano, la magnitud de las reformas aplicadas por el gobierno, el poderío económico de los intereses que afectaba. Se realiza, también, un documentado análisis del conflicto de ambas super-potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, en torno a Chile y la expresión de dicho conflicto dentro del país. Se examina cronológicamente el uso realizado por la oposición del Parlamento, los Tribunales de Justicia, la Contraloría General de la República y otras instituciones para obstruir toda acción del Ejecutivo y provocar su derrocamiento. Se incluye, así mismo, un análisis documental de la actuación de la CIA, especialmente dentro de las FF.AA., en la preparación del golpe de Estado. Se realiza un estudio, también ampliamente documentado, de las contradicciones y diferencias políticas que operaron en las diversas fuerzas que integraban la oposición de izquierda a la línea dominante en la Unidad Popular y en el gobierno. Finalmente, se prosigue el análisis de las posiciones de las diversas fuerzas políticas y de su actuación, durante los tres años que han seguido al golpe de Estado, a través de un estudio de sus documentos y de su actividad práctica.

Si bien esta investigación representa un esfuerzo considerable, sobre todo en las condiciones del exilio, por basarse en testimonios objetivos, no se trata de una obra no comprometida, de mero análisis sociológico. Es un esfuerzo de análisis marxista-leninista de la realidad concreta de nuestro país y de lo que allí ha ocurrido a la luz del socialismo científico. Ante todo, nos proponemos reivindicar que no es el marxismo ni el socialismo lo que ha fracasado en Chile y que esta teoría, deslindando campo de sus tergiversadores y unida a la heroica capacidad de lucha de nuestro pueblo, será la que nos conduzca a nuestra liberación nacional y a un auténtico socialismo.

PRIMERA PARTE

LAS PREMISAS IDEOLOGICAS DEL FRACASO POLITICO
DE LA UNIDAD POPULAR

Capítulo I

LA PREHISTORIA DE LA "VIA CHILENA AL SOCIALISMO"

Para comprender las raíces de la llamada "vía chilena al socialismo", es preciso analizar el contexto institucional y legal en el que se desarrolló la política en Chile durante los últimos gobiernos y el papel que ha jugado en ella el Partido "Comunista" pro-soviético de Chile.

Chile aparecía como un país excepcional en América Latina. Se solía hablar (al igual que respecto al Uruguay) de la "Inglaterra de Latinoamérica", por la prolongada vigencia de cierta legalidad e institucionalidad propias de la democracia burguesa. Efectivamente, se puede afirmar que existía en nuestro país una prolongada tradición de legalismo y de democracia burguesa. Incluso la represión iniciada en el gobierno de Gonzalez Videla, que se extendió a la mayor parte del gobierno siguiente, si bien significó una violación profunda del espíritu de la Constitución, se sistematizó a través de la dictación de una ley represiva en el Parlamento: la llamada Ley de Defensa de la Democracia.

Respecto a las tradiciones de democracia burguesa es importante consignar que, a la vez que fueron determinantes como uno de los argumentos fundamentales que esgrimieron los dirigentes del Partido "Comunista" de Chile para difundir su engendro de un supuesto "camino pacífico" al socialismo; por otro lado, ellas mismas fueron posibles en gran medida, precisamente debido a la influencia de dicho partido y al estilo reformista de oposición política, que practica en Chile desde hace muchos decenios.

1.- El por qué de la democracia burguesa en Chile.

El Partido "Comunista" de Chile nació pocos años después del triunfo de la Revolución Socialista en Rusia. Prendió con gran fuerza en el proletariado minero de las plantas salitreras, explotadas por compañías imperialistas. Su fundador, Luis Emilio Recabarren, fue un gran promotor de la prensa obrera en el país. Posteriormente, en consonancia con el desarrollo industrial relativamente avanzado de Chile en el contexto de los países dependientes, su militancia se extendió al resto del país. Su creciente influencia radicó, por una parte, en el prestigio de la revolución bolchevique en los tiempos de Lenin y Stalin; y, por otra, debido a su papel de artífice de las primeras organizaciones de trabajadores, que tomaron en sus manos las reivindicaciones de los sectores explotados.

Más adelante, en vísperas ya de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a jugar un decisivo papel en la política parlamentaria y electoral burguesas, al poner su influencia de masas al servicio de la formación de frentes amplios anti-fascistas, que habrían de llevar a la Presidencia de la República a los primeros políticos que no pertenecían a los partidos tradicionales de derecha.

Finalmente, el Partido "Comunista", fue reforzado en la post-guerra en su aparato burocrático y propagandístico. En 1947, obtuvo la primera votación significativa en el país, logrando en una elección de regidores casi 100 mil votos que, en ese entonces correspondían al 12,4 por ciento de la votación general. En 1967, subió al 14,7 por ciento logrando 341 mil 700 votos; y, en 1969, en vísperas de la elección que habría de darle el triunfo a Allende, ascendió a un 15,9 por ciento de la votación general, con 380 mil 700 votos. Por su parte, el Partido Socialista, hegemonizado ya por esa época por el P"C", obtuvo en las tres últimas elecciones mencionadas, entre 250 mil y 300 mil votos.

Hasta el decenio del 60, en el que surgen grupos de inspiración cubana y el Partido Comunista Revolucionario, el viejo Partido "Comunista" de Chile, gozó del prestigio de ser el vocero más influyente de los sectores obreros y campesinos y, sin duda, el único con verdadero arraigo entre ellos. Tan sólo le cuestionaban este papel algunos débiles y aislados sectores trotskistas y un Partido Socialista, minado interiormente por múltiples fracciones y sin una línea alternativa clara y coherente. Por lo demás, en la segunda mitad de nuestro siglo, después de un breve desvarío populista que llevó a una parte importante de sus militantes a dividir el PS para apoyar la candidatura presidencial del General Carlos

Ibañez (1952-1958), el Partido Socialista, se plegó por entero a los bloques electorales y a la estrategia levantada por el P“C”.

Dada su influencia de masas y el papel hegemónico de su política de colaboración de clases en la izquierda tradicional, el Partido “Comunista” de Chile, jugó un importante rol en la preservación del sistema legal e institucional de explotación vigente en Chile hasta el golpe de Estado. La mantención de la legalidad e institucionalidad burguesas existentes en Chile hasta el 11 de septiembre de 1973, permitía a los sectores dominantes explotar al pueblo y enriquecerse, sin correr los riesgos que implica una dictadura abierta y brutal, capaz de engendrar como contrapartida una oposición revolucionaria. Por lo demás, como complemento de dicha legalidad e institucionalidad y como base de sustentación real del régimen de explotación, los sectores dominantes contaban con las Fuerzas Armadas y policiales, prestas a reprimir drásticamente toda protesta popular que excediera los límites aceptables y significara una amenaza potencial a dicho régimen. De hecho, toda protesta popular vigorosa contra las formas más extremas de explotación, fue considerada siempre como una amenaza contra el sistema de explotación y reprimida duramente. Es así como el pueblo, carente de una orientación revolucionaria, fue mantenido durante años y años “entre la espada y la pared”: entre la espada militar y el muro de una institucionalidad y legalidad contrarias en lo fundamental de sus intereses.

En este contexto, la oposición domesticada a la que condujo a la izquierda tradicional el equipo dirigente del P“C” de Chile, explica en gran medida el por qué de la mantención de ciertas formas relativamente estables de democracia burguesa en nuestro país. El P“C” de Chile, uno de los más influyentes del mundo capitalista en proporción a la población del país (si no el más), lejos de poner en peligro el régimen de explotación, jugaba un importante papel en su preservación. Lo jugaba, promoviendo en el pueblo el respeto y la sujeción a las leyes e instituciones existentes; impulsando en el terreno reivindicativo acciones puramente economicistas y conciliadoras, encuadradas en dichas instituciones y leyes; restringiendo toda postulación al poder a meros intentos electorales cada seis años en que se efectuaban las elecciones presidenciales; y, por último, resignándose una vez derrotados en esas elecciones, a colaborar con los gobiernos elegidos o realizar una oposición legalista, dentro de los marcos tolerados por las clases dominantes. Resultaría en realidad sorprendente para muchos militantes de base honestos del P“C” de Chile, a quienes se les argumentó que las tradiciones democráticas del país hacían posible la conquista del poder por la “vía pacífica”, saber que —en lo esencial— dichas tradiciones se debían a su ineficacia como revolucionarios y, en mayor grado aún, a sus éxitos en conducir a vastos sectores del pueblo por un camino meramente reformista. Sin embargo, es eso precisamente lo que determinó que se permitiera al P“C” de Chile, pese a decirse marxista, promover a algunos de sus dirigentes al Parlamento; montar empresas partidarias de corte capitalista, controlar públicamente una serie de organizaciones sindicales legales; gestar todo un movimiento político-electoral con otras fuerzas; y, montar toda una máquina burocrático-partidista abierta con imprentas, periódicos, radioemisoras, locales políticos y varios miles de funcionarios. Más adelante, sin embargo, el “premio” a la coronación de esos éxitos, materializados con la conquista electoral de la Presidencia de la República, sería el aniquilamiento a sangre y fuego de lo logrado en medio siglo de paciente y pacífico trabajo.

Si los militantes del P“C” de Chile hubieran sido consecuentes con el marxismo que decían profesar, habrían comprendido que las elecciones en las que depositaban tanta fe como medio de acceder al poder, no cumplían más que un papel de válvulas de seguridad del sistema de explotación. Eran la magnitud variable de un sistema rígido de opresión destinadas tan sólo a mantener la ilusión de que se contaba con mecanismos para modificarlo en oposición a los sectores dominantes. No obstante, como los hechos lo demostraron en forma elocuente, no existía ninguna intención por parte de quienes controlaban el poder de tolerar una real modificación de SU sistema de propiedad que fuera perjudicial a sus intereses, sin apelar a la fuerza para oponerse a ello. Más aún, quedó en evidencia que estaban dispuestos, incluso, a destruir SU institucionalidad y legalidad, si es que estas podían ser utilizadas contra dichos intereses.

Los propios resultados electorales, a los que los pseudo-marxistas les atribuían un poder mágico capaz de transferirles el poder, no eran más que el termómetro que acompaña a toda válvula de seguridad. Dichos resultados les servían a quienes detectan el poder y los

principales medios de producción, para medir periódicamente el nivel alcanzado por esa oposición —canalizada e institucionalizada— y evaluar las concesiones o restricciones que era preciso hacerle. Y, lo que es más importante, les servía para establecer el límite más allá del cual, institucionalizada y todo, se transformaba en un peligro para la utilización del sistema vigente en pro de sus intereses. Precisamente, ese límite aceptable previsto, como lo demuestra ya las maniobras que se hicieron para tratar de impedir que Allende una vez elegido asumiera la Presidencia de la República, se dió cuando éste tuvo acceso al poder Ejecutivo y se mostró dispuesto a utilizarlo para efectuar reformas que afectaban de un modo sustancial los intereses de los sectores dominantes de clase. En esas condiciones, los beneficios anteriores del sistema electoral como elemento moderador destinado tan sólo a apartar al pueblo de un camino revolucionario, se transformaron en cierto grado en su contrario: en una amenaza al papel que dicho sistema cumplía en favor de las clases dominantes.

La explotación dentro de la institucionalidad y legalidad burguesas y la influencia entre las masas de la ideología oportunista difundida por la dirección del P “C”, eran dos aspectos complementarios de una misma realidad. Las dos caras de una moneda. Pese a ésto, la vigencia de esa democracia burguesa, así como las expectativas de postulación electoral al Parlamento y al Gobierno, fueron los argumentos centrales que esgrimió la corriente revisionista del marxismo que encabezaba el P “C” de Chile, para difundir su falsa idea de que existía la posibilidad de que el pueblo conquistara el poder por la “vía pacífica”. De este modo, presentaron lo que era básicamente una consecuencia de su política de conciliación de clases (conciliación que permitía al imperialismo norteamericano y a los reaccionarios internos explotar al pueblo sin apelar a una dictadura abierta), como una característica específica y esencial del proceso político chileno. Transformaron, subjetiva y falsamente, una particularidad transitoria de dicho proceso, debida a la carencia de una dirección revolucionaria, en una supuesta “ley” del mismo.

De aquí que para comprender cómo se llegó a la experiencia de gobierno de la Unidad Popular, a la tan publicitada “vía chilena al socialismo”, sea preciso examinar aunque sea brevemente, la política del Partido “Comunista” de Chile, que abrió paso a dicha experiencia.

2.- La política de los Frentes Populares.

A raíz de la formación de los frentes unidos anti-fascistas en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el Partido “Comunista” de Chile realizó una política de alianzas en gran escala con otras fuerzas políticas burguesas y logró gestar coaliciones electorales cuyos candidatos conquistaron el gobierno. Dichas alianzas de frente unido, que constituían una respuesta correcta al auge mundial del fascismo y un importante medio para colocar, en países dependientes como Chile, a vastos sectores bajo la hegemonía del proletariado, quedaron, sin embargo, de hecho en nuestro país bajo la dirección de la burguesía. Más aún, la dirección del Partido “Comunista” de Chile, partido que debía garantizar esa hegemonía proletaria en el frente unido, fue dominada por completo por ideas burguesas y la organización misma puesta al servicio de sectores burgueses en ascenso.

La primera de estas coaliciones anti-fascistas exitosas fue el Frente Popular, que levantó en 1938 la candidatura a la Presidencia de la República de Pedro Aguirre Cerda. Este candidato, el primer Presidente elegido con el apoyo electoral del P “C” de Chile, pertenecía al Partido Radical, de cuya directiva se entremezclaban elementos de derecha con algunos otros de tendencia socialdemócrata. En dicha campaña electoral se levantó un modesto programa de reformas en el que se postulaba: reformas al Código del Trabajo, sindicalización campesina, disolución de la Sociedad Nacional de Agricultura (organismo que agrupa a los latifundistas) y depuración administrativa. En ningún momento los dirigentes del P “C” postularon, siquiera en sus documentos como línea independiente, un programa de transformaciones democrático-populares, ni diseñaron una estrategia realmente revolucionaria de conquista del poder, al margen de las elecciones. Se plegaron, simplemente, al magro programa del candidato burgués y a las elecciones, como único procedimiento para postular por el poder. Una vez elegido Pedro Aguirre Cerda, ninguno de los

puntos del programa prometido fue cumplido y en relación con el más importante de ellos: la sindicalización campesina los dirigentes del P "C", a petición del gobierno, aceptaron su postergación indefinida.

Más adelante, iniciada ya la Segunda Guerra Mundial, el Partido "Comunista" de Chile, según confesión posterior de sus propios dirigentes, "cayó" en la desviación anti-marxista propugnada por Browder, Secretario General en ese entonces del Partido "Comunista" de Estado Unidos. Este, sostuvo que después del aplastamiento del fascismo, se produciría un entendimiento entre las naciones capitalistas que lo derrotaran y el campo socialista. Afirmó que ese entendimiento redundaría en un profundo mejoramiento de las condiciones de vida de las masas populares; en la industrialización acelerada y en la independencia de las naciones oprimidas por el imperialismo; y, en una prolongada era de paz, que haría posible la transición pacífica al socialismo. Browder, fue en verdad un precursor de las tesis oportunistas que habría de levantar más adelante Nikita Jruschov. El mismo lo reconoce en 1960, cuando afirma: "Nikita Jruschov ha adoptado ahora la 'herejía' por la cual fui expulsado del Partido Comunista en 1945. Es casi palabra por palabra la misma línea por la que abogué hace 15 años. Por consiguiente —concluye— mi pecado se ha convertido, por lo menos por el momento, en la nueva ortodoxia".

Es así, como la Unión Nacional Anti-Fascista creada en Chile, fue entendida por los dirigentes del P "C" fuertemente influidos por el browderismo, como una renuncia casi completa, no sólo a la lucha por el poder, sino, incluso, a las formas más elementales de lucha de clases.

En un artículo publicado en la revista "Principios", órgano teórico del Comité Central del P "C" de Chile, Humberto Abarca, dirigente nacional del mismo, elogia al político reaccionario Cruz Coke, por su "amplitud" y "claridad" al plantear en un mitin que: "la división de derechas e izquierdas es artificial. El planteamiento de la lucha de clases está mal ubicado. Al capitalismo hay que darle un nuevo sentido, porque Chile necesita capitales".

Por su parte, Carlos Contrera Labarca, Secretario General del P "C", no tiene escrúpulos para citar nada menos que al "Wall Street Journal", diario de los banqueros norteamericanos, para "demostrar" que: "las expectativas que nuestros países cifran en una política de Estados Unidos y de las grandes potencias destinada a desarrollar sus economías, a elevar el nivel de vida y la capacidad consumidora de sus poblaciones, está basada no en declaraciones y esperanzas, sino en hechos serios".

Posteriormente, bajo la presidencia de Juan Antonio Ríos, elegido también con los votos del antiguo Partido "Comunista" de Chile, Elías Lafertte, dirigente y fundador de dicho partido, formula a mediados de 1945 en un Informe rendido en la XVI Sesión Plenaria del Comité Central, el siguiente programa: "una Reforma Agraria dentro de los marcos jurídicos existentes, tratando —agrega— de beneficiar en todo lo posible a las masas campesinas y no a los grandes terratenientes". Para ello, propone la expropiación de los grandes latifundios: "con una indemnización razonable y la entrega de la tierra a los campesinos, quienes la pagarán a largo plazo". Como medidas "anti-imperialistas", dicho esbozo de programa, sólo plantea: "la revisión de las concesiones hechas a las grandes compañías extranjeras, a fin de garantizar un mayor respeto a la soberanía nacional y a la vida de los nativos", sosteniendo, sin embargo, al mismo tiempo, que: "a los capitales extranjeros, debemos atraerlos para que cumplan la función establecida por la política de Buena Vecindad".

Las aspiraciones por el poder de los dirigentes del P "C", se reducen por ese entonces a ser incluidos en un gabinete ministerial del gobierno, en conjunto "con todos los partidos y sectores democráticos, sin exclusiones". En torno a ese objetivo, tales dirigentes, aplican según su propia expresión: el "máximo de energía", para convencer a los partidos que están en la oposición (entre los que se incluía el propio partido del Presidente de la República), de que se integran al gobierno. "Nuestro partido —dice el Senador Lafertte— hizo todo lo posible por convencer a los dirigentes del Partido Radical y del Partido Socialista acerca de la necesidad de abandonar su política de oposición al Presidente de la República y de llegar a un entendimiento con él para impulsar una política progresista".

3.- La línea de la post-guerra.

Medio año después de las afirmaciones citadas, a fines de 1945, se realiza el XIII Congreso del Partido "Comunista" de Chile en el cual se supone de acuerdo a las historias oficiales, fueron "barridas" las influencias browderistas y oportunistas. En ese torneo, efectivamente, pasada ya la guerra y derrumbados por los hechos los sueños conciliadores de Browder: sometido éste a fuertes críticas por su extremo oportunismo; y habiendo surgido ya fuertes contradicciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos, se reconoce que el P"C" de Chile, "ha sufrido influencias extrañas que lo han conducido a desviaciones oportunistas", y que: "esa falsa concepción debilitó, transitoriamente, la combatividad del Partido, comprometió la independencia de su política y le impidió realizar su papel dirigente y de vanguardia". No obstante, el Informe a dicho Congreso no contiene tampoco ni una estrategia ni un programa revolucionarios en reemplazo de la anterior línea reconocida como oportunista. Por el contrario, en ese mismo Informe, Contreras Labarca, Secretario General del P"C", insiste en las antiguas súplicas de la dirección de su partido para que se les admita en un gabinete del gobierno burgués. "El Partido Comunista, dice, considera indispensable su participación en ese Gabinete y luchará junto al pueblo por su incorporación al Gobierno". Por lo que toca al imperialismo, en el XII Congreso ya que quisiera se plantea la "revisión a las concesiones extranjeras", que formulara Elías Lafertte. Por el contrario, Contreras Labarca, sostiene que: "las puertas de Chile deben estar abiertas para los capitales extranjeros".

En el mismo plano internacional se dice, además, que "la garantía del mantenimiento de la paz y seguridad internacional, así como la reconstrucción de un mundo de independencia, democracia y bienestar"... sería: "la unidad de las tres grandes potencias, Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética".

A mediados de 1946, el P"C" de Chile, se vuelca en una nueva campaña electoral en apoyo de otro miembro del Partido Radical, Gonzalez Videla, proclamado en una Convención de varios partidos. En dicha Convención, si bien se plantea: "la subdivisión de los grandes latifundios" (que por cierto no se cumplió), no se establece absolutamente ninguna medida anti-imperialista y, por el contrario, se insiste en valorizar la política de "Buena Vecindad" de EE.UU., "como medio de obtener la cooperación y bienestar de los Estados".

En los comienzos del gobierno de Gonzalez Videla los dirigentes del P"C" de Chile, obtienen por fin la tan esperada y solicitada participación en un gabinete ministerial, siendo designados en tres ministerios. Esto se traduce de inmediato en un intenso impulso a la conciliación de clases, con el pretexto de que es necesario "aumentar la producción" y apoyar al gobierno en que participan "los comunistas". La lucha reivindicativa de las masas es frenada del modo más escandaloso y abierto. A comienzos de 1947, el Secretario General del P"C", escribe: "Los elementos provocadores están siendo barridos de las organizaciones sindicales. La clase obrera comprende su responsabilidad como fuerza dirigente y responsable ante el gobierno. Los trabajadores han escuchado con fervor el llamado del Partido Comunista para el aumento de la producción y para resolver sus problemas y obtener la satisfacción de sus necesidades agotando los trámites necesarios y recurriendo sólo como excepción a las huelgas". Por su parte, en el Informe al VI Congreso Regional de Santiago del P"C", se plantea: "Ante la tarea inmediata de colaborar con el gobierno en la batalla por el aumento de la producción, la CTCH (Confederación General de Trabajadores), y nuestro Partido han declarado solemnemente que —sin renunciar al sagrado derecho de huelga que tiene el proletariado— recurrirán a ella en última instancia, cuando para defender sus conquistas hayan agotado todos los medios de entendimiento con los patrones o empresas". Al mismo tiempo, en el mencionado Informe, se fustiga a los "provocadores", que "desean lanzar irresponsablemente a la clase obrera a huelgas improvisadas y artificiales, dirigidas contra el gobierno". Por su parte, Galo Gonzalez, que habría de ocupar más tarde la Secretaría General del P"C" de Chile, sostiene: "El Partido hará todos los esfuerzos que estén a su alcance para que los conflictos del trabajo se solucionen por las vías armónicas entre patrones y obreros".

A pesar de esos señalados servicios de la dirección del P"C" al gobierno burgués, a raíz de una elección de regidores municipales celebrada en 1947 en la que dicho partido obtiene una alta votación, sus ministros son expulsados del gabinete. El gobierno, al mismo tiempo,

hace aprobar una ley de "sindicalización" campesina, destinada en los hechos a impedir toda organización en el campo. Un dirigente del viejo P" C" comenta desconcertado lo que ocurre: "Nos encontramos ante el hecho paradójico, de que los comunistas tienen que abandonar el gobierno porque el pueblo los apoya en forma cada día más calurosa". Paradoja, claro está, que sólo podía resultar incomprensible para quienes jamás razonaron con un criterio marxista.

No obstante su expulsión del gobierno, los dirigentes del P" C", prosiguen su política conciliadora respecto a él. "Apoyaremos toda medida del gobierno —dice el artículo— que tienda al cumplimiento del Programa. No practicaremos la oposición por la oposición (?). desarrollaremos una política constructiva y realista". Como es habitual el problema de la conquista del poder y la formulación de una estrategia revolucionaria para conquistarlo, están absolutamente ausentes de las formulaciones de estos dirigentes "comunistas".

González Videla, en octubre de 1947, aprovechando como pretexto una huelga legal de los mineros del carbón de Lota, los cercó con policías y tropas; decretó la reanudación obligatoria de faenas prohibió la entrada de parlamentarios a la zona y censuró la prensa de izquierda; procedió a requisar los alimentos de las casas de los huelguistas, estableció tribunales sumarios a bordo de barcos de guerra; trasladó a miles de familiares de los huelguistas, abandonándolos, privados de sus enseres más elementales, en diversos puntos del país; inició una captura en todo Chile de militantes del Partido "Comunista", enviándolos a la cárcel, a la relegación o a campos de concentración; procedió a expulsar de sus trabajos a todos los miembros detectados de dicho partido. Al año siguiente, obtuvo en el Parlamento la aprobación de una ley, llamada Ley de Defensa de la Democracia, que privaba a los miembros del P" C" de sus derechos cívicos y políticos y penaba con la cárcel y otras severas medidas toda actividad, propaganda u organización de dicho partido.

Más adelante, la agudización de las contradicciones internacionales entre EE.UU. y la URSS, unida a la evidente responsabilidad del imperialismo norteamericano en la represión que se aplicaba a Chile, determinan un cierto avance en las formulaciones programáticas del P" C" de Chile. Es así como en el año 1949, se formula el llamado Programa de Salvación Nacional, que contempla ya la expropiación sin indemnización de los latifundios; la nacionalización gratuita de los servicios públicos y fuentes de materias primas en manos de EE.UU; así como la expropiación de las compañías de seguros y bancos particulares. Se incluyen también allí otras medidas tendientes a mejorar el nivel de vida del pueblo y a democratizar el país. No obstante, si bien este manifiesto programático plantea: "derrotar al actual gobierno y reemplazarlo por un gobierno de efectiva representación democrática", no define el carácter de ese nuevo tipo de gobierno propuesto, el papel del proletariado en él, no diseña una estrategia revolucionaria para conquistarlo.

Entre tanto, la sistemática persecución de González Videla redujo la militancia del viejo P" C" a menos de tres mil militantes, de los cuales la mitad o más eran nuevos, es decir, reclutados durante la represión misma. El resto, educados solamente en las prácticas electorales y en la lucha economicista, no resistieron la presión represiva y desertaron de sus filas.

En esas circunstancias, bajo las duras lecciones de la represión, se expresa con más fuerza la lucha de tendencias en el seno del P" C" y de su dirección. Un sector de dirigentes que termina por ser minoritario, sostiene la necesidad de derrocar la dictadura de González Videla. El otro sector, en cambio, solo aspira a reconquistar la legalidad, garantizando a las clases dominantes el propósito de respetar las instituciones y leyes de la democracia burguesa. El sector más derechista de la dirección del P" C", aprovechando la dispersión de sus oponentes en diversos puntos del país, comienza a incorporar de hecho a los órganos dirigentes a una serie de elementos afines a sus ideas, que se encontraban en condiciones anexas al Comité Central. Ellos, muchos de los cuales exhibían en su pasado militancia trotskista, vínculos con la masonería e, incluso, públicas posiciones anticomunistas, serían quienes más adelante habrían de ocupar los cargos claves en la Dirección. Los opositores al sector conciliador, al ser colocados con estas maniobras franca minoría en los organismos dirigentes, comenzaron a desarrollar una actividad fraccional a partir de la Comisión Nacional de Organización del P" C" y de un activo de militantes creado por dicha Comisión. No obstante, aislados de las masas y de la propia base del P" C" emprendieron una serie de acciones putchistas contra la dictadura, que sirvieron a sus oponentes para des-

prestigiarlos y, por último, en el año 1950, para expulsarlos de sus filas.

Las consecuencias del dominio completo de la fracción más derechista en la Dirección del P“C” no se hicieron esperar. A mediados de ese año elaboraron un documento programático que se conoció con el nombre de “Plan de Emergencia”, que implicaba un notorio retroceso respecto al anterior “Plan de Salvación Nacional”. La consigna de nacionalización de las empresas imperialistas fue reemplazada por: “Protección en términos convenientes al país, de la producción nacional, en contra de la competencia imperialista. Suspensión del pago de la deuda externa mientras dure la crisis. Obligatoriedad para las compañías de tener su administración en Chile”. La Reforma Agraria, quedó reducida a: obligatoriedad del cultivo de las tierras inexploradas. Ayuda a todos los agricultores, chicos o grandes, interesados en el aumento de la producción. Requisamiento por el período de la crisis de las tierras incultivadas, cuyos dueños se niegan a hacerlas producir”...

Estas concesiones respecto al anterior programa las justifica Galo González, Secretario General del P“C” de Chile en aras de la amplia unidad que es preciso forjar, pues “toda la actividad del Partido y todas las luchas populares deben fundirse, encadenarse, realizarse sobre la base de la lucha por la paz”.

Recién en vísperas de las elecciones presidenciales de 1952, en las que el P“C” postula, unido con un sector del Partido Socialista, por primera vez a Salvador Allende, bajo la presión de dichos aliados, se vuelven a levantar las consignas de Reforma Agraria y de nacionalización de las empresas imperialistas.

En dichas elecciones, en las que el P“C” debe participar con gran número de sus militantes borrados de los registros electorales por la Ley de Defensa de la Democracia, Allende es derrotado por primera vez, obteniendo solo el 5,4 por ciento de los votos. Triunfa el general Carlos Ibañez, quien había ejercido ya un gobierno dictatorial en los años de la crisis mundial, siendo, además, responsable de la penetración en gran escala de capitales norteamericanos en Chile. No obstante haber denunciado estos hechos en la campaña electoral, una vez que resulta elegido Ibañez, la Comisión Política del P“C” plantea: “El Partido Comunista está dispuesto a contribuir decididamente a que el gobierno del señor Ibañez pueda realizar una obra de beneficio para el país. Por lo tanto apoyará toda medida práctica que adopte en favor del pueblo y de la nación”. Y agregan, olvidando como siempre el problema de la conquista del poder: “Nuestra actitud inspirada solo en el propósito de servir al pueblo será de colaboración patriótica a la solución de los problemas y de oposición patriótica y constructiva a los actos gubernamentales inconvenientes a los intereses de las masas populares y de Chile”. Incluso a un año del gobierno reaccionario de Ibañez, que prosigue aplicando las leyes represivas del gobierno anterior, la Dirección del P“C” plantea en la revista “Principios”, órgano teórico de su Comité Central: “Nuestra norma invariable es tratar que los conflictos del trabajo se solucionen armónicamente, utilizando todos los recursos. Y solo somos partidarios de recurrir a la huelga, que es un derecho reconocido por el Código del Trabajo, cuando fallen tales procedimientos”.

4.- El XX Congreso del PCUS y la “vía pacífica”.

La línea oportunista de los dirigentes del P“C” habría de recibir más adelante un espaldarazo internacional de parte de los dirigentes soviéticos, al hacerse públicas las orientaciones revisionistas del marxismo planteadas en el XX Congreso del PCUS. En el año que se celebró el XX Congreso del PCUS, el Partido “Comunista” de Chile, llevaba once años sin realizar un congreso. No obstante, pocos meses después de efectuarse dicho torneo en la URSS, a toda prisa y sin ninguna discusión previa, se efectuó el X Congreso del P“C” de Chile*. Se hizo exclusivamente, para imponer en Chile las tesis formuladas por Jruschov, entre ellas la de la “vía pacífica” al socialismo. Es preciso recordar que en dicho XX Congreso del PCUS, Jruschov y otros ideólogos del revisionismo contemporáneo lanzan la consigna de: “aprovechar el camino parlamentario para la transición al socialismo”, y afirman que: “Ahora, para la clase obrera de una serie de países capitalistas, se están creando condiciones internacionales y nacionales favorables para realizar la revolución socialista en forma pacífica”.

En enero de 1961, Luis Corvalán en la revista “Principios”, haciéndose eco de los sovié-

ticos, expresa: "El gran mérito, en lo que a este problema se refiere, del XX Congreso del PCUS está en que restableció la validez de la tesis acerca de la vía pacífica, que desde la muerte de Lenin el movimiento comunista internacional había desestimado incluso como una posibilidad excepcional"... Y en el número 35 de la misma revista, exhibiendo su seguidismo respecto a los soviéticos, afirma: "Esta cuestión (la "vía pacífica") ha sido planteada desde la alta tribuna del XX Congreso del PCUS. En Chile mismo se había demostrado la posibilidad de utilizar la vía parlamentaria para el ascenso al poder de las fuerzas populares (?). Pero esta cuestión no estaba suficientemente esclarecida para nosotros. Al aclararnos ahora y al verse que dicha posibilidad existe también en Chile, en la medida en que se deshaga la obra anti-democrática de González Videla y se democratice el país, no hay duda que también se abren nuevas y promisorias perspectivas para unir a vastos sectores en pos de la transformación democrática de nuestra sociedad, sin esperar o provocar una coyuntura favorable a la insurrección"...

A partir del XX Congreso del PCUS, la actividad de los dirigentes del P"C" se centró en obtener la restitución a dicho partido de sus derechos legales y electorales, para postular al gobierno a través de la "vía pacífica". La elección de Allende no fue más que la culminación de dicho camino y, así mismo, su trágico final. Al año siguiente del XX Congreso del PCUS, en 1957, Luis Corvalán, que era ya Secretario General del P"C", hace pública una declaración destinada a obtener de los reaccionarios la devolución de sus derechos cívicos al P"C", que constituye una monstruosa abjuración de los principios fundamentales del marxismo. En efecto, en la 24ª Sesión Plenaria del Comité Central, sostiene: "Queremos y reclamamos nuestra libertad. Y declaramos solemnemente que, otra vez libres para actuar en la vida política, no constituiremos una amenaza para ningún interés respetable. Somos partidarios de que todo se resuelva democráticamente, de acuerdo a la voluntad de la mayoría del país dentro del libre juego de todos los partidos y corrientes. No aspiramos hoy a la sustitución de la propiedad privada de los capitalistas chilenos por la propiedad colectiva. Y cuando mañana sea preciso avanzar en ese terreno, pensamos que ello debe hacerse también con el acuerdo de la mayoría de los chilenos, por la vía pacífica y garantizando el bienestar y los derechos de los capitalistas, esto es, indemnizándolos debidamente". Como es natural, después de un compromiso público de esta especie, le fueron restituidos al P"C" sus derechos cívicos. Un partido orientado de ese modo, no significaba ningún peligro serio para los explotadores y para su sistema. Por el contrario, les prestaría un inapreciable servicio conduciendo a los sectores populares bajo su influencia, a "marcar el paso" en un juego politiquero legalista y electoralista, que jamás pondría en peligro serio su dominio sobre el poder. Es tentador al respecto consignar aquí un comentario irónico que realizara Federico Engels, en relación con una actuación similar del Partido Socialdemócrata Alemán. "Pruebe pues el Partido —escribió Engels— por su humildad y arrepetida actitud, que ha dejado de lado de una vez por todas, las "incorrecciones y excesos", que motivaron la Ley Anti-socialista y Bismarck y la burguesía tendrán seguramente la amabilidad de derogar esa ley, que entonces será innecesaria". Solo que en el caso de Chile, ni siquiera hubo esas "incorrecciones y excesos" por parte del P"C", y González Videla como se lo confesó a un corresponsal inglés del "New Cronicle", desencadenó la represión contra dicho partido, porque pensó que una nueva guerra mundial (esta vez entre la Unión Soviética y Estados Unidos) comenzaba a meses plazos y quiso ser uno de los primeros gobernantes latinoamericanos en alinearse al lado de Estados Unidos.

En los gobiernos que siguen al del general Ibañez —los gobiernos de Jorge Alessandri y de Eduardo Frei— los dirigentes del P"C" de Chile continúan aplicando su política de freno a la lucha de clases y de oposición legalista y conciliadora al gobernante de turno. "La historia mundial, escribió Lenin, nos muestra una transformación inevitable de la lucha de clases en una guerra civil". Pues bien, justamente el papel de estos pseudo-marxistas, consistió en lo fundamental, en frenar la lucha de clases para impedir todo acercamiento de ella a la guerra civil y poder así mantener su soñada postulación pacífica por el poder.

Dicha política conciliadora determinaría que el presidente Alessandri, representante en el gobierno de las capas más reaccionarias del país, terminara su mandato otorgando públicamente un verdadero certificado de buena conducta a los dirigentes del P"C", afir-

mando que no había tenido durante su gobierno ningún problema serio con dicho partido pues se trataba de una organización respetuosa de las leyes y de la convivencia democrática.

Durante el gobierno de Frei, prosiguen practicando una oposición fundamentalmente verbal y frenando en los hechos las luchas populares. A fines de 1967, siguiendo las indicaciones y exigencias del organismo financiero controlado por los norteamericanos. Llamado Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Frei, levanta un proyecto de reajustes de sueldos y salarios destinado a descargar la crisis que se agudizó intensamente en los últimos años de su gestión sobre los trabajadores. El 13 de diciembre de ese año, Luis Corvalán, refiriéndose a dicho proyecto de reajustes, expresó: "Votar en general favorablemente el proyecto, equivale a dar luz verde a esa política retrógrada. Votar en contra, no constituye un rechazo a la idea de legislar en materia de sueldos y salarios. Significa votar en contra de la política regresiva del gobierno y crear condiciones para el envío de un proyecto diferente". Una vez rechazado en la votación general dicho proyecto de reajustes del gobierno, éste envió al Parlamento un nuevo proyecto, que fue calificado por los dirigentes del P"C" como "más reaccionario que el anterior". No obstante, después de negociaciones secretas con la directiva demócrata cristiana, los parlamentarios del P"C" (en oposición a todos sus aliados), dieron "luz verde" a ese segundo proyecto retrógrado votando favorablemente la idea de legislar. Tratando de disculpar ante la opinión pública esta traición a los intereses de los trabajadores, dijeron que los aspectos negativos del proyecto serían eliminados cuando se discutiera en particular su articulado en el Parlamento. Sin embargo, esta no era más que una disculpa falsa e hipócrita, destinada a ocultar su compromiso con el gobierno de Frei, pues sabían perfectamente que la izquierda tradicional no contaba con votos suficientes, una vez aprobada la idea de legislar para modificar su articulado. Es así, como en el mes de mayo de 1968, el proyecto fue aprobado tal como lo deseaba el gobierno.

Posteriormente, esta actividad conciliadora se hizo aún más ostensible, en la medida que se acercaban las elecciones presidenciales de 1970. En diciembre de 1969, Luis Figueroa, Miembro de la Comisión Política del P"C" y Presidente de la Central Unica de Trabajadores de Chile (CUT), firmó un acuerdo con el Gobierno a nombre de esa central, que agrupa a la casi totalidad de los trabajadores organizados, aceptando un salario mínimo de E° 12 diarios. El 5 de ese mismo mes, había aparecido en el diario "El Siglo" del P"C" con motivo de una prolongada huelga de la industria metalúrgica FENSA, un artículo en el que se decía: "Los obreros exigen un reajuste del 75 por ciento, con un salario mínimo de E° 28 al día, **para medio poder vivir**". No obstante, sin movilización ni lucha alguna comprometieron a todos los afiliados a la CUT mediante el compromiso firmado por Figueroa a aceptar un salario mínimo de menos de la mitad de aquel que, según ellos mismos, se necesitaba para "medio poder vivir".

Como es natural, el acuerdo firmado entre Figueroa y el Gobierno, mereció calurosos elogios de los sectores reaccionarios. El diario "El Mercurio", vocero de la burguesía monopolista y de las empresas norteamericanas, expresa el día 5 de diciembre de 1969: ".....hay que hacer hincapié en que él (el acuerdo) refleja un temperamento diferente al que ha sido habitual en los debates sobre reajustes.... en esta ocasión la directiva de la Central Unica de Trabajadores ha contribuido a evitar el clima de agitación que normalmente se encargaba de azuzar al discutirse el proyecto de reajustes. El mencionado acuerdo envuelve al mismo tiempo una esperanza de tranquilidad social y un compromiso de parte de los dirigentes de la Central Unica". Por su parte, el mismo día, él "Diario Ilustrado", representante de la oligarquía más reaccionaria, afirma: "Resulta muy grato poder comprobar la facilidad y expedición con que el Gobierno ha podido llegar a pleno acuerdo con la Central Unica de Trabajadores".

"Es grato, por cuanto ello podría significar una especie de 'entente' entre el Gobierno y la Central Unica de Trabajadores". Por su parte, el Ministro del Interior del Gobierno de Frei, expresó respecto al acuerdo: ".....constituye un motivo de ejemplo para muchos otros sectores que no han tenido la verdadera comprensión, en los difíciles momentos que hemos vivido. Por estas razones es que yo quiero expresar mi agradecimiento a la Central Unica por su responsabilidad y seriedad".....

Por último, cuando a mediados de 1970 los trabajadores reaccionaron con un paro nacional contra la rebaja a su nivel de vida impuesta a través del compromiso de Figueroa con el Gobierno, los dirigentes del "PC", volvieron a ponerse de acuerdo con el Gobierno para reprimir toda manifestación combativa en dicho paro, que pudiera poner en peligro las elecciones presidenciales cercanas. El 9 de julio, el presidente del partido de gobierno, expresa: "Los provocadores de la ultraizquierda hacen necesario un entendimiento de las fuerzas políticas para la realización limpia del proceso electoral. Mañana espero entrevistarme con radicales, comunistas y socialistas". El día 16 de ese mismo mes este mismo dirigente, afirma en el diario "La Segunda": "que conversó con socialistas y comunistas acerca de la huelga de la CUT y con dirigentes universitarios para mantener la calma y no subvertir el orden". La consecuencia de estas conversaciones fue la íntima cooperación entre el "Grupo Móvil" de la policía y militantes del "PC", para reprimir directamente a los trabajadores y estudiantes que salieron a la calle en el día del paro a expresar su protesta de un modo más combativo. Al día siguiente del paro, el diario "El Siglo", exhibiendo ante los reaccionarios su capacidad para frenar la lucha de masas, se refirió al "aspecto de las poblaciones y barrios con cara de día domingo, con la gente conversando en las calles y aceras, los niños jugando y las mujeres tomando sol", durante el paro.

El pretexto esgrimido continuamente por los dirigentes del "PC" para frenar toda combatividad de las masas populares, es el de la "amenaza de un golpe de Estado" de parte de la extrema derecha, descontenta ya con las reformas demócrata cristianas que afectaban sus intereses. Esta amenaza, como en el cuento del lobo, es levantada por los cabecillas del "PC" en cada ocasión en que las luchas populares experimentan un ascenso. No obstante, estos curiosos "marxistas", levantan las amenazas de golpe de Estado, no para movilizar a las masas y prepararlas ideológica y materialmente para hacerle frente a los supuestos intentos golpistas y aplastarlos, sino, para argumentar la necesidad de renunciar a toda petición "exagerada" y a toda movilización combativa y llamar a esperar pacientemente las elecciones presidenciales, que permitirían iniciar una política en beneficio del pueblo. Esta misma política de frenar a las masas populares, para conjurar la amenaza (esta vez real) de golpe de Estado reaccionario, se prosiguió aplicando por parte de los dirigentes del "PC" durante el gobierno de Allende, con las consecuencias que todos conocemos. La diferencia es que en este caso, además, confiaron al propio lobo, a las Fuerzas Armadas reaccionarias, la tarea de impedir el tan temido golpe de Estado.

CAPITULO II

LA IDEOLOGIA DE LA DERROTA: LA "VIA PACIFICA AL PODER"

Como lo hemos señalado al comienzo de este libro, en el "PC" de Chile imperaba una línea oportunista, tanto en sus formulaciones programáticas como en su actividad política concreta, varios decenios antes del XX Congreso del PCUS. No obstante, dicha actividad y esas formulaciones meramente reformistas, no fueron "elevadas" en ese período a la categoría de formulaciones teóricas revisionistas del marxismo.

Por otra parte, en el viejo "PC" coexistían (pacíficamente hasta el XX Congreso), una línea y una práctica políticas reformistas, con cierta formación teórica de los militantes en textos de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao o de historia revolucionaria marxista. Mientras se leía o se estudiaba todo eso en las Escuelas de Cuadros, la línea política condenaba a los militantes a impulsar acciones reivindicativas meramente economicistas, a los ajetreos electorales, a interminables campañas de finanzas, a labores de propaganda de esa misma política y, en general, a una actividad meramente reformista, destinada, en última instancia, a ganar electores. La relación entre las enseñanzas de los clásicos marxistas o de la historia revolucionaria, con la que se exigía hacer a los "comunistas" chilenos no se veía por parte alguna. Tampoco la había entre sus formulaciones programáticas y, por ejemplo, las condiciones mínimas exigidas por Lenin para que un partido fuera admitido en la Internacional Comunista, que jamás fueron cumplidas.

La verdad es que esta incongruencia resultó velada y oculta por diversas circunstancias. En el decenio anterior a la Segunda Guerra Mundial, una mala comprensión y aplicación de la política de los frentes únicos-antifascistas (que no contemplaba simultáneamente los principios de unidad y lucha y la necesidad de una dirección proletaria de ellos), permitió que a través de estas justas alianzas, se abriera paso al oportunismo en muchos lugares. Uno de ellos fue, precisamente, Chile. Por otra parte, en América Latina durante la guerra mundial e inmediatamente después de ella, influyó poderosamente la corriente oportunista y anti-marxista impulsada por Brodwer, a la que ya hemos hecho referencia. Por último, por lo que toca a Chile, las tendencias reformistas y oportunistas dominantes, pasaron desapercibidas debido a la ilegalización del "PC" y persecución legal de sus militantes y actividades. Dicha ilegalización y persecución (1947-1957), así como la necesidad de actuar en la clandestinidad, unidos a la propaganda reaccionaria que presentaba a los militantes del "PC" como "subversivos", le otorgaba a dicho partido una aureola revolucionaria. Incluso, entre muchos militantes y aún entre ciertos dirigentes, circulaba la idea de que era preciso "hacer algo" para derrocar al gobierno de Gonzalez Videla. Esto, sin embargo, no pasaba de ser un estado de ánimo por parte de quienes habían sido traicionados por Gonzalez Videla y anhelaban vengarse, o bien, rumores difundidos cada cierto tiempo para "elevar la moral" de los militantes, mientras se obtenía nuevamente la legalidad. Por parte de los dirigentes no existía ninguna política coherente destinada a desarrollar la lucha de clases tras ese objetivo. La política oficial consistía en impulsar luchas reivindicativas, en participar camuflado tras otras fuerzas en las elecciones y en protestar contra las medidas represivas, reclamando los antiguos derechos legales del "PC".

Finalmente, como ya lo hemos señalado, la pugna entre un pequeño sector de militantes (y algunos dirigentes) del "PC" que promovían acciones puchistas contra el gobierno; y el resto de la dirección, que sólo anhelaba recuperar a cualquier precio la legalidad y el derecho a postular en las elecciones, estalló en una escisión. A partir de la expulsión de ese pequeño grupo rebelde, el dominio del sector más derechistas y oportunista sobre la dirección del "PC" fue completo.

Sin embargo, la contradicción entre gran número de militantes que se sentían honestamente marxistas, que habían sufrido los golpes de la represión reaccionaria y que tenían acceso a la literatura marxista; y tales dirigentes oportunistas, no había sido suprimida ni resuelta. Ella habría de manifestarse abiertamente cuando fue concedida nuevamente la legalidad por las clases dominantes al "PC" y cuando las nada originales formulaciones anti-marxistas planteadas en el pasado por Berstein y Kaustki, se transformaron en la línea internacional, promovida desde "la alta tribuna del XX Congreso del PCUS".

El XX Congreso fue celebrado en 1956 y el "PC" de Chile obtuvo su legalidad al año siguiente. A partir del XX Congreso del PCUS, los dirigentes del "PC" de Chile y muy especialmente, Luis Corvalán, su actual Secretario General, se aplicaron, siguiendo a los ideólogos revisionistas soviéticos, a sistematizar y promover públicamente una teoría política, destinada a justificar y proseguir la práctica política oportunista, que aplicaban ya de hecho desde hacía ya muchos años. De este modo, al oponerse a "teorizar", pretendiendo justificar por escrito su cretinismo parlamentarista, su veneración por el legalismo burgués, su línea reformista, no hicieron más que poner en evidencia su extremo oportunismo ante sus militantes, quienes, si bien se sentían profundamente insatisfechos con la actividad política que realizaban en el "PC", no alcanzaban a comprender la raíz ideológica anti-marxista de dicho oportunismo.

1. Los argumentos de Corvalán.

En enero de 1961, la Dirección del "PC", recopilando diversos artículos publicados por Corvalán en defensa de las tesis del XX Congreso del PCUS, editó un folleto llamado "Nuestra Vía Revolucionaria". En dicho folleto, se pretendía hacer una defensa de la posibilidad en Chile de una "vía pacífica" al socialismo. Allí, con pretensiones de aplicar en forma "creadora" y "original" el marxismo al proceso chileno, Corvalán, no hace más que calcar las inepticias oportunistas de Jruschov al respecto, quien por su parte reedita los apollillados argumentos de antiguos renegados del marxismo, refutados ya por Marx, Engels, Lenin y Stalin.

Citando, por ejemplo, al neo-revisionista soviético Kúsinen, Corvalán, intenta justificar la "vía pacífica" al poder en Chile, aduciendo que Marx admitió esa posibilidad en 1872 respecto a Inglaterra y Estados Unidos. Esto lo hace, por cierto, con toda la mala fe propia de los oportunistas conscientes, pues no ignoraba que el propio Lenin afirmó al respecto: "El argumento de que Marx admitió en los años setenta la posibilidad de una transición pacífica al socialismo en Inglaterra y los Estados Unidos, es el argumento de un sofista, o, para ponerlo en claro, de un estafador (se refiere a Kautski) que juega con citas y referencias. Primero, esta posibilidad la consideraba Marx como una excepción incluso entonces. Segundo, el capitalismo monopolista, es decir el imperialismo, todavía no existía. Tercero, en Inglaterra y los Estados Unidos no existía entonces -ahora existe- un militarismo que sirviera de aparato principal de la máquina burguesa". Además está decir, que los factores señalados por Lenin para rechazar la utilización fraudulenta hecha por Kautski de la cita de Marx, es decir, el militarismo, el imperialismo, etc., lejos de disminuir han aumentado en proporciones monstruosas. Por lo mismo, la estafa de Corvalán, que también "juega con citas y referencias", es aún peor que la de Kautski.

En otra parte de sus escritos, Corvalán consciente de que toda la experiencia histórica milita contra su falsa tesis marxista del conocimiento, expresa: "aunque no se hubiese producido ningún caso de revolución socialista por la vía pacífica, para establecer como tesis la posibilidad de tal vía no era ni es obligatorio contar con precedentes históricos. Si para la elaboración de cualquier tesis marxista-leninista, agrega, se requiriese primero una prueba práctica de la misma, una realización acabada, los clásicos del marxismo no habrían podido elaborar muchas de sus tesis". Sin duda que no es necesario que un hecho se haya producido para poder preverlo. Marx y sus discípulos, previeron la sociedad socialista, sin que se hubiera materializado en ningún país en su época. Sin embargo, la previsión de un hecho nuevo para que sea una previsión científica, es necesario que se base en acontecimientos, condiciones y leyes históricas que lo hacen posible y necesario. De otro modo, su anuncio es sólo expresión de deseos subjetivos o de un propósito consciente de engañar con falsas predicciones. En lo que respecta a la posibilidad de una transición pacífica al socialismo, como hemos visto, los factores adversos lejos de disminuir se han acentuado en nuestra época. Por lo mismo, las formulaciones de Corvalán y de otros obsecuentes seguidores de los falsificadores del marxismo que gobiernan la URSS, carecían y carecen de todo fundamento, tanto en la teoría como en la práctica. No pasan de ser especulaciones y mentiras al servicio de una línea oportunista.

En otra parte de sus escritos, Corvalán, para defender su pacifismo burgués, que habría de llevar inerte a la masacre al pueblo chileno, formula otra opinión que importa una

nueva tergiversación completa de la teoría marxista del Estado. Dice: "El proletariado y su partido nunca han sido partidarios de la violencia por la violencia" para justificar la necesidad de utilizar medios pacifistas para la conquista del poder. No obstante, como nadie salvo ciertos enfermos mentales, ha sido partidario de "la violencia por la violencia", lo que significa que en realidad esta ingeniosa frasecita de Corvalán, es que éste se niega a reconocer la violencia inherente al Estado burgués. Por ello es que agrega a su razonamiento anterior lo siguiente: "si las clases dominantes... recurren a la violencia, el movimiento popular podría verse obligado a emprender otro camino, el de la lucha armada". Para Corvalán, por lo tanto sólo existe la violencia cuando las clases dominantes adoptan la cárcel y las masacres como su política habitual. Cuando esto no ocurre a diario, cuando existe la fachada de democracia burguesa en el concepto de Corvalán, nos encontramos en una situación "normal", ajena a la violencia y, por lo mismo, el pueblo no tiene tampoco derecho a recurrir a ella para liberarse. No obstante, cualquier marxista medianamente informado y aún cualquiera persona que abriera los ojos a la realidad, sabía que en Chile (como en cualquier régimen burgués), el pueblo vivía bajo una violencia constante, bajo una dictadura de la burguesía disfrazada de democracia. No se trataba de una violencia del día de mañana, a la que, por lo demás, tampoco respondieron con el otro camino del que habla Corvalán sino, permanente, de cada día, violencia, que no sólo se manifiesta en las masacres periódicas que tienen lugar aún en las sociedades capitalistas más democráticas", sino, en el sometimiento forzado del pueblo a la miseria, a la cesantía, a la desnutrición a viviendas insalubres, a la muerte prematura, en suma, a las condiciones de vida inherentes al sistema de explotación. ¿O es que el señor Corvalán, cree que el pueblo chileno ha aceptado voluntariamente y por gusto su miseria y la feroz explotación a la que era y es sometido? La verdad es que se ha visto obligado -por la violencia- a aceptarlas, precisamente porque ellas les son impuestas por un Estado que, aún bajo la forma de democracia burguesa, como lo expresara Lenin: "es una organización especial de la fuerza, es una organización de la violencia para la represión de una clase cualquiera". Por ello cada vez que el pueblo combate de un modo más intenso para sacudirse de esa **violencia** cotidiana inherente al sistema de explotación, esa misma violencia velada e hipócrita, se transforma en masacre abierta, en cárceles y en torturas. No se trata pues, como dice Corvalán, de que los reaccionarios puedan recurrir a la violencia y que sólo entonces se justifique abandonar los medios pacíficos. La dictadura de clases y la violencia, abierta y brutal como ahora o enmascarada tras aparentes "garantías democráticas", se ha estado aplicando desde que existe en Chile, en los diversos regímenes de explotación.

En otra parte de sus escritos, Corvalán, exhibe las raíces de clase y la acomodación a la sociedad burguesa, que lo ha llevado a "olvidarse" de la violencia permanente que ha pesado sobre el pueblo chileno. Luego de afirmar con la mayor frivolidad, que la lucha para derrocar a las clases dominantes en Chile, "duraría algunos días o semanas a lo sumo", pues, "ningún Gobierno podría sostenerse durante un mes de paro de las actividades principales" sostiene sin embargo, que la revolución por vía pacífica corresponde a los intereses de la clase obrera y de las masas populares. Cabe preguntarse al respecto: si como afirma Corvalán la liberación del pueblo de sus explotadores tomaría apenas unas semanas de lucha, ¿qué razón puede haber para prolongar por decenios y decenios los sufrimientos del pueblo? Corvalán, responde a sus increíbles argumentos anteriores, con otros no menos pintorescos y absurdos. "En la práctica, dice, el movimiento popular chileno, en virtud de condiciones históricas concretas de nuestro país (se refiere probablemente a la prolongada influencia oportunista de su partido) ha venido desenvolviéndose por la vía pacífica desde hace décadas, desde los tiempos del Frente Popular, desde hace casi veinticinco años". Y agrega: "¿Por qué si el movimiento popular chileno ha venido marchando por la vía pacífica desde hace años, ahora y no antes menudean las objeciones en algunos círculos de izquierda?" El que Corvalán se formule siquiera una pregunta como esta, muestra hasta qué punto se encontraban adaptados y a gusto en la sociedad burguesa estos pseudo comunistas. Son incapaces de comprender que las masas populares cuestionen un "camino al poder", que las ha mantenido por siglos en la miseria y en la explotación. Más aún, incurre en la aberración de esgrimir la antigüedad de un error para justificar la necesidad de seguir manteniéndolo. De este modo, cuando se celebre

el primer centenario del fracaso de la "vía pacífica" al poder, según la lógica del señor Corvalán su argumentación destinada a continuar "marcando el paso" por ese camino, tendría todavía más validez.

La verdad es que Corvalán exhibe en los argumentos citados, tanto su espíritu aventurero, al afirmar que es posible derrotar a los sectores dominantes en unas pocas semanas: como su extremo oportunismo de derecha, al levantar un prolongado fracaso de la vía pacífica y electoral, como un argumento destinado a justificar esa misma política oportunista, que ha impedido al pueblo liberarse. La trágica experiencia vivida por el pueblo de Chile a raíz del golpe de Estado fascista, ha tenido la virtud de mostrar la falsedad de ambas afirmaciones: ni era posible siquiera arrebatar el poder a los sectores dominantes por vía pacífica para instalar el capitalismo de Estado (ni hablar de tal vía para el verdadero socialismo); ni tampoco era cierto que a su violencia desatada se respondería, como dijera Corvalán, con la violencia popular, derrotándolos en unas pocas semanas.

La forma concreta que asume para el proceso chileno la "vía pacífica" al socialismo predicada por Corvalán consiste en la utilización de las elecciones para conquistarlo. Demostrando una vez más que ha renegado por completo de la teoría marxista respecto a la naturaleza del Estado burgués; a la necesidad de destruirlo, planteada por Marx, Engels y Lenin, para implantar la dictadura del proletariado, Corvalán, presenta las "resonantes victorias electorales", que lograra el "PC" apoyando a candidatos burgueses, como ejemplos de que es posible conquistar el poder por "vía pacífica" (?). Ni siquiera lo obrado por Gonzalez Videla, que reprimió al "PC" luego de salir elegido con sus votos, le sirve de antecedente para reflexionar sobre la poca significación de tales "resonantes victorias", al servicio de la burguesía. Por el contrario, apoyándose en esos ejemplos, concluye que es posible llegar al poder "a través de un proceso electoral", para luego utilizar "el régimen presidencial en favor de importantes cambios de todo orden", "dentro del libre juego de todos los partidos y corrientes".

Aquí, pues, encontramos ya claramente formulada en 1961, la teoría que más de 10 años después, habría de conducir a la catástrofe protagonizada por la Unida Popular, en la que el pueblo de Chile sería la víctima principal.

2. La Oposición Marxista-Leninista.

Junto con comenzar la formulación abierta después del XX Congreso del PCUS, por parte de los dirigentes del "PC" de Chile, de las teorías revisionistas del marxismo, comenzó también, la oposición en su contra de los militantes honestos y fieles al marxismo-leninismo en el viejo "PC". Con motivo de un Congreso celebrado en los años 60, numerosos militantes y aún células completas tomaron posiciones opuestas a la línea oficial y criticaron, al mismo tiempo, la actividad meramente reformista, legalista y economicista a la que impulsaban al partido sus dirigentes. La discusión ideológica se centró especialmente en torno a la teoría oportunista de la "vía pacífica" al socialismo, transformada en la línea oficial de los dirigentes del "PC" de Chile.

No obstante, la lucha desplegada en el mencionado Congreso, no logró alterar en lo más mínimo las posiciones oportunistas. La burocracia a sueldo de los dirigentes revisionistas pro-soviéticos tenía un fuerte control sobre los organismos claves del "PC". Eso les permitió movilizarse servilmente para acallar a todos aquellos que discrepaban, mediante amenazas, presiones, sobornos y otras maniobras, impidiendo que quienes estaban en desacuerdo con ellos, pudieran siquiera llegar como delegados a los congresos regionales o comunales.

Más adelante, en 1963, el apareamiento de los primeros materiales públicos de la polémica del Partido Comunista de China y del Partido del Trabajo de Albania, contra el revisionismo contemporáneo, constituyó una inapreciable ayuda a los marxistas-leninistas, que comenzaban a reagruparse en el seno de los partidos manejados por los revisionistas pro-soviéticos. Dicha polémica, contribuyó a reafirmar sus opiniones contra las deformaciones del marxismo en boga; a entregar nuevos argumentos para la lucha ideológica, con el importante respaldo de partidos que habían conquistado el poder, y, por último, a mostrar que las desviaciones no constituían tan sólo un problema meramente

nacional y local, sino una contra-corriente oportunista a escala mundial, promovida por los dirigentes soviéticos. Es así, como a raíz de esa polémica pública, se constituyó dentro del "PC" de Chile en 1963, un grupo editorial llamado "Espartaco", que en abierta pugna y rebelión contra los dirigentes oportunistas del "PC", comenzó a difundir y a editar en Chile mismo, las publicaciones chinas y albanesas anti-revisionistas.

La lucha misma contra los dirigentes oportunistas del "PC" y contra su línea anti-marxista en el interior de dicho partido, demostró a quienes libraban esa lucha, que tales dirigentes no eran gentes honestas y equivocadas, sino, traidores al marxismo plenamente conscientes y sirvientes incondicionales de los cabecillas de la URSS. Jamás aceptaron en las filas del viejo "PC" una discusión franca con quienes discrepaban y ni siquiera con quienes estaban de acuerdo con ellos, pero tenían dudas. Sólo apelaron para combatir a los marxistas-leninistas a calumnias en su contra, intentos de sobornos, amenazas y agresiones de hecho y prohibición de exponer sus puntos de vista. Todo esto sirvió para demostrar que no existían en el interior del "PC", ni las más mínimas condiciones de democracia interna como para lograr que se impusiera allí una línea marxista, pues los burócratas a sueldo de los cabecillas soviéticos estaban conjurados para imponer a cualquier precio su engendro anti-marxista. No había otra alternativa, pues, que arrancar del viejo "PC" a los militantes honestos y crear un verdadero partido marxista-leninista.

La lucha interna culminó con un rompimiento con el antiguo "PC" a fines de 1963, naciendo un grupo marxista-leninista, precursor del Partido Comunista Revolucionario de Chile, que conservó el nombre de "Espartaco". "Espartaco", una vez que inició sus actividades como grupo independiente, debió combatir, así mismo, contra los trotskistas, que intentaban activamente aprovechar la lucha contra el revisionismo, para infiltrarse y tomar el control de la naciente organización marxista-leninista. Se debió combatir, también, contra el esfuerzo hipócrita y velado por servir al revisionismo, encubriéndose en posiciones "izquierdistas" y aparentemente divergentes con las de los líderes soviéticos, realizado por los dirigentes cubanos y sus seguidores. Estos, prestaron un inestimable servicio a los cabecillas revisionistas soviéticos y a sus servidores en América Latina, conduciendo a numerosos sectores pequeño-burgueses descontentos con el reformismo de los partidos pro-soviéticos, a formas de lucha armada desligadas de las masas y, por lo mismo, condenadas al fracaso y al aniquilamiento. Al mismo tiempo, realizaron una activa prédica contra la necesidad de construir auténticos partidos proletarios y frentes únicos dirigidos por el proletariado, para conquistar el poder. De este modo, apartaron a muchos sectores que podrían haber jugado un papel positivo dentro de auténticos partidos marxista-leninistas, del trabajo entre las masas populares, esforzándose por dejar este campo libre a la influencia venenosa del revisionismo y lanzando de hecho a dichos sectores, a una muerte cierta en manos de las fuerzas armadas reaccionarias, asesoradas por el imperialismo yanqui. Es así, como los "focos guerrilleros" (y sus variantes posteriores: guerrilla urbana, expropiaciones, terrorismo, etc.), aplastados en toda América Latina, les ha servido a los revisionistas para desprestigiar a través de su propaganda la "lucha armada" y reforzar sus argumentos en pro de su línea pacifista y reformista. Por último, en la medida en que Fidel Castro y los otros dirigentes cubanos, se desenmascaraban cada vez más como simples peones de los dirigentes del social-imperialismo soviético, fueron forzando a los grupos que les eran afines a ponerse abiertamente al servicio de los partidos revisionistas de Latinoamérica. Dichos grupos, en realidad, manteniendo discrepancias secundarias con los revisionistas y levantando posiciones aparentemente más radicales, han servido para agrupar a quienes están descontentos del revisionismo, impidiendo que lo combatan con posiciones correctas entre las masas y manteniéndolos de hecho, en todo lo fundamental, atados a su política oportunista. La política de la Dirección del MIR en Chile, en particular durante el gobierno de la Unidad Popular, es un buen ejemplo de esto.

El grupo "Espartaco", aparte de su trabajo directo entre las masas y de la conducción de numerosas luchas, realizó una intensa labor de propaganda y de educación ideológica. Editó, desde su nacimiento, un periódico nacional llamado "Combate" y una revista teórica con el nombre de "Principios Marxista-Leninistas", así como numerosos folletos, periódicos de empresa, volantes y otros impresos. En el N^o 2 de la mencionada revista,

correspondiente a los meses de mayo-junio de 1964, debí escribir por encargo de la Dirección de "Espartaco", un extenso artículo titulado: "La Vía Pacífica de Corvalán: Camino Contra-revolucionario", en el que ya en esa época, seis años antes de la experiencia de gobierno de la Unidad Popular, se refutaba la farsa de la "vía pacífica al socialismo y se anticipaba la tragedia a la que sería llevado el pueblo chileno, si se imponía la estrategia revisionista.

El grupo "Espartaco", en los marcos de la lucha intencional que se libraba contra el revisionismo contemporáneo, comenzó también a establecer vínculos con las organizaciones marxista-leninistas que estaban surgiendo en latinoamérica y otras partes del mundo. En especial, con el Partido Comunista de China y el Partido del Trabajo de Albania, que habían mantenido siempre en alto la bandera del marxismo-leninismo. Estos contactos fueron de extraordinaria importancia para la transformación de "Espartaco" de grupo político, en un partido comunista marxista-leninista.

Particularmente decisiva para la construcción de dicho partido comunista marxista-leninista, fué la prolongada entrevista que les concediera a fines de 1964 a los dirigentes de "Espartaco", el más grande líder revolucionario e ideólogo marxista de nuestra época, el camarada Mao Tse-tung. En dicha entrevista, el camarada Mao, nos dió un importante aliento para la dura batalla que iniciábamos, mostrándonos que, aunque al comienzo fuéramos pocos, tendríamos sin duda éxito si nos manteníamos fieles a los principios y nos ligábamos a las masas; nos advirtió que tendríamos derrotas y nos enseñó a aprender de ellas, apelando a ejemplos de la historia de su propio partido y de la revolución en su país; nos impulsó a unirnos estrechamente a las masas, en particular de obreros y campesinos, a dirigirlas y a aprender de ellas; por último, nos instó, muy especialmente, a estudiar las condiciones concretas de nuestro país a la luz del marxismo-leninismo, para poder, así, combatir al revisionismo, sin caer en el dogmatismo y en la copia mecánica de experiencias ajenas.

3.- El nacimiento de un verdadero Partido Comunista.

El grupo "Espartaco", ya con el claro propósito de construir un partido marxista-leninista chileno, se impuso para ello tres condiciones fundamentales: en primer lugar, elaborar un Programa a largo plazo para la revolución chilena, que sirviera para conducir a las masas populares por un camino revolucionario y, al mismo tiempo, para unificar política e ideológicamente a quienes se incorporaban al Partido. En segundo lugar, extender la organización de "Espartaco", bajo formas orgánicas leninistas (células, comités locales y comités regionales), a todo el territorio nacional. Y, por último, lograr un amplio predominio en sus filas de los militantes de extracción obrera y campesina. Estas condiciones fundamentales se cumplieron a través de los años 1964-1965. Se materializaron a través de la activa y combativa participación de "Espartaco" en las luchas de los obreros, campesinos, estudiantes y otros sectores populares, contra la engañosa política reformista pro-yanki del gobierno de Frei.

En febrero de 1966, se realizó en Santiago en absoluta clandestinidad, el Congreso Constituyente del Partido Comunista Revolucionario de Chile (PCR). Dicho Congreso contó con la participación de 93 delegados de los diversos comités regionales creados en el país, entre los que predominaban los obreros y campesinos. A este Congreso envió también delegados, contribuyendo a la fundación del PCR, la Unión Rebelde Comunista, organización marxista-leninista nacida en la zona norte del país por las mismas razones ideológicas y políticas que "Espartaco". Asistieron, así mismo, delegados fraternales de los partidos y organizaciones marxistas-leninistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, las cuales, con su experiencia realizaron importantes aportes al Congreso y al nacimiento del Partido.

El PCR, desde su nacimiento, puso la ideología y la aceptación de lo esencial de su línea política, como condiciones básicas para la incorporación a sus filas. Se ha negado, sistemáticamente, a todo reclutamiento indiscriminado, ya sea a través de la fusión con grupos regidos por principios o por una línea diferentes en lo fundamental o a través de un proselitismo sin principios. Al igual que "Espartaco", acordó mantener una organi-

zación básicamente clandestina. Se ha opuesto con firmeza a organizar el Partido y a encauzar su actividad en los moldes acostumbrados por los partidos burgueses, es decir, sobre la base de locales públicos, asambleas de militantes, propaganda al estilo comercial, abundancia de funcionarios de partido, militancia abierta, etc. Las leyes e instituciones burguesas son aprovechadas al servicio de una política esencialmente revolucionaria, pero sin someterse o adaptarse a ellas, comprometiendo la independencia política del Partido y la seguridad de su trabajo ilegal. A estas características se debe, entre otras cosas, aparte del propósito deliberado tanto de la derecha como de la izquierda tradicional de bloquear toda información sobre el PCR, en el que sus luchas y su implantación de masas no hayan sido conocidas en su verdadera magnitud. El PCR no aspira a desarrollarse a través de acciones efectistas de tipo publicitario, y, por ello, así como por razones de seguridad tendentes a hacer más eficaz la lucha, no reivindica como propias todas las luchas que encabeza, menos aún se atribuye luchas ajenas. No obstante, cada vez más vastos sectores de masas -y esto es lo que importa- conocen su actividad y sus planteamientos, formulados conviviendo con las masas: con sus luchas, alegrías, sufrimientos, y construyendo Partido en su seno. De esta manera el desarrollo del PCR y de su influencia son sólidos, profundos y estables y no sufre los vaivenes de los partidos burgueses, que basan su influencia en una propaganda demagógica con la que se intenta manipular al pueblo "desde fuera", es decir, sin unirse verdaderamente a él y sin ponerse al servicio de sus reales intereses.

Junto con intensificar su actividad entre las masas, el PCR, ha puesto al servicio de esta tarea, una amplia labor de propaganda y educación política de masas. Aparte de numerosos folletos teóricos y políticos, ha editado varios periódicos de tipo nacional, tales como "Espartaco", "Denuncia Popular" y "El Pueblo", que sale hasta nuestros días, editado ahora en la clandestinidad. Desde mayo de 1968, además, hasta el golpe de Estado de 1973, editó 25 números de una revista teórica llamada "Causa Marxista-Leninista", que alcanzó incluso influencia más allá de las fronteras chilenas, siendo reproducidos numerosos de sus artículos en otros países.

La sólida estructura leninista clandestina del PCR y la fidelidad a los principios, tanto en los aspectos orgánicos como políticos, le ha permitido ser hoy en Chile, bajo la feroz dictadura fascista, la organización que se encuentra, muy lejos de todas las demás, en mejores condiciones para organizar la resistencia contra la dictadura. La casi totalidad de sus militantes y dirigentes se encuentran dentro del país; ha mantenido su funcionamiento, haciendo oportunos cambios para adaptarlas a las nuevas condiciones represivas, todas sus organizaciones de base y comisiones auxiliares, el número de sus militantes, que han logrado ser identificados por los organismos represivos es ínfimo. Por otra parte, sus militantes, preparados precisamente para combatir en condiciones como las actuales, han dado muestras frente a la represión fascista, de la más elevada moral revolucionaria. Por ello, el PCR, lejos de ser destruído, ha tenido importante desarrollo después del golpe de Estado, tanto de su militancia como de sus vínculos con las masas. Mientras los partidos adaptados exclusivamente al estilo legal de actividad (locales públicos, funcionarios, propaganda estilo comercial, etc.) se encuentran en completa desintegración, el PCR, con sus métodos de trabajo directo entre las masas, de actividad clandestina, de propaganda simple y al alcance de los trabajadores, con su experiencia de trabajo ilegal, se desarrolla como un pez en el agua. A este auge del PCR en las condiciones actuales -las más difíciles que es dable imaginarse para una labor de oposición y lucha contra los sectores dominantes- ha contribuído, así mismo, el hecho de que vastos sectores comienzan a reconocer que ha planteado siempre una línea justa en lo fundamental, desmascarando la farsa de una vía "electoral y pacífica" al "socialismo" y alertando al pueblo en el pasado contra las Fuerzas Armadas reaccionarias y contra el golpe de Estado fascistas. Los sectores populares, por otra parte, que anhelan organizarse y combatir contra la dictadura fascista, tienen cada vez más confianza en la conducción del PCR, pues conocen la eficacia de su organización y de sus métodos clandestinos de trabajo. Todo ello, le ha permitido jugar un importante papel en la organización de la resistencia, en la propaganda clandestina contra la Junta Militar Fascista, en la ayuda a los perseguidos y sus familiares, en la organización de las primeras luchas contra la dictadura y en el combate ideológico contra los dirigentes oportunistas que condujeron al pueblo a la dramática situación actual.

CAPITULO III

LA PREDICA DE FALSAS ILUSIONES

Como es obvio, la victoria electoral de Salvador Allende en 1970, no hizo más que fortalecer la línea oportunista preconizada por los dirigentes del "PC". Muchos que en Chile ponían en tela de juicio las posibilidades "pacíficas" y "electoral" como medios para arrebatar su poder a los sectores dominantes, se dejaron arrastrar por la euforia del triunfo electoral del 70. Esta ilusión se fortaleció cuando fracasaron los planes de la CIA y los sectores de extrema derecha, para impedir que Allende, una vez elegido, asumiera el mando.

Sin embargo, los dirigentes del "PC" y sus seguidores, no sólo propalaron sus tesis anti-marxistas inmediatamente después de elegido Allende y durante el primer año de gobierno, en el que aparentemente se cosecharon numerosos éxitos económicos y políticos, sino que continuaron engañando al pueblo durante los tres años de gobierno de la UP y hasta el mismo día del golpe de Estado. Más aún, mostrando su recalcitrante carácter oportunista y no obstante los terribles sufrimientos a los que han arrastrado al pueblo chileno, insisten hasta hoy en la validez de sus tesis sobre la "vía pacífica" al poder y al "socialismo". No sólo han hecho declaraciones por radio Moscú señalando que los tres años que sobrevivió el régimen de Allende demuestran la validez de sus tesis, sino que, en un reciente documento culpan al MIR y a lo que llaman la "ultra-izquierda", del fracaso de su aborto anti-marxista en Chile.

Es importante, por lo mismo, en este trabajo en que se intenta analizar las causas del fracaso de la llamada "vía chilena al socialismo", consignar ejemplos de esta siembra activa de falsas ilusiones pacifistas, legalistas y reformistas que realizaron los dirigentes del "PC", así como de la influencia que ellas tuvieron en círculos dirigentes de otros partidos de la UP. Para mostrar hasta que punto fue persistente esta campaña de engaño, hemos decidido presentarla aquí por separado, aunque con fechas que permitan relacionarla con los hechos que analizamos más adelante. Por cierto, los ejemplos son muchísimo más abundantes que los que hemos podido recopilar en el exilio, sin acceso fácil a los medios de información que existieron en Chile durante el gobierno de Allende. Con todo, son más que suficientes para enjuiciar la responsabilidad de los falsos comunistas en lo ocurrido en nuestro país.

No está demás consignar aquí (cosa en la que insistiremos a través de todo el libro, pues es clave para comprender la naturaleza reaccionaria y no meramente equivocada de la estrategia del equipo del "PC"), que la mantención del Estado burgués y su intento de tomarlo por dentro, era inherente al falso "socialismo", que tales dirigentes pretendían imponer en Chile. No era posible, en efecto, que apelaran a una movilización revolucionaria del pueblo, quienes sólo se proponían instaurar un capitalismo de Estado. Quienes sólo anhelaban generar una nueva burguesía burocrática ampliando el área estatal, ya sea a expensas de algunos de los viejos explotadores o asociándose con otros, así como una explotación conjunta del pueblo chileno por ambas super-potencias. Su propio carácter de nueva burguesía burocrática en desarrollo -explotadora y opresora del pueblo- no les permitía, en su pugna con el imperialismo yanqui y con los sectores internos que detentaban el poder, movilizar al pueblo a una auténtica lucha revolucionaria por conquistarlo. Una auténtica movilización revolucionaria, no les habría permitido instalarse en reemplazo de los antiguos explotadores y consolidar su dominación, ni siquiera disfrazándola de "socialismo". Es por eso que los falsos marxistas, no pueden destruir el Estado burgués y sólo pueden aspirar a utilizarlo -como lo hacen todos los sectores reaccionarios- para intentar sustituir en él a ciertas fuerzas dominantes y compartir con otras dicha dominación. Por ello, si bien disputan con esas fuerzas por el control de la economía y del poder, se unen cada vez que el régimen está en peligro para preservarlo y protegerlo.

Esa necesidad de preservar el régimen de explotación y el Estado burgués es, en todo caso, el norte principal de su política. Es por ésto que, aún cuando su intento pseudo-socialista hacía agua por los cuatro costados a raíz de la implacable ofensiva reaccionaria y con mayor razón mientras eso ocurría, pues existía la amenaza de que los sectores popu-

lares reaccionaran por su cuenta contra ella, no podían dejar de sembrar ilusiones en torno al sistema imperante ni dejar de cumplir su papel de saboteadores de toda lucha popular. Si bien desplazar a los antiguos sectores dominantes les resultaba difícil, no obstante, no ignoraban que una auténtica conquista del poder por un pueblo desengañado del reformismo y del legalismo y que ha tomado la decisión de destruir el aparato estatal reaccionario, tornaría aún muchísimo más difícil para ellos la implantación del capitalismo de Estado al que aspiraban. Es importante recordar al respecto que los revisionistas son en esencia -como los definiera Lenin- sirvientes de la gran burguesía en su papel de guardianes del orden burgués, aún cuando sean sirvientes infieles e ingratos (especialmente después del surgimiento del social-imperialismo), que aspiran a desplazarlos y a transformarse ellos mismos en explotadores. Para ellos, una eventual lucha independiente de su línea conciliadora por parte de las masas populares, como reacción contra la ofensiva ultrareaccionaria e imperialista que se desencadenó en Chile contra el gobierno de la UP, era aún más peligrosa que el triunfo temporal y completo de los antiguos explotadores y la implantación del fascismo. Debido a esta lógica oportunista, su estrategia consistió permanentemente en oponerse a la movilización popular, en defender en forma intransigente el sistema con sus leyes e instituciones reaccionarias, y en buscar, desesperadamente, una alianza con la DC, que les permitiera salvarse compartiendo con ésta la explotación del pueblo. Cuando estuvo ya todo perdido, se aplicaron activamente a desmovilizar al pueblo e impedir toda resistencia al golpe de Estado, para proseguir desde el exilio aprovechando desde el punto de vista propagandístico los sufrimientos a los que condujeron al pueblo de Chile y continuar buscando la alianza con la DC.

Los antecedentes que siguen, son una muestra parcial de como las falsas teorías inspiradas por los dirigentes soviéticos a partir del XX Congreso, se transformaron en temas de propaganda al servicio de una línea oportunista.

1.- El elogio de la "Vía Pacífica".

Un mes después del triunfo electoral de Salvador Allende, en octubre de 1970, Corvalán afirma en un mitin realizado en Montevideo (Uruguay): "Hemos triunfado en una batalla electoral, en un terreno en que es muy difícil vencer. Esto viene a demostrar que los caminos y las formas del proceso revolucionario tienen sus propias originalidades en cada país. Muchos no creían en esta posibilidad. En el propio campo de la izquierda se observó al comienzo gente incrédula. Algunos atornillaron al revés. Los llamados ultraizquierdistas combatieron frontalmente la política seguida. Los resultados han demostrado que teníamos razón". (1) No está demás comentar al respecto que hoy día Uruguay, bajo la bota de la dictadura fascista, padece también, la fé de algunos en las prédicas pacifistas de Corvalán.

Dos meses más tarde, el mismo Corvalán señala en un Pleno del Comité Central de su partido: "Camaradas: la vida ha demostrado la justeza de nuestra política. Teníamos razón al propiciar la unión de todas las fuerzas de la izquierda. Estábamos en lo cierto al sostener la posibilidad real de conquistar el gobierno por una vía no armada. Nuestro constante combate ideológico contra las posiciones de derecha y de la ultra-izquierda fue elemento sustancial en la lucha por la unidad del pueblo". (2)

En enero del año siguiente, Volodia Teitelboim, miembro del Secretariado del "PC", sostiene en la Primera Asamblea Nacional de la Central Unica de Trabajadores (CUT): "por primera vez un pueblo llega al poder pasando por el estrecho y al parecer imposible e impracticable desfiladero de las urnas. El movimiento popular chileno enriqueció la práctica social dando ese nuevo aporte creador a la historia de la lucha por la emancipación de los trabajadores". (3) Nótese que Teitelboim, ya no habla aquí de mera conquista del gobierno, sino del poder. Según las conveniencias y el auditorio, los dirigentes del "PC", plantearán una u otra cosa, tendiendo a que se hagan sinónimo e impulsando así, la máxima confusión al respecto.

El 8 de marzo de 1971, aparece un artículo en el diario "El Siglo", firmado por Jorge Insunza, miembro del CC del "PC", artículo que sería reproducido luego en el N° 138 de la Revista teórica de dicho partido llamada "Principios". Allí en un intento de ex-

plicación del por qué del éxito de la "vía pacífica", se señala: "Lo ocurrido hasta ahora es que el pueblo ha sido capaz de acumular una fuerza tan grande, y de neutralizar otras, que los reaccionarios se vieron imposibilitados de recurrir a la resistencia armada, pese a todos sus deseos y esfuerzos". Y agrega: "La posibilidad teórica de atar las manos del enemigo sobre la base de acumular una fuerza potencial de tal magnitud que basta su presencia y la evidencia pública de su decisión de lucha para ahogar la resistencia reaccionaria, se concretó en Chile".

Luego, este "eminente" teórico, señala: "Estos hechos confirman ciertamente que las clases reaccionarias no abandonan el poder si no se les expulsa de él, pero, al mismo tiempo, constituyen un mentís a las concepciones dogmáticas sobre la violencia revolucionaria, las que asimilan la expresión de esa violencia, principal o exclusivamente, a las normas de la violencia armada ('el poder del fusil'), colocando en segundo plano la fuerza de las masas, y con ello el trabajo y la lucha de masas para pasar a primer, y a veces único plano, el trabajo conspirativo. La experiencia vivida hasta hoy por el movimiento popular chileno demuestra lo incorrecto que es diseñar una política viviendo a la espera del enfrentamiento, concibiendo por tal única y exclusivamente el choque armado". Así pues, este inescrupuloso falsificador del marxismo, presenta la violencia revolucionaria, no como una lucha armada de las masas por conquistar el poder, sino como la espera pasiva de un enfrentamiento por parte de un grupo conspirativo, aislado del pueblo. No obstante, lo que dice luego, delata aún más el papel que jugaron los dirigentes del "PC", en frenar toda movilización de masas para oponerse a los intentos golpistas. En realidad hicieron de ese freno a la movilización popular SU política "anti-golpista". Refiriéndose a tal movilización, que se esforzaban en impulsar algunos sectores políticos, señala: "Con ello, en la situación presente, se oculta el hecho cierto que el enfrentamiento está en curso y se sobrevaloran las posibilidades del enemigo (¡júzguese ahora!) y se facilitan sus afanes de reunir fuerzas suficientes para llevar a cabo en el terreno armado la lucha contra el gobierno popular que, poca duda cabe, es el terreno que hoy prefieren". Para este notable "marxista", pues, la manera de evitar el golpe armado que preparaba la reacción interna y el imperialismo norteamericano, consistía en impedir que el pueblo se preparara para enfrentarlo. A esto obedeció más adelante cuando el golpe era inminente, la consigna desmovilizadora lanzada por la dirección del "PC" para "enfrentarlo": "no a la guerra civil". Esta aparente estupidez, impropia no sólo de quienes se decían marxistas, sino del más miope político de cualquiera tienda, sólo se explica, en función de lo que hemos señalado más arriba, en función del pánico que estos aspirantes al relevo de la antigua burguesía, tenían y tienen a toda movilización combativa del pueblo, que pueda amenazarlos más adelante a ellos.

Finalmente, este discípulo de Mahatma Ghandi, concluye: "Hay sectores en el campo revolucionario, sobre todo los que sustentaron posiciones de ultra-izquierda en el período anterior a la elección, que no logran o no quieren liberarse de los esquemas dogmáticos que la vida ha derrotado, que insisten en el problema de la violencia revolucionaria de este modo estrecho, con lo que facilitan las maniobras del enemigo de clase para hacer aparecer en el pueblo el origen de la violencia, que a ellos les interesa provocar". Ahora, teniendo en vista lo ocurrido en Chile y los antecedentes confesados por la CIA norteamericana, que comenzó a preparar febrilmente el golpe desde que Allende salió elegido, es posible juzgar los resultados de esta política que pretendía tocar las fibras sentimentales de los reaccionarios, con simples declaraciones pacifistas. Al parecer creyeron que podían aplicar las técnicas soviéticas del parto sin dolor a la política chilena, convenciendo a la gran burguesía y al imperialismo para que se dejaran cocinar en la propia salsa, de sus leyes e instituciones del Estado burgués.

A fines de 1971, en el mes de octubre, aparece en el diario "El Siglo" del "PC", un comentario del dirigente de ese partido Eduardo Labarca, especialista en panegíricos a Corvalán, al libro de éste último, llamado: "Camino de Victoria". En dicho comentario señala:

"En enero de 1961, hace diez años y nueve meses, el Secretario General del Partido Comunista, Luis Corvalán, escribía:

"En lo que a Chile se refiere, nosotros los comunistas, basándonos precisamente en las condiciones concretas de nuestro país, hemos llegado a la conclusión de que aquí la vía

más probable de desarrollo revolucionario es la vía pacífica". Y continúa luego, Labarca: "En diciembre de 1963, el Secretario General del "PC", añadía:

"Tratánose de elecciones, no sólo las de tipo parlamentario pueden presentarse como una coyuntura favorable a un triunfo decisivo de la clase obrera y del pueblo en la lucha por la conquista del poder político. Aunque el Partido Comunista de Chile y sus aliados del FRAP pueden conquistar mejores posiciones en el Parlamento, no es precisamente por este lado que divisan las mejores perspectivas. Sus posibilidades de victoria las vinculan a elecciones de tipo presidencial en virtud de que el Poder Ejecutivo, por la inmensa cantidad de atribuciones que tiene, se identifica con el centro del poder político'"

"La fuerza del libro de Corvalán -comenta Labarca- reside en que su contenido fue confirmado por los hechos. Es una mercadería probada: ahí está -por si hay dudas- el Gobierno Popular chileno.

Y luego concluye: "Al comentar 'Camino de Victoria' parece inoficioso agregar adjetivos para alabar a un Partido y a un dirigente que han entregado a los trabajadores y al pueblo una línea de tal claridad. Basta señalar simplemente una cosa: todo planteamiento fundamental contenido en esos informes y trabajos, ha sido confirmado por la realidad histórica de Chile". (4)

En 1972, Corvalán, concede una larga entrevista a ese mismo periodista tan lúcido, que sale publicada bajo el título: "Corvalán 27 horas". Es interesante transcribir algunas opiniones contenidas en esa entrevista, pues pese a que ya se ha desencadenado con vigor la ofensiva de los ultra-reaccionarios para derribar al gobierno, Corvalán, persiste en su línea anti-marxista. He aquí algunas de sus opiniones:

"Sin duda que el Gabinete en el cual están las tres ramas de las Fuerzas Armadas y la clase obrera tiene una presencia relevante, constituye un dique insalvable contra la sedición".

"Yo pienso que las Fuerzas Armadas, por sobre los ataques, los halagos y las presiones, mantendrán una actitud correcta".

"Como partido hemos dado nuestro aporte, reconocido mundialmente, en lo que respecta a la posibilidad de alcanzar el poder político a través de una vía no armada.... Creo que ningún otro partido ha dado en este terreno una contribución mayor".

"Creo que también es irreversible lo que se ha hecho en materia de reforma agraria, de estatización de la banca y de una serie de empresas que están en el área social", (todo ello y aún algunas empresas que pertenecían al Estado antes de la UP, han sido entregadas a manos privadas internas o extranjeras por la Junta Militar).

"Siempre sostuvimos la posibilidad de alcanzar, de generar en Chile un Gobierno Popular y de abrir camino a la revolución por una vía que no fuese la armada. Y los hechos han demostrado que esta tesis nuestra era y es realista".

"Nosotros somos 'sovietinchas'..... El Comité Central del Partido Comunista de China nos dirigió una carta, en 1964, atacando fuertemente y en términos ofensivos la orientación de nuestro partido. Ellos consideraban una ilusión que el pueblo de Chile pudiera alcanzar el poder por una vía no armada. Además reclutaron a uno que otro transfuga para tratar de dividirnos".

Y termina con esta frase para el mármol: "No pena en mi ni en la cabeza de ningún comunista la posibilidad del fracaso".

Todavía en marzo de 1973, en un acto de masas celebrado para realizar un balance de las elecciones parlamentarias recién efectuadas, Corvalán, afirma: "La revolución social es posible sin enfrentamiento armado y es deber con nuestro pueblo hacer todo lo posible para que esta posibilidad se siga ensanchando". (5)

En mayo de ese mismo año, ya en plena ofensiva final de los golpistas y a menos de 4 meses del golpe de Estado, se afirma en la Convocatoria al XV Congreso Nacional del "PC": "Las tesis acerca de la posibilidad de marchar al socialismo por una vía no armada siguen en pie. Su materialización es factible porque sólo una minoría exigua, una parte de la oposición, los sectores de clara tendencia fascista, están por sacar los acontecimientos del cauce constitucional". (6)

Para cerrar esta serie de "lúcidas profecías", sólo agregaremos la opinión de Volodia Teitelboim, aparecida el mismo día del golpe de Estado, el 11 de Septiembre de 1973, en el diario "L'Unita" del "PC" italiano: "La derecha trata de movilizar algunos familiares

de algún general o almirante, pero la gran mayoría del Ejército permanece fiel al sentido profundo de su misión constitucional”.

2.- Influencia del “PC” en Allende y en la Unidad Popular.

Esta absurda e injustificada posición de confianza en una “vía pacífica” al poder y en las FF. AA., reaccionarias, sembradas por años -antes, durante el gobierno de Allende e incluso, ahora, después del golpe de Estado, influyó también, como es natural, en los otros sectores políticos integrantes de la UP y en el propio Presidente de la República. Si quienes se decían “comunistas” y “marxistas”, abjuraban de un modo público y reiterado a las tesis fundamentales del marxismo respecto al carácter del Estado, a las FF. AA., reaccionarias, es perfectamente comprensible que se plegaran a menudo a esas posiciones, otros sectores políticos como el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), la Izquierda Cristiana (IC), la Acción Popular Independiente (API), el Partido Radical (PR), que ni siquiera decían profesar (salvo el MAPU en cierta etapa) un análisis marxista de la sociedad. Lo mismo ocurrió con sectores dirigentes del Partido Socialista (PS) de inspiración social-demócrata y con el propio Presidente de la República. En honor a la mayor parte de estas fuerzas, sin embargo, es preciso señalar, que en todas ellas surgieron tendencias que, a su modo, comprendieron que se venía un enfrentamiento violento e intentaron prepararse para encararlo e, incluso, algunos de ellos intentaron preparar a ciertos sectores de masas. Hasta el propio Presidente Allende, como lo mostraremos más adelante, era partidario de no confiar sólo en las FF.AA., y si bien rechazaba toda formación de grupos civiles armados, fue partidario de organizar una amplia red de comités populares, que en colaboración con las FF.AA., pusiera atajo a los golpistas. La dirección del “PC” se opuso frontalmente a esta idea. Fue de hecho el único partido monolítico en sus posiciones oportunistas.

Es así, como en las resoluciones de una Asamblea de la Unidad Popular del Primer Distrito de Santiago, publicadas en “El Siglo” del 29 de enero de 1971, podemos leer bajo el título: “Las Fuerzas Armadas son un ejemplo para América y el Mundo”, lo siguiente: “Estas (las FF.AA.) están firmemente asentadas en tradiciones constitucionalistas, profesionales y democráticas. El atentado al comandante en jefe del Ejército General René Schneider es una prueba de lo que decimos. Los sectores de derecha creyeron que las leyes chilenas creadas por la burguesía sólo servían para ellos si ganaban. Si perdían, entonces, no jugaban más el juego democrático, lo cual prueba incluso su falta de virilidad. Sabían que las FF. AA., no se prestarían para ese doble juego”.

Posteriormente, el 31 de marzo de 1971, se publicaba en este mismo periódico del “PC”, una declaración de la Comisión Política del PS, en la que se dice: “Los ultra-de-rechistas pretenden ganar parte del Ejército, pero olvidan que este no es el ejército brasileño que atentó contra Janios Quadros y Goulart. Pretenden golpear las puertas de los cuarteles pero olvidan que no están en Indonesia, sino en Chile. Este Ejército es el pueblo uniformado. Si algunos desalmados pretenden atentar contra el orden y las conquistas populares encontrarán un ejército que, junto al pueblo, defenderá la nueva democracia y el gobierno”.

El 1 de junio de ese mismo año y en el mismo periódico, aparece una declaración de la Comisión Política del MAPU, en la que se expresa: “Sostenemos de entrada que las FF.AA., están llamadas a jugar un papel positivo en el proceso de desarrollo de nuestra independencia nacional, de perfeccionamiento de nuestra democracia y de construcción del socialismo en nuestra patria... el desarrollo de las tareas de liberación nacional acercará ineluctablemente al pueblo y a sus fuerzas armadas y fundidos en el hacer patria, se convertirán en un muro infranqueable para los enemigos de Chile....Creemos que en esta materia cualquiera analogía simplista con el papel que en otros procesos revolucionarios jugaron otras fuerzas armadas puede conducir a conclusiones equivocadas. Igualmente un análisis teórico esquemático sobre el papel del Estado y sus aparatos armados en las sociedades clasistas a través de la historia, puede llevar a enfoques dogmáticos, que liguen de manera mecanicista las clases dominantes a sus instrumentos institucionales de dominación....El hecho fundamental es que nuestras FF.AA., han demostrado en la

práctica una consecuencia impecable con la letra y el espíritu de sus tradiciones ahora que la burguesía, tanto tiempo dominante, ha sido desalojada definitivamente del gobierno". ¡Y hacía pocos meses que el MAPU se había declarado marxista-leninista!

A fines de ese mes, el Comando Político Nacional de la Unidad Popular, declara: "La Unidad Popular está consciente de que la mejor defensa del Gobierno Popular reside en la actitud vigilante y combativa de las masas y en la firmeza de las tradiciones democráticas y profesionales de las FF.AA., y Carabineros. Sin perjuicio de lo anterior, la Unidad Popular verá el modo de perfeccionar e impulsar los proyectos del Ejecutivo que aumentan la dotación humana y material de Carabineros e Investigaciones". (7)

El propio Presidente de la República, Salvador Allende, fue una de las principales víctimas de estos planteamientos absurdos y mentirosos acerca de la "vía pacífica" al socialismo y acerca del carácter "profesional", "democrático" y "constitucionalista" de las FF.AA., reeditados de viejas tesis oportunistas por los dirigentes soviéticos y repetidos como papagayos por sus agentes en Chile. Mantuvo y difundió, hasta el día de su heroica muerte, momento en que todavía confiaba tener el apoyo de algún sector leal de las FF.AA., la confianza en que podía contar con ellas. Fué víctima de este trágico engaño (para él y para el pueblo de Chile), debido a su débil formación marxista, que él mismo reconocía con honestidad; a su experiencia y tradición como líder legalista parlamentario; y, a la influencia que, junto con los dirigentes del "PC", ejercía sobre sus ideas una organización eminentemente burguesa como la Masonería, en la que ocupaba un alto cargo.

Pese a que con su actitud postrera demostró que no era precisamente el valor para defender sus convicciones lo que le faltaba, hay numerosos testimonios, así mismo, de cómo había sido influido por las venenosas ideas de las tesis anti-marxistas, sembradas por decenios por los falsos "comunistas". Verdaderamente lograron convencerlo, con la farsa del "marxismo creador" inventada por Jruschov para vender las más añejas y podridas tesis oportunistas, que Chile inauguraba por primera vez en la historia, un nuevo camino hacia el socialismo. En la ceremonia realizada a comienzos de noviembre en el Estadio Nacional (que se transformaría irónicamente años después en campo de concentración de la Junta Militar), con motivo de asumir la Presidencia de la República, señala: "Chile inicia su marcha hacia el socialismo sin haber sufrido la trágica experiencia de una guerra fratricida. Y este hecho, con toda su grandeza, condiciona la vía que seguirá este gobierno y su obra transformadora. La voluntad popular nos legitima en nuestra tarea. Mi gobierno responderá a esta confianza haciendo real y concreta la tradición democrática de nuestro pueblo". (8)

Y a fines de noviembre de ese año, hablando en el Pleno del CC. del llamado Partido Comunista de Chile, dice: "Lo que hemos hecho y conseguido en Chile no se ha obtenido hasta ahora en otro país, capaz de conquistar el poder por los cauces legales para iniciar la revolución. Sólo lo ha conseguido en este continente y en el mundo el pueblo de Chile". (9)

Posteriormente, el 21 de mayo de 1971, en su primer Mensaje ante el Congreso Pleno, dirá frente a los representantes de los que trabajan ya activamente para derrocarlo: "Como Rusia, Chile, se encuentra ante la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista: la vía revolucionaria nuestra, la vía pluralista anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada... Una vez más la historia permite romper con el pasado y construir un nuevo modelo de sociedad, no sólo donde era teóricamente más previsible, sino donde se crearon las condiciones más concretas para su logro. Chile es hoy la primera nación de la tierra llamada a conformar un segundo modelo de transición a la sociedad socialista". (10)

Hasta el final de su gobierno, además, realizó elogios a las FF.AA., y se opuso terminantemente a que el pueblo se armara contra los golpistas. En marzo de 1971, por ejemplo, sostenía ante los campesinos de la provincia de Cautín: "Lo he dicho, lo sostengo y lo reafirmo: el Gobierno Popular se ha comprometido, y esa es la palabrada empeñada al país, que no habrá en Chile más Fuerzas Armadas que la fuerza de los institutos armados del Ejército, Marina y Aviación y la Fuerza de Carabineros. El pueblo no necesita otra manera de defenderse que su unidad y el respeto a las Fuerzas Armadas de la Patria". (11)

El 6 de octubre de ese mismo año, reiteró: "En el país no hay más Fuerzas Armadas que las que establece la Constitución Política, es decir, la Armada, el Ejército y la Fuerza

Aérea. Por lo tanto, todo grupo armado que trate de actuar, está creando problemas al gobierno". Señaló luego: "que se han dando instrucciones terminantes para que apenas sean detectados estos grupos armados, pasen a los Tribunales para ser juzgados por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Agregó que el gobierno actuará implacablemente, cualquiera sea el nombre o el apellido político de las personas que se vean implicadas en maniobras de este tipo".

El 20 de marzo de 1971, Allende, opina ante los corresponsales extranjeros: "Las FF. AA., chilenas son fuerzas profesionales... esas fuerzas armadas profesionales, que tienen capacidad técnica, solvencia moral a lo largo de toda nuestra historia, deben desempeñar un rol de importancia en todo el proceso de desarrollo económico de Chile. Deben estar vinculadas al proceso del progreso nacional.... Yo no las halago. ¿Por qué? Porque ellas tienen la dignidad de su propia responsabilidad. Las Fuerzas Armadas de Chile son Fuerzas Armadas profesionales, respetuosas de la Constitución y de la Ley y yo, por disposición de la Constitución, soy el generalísimo de las FF.AA., chilenas y ejerzo esa función en un diálogo con ellas, que es un diálogo al servicio de Chile y del pueblo". (13) Dos días después señalaba: "Las FF.AA., son el pueblo con uniforme y como generalísimo de ellas, me siento orgulloso de su pasado, presente y futuro al servicio de la Patria". (14)

A fines del mes de mayo, El Siglo, publica la clase Magistral que Allende improvisó en la Universidad de Concepción. Allí muestra que en el fondo era consciente de la contradicción que existía entre las ideas de los falsos "comunistas" que ha hecho suyas y el marxismo. "Yo destaco, dice, y lo hago aquí con vigor y patriotismo, la actitud de las FF. AA., de Chile y Carabineros, tradicionalmente ustedes lo saben y me parece incesario repetirlo. Ustedes han leído como yo el libro de Lenin "El Estado y la Revolución". Yo lo he ojeado demasiadas veces en mi vida y sé la concepción teórica que tienen de las fuerzas armadas los revolucionarios, los que como Lenin escribieron ese libro. Pero Chile está viviendo una etapa en que se demuestra con claridad meridiana, como son distintas nuestras Fuerzas Armadas. Ellas son Fuerzas Armadas profesionales, y en la correlación de fuerzas, el hecho de que yo sea Presidente de Chile es precisamente por la lealtad de las FF.AA., y Carabineros y debido a la voluntad popular y al pueblo". Más adelante señaló: "Hay también millones de seres humanos que miran la experiencia chilena con apasionado interés. La miran fundamentalmente después de los hechos ocurridos en este continente, en donde muchos pensaron, que la única posibilidad era el 'foquismo', el brazo armado, la insurgencia y el ejército popular. ¿Me van a negar ustedes que son doctrinarios, que hay países socialistas en que el sesenta por ciento de la tierra está en manos privadas, como ocurre en Yugoslavia, Polonia y en Rumania? Y son países socialistas, compañeros".....(15)

Posteriormente, el 20 de agosto de 1971, hablando en la ceremonia de Juramento de la Bandera en el Regimiento Tacna, Allende, señala: "El lunes de la próxima semana, en cumplimiento de una obligación grata, recorreré diversos países de América Latina. Llevaré a esos países latinoamericanos el saludo cariñoso y fraterno del pueblo de Chile. Llevaré también a ellos con orgullo de chileno y de Generalísimo de las Fuerzas Armadas de la Patria, que Chile puede estar seguro porque tiene fe y confianza en sus Fuerzas Armadas, herederas de nobles tradiciones; Fuerzas Armadas profesionales, respetuosas del Poder Civil, emanado de la voluntad popular, que tienen el anhelo que siempre ha cumplido de ser cada vez más chilenos al servicio de Chile". (16)

Pese a conocer ya las actividades sediciosas que se realizaban en el interior de las Fuerzas Armadas y habiendo abortado ya dos complots militares, el Presidente Allende, todavía en los dos últimos meses de su gestión, se sigue aferrando a la ilusión en torno a la lealtad de las FF.AA. El 11 de agosto de 1973, cuando toma juramento al nuevo gabinete, que ha debido formar con los Comandantes en Jefe de las FF.AA., en un vano intento por detener la ofensiva final de la oposición, el Presidente Allende señala: "Y debo frente a la nación, reiterar lo que siempre he dicho: en este país no habrá más FF.AA., que las que establece la Constitución y la Ley. En este país no habrá ejército paralelo. En este país se mantendrá la verticalidad del mando (el Comandante en Jefe de las FF.AA., era ya Pinochet, que preparaba febrilmente el golpe de Estado). En este país las FF. AA., Carabineros e Investigaciones, han escrito en la historia del desarrollo democrático su lealtad y su acatamiento al poder civil. Por eso el gobierno rechazará toda tentativa de infiltración

subversiva en las FF.AA., Carabineros e Investigaciones". Y agregó una vez más, expresando más sus deseos que la realidad: "Las FF.AA. han estado y estarán en el gobierno.... Necesitamos un gobierno afianzado en la fuerza moral y en la decisión de hacer respetar la Constitución y la Ley, que fortalezca las funciones del Estado. Y, ¿que mejor que un gabinete en el que estén representados las FF.AA., la Administración y los Trabajadores?" (17)

Por último, el 6 de septiembre de 1973, a sólo 5 días del golpe de Estado, el Presidente Allende todavía sostenía: "El gobierno ha insistido en que no puede deformarse la realidad chilena con un falso antagonismo entre el pueblo y las FF.AA., instituciones estas que deben mantener su integridad y profesionalismo para cumplir con las elevadas responsabilidades que imponen la defensa y la seguridad nacionales". (18)

3.- Especulación Internacional con la "Vía Chilena".

El engendro oportunista ensayado por los soviéticos en Chile a través de la dirección "sovietincha" del "PC", fue exhibido mundialmente como un ejemplo de comprobación de la justeza de las tesis de la "vía pacífica" al socialismo, formuladas en la URSS a partir del XX Congreso del PCUS. Al parecer Chile, estaba condenado a servir como conejillo de indias de sus ensayos de dominación a ambas super-potencias. Primero sirvió de país piloto para el ensayo de la política norteamericana llamada de "Alianza para el Progreso" y luego, a los intentos soviéticos de generar un capitalismo de Estado, disfrazado de socialismo, en los marcos del Estado burgués. De allí que, no bien resultó elegido Allende, todos los "PC" pro-soviéticos y personalidades ligadas a ellos comenzaron a utilizar esta experiencia de tan triste fin, en provecho de la política que preconizaban en sus países. Después del golpe de Estado en Chile, la necesidad de ocultar el fracaso rotundo de las tesis soviéticas, explica en buena medida la gigantista campaña emprendida por la URSS y sus acólitos para denunciar las brutalidades de la Junta Militar chilena, "sensibilidad" que no demostraron ante los golpes militares y la represión en Indonesia, Iran, la India, Camboya bajo Lon-Nol y, recientemente, frente al golpe en Argentina. Entregaremos a continuación algunos antecedentes parciales de cómo fue utilizado el triunfo electoral de Allende, para promover las tesis anti-marxistas en otros lugares del mundo.

Poco después del triunfo allendista, en el periódico del "PC" revisionista dominicano "El Popular", se señala: "El triunfo de Allende confirma el acierto de la línea trazada por el PC de Chile en el sentido de que en ese país se daban las condiciones para que las fuerzas armadas revolucionarias antiimperialistas y antifeudalistas, ganaran el poder en elecciones, sin recurrir de entrada a la violencia armada, lo cual harían sólo en el caso de que fuera necesario para defender la victoria del pueblo frente a la violencia de la reacción. Esa victoria -concluyen- representa un serio revés para los grupos ultraizquierdistas, que negaban esa posibilidad". (17)

En Caracas, Venezuela, escribe Federico Alvarez, en la revista del "PC" de dicho país llamada "Deslinde": "Lo grueso, lo intragable para muchos fue la formulación táctica esencial de ese programa: En Chile -dijo el PC- la victoria pasa por la vía electoral. Tenemos un cuerpo de tradiciones, una armazón institucional y una urdimbre de organizaciones de masas que nos permiten intentar la conquista del poder sin necesidad de recurrir a las armas, mientras el adversario respete las normas del juego. Ellos exigieron el derecho a crear una línea derivada de sus circunstancias, cuando muchos insistían en imponerles esquemas ajenos. El tiempo ha demostrado que ellos tenían razón". (18)

Por su parte, el dirigente revisionista argentino, Benito Marianetti, escribe: "Ahora más que nunca hay que defender a las nuevas fuerzas triunfantes del país hermano. Y la mejor forma de hacerlo es dando a conocer a nuestro pueblo y a nuestros trabajadores qué es lo que esas fuerzas se proponen, cuál es su programa, cómo pretenden alcanzar sus objetivos y cómo alcanzaron el poder".(19)

En Ecuador, habla Edmundo Rivadeneira, a nombre de los falsos comunistas: "En lo que se refiere al triunfo, me siento feliz por mi ideología y porque viví en Chile 4 años este país es para mí como la segunda patria. Creo que la victoria chilena confirma la necesidad de que la acción revolucionaria debe ceñirse siempre a las condiciones objetivas y reales de cada pueblo. Demuestra que es perfectamente posible llegar al gobierno sin enca-

sillarse en una política dura, unilateral que, en mi opinión, más bien ahuyenta a la gente y debilita los movimientos revolucionarios". (2)

En el XX Congreso del "PC" de Uruguay, es Voldia Teitelboim, quien toma la palabra esgrimiento -como todos los revisionistas- pretendidas particularidades del proceso chileno, para desconocer principios básicos del marxismo, estampados ya en el Manifiesto Comunista. Afirma allí: "se había sostenido por diversos críticos del movimiento comunista la imposibilidad absoluta de la conquista del poder por una camino que no fuera el de las armas. Tal vez en diversos países esta tesis sigue siendo válida. El error consiste en absolutizarla, convirtiéndola en dogma obligatorio, general. Sobre esta materia que ha constituido el núcleo polémico agudo dentro de muchos movimientos revolucionarios, se arguía por algunos que entre otras razones quedaba demostrada su imposibilidad por el hecho de que nunca antes se logró. Creemos que un pensamiento de esta índole niega la esencia dialéctica del marxismo y esa Ley sin la cual la vida ni las transformaciones sociales serían concebibles, la Ley del Cambio. Adolece este método de un espíritu metafísico. Se aferra a los esquemas del pasado adicto al lema petrificante y momificador de que no puede ser lo que todavía no ha sido". (21) Es preciso decir que este original teórico, que el día mismo del golpe realizó declaraciones en Italia llamando a confiar en las FF.AA., que incluso actualmente, después de todo lo ocurrido como consecuencia de la línea anti-marxista que impulsaron, ha tenido el cinismo o la estupidez de sostener por radio Moscú, que "los tres años que sobrevivió el gobierno de Allende, demuestran que la vía pacífica era factible en ese país". En casos como este, resulta difícil saber si es justo polemizar en su contra o, simplemente tratarlo como enfermo mental.

No obstante, el ejemplo de la "vía chilena al socialismo", no sólo fue agitado en América Latina en beneficio de líneas oportunistas, que han facilitado la implantación de dictaduras militares en casi todo el continente. También ha sido utilizado ampliamente en Europa y otros lugares del mundo.

El propio Corvalán "teoriza" en el N°10 de la Revista Internacional de Praga, donde señala: "La constitución el 3 de noviembre último, del gobierno presidido por el socialista Salvador Allende e integrado por todas las colectividades que forman el bloque de la UP, abre una nueva etapa en la historia de Chile, representa un cambio transcendental en los rumbos del país. La patria de O'Higgins y Recabarren toma el camino de las profundas transformaciones revolucionarias, la senda de la liberación nacional y social, de una democracia avanzada y del socialismo.

Y prosigue: "Este clima de reconocimiento y solidaridad latinoamericano, más el hecho de que este triunfo popular se ha logrado por caminos que nadie puede cuestionar de frente y, por cierto, la gravitación de las fuerzas de la democracia y del socialismo en el plano mundial, explican que el imperialismo yanqui y los reaccionarios de toda América Latina no tengan más que aceptar la nueva situación que se ha creado en Chile".

Luego de "aceptar" a nombre del imperialismo norteamericano y de los reaccionarios claro está en su imaginación, lo ocurrido en Chile, prosigue dejando en claro de donde provino la inspiración de su proyecto que habría de conducir al fascismo:

"El 'caso chileno' viene a demostrar que los caminos y métodos del proceso revolucionario tienen en cada país sus propias particularidades, y prueba que no es precisamente descabellada la tesis que proclamó el XX Congreso del PCUS, y que hizo suya el Movimiento Comunista en su Conferencia de 1960, en el sentido que la clase obrera y demás fuerzas que luchan por el socialismo pueden conquistar el poder y realizar los cambios revolucionarios sin que sea obligatorio recurrir a las armas.... En esta lucha -agrega- el partido y las juventudes comunistas han tenido que hacer frente a los enemigos abiertos y encubiertos, a los reaccionarios declarados y a los que se encubren con su ropaje ultra-izquierdista. Estos últimos propagaron la consigna de 'fusil en vez de votos' y se prodigaron en toda clase de diatribas contra los comunistas: 'apoltronados', 'reformistas', 'conservadores', 'tradicionalistas', 'aburguesados', 'apegados a los sillones parlamentarios', 'defensores del status', son sólo algunos de los calificativos que recibieron algunos dirigentes y militantes del partido.... pero todo resultó inútil. El partido y las juventudes comunistas, plenamente convencidos de la justeza de su línea, se mantuvieron siempre firmes y activos, cohesionados como un solo hombre" (22) Júzguese ahora quien tenía razón. Si los que les adjudicaron esos merecidos (y todavía demasiado blandos) adjetivos o Corvalán y los su-

yos, que mantuvieron inalterable su línea oportunista hasta el fracaso completo y la mantienen aún hoy, después de ese fracaso.

En Francia, el dirigente socialista Claudio Estier, saca lecciones de lo de Chile para toda Europa, cuando afirma: "La experiencia chilena es en cierto modo una lección para los europeos, a los que ha enseñado que la izquierda puede llegar al poder por la vía democrática. Para nosotros es una gran satisfacción comprobar que la unión de la izquierda aplicada a un combate dentro de la legalidad conduce a la victoria. Lo sucedido en Chile ha reforzado grandemente nuestra convicción de que hay que combatir en la vía legal, sobre todo en países como Francia e Italia, donde no se soportaría la violencia. Allende insistió, cuando me recibió, en que tuvo que luchar 18 años para llegar a la presidencia. Me dijo que era necesaria la paciencia en el combate para lograr la victoria de la izquierda". (23)

En diciembre de 1970, el diario "El siglo", reproduce las opiniones de Gunther Jahn, Primer Secretario de la Juventud Libre Alemana de la RDA. Este joven burócrata revisionista, señala: "El triunfo del pueblo chileno comprueba inequívocamente que el poder político del imperialismo y de la reacción interna puede ser derrocado en una dura lucha de clases pero por la vía pacífica, sobre la base de la unidad de todas las fuerzas anti-imperialistas del pueblo". Y prosigue dando lecciones de "marxismo creador": "Este ejemplo demuestra, que en la unidad de acción de los comunistas, los socialistas, los socialdemócratas, independientes, etc. radica la fuerza y el poder invencible del pueblo. Igual que la historia de nuestro pueblo y de la RDA, confirma el triunfo del pueblo chileno, que la tarea principal en la lucha contra el imperialismo y la reacción interna, contra el colonialismo y el neocolonialismo, por el progreso social en los Estados capitalistas y los países en vías de desarrollo consiste en forjar la unidad de todas las fuerzas democráticas antiimperialistas". Y, luego, saca conclusiones para el mundo entero:

"Con eso la UP ha trazado un camino ejemplar no solamente para las transformaciones revolucionarias en los países latinoamericanos, sino también para otros países de Asia, África y de Europa imperialista".

Finalmente, concluye, al igual que Corvalán, señalando el origen de la línea que ha conducido al "triunfo" en Chile: "De este modo se ha comprobado impresionantemente e incorruptiblemente la validez de la estrategia y la táctica de la lucha de clases en nuestra época elaborada por los partidos comunistas y obreros en Moscú en 1960". (24)

Los soviéticos, en cambio, se expresan con mayor cautela, pues la UP no cumple por completo el camino que han señalado al "PC" chileno de llegar al gobierno en conjunto con la Democracia Cristiana. Rasnitdov Sharaf Resnidovich, miembro suplente del Buró Político del PCUS, en la Sesión Plenaria del CC. del Partido Socialista de Chile, celebrada en enero de 1971, dirá: "La llegada al poder en Chile del gobierno popular es un serio golpe a las posiciones del imperialismo norteamericano y de la reacción, no sólo en Chile, sino también en todo el continente americano". (25) En ese mismo Pleno, Walter Román, miembro del CC. del "PC" de Rumania, sostiene: "La experiencia de ustedes, demuestra una vez más, que la realización de la unidad de acción entre el PS y el PC, la unión de todas las fuerzas populares, democráticas, creadoras de la nación, representan el motor, la garantía de las victorias en la lucha por la democracia, el progreso social y la independencia nacional. Los éxitos obtenidos por un camino propio, abierto por Uds., que han tenido un eco tan profundo en todos los continentes y países, demuestran que las cosas están cambiando en el mundo, ya que, bien es, camaradas, que estén cambiando. Por esta demostración histórica -concluye- expresamos nuestros agradecimientos al pueblo chileno, a sus fuerzas más progresistas, llenos de emoción y reconocimiento". (26)

En Francia, François Mitterand, sostiene a raíz del triunfo de Allende: "Existe en Chile una experiencia política original, que indiscutiblemente encamina al país hacia el socialismo (27) Y en otra ocasión: "El régimen chileno constituye la experiencia más aproximada de algo que podría realizarse en Francia". (28)

Opiniones semejantes se registran en los órganos de prensa de la izquierda tradicional europea. En Francia, por ejemplo, el órgano central del PS, editado el 7 de abril de 1971, sostiene comentando lo de Chile: "Este es un ejemplo que entristece profundamente a todos los reaccionarios, ya que descubren que puede llegar un momento en que el pueblo puede elegir el socialismo por la vía democrática; que muestra, al mismo tiempo, que el

fatalismo de la revolución violenta no existe; y que recalca a los socialistas lo que el pueblo espera de ellos. No se trata de la copia mejorada de la gestión de otros, sino la opción más audaz dentro de las reglas democráticas”.

“Chile no es Francia -concluyen- y está lejos de Francia. Sin embargo, su experiencia merece nuestro examen y reflexión. Ha sido un gran problema desde hace algunos años la reconciliación del socialismo y de la libertad, si es que se puede pensar en un socialismo sin libertad. Chile, proclama, en todo caso, la profunda identidad de ambos”. (29)

El 6 de mayo de 1971, *El Siglo*, reproduce un artículo del “*Nouvel Observateur*”, en el que se sostiene: “Chile es el único país de América Latina, donde se puede decir que el poder socialista -confirmado una vez más en las últimas elecciones- se consiguió no con el fusil, sino con la papeleta del voto”.

El 29 de octubre, *El Siglo*, reproduce opiniones del diputado italiano Lelio Basso, aparecidas en *L'Unita*, donde afirma: “Tengo la impresión de que el experimento chileno tiene importancia mundial. Es la primera vez que los partidos obreros llegan a tener en la mano el gobierno mediante la utilización de los instrumentos de la democracia burguesa, pero declarando que quieren utilizar dichos instrumentos para hacer el socialismo”.

Al mes siguiente, el 25 de noviembre, René Andrieu, Redactor Jefe del periódico “*L'Humanité*”, declara: “Sin lugar a dudas, Chile no es Francia. Sin embargo, lo que ahí sucede, concierne a los hombres progresistas del mundo entero. Y más particularmente quizás a los de nuestro país. Porque la experiencia de la Unidad Popular involucra cierto número de enseñanzas en las que puede inspirarse la izquierda francesa.... El hecho de que la lucha armada haya sido indispensable en Cuba para conquistar la independencia, que lo sea quizás mañana en otro país del continente, no significa que sea obligatoria siempre y en todo lugar. Es preferible tratar, si las condiciones lo permiten, de llegar al poder por la vía electoral”.

Por cierto, ninguno de estos panegiristas de la “vía chilena al socialismo”, ha sacado lecciones correctas de lo ocurrido en Chile a raíz del golpe de Estado, ni menos les ha servido para adoptar las correctas posiciones marxistas y hacer una campaña mundial en torno a la justeza de esas ideas, como lo hicieron en torno al falso camino impulsado por la dirección del “PC” en Chile. Por el contrario, han levantado, en particular los dirigentes de los partidos “comunistas” pro-soviéticos, la línea aún más derechista propiciada por los cabecillas del social-imperialismo como modo de llegar al gobierno en el área de influencia norteamericana: el forzar la alianza de las fuerzas políticas pro-yankis con los bloques de la izquierda tradicional, rechazando la disputa frontal de estos últimos con dichas fuerzas pro-yankis en la postulación electoral por el gobierno. Los campeones de esta posición en Europa son los dirigentes de los partidos “comunistas” italiano, francés y español. Carrillo, en España, propicia la alianza nada menos que con los monarquistas; Berlingüer, en Italia, no obstante haber obtenido en 1976 casi la mitad de los votos, se niega a formar gobierno con los socialistas y otras fuerzas y sostiene que esperará la decisión de la DC de gobernar con ellos. Marchais, por último, en Francia, habla de un frente del pueblo, polemizando con Mitterand, quien plantea un frente “de la izquierda”. Esta derechización aún mayor a la que los ha conducido el fracaso de la experiencia chilena, se expresa, además, en un abandono ya abierto y público del concepto básico del marxismo de la dictadura del proletariado, en la aceptación de los vínculos con el bloque militar establecido por EE.UU. a través de la OTAN y, hasta en críticas a los dirigentes soviéticos, por la feroz dictadura que ejercen en su país. Pese a estas discrepancias más fingidas que reales con los soviéticos, son sin embargo, los más fieles exponentes de su estrategia de infiltración en los gobiernos del bloque occidental, estrategia que no fué capaz de cumplir el “PC” chileno, lo que explica el magro apoyo de los soviéticos al gobierno de la Unidad Popular.

LA DISPUTA DE LAS SUPER-POTENCIAS POR CHILE

SEGUNDA PARTE
LA DISPUTA DE LAS SUPER-POTENCIAS POR CHILE

CAPITULO IV

LA ESTRATEGIA DEL SOCIALIMPERIALISMO EN CHILE

Tanto la experiencia de la UP como su desenlace, resultan incomprensibles de comprender de un modo completo y cabal al margen de la política internacional —y más concretamente, de la pugna existente entre las dos superpotencias mundiales —Estados Unidos y la Unión Soviética— por repartirse el mundo en esferas de influencia y dominación. Dicha disputa se verifica por doquier en los terrenos ideológico, político, económico y militar dependiendo el énfasis particular en alguno de esos aspectos o en el conjunto de ellos, del país de que se trate (de su importancia estratégica, política o económica) y del momento histórico concreto. La pugna existente, por ejemplo, entre los Estados Unidos y la Alemania nazi y sus aliados en la década del 40, llevó a un entendimiento transitorio del imperialismo norteamericano con la URSS. Esto, en Chile, se tradujo en la posibilidad de una actuación legal del P“C” prosoviético e incluso, de una alianza electoral de éste con los partidos socialdemócratas, como el Partido Radical, tradicionalmente al servicio del imperialismo yanqui. Posteriormente, en cambio, las agudas contradicciones de postguerra, entre EEUU, y la URSS y el comienzo de la “guerra fría” entre ambos, motivaron la ruptura de esa alianza por parte del Partido Radical, la privación de sus derechos ciudadanos a los militantes del P“C” y la persecución contra ellos.

1.- La implantación del capitalismo de Estado.

El objetivo final de la estrategia soviética en países como los de América Latina, no difiere del modelo que la URSS ha impuesto “manu-militari” en los que integraban el Pacto de Varsovia. Es decir, un capitalismo de Estado, comandado por una burguesía burocrática, que continua bajo esa forma la explotación que ejercía la vieja burguesía (a veces aliándose con algunos sectores de ella) y que se presenta demagógicamente como “socialismo”. Estas nuevas burguesías burocráticas, son constituidas principalmente por los cuadros de los partidos “comunistas” pro-soviéticos, que juegan —antes y después de la conquista del poder— el papel de “quinta columna” de la burguesía burocrática social-imperialista que gobierna en la URSS, y facilitan su expansión tanto militar, como económica, política e ideológica. Esto no significa que en el proceso de expansión de dichas burguesías burocráticas locales (como lo demuestra el ejemplo de Checoslovaquia), no puedan surgir contradicciones con el socialimperialismo soviético. La concentración de poder económico y político que otorga el capitalismo de Estado, así como cierta capacidad de centralización y planificación de la economía y el pretexto demagógico de que se está “construyendo el socialismo”, permiten ejercer una férrea dictadura de corte fascista sobre las masas populares. Esta dictadura ha llegado a tal extremo en la URSS y en los países sometidos a ella que, incluso, partidos “comunistas” pro-soviéticos como el italiano, el francés y otros, si bien por razones electorales, se han visto forzados no sólo a reconocerla, sino hasta “condenarla” públicamente.

En tales países “socialistas”, existent todas las características del sistema capitalista, enmascaradas bajo la ficción jurídica de una propiedad estatal o de “todo el pueblo”. El productor directo está despojado de los medios de producción, es un asalariado, su fuerza de trabajo es una mercancía que se vende a un precio negociado por el empleador, representante de la burocracia estatal. La alta burocracia acumula fabulosas ganancias, repartiéndose la plusvalía general creada por los obreros. Para apoderarse de ella, no sólo conservan inmensas diferencias en las remuneraciones, sino que, por la necesidad de mantener la ficción de que no existen utilidades y ganancias a título individual, deben echar a

mano para enriquecerse a los procedimientos más torcidos y corruptos: coimas, mercado negro, desfalcos, empresas clandestinas y otros muchos procedimientos que son moneda corriente en dichos países. Existen, por último, los privilegios que allí otorga el ejercicio mismo del poder, a través del cual se pueden reclamar —sea por adulación o por el temor— servicios, dádivas, franquicias y hasta trabajo forzado. Estos mecanismos operan con particular fuerza en la URSS, debido a la enorme cantidad de riquezas de las que se apodera allí la burguesía monopolista de Estado, debido a su carácter social-imperialista. Existen antecedentes de que tan solo un miembro del Comité Central del PCUS, realizó desfalcos por medio millón de rublos, es decir, el equivalente a los ingresos de un obrero con salario medio durante cuatro siglos. (30)

Las relaciones que mantiene la URSS con los países que forman parte del Consejo Económico de Ayuda Mutua (COMECON) y del Pacto de Varsovia, constituye un índice de las relaciones que aspiran establecer paulatinamente, con el resto de los países que caigan bajo el control de burguesías burocráticas pro-soviéticas. En ellos rige la teoría de la “soberanía limitada”, propalada por los dirigentes soviéticos con motivo de la invasión de Checoslovaquia. Es decir, tanto su política externa, como interna está sometido a los dictados de los dirigentes de la URSS, quienes, con el pretexto de defender un sistema “socialista”, que hace mucho que ya no existe allí y que por lo mismo, el pueblo no tiene ningún interés en defender, se abrogan el derecho a intervenir militarmente. Incluso ya se proyecta suprimir hasta los aspectos formales de la soberanía política y algunos teóricos socialimperialistas, hablan de la necesidad de “una superestructura política internacional de esos países”, o sea, el gobierno directo de ellos por los soviéticos con la pantalla de algunos títeres locales.

El vasallaje político de esos países sometidos a la URSS, no es más que el instrumento de una feroz explotación de carácter imperialista sobre ellos. Esta explotación se ejerce, debido al dominio militar soviético sobre dichos países, utilizando del modo más descarnado todos los procedimientos habituales empleados por las naciones imperialistas: compra a bajos precios de las materias primas, venta a elevadísimos precios (superiores a los del mercado mundial) de los productos manufacturados, inversiones en sus empresas para obtener utilidades, préstamos a alto interés, obligación de ellos de invertir en empresas soviéticas, etc., etc... Para mejor ejercer las diversas formas de explotación de estos países, la URSS, a nombre de “la división internacional socialista del trabajo” les prohíbe desarrollar determinadas ramas de la producción, y los obliga a producir aquello que necesita la industria soviética. Más aún, su desarrollo industrial deformado, depende por completo de los suministros soviéticos en un 96 por ciento para el petróleo, en un 97 por ciento para la hulla, en un 80 por ciento para el hierro y hasta en los 2/3 de los cereales panificables. No contentos con esto, los burócratas monopolistas de la URSS, proyectan ya anexarse por completo la economía de esas naciones, sosteniendo al respecto que: “Las fronteras de los Estados nacionales son estrechas para el desenvolvimiento de las fuerzas productivas. Es preciso, instaurar un sistema de propiedad común en el seno de la gran comunidad”. (31) De esta manera la burguesía monopolista y social-imperialista soviética se dispone a engullir totalmente la economía de esos países, en tanto que en su propio territorio comparte la explotación del pueblo con grandes trusts internacionales, a los que les ha permitido invertir en la URSS, tales como: la Krupp alemana, la Fiat de Italia, la Renault francesa, así como consorcios japoneses y norteamericanos.

Las estadísticas indican que entre 1955 y 1973, la URSS, mediante intercambios de valores desiguales, causó a 5 países de Europa oriental, una pérdida de 19 mil millones de dólares. La exportación de capitales al COMECON, entre 1954 y 1974, bajo la sola forma de “asistencia económica”, supera los 10 mil millones de dólares, jactándose los soviéticos de tener ingerencia en más de 1300 empresas de dichos países. Siguiendo el modelo del imperialismo norteamericano, ya han instalado en el seno del COMECON, un superbanco, el Banco Internacional de Inversiones, en el que el 40 por ciento de los capitales son soviéticos y mediante el cual realiza la explotación y el control financiero de las naciones de Europa oriental que les están sometidas; así como han instalado a partir de 1972, trusts económicos multinacionales, como: “Intertextilmach” e “Interatomenegro”.

El social-imperialismo soviético ha extendido también los tentáculos de su explotación imperialista hacia las naciones del Tercer Mundo y espera lograr allí las condiciones políti-

cas, que le permitan aplicar los métodos que ejerce sobre sus vecinos del COMECON. De 1954 a 1972, la URSS exportó capitales a Asia, Africa y América Latina por más de 13 mil millones de dólares, interviniendo en alrededor de 1000 empresas de ellos y sacando de allí a bajos precios, más de 19 mil millones de dólares en productos básicos: azúcar, algodón, caucho, petróleo, minerales, etc. Al mismo tiempo, les ha vendido, entre 1955 y 1973, a altos precios, más de 16 mil millones de dólares en productos industriales, obteniendo en ese mismo lapso, más de 11 mil millones de dólares de ganancias tan sólo por intercambios desiguales. No contentos con estas formas tradicionales de explotación de todo imperialismo, comienzan ya a sugerir, como lo han hecho en el N° 8 de la revista "Comunista" de 1973, que la "nueva forma de cooperación" a la cual debe darse prioridad de una manera "más y más resuelta", pues la de crear, con la URSS, "empresas por acciones", a objeto de "profundizar gradualmente la especialización y la cooperación en la producción" y "tomar parte gradualmente y paso a paso en la división del trabajo socialista". Agregando, sin pudor, que el plan de "integración económica" del COMECON está abierto a los países en vías de desarrollo. Así, exhiben sin tapujos sus planes futuros de tipo colonialista con respecto al Tercer Mundo. (32)

No obstante, que los círculos dirigentes de que la URSS se esfuerza en conseguir por doquier sistemas políticos semejantes a los de los países del Pacto de Varsovia, que tan favorables resultan a sus intereses, los caminos tácticos que preconizan varían de acuerdo a la ubicación, que el país en cuestión ocupe en el contexto mundial, así como sus características internas. En países como los de Europa occidental, por ejemplo, donde existen poderosos intereses capitalistas aliados del imperialismo norteamericano, así como poderosas fuerzas social-demócratas al servicio de ambos, la penetración soviética a través de los llamados partidos "comunistas" que sirven su política, está concebida de modo gradual. No se trata allí —hoy por hoy— de disputar el gobierno a las fuerzas pro-yanquis, a través de un bloque cerrado de "izquierda". Lo que se intenta es forzar a dichas fuerzas a una alianza con los P"C", para llegar en conjunto con ellas al gobierno. La manera de forzarlos a co-gobernar con el P"C", consiste en acumular, pacientemente, influencia de masas y fuerzas electorales. Si el pacto es aceptado, la URSS, estará de hecho obligando al imperialismo norteamericano a compartir su ingerencia en dichos países con ella, en sectores del mundo que corresponden a la esfera de influencia norteamericana. Entre tanto, el campo de países bajo control soviético se mantendrá cerrado a la influencia norteamericana y firmemente controlado por el social-imperialismo. Si, en cambio, a los intentos de exigir un gobierno compartido, se opone un régimen fascista, su naturaleza represiva y anti-democrática, será utilizada para desprestigiar al sistema capitalista tradicional y al imperialismo y para acumular así fuerzas con vistas a reclamar la restauración de la democracia burguesa y poder recomenzar el proceso descrito.

Esta política, sin embargo, no es única ni homogénea para todos los lugares y circunstancias. Hay determinados países en que los soviéticos han utilizado intentos de golpes de Estado, como en Sudán o en China con Lin Piao, por ejemplo, o bien, la intervención armada como en Angola.

El carácter de la alianza con fuerzas populistas o social-demócratas pro-yanquis, que anhelan los P"C" establecer como escudo protector para llegar al gobierno, deriva de la misma naturaleza reaccionaria del régimen que pretenden implantar. La conquista del gobierno a través de un bloque de "izquierda" —como viene de confirmarlo el caso de Chile— tiende a dividir y polarizar las fuerzas y sólo puede ser defendido en contra del aparato armado de la burguesía tradicional y de la eventual intervención imperialista, movilizándolo y armando al pueblo, para destruir el aparato estatal burgués y preservar la independencia nacional. No obstante, regímenes del tipo de los que imperan en los países del Pacto de Varsovia y la reproducción de un sistema de explotación imperialista como el ejerce el social-imperialismo soviético sobre ellos, **son incompatibles con toda movilización popular revolucionaria**. Por otro lado, la URSS, no está en el momento presente, capacitada para imponerlos mediante la intervención armada, en lugares que son claves para el imperialismo norteamericano y que éste podría defender aún al precio de una guerra con la URSS. Por lo mismo, en el presente, el avance hacia el modelo "socialista" al estilo Europa oriental requiere, como primer paso, conservar contra el pueblo el aparato estatal burgués, reforzarlo avanzando hacia el capitalismo de Estado, e infiltrarlo con una relativa

tolerancia de las fuerzas burguesas tradicionales. Los elementos básicos de esta estrategia son: la conquista de una vasta influencia de masas por parte de los P“C” pro-soviéticos, aprovechando la crisis capitalista y practicando la demagogia; el esfuerzo por infiltrar las fuerzas armadas burguesas; y, el empeño por establecer una alianza con las fuerzas populistas o social-demócratas, que les disputan a vastos sectores populares y medios.

Frente a esta estrategia del revisionismo, cobra más importancia que nunca la idea formulada por Mao Tse-Tung, en consonancia con las tesis fundamentales de los clásicos del marxismo, cuando señaló: “sin un ejército propio, el pueblo nada tiene”. Para imponer el capitalismo de Estado, para subordinar al país a la explotación social-imperialista, se necesitan fuerzas armadas del tipo de las existentes en los regímenes capitalistas: ajenas y opuestas a las masas populares. Exactamente lo contrario de la concepción marxista, del pueblo mismo en armas. Por ello, para los falsos comunistas, es indispensable preservar las fuerzas armadas burguesas, ganarlas para su causa y/o reestructurarlas paulatinamente para ponerlas a su servicio. Jamás destruirlas mediante el pueblo en armas. Es sintomático, al respecto, el diálogo que sostuvo Jruschov en su última visita a Albania (antes del rompimiento entre ambos países y partidos), con un dirigente de ese país. Como Jruschov viera en su recorrido por el país, a los campesinos trabajando con su fusil a la espalda, preguntó como era posible que se permitiera la existencia de armas en manos de personas que no pertenecían a las fuerzas armadas. Se le respondió que en Albania el socialismo era defendido, no sólo a través del pueblo que participaba en el ejército, sino, del armamento del pueblo entero. Jruschov volvió a insistir, señalando que se produciría un grave problema si toda esa gente armada, se volvía contra el gobierno. El dirigente albanés le respondió, que para que eso ocurriera, el gobierno debería aplicar una política contra los intereses populares y que, en tal caso, era muy positivo que volvieran las armas en su contra. Jruschov no volvió a abrir la boca al respecto en todo el viaje.

La estrategia concebida por los dirigentes soviéticos para penetrar en los países de América Latina, es semejante a la que hemos descrito más arriba. Si bien estos países no tienen para el imperialismo norteamericano la importancia militar, económica y política que tiene Europa, ellos se encuentran vecinos a EEUU, y en ocasiones han sido calificados como su “patio trasero”. El gobierno norteamericano, por lo mismo, no parece estar dispuesto a permitir allí, sin emplearse a fondo para impedirlo, regímenes del tipo de los que ha creado la URSS en la Europa oriental. Por lo mismo, es aconsejable para la URSS, actuar también allí con cautela y paulatinamente, buscando penetrar sus gobiernos y Estados y las FFAA, que les sirven de soporte, a través de una alianza con las fuerzas políticas con arrastre de masas, que se les opondrán a instancias de los EEUU.

2.- La línea de alianza con el populismo pro-yanqui.

En Chile, por ejemplo, la estrategia diseñada por los dirigentes soviéticos de alianza del P“C” que ellos manipulan con fuerzas burguesas de amplia influencia en los sectores medios y en ciertas capas de trabajadores, es de larga data. Comenzó ya con los frentes populares y las alianzas con el Partido Radical (y otras fuerzas menores), cuando este era un partido realmente influyente. Con empeño verdaderamente masoquista buscaban estas alianzas pese a que los candidatos de este partido una vez elegidos a la presidencia de la República, les volvían la espalda, se olvidaban de todas sus promesas pre-electtorales, y hasta les perseguían fieramente. Posteriormente, desde que el PDC fue elegido por el Departamento de Estado como su favorito y se realizaron en él las inversiones necesarias para transformarlo en la primera fuerza política del país, los dirigentes del P“C”, no han cesado de esforzarse por lograr una alianza con dicho partido. Para tales dirigentes —pese a sus juramentos de fidelidad al PS— su alianza con estos, no es más que un medio para obtener la alianza con la DC, que les reclaman los dirigentes soviéticos.

Los antecedentes para demostrar lo anterior son muchos y muy variados, tanto antes como durante y después del gobierno de Allende. Aquí, en este capítulo, nos limitaremos a entregar algunas muestras de esta política, que antecedieron al gobierno de la UP. Ya con anterioridad a la elección presidencial de 1964, cuando la DC se perfila como favorita del gobierno norteamericano, comienzan los esfuerzos de Corvalán y los suyos por mar-

char unidos en esa elección. La dirección del P“C” (de eso fui testigo directo, como todos los que aun militabamos allí), realiza consultas en los organismos de base —a modo de sondeo para valorar la resistencia que produciría— acerca de la posibilidad de marchar unidos con la DC en la elección presidencial. Más aún, siendo Frei claramente el favorito de EEUU para su política llamada de la Alianza para el Progreso, Corvalán, con gran enojo de sus aliados del FRAP, le gestiona, siendo ya candidato a la Presidencia de la República, un viaje a la Unión Soviética. Al mismo tiempo y pese a la resistencia total que habían demostrado las bases del P“C” respecto a una alianza de esa especie, a comienzos de 1963, la Comisión Política de dicho partido declara: “Que hay algunos factores favorables para llegar a un reagrupamiento de fuerzas por la vía de un acuerdo entre la Democracia Cristiana y el FRAP”. El acuerdo, sin embargo, se frustra, pues a instancias de sus promotores norteamericanos, los dirigentes del PDC, realizan públicas declaraciones contra los “comunistas” y contra la URSS. Por otra parte, la dirección del P“C”, en cuyas bases ha nacido precisamente a fines de 1963 una oposición marxista-leninista, no se atreve a llevar más adelante las presiones destinadas a lograr la alianza con la DC.

Posteriormente, durante el gobierno de Frei, no obstante estar formalmente en la oposición, continúan en todas las circunstancias claves cooperando con dicho gobierno con vistas a lograr para 1970 la ansiada y exigida (por la URSS) alianza. No vamos a insistir aquí en lo que ya hemos señalado en el capítulo primero (ver páginas 12, 13 y 14) acerca de la vergonzosa traición a los intereses de los trabajadores, que realizaron los dirigentes del P“C” de la CUT y sus parlamentarios, en apoyo del gobierno de Frei, con motivo de los proyectos de reajustes de 1967-68 y 1969-70. Baste decir, que en esa ocasión se pusieron incluso a la derecha del Partido Radical. Asimismo, tuvieron una actitud de colaboración servil y repugnante con el gobierno de la DC durante el paro nacional que, presionada por las bases debió aprobar la dirección de la CUT (ver página 14), a fines del gobierno de Frei.

Pero, ya con anterioridad a estos hechos nos encontramos con que, Orlando Millas, miembro del Secretariado del P“C”, el año 1966, estando de visita en Cuba con motivo del aniversario del 26 de julio, salta enfurecido a polemizar públicamente nada menos que con su anfitrión, Fidel Castro, porque éste se atrevió en su discurso tradicional en esa celebración a criticar la ayuda económica que la URSS otorgaba al régimen pro-yanqui de Frei. En el mismo mes, pero al año siguiente, Corvalán, hace un llamado abierto a la DC, en un almuerzo que ofrece a los redactores políticos de prensa y radio. Allí señala: “El pueblo fue muy sabio, cuando no eligió a Allende en 1964, porque, pensamos nosotros ahora, habría sido difícil mantenerlo en el poder, dada la agresividad argentina, la situación brasileña, y la línea intervencionista agresiva de Estados Unidos”. Y agrega: “Nos parece que Gumucio (por aquel entonces presidente del PDC) podría suceder a Allende como candidato de la izquierda. Nosotros ya le hemos dicho al camarada Allende que no le seguiremos apoyando, porque es necesario que la próxima lucha presidencial sea con nueva cara”.

En 1967, surge en la DC, a raíz del fracaso que han experimentado en las elecciones de abril de ese año, una corriente que reclama una rectificación de la política del gobierno. Reunida ese mismo mes la Junta Nacional del PDC, se designa allí una Comisión Política Técnica, que debía elaborar una nueva estrategia política para la última etapa del gobierno freista, es decir para los años de 1967 a 1970. Dicha Comisión es presidida por Jaques Chonchol, Vicepresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), con fuertes simpatías por el proceso de Cuba país en cuya reforma agraria había cooperado en calidad de técnico de la FAO. La Comisión redacta un informe del título de “Proposiciones para una Acción Política en el período 1967-70 de una Vía no Capitalista de Desarrollo”. El proyecto en realidad, constituye un “puente de plata” de las corrientes de izquierda de la DC, que en ese momento controlan la dirección del partido para obtener el apoyo del FRAP a un candidato de sus filas en 1970. Se trata, en esencia, de un proyecto de reformas más avanzadas que las del gobierno de Frei destinadas dentro del Estado burgués, a atenuar las formas más abusivas del capitalismo. Contiene importantes coincidencias con el programa levantado por el P“C” y sus aliados del FRAP. No obstante, las ideas del sector “rebelde” de la DC que impulsó su redacción (como lo mostró su evolución posterior), eran más avanzadas

que las que pudieron expresar en el documento. El documento debió someterse a una serie de restricciones impuestas por el sector freísta. Este lo aceptó, provisoriamente y a regañadientes, para evitar una quiebra profunda del partido, que disminuyera aún más su base electoral, haciéndolos perder el interés por ellos en los círculos imperialistas.

En el Informe, sin plantearse un ideal socialista, se sostiene: "Nosotros los demócrata cristianos deseamos un crecimiento económico que nos aleje en lugar de comprometernos más con los criterios capitalistas"... y se atribuye en él la miseria y el atraso del país "a la ineficacia e injusticia del Sistema Capitalista", concluyendo por afirmar que: "Todos los militantes del PDC nos hemos pronunciado en contra de la reedificación capitalista o implantación del neo-capitalismo". Para "apartarse" del capitalismo se propone allí una especie de "socialismo" a la yugoeslava, planteando la formación de "empresas comunitarias", en las que los medios de producción pertenecerían a sus trabajadores, aunque sin derecho de éstos a monopolizarlos y debiendo operar conforme a un Plan Nacional de la Economía. Las diversas empresas debían concurrir a una especie de mercado de capitales organizado por el Estado. Respecto al imperialismo, el sector freísta, no les permite a esas alturas plantear la nacionalización de sus empresas, sino fórmulas de participación estatal (en empresas mixtas con el capital foráneo), menos lesivas al interés de Chile que las puestas en práctica por el gobierno de Frei. Respecto a la reforma agraria, sólo se plantean su ampliación sin cuestionar sus procedimientos.

Aunque sin nombrarlos, el Informe contiene llamados expresos a la unidad con las fuerzas agrupadas en el FRAP. Se dice allí que hay que: "Tratar de mantener un diálogo democrático y constructivo con las diversas fuerzas políticas nacionales y en especial con aquellas respecto de las cuales podemos reclamar apoyo para la ejecución de este programa". Y en otro punto señalan: "Debemos consolidar un apoyo social y electoral estable a través de la creación de una alianza pueblo-clase media progresista". Siendo conocida la rotunda oposición del sector que redactó el Informe a toda alianza con la derecha, es fácil suponer a quienes van dirigidos esos llamados unitarios.

La dirección del P" C" se hace inmediatamente eco a esos llamados, coincidentes con su estrategia de alianza con la DC. En el N° 124 de la revista teórica de CC, del P" C" "Principios", de marzo-abril de 1968, aparece un artículo del diputado y economista de dicho partido, José Cademartori, titulado: "La Vía no Capitalista en Chile". Este artículo y los conceptos allí expresados, serían ratificados poco después en una entrevista concedida el 26 de abril de 1968 al diario "La Segunda", por Luis Corvalán. Allí se intenta responder a tres cuestiones: 1° "¿Corresponde la vía no capitalista a un fenómeno histórico, real, o es, por el contrario, una formulación utópica, abstracta, sin relación alguna con la práctica y la experiencia de los pueblos?". 2° "¿Es la vía no capitalista una formulación opuesta al socialismo?". 3° "¿Es posible en Chile la vía no capitalista, como una de las formas de paso al socialismo?". A la primera de estas cuestiones, Cademartori responde: "...la vía no capitalista está planteada como una cuestión real, histórica, y muy vinculada a la hora actual que viven muchos países subdesarrollados del mundo"... "la vía no capitalista no es un concepto utópico, irreal, caprichoso, sino responde a nuevos fenómenos históricos, propios de la presente etapa que vivimos"... "ahora surgen nuevas formas de paso al socialismo". Precisamente, concluye, la vía no capitalista, es uno de esos modos, uno de esos caminos de acceso al socialismo que se están dando en las actuales condiciones históricas, en una serie de países que están liquidando el capitalismo o las posibilidades de su existencia". Luego, definiendo la "vía no capitalista", señala: "se expresa en una serie de reformas de estructura y de política que se plantean como objetivo liquidar o limitar las bases de la propiedad privada sobre los medios de producción". A la segunda pregunta que se formula, acerca de si es una forma de paso al socialismo, responde: "Por todo lo dicho, se puede concluir que la vía no capitalista no es una alternativa distinta al socialismo, no es un tercer camino, sino una política que, impulsada por la lucha de masas y desarrollada hasta sus últimas consecuencias, conduce al establecimiento de la sociedad socialista". Finalmente, responde a las cuestiones: "Es posible en Chile la vía no capitalista? ¿Es o no la forma más probable de acceso al socialismo en nuestro país? y, de ser afirmativas las respuestas, ¿es justa la concepción que, en tal sentido, han formulado ciertos sectores del PDC?". Al respecto, reivindicando esa concepción oportunista y adulteradora del marxismo, como parte del Programa del P" C", señala: "...no nos pronunciamos por el socia-

lismo... Sin embargo, desde ya, como cuestión inmediata, lo que propiciamos es un camino nuevo, más democrático, no capitalista que, en vez de acentuar el poderío en los sectores capitalistas, extienda y multiplique los únicos esfuerzos cumplidos hasta ahora para el desarrollo independiente y promueva un gran auge de la vida económica y cultural del país, cuya base requiere la democratización más profunda y un gobierno de nuevo tipo, dirigido por la clase obrera (Programa del Partido, pág. 46)... Como se ve —agrega— desde 1962, venimos planteando la posibilidad en Chile de la vía no capitalista, como un modo de acceso al socialismo, que cierre el paso al desarrollo capitalista del país”. Luego, esforzándose en demostrar que no existen diferencias entre el FRAP y la DC, agrega: “que el FRAP ha levantado en dos campañas presidenciales —1958 y 1964— programas antiimperialistas, antimonopolistas y democráticos consecuentes, orientados por una perspectiva socialista. Estos programas han sido de desarrollo no capitalista. Programas similares —agrega— sustentan el Partido Socialista Popular, el Partido Social Demócrata y amplios núcleos de independientes de izquierda”.

Por último, Cademartori, hace mención a la estrategia oportunista preconizada por la dirección del P“C”, para alcanzar este objetivo también oportunista, tras el cual anhelan unirse con el reformismo pro-yanqui. “El motor de dicha vía —señala— es un nuevo régimen estatal caracterizado por la presencia en el poder de nuevas clases sociales”. ¿Cómo se logrará esa presencia?, según Cademartori: “Asegurando la participación mayoritaria de elementos de estas clases (populares) y capas sociales en el Parlamento, en las Municipalidades y en otros órganos políticos y administrativos”, es decir, a través de la vía electoral.

Después de estos abrazos y besos ideológicos de la directiva del P“C” a la DC, en los marcos de una completa traición a los principios marxistas, viene la reacción de Frei y su equipo, reclamada por sus asesores norteamericanos. Estos le exigen impedir toda alianza de la DC con el FRAP, con vistas a la elección presidencial de 1970. No obstante, el sector de Frei, debido a su obsecuencia frente a los intereses imperialistas y a su demagogia populista, enfrenta una compleja situación. No está en condiciones de levantar una candidatura derechista de sus propias filas (y menos aún de apoyar a un candidato de la derecha), pues eso habría producido el desbande de su militancia y una fuerte disminución de la votación popular de la DC. Por lo demás, la derecha, fuertemente resentida con algunas reformas que afectaban sus intereses, con el movimiento de masas desencadenado por ellas y con la demagogia anti-oligárquica del gobierno DC, no estaba dispuesta a apoyar a ningún candidato demócrata cristiano. Sólo quedaba pues, a Frei y su equipo, una alternativa: tomar firmemente el control del partido, para evitar que éste como tal marchara a una alianza electoral con el FRAP; y, levantar una candidatura con un programa semejante al de la izquierda tradicional que le restara votos o que, en el mejor de los casos, obtuviera de ésta un apoyo incondicional para el abanderado de la DC y su programa, como el que la derecha le otorgara a Frei en 1964.

La DC, se debate en esa época en medio de la aguda pugna que suscita en sus filas la presión velada de cada una de las dos superpotencias por ponerla a su servicio. Frei y su equipo, en aras de quienes han financiado su populismo semi-frustrado, debe mantenerla alejada de las corrientes “marxistas” pro-soviéticas; Corvalán, por su parte, obedeciendo los dictados soviéticos, tiene por misión lo contrario; unirse a esas corrientes populistas y atraerlas hacia su falso marxismo para, protegido por ellas, llegar al gobierno e imponer un acuerdo al imperialismo norteamericano. Las corrientes “rebeldes” dentro de la DC presionan por discutir junto con el FRAP una candidatura común y algunos líderes no tan idealistas como sus bases, ven la posibilidad de reflotar al PDC y lograr una vez más la Presidencia de la República, esta vez, con el apoyo de la izquierda.

No obstante, como hemos señalado, el compromiso formal de Frei —en esa época y ahora— con sus “generosos” protectores norteamericanos, era impedir a cualquier precio el servir de “caballo de Troya” a la penetración soviética en el gobierno de Chile, a través de un pacto DC-FRAP. La CIA se encargará, públicamente, de recordarle su compromiso a Frei, haciendo pegar en los muros de Santiago y otras ciudades, un afiche con la foto de éste y declaraciones que formulara cuando era candidato, oponiéndose a toda alianza con el P“C”. Es así, como el 6 de enero de 1968, en una Junta Nacional preparada por Frei y su equipo, se desplaza de la presidencia del partido a Rafael Agustín Gumucio, líder del ala “rebelde”, reemplazándolo por Jaime Castillo, un rabioso anti P“C”, ligado a publica-

ciones de la CIA. En abril de ese año, los "rebeldes", en unión con una corriente "tercerista", intermedia entre ellos y el grupo de Frei, hacen venir de Estados Unidos donde desempeñaba el cargo de embajador, a Radomiro Tomic. Este lanza su candidatura a la Presidencia de la República, condicionándola a la obtención del apoyo del FRAP. "Personalmente —declara Tomic— soy partidario de intentar a fondo un entendimiento de todas las fuerzas políticas y las fuerzas sociales que creen en la necesidad de dar a Chile instituciones fundamentales más adecuadas que las que sobreviven del pasado y que estén, además, dispuestas a sustituir las estructuras capitalistas por una economía, por una empresa y una sociedad comunitaria".

Sin embargo, así como Frei se ve impedido de volcar a la DC a una alianza con la derecha, la directiva del P" C" — pese a sus deseos — encuentra en el FRAP obstáculos insuperables para volcarlo en apoyo a un candidato DC. Particularmente el PS, su principal aliado en el FRAP, se oponía rotundamente a apoyar a un candidato de dicha colectividad. Más aún, hasta el Pleno realizado en junio de 1969, se oponía, incluso, a que ingresaran al FRAP colectividades como el Partido Radical, y el pequeño Partido Social-Demócrata, debiendo, finalmente, ceder al respecto. El PS, conociendo las afecciones de los dirigentes del P" C", teme con razón perder su rol de aliado privilegiado, así como las postulaciones de uno de los suyos a la Presidencia de la República. Corvalán, pues, se ve impedido de cumplir las instrucciones soviéticas de aliarse con la DC, pues teme producir un desbande en el FRAP si fuerza una alianza en torno a un candidato de dicho partido. Dadas estas dificultades, la única alternativa para Corvalán y los suyos, es esforzarse por atraer a la DC a las discusiones previas, en conjunto con el FRAP, destinadas a designar un candidato y allí vencer la resistencia del PS. Por ello, rechaza aún con mayor énfasis que el PS, la candidatura de Tomic, quien ha pretendido colocar a la izquierda ante un hecho consumado, reclamando apoyo para su postulación. Es en ese contexto, que se populariza la frase de Corvalán: "Con Tomic ni a misa". A todo esto, en el Departamento de Estado norteamericano, existe una creciente inquietud porque la juventud demócrata-cristiana realiza una marcha de Valparaíso a Santiago en conjunto con los jóvenes del FRAP, en protesta contra la intervención yanqui en Vietnam. En diciembre de 1968, la dirección del P" C", lanza un "Manifiesto al Pueblo", en el que insiste en sus llamados a la DC. Allí se expresa: "Chile necesita un gobierno popular, antiimperialista y antioligárquico, que tenga el apoyo de la mayoría nacional, constituido por todos los partidos y corrientes que coincidan en un programa de transformaciones revolucionarias. Nos pronunciamos, pues, por un gobierno popular pluriclasista, amplio, fuerte, revolucionario, realizador, que asegure al país estabilidad democrática y acelerado progreso social, económico y político y le de al pueblo plena libertad... En las condiciones de nuestro país cuanto más amplio sea ese gobierno, más firme, revolucionario y operante lo será"... Y luego añade señalando a quienes pueden participar: "...reconocen militancia en los partidos Comunista, Socialista, Unión Socialista Popular y Social Demócrata o adhieren a sus postulados. Pero también existen en otras tiendas políticas. Constituyen mayoría en el Partido Radical y son una parte significativa en la Democracia Cristiana. Unir a todas estas fuerzas en función de los objetivos comunes es la tarea de hoy".

A comienzos de 1969, Nixon, anuncia el término de la política de Alianza para el Progreso por paternalista y anti-realista, el fin de las reformas como cebo para favorecer los intereses norteamericanos y comienza a mostrar nuevamente el garrote. En marzo de ese año, Frei, realiza una brutal masacre de personas sin casa que intentan tomarse unos terrenos en Puerto Montt. En las elecciones parlamentarias de mayo de ese año, la DC desciende nuevamente, esta vez, a un 31 por ciento de la votación. El P" C" obtiene 380.000 votos, subiendo de un 12,4 por ciento logrado en la elección anterior a un 15,9 por ciento. El Partido Nacional y el Partido Socialista, aumentan también sus votos. La situación tiende a polarizarse en desmedro de la DC. Tomic entonces, renuncia a su candidatura presidencial, señalando: "Los rechazos comunistas y en menor escala socialistas han sido también públicos y reiterados ("tajantes" es la expresión que le gusta a El Siglo) en contra mío en lo personal y en contra de la DC como partido unido. Es claro —agrega— que socialistas y comunistas son sólo una parte del pueblo y de la izquierda; pero es igualmente claro que sin ellos la unidad popular no va". El retiro de su candidatura por Tomic, da un nuevo aliento a la directiva del P" C" en sus esfuerzos por atraerlos a las discusiones pre-

electorales con el FRAP y en el pleno del CC celebrado en abril de 1969, Corvalán reitera "Prácticamente en el año 1964 le ofrecimos al país un gobierno socialista-comunista. Todo lo que se ha dicho en el sentido que perdimos la elección de aquel año por la campaña de mistificaciones del enemigo, es una explicación parcial, que no apunta al fondo del problema. Del enemigo tenemos que esperar lo peor. La verdad es que el país no estaba en condiciones de darnos un respaldo mayoritario para que comunistas y socialistas, solos, dirigiéramos sus destinos. Nosotros estimamos que esta situación no se ha modificado suficientemente y, por lo tanto, debemos propender a un movimiento popular y a un gobierno de una más amplia base social y política". Y agrega: "Lo decimos con toda claridad...somos partidarios del entendimiento del FRAP con otras fuerzas populares, incluido el Partido Radical..." Finalmente, intenta presionar a la DC amenazando con su división y dice refiriéndose a los sectores de la DC descontentos con Frei: "Este sector demócrata cristiano es una corriente popular de avanzada. No han podido realizarse bajo el gobierno del señor Frei. Estimamos que en el movimiento popular tiene algo más de algo que hacer".

En el PDC, por su parte, se escuchan voces de quienes anhelan unirse con el FRAP, como la del senador Renán Fuentealba, quien osa denunciar la intervención de la Embajada norteamericana en el proceso pre-electoral. Para conjurar estas amenazas, Frei, con el cuerpo de burócrata del PDC, organiza una nueva reunión de la Junta Nacional del partido, el 3 de mayo de 1969, en la que por 233 votos contra 215, se resuelve rechazar los llamados unitarios del FRAP y encarar solos la elección presidencial. A raíz de esa resolución, se desprende un grupo de militantes estudiantiles y de los departamentos sindicales y campesinos de la DC, capitaneados por algunos de los dirigentes "rebeldes" que contribuyeron a la redacción del Informe sobre la "Vía no Capitalista" y constituyen el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), que entra en contactos con el FRAP. No constituye, sin embargo, una pérdida numérica muy importante para un partido como el PDC, que no obstante su descenso, aún obtiene más de 700 mil votos en 1969.

En agosto de ese año, una nueva reunión de la Junta Nacional del PDC resuelve nuevamente levantar la candidatura de Radomiro Tomic a la Presidencia de la República, con un programa semejante al del FRAP. Es decir, Frei, imposibilitado de volcar a su partido en apoyo a la derecha, se resigna, a levantar una candidatura que impida una división más profunda del partido y que reste votos al FRAP. No obstante, tanto él como su equipo, se mantienen alejados de la campaña electoral en favor de Tomic. La CIA y sus patrones no demuestran mucho entusiasmo con Tomic, quien según los informes de aquella, se encuentra "a la izquierda de Frei, mostrándose descontento de las campañas efectuadas durante su gobierno y realiza, hasta cierto punto, aperturas hacia la izquierda marxista". Según el Informe del Senado norteamericano: "La CIA no estaba en disposición de apoyar la actividad de Tomic, debido a que las informaciones del Embajador de los últimos años, habían prevenido a la CIA respecto a un trato con los Demócrata Cristianos". Y agregan: "La agencia creía que Alessandri, el aparente favorito, necesitaba más que dinero; él necesitaba ayuda en la dirección de su campaña". (33) Aparentemente, Frei, en ese momento perdió transitoriamente la confianza de los círculos gobernantes norteamericanos, por no haber podido frenar ni la lucha de masas ni la oposición en el PDC, ni la crisis económica en los últimos años de su gobierno.

En junio de 1969, el PS, en su Pleno del CC. realizado en el mes de junio, ratifica su oposición rotunda a apoyar a Tomic. La dirección del P" C", hace desesperados esfuerzos por salvar una posible alianza electoral con la DC en cumplimiento con las exigencias soviéticas, o, por lo menos, levantar a un candidato, que atraiga los votos de dicho partido. A través del año 1969, en que cada partido del FRAP levanta su precandidato, hacen intensa campaña por Gumucio y por Chonchol, ambos cuadros recientes del PDC, integrados por ese entonces al MAPU. Al mismo tiempo, estimulan en el seno del PS las maniobras de los que intentan desplazar a Salvador Allende, el candidato con más opciones (como se demostraría más adelante) para unir en torno suyo a las diversas fuerzas del FRAP. No tienen éxito, sin embargo, y el 22 de enero de 1970 deben aceptar a regañadientes a Salvador Allende como candidato único del FRAP a la elección presidencial.

Sin embargo, prosigue —pese a que éste a intensificado su actitud represiva— su apoyo al gobierno de Frei en todas las circunstancias claves. Cuando se presenta la amenaza de

golpe de Estado por parte del general Roberto Viaux, en octubre de 1969, el P“C” y la CUT, dirigida por éste, son los primeros organismos que concurren al Palacio de Gobierno a ofrecer su apoyo incondicional a Frei contra un presunto golpe. En el curso de esos acontecimientos, además, votarán en contra la acusación constitucional al Ministro del Interior, reclamada por los periodistas, a raíz de la arbitraria censura de prensa, radio y televisión impuesta por el gobierno para ocultar el vergonzoso acuerdo al que llegaron los golpistas.

3.- La Política del Social Imperialismo frente al triunfo de la Unidad Popular.

El triunfo de Salvador Allende en la elección de 1970 provocó un profundo desconcierto y preocupación entre los dirigentes soviéticos. Al igual que los norteamericanos, que suponían el triunfo de Alessandri con el 40 por ciento de los votos, no esperaban esta victoria de la UP. Ya hemos señalado que la línea soviética, en cuya materialización fracasaron los dirigentes del P“C”, era que la izquierda tradicional (incluido el P“C”) llegaran al gobierno en coalición con la DC, es decir, en una entente con el imperialismo norteamericano. No deseaban ni estaban dispuestos a asumir los riesgos y la sangría económica que les significó el intempestivo viraje hacia el “marxismo” pro-soviético del gobierno cubano, en otros países de Latinoamérica. Un apoyo abierto por su parte a un régimen como el de la UP, que se reclamaba “marxista” y en avance a el “socialismo”, que aparecía mundialmente llevando a la práctica las tesis del XX Congreso del PCUS y en el que participaban los “comunistas” pro-soviéticos, todo ello en plena área geopolítica del imperialismo norteamericano, representaba un desafío abierto a este último. Tal desafío podía significar que EEUU, se abrogara por su parte, el derecho a intervenir frente a cualquier conflicto que surgiera en Europa oriental (como el de Checoslovaquia, por ejemplo), región de Europa donde existen para la URSS serios problemas latentes, como el de la sucesión de Tito en Yugoslavia, las veleidades independentistas de Rumania y otros. Debemos recordar que frente a la invasión de Checoslovaquia, el gobierno de EEUU, mantuvo una posición neutral, reconociendo allí el derecho de dominación del socialimperialismo soviético. Es preciso recordar, asimismo, que una de las causas de la caída de Jruschov, fue su actitud aventurera al instalar cohetes en Cuba, que puso a la URSS a un tris de una guerra con EEUU, para evitar la cual debió no sólo aceptar el ultimátum de retirar dichos cohetes, sino la humillación de que los buques en que se trasladó la carga fueron inspeccionados por EEUU.

Debido a estas y otras consideraciones, la política de los gobernantes de la URSS respecto al gobierno de Allende, fue distante y extremadamente cauta, tanto en sus pretensiones de penetración económica, como en la ayuda financiera o el apoyo político a dicho gobierno. Esta distancia fue en aumento en la medida en que ese gobierno entró en crisis y comenzó a sufrir los duros golpes de la ofensiva para derribarlo.

Esta política de la URSS respecto a Chile bajo Allende, está confirmada por numerosos testimonios y hechos concretos, lo que resalta aún más la hipocresía de la campaña de protesta levantada después del golpe de Estado. Ya en relación con la campaña electoral, según los documentos de la ITT sacados a luz por el sub-comité del Senado norteamericano que investigó la intervención de las empresas multinacionales en Chile, Korry, Embajador de EEUU en este país, sostuvo: “Respecto a Rusia, descarta la participación que los rusos pudieran haber tenido en la elección de Allende”.

En lo que respecta a los créditos otorgados por los países de Europa oriental y la URSS concedidos al comienzo del gobierno de Allende cuando aún éste ofrecía ciertas esperanzas, fueron otorgados en las mismas condiciones que los que realizaba el imperialismo norteamericano. Es decir, atados a proyectos favorables a los países acreedores y, a menudo, con intereses superiores a los habituales en el mercado internacional. Esto provocó verdadero escándalo en las comisiones de la UP que debieron viajar a esos países a negociarlos. Particularmente los préstamos a corto plazo, los más urgentes para adquirir los elementos más indispensables al funcionamiento económico, aprovechando la extrema urgencia por obtenerlos del gobierno de Chile, y aprovechando la negativa a concederlos de los organismos financieros internacionales dependientes de EEUU, fueron concedidos a

intereses superiores a los habituales. En esta especulación, a costa de los gravísimos problemas económicos que sufría Chile, participaron tanto los países "socialistas" del COMECON como países con gobiernos reaccionarios como España y Alemania Occidental, tentados por las atractivas ofertas que debió hacer el gobierno chileno para romper el bloqueo.

Sin embargo, en los momentos verdaderamente críticos, a fines de 1972, cuando el propio Presidente Allende debió viajar a la URSS para solicitar un crédito de 500 millones de dólares indispensable para cubrir el déficit de la balanza de pagos, dicho crédito le fue denegado por el propio Breshnev. Este hecho está testimoniado en un libro sobre Chile posterior al golpe de Estado, por Joan E. Garcés, uno de los más íntimos colaboradores de Allende. (34) Esta negativa fue hecha, no obstante, que se hizo firmar a Allende un Comunicado Conjunto en que éste aparece suscribiendo formulaciones de la política internacional soviética respecto a regiones muy alejadas del continente latinoamericano, como por ejemplo: sobre la Conferencia Paneuropea de Seguridad y Cooperación, la reunificación de Alemania, acerca del Medio Oriente y hasta sobre Bangladesh. Más aún, se le obligó a realizar una seria concesión respecto a la firme y tradicional política chilena de defensa de las 200 millas marítimas como mar territorial, que tanto la URSS como EE.UU., combaten, comprometiéndose a "armonizar sus posiciones y colaborar mutuamente.....tomando en cuenta los intereses de todos los estados". El crédito por 500 millones de dólares era requerido, no para ambiciosos proyectos de desarrollo, sino para la adquisición angustiosa de alimentos y materias primas, destinado a paliar la catástrofe económica con que se preparaba el terreno para el golpe militar.

Por lo demás, EE.UU., había recibido hacía ya tiempo, garantías formales del gobierno soviético de que no otorgaría una ayuda considerable al gobierno de Allende. En la reunión celebrada el 21 de octubre de 1971, entre el comité de empresas multinacionales con intereses en Chile y el Secretario de Estado norteamericano, para plantear una ofensiva contra el gobierno de la UP, Williams Rogers, indicó: "que había conversado con el ministro ruso de Relaciones Exteriores sobre si Moscú iba a financiar a Chile como lo había hecho con Cuba". Añadiendo: "El ruso negó tal propósito". Esto cuenta, también, en el Memorial de la ITT investigado por el Senado norteamericano y es citado por el colaborador de Allende, Joan E. Garcés en el libro mencionado. Además, precisamente en los momentos en que los consorcios yanquis del cobre agredían a Chile, Kosiguin, anunció su propósito de explotar el cobre de Siberia en colaboración con esos mismos consorcios.

Por otra parte, en gran medida los créditos obtenidos en los países de Europa oriental, no fueron utilizados, ya sea porque no se logró hacer coincidir los pedidos con los plazos oportunos para que fueran contemplados en los planes productivos de dichos países; o porque se estimó que no eran convenientes. El 28 de noviembre de 1972, el diputado DC Claudio Huepe, basándose en una publicación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), denunció que no había sido utilizado el 92,5 por ciento de los créditos del "área socialista".

En lo que toca a las relaciones comerciales o técnicas con la URSS durante el gobierno de Allende, fueron tan mínimas, que la prensa de derecha, extremadamente atenta a denunciar cualquiera ingerencia al respecto, casi no tiene material con el cual especular. En los tres años del gobierno de Allende, en el diario "El Mercurio" sólo se denuncia la actividad de algunos pesqueros rusos contratados por el gobierno, dando a conocer algunas protestas de dirigentes del gremio de pescadores; la visita de una delegación soviética de 16 personas, para concertar acuerdos económicos; la firma, a fines de marzo de 1972, de un convenio para comprar cinco mil tractores a la URSS; la devolución por parte de Chile a la URSS de 125 motoniveladoras por ser inaptas para el suelo chileno y por sus fallas mecánicas. La denuncia más seria, parece ser la de aceptación por parte del gobierno de técnicos soviéticos en las empresas estatizadas del cobre. A fines de junio de 1973, el senador DC Juan de Dios Carmona, protesta por el contrato de 36 asesores y 10 intérpretes, realizado con la firma Tsvetmetpromexport de Moscú, que ganan 844 dólares mensuales y 470 dólares mensuales, respectivamente, cada uno, lo que excede con creces el tope legal de 20 sueldos vitales. Ya en diciembre de 1972, el PDC, había hecho llegar una carta al Presidente Allende, en la que cuestiona el "acceso de técnicos soviéticos a los secretos industriales y a las experiencias de las grandes empresas mineras nacionales, favore-

ciendo así a un competidor potencial y tan poderoso como la URSS". En esa misma carta se pregunta, así mismo: ¿"Es efectivo que la Unión Soviética, en su condición de 'hermano mayor', calidad por primera vez asignada a un país extranjero por un Presidente de la República de Chile, nos otorgaría los créditos arados, condicionados, amarrados, que Ud., y los partidos de la Unidad Popular criticaron tan duramente en el pasado?" (35)

Respecto a la compra de armas en la URSS, existió un intento, que al parecer fue rechazado por la URSS y que, en todo caso, no llegó a concretarse, cuando viajó en mayo de 1973 a dicho país el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Carlos Prats, en compañía de los generales Bonilla y Benavides. Sintomáticamente, como lo señala en su libro ya mencionado Joan E. Garcés, el "sector derechista de las FF.AA., adopta el 25 de mayo la decisión de dar un golpe de estado precisamente en los días en que Prats se encuentra en Europa y Pinochet le reemplaza en la Comandancia en Jefe del Ejército". Es difícil conocer el verdadero sentido de este viaje en un momento en que no podía ser más inoportuno, pues los sectores golpistas, incitados por la CIA y por el Pentágono, estaban desde hacía mucho en plena actividad y una de las cosas que menos perdona EE.UU., es la compra de armas en la URSS. ¿Constituyó un intento frustrado de amenaza a EE.UU., para detener sus incitaciones golpistas en la FF.AA.? Si eso se pretendió, el efecto, como los resultados lo mostraron al poco tiempo, fue exactamente el contrario. En todo caso, fue una iniciativa anormal tomada en un momento en que las dificultades eran extremas y no corresponde a lo que fue la política habitual del gobierno chileno, que jamás intentó comprar armas en los países del Pacto de Varsovia, ni menos corresponde a intenciones de la URSS o de dichos países de vendérselas. En este aspecto, como en cualquier otro que significara una intención de apoyo resuelto por parte de la URSS al gobierno de Chile, no tuvieron ni la Casa Blanca ni el Pentágono, jamás inquietud al menos a breve plazo. Los informes de inteligencia de que disponían, dejaban perfectamente en claro, que ni la URSS ni los países de Europa oriental, pensaban jugarse en apoyo del gobierno chileno, sea en el terreno económico o en el terreno militar. El gobierno de EE.UU. como lo establece el informe de Senado norteamericano sobre la actividad de la CIA en Chile, disponía regularmente de estudios de Inteligencia, llamados National Intelligence Estimates (NIEs), elaborados no sólo por la CIA sino, también, por The State Department's Bureau of Intelligence and Research (INR). Estos eran analizados por una oficina especial del gobierno norteamericano. Un NIEs enviado en 1969, predice que cualquiera administración nueva que surja en Chile, explorará el establecimiento de mejores relaciones con los países comunistas y socialistas. Señala, así mismo, que Allende en particular daría ese paso, pero afirma, así mismo, que se vería impedido de avanzar demasiado lejos en esa dirección, debido al nacionalismo de Chile, que se opondría fuertemente a la subordinación sea a Moscú a La Habana o a Washington. Allende, prosigue el informe, a través de los años, expandirá las relaciones de Chile con los países socialistas y comunistas. Sin embargo, será cuidadoso de no subordinar los intereses de Chile a ningún poder comunista o socialista o de romper los vínculos con los países no-comunistas a los cuales continuará recurriendo por ayuda. Las NIEs de 1971 y 1972, enfatizan que Allende está tomando un camino independiente y nacionalista, tanto en el hemisferio como internacionalmente. Allende, en breve, señala el informe, se está comprometiendo con una política de no-alineamiento. (36)

Un NIEs de 1970, prevee ya que Allende establecerá relaciones con Cuba, muy pronto después de ser elegido. No obstante, un NIEs de 1971, describe el estilo de las relaciones Chileno-Cubanas como: distantes en el terreno ideológico y próximas en los lazos económicos. Se señala, así mismo, que no obstante las largas relaciones personales de Allende con Castro, se refrenará de excesivas aperturas hacia él. Un NIEs de 1972, por su parte, reconoce que La Habana ha sido circunspecta en cuanto a tratar de utilizar a Chile como base para promover la "revolución" en América Latina. (37)

En 1970, en los informes, aún se muestra cierta preocupación acerca de la expansión de la influencia soviética en Chile bajo Allende, así como el establecimiento de una mayor presencia militar de la URSS. No obstante un NIEs de 1971, predice que, aunque la Unión Soviética continuará cultivando canales de influencia en el gobierno de Allende a través del Partido Comunista de Chile, ella estaría insegura de su habilidad para impactar en resultados claves, dado el deseo de Allende de una postura independiente. El mismo NIEs afirma, que ni Allende ni los militares chilenos tolerarían una presencia militar so-

victoria permanente en Chile. (38)

Un NIEs de 1972, por último centrado en la actitud soviética hacia el régimen de Allende, sostiene que **ella puede ser caracterizada por la cautela y la restricción**. Esta actitud, y, más aún, el deseo soviético de evitar con Allende el tipo de compromiso sin fin de ayuda en el que se han visto envueltos con Castro. Una nota de inteligencia preparada por el Departamento de Estado, expresa que el comunicado chileno-soviético, emitido con motivo de la visita de Allende en diciembre de 1972 a la URSS, refleja la decisión de Moscú de continuar una política cauta hacia Chile y de evitar un compromiso de ayuda amplia a Allende. De acuerdo con dicha nota de Inteligencia, los soviéticos en apariencia advirtieron a Allende que negociara sus diferencias con EE.UU. (39)

Esta actitud de los dirigentes del socialimperialismo soviético frente al gobierno de Allende, es plenamente consecuente con su resolución de no apoyar en Chile sino un gobierno de colaboración con el imperialismo yanqui, a través de la alianza UP-DC. Esto explica, también, que los dirigentes del "PC" hayan perseguido en forma obsesiva durante el gobierno de Allende y prosiguen hoy, después del golpe militar, impulsando la misma política.

4.- La búsqueda del pacto UP-DC durante el gobierno de Allende.

Esta política, de buscar una explotación compartida de Chile entre el socialimperialismo y el imperialismo norteamericano, ofreciéndole a éste a cambio de ese co-gobierno la paralización de la lucha de las masas, que no había conseguido la DC durante su administración, comienza ya con las presiones que ejercen los dirigentes del "PC" para convencer a Allende, que firme las garantías constitucionales exigidas por la DC para aprobar su designación como Presidente en el Congreso Pleno.

Uno de los pilares de dicha política consistió en convencer a Allende que podía contar con el espíritu "constitucionalista", "democrático" y "profesionalista" de las FF.AA. Para ello, utilizaron como cortina de humo, al único o casi único alto jefe militar sobre el que lograron cierta influencia, el general Carlos Prats. Al mismo tiempo, intentaron, tan desesperada como infructuosamente, ampliar su influencia en los Altos Mandos de las FF.AA., en los que EE.UU., por cierto, dadas todas las vinculaciones establecidas a través de decenios con aquellas, les llevaban una ventaja abrumadora. De hecho, este segundo fracaso del "PC", que se suma al otro: a la imposibilidad de arrastrar a la UP, a un pacto con la DC (más que por la resistencia de los sectores de la UP, por la influencia de Frei y su equipo en la DC), condicionarían, también, la actitud distante y cautelosa de la URSS ante la experiencia chilena. En todo caso, la presencia de Prats en la Comandancia en Jefe de las FF.AA., mantuvo sobre las numerosas corrientes golpistas que se disputaban la hegemonía en su interior, una permanente amenaza. Se temía que pudiera arrastrar en apoyo del gobierno a un sector de las FF.AA., en el cual, unido a una resistencia popular, habría significado un serio obstáculo para los planes golpistas. No es casual que radio Moscú haya anunciado después del golpe de Estado, que Prats marchaba desde el sur a la cabeza de tropas leales al gobierno ni el hecho de que la Junta Militar haya decidido asesinarlo en Buenos Aires, donde se trasladó después del golpe y donde trabajaba en una empresa de José Gelbard, poderoso industrial con amplios vínculos en la URSS. (Gelbard siendo Ministro de Economía de Perón, visitó la URSS, donde sostuvo una conversación de más de tres horas con Breshnev). No es casual, tampoco, que la articulación vertical del golpe, encabezado ya por el reemplazante de Prats en la Comandancia en Jefe de las FF.AA., Augusto Pinochet, se haya concretado cuando Prats viajó a la URSS y éste se haya materializado una vez que se le obligó a renunciar a las FF.AA. El propio Pinochet, en declaraciones a Radio Agricultura de Santiago, el 3 de septiembre de 1974 sostuvo: "Habría bastado un departamento, una sola unidad que no hubiera cumplido las órdenes que emanaban desde Santiago, para que de inmediato el país hubiese entrado en una guerra civil". Esta posibilidad de una resistencia popular, que hubiera empalmado con algún sector de las FF.AA. leal al gobierno, sin embargo la temía tanto o más el equipo dirigente del "PC" que Pinochet. Por ello, los dirigentes del "PC", se opusieron a las iniciativas de las masas que derrotaron el paro de octubre del 72 y se apresu-

raron a obtener su solución, "solución" llena de concesiones a la oposición, a través de un gabinete militar. Por la misma razón, se opusieron siempre al proyecto de Allende que planteaba no obstante su confianza en las FF.AA., crear todo un sistema de defensa basado en organismos de las masas populares, que pudiera operar en conjunto con los sectores leales de las FF.AA., contra cualquier intento golpista. Expresando la opinión de Allende al respecto, Joan E. Garcés, su consejero más íntimo, sostiene: "La articulación Fuerzas Armadas-organizaciones populares era posible concebirla y ponerla en práctica, a partir de 1970, siempre cuando estuviera delimitada dentro de las coordenadas en que se movía el sector antigolpista dentro de las Fuerzas Armadas: evitar la guerra civil mediante la defensa y fortalecimiento de las instituciones político-sociales basadas en los principios democráticos que permiten la expresión libre de la voluntad popular. Plantear esta necesidad era posible, porque estaba legitimado en las responsabilidades legales que incumbían al gobierno y en el programa de la UP, además de que existían disposiciones legales para ello. Baste con referirse a la Ley de Defensa Civil, de 1945, que prevé la coordinación entre sindicatos obreros y otras organizaciones civiles, por una parte, y Carabineros y Fuerzas Armadas por otra, para prevenir o atender situaciones de emergencia o que encierren peligro para la nación. Defensa Civil encomendada a la dirección del Ministerio del Interior y sus representantes territoriales, es decir, a la conducción estrictamente política del gobierno, no a la militar". Y agrega Garcés: La UP contaba con la legitimidad de ser titular del gobierno, y con la resolución del sector coyunturalmente predominante dentro de Carabineros y el Ejército de defender las instituciones democráticas contra la subversión y el sabotaje. Contaba con sindicatos organizados en todos los puntos del país, y con los instrumentos legales para montar a tiempo toda una red, tan sofisticada y vasta como se deseara, para prevenir las acciones de subversión y sabotaje que, a lo largo de tres años, fueron el vehículo principal de la contrarrevolución para perturbar los mecanismos socioeconómicos de integración y equilibrio de la sociedad". Y señala luego: "La contrapartida a nivel de masas de la política en relación con las Fuerzas Armadas fue objeto de varias iniciativas del presidente Allende a partir de febrero de 1971; no sólo privadas como su intervención en el pleno del Comité Central del "PC" de junio de ese año, a puerta cerrada, sino también públicas. El 29 de febrero de ese mismo año, en Punta Arenas, donde había llegado en compañía de los tres comandantes en jefe para reconocer las bases militares de aquella región, en su discurso en el estadio techado, difundido por cadenas de radios y reproducido parcialmente en la prensa, Allende proclamó la necesidad de "organizar a las masas populares para dotar a la política militar de disuasión de la UP de una base social propia". Garcés prosigue señalando: "Si las bases y los militantes de los partidos obreros hubieran contado con las nuevas formas operativas, que era lo más difícil, si las circunstancias llegaban a imponer la distribución de armas, ello se haría, pues estaba implícitamente previsto en los planteamientos de gobierno, como el propio presidente Allende lo manifestó públicamente el 29 de junio de 1973. Pero ello requería previamente la preparación de la ciudadanía a nuevas formas de combate, distintas de las simplemente electorales", Termina Garcés, diciendo: "Estos son, en síntesis, los planteamientos centrales que informaban el discurso del presidente Allende de 29 de febrero de 1971"..... y añade: "Aún el 5 de junio de 1973, entre las recomendaciones de Allende al comité político de la UP se puede leer: '1. Frente de masas: organización popular para resistir el enfrentamiento a partir de tres-cuatro meses". Y agregamos un comentario final de este consejero político de Allende, que no se caracterizaba precisamente por su simpatía por quienes planteaban una lucha armada popular por el poder, sino que, por el contrario, intenta demostrar a través de todos sus libros que era impracticable en Chile. "Y en estas circunstancias -agrega- ¡oh cruel contraste! a lo largo de 1971 y 1972 toda la prensa de izquierda se entretuvo en denunciar que la derecha se estaba organizando paramilitarmente, que sus zonas urbanas residenciales estaban preparadas para acciones civiles centralmente dirigidas y coordinadas, que había ejercicios de alerta y de adecuación psicológica, etc. Y durante más de dos años la izquierda conoció y describió públicamente, con todo detalle y amplia información, las organizaciones civiles preparatorias de la insurrección burguesa. Pero los barrios obreros, las fábricas, los estados mayores de los partidos obreros, no organizaron nada equivalente.... en defensa de las libertades democráticas, del gobierno legalmente constituido y, por último, de su propia razón de ser, de los intereses de la clase

obrero". (40)

Demás está decir, que la dirección del "PC", no obstante, que el presidente Allende concurrió personalmente a plantear este problema al pleno de su CC., se opuso terminantemente a esta organización defensiva de las masas. Ha sido criticado por eso hasta... por dirigentes soviéticos, claro está, con la hipocresía del Judas que anhela limpiarse las manos para que no se le enrostre su responsabilidad. Lo rechazaron, porque eran menos honestos que el presidente Allende y ello no cuadraba con su proyecto de capitalismo de Estado y porque eran más lúcidos que Garcés su consejero íntimo. Sabían, no obstante, sus reiterados elogios a su "profesionalismo" y a su "constitucionalismo", que las FF.AA., estaban en esencia al servicio del imperialismo yanqui y que sólo cabían, frente a ellas, dos alternativas: o destruirlas, cosa que no deseaban de ninguna manera; o, neutralizarlas, logrando una entente con el imperialismo a través de una alianza con la DC, lo que, por lo demás, era lo que exigían sus mentores soviéticos. No ignoraban, por lo mismo, que por muy "defensivas" que fueran en su origen las organizaciones de masas propuestas por el Presidente Allende, fatalmente se les escaparían de las manos, transformándose en un elemento antagónico y de lucha contra el bloque de oposición, en la medida en que éste avanzara en sus acciones subversivas y, por último, antagónico a las FF.AA., en la medida en que estas fuerzas fueran poniendo en evidencia sus intenciones golpistas. Tales organizaciones de masas, por lo tanto, bajo la posible influencia de ideas revolucionarias y del elevado grado de combatividad existente, amenazaban con transformarse en instrumentos de una política opuesta a sus intenciones de conciliar y preservar el sistema, para montar sobre esa base su farsa de socialismo. Por eso no sólo se opusieron terminantemente a organizaciones de esa especie que, como el mismo Garcés lo señalaba contemplaban la eventualidad de ser provistas de armas, sino, incluso, a los inocentes Comités de Unidad Popular de tipo electoral, cuya disolución impulsaron después de utilizarlos por última vez en las elecciones de abril de 1971. Garcés, así como los analistas más a la izquierda que él del gobierno allendista, no comprende al parecer, que los dirigentes del "PC" y el centro internacional reaccionario que los dirige, están bastante más a la derecha que ellos mismos y que el presidente Allende. Hay una gran diferencia entre aspirar al socialismo sinceramente, pero aplicando métodos equivocados para avanzar hacia él y, fingir que se busca el socialismo, para implantar un opresivo capitalismo estatal, como es la intención de los dirigentes del "PC".

Esta obediencia ciega a la consigna soviética de alianza con la DC, no sólo los hizo oponerse a la formación de organismos defensivos de masas sino, también, a la mucho más inocente idea del presidente Allende de llamar tempranamente a un plebiscito que otorgara respaldo popular a los puntos básicos del programa de la UP. Un referendun de esta especie significaba salirle al paso apoyándose directamente en las masas populares, a la labor obstruccionista de la DC contra toda iniciativa del gobierno derivada de su tendencia creciente a asimilarse al estilo cerrado de oposición de la derecha. Pero, justamente, la táctica de la directiva del "PC", consistía en aprovechar la acumulación de obstáculos que el gobierno encontraba en su camino, para presionar al gobierno y convencer a sus aliados reticentes de la UP, de la necesidad de llegar a cualquier precio a un acuerdo con la DC. Un referendun exitoso, encerraba el peligro de reeditar en forma aún más riesgosa, lo que los soviéticos consideraban inaceptable como estrategia para Chile (como hoy para Italia y Francia): la aplicación de reformas, basándose en un bloque de izquierda, que se enfrenta a una oposición que engloba a los sectores populistas manejados por el imperialismo norteamericano. O, para reiterarlo en otros términos se oponían a una actitud de desafío abierto a EE.UU., en su área de influencia, en lugar de la colaboración semi-forzada, semi-pactada, que era lo que perseguían los soviéticos.

Lamentablemente, en la oposición a las iniciativas de plebiscito, la dirección del "PC" logró arrastrar a las directivas de los otros partidos de la UP, aunque estos (así como por táctica los dirigentes del "PC"), dieron otros argumentos para rechazarla. Garcés, comenta al respecto: "cada iniciativa de Allende para lograr el acuerdo legislativo con el PDC no es sino la alternativa a la que se encuentra abocado tras el rechazo por el comité político de la UP de lo que él considera el recurso más idóneo para resolver el problema: pedir al país que, mediante un referendun, se pronuncie expresamente sobre los medios que necesita el gobierno para continuar aplicando el programa común de la UP". Y prosigue, dando an-

tedentes que muestran hasta qué punto fue hábil esta táctica de los dirigentes "comunistas": "La conversación Allende-Tomic de diciembre de 1971 está precedida por el rechazo por la UP de las proposiciones de referéndum hechas por el presidente de la república en junio, julio y agosto de ese mismo año. Las negociaciones con el presidente del PDC, R. Fuentalba, en mayo de 1972 están precedidas por el rechazo de la propuesta de referéndum que hace Allende a la UP tras perder las elecciones parciales en Colchagua y O'Higgins, en el mes de enero de ese mismo año. Las conversaciones con el PDC de julio-agosto de 1973, son solicitadas por el presidente Allende después que, en junio, la totalidad de los partidos de la coalición gubernamental han rechazado que el principal conflicto con el Parlamento, la nacionalización de empresas, sea sometido a consulta general". Y agrega: "Cuanto más avanzaba el proceso revolucionario sin que la UP tuviera mayoría propia en el Parlamento más se incrementaba el papel de árbitro de la DC en circunstancias cada vez menos favorables para los partidos obreros". ¡Pero, si eso era, precisamente, lo que deseaba Corbalán y su equipo! "El Partido Comunista en particular —señala Garcés— estima que estaba (el referéndum) condenado a la derrota. Su secretario general, Luis Corvalán, argumenta en este sentido, y lo sintetiza en una frase bien popular: 'Perdemos de aquí a Penco'". (43) Tenemos pues, nada menos que al partido que ha puesto su confianza en las elecciones para "ganar el poder", oponiéndose a una consulta electoral al pueblo respecto al programa de la UP y subordinándolo todo a una transacción a alto nivel con la DC. Esto fue en enero de 1972, pero, aún antes, cuando la UP acababa de ganar más del 50 por ciento de los votos en las elecciones municipales de abril de 1971 —en julio de ese año— se abre una nueva posibilidad de consulta popular respecto a un asunto de tanta importancia y tan reclamado por la opinión pública, como la nacionalización del cobre. Todos los parlamentarios, desde la extrema derecha hasta la UP, pasando por la DC, se ven obligados a votar favorablemente la reforma constitucional, que abría paso a la posibilidad de nacionalizar la gran minería del cobre. Sin embargo, algunos artículos del proyecto inicial del gobierno son eliminados por la mayoría parlamentaria y el presidente veía esa eliminación y propone a la UP, en lugar de promulgar el proyecto podado como lo ha acordado el Parlamento, llamar a un plebiscito en apoyo del proyecto original. Los partidos de la UP, sin embargo, se oponen. "El Partido Comunista —señala Garcés— se declaró absolutamente en contra de postergar la promulgación inmediata del texto de nacionalización de las minas, rechazando de plano la convocatoria de un referéndum". (44) No cabía dudas, especialmente a esas alturas y después de haber obtenido la UP más del 50 por ciento de los votos pocos meses antes, que el referéndum habría sido ganado, muy especialmente, tratándose de una reforma tan deseada por el pueblo como la nacionalización del cobre. Sin embargo, la directiva del P" C" se opone y se opone "de plano", en un momento en que claramente no era válido el argumento posterior de Corvalán: "Perdemos de aquí a Penco". Lo que no se desea, pues, no es una posible derrota, sino, por el contrario, su éxito y la aplicación misma de ese procedimiento, que les restaría elementos para presionar por la alianza UP-DC. Puede decirse, por lo tanto, con plena propiedad, que la directiva del P" C", aunque con objetivos relativamente diferentes a los de la oposición, fue cómplice de la política de obstrucción y bloqueo al gobierno de Allende, que habría de crear las condiciones para derribarlo. Esto queda aún más patente, así como los móviles ocultos de una acción de esta especie, si se considera el momento en que la dirección del P" C" se decide — ¡por fin! — a aceptar la idea de llamar a un referéndum. Lo hace, en septiembre de 1973, cuando a todas luces el golpe es inminente y cuando la exigencia de llamar a plebiscito la ha realizado precisamente, la Democracia Cristiana. La acepta en esta ocasión, cuando sí existían verdaderamente las más altas posibilidades de que el gobierno lo perdiera y cuando dicho referéndum formaba parte de los ultimatum al Ejecutivo, de Frei y su grupo. Y es natural y coherente con su estrategia que lo acepten en ese momento pues, se ha transformado, de una posibilidad para eludir el chantaje del sector pro-imperialista de la DC, en la condición de un posible acuerdo con dicho sector, la ansiada meta de los dirigentes del P" C" y de la URSS.

Sin embargo, el sabotaje al gobierno de quienes instrumentaban en Chile la política del social-imperialismo soviético, no se manifiesta tan solo en su oposición a todo lo que signifique apoyarse en las masas populares. Este sabotaje, se manifiesta también —siempre en aras del pacto con la DC— cada vez que el presidente Allende intenta tomar medidas más

drásticas contra aquellos militares que son sorprendidos complotando. En el mes de agosto de 1973, por ejemplo, dos meses apenas después del "tancazo" se genera en el "democrático" y "constitucionalista" ejército chileno, otro intento golpista, encabezado por los generales Bonilla, Nuño, Baeza, Arellano, Javier Palacios y Jorge Cruz. ¿Cuál es la actitud de la dirección del P" C"? Según Joan E. Garcés, "el secretario general del PC, Luis Corvalán, se pronuncia desfavorablemente el 21 y 23 de agosto cuando Allende le comunica su intención de llamar a retiro esa misma semana a los seis generales del Ejército que se sabía estaban encabezando el golpe". "El Partido Socialista, el MAPU y la Izquierda Cristiana —nos cuenta Garcés— eran partidarios de que el gobierno adoptara medidas ofensivas, asumiendo plenamente el riesgo del enfrentamiento armado. Mientras que el análisis de las circunstancias y la opción del Partido Comunista eran muy distintos: procurando siempre evitar la guerra civil, miró hacia la Democracia Cristiana y buscó unir en el Parlamento los votos de ésta a los de la UP para declarar el 'Estado de Sitio'". (45) La directiva de la DC, intenta entonces, chantajear al gobierno exigiendo para votar favorablemente el estado de sitio, que éste apruebe su reforma constitucional, que anulaba las estatizaciones del gobierno, lo que es rechazado rotundamente por Allende. El Ministro de Justicia, Sergio Insunza, miembro de la dirección del P" C", reduce entonces, para llegar a acuerdo con la DC, la petición de Estado de Sitio a sólo tres meses y le solicita a Garcés, que "no usara su influencia para convencer al presidente de continuar exigiendo al PDC todas las facultades legales, sin restricción, que la Constitución contemplaba para atender la emergencia que el *putsch* acababa de crear". "Preocupación innecesaria", agrega Garcés. Pues, "sesenta horas después, el PDC decía que ni siquiera tres meses, que no concedía al gobierno ninguna facultad extraordinaria ante la subversión".

Curiosamente, el general Prats, Comandante en Jefe de las FF.AA., era de la misma opinión de la dirección del P" C" y sostenía ante el presidente Allende: "Nosotros sólo podemos preparar el contragolpe". "A lo que el presidente Allende —según Garcés— respondía: 'General, todo depende de la fuerza con que se nos propinc el primer golpe! ... Finalmente Prats, ante la inminencia del golpe de Estado y el rechazo a todo acuerdo con la UP del sector freista de la DC, que pasa a controlar oficialmente el partido, habría de desertar de su cargo renunciando a la Comandancia en Jefe de las FF.AA., y acogiéndose a retiro, a raíz de algunas provocaciones de personeros de oposición y esposas de militares. Lo hizo, según su carta de renuncia, para "no convertirse en factor de quiebra de la disciplina institucional..." ¡Curiosa manera de lograr todo eso! A las pocas semanas de su renuncia se consumó el golpe.

A mediados de 1972, cuando ya ha terminado la bonanza inicial del primer año de gobierno de la UP y ha recrudecido la crisis y la ofensiva de la oposición, se intensifican los esfuerzos de la dirección del P" C" por lograr un acuerdo con la DC. En la UP se advierte el peligroso cansancio (para los objetivos del P" C") con la táctica oficialista. El 12 de mayo de 1972, se efectúa en Concepción una combativa marcha prohibida por el Intendente "comunista", en la que participan todas las fuerzas locales de la UP, menos naturalmente, las del P" C". La marcha es reprimida violentamente a consecuencia de lo cual las fuerzas policiales asesinan en la calle a un militante de Espartaco, organización juvenil del PCR. La directiva del P" C" toleraba las discrepancias verbales con su línea, pero no la insubordinación de sus aliados, ni menos que estos fueran al encuentro de las masas. Al mes siguiente, en junio de 1972, la UP realiza la reunión de Lo Curro, para debatir las diferencias que se han producido entre una serie de organizaciones de la UP y la línea oficial impuesta por el P" C". Allí la dirección del P" C" a través del miembro de su Secretariado, Orlando Millas, propone "consolidar" lo realizado y no continuar el avance de las reformas. El PS, el MAPU, la Izquierda Cristiana, en cambio, son partidarios de continuar el avance de las reformas "hacia el socialismo". Pretenden llegar a esa meta, no organizando la lucha por el poder, sino continuando las expropiaciones. En lo Curro, sin embargo, se impone la línea de la dirección del P" C". El propio presidente Allende, quien preparaba su viaje a la URSS para solicitar angustiosamente ayuda (que como hemos visto le será negada), se pone de su lado.

No obstante, el fondo del pensamiento de la dirección del P" C" no consiste sólo en no seguir avanzando y "consolidar" lo logrado, sino en retroceder para llegar a un punto de acuerdo con la DC. Se propone retroceder en cuanto al número de empresas a pasar al

área estatal; en cuanto al rechazo que existía a aplicar la política exigida por el organismo yanqui, de control económico de los países latinoamericanos, llamado Fondo Monetario Internacional; en cuanto a la política de nivelar los sueldos y salarios con el alza desorbitada del costo de la vida, etc. En la reforma agraria se propone estabilizar lo ya expropiado y no continuar avanzando. Haciendo un juego de palabras para ocultar ese retroceso que reclaman y mostrando de paso a qué obedecía, Víctor Díaz, miembro del CC. del "PC", señalaba en una entrevista concedida el 22 de junio de 1972: "Consolidar es avanzar, y en esa misma medida, un acuerdo con la Democracia Cristiana, eventualidad que se hace posible, es un hecho positivo". (46) Volodia Teitelboim, por su parte, para imponer el compromiso con la DC que anhelan, desarrolla por su cuenta la "campaña del terror" y escribe: "no queremos para este país ni la suerte de un Vietnam invadido, ni un Santo Domingo, ni una Guatemala. Deseamos que los problemas de nuestra nación sean resueltos por la mayoría.... sabiendo.... que esta disputa no puede sobrepasar los límites que hagan saltar los carriles institucionales para precipitar la lucha hacia un camino que no tiene regreso.... creemos que se está jugando con fuego...me parece horrible el maridaje oscuro que, en nombre de la ley, se mantiene con la violencia. Estamos contra toda forma de violencia que pueda despeñar al país en una lucha fratricida. Pero así como se necesitan dos para pelear, también se necesitan dos para evitar la querrela. Y a este respecto creemos que la responsabilidad no es sólo de la UP, sino también del PDC y de toda la gente... que considera que los hombres justos pueden salvar al país de.... la catástrofe". (47) Intervenciones como ésta, de "profundo contenido marxista", acentuadas durante su campaña a senador, motivarían que un dirigente del Partido Nacional le preguntara en un foro: ¿Ud. es candidato a senador "comunista" o a arzobispo de Santiago?

Poco después del cónclave de Lo Curro, como expresión del triunfo de las posiciones del "PC", es nombrado Orlando Millas como Ministro de Hacienda. Se designa, al mismo tiempo a Luis Figueroa, presidente de la CUT y dirigente del "PC", como Ministro de Trabajo, para frenar más eficazmente la lucha de los trabajadores. Desde su ministerio, Millas, sin consultar a sus aliados, enviará posteriormente un proyecto al Parlamento en el que se reducen a poco más de 40 las empresas destinadas al área estatal (inicialmente la UP había hablado de 250 empresas, luego de 140, posteriormente, de 90, siendo reducidas finalmente por Millas, a alrededor de 42). Así mismo, aceptó para ciertas empresas estatales la tesis de la DC de transformarlas en "empresas de trabajadores", de propiedad de estos. Al mismo tiempo, entró en tratos con el Fondo Monetario Internacional, repudiado expresamente por el programa de la UP, sometiendo a sus exigencias (devaluación de la moneda, congelación de sueldos y salarios, reducción del crédito, etc), obteniendo así un crédito de 42,5 millones de dólares. Más aún, para complacer a sus hipotéticos interlocutores de la DC, dirigentes del "PC", ordenan una violenta represión contra la población popular de Lo Hermida. Siguiendo órdenes emanadas de las oficinas del Subsecretario del Interior, Daniel Vergara, miembro del "PC", como lo demostró la investigación posterior ordenada por el Presidente Allende, se allanó a las 5 de la madrugada del día 4 de agosto de 1972 dicha población, con más de 350 policías armados de metralletas. Un poblador fue muerto y decenas resultaron heridos a bala. Uno de los que dirigió la operación fue el jefe de la policía civil, Carlos Toro, miembro del "PC". Los diarios del "PC" habían publicado en primera página: "¡A pararle el carro a la ultraizquierda!".

A raíz de la represión y de las inconsultas medidas económicas de Millas, surgen protestas de diversos partidos de la UP. Después de constatar, a raíz del viaje de Allende a la URSS en diciembre de 1972, que sus promotores les vuelven las espaldas, la prisa de la dirección del "PC" por lograr el acuerdo con la DC se transforma en verdadera desesperación. Ya ni siquiera se dignan a consultar a sus aliados y proceden dando un verdadero golpe de Estado en el seno de la UP. Más adelante procederán a dividir sin contemplaciones al MAPU, haciendo uso de sus infiltrados en dicho partido, por haberse apartado, a raíz de un Congreso interno, de sus posiciones. A fines de enero de 1973, el PS declara: "Ante la declaración formulada por el Ministro de Economía, Orlando Millas, y el anuncio de un proyecto de ley enviado al Congreso Nacional sobre definiciones del área social, mixta y empresas denominadas 'casos especiales' (estas eran las empresas de trabajadores prometidas por Millas a la DC), la Comisión Política del Partido Socialista ha resuelto expresar públicamente que dichas decisiones no han sido consultadas a nuestro partido y que, ade-

más, no compartimos su contenido". La IC, por su parte criticaba al gobierno por haber reiniciado, pese a las divergencias de criterio existentes al respecto en la UP, "las frustradas conversaciones con la DC" y por haber anunciado "las bases de una nueva política económica, en circunstancias de que los dirigentes de la UP son informados de tal política sólo varios días después".

No obstante, el contenido de las críticas de algunos partidos de la UP a la política de los dirigentes del "PC", no lograba apuntar a las verdaderas motivaciones de ella, ni ofrecían una alternativa correcta. A menudo, influenciadas por ideas trotskistas, sostenían que los "errores" de la política del "PC", derivaban de que éste se resistía a avanzar de inmediato) y que, por ello, propiciaba una alianza con sectores de la burguesía no monopolista, al imperialismo y a los terratenientes, concibiendo la revolución por etapas. Estas ideas, enteramente justas en el caso de Chile, pero como estrategia de un frente único dirigido por el proletariado, nada tenían que ver, sin embargo, con la estrategia del equipo de dirigentes del "PC". Estos, no buscaban una alianza con ciertos sectores no monopolistas de la burguesía y con las capas medias -lo que habría sido justo- para combatir y aniquilar a los enemigos principales ya mencionados. Por el contrario, la buscaban para presionar, amenazando con su aislamiento a los sectores monopolistas de la burguesía, a las empresas imperialistas y a los terratenientes, y obtener así una alianza con esos mismos sectores dominantes, a expensas de los intereses de los trabajadores y de las capas medias. Para constatar lo anterior, basta considerar la política propuesta por Millas. La reducción de número de empresas monopolistas destinadas a pasar al área estatal, no es una medida en beneficio de los sectores medios, sino de la gran burguesía; la detención de la expropiación de latifundios y la oposición a que sus reservas se reduzcan de 80 hectáreas básicas de riego a 40 hectáreas, no es en favor de los campesinos medios, sino de los grandes terratenientes; las garantías al imperialismo para crear empresas mixtas con el Estado, son en favor de los monopolios yanquis: la aplicación de la política del Fondo Monetario Internacional, directamente contra la burguesía media y contra los trabajadores, es favorable a los grandes intereses imperialistas; por último, el freno y la represión de toda movilización de masas y el apego estricto a las instituciones y leyes del Estado burgués, sólo favorece a los sectores imperialistas, de la gran burguesía y terratenientes que controlan el poder estatal. Si bien los dirigentes del "PC", anhelan reemplazar como burguesía burocrática a esos sectores dominantes, en su impotencia para lograrlo en las condiciones de Chile y siguiendo la estrategia del social-imperialismo, lo que desean es aliarse con ellos o con parte de ellos, para desarrollar el capitalismo de Estado. Esta política no tiene nada que ver con la formación de un frente único nacional anti-imperialista, anti-monopolista y contra los latifundistas, dirigido por el proletariado, y destinado a aislar y aniquilar a dichos enemigos y conquistar el poder para el pueblo. Es preciso no olvidar respecto al falso "comunismo", las enseñanzas de Lenin, cuando señala: "Los oportunistas son enemigos burgueses de la revolución proletaria. En épocas pacíficas realizan su trabajo burgués enmascarados, encontrando refugio dentro de los partidos obreros; en tiempos de crisis aparecen inmediatamente como abiertos aliados de toda la burguesía unida, desde su sector conservador hasta el más radical y democrático, desde los librepensadores hasta los sectores religioso y clerical. Aquel que no haya comprendido esta verdad -concluye- después de los que nos acaba de ocurrir, está irremediablemente engañándose a sí mismo y a los obreros". (48) Justamente el trabajo "enmascarado", tras el "refugio de los partidos obreros", hizo olvidar a los sectores honestos de la izquierda tradicional chilena, el verdadero carácter de quienes adulteran el marxismo para transformarse, primero en aliados de los explotadores y, más adelante, ellos mismos en explotadores. Esta última tendencia, se ha visto notablemente acrecentada en nuestra época, en que falsos "comunistas" han logrado el poder e implantar el capitalismo de Estado, en una serie de países.

La política que describimos de Orlando Millas, comenzaba a mediados de 1972, se prosigue en 1973. no obstante que, lejos de llegar a acuerdo con ellos, el PDC, se embarca en la ofensiva abierta y en el paro patronal de octubre de 1972, destinado a derrocar al gobierno. Dicho paro, ofrecía condiciones favorables a la directiva del "PC" para obtener la rendición del gobierno y el ansiado acuerdo con la DC, que perseguían. Sin embargo, surgió un inconveniente a sus planes: el paro, motivó una intensa combatividad y movilización popular y fue derrotado, en particular, por la firme actitud de la clase obrera. Los

dirigentes del "PC", sin embargo, en momentos en que era plenamente posible e indispensable emprender una contraofensiva para aplastar a los sectores golpistas en retroceso, se las arreglaron para transformar una victoria popular en una derrota del gobierno. Se nombró un gabinete integrado por las FF.AA., al cual se le atribuyó la "solución" del paro ya en plena desintegración; se desmovilizó al pueblo, planteando las elecciones de marzo de 1973, como el procedimiento para dirimir los conflictos con la oposición y se realizaron vergonzosas concesiones a los derrotados: a los promotores del paro. Se otorgaron garantías económicas para que se mantuviera en manos privadas el monopolio del papel, una de las consignas centrales de la oposición; se acordó devolver la radio Agricultura de Los Angeles y el diario El Sur de Concepción, intervenidos por el gobierno por incitar a la sedición; se anulaban las atribuciones de las JAP y aquellas que habían conquistado los cordones industriales a través de la lucha contra el paro; fueron anulados los procesos contra los dirigentes del paro y se dió garantías de que el transporte permanecería en manos privadas; se tomó el compromiso de devolver los establecimientos y empresas industriales ocupados por los trabajadores a raíz de su paralización o para evitarla; se retiró de la lista de empresas a expropiar la distribuidora mayorista CODINA, verdadera central de oposición para fomentar el desabastecimiento y el mercado negro, etc. A estas medidas que salieron a la luz pública, se suman los acuerdos secretos de Millas con la DC que, como hemos visto, ni siquiera fueron conocidos por los partidos de la UP.

¿Qué ocurrió, finalmente, después de esta política de traición a los intereses populares en aras del pacto con la DC? La propia dirección del "PC" lo esclarece en un documento aparecido en marzo de 1976, cuando afirman: "En junio de 1972, siendo presidente de la DC, el senador Renán Fuentealba, estuvo a punto de firmarse entre este partido y la UP un conjunto de acuerdos que se materializarían en leyes. Se abría la posibilidad de llevar a la práctica tanto el programa de la UP como el enarbolado en la campaña presidencial por Radomiro Tomic. En ese momento, tales coincidencias pusieron furiosos a los mismos fascistas que hoy se encuentran transitoriamente en el poder. En el momento mismo en que iba a ser firmado tal acuerdo patriótico, fue el propio Frei quien se jugó con todos sus medios para exigir la anulación del acto". Siendo el hecho del pacto cierto, las condiciones en que sostienen se firmaría, son absolutamente falsas pues, como ya hemos visto, el acuerdo no se basaba en el programa de la UP y ni siquiera en las reformas más avanzadas del programa de Tomic, sino en vergonzosas concesiones a los intereses imperialistas y reaccionarios que estaban detrás de Frei. Era con éste con quien se buscaba el acuerdo, utilizando para ello como instrumentos a los sectores del PDC más cercanos a la UP. Prueba de ello es que Frei pudo imponer su anulación, sin que el ala de izquierda de la DC se jugara para exigir la materialización de esas reformas. La intuición de vastos sectores medios y de trabajadores de la DC, que conocen los sistemas opresivos y de explotación existentes en la URSS y en sus "aliados" del Pacto de Varsovia, y confunden eso con "socialismo" y "comunismo", le permitió y le permite aún hoy a Frei, oponerse a la alianza con una coalición en la que juega un papel dominante la dirección del "PC" pro-soviético. Naturalmente, Frei, aprovecha esa confusión de las bases del PDC y no deja translucir sus verdaderos móviles: servir la política del imperialismo norteamericano y de fuerzas reaccionarias internas.

Si hemos incluido los esfuerzos de la directiva del "PC" por obtener a cualquier precio una alianza con la DC en este capítulo, en el que analizamos las pugnas de las dos superpotencias en torno a Chile, es porque se trata de una política directamente impuesta como estrategia por los dirigentes soviéticos. Si bien Corvalán en una entrevista mencionada en este libro se define a sí mismo y a su partido como "sovietincha", la verdad es que es mucho más que eso. Un "hincha" es alguien que admira una institución o a una persona espontáneamente (sea un equipo de football o un artista), pero la relación de Corvalán y los otros dirigentes del "PC" con la burocracia soviética no es sólo de simple admiración, sino de dependencia y subordinación. Más aún, se trata de uno de los núcleos dirigentes más serviles e incondicionales respecto a los líderes soviéticos, del mundo entero. Ya hemos señalado en la primera parte de este libro, como el "PC" chileno, que llevaba cerca de 11 años sin realizar un congreso, a los pocos meses del XX Congreso del PCUS, efectuó uno exclusivamente para trasladar a Chile la línea aprobada por la URSS. Se han dado casos en que la lista de miembros del Comité Central del "PC" ha sido conocida escuchan-

do radio Moscú, antes de que estos fueran "elegidos" en un congreso en pleno desarrollo en Chile. En relación con la polémica de los marxistas-leninistas contra el revisionismo contemporáneo, no sólo se alinearon, sin debate alguno, con la dirección soviética, sino que, obligaron a todos sus dirigentes y cuadros sindicales importantes a redactar artículos contra los partidos comunistas de Albania y China. Cuando se efectuó la invasión soviética a Checoslovaquia fue el primer partido en el mundo que dió a dicha invasión su aprobación pública. Atacaron, además, públicamente, a los dirigentes cubanos cuando estos, inicialmente, exhibían ciertos rasgos de independencia frente a los soviéticos.

La línea que impulsaron, en forma obsesiva y ciega, de alianza con la DC, no era más que una aplicación de lo que les imponían los dirigentes soviéticos. Era la línea soviética para Chile (y en ciertos aspectos para América Latina), aplicada fielmente por sus agentes en nuestro país. En este sentido, los dirigentes del "PC", vienen a ser precursores (precursores fracasados eso sí) del "compromiso histórico" de Berlinguer en Italia, así como de la línea que se empeñan en aplicar Marchais en Francia y Carrillo en España, pese a los rasgos de independencia que se esfuerzan por aparentar ante la URSS. Lo ocurrido en Chile, explica en cierto modo algo que parece sorprendente a muchos en Europa y que consigna, por ejemplo, Jean Pierre Vigier, antiguo miembro del C.C. del P" "C" francés, en *Le Monde* del 22 de julio de 1976, cuando escribe: "La situación se ha degradado hasta un punto tal que se asiste al espectáculo sorprendente de un gran partido obrero (el P.C. Italiano) que hace esfuerzos desesperados por no llegar al poder". Si se piensa bien, es la misma lógica que inspiró al P" "C" de Chile y es natural que así sea pues, ambos obedecen al mismo centro dirigente.

La fidelidad a dicha línea foránea explica incluso, la forma en que se dió el desenlace de la situación en Chile, cuando se puso ya en ejecución el golpe de Estado. Luego del fracaso del pacto con Fuentealba, de la renuncia de Prats, que constituía su punto de apoyo en las FF.AA., del control ya oficial del PDC por el sector freista y existiendo la evidencia de que el golpe era inevitable, el empeño de los dirigentes del P" "C", estuvo destinado a impedir todo germen de resistencia al golpe en ciernes. Lo hicieron, políticamente, levantando aún con más fuerza la consigna suicida desmovilizadora: "no a la guerra civil", la cual, obviamente, no servía en absoluto para detener a los militares golpistas que, por cierto, obedecían consignas de sectores bien diferentes al P" "C", sino, para frenar a los sectores populares que quisieran resistir al golpe y a eventuales sectores de las FF. AA., fieles al gobierno. Y no se trató solamente de consignas. Meses después del golpe se podía encontrar en el exilio militantes del P" "C" que, en su ingenuidad, alababan la "previsión" de sus dirigentes, que semanas antes del golpe les habían hecho entregar las pocas armas que habían acumulado en algunas industrias. Se dieron casos, como el de los dirigentes del carbón, miembros del P" "C" y a la cabeza de una poderosa agrupación proletaria que disponía, por razones de su trabajo, de abundante dinamita que, mientras las FF.AA., vacilaban en aventurarse en dichas minas, esperando allí una dura resistencia, esperaban en sus locales sindicales, vanamente, las instrucciones de sus dirigentes, por cierto, instalados ya en alguna embajada. Finalmente, fueron encontrados en esos locales por las FF.AA., y fusilados allí mismo. Por último, el dirigente máximo de la CUT, miembro dirigente del P" "C", Jorge Godoy, es presentado por la Junta Militar en los días en que el golpe de Estado estaba en plena ejecución, ante una cadena de televisión, desde donde hace un llamado a deponer toda resistencia y a colaborar, traición, que no se justifica con el pretexto de ninguna presión, cualquiera que ella sea, para quien se supone revolucionario. ¿A qué se debe esta vergonzosa actitud de los dirigentes del P" "C" de facilitar el golpe de Estado, desmontando y desalentando toda posible resistencia? Se debe a que confiaban en que a los pocos meses de derribado el gobierno de Allende, las FF.AA., entregarían el mando a Frei, quien, incluso, se había hecho elegir presidente del Senado para exhibir un derecho "legal" de sucesión, contemplado por la Constitución, pues, también pensaba que heredaría el mando. De este modo, los dirigentes del P" "C", puesto que había fracasado su estrategia de impedir el golpe a través de una alianza con la DC durante el gobierno de Allende, se disponían a seguir presionando por esa alianza desde el exilio, ofreciéndose como colaboradores de Frei y su equipo. Para lograr eso, era indispensable exhibir su capacidad de frenar toda resistencia al golpe de Estado y con mayor razón el peligro de una guerra civil sobre la

base de una eventual separación de una parte de las FF.AA. Lo que no calcularon, ni ellos ni Frei, es que los militares golpistas estuvieran dispuestos a perpetuarse en el gobierno. Con todo, aunque en condiciones muchísimo más difíciles, no han abandonado "su" estrategia e insisten en ella, pese al repudio con que les responde el sector freista, que no ignora que una alianza de esa especie es inaceptable para EE.UU., y su eventualidad anterior, fue una de las razones por las que se dió el golpe de Estado.

CAPITULO V

LA POLITICA DE EE. UU. FRENTE AL GOBIERNO DE LA UP

1.- El Fracaso de la Alianza para el Progreso de Chile.

Resulta fundamental para comprender la política de EE.UU., en relación al gobierno de Allende, tanto analizar los cambios que se dan a partir de 1969 en el gobierno y en la política norteamericana, como la suerte que corrió en Chile la política aplicada por las administraciones demócratas durante el gobierno de Frei. Durante la administración de Kennedy, Chile, fue elegido como país piloto para ensayar la política llamada de "Alianza para el Progreso". A través de dicha política se perseguía en el aspecto económico, dos objetivos básicos: por un lado, contribuir a desarrollar el capitalismo dependiente, obteniendo, al mismo tiempo, el control por parte de los inversionistas norteamericanos del sector más rentable de la industria manufacturera; por otro lado, sobre la base de ese desarrollo capitalista subordinado al capital monopolista, se deseaba ampliar allí a ciertos sectores industriales de EE.UU., los mercados de venta de maquinarias, tecnología, materias primas, repuestos, etc. En el aspecto político, se trataba de utilizar las reformas necesarias a ese desarrollo capitalista (algunas de ellas opuestas a los intereses de la oligarquía terrateniente y de ciertos monopolios criollos), para desarrollar —a través de una intensa publicidad demagógica— un movimiento populista, que sirviera de freno a una oposición revolucionaria o a la exacerbación de tendencias nacionalistas anti-imperialistas.

Esta política del sector demócrata de EE.UU., representaba, fundamentalmente, los intereses de las industrias de punta, como: la electrónica, la petroquímica, la mecánica de precisión, etc. así como sociedades de servicios y grandes firmas comerciales. Dichos monopolios tenían tanto interés en invertir, con vistas a un mercado latinoamericano ampliado por los pactos regionales, como, sobre la base de un desarrollo capitalista, vender lo que fabrican en EE.UU. Se produjo, por ejemplo, disgusto en estos sectores cuando el Eximbank negó un crédito al gobierno de Allende, por 21 millones de dólares, solicitado para comprar 3 aviones Boeing para la Línea Aérea Nacional de Chile. El New York Times, representante de estos intereses, publicó un artículo el 2 de septiembre de 1971, en el que se expresa: "Los parados de la industria aeronáutica de Seattle apreciarán ciertamente muy poco las maniobras de Washington contra Chile, que conducen a dar trabajo a los obreros soviéticos en las fábricas Ilyuchin, puesto que se fuerza a los chilenos a apropiarse en la URSS". Y el Washington Post, otro de los periódicos que se ha caracterizado por su oposición al golpe de Estado en Chile y a la Junta Militar, señalaba al respecto: "No es sólo contra Chile hacia donde Estados Unidos agita su garrote, sino hacia toda Iberoamérica y a todo el mundo".

Expresando estos conceptos, el presidente de la National Association of Manufacturers señalaba: "No puede haber mayor falacia que la creencia de que nuestro comercio de exportación depende del retardo económico de otros países. El principal obstáculo que tenemos en el comercio de exportación con América Latina es el bajo poder adquisitivo del pueblo. Ese mercado está creciendo no a través del incremento de la riqueza de materias primas, sino a través de la industrialización. La historia demuestra que cuando el pueblo de cualquier país halla negocios lucrativos en la industria, crece su consumo, creando una mayor demanda de bienes extranjeros y nacionales. Los mejores consumidores no son los países predominantemente productores de materias primas, sino aquellos que han desarrollado industrias". Un informe producido ya en 1934 por la misma Asociación, señalaba: "Debe recordarse siempre que el valor económico del intercambio entre Estados Unidos y otros países aumenta en proporción al desarrollo de los países con los cuales se intercambia. Existe la difundida opinión de que si las naciones que anteriormente tenía escasa o ninguna actividad industrial desarrollan una considerable industria, reducirán en consecuencia el mercado de exportación de las industrias norteamericanas. Sin embargo ésta no es una consecuencia necesaria. Abundantes estadísticas demuestran que, a medida que aumenta la industria, aumentan también el poder de compra y con él la demanda de impor-

taciones. Se sigue por lo tanto que los esfuerzos para elevar los niveles de vida de los países atrasados mediante el uso intensivo de sus recursos son beneficiosos para los Estados Unidos". Por su parte, Alberto Hirschman, miembro de la Junta de Gobierno del Federal Reserve System, decía: "Posiblemente la razón más importante de nuestra falta de temores acerca de la industrialización en el extranjero reside en la composición de nuestra exportación. En contraste con un país como el Reino Unido, nuestras exportaciones consisten típicamente en artículos que son adecuados sea para aumentar la producción (máquinas, herramientas y otros bienes de capital) o para niveles de ingresos elevados y crecientes (automóviles y otros bienes durables). Por esta razón nuestras exportaciones no sólo no son amenazadas por la industrialización en el extranjero, por el contrario, ganan considerablemente con la expansión de la producción y la elevación de los ingresos en otras regiones del mundo. Esto contrasta marcadamente con lo que ocurre en aquellos países industriales cuyas exportaciones se basan fundamentalmente en artículos como textiles, cuya producción se halla entre las primeras que inician los países que se industrializan. Además agrega, Estados Unidos exporta también en cantidades sustanciales materias primas industriales como algodón, petróleo, etc., y estas exportaciones ganan directamente con la expansión manufacturera en el Extranjero". (49)

En todo caso, la política de la Alianza para el Progreso, preconizaba también las inversiones norteamericanas en las industrias más rentables en desarrollo, por lo mismo, se beneficiaba doblemente del proceso de industrialización en América Latina: aumentando la venta de bienes de capital y bienes suntuarios, así como de materias primas; y, apoderándose directamente de dicho desarrollo en su parte más lucrativa.

Es a los monopolios tradicionales, dedicados a la extracción de materias primas en los países dependientes, a quienes no convenía el desarrollo industrial en dichos países, que trae aparejado, tanto la exigencia de mayores remuneraciones en las empresas a través de las cuales explotan esas riquezas; como la tendencia a recuperarlas, para utilizarlas dentro del país en el desarrollo industrial. Por ello, en general se oponen a toda política más liberal, que permita a los trabajadores luchar por mejores ingresos, así como al desarrollo capitalista dentro de los países dependientes. Por lo mismo, sus aliados políticos preferidos, son los grandes terratenientes y los monopolios criollos, que frenan y se oponen al desarrollo capitalista y están dispuestos a hacer menos concesiones a los trabajadores y a aplicar una represión más dura.

Habiendo constatado la administración Kennedy, que no era posible apoyarse —por su carácter extremadamente retardatorio y opuesto a toda reforma— en los partidos tradicionales de la derecha oligárquica y monopolista, comenzó a buscar nuevos sectores de clases más dinámicos y otra fuerza política, como instrumento de sus planes. Es así como, a partir de 1961, año en que el gobierno norteamericano realiza en la Conferencia de Cancilleres de Punta del Este (Uruguay), su formulación de la Alianza para el Progreso, explora ya la posibilidad de utilizar para su nueva política al Partido Radical o a la Democracia Cristiana. Al año siguiente, ya ha tomado una decisión en favor de ésta última.

A la luz de los antecedentes públicos referentes a la ayuda y a los préstamos otorgados por los organismos internacionales de crédito en los que decide la influencia de EE.UU., al gobierno de Frei; y, de los antecedentes secretos, revelados parcialmente a través del Informe del Senado norteamericano sobre la intervención de la CIA en Chile, resulta claro que el PDC es, prácticamente, una hechura de la CIA y del gobierno de EE.UU. Esto, a pesar de su militancia de extracción popular, engañada por medio de una propaganda multimillonaria, que debe haber sido la más sorprendida al conocer el origen de los medios económicos de que se valieron sus dirigentes, para transformar al PDC en el primer partido de Chile por su influencia y su votación.

El apoyo de EE.UU., a la DC, como señalábamos, reviste dos aspectos básicos: la "ayuda" económica abierta proporcionada por organismos de crédito controlados por EE.UU.; y, el apoyo encubierto proporcionado por la CIA y, a través de ella, por empresas multinacionales. Respecto al primer aspecto, basta decir, que la deuda externa durante el gobierno de Frei, ascendió a unos 3.130 millones de dólares, al 31 de diciembre de 1970. Con razón, el Director de la Misión Económica de EE.UU., en Chile, Sidney Weintraub, señalaba el 2 de octubre de 1969: "Chile representa aproximadamente el 3,5 por ciento de la población de América Latina, y en los últimos años ha recibido cerca del 12 por

ciento de la asistencia económica de los Estados Unidos a latinoamérica. Evidentemente Chile ha recibido un trato preferencial... Chile ha recibido más ayuda 'per cápita' que prácticamente cualquier otro país del mundo".

En relación con el apoyo encubierto de la CIA, confesado por ésta ante la Comisión del Senado norteamericano que investiga su intervención en Chile, la DC, se beneficia de proyectos promovidos y financiados por la CIA ya a partir de los años 50 entre campesinos, pobladores, trabajadores organizados y estudiantes. Toda esta actividad es volcada más adelante en favor de la DC. La ayuda directa, sin embargo, comienza en 1962, año en que la CIA realiza una primera entrega de 230 mil dólares —según su propia expresión— para "construir" el PDC. Es así, como dicho partido se transforma ya en las elecciones municipales de abril de 1963 en el partido más influyente de Chile, con el 22,7 por ciento de los votos. Antes, la Falange Nacional, partido del que habría de nacer el PDC y del que surgieron sus principales dirigentes, obtuvo en 1949 apenas el 3,9 por ciento de los votos y en 1953 bajó al 2,8 por ciento. Posteriormente, se asignan para la campaña presidencial de Frei en 1964, tres millones de dólares. Aparte de eso, como lo consigna el Informe del Senado yanki, la CIA financia grupos estudiantiles pro-DC, de mujeres, de profesionales, de pobladores y de campesinos. La intervención (que el señor Frei con el mayor cinismo dice haber ignorado), llegó al colmo, como lo reconoce también el Informe del Senado norteamericano, de constituirse en la capital de EE.UU., un "comité electoral", destinado a darle una orientación "a la americana" a la campaña. Dicho comité estaba integrado, nada menos que, por el Secretario de Estado Asistente para Asuntos Interamericanos, Thomas Mann; por el Jefe de la Misión de la CIA para el hemisferio Oeste, Desmond Fitzgerald; y por Ralph Dungan y Mc George Bundy, representantes de la Casa Blanca. Un comité paralelo, en plena coordinación con el formado en Washington, se organizó en Chile con representantes de la Embajada y jefes de la Estación Local de la CIA. (50)

Para valorar la magnitud, sin embargo, del apoyo financiero a la DC es preciso considerar dos aspectos: en primer lugar, que se trata de los aportes confesados por la CIA; y, en segundo lugar, que como se trata de aportes secretos, dichos dólares son cambiados en el "mercado negro" donde son cotizados a varias veces su precio oficial. Durante el gobierno de Allende la CIA reconoce haberlos cambiado a 5 veces su precio oficial, pero hubo períodos en que la diferencia fué mucho mayor. Basta decir que por ciertos meses, durante dicho gobierno, era posible pagar el salario mínimo obrero mensual con un dólar vendido en "mercado negro". Respecto al monto de la ayuda, hay periodistas como Bernard Collier del New York Times, que sostiene que alrededor de un millón de dólares mensuales fue girado de EE.UU., durante la mayor parte de la campaña presidencial de 1964. La ayuda de los partidos demócrata cristianos de Europa a Frei, dicho periodista, la estima en no menos de 20 millones de dólares. A todo esto, es preciso sumar el apoyo de un millón y medio de dólares ofrecidos para dicha campaña por los representantes de empresas multinacionales con intereses en Chile, que la CIA confiesa públicamente, fueron entregados por consejo suyo a la DC a través de un "hombre de negocios".

Como consecuencia de este gigantesco apoyo, Frei, obtiene en la elección presidencial de 1964, el 56,09 por ciento de los votos y la seguridad de ese triunfo, permite a la Embajada norteamericana y a la CIA, rechazar en vísperas de esa elección, nada menos que tres ofertas de golpe de Estado, que le fueron planteadas con la participación de diversos sectores del "democrático" y "constitucionalista" ejército chileno, para el caso que Allende triunfara.

La ayuda encubierta de la CIA, continua a través del gobierno mismo de Frei, para afianzar políticamente su actuación al servicio de la política norteamericana. En 1965, el 303 Comité del que depende la CIA (precursor del 40 Comité) autoriza 175 mil dólares para apoyar a un grupo de candidatos seleccionados por la Embajada norteamericana, que serían presentados a la elección parlamentaria de marzo de ese año. En dicha elección, la DC, se transforma en partido mayoritario en el Senado y controla la mayoría absoluta de los votos de la Cámara de Diputados. Las condiciones, pues, para aplicar la política llamada de Alianza para el Progreso, son casi inmejorables. No obstante, no satisfecha con el apoyo directo a la DC, la CIA, monta por cuenta propia, una "campaña masiva de propaganda anti-comunista" (tanto antes como después de la elección presidencial), y

confiesa haber gastado otros 2 millones de dólares en 20 proyectos encubiertos para ser aplicados entre 1964 y 1970. Entre ellos, la promoción de un movimiento populista entre pobladores y campesinos (surgen por ese entonces tres centrales sindicales pro-DC en el campo); el apoyo a un grupo femenino anti-comunista; el estímulo a corrientes de oposición a la CUT; el financiamiento de abundantes afiches y propaganda de todo tipo; la edición de algunas publicaciones; y, por último, un fuerte apoyo económico al periódico "El Mercurio", en el que confiesan haber inspirado editoriales casi a diario. (51)

Por cierto, todos estos desembolsos no se realizan por simple amor a la "democracia" o a fondo perdido. Frei, debe retribuirlos favoreciendo las ganancias de los monopolios norteamericanos y su penetración en la economía chilena, y, en general, aplicando las reformas que para ello preconiza la política calificada como Alianza para el Progreso. Siguiendo los dictados de esa política, Frei, fortalece las empresas estatales, con las que los inversionistas yanquis desean asociarse en empresas mixtas; materializó varias asociaciones de ese tipo, realizando vergonzosas concesiones a los intereses imperialistas; impulsó la reforma agraria (así como la sindicalización campesina y el salario mínimo campesino), para desarrollar el capitalismo en el campo, reforma exigida por EE.UU., no para favorecer al campesinado, sino para aumentar el mercado de consumo en las industrias con inversiones norteamericanas; perfeccionó la preparación de mano de obra para dichas industrias a través de cursos de capacitación; impulsó una reforma tributaria, para facilitar el financiamiento de toda una infraestructura necesaria al desarrollo del capitalismo dependiente; y, por último, promovió la integración de Chile al Pacto Andino y a otros acuerdos regionales en el Continente, medida reclamada también por los inversionistas yanquis en la industria manufacturera, a fin de ampliar los mercados de venta.

Se empeñó, así mismo, como lo exigían sus promotores, por desarrollar especialmente con sectores no proletarios de pobladores, dueñas de casa, campesinos, estudiantes, etc. un movimiento populista destinado a apoyar su reformismo pro-yanqui, al que califica de "Revolución en Libertad". Todo este movimiento es promovido a través de actividades de bajo costo para el gobierno, como: cursos de artesanía, cooperativas de producción, trabajos de verano del estudiantado, asociaciones de dueñas de casa, etc., y por medio de una intensa propaganda demagógica que presentaba la política del gobierno como "revolucionaria" y "anti-oligárquica", alabando, al mismo tiempo, la "generosa" ayuda norteamericana otorgada a través de la Alianza para el Progreso.

Por otra parte, Frei, cumple plenamente con el anhelo de los inversionistas, representados especialmente por la administración demócrata (inversionistas relativamente diferentes a aquellos tradicionales, que sólo se interesaban por apoderarse de las materias primas), abriendo plenamente las puertas del país a la penetración de sus capitales en las industrias más rentables. Este propósito de apoderarse de la industria manufacturera, correspondía a una política de inversiones casi general en América Latina, al servicio de la cual, precisamente, estaban las reformas preconizadas por la llamada Alianza para el Progreso. Según la publicación "Survey of Current Business", del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, "Las inversiones privadas directas norteamericanas en el sector manufacturero latinoamericano, aumentaron de 1.520 millones de dólares en 1960 a 6.460 en 1973".

Por lo que respecta a Chile, desde el comienzo del gobierno de Frei y hasta finales de 1969, las inversiones totalizan más de 320 millones de dólares. La inversión en la industria manufacturera, salta —en relación a la inversión en otras ramas de la economía— de un 3 por ciento en 1953 a un 7,8 por ciento al comenzar la administración demócrata cristiana y, luego, a un 14 por ciento en 1968. No obstante, en el caso de Chile, estas cifras no dan una idea clara de los esfuerzos yanquis por apoderarse de la industria manufacturera, debido a las grandes inversiones ya existentes en las minas de cobre. Dichas inversiones en la industria aumentan más rápido que en cualquier otro país del Pacto Andino, creciendo de 22 millones de dólares en 1960 a 68 millones en 1969, es decir, en más de un 300 por cien. Al mismo tiempo, se va registrando un rápido desplazamiento por parte de EE.UU., de otros países, en la proporción que ellos ocupaban en las inversiones en la industria. Los capitales yanquis, que ocupaban en 1964 el 59 por ciento en el conjunto de inversiones extranjeras, pasan a ocupar en 1968 un 75 por ciento.

Frei, paga el "generoso" aporte norteamericano a su candidatura y a su gobierno, no

sólo facilitando la entrega de la industria chilena y aplicando fielmente la política de la Alianza para el Progreso, sino que, además permitiendo a los monopolios yankis una intensificación sin precedentes de sus ganancias en Chile. Ellas, durante el gobierno de Frei, sobrepasan los mil millones de dólares, duplicando en promedio mensual de utilidades de los últimos 32 años anteriores a su administración. Esto significa, que los monopolios norteamericanos se llevaron durante su gobierno en utilidades declaradas, una suma cercana al total de inversiones que tenían en Chile. Entre los procedimientos que utilizó para facilitar la intensificación del saqueo norteamericano de las riquezas de Chile, se cuentan la constitución de algunas empresas mixtas, en condiciones vergonzosamente favorables al capital foráneo. Entre ellas, a modo de ejemplo, podríamos citar la empresa mixta formada entre el Estado y algunos monopolios norteamericanos que explotaban el cobre en Chile, a lo que Frei —no sin sentido del humor negro— llamó la “chilenización del cobre”. Respecto al mineral “El Teniente”, el gobierno de Frei lo “chilenizó” comprando en 80 millones de dólares el 51 por ciento de las acciones. La Kennecott, propietaria de la mina, se comprometió a prestar a la sociedad mixta que se constituía esa suma, a 15 años plazo con un interés de 4,5 por ciento pagadero en dólares y exento de todo impuesto, con lo que ganaba otros 35,5 millones de dólares suplementarios. No obstante, lo más monstruoso del asunto es que el valor contable de la empresa, de la cual se adquiriría el 51 por ciento, era en 1963 sólo de 65 millones de dólares, sin mediar ninguna inversión posterior. Las instalaciones de la mina eran el sólo aporte de la Kennecott a la operación de “chilenización”. Por lo tanto, al pagar el gobierno 80 millones por la mitad de las acciones (51 por ciento), le estaba reconociendo, graciosamente, al monopolio norteamericano 160 millones de dólares, donde sólo tenía invertidos 65 millones. Con razón la publicación “Hanson’s American Letter”, editada en EE.UU., para los inversionistas en América Latina, opinaba: “Se debe conceder que Frei ha hecho tanto por los inversionistas extranjeros en Chile —mucho más allá de sus mayores expectativas— que las empresas norteamericanas están comenzando a mostrarse tan optimistas como se sentían los inversionistas tradicionales en Cuba, antes de que Castro se mostrara en escena”. Y agrega la revista: “Chile es la república latinoamericana querida de Washington y, por supuesto, Frei es su cliente favorito”. Luego, la misma publicación da alguna de las razones de ese amor por Frei, cuando dice: “Ningún gobernante de extrema derecha habría tratado a las empresas americanas con la generosidad de la cual Frei ha dado pruebas firmando los acuerdos (se refiere a los acuerdos de “chilenización” del cobre). Sus condiciones, exageradamente favorables, revelaron una tal ausencia de equilibrio y juicio y fueron a tal punto contrarias a los intereses de Chile, que ellas provocaron casi la hilaridad en Washington”.

Debido, entre otras cosas, a ese extremo servilismo de la administración de Frei en relación con los intereses de los imperialistas norteamericanos, condujo al país a una intensa crisis económica en los últimos años de su gobierno. Esto, a pesar, de los enormes créditos de que dispuso y a un precio internacional excepcionalmente favorable del cobre en el mercado mundial, que le reportó 200 millones de dólares suplementarios anuales. Contribuyó a dicha crisis, además, el que, con una reforma agraria incompleta, no logró resolver la crisis de la economía agraria, desatando, en cambio, un poderoso movimiento reivindicativo del campesinado; el que fue atando al país a una gigantesca deuda externa, que llegó a casi 3 millones de dólares en 1969, de la cual el sólo pago de amortizaciones e intereses cada año, consumía cerca de la mitad del presupuesto total de divisas; el que, debido a sus reformas pro-yankis y a su postura demagógica, se enajenó la confianza de los sectores monopolistas criollos y de sectores capitalistas sobre los que éstos influían. Así, pese a que afectó muy levemente sus intereses, no contó con ellos para una política de inversiones y de plena producción.

Como consecuencia de esos y otros factores, la industria que había tenido una tasa de crecimiento promedio de un 7 por ciento en los dos primeros años del gobierno de Frei, desciende a un 2,30 por ciento como promedio en los últimos 4 años. Bajan, al mismo tiempo, las ventas industriales y retrocede la tasa de crecimiento del producto interno. El índice de precios al consumidor llega a registrar un aumento anual de un 36 por ciento a fines de su gobierno y la tasa de cesantía supera el 8 por ciento de la población activa.

Al mismo tiempo, fracasaron los objetivos políticos del movimiento populista, que Estados Unidos exigía y ayudó a montar a Frei, es decir, su papel de frenar el desarrollo

de la lucha de clases. En la misma medida en que ésta iba en ascenso, descendía la influencia electoral de la DC, no obstante, los millones de dólares invertidos para publicitarla, para contrarrestar a sus adversarios y para promover movimientos de masa en su apoyo. La DC, del 42,3 por ciento de los votos, que obtiene en las elecciones parlamentarias de 1965 desciende a un 35,6 por ciento en las de regidores municipales de 1967. Posteriormente, en las elecciones parlamentarias de 1969, sólo alcanzará un 29,7 por ciento.

Respecto a las luchas de masas, no obstante la ayuda permanente que la burocracia sindical del P" C" le presta al gobierno de Frei para frenarla, tan sólo en el año 1967 se producen más de 2 mil conflictos, con más de 2 millones de días-hombre en huelga. Estas cifras se elevan en los 8 primeros meses de 1968, a 4 millones y medio de días-hombre en huelga. En el campo, donde las huelgas eran una excepción en el pasado (5 huelgas en 1963 y sólo 39 en 1964), se desata también, un poderoso movimiento reivindicativo y se inicia el proceso de ocupación de tierras. En los años 1966, 67, 68 hubo 1.688 huelgas campesinas, con la participación de unos 100.000 trabajadores agrícolas. En los 4 meses que van de agosto a octubre de 1969, hubo más de 7.000 trabajadores del campo en huelgas legales y sobre 26.000 en huelgas ilegales, según datos del Ministerio del Trabajo. El gobierno demócrata-cristiano se ve obligado a abandonar su máscara demagógica y a utilizar la represión violenta. Entre muy diversas formas de represión, se ejecutan dos masacres: una de ellas contra los mineros del cobre de la mina El Salvador, donde son asesinados por la tropa 8 personas y heridas más de 60, el 11 de marzo de 1966; y la otra, también con 8 muertos y alrededor de 26 heridos, contra personas sin casa, que habían ocupado unos sitios baldíos en la austral ciudad de Puerto Montt. Las casas provisionales que habían logrado construir, les son incendiadas, junto con todos sus enseres.

Por último, la crisis económica y la represión desatada, así como el creciente descenso electoral del PDC, provocan una intensa crisis interna en el propio partido, donde surgen corrientes de avanzada que cuestionan la política del gobierno.

Tenemos así, que la experiencia piloto de la política de Alianza para el Progreso, que se pretendió ensayar en Chile, experiencia que hacía soñar a sus líderes en una era de, por lo menos, 30 años de gobiernos demócrata-cristianos, fracasó a dos años de comenzada, incluso, en el interior de la DC. Este hecho, es de suma importancia para comprender el cambio de política del gobierno norteamericano, respecto a la Unidad Popular que habría de suceder al gobierno de Frei.

La Unidad Popular, no se enfrenta ya con la política reformista de la administración demócrata, inspirada, como hemos dicho, en ciertos monopolios con intereses diferentes a los que tradicionalmente explotaron a Chile. Es preciso no olvidar que Kennedy, el inspirador de la Alianza para el Progreso, es asesinado, precisamente, como expresión de las contradicciones inter-monopolistas. Una vez elegido como Presidente de EE.UU., Nixon, envía, a latinoamérica a Nelson Rockefeller a investigar los resultados de la política de Alianza para el Progreso. Durante su viaje éste recibe un combativo repudio popular en los países que visita. Después de elaborar Rockefeller su Informe, el Presidente Nixon, hace un discurso trazando las líneas generales de lo que será su política. El Informe del Senado norteamericano sobre la Intervención de la CIA en Chile, señala al respecto: "Tempranamente en 1969, el Presidente Nixon anunció una nueva política hacia América Latina, llamada por él 'Acción por el Progreso'. Se trataba de reemplazar la Alianza para el Progreso a la cual el Presidente la caracterizó como paternalista e irrealista. En su lugar, los Estados Unidos estaban por establecer una 'madura asociación' con los países de América Latina, enfatizando los negocios y no la ayuda. Las trampas reformistas de la Alianza serían abandonadas: los Estados Unidos anunciaron que estaban preparados para comerciar con gobiernos extranjeros pragmáticos" (52) En esencia se trataba de una política de endurecimiento. Se mantendría la política de penetración en la industria manufacturera, pero defendiendo al mismo tiempo, los intereses de los monopolios tradicionales, que operaban en empresas extractivas. El desarrollo de las luchas populares no sería encarado pretendiendo frenarlo a través de reformas y programas populistas, sino, directamente impulsando su represión. Para esto, Rockefeller recomienda en su Informe cuando fracasan los partidos políticos burgueses, **promover directamente a las Fuerzas Armadas a los gobiernos.** No es casual, por lo mismo, que con la ascensión de Nixon al poder, se sucedan una serie de golpes de Estado en Latinoamérica. La Unidad Popular inaugura su gobierno

cuando este proceso está ya en pleno desarrollo.

El gobierno de Allende, intentó poner de su lado o al menos neutralizar a los sectores monopolistas interesados en invertir en la industria manufacturera, centrando su antiimperialismo en los monopolios extractivos que operaban en Chile, así como en aquellos que controlaban los servicios de utilidad pública (ITT). Es así, como frente a una serie de empresas industriales, estatiza la empresa en aquella parte de los capitales correspondientes a inversionistas chilenos y se asocia, en una empresa mixta, con los inversionistas norteamericanos, ofreciéndoles condiciones muy ventajosas. Es el caso de las empresas destinadas al montaje de automóviles en Chile y otras empresas electrónicas, metalúrgicas, petroquímicas, etc. Se llega, por ejemplo, a un acuerdo con la Radio Corporation of America (RCA), en marzo de 1971, a través de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). El gobierno compra sus acciones a los capitalistas chilenos y forma una empresa mixta con el monopolio norteamericano, que controlará el 49 por ciento de las acciones. En acuerdo semejante se establece en la industria de fabricación de neumáticos "INSA". También en marzo de 1971, se llega a un acuerdo de formar una empresa mixta con capitalistas norteamericanos asociada al complejo minero-siderúrgico llamado Compañía de Aceros del Pacífico, donde el Estado controlará el 35,7 por ciento de las acciones, la Armco Steel Corporation el 34,3 por ciento y la Compañía Electrometalúrgica (con capitales del grupo Rockefeller) el 30 por ciento. En la industria química, así mismo, son mantenidas las inversiones del monopolio norteamericano Dow Chemical.

Estas medidas no corresponden a hechos aislados, sino a una política al respecto claramente definida por el gobierno de la UP. El Ministro de Hacienda, Américo Zorrilla, miembro del Secretariado del Comité Central del P"C", en una exposición hecha el 11 de mayo de 1971, ante una asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), expresa: "En el cuadro del proceso revolucionario chileno debe jugar un rol tanto el financiamiento externo como las inversiones de capitales extranjeros, que, orientados hacia objetivos prioritarios, respondiendo a las necesidades de nuestra economía y como complemento de nuestro propio esfuerzo interno, serán la fuente de un dinamismo superior a aquel que han provocado tradicionalmente". Y agrega: "Para esas inversiones extranjeras está abierto el vasto campo de los sectores mixto y privado, a condición que el Estado otorgue su aprobación, garantizando a la vez su interés legítimo y la orientación prevista en favor del desenvolvimiento del país". Tales inversiones ofrecidas a los norteamericanos, eran uno de los incentivos que la URSS ofrecía a EE.UU., en aras de una dominación mutua sobre el pueblo chileno. Por su parte, el Canciller Clodomiro Almeyda, había señalado en el mes de abril de ese mismo año al Secretario de Estado norteamericano, William Rogers, "que no era exacto que el gobierno de Chile se opusiera a las inversiones extranjeras. Sólo las riquezas fundamentales —sostuvo— deben permanecer en manos del Estado, pero hay otras categorías y otros sectores económicos, en el interior de los cuales las inversiones extranjeras son perfectamente posibles.

A título de ejemplo señaló el acuerdo con la Radio Corporation of América".

2.- Nixon y Kissinger se juegan por el golpe de Estado contra Chile.

La política de gobierno norteamericano frente al de Allende, no se da en los marcos de la tendencia reformista y semi-liberal, que aplicó la administración de Kennedy respecto a Chile. Se caracteriza por el endurecimiento y la cancelación de las reformas, recomendados por Rockefeller en su Informe sobre América Latina. La necesidad de establecer la diferencia entre ambas políticas explica, precisamente, el "misterio" de que en el Senado norteamericano un sector haya resuelto investigar a la CIA y sacar los "trapos al sol" de su intervención en Chile. Ello obedece a la intención de un grupo de senadores demócratas, encabezados por Church, ex candidato a la Presidencia de EE.UU., de establecer la diferencia entre ambas políticas con propósitos electorales. La comisión senatorial se preocupa, aunque ocultando por cierto muchos aspectos de la actuación de la CIA y silenciando por completo la participación del Pentágono a través de la DIA (Defense Intelligence Agency), que la intervención bajo Kennedy y Johnson fue diferente a la que aplicara Nixon. En el primer caso habría sido *preventiva*, para asegurar el triunfo de Frei y el apo-

yo posterior a su gestión y, al mismo tiempo, **reformista**, es decir, destinada a apartar al pueblo del "comunismo" más que a reprimirlo.

Para decirlo con las palabras de la comisión Church: "el proyecto para la elección de 1964 formó parte de un acercamiento 'progresista' hacia Chile. El proyecto se justificaba, aunque tal vez no defendible actualmente, por el deseo de elegir reformadores demócratas". En el caso de Nixon y Kissinger, según se pone de manifiesto en el Informe del Senado, se habría actuado exclusivamente con el propósito de derribar al gobierno de Allende. Aunque la primera apreciación no caracteriza, por cierto, la actuación general de las administraciones de Kennedy y Johnson, que acentuaron la guerra contra Vietnam y Camboya, intentaron invadir Cuba y lo hicieron contra República Dominicana, corresponde en lo fundamental a la política aplicada durante el gobierno de Frei en Chile. Es verdad, también, que el gobierno de Nixon, al resultar elegido Allende, se jugó a fondo por derrocarlo, pese a mantener en lo formal una actitud hipócritamente tolerante hacia él.

En este endurecimiento del gobierno norteamericano, juegan varios factores. En primer lugar el hecho de que los republicanos representan, en mayor medida que los demócratas, a los monopolios ligados a las actividades extractivas de materias primas y a la explotación de servicios de utilidad pública (como la ITT, por ejemplo), cuya agresividad, cuya oposición al desarrollo capitalista de otros países dependientes, es conocida. Es preciso considerar, así mismo, que la política de reformas y el populismo, con el que se pretendía frenar la lucha de clases, fracasan durante la administración de Frei. Y por último, hay que tomar en cuenta, que el gobierno de la UP se inicia en difícil momento para la economía norteamericana. A suscrecientes fracasos en Vietnam y Camboya, que los obligaría más tarde a retirarse derrotados de esos países, se sumaba el comienzo de una grave crisis económica, que terminó por envolver a todo el mundo capitalista. Como lo señala un trabajo incluido en el número de enero de 1973 del *Latin American Empire Report*, publicación del NACLA (North American Congress on Latin America): "El año de 1970 marca un momento culminante de la difícil situación por la que venía atravesando la economía norteamericana desde hacía algún tiempo. La inflación se mostraba incontrolable, la tasa de desempleo alcanzaba índices elevados, las reservas de oro no dejaban de disminuir, la participación norteamericana en el comercio mundial declinaba y, por primera ocasión en casi cien años, la balanza comercial arrojaba un saldo negativo. Mientras esto acontecía con la economía de los Estados Unidos, los países de Europa occidental y el Japón se ofrecían como ejemplos de avasalladora prosperidad: altos índices de crecimiento industrial, creciente participación en los intercambios internacionales, auge de sus inversiones en el exterior, etc. La 'agresividad' de la competencia europea y japonesa, habría de agudizar la sensibilidad norteamericana ante el programa de la Unidad Popular chilena, que contemplaba la nacionalización de cuantiosos intereses de propiedad norteamericana".

Y agrega el mismo estudio: "La 'Nueva Política Económica', establecida por el gobierno de Nixon para hacer frente a la situación desventajosa de la economía, llevaba implícita la necesidad de ejercer una presión mayor sobre los gobiernos extranjeros —y en particular en el mundo subdesarrollado— tendente a asegurar los intereses de los inversionistas norteamericanos, más que nunca enfrentados a la necesidad de reforzar su posición ante los avances de los capitales europeos y nipones".

Si bien es cierto, que los esfuerzos del gobierno de EE.UU., por derribar al de Chile se dieron en los marcos de una seria crisis económica de dicho país y ello influyó en la agresividad (particularmente en el bloqueo) contra Chile, las motivaciones de fondo del gobierno norteamericano para derribarlo fueron eminentemente políticas.

La batuta de la agresión económica la llevó el Departamento del Tesoro, encabezada por el demócrata ultraconservador John Connally, ligado a una serie de empresas multinacionales con intereses en Chile. Este, declaró en julio de 1971 al semanario *Business Week*, que EE.UU., podía portarse con dureza con Iberoamérica en materia económica y comercial, pues decía "de todos modos ya no tenemos amigos allí". La reacción, llamémosla así, "económica" de represalia contra el programa allendista, inspiró violentos editoriales de periódicos adictos a los intereses perjudicados. El *News Washington Daily* del 13 de agosto de 1971, por ejemplo, dice: "Si aceptamos que el marxista Allende nacionalice sin indemnización, esto creará un precedente poniendo en peligro los miles de millo-

nes de dólares norteamericanos invertidos en las minas, campos petrolíferos, e industrias de Iberoamérica. Puesto que estos bienes están asegurados en las agencias gubernamentales, además, serán los contribuyentes norteamericanos los que pagarán los vidrios rotos". Esto era cierto, al menos en lo que respecta a las empresas de la gran minería del cobre y a la ITT, y contribuyó a que las empresas afectadas comprometieran más fácilmente, si no a los contribuyentes, al gobierno norteamericano en contra del de Allende. Las inversiones de esas empresas en Chile, estaban protegidas por un seguro de la agencia gubernamental de EE.UU., llamada OPIC (Overseas Private Investment Corporation), filial de la AID. Dicha agencia debía reembolsar como indemnización a la Dennecott Copper, a la Anaconda Copper y a la ITT, más de 400 millones de dólares por haber sido expropiadas sin la indemnización que consideraban adecuada, lo que superaba la capacidad financiera de la agencia, debiendo hacerse cargo de la deuda el gobierno.

Sin embargo, los golpes más demoledores contra el gobierno de Allende, pese a la opinión de numerosos comentaristas que se dejan llevar o desean dejarse llevar por aquello que fue más ostensible: el bloqueo de ciertos créditos a Chile, provinieron de la labor interna, secreta, de la CIA y del Pentágono, destinadas a desarticular la economía chilena, a coordinar y fortalecer la oposición al gobierno allendista y a preparar con las FF.AA., el golpe de Estado. En este sentido, cabe decir, que la peor y más despiadada ofensiva contra el gobierno de Allende, provino directamente del gobierno norteamericano, el mismo que simulaba tolerancia y neutralidad. Dicha ofensiva incidió en el "talón de Aquiles" del régimen de la UP: su carencia de control del poder, que le impedía detener drásticamente a la oposición sediciosa y fortalecer una economía, en transición hacia el capitalismo de Estado, frenando los factores "desestabilizadores" de la crisis, destinados a facilitar el golpe militar. Se comprende que quienes —como los dirigentes del P" C"— con su falsa estrategia de conquista del poder y con su sabotaje a la consolidación del gobierno de la UP en aras de su propósito de aliarse con la DC, contribuyeron en forma decisiva a su derrota, se muestren interesados en atribuir el descalabro a factores externos (como el bloqueo), pretendidamente incontrarrestables. Sin embargo, esos factores externos habrían sido perfectamente superables si hubiera existido una estabilidad económica y política internas, derivadas de un sólido control popular del poder, incompatible, claro está, con los propósitos de los falsos "comunistas". El bloqueo, sólo adquirió eficacia y provocó graves consecuencias en la economía de Chile, debido a la incapacidad de la UP para consolidarla, básicamente, por no controlar el poder y encontrarse a merced de quienes lo detectaban. La labor de la CIA y del Pentágono, en cambio, si bien también eran expresión de una agresión foránea, tuvieron la eficacia de incidir directamente sobre las contradicciones internas —las más decisivas— que encaraba el gobierno de Allende.

La decisión del gobierno norteamericano, no tan sólo ya de obligar al gobierno chileno a pagar indemnizaciones o de crearle problemas en su comercio o en sus créditos internacionales, sino orientada frontalmente a derribarlo, fue una decisión eminentemente en razones políticas. Fue una decisión política, destinada, fundamentalmente, a impedir la consolidación en Chile de un "socialismo" al estilo del de los países de Europa oriental dependientes de la URSS y, más concretamente, a impedir el primer paso hacia ese modelo, planteado por los dirigentes soviéticos, a través de una alianza de la DC con un conglomerado como la UP, en que el P" C" pro-soviético juega un papel dominante. La comprensión de este último peligro y la necesidad de evitarlo a toda costa, motivó que el gobierno de EE.UU., no operara con la estrategia, también perfectamente factible y hasta más lógica dados los resultados óptimos que a través de ella se estaban obteniendo, de desgastar a la UP y desprestigiarla, sin materializar un golpe. Este proceso, llevaba con certeza a la posibilidad de derrotarla en la elección presidencial de 1976, con los mismos procedimientos con los que había llegado al gobierno. Y no se digna, que los sectores de extrema derecha chilena, eran capaces por sí mismos de inducir un golpe y que EE.UU., debió plegarse a los hechos consumados, pues el gobierno norteamericano, dada su influencia en círculos dirigentes decisivos de la DC, así como en las FF.AA., y dada la resistencia del sector opuesto a Frei en el PDC a la solución golpista, podía sobradamente impedir que este se llevara a cabo. El hecho de que la decisión de intervenir en Chile, para derrocar en el más corto plazo posible al gobierno de Allende, fue eminentemente política y, más aún, basada en consideraciones estratégicas de política internacional, se desprende los propios In-

formes de Inteligencia sobre Chile, enviados por la CIA y otras reparticiones al gobierno norteamericano durante el gobierno de la UP. En ellos, se advierte la aparente paradoja de que: en tanto dichos informes eran más y más tranquilizadores para el gobierno de EE.UU., pues registraban el fracaso económico y político en los intentos de consolidar un "socialismo" a la soviética; en cambio, los intentos por sacar, a instancias del gobierno norteamericano, el golpe adelante, eran más y más intensos. Obviamente, como veremos más adelante, no se tenía ya el éxito de esa experiencia como un ejemplo peligroso, ni supuestas intenciones de la URSS o los países del COMECON de apoyarlo a todo trance, sino las posibles alternativas que el gobierno de Allende y la directiva de la UP pudieran poner en marcha —justamente a raíz de su fracaso— para mantenerse en el gobierno. Es decir, la alianza con el PDC.

En julio de 1970, se da uno de los NIEs más alarmistas. Allí se señala que la victoria de Allende significaría la gradual imposición de un régimen marxista-leninista clásico en Chile. Sería una versión del estilo soviético de los países de Europa Oriental. Se predice, sin embargo, que la democracia probablemente sobrevivirá en Chile los próximos dos o tres años y que Allende tendría un largo camino para conducir a Chile al socialismo marxista durante los seis años de su administración. Para hacer eso, debería superar obstáculos muy importantes, como las fuerzas de seguridad chilenas, el Partido Demócrata Cristiano, algunos sectores de los trabajadores organizados, el Congreso y la Iglesia Católica. Expresa, finalmente, que Allende piensa obtener éxito en sus realizaciones materiales, como para tener una oportunidad de un seguro control del Congreso en las elecciones de 1973 y facilitarse así el imponer un estado socialista de la variedad marxista, por la vía pacífica. (53)

Un NIEs emitido posteriormente a un mes de triunfo electoral de Allende, sostiene que si éste gana la elección, casi con certeza tomará duras medidas contra los intereses de los negocios de EE.UU., en Chile y desafiará las políticas de EE.UU., en el hemisferio. El NIEs predice, en todo caso, que Allende probablemente no buscará un rompimiento con EE.UU., en los próximos dos años. (54)

Finalmente, todavía en 1970, se elabora lo que el Informe del Senado sobre la intervención de la CIA en Chile, llama: "el más directo Informe concerniente a la amenaza que un régimen de Allende plantearía a Estados Unidos". El Informe es del 7 de septiembre y corresponde no con sólo a la CIA, sino al llamado Grupo para los Asuntos Interamericanos, con representantes de la CIA, Departamento de Estado, Departamento de Defensa y de la Casa Blanca. Allí se concluye que EE.UU., no tiene intereses vitales en Chile; el equilibrio mundial de fuerzas militares no sería sensiblemente alterado por el advenimiento de un gobierno de Allende; y que una victoria de Allende no plantearía ninguna amenaza probable para la paz de la región. Sin embargo, una victoria eventual de Allende sería **extremadamente costosa en los dominios político y psicológico**. La cohesión política del continente sería amenazada por el desafío que la existencia de un gobierno de Allende constituiría para la OEA. **Reacciones en cadena no dejarían de producirse en otros países. Una victoria de Allende —concluyen— constituiría un neto retroceso psicológico para los EE.UU., y un neto progreso para las tesis marxistas.** (55). Como puede apreciarse, los factores de mayor preocupación, son de carácter eminentemente político y de ello derivará, después de elegido Allende, la orden perentoria y urgente de derrocarlo a través de un golpe de Estado.

Una vez ya instalado en el gobierno Allende, los Informes se tornan aún más optimistas en apariencia para EE.UU. Sin embargo, la ofensiva contra el gobierno chileno es impulsada cada vez con más dureza. Un NIEs elaborado en agosto de 1971, pasados ya 9 meses de gobierno, establece que la jefatura política marxista en Chile, no era inevitable y que Allende tiene por delante un largo y pesado camino para materializarla. Se señala también que si bien Allende casi con certeza prefiere adherir a los medios constitucionales, sería probablemente impelido a utilizar técnicas políticas de creciente y dudosa legalidad para perpetuar su coalición en el poder. Hasta este momento —señalan— Allende ha puesto gran cuidado en observar las formas constitucionales y está gozando de considerable popularidad en Chile. (56)

Un NIEs elaborado a los 10 meses del gobierno de Allende, señala que las relaciones de Chile y EE.UU., están dominadas por el problema de las nacionalizaciones, aunque el

propio Allende parece desear evitar una confrontación. (57)

Un Informe preparado poco antes del triunfo de Allende había consignado que Chile ha sido desde hace mucho un país relativamente abierto a los ultraizquierdistas y podría serlo aún más bajo el gobierno de Allende. Con todo dicho Informe hace notar que Allende sería cauto en cuanto a proveer asistencia a los extremistas por miedo a provocar una reacción militar en su propio continente. Sin embargo, el mismo Informe observa que el grado en que a los grupos revolucionarios se les permitiría utilizar a Chile como base de operaciones sería limitado por un Partido Comunista ortodoxo en Chile el cual se opone a los grupos inclinados a la violencia. Más aún, un Informe sobre el mismo tema preparado en junio de 1971, por Inteligencia del Departamento de Estado, establece que contrariamente a algunas tempranas indicaciones de que Allende podría prestar asistencia clandestina a movimientos insurgentes vecinos, la evidencia hasta el momento sugiere que él ha sido sensible a las relaciones con los gobiernos vecinos y se ha preocupado por evitar acciones que puedan poner tensas las relaciones bilaterales. Chile ha advertido a los expatriados argentinos y mejicanos que ellos pueden residir en Chile solamente si no participan en actividades políticas y algunos de los exiliados políticos brasileños más activos, han sido invitados a abandonar el país. El Informe concluye prediciendo que es improbable que Allende otorgase apoyo financiero o entrenamiento para facilitar la exportación de la insurgencia. (58)

Un NIEs elaborado en junio de 1972, establece que las perspectivas para la continuación de la democracia en Chile parecen ser mejores que en cualquier momento desde la iniciación del gobierno de Allende. Se constata que el sistema político tradicional en Chile continuaba demostrando una remarcable solidez. Las elecciones legislativas, de estudiantes y sindicales continuaban efectuándose de un modo normal, con la aceptación de las fuerzas pro-gobiernistas cuando los resultados les son adversos. Se señala, que el PDC y el Partido Nacional han usado su control mutuo de ambas ramas del Congreso para detener las iniciativas del gobierno y persisten en denunciarlo. Y luego, el Informe concluye; **el más probable curso de los acontecimientos en Chile para el próximo año más o menos, sería orientado por Allende con vistas a moderar el paso de su revolución para acomodarse a la oposición y preservar las ganancias que ya ha hecho.** (59) Cabe decir que, justamente a partir de este momento, se incrementan los aportes de la CIA a las instituciones que pocos meses después habrían de promover la primera gran ofensiva para derribar al gobierno: el paro de octubre del 72; el día 29 de ese mes se da por fracasado el primer intento de conversaciones entre la DC y el gobierno para llegar a un entendimiento; y, en la UP, ante ese fracaso inicial del trato con la DC, se impone la línea de retroceso de Orlando Millas, destinada a abrir paso nuevamente a ese entendimiento.

Otro Informe de 1972, hace notar que Allende, hasta la fecha, se ha propuesto evitar un daño irreparable en sus relaciones con Washington. Y se señala: aunque el mayor problema concerniente a las relaciones chileno-norteamericanas continua siendo el de las compensaciones por la nacionalización de compañías de EE.UU. Allende se ha preocupado de poner el acento públicamente de su deseo de relaciones amigables. Un Informe del año siguiente, además, establecería que Allende mantuvo líneas abiertas hacia Washington para una posible compensación por la expropiación de las compañías norteamericanas del cobre. (60)

Finalmente, hay un último NIEs emitido en septiembre en 1973, inmediatamente antes del derrocamiento de Allende, que en su conclusión final pone en evidencia la preocupación central del gobierno norteamericano. El NIEs se centra en las probabilidades de consolidarse en el poder el régimen de Allende. Se concluye que, en esa coyuntura una política de mantenerse a raya parece ser el más probable curso de los acontecimientos en Chile. Se constata que Allende no ha consolidado el poder de su régimen marxista; que el grueso de los chilenos de bajos ingresos cree que él ha mejorado sus condiciones y representa sus intereses; y, que el desarrollo del apoyo para su coalición refleja tanto la habilidad de su política como la popularidad de sus medidas. Se advierte, sin embargo, **que la creciente polarización de la sociedad chilena está descartando la predilección chilena por el compromiso político.** No obstante, los analistas predicen que sólo había una oportunidad marginal: que los militares movieran por la fuerza a Allende, por oficio. (61)

Como puede observarse, la evolución de los informes de Inteligencia es en apariencia

cada vez más "tranquilizante" para el gobierno norteamericano: la URSS mantiene una posición "cauta" y no se esfuerza en ningún aspecto por apoyar al gobierno de Allende, éste, por su parte, se cuida de toda ingerencia en los países vecinos y no presta apoyo a los movimientos subversivos en ellos; las instituciones burguesas siguen funcionando; el gobierno encuentra obstáculos cada vez más duros para aplicar su modelo de "socialismo"; por otra parte, EE.UU., no tiene intereses vitales en Chile y el equilibrio mundial de fuerzas militares no es sensiblemente alterado por el triunfo de la UP. Más aún, los últimos Informes constatan como se alejan las posibilidades de que el gobierno de la UP implante su modelo de capitalismo de Estado y, seguramente, pues la acción de la CIA era un factor decisivo para agudizarla, se debe haber conocido muy bien la gravísima crisis económica que afectaba a Chile ya a partir de 1972. ¿Por qué no esperar, entonces, que la intensificación de la crisis produjera el más completo desprestigio del gobierno, de modo de derrotarlo en las elecciones de 1967? ¿Por qué, el golpe de Estado fue promovido y buscado por la CIA en forma infatigable y a presión, hasta que se logró desencadenarlo?

Los propios autores del Informe del Senado sobre la actuación de la CIA en Chile, se realizan estas preguntas. Señalan allí, en efecto: "Al mismo tiempo que los Informes sobre Chile se hacían menos alarmistas ('chillones'), el 40 Committee autorizaba mayores cantidades de dinero para las operaciones encubiertas en Chile. Las sumas autorizadas por el 40 Committee van de 1,5 millones de dólares en 1970 a 3,6 millones en 1971 y 2,5 millones en 1972 y, durante los primeros ocho meses de 1973, 1,2 millones. Las decisiones de acciones encubiertas comentan, no eran enteramente consistentes con la estimación de Inteligencia" (62) En otro punto señalan: "Una revista de los análisis de Inteligencia en Chile presentados por los analistas de EE.UU., durante el crítico periodo de 1970-1973, no ha establecido en todo caso que esos informes fueran tomados en cuenta cuando los dirigentes políticos de EE.UU., formulaban y aprobaban operaciones encubiertas. El examen de dichas relevantes apreciaciones de Inteligencia y memorandums, ha establecido que las apreciaciones de los analistas sugerían cautela y restricción, mientras los imperativos políticos demandaban acción". (63)

En efecto, el Informe del Senado, señala: "La reacción en Washington a la victoria de Allende fue inmediata. El 40 Committee se aplicó el 8 y el 14 de septiembre a discutir a que acción se daría prioridad en relación con el voto del Congreso (donde se debía ratificar la elección de Allende) del 24 de Octubre. El 15 de septiembre, el Presidente Nixon, informó al Director de la CIA Richard Helms, que un régimen de Allende en Chile no era aceptable para EE.UU., e instruyó a la CIA que tomara un rol directo para organizar un golpe de Estado en Chile, en prevención de la ascensión de Allende a la Presidencia" (64). Según el Informe del Senado Norteamericano, el 40 Committee se reunió "en 23 ocasiones diferentes, entre marzo de 1970 y octubre de 1973, para autorizar fondos destinados a actividades encubiertas en Chile. Durante ese período, el Committee, autorizó un total de 8 millones 800 mil dólares para las actividades encubiertas de la CIA en Chile" (65). El 15 de septiembre de 1970, tiene lugar una reunión en la Casa Blanca, en la que participan Nixon, Kissinger y Richard Helms, Director de la CIA, para tratar el "caso de Chile". Según las notas manuscritas de Helms, el Presidente Nixon habría señalado: "Una chance sobre diez, tal vez, pero es preciso salvar a Chile... No hay que preocuparse del costo de la operación... No hay que tomar en cuenta los riesgos implicados... 10 millones de dólares disponibles y más si es necesario... trabajar a tiempo completo, con los mejores hombres disponibles... elaborar un plan con alternativas... hacer aullar de dolor la economía (chilena)... 48 horas para proponer una estrategia..." (66)

En el curso de sus declaraciones ante la Comisión del Senado Norteamericano, Richard Helms, afirma que cuando salió de esa reunión lo hizo con "la impresión... que el Presidente había hecho saber muy claramente que él descaba que hicieramos algo. Poco le importaba como, y él estaba dispuesto a aportar todos los fondos necesarios... Era una orden que nos dejaba carta blanca... Tanto es así que si alguna vez yo he tenido plenos poderes para actuar saliendo de la oficina del Presidente, ha sido en ese día" (67). Por su parte, Kissinger, "no se recuerda que las instrucciones hayan sido tan precisas como lo dijo Helms" (es natural su "mala memoria"), pero señala: "Lo que ha salido sobre todo de la reunión del 15 de septiembre, es que Helms era invitado a hacer todo lo que estuviera en su poder para impedir la entrada en funciones de Allende... Es claro que el presidente

Nixon deseaba que Helms estimulara al Ejército chileno a actuar en colaboración con nosotros o a tomar él mismo la iniciativa para impedir la llegada de Allende al poder. (68)

El resto de los agentes y responsables de la CIA que participan en la preparación del golpe de Estado en Chile, subrayan las presiones extremas a que fueron sometidos por el gobierno norteamericano para que cumplieran su cometido. Thomas Karamessines, por ejemplo, jefe de los "servicios secretos" de la CIA, sostiene: "Kissinger no me dejó ninguna duda sobre el hecho que él estaba sometido a una presión máxima para que esa misión tuviera éxito y que él por su parte nos sometía a una presión máxima para obtener su cumplimiento" (69). Por su parte, el Jefe Adjunto de la Sección "Wetern Hemisphere" de la CIA, afirma: "(Esa presión) era la más aplastante de todas aquellas de las que yo he podido ser testigo durante el tiempo que yo he trabajado allí, ella llegaba a los límites de lo soportable". En cuanto al jefe máximo de dicha Sección, Williams Broe, sostenía: "Yo no he atravesado jamás un período tan duro como aquel en el que nos hemos ocupado del asunto chileno. Yo debo decir que era absolutamente constante... las presiones no cesaban un solo instante... Eso venía de la Casa Blanca". (70)

¿Por qué existió en la Casa Blanca, desde el comienzo y hasta que se logró la caída de Allende, esa firme determinación de derrocarlo? ¿Por qué esa presión y la urgencia que ella denotaba, sorprendente e inusitada, incluso para los agentes de la CIA?

Algunas de las razones, las de más bulto y, por cierto, las que quiso expresar, están contenidas en la entrevista informal realizada a Kissinger por varios periodistas, el 16 de septiembre de 1970. Como no existía derecho a grabar esa entrevista, las diversas versiones difieren un poco, pero no difieren en los conceptos que cada periodista captó, sino en la omisión por algunos de afirmaciones que otros registraron. Reconstruyendo lo dicho a través de diversas versiones, las opiniones de Kissinger serían las siguientes: "Es fácil prever ahora, que si Allende toma el poder en Chile, hay fuertes posibilidades para que él establezca en algunos años una suerte de gobierno comunista. En ese caso nosotros tendremos un gobierno comunista no en una isla de la costa, que no tiene relaciones tradicionales e impacto en América Latina, sino en uno de los países grandes del continente, donde tendrán ustedes un gobierno comunista, que podría unirse, por ejemplo, a Argentina, al que está ya ligado por una larga frontera; o unirse a Perú, el cual ya ha estado encaminándose en una dirección que dificulta nuestro trato con él; o unirse con Bolivia, que aún antes de estos acontecimientos, ha ido en una dirección más izquierdista y opuesta a la dirección de EE.UU.

Así, yo no creo que debamos engañarnos a nosotros mismos pensando que si Allende toma el poder en Chile, ello no presentaría masivos problemas, a nosotros, a las fuerzas democráticas y a las fuerzas pro-Estados Unidos de América Latina y, sin duda, para todo el Hemisferio Occidental. Lo que acaecería con el Comité de Defensa del Hemisferio Occidental, con la Organización de Estados Americanos, es extremadamente problemático... La evolución política de Chile es muy grave para los intereses de Estados Unidos en razón de sus efectos en Francia e Italia... Seguimos con la máxima atención los acontecimientos... Se trata de una de esas situaciones que no es precisamente feliz para los intereses americanos... En este preciso momento la América (Latina) tiene una capacidad de influencia muy grande".

Existe una opinión complementaria en el Informe del Senado sobre la actuación de la CIA en Chile, que vincula —cosa que Kissinger no hace, pero que está implícita en su razonamiento— el problema planteado por el triunfo de Allende en Chile, a la pugna mundial de EE.UU. con la URSS. Señala el Informe: "Otra razón para la ingerencia de EE.UU. en los asuntos internos de Chile, fue ofrecida por un alto funcionario que testificó delante del Comité (del Senado). El habló de la posición de Chile en un juego estratégico del ajedrez mundial en 1970. En esta analogía, Portugal podría ser un alfil, Chile un par de peones, tal vez más. En un juego mundial de ajedrez, cuando una posición se pierde, siguen una serie de consecuencias. Los enemigos de EE.UU. podrían proceder a explotar la nueva oportunidad y nuestra habilidad para hacer frente al desafío podría estar limitada por cualquier pérdida Americana" (71).

Al parecer, pues, en primer término, más que los intereses de tal o cual monopolio propio, el gobierno de EE.UU., derribando al gobierno de Allende, se proponía cautelar el equilibrio de fuerzas en su conflicto con el social-imperialismo soviético. Pero, obvia-

mente, no por lo que significaba Chile en sí mismo, ya que, los Informes de Inteligencia estimaban que EE.UU., "no tiene intereses vitales en Chile; que el equilibrio mundial de fuerzas militares no sería sensiblemente alterado por el advenimiento de un gobierno de Allende; y, que una victoria de éste, no plantearía ninguna amenaza probable para la paz de la región". El problema es que: "reacciones en cadena no dejarían de producirse en otros países", pues, "una victoria de Allende constituiría un neto retroceso psicológico para EE.UU. y un neto progreso para las tesis marxistas". ¿De donde provienen las tesis "marxistas", que abrieron paso al triunfo de Allende? De todos es sabido: del XX Congreso del PCUS. Esta conclusión, por lo demás, es explícita en la entrevista de Kissinger, quien habla de los peligros para el Hemisferio Occidental en general.

Sin embargo, estas conclusiones, no son más que una parte de la verdad. Podrían explicar la pronta decisión del gobierno de EE.UU., en atacar, desde dentro y desde fuera la economía chilena y de propiciar, desde que salió elegido Allende, un golpe militar. Sin embargo, si lo que se temía era la permanencia de un modelo de "socialismo" a la soviética, aunque desarrollado por la vía pacífica, no se justifica la persistencia hasta el final y ejerciendo presiones máximas, de la estrategia para derribar al gobierno de Allende mediante un golpe de Estado. Por una parte, era obvio que, conseguido su objetivo, EE.UU., resultaría desprestigiado por un nuevo ejemplo de brutal ingerencia en otra nación, como efectivamente ocurrió. Además, y esto es lo más decisivo, Chile, ya a partir de 1972, dejó de ser un modelo para nadie, incluso para los propios chilenos. ¡Cómo podía serlo!, un país que alcanzó a más de un 1 por ciento diario de inflación, con un gigantesco déficit en su balanza comercial, con una emisión descontrolada, con empresas estatales que trabajaban a pérdida, con un déficit fiscal, estimado en 1973, en más de un 40 por ciento del gasto total del Fisco, etc., etc. Incluso, en la propia Unidad Popular, existía consenso, que la elección presidencial de 1976 se perdía. Este era el argumento central que daba el P" C" y otros partidos, para negarse a llamar a plebiscito. Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué EE.UU., no cambió su estrategia en los momentos en que Chile batía todos los records de su propia historia en numerosos índices, que marcaban la gravedad de la crisis? ¿Por qué no aprovechó el modelo negativo que ofrecía Chile, justamente, para provocar la reacción en cadena contraria a la que tenía, exhibiendo el fracaso del modelo "socialista" por vía pacífica? ¿Por qué no esperó su derrota cierta en las elecciones de 1976?

Podría argumentarse, que se temió un vuelco oficial, de la directiva de la UP y del gobierno, a la utilización de métodos violentos para afirmarse en el gobierno, o una creciente influencia de éste en las FF.AA., que ayudara a ese propósito. Sin embargo, todos los antecedentes concretos militan contra esa creencia, al menos, por lo que respecta a los medios oficiales. La carencia casi absoluta del gobierno, de apoyo en sectores de las FF.AA., era más evidente que para nadie, para la CIA y el Pentágono, que trabajaban allí activamente y, por lo demás, fue demostrada por los hechos. Los Informes de Inteligencia, insistían en la vocación constitucionalista de Allende y de las directivas más decisivas de la UP. Respecto a los dirigentes del P" C", hasta Frei ofrecía garantías de que impedirían que el gobierno se apartara de la vía legal. Almorzando con el Vicepresidente de la ITT el 10 de diciembre de 1971, le decía: "En lo que concierne al futuro del gobierno de Allende, si éste va a permanecer en su actual curso, o si será arrastrado por la extrema izquierda a una política de violencia y dictadura, Eduardo Frei no quiso hacer pronósticos. Pero comentó que la única fuerza política fuerte y disciplinada del país era el Partido Comunista, y aunque los partidos de oposición ahora tendían a unificarse, no pueden compararse en cuanto a disciplina a los comunistas. Además, agregó, que Allende no estaría dispuesto a abandonar a un grupo tan sólido" (72). Por lo demás, los propios Informes de la CIA, hablan de "un Partido Comunista ortodoxo, el cual se opone a los grupos inclinados a la violencia". Eso, en Chile, además, lo sabían hasta los niños chicos. Claramente, por consiguiente, no existía temor en EE.UU., de un intento del gobierno de Allende de resolver sus problemas e intentar perpetuarse por la fuerza.

¡Cómo podían temer eso, en realidad, con hegemonía en la UP de "comunistas" que, en medio de la más desatada violencia promovida por los reaccionarios, sólo formulaban piadosos llamados a la paz y levantaron como su consigna central: "no a la guerra civil"!

Todas estas consideraciones nos obligan a replantear la pregunta: ¿por qué el gobierno norteamericano, mantuvo hasta el final, en forma implacable, su presión por desencadenar

un golpe de Estado?

A través del estudio de lo acontecido en Chile, se puede llegar a la conclusión que, el gobierno norteamericano mantuvo su propósito de promover a toda costa un golpe de Estado en Chile, por un lado, para conjurar el pujante desarrollo de la lucha de clases y la tendencia a finales del gobierno de Allende a organizarse un reagrupamiento político opuesto al reformismo dominante; y, por otro lado, para evitar el riesgo de una especie de anticipo del "compromiso histórico" italiano: la alianza de la UP con la Democracia Cristiana.

En perspectiva, sin embargo, contaba especialmente el primer factor, ya que la formación de una coalición UP-DC en el gobierno, habría radicalizado rápidamente en su contra a los sectores políticos de la UP que ya tenían una actitud crítica frente a su conducción oportunista, los que ligados a un movimiento de masas en ascenso en su combatividad, podrían haber abierto camino a una corriente revolucionaria con influencia creciente.

Aunque el temor a la alianza DC-UP fue celosamente ocultado, tanto en el Informe del Senado norteamericano como en las declaraciones de miembros del gobierno norteamericano, es posible sacar esta conclusión de conceptos contenidos en ellos. Es lo que se desprende, por ejemplo, de las alusiones de Kissinger acerca de los peligros de la experiencia chilena de la UP para el Hemisferio Occidental y en particular, para Italia y Francia. Son conocidas las amenazas de Kissinger para el caso que los demócratas cristianos accedieran a formar en Italia un gobierno de coalición con los "comunistas" italianos; así como la resolución acordada por los gobernantes de Francia, Alemania Occidental, Inglaterra y Estados Unidos, sacada a luz en la entrevista que el Time le hiciera a Helmut Schmidt, el 16 de julio de 1976, de suprimir, en caso que ello ocurriera, toda ayuda económica a Italia. La misma conclusión puede desprenderse del Informe de Inteligencia ya citado, que tuvo a la vista el gobierno norteamericano en el mes de junio de 1972, mes en el que se realiza en Chile uno de los esfuerzos más importantes para buscar un acuerdo del gobierno con la DC. Allí se expresa: "el más probable curso de los acontecimientos en Chile para el próximo año, más o menos, sería orientado por Allende con vistas a moderar el paso de su revolución para acomodarse a la oposición y preservar las ganancias que ya ha hecho". Hemos señalado, cómo a esta conclusión, siguen importantes aportes de la CIA para preparar y promover a los pocos meses el paro de octubre del 72 y logran, de hecho, provocar el rompimiento de las conversaciones DC-gobierno. A ello se sigue, así mismo, el esfuerzo desesperado de la dirección del P" C", atropellando incluso a sus aliados, por recortar el programa de la UP de modo de facilitar el pacto DC-UP.

Una vez más en los Informes de Inteligencia se traduce la preocupación central en torno a la alternativa que restaba a la UP de sobrevivir sobre la base de un pacto con la DC, en los conceptos contenidos en el último NIEs enviado poco antes del golpe de Estado. Allí se advierte, con alivio, "que la creciente polarización (uno de los trabajos esenciales de la CIA era estimularla) de la sociedad chilena, está descartando la predilección chilena por el compromiso político". Pese a esa constatación y temiendo tal vez que dicha "predilección por el compromiso político" pudiera con todo imponerse, insisten en que la oportunidad reside en que las FF.AA., remuevan por la fuerza a Allende.

Es importante consignar, en relación a los temores de una conciliación, por parte del gobierno norteamericano, que ni siquiera respecto a Frei tenían una confianza completa. Temían que sus desenfundadas ambiciones, que ellos más que nadie conocían y habían "alimentado" copiosamente, pudieran inducirle a aceptar un compromiso, no obstante todas sus advertencias. Ya antes de que Allende asumiera el mando, había demostrado sus vacilaciones respecto a fomentar abiertamente un golpe para impedirlo, pues anhelaba hipócritamente conservar su imagen de "demócrata" y de "constitucionalista". El Memorandum de la ITT, denunciado en el Senado norteamericano en la investigación sobre la participación de dicha empresa multinacional en los intentos de derrocamiento de Allende, señala: "el presidente Eduardo Frei quiere detener a Allende y lo ha dicho a sus íntimos. Pero quiere hacerlo constitucionalmente. O sea, a través ya de un vuelco del voto en el Gobierno o de una crisis interna que requiera intervención militar.

Todas las evaluaciones anteriores de la debilidad de Frei frente a una crisis se están confirmando. Pero, se ha establecido sin lugar a dudas que ha estado jugando un doble

juego para preservar su propia imagen como campeón de la democracia latinoamericana. Por ejemplo: les dijo a algunos de sus ministros que estaría dispuesto a ser depuesto por un golpe militar. Esto lo absolvería de cualquier complicidad en un golpe que, a su vez, derrocaría a Allende. Luego se dió vuelta en redondo y dijo a los jefes militares que estaba absolutamente en contra de un golpe". El 21 de septiembre, el Embajador de EE.UU., en Chile Edward Korry, juzga conveniente enviarle un mensaje a Frei, nada menos que con el ministro de Defensa, en el que le señala que si Allende asume la Presidencia "debe saber que no permitiremos que llegue a Chile ni un tornillo ni una tuerca bajo Allende. En cuanto Allende asuma el poder, haremos todo cuanto esté en nuestras manos para condenar a Chile y a los chilenos a las mayores privaciones y miserias, una política diseñada a largo plazo para lograr acelerar los duros rasgos de una sociedad comunista en Chile. En consecuencia, si Frei cree que va a haber otra alternativa que la miseria total, que ver a Chile en la absoluta postración, es un iluso". Sin lugar a dudas, esta era una advertencia que no estaba destinada a aclarar a Frei los obstáculos que encontraría de parte de EE.UU., el gobierno de Allende, lo que sólo podía alegrarlo con vistas a sus expectativas futuras, sino a amenazarlo en relación con la posible creencia de que EE.UU., sería más tolerante con el gobierno de Chile, si éste contaba con el apoyo de la DC.

En "honor" a la fidelidad de Frei al gobierno norteamericano, es preciso decir que éste realizó todos los esfuerzos posibles, aunque "bajo cuerda" para no comprometer su imagen política, para ayudar a los intentos de golpe de Estado destinados a impedir que Allende fuera ratificado por el Congreso, incluyendo el que culminó con el asesinato del Comandante en Jefe de las FF.AA. Su Ministro de Economía, siguiendo sus instrucciones, presentó para conmover a los militares, públicamente, la imagen de una profunda crisis económica provocada por la desconfianza que en los sectores empresariales suscitaba el triunfo de Allende. Es decir, divulgó los efectos iniciales que la campaña de sabotaje a la economía, auspiciada por las empresas multinacionales y por los intereses internos más reaccionarios, estaba produciendo para inducir a un golpe de Estado. Pero, Frei, no quiso sacrificar la imagen a través de la cual ostentaba la mejor opción para reemplazar al gobierno destituido. Es decir, mientras el gobierno norteamericano le exigía todo para calmar sus inquietudes, no quiso aceptar la violación de su virginal imagen externa de "legalismo" y prefirió actuar sólo desde las sombras. Esto, no se lo perdonarían por completo ni los militares fascistas ni el gobierno de EE.UU., que sí sabe desenmascararse cuando están en juego sus intereses vitales.

Si a todo este cuadro de las vacilaciones de su hombre de confianza, se suma el grave hecho para el gobierno de EE.UU., de que Frei ni siquiera logró convencer a su partido de rechazar la ratificación de Allende como Presidente en el Congreso, es perfectamente natural suponer que tuvieran serias preocupaciones de que los dirigentes del P"C" y a través de ellos los soviéticos, tuvieran éxito en arrastrar a la DC a un compromiso con la coalición de gobierno. De allí, que sólo les restara como reserva segura, el confiar en las FF.AA., y decidieran, sin vacilaciones, continuar hasta el final trabajando por sacar adelante el golpe de Estado.

Hoy en día, Frei, y su equipo en la DC, intentan, desesperadamente, reganar la confianza del gobierno norteamericano y de las FF.AA., para retornar al gobierno, ofreciendo públicas garantías de que no se dejarán arrastrar a un compromiso, que en conjunto con ellos, abra las posibilidades al P"C" de retornar al gobierno o siquiera a una actividad legal en Chile. Patricio Aylwin, Presidente del PDC y hombre de confianza de éste, declaró el 21 de junio de 1976 a la revista española "Cambio 16": que para reconstruir un gobierno democrático en Chile, "habría que contar con el apoyo de la Democracia Cristiana, los antiguos radicales, los social-demócratas y la derecha liberal". Y luego de amenazar sosteniendo que: "Si Chile no tiene una salida democrática a corto plazo, se marcha al comunismo, pues la Junta es un régimen que produce polarización", deja en claro que: "La democracia no se puede traer con los no demócratas. Donde entran los comunistas, sale la democracia". Y agrega: "en mi país no puede pensarse en desconocer el fenómeno de las Fuerzas Armadas. Si se admiten como factor político, hay que contar con su participación, y ya sabemos que ellas excluyen a los comunistas. Por eso, ser aliado de los comunistas equivale a renunciar a la democracia".

3.- Las condiciones sociales y económicas destinadas a facilitar el golpe.

Junto al trabajo en el seno de las FF.AA., la CIA, en estrecha colaboración con la oposición política al gobierno, con las empresas multinacionales y con el gobierno de EE.UU., se aplicó a crear las condiciones sociales y económicas necesarias para desencadenar el golpe de Estado. Es lo que han llamado, eufemísticamente, "desestabilizar" al gobierno de Allende. Lo realizado por las fuerzas de oposición, con la asesoría directa de la CIA, no lo tocamos aquí, pues está desarrollado en el capítulo referente a la política económica del gobierno de la UP. Sólo nos referiremos al sabotaje económico directo de EE.UU. y a su campaña propagandística.

El 29 de septiembre de 1970, se reúne el 40 Committee y constituye un comité amplio para instrumentar la "desestabilización" del régimen de Allende, integrado por el jefe de los servicios de la CIA para el Hemisferio Occidental, William V. Broe y representantes del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro y del Consejo Nacional de Seguridad. El mismo día 29, materializando algunos de los acuerdos tomados, William Broe, comunica a Edward Gerrity, primer vicepresidente de la ITT, el siguiente plan:

"Los bancos no deben renovar los créditos o demorarse en hacerlo.

Las compañías deberán arrastrar los pies al mandar dinero, hacer entregas, despachar repuestos, etc.

Las compañías de ahorro y préstamo de allá tienen problemas. Si se aplica presión tendrían que cerrar sus puertas, creando así mayor presión.

Se dió una lista de compañías y se sugirió que las abordáramos según lo indicado.

Se me dijo que de todas las compañías implicadas sólo la nuestra había respondido y comprendido el problema. El visitante agregó que el dinero no era problema. Indicó que habían dado ciertos pasos, pero que buscaba ayuda adicional dirigida a inducir un colapso económico.

Podemos contactar compañías claves para obtener sus reacciones y hacer sugerencias en la esperanza de que cooperen. Información que recibimos hoy de fuentes indica que de todas maneras hay una crisis económica en aumento" (73).

Después de la instalación del gobierno de Allende, ya se había materializado lo sugerido en el último punto de la recomendación anterior y se había constituido un comité de poderosas empresas multinacionales que se proponían sabotear la economía chilena. En él participaban, entre otras: la Ford Motor, Anaconda Co., ITT (International Telegraph Corporation), Bank of América, First National City Bank, Fireston Tire and Rubber Co., Grace and Co., Ralston Purina, Charles Pfizer and Co., Dow Chemical and Co., Kennecott Copper Co., Bethlehem Steel Co.

Según consta en el Informe sobre la intervención de la ITT en Chile, las compañías multinacionales sabían concretamente que era necesario inducir una crisis económica en Chile para abrir paso al golpe militar. El 29 de septiembre de 1970, se expresa en los memoriales del primer vicepresidente de la ITT: "Una esperanza más realista entre los que desean detener a Allende es que una economía en rápido deterioro (corridas bancarias, quiebras de fábricas, etc.) provoque una ola de violencia que resulte en un golpe militar. Los militares no actuarán a menos que las condiciones internas requieran su intervención. Más importante, el desempleo y la intranquilidad masivos podrían producir suficiente violencia para obligar a los militares a moverse".

El 28 de septiembre de 1971, la ITT, presenta un plan de 18 puntos al gobierno de EE.UU., para promover la caída del gobierno de Allende, antes de abril de 1972, en los que se plantea:

"1.- Continuar con las restricciones de préstamos en los bancos internacionales, tal como ya lo ha hecho el Export-Import Bank.

2.- Conversar con fuentes extranjeras, con el mismo propósito.

3.- Silenciosamente, hacer que un gran número de bancos privados norteamericanos hagan lo mismo.

4.- Aplazar compras en Chile dentro de los próximos seis meses. Usar el stock de cobre norteamericano en vez de comprarlo en Chile.

5.- Provocar una escasez de dólares en Chile.

6.- Discutir con la CIA cómo puede ella cooperar en este apretón de seis meses.

7.- Tomar contacto con buenas fuentes entre los militares chilenos. Retrasar la entrega de combustible a la Marina y de gasolina a la Fuerza Aérea...

8.- Probablemente será necesario dar ayuda en dólares a los medios de comunicación que están paralizados, porque este factor se está ahogando rápidamente y el Mercurio, un franco oponente, podría ser desplazado de un momento a otro.

9.- Ayudar a quebrar los planes de Allende sobre la Conferencia de las Naciones Unidas y el Desarrollo (UNCTAD).

10.- ...Algunos gobiernos extranjeros están discriminando en contra de las inversiones privadas norteamericanas mientras simultáneamente están pidiendo trato preferencial en nuestros mercados, y pidiendo préstamos ventajosos a bancos financiados por Estados Unidos.

11.- El Estatuto del BID estipula que los préstamos deben ser hechos como 'suplemento a inversiones privadas'. Lo contrario está teniendo lugar: los préstamos del BID están desplazando las inversiones privadas.

12.- Las manufacturas americanas deben parar o retrasar envíos de armas cortas y municiones a Chile.

13.- Las recientes restricciones de viajes a Chile son perjudiciales para el comercio norteamericano. Los chilenos son conocidos como unos de los mejores viajeros de Latinoamérica. Podrían imponerse algunas represalias.

14.- La acción chilena contra la UPI debe ser seriamente reprochada por la Asociación Interamericana de Prensa y por la prensa norteamericana en general. (El Washington Post incluso ha criticado la dura política norteamericana en Chile. Deben hacerles comer su editorial ahora que la UPI ha sido cerrada). El Mercurio de Santiago todavía sigue con vida y continua su crítica a Allende. Alguna ayuda debe ser considerada para este diario.

15.- En una reunión con el ayudante del Secretario de Estado Charles A. Meyer y su equipo hace algunos días —el 28 de septiembre—, fuimos informados que: ¡hasta un millón de dólares norteamericanos están entrando en Chile cada mes procedentes de fondos que se encuentran en los 'canales de ayuda'! Creemos que este dinero del contribuyente norteamericano al gobierno marxista debe terminar.

16.- También fuimos informados de que los fondos de varias 'cañerías del BID', no previamente utilizados, eran reasignados en un llamado fondo para emergencia de terremotos y puesto a disposición de Chile. Considerando la fuerte contribución norteamericana al BID, y la falta de una verdadera emergencia, tal acción no debería haber sido permitida y, si es posible, ahora debe ser anulada.

17.- El mayor número posible de mercados norteamericanos deben ser cerrados para Chile. De la misma manera, cualquier exportación norteamericana de especial importancia para Allende debe ser retrasada o detenida.

18.- Estados Unidos debe consultar con otros gobiernos cuyos súbditos están sufriendo a causa de los marxistas chilenos. Esto debe incluir a los países a quienes Chile debe dinero. Las reservas monetarias de Allende están bajando rápidamente y ha propuesto ya una renegociación de los pagos de la deuda exterior".

Más adelante, el mismo documento, mostrando que los planes norteamericanos tendían a agudizar las contradicciones internas y a aprovechar la falta de control del poder por parte del gobierno de Allende para derribarlo, señala:

Hay un comienzo de preocupación por parte de los militares. Ven el escenario chileno derrumbándose lentamente y se dan cuenta de que, antes que el caso económico tenga lugar, las Fuerzas Armadas tendrán que dar el paso y restablecer el orden. También hay signos de ansiedad dentro de la Armada chilena, que tradicionalmente ha sido un verdadero grupo de élite.

Las posibles fuerzas disuasivas que pueden frustrar los planes de Allende y que siguen intactas son:

- 1.- Los militares;
- 2.- el aparato judicial;
- 3.- la administración pública;
- 4.- unos mass-media paralizados;
- 5.- un fragmento del poder legislativo.

Durante el período crucial, estas fuerzas deben ser utilizadas para ganar lo que sea en contra de la continuación del éxito de Allende". (74) Justamente, la UTT, enumera los puntos claves del aparato estatal burgués, que la UP no controlaba y que debía enfrentar para aplicar su plan de reformas.

Chile, a causa de los gobiernos reaccionarios, ha creado una economía fuertemente dependiente del exterior, en particular del imperialismo norteamericano. Su Balanza de Pagos ha sido deficitaria desde hace muchos años. El déficit promedio en el quinquenio 61-65, fue de 168,4 millones de dólares; en 1966-70 el déficit anual alcanzó a 77,6 millones de dólares y en 1971 a 312 millones de dólares. Estos déficits eran tradicionalmente compensados sobre la base de préstamos extranjeros, en especial, provenientes de EE.UU. Es así como la deuda externa creció de 569 millones de dólares en 1958, a 3130 millones de dólares en 1970, año de la asunción del mando de Allende. Las exportaciones, en cambio, sólo aumentaron en su volumen físico en la década del 60 en un 48,5 por ciento.

Chile necesitaba de dichos créditos para adquirir en el extranjero (tradicionalmente la mayor parte en EE.UU.) maquinarias y repuestos para sus industrias; alimentos para compensar el déficit ya crónico derivado de la insuficiencia de su agricultura; materias primas, fertilizantes y productos petroquímicos en general. Los círculos dirigentes norteamericanos, sabían que de cancelarse el otorgamiento de préstamos, en las condiciones de una demanda hipertrofiada por las medidas tomadas en esa dirección por el gobierno de la UP y ante el sabotaje patronal a la expansión de la industria, se produciría un drenaje completo de la reserva de divisas que tenía el gobierno de Allende, como efectivamente ocurrió. A todo esto se sumaba —para aumentar dicho déficit— la aguda baja del precio del cobre en el mercado internacional, lo que significó tan sólo en 1971 un menor ingreso de divisas de 140 millones de dólares y el aumento del precio de los productos importados, que implicó otra pérdida del orden de los 120 millones de dólares.

Aparte de la dependencia, llamémosla así, cuantitativa de EE.UU., dado que de allí provenía el grueso de los créditos a Chile (78,4 por ciento de los créditos comerciales a corto plazo en 1970), existía una dependencia cualitativa, considerando que las máquinas adquiridas en EE.UU., requerían repuestos y, a menudo, materias primas y ciertos combustibles, del mismo mercado. El Ministro de Economía de Chile, por ejemplo, a fines de 1972 estimaba que casi un tercio de los camiones diesel en el mineral de Chuquicamata; un 33 por ciento de los buses estatales; un 30 por ciento de los buses urbanos privados y un 21 por ciento de los taxis, estaban fuera de servicio por la falta de repuestos o neumáticos.

En función de esta dependencia de la economía chilena, el gobierno norteamericano, en confabulación con la CIA y las empresas multinacionales, planeó un bloqueo de los créditos y suministros a Chile, que surtiría su efecto en función de la ofensiva interna de la posición destinada a intensificar la crisis.

El Banco de Exportación e Importación de EE.UU. (EXIMBANK), era uno de los principales proveedores de créditos a corto plazo a Chile, destinados a adquirir en ese país bienes y servicios. Según Informe del Senado norteamericano: "Los créditos del Banco de Exportación e Importación de EE.UU., los cuales habían totalizado 234 millones de dólares en 1967 y 29 millones de dólares en 1969, se redujeron a 0 en 1971". Incluso, dicho banco, negó a comienzos de 1971 al gobierno chileno, un crédito de 21 millones de dólares (75) solicitado para comprar tres aviones Boeing de pasajeros para la Línea Aérea Nacional. Ni siquiera se podía en ese momento invocar la negativa de pagar indemnización por las empresas del cobre, pues aún no habían sido nacionalizadas. Por otro lado, el Eximbank era la entidad que garantizaba a través de un seguro los créditos concedidos por los bancos privados así como las exportaciones. Dichos seguros eran administrados por una subsidiaria del banco, llamada la Asociación de Seguros de Crédito extranjero. El Eximbank, no sólo cortó los créditos, sino que, a fines de 1970, rebajó a Chile arbitrariamente de la categoría "B" a la "D", es decir, la última categoría de solvencia económica, para desalentar a los bancos privados de otorgar créditos a Chile. Como consecuencia de las medidas tomadas por el Eximbank, las importaciones provenientes de EE.UU. declinaron en 1972, de un 40 por ciento habitual a sólo un 15 por ciento del total importado.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que había concedido a Chile, desde 1959 hasta el gobierno de Allende, 59 créditos por 310 millones de dólares,

de los cuales, 46 millones en 1970, los redujo a 2 millones de dólares en 1972. Ello, pese a que el gobierno chileno, a través de 1971 y 1972, pagó alrededor de 16 millones de dólares de antiguas deudas a ese banco. Se mantuvieron, sin embargo, créditos por más de 11 millones de dólares, a dos universidades chilenas dominadas por las fuerzas de oposición.

A su vez, el Banco Mundial (Banco Internacional de la Reconstrucción y Fomento), que había otorgado desde su creación (1944) a Chile, 234.650.000 dólares en créditos, no autorizó ningún crédito durante el gobierno de la UP.

La Agencia Interamericana de Desarrollo (AID), por su parte, que había realizado préstamos desde 1964, año en que comienza el gobierno de Frei, por casi 400 millones de dólares, los redujo a dos millones y medio en 1971 y 1972, aplicados a programas de penetración norteamericana tras la cobertura de "programas de asistencia técnica". No obstante, el gobierno chileno, tenía en junio de 1971 deudas heredadas con dicha Agencia, por 500 millones de dólares pagaderos en esa moneda y 30 millones de dólares pagaderos en escudos.

La línea dura de EE.UU., en los organismos de crédito sobre los que tenía influencia el gobierno de ese país, influyó a su vez sobre la conducta de los bancos privados. En el pasado, Chile, contaba con líneas de crédito a corto plazo de esos bancos que alcanzaban a más de 200 millones de dólares. Durante el gobierno de Allende sólo dispuso de unos 35 millones.

El déficit de la Balanza de Pagos provocado por la suspensión de los créditos internacionales, empalmó con el sabotaje interno: la fuga de capitales al extranjero produjo una sangría suplementaria tan sólo en 1971, de unos 270 millones de dólares. Dicho déficit de alrededor de 312 millones de dólares en 1971, se elevó a 644 millones en 1972.

A las medidas de las multinacionales y del gobierno norteamericano, destinadas a agudizar las empresas norteamericanas que explotaban el cobre chileno, la Kennecott y la Anaconda, después de ser expropiadas. La primera de ellas, logró en febrero de 1972, el embargo de cuentas de varias agencias chilenas en Nueva York. La Anaconda, procedió luego de la misma manera. Se intentó, así mismo, actuando ante los tribunales de países compradores de cobre chileno, como Francia, Suiza, Alemania e Italia, obtener que los pagos fueran congelados, mientras tribunales internacionales resolvían sobre el problema de la indemnización, lo que provocó obstáculos a las entregas de cobre por parte de Chile.

En lo que respecta a las renegociaciones de la deuda externa, solicitadas por el Presidente Allende a partir del 9 de noviembre de 1971, EE.UU. sólo adoptó una posición más dura en la segunda renegociación a fines de 1972. En febrero de ese año, se reunieron en París los 13 países acreedores de Chile. El gobierno de Allende, solicitó una moratoria de pagos y la renegociación de las cuantiosas deudas pendientes hasta 1971. Pese a las presiones de EE.UU., el resto de los acreedores aceptó renegociar la deuda externa chilena. Se postergaba el 70 por ciento de la deuda chilena correspondiente a 1971, lo que correspondía a unos 165 millones de dólares, de los cuales 62 millones se debían a EE.UU. Este país, finalmente, el 19 de abril, accedió a firmar el acuerdo junto con el resto. La posición del gobierno norteamericano habría de tornarse progresivamente más dura en la medida en que el gobierno de Chile se debilitaba. En la discusión bilateral de renegociación, en diciembre de 1972, los representantes del gobierno de EE.UU., condicionaron todo acuerdo al pago de "justas compensaciones" a las empresas del cobre nacionalizadas. Por último, en marzo de 1973, en un nuevo encuentro bilateral, el representante norteamericano, John Crimmings, interrumpió las conversaciones señalando que EE.UU., "no estaba dispuesto a perder el tiempo".

Pese a los esfuerzos del gobierno norteamericano y de las empresas multinacionales por bloquear la economía chilena, analizando lo ocurrido, se llega a la conclusión que esta forma de agresión sólo fue eficaz debido a la crisis interna que afectaba al país, por la falta de control de la UP sobre el poder estatal. A través de un firme control del poder y por ende de la economía y a través de una política antiimperialista realmente combativa y resuelta, esas dificultades podrían haber sido superadas. En la magnificación del "bloqueo externo" como factor del fracaso del gobierno de Allende, se esconde también la posición de los dirigentes del P" C", que intentan así enmascarar su responsabilidad en el fracaso. El caso es que Chile, no sólo logró un éxito relativo en la renegociación inicial de su deuda externa, sino que, obtuvo, también, importantes créditos de otros países, comen-

zando así un proceso de desvinculación respecto a la dependencia unilateral de EE.UU., en sus créditos externos. El propio Ministro de Hacienda, Orlando Millas, lo reconoce así en su exposición ante la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso, el 15 de noviembre de 1972. Allí señala: "Se han logrado cambios decisivos en la estructura del financiamiento externo. La elevada concentración que representaba el financiamiento de corto plazo, reflejado en el hecho de que el proveniente de Estados Unidos representaba el 78,4 por ciento del total a inicios de este gobierno, hoy se ha transformado en una estructura muchísimo más diversificada en que, por ejemplo, Estados Unidos aportan sólo el 6,6 por ciento del total. El volumen de líneas de créditos actualmente vigentes alcanza a 490 millones de dólares, con una alta diversificación. Cabe destacar —agrega— especialmente los casos de la Unión Soviética con 103 millones de dólares, Australia con 29 millones, Alemania Occidental y Francia con 28 y 36 millones respectivamente, España con 15 millones y México con 26 millones, etc." En lo que respecta al financiamiento externo a largo plazo, expresa: "se han obtenido también logros enormemente significativos, aumentando su monto y diversificándolo de manera muy importante. Destaca el establecimiento de convenios con Brasil (10 millones de dólares), México (20 millones), Perú y Argentina, caso en el cual se han firmado acuerdos de financiamiento global a un plazo superior a ocho años y medio, los que han posibilitado la adquisición de maquinaria y equipos por más de 40 millones de dólares. Convenios de financiamiento específico de gran importancia se han concretado con países de Europa Occidental como Francia, España y otros. Chile aprecia en forma especial, por sus características los créditos ofrecidos por Suecia, Holanda y Finlandia. En cuanto se refiere al financiamiento de inversiones provenientes de los países socialistas se ha dado un gran paso adelante. Se han convenido créditos por un monto de 446 millones de dólares, cuyos plazos de amortización fluctúan entre 5 y 20 años. Con la Unión Soviética por 259 millones de dólares, la República Popular China 55.500.000 dólares, Bulgaria por 25 millones de dólares, Polonia por 35 millones de dólares, Hungría por 22 millones de dólares, la República Democrática Alemana 20 millones de dólares, Rumania por 20 millones de dólares, Checoslovaquia por 5 millones de dólares, la República Popular de Corea por 5 millones de dólares" (76) Por otra parte, en el primer semestre de 1973, se obtuvieron de esas mismas fuentes, créditos de alrededor de 662 millones de dólares, a corto plazo.

El análisis de las variadas fuentes de las que provinieron los créditos, que habrían de compensar el bloqueo norteamericano, demuestra, en primer lugar, que su monto podría aún haber sido mayor si se hubiera logrado exhibir una economía estable, como fruto de un sólido control sobre el poder. En segundo lugar, demuestra, atendiendo tanto a los antecedentes de la renegociación de la deuda externa, como al origen de los créditos, que la idea del gobierno norteamericano de bloquear la economía chilena, puesto que no tuvo ninguna influencia, ni siquiera en países muy afines a EE.UU., habría terminado, finalmente, por volverse contra sus autores. En efecto, entre los que conceden créditos al gobierno de Allende, hay naciones que no pueden, precisamente, catalogarse como de progresistas tales como: España, Alemania Occidental, Japón Francia, Argentina, Brasil.

La falla en la utilización de esos créditos, en especial los de largo plazo, provino, entre otras cosas, de la intensa crisis y de la anarquía que reinó en la economía de Chile, frente a una agresión económica y política, que el gobierno no tuvo ni instrumentos ni autoridad para enfrentar. De los préstamos a largo plazo obtenidos en 1972 y de los cuales el Ministro de Hacienda habla con tanto orgullo, sólo se logró utilizar 194 millones de dólares.

En lo que toca a los créditos a corto plazo también, debido a la premura existente para hacer frente a la demanda de bienes indispensables que no se obtenían en el país, debieron ser obtenidos a un elevadísimo interés, lo que provocaba una disminución aún más aguda de las divisas en el momento de amortizarlos. De dichos préstamos a corto plazo, como hemos señalado, los 662 millones obtenidos en 1963, no fue posible ni siquiera emplearlos.

Es preciso anotar, por último, respecto al daño que significaba el cierre del mercado habitual de maquinarias, repuestos y otros elementos relativamente difíciles por su especialidad, de reemplazar en otros países (aunque no imposible, pues casis siempre se pueden obtener a través de terceros), que se trataba de un hecho que sin duda había que es-

perar, si existía el propósito de nacionalizar empresas norteamericanas y frente al cual, por consiguiente, era indispensable estar preparado para enfrentarlo. ¿O es que se cultivaba tal ingenuidad, que se pensaba que EE.UU., iba a aplaudir o siquiera permanecer indiferente respecto a los intereses dañados, representados por su gobierno? Los invasores yanquis en Camboya, supieron meses antes que serían derrotados y que deberían abandonar ese país. Prepararon, entonces, un maquiavélico plan para después de su retirada. Destruyeron sistemáticamente los medios de producción del país, así como las vías de comunicación hacia la capital, que contaba con más de tres millones de habitantes. Al mismo tiempo, dejaron infiltrados en esa ciudad, equipos de sus agentes. ¿En qué consistía el plan? La capital, que concentraba un tercio de la población, se encontraría privada de abastecimientos, sin fuentes de trabajo, en pésimas condiciones sanitarias. En estas circunstancias óptimas, comenzarían a actuar los grupos contra-revolucionarios asesorados por la CIA como en Chile, para volcar a la población contra el gobierno popular. Sin embargo, las fuerzas populares en Camboya, al contrario de Chile, habían conquistado su independencia nacional y el poder con las armas en la mano y conocieron anticipadamente el siniestro plan yanqui. Es así como, ya antes de expulsar a los norteamericanos, prepararon un plan de evacuación completa de los habitantes de la capital, a quienes les tenían de antemano asignados lugares de trabajo y viviendas en las cooperativas agrícolas. Evacuada la capital en pocas semanas, comenzaron su limpieza y reconstrucción. De esta manera, previendo los acontecimientos y con el poder realmente en la mano, conjuraron por completo los planes de la CIA. Esta nueva derrota poco conocida, del imperialismo en Camboya, explica la furiosa campaña desatada por la CIA y por sus voceros en toda la prensa reaccionaria mundial, contra el gobierno revolucionario de Camboya.

En cambio, el gobierno de la UP, no sólo no contó con la fuerza y con la autoridad suficientes, para enfrentar los efectos del bloqueo, sino que, adoptó una política "anti-imperialista" de compromiso débil y a la defensiva. Una vez más, en este aspecto influyó también, la política conciliadora de la dirección del P" C" que, como hemos señalado, por exigencia soviética, no buscaba en Chile un enfrentamiento con el imperialismo, sino una conciliación con él e, incluso, un gobierno conjunto con sus principales agentes: Frei y su equipo. En este mismo sentido aconsejó al Presidente Allende, su adlater el "sociólogo" Joan E. Garcés. Este opinaba, que lo que deseaba EE.UU., era una actitud resueltamente anti-imperialista de parte del gobierno de Allende, para organizar su rápido derrocamiento. No obstante, lo concreto que derivó de esta actitud opuesta conciliadora, es que EE.UU., utilizó igual todos sus medios, salvo la intervención armada directa, para derrocar al gobierno de Chile, cosa que logró pese a la conciliación; y el gobierno chileno, en cambio, renunció a las múltiples posibilidades que le brindaba una firme y combativa actitud anti-imperialista, que se basara en la movilización popular.

A la inversa de lo que sostiene Garcés, toda la política norteamericana fue diseñada para evitar el error que cometieron en Cuba, donde generaron un movimiento anti-imperialista de las amplias masas, que les han impedido hasta ahora, pese a que intentaron también la invasión, retomar el control del gobierno de ese país. Y es así, como han debido aceptar a pocas millas de su territorio, a un gobierno que no sólo expropió todos los intereses norteamericanos, sino que representa un importante centro de influencia del social-imperialismo soviético. Esta derrota del imperialismo yanqui en Cuba, no se debe, por cierto, a que la Unión Soviética esté dispuesta a defenderla a cualquier precio, como quedó perfectamente en claro con motivo del incidente de los cohetes en 1962, sino, como hemos señalado, a la disposición a combatir de su pueblo y a su profunda conciencia anti-imperialista. Temiendo la movilización popular anti-imperialista en Chile, es que el embajador Korry aconsejaba en octubre de 1971 que: "Los Estados Unidos no deben admitir que han hecho 'el corte' (de la ayuda) y deben decir como en el pasado: no ha habido suspensión de la ayuda a Chile; el Programa está en revisión". Señala así mismo el Embajador: "hay varios cursos de acción, siendo el principal provocar a Allende y causar una ruptura en nuestras relaciones con Chile para que así pierda todo sin opción. La segunda sería tratar de convivir con Allende —no apaciguarlo—, tomar un línea firme, pero tratar de negociar en cada oportunidad". Y concluye: "Parece que la segunda alternativa será la que adopte Estados Unidos." (77)

El propio Garcés en su libro posterior al golpe, "Allende y la Experiencia Chilena", sacando como de costumbre conclusiones absolutamente opuestas a las que se desprenden de los antecedentes que él mismo exhibe, cita a Nachmanoff, principal asesor de Kissinger, quien define así la política del gobierno norteamericano hacia el gobierno de Allende: "Es importante evitar una provocación abierta a Allende que tendría el efecto, desde el punto de vista de la administración, de fortalecerlo... Es preferible presionar a Chile de modo tal que su gobierno aparezca provocando a Estados Unidos, legitimando así acciones directas. Básicamente, Nachmanoff describe la política norteamericana como silenciosa pero poderosa, no haciendo nada para provocar a Allende. No obstante, si Allende atacara a Estados Unidos, entonces nuestro gobierno replicaría a su vez". (78) De esta formulación, Garcés, desprende que fue correcta la posición del gobierno chileno, "sorteando la batalla en campo abierto a la que se deseaba arrastrarle". Sin embargo, sus conclusiones destinadas a enfrentar la estrategia norteamericana, se quedan sólo en la superficie de la afirmación que cita en su apoyo. Tal como describe el Informe del Seando sobre la actividad de la CIA, en Chile, la política norteamericana se basaba en tres aspectos fundamentales: Una postura pública fría pero correcta", una "extensa actividad clandestina" y las "presiones económicas". Las dos últimas, estaban destinadas a lograr el derrocamiento del gobierno. El Informe citado, describe así sus efectos: "Los Estados Unidos cortan la ayuda económica, niegan los créditos y hacen esfuerzos —con éxito parcial— para incorporar la cooperación de instituciones financieras internacionales y firmas privadas apretando la economía chilena para estrangularla. Este estrangulamiento internacional intensifica los efectos de las medidas económicas tomadas por los grupos de oposición dentro de Chile, particularmente las dañinas huelgas de los mineros y sectores del transporte. Por ejemplo, el efecto combinado del estrangulamiento de los créditos externos y de la huelga del cobre fue devastador en los intercambios internacionales de Chile".

Por lo tanto, la estrategia norteamericana, consistía en estrangular la economía, desde dentro y desde fuera y, al mismo tiempo, a través de una "extensa acción clandestina" interna, preparar la solución de fuerza del golpe militar. Este último, en todo caso, es el propósito central de la estrategia y es en función del golpe de Estado, y no de un simple desprestigio de la experiencia de la UP, que se emprende la ofensiva económica contra Chile. El Cuartel general de la CIA, lo señala ya claramente en octubre de 1970: "Es una actitud firme y mantenida que Allende tiene que ser derribado por un golpe... Nosotros debemos continuar creando la máxima presión con este fin, utilizando cualquier recurso idóneo". (79) Obviamente, por lo tanto, lo que plantea Nachmanoff, se refiere solamente a una estrategia diplomática, de gobierno a gobierno. Es ese plano, al gobierno norteamericano, que estaba dirigiendo una ofensiva demoledora: económica, propagandística y golpista contra el gobierno de Allende, no le convenía como gobierno, ofrecer ante la opinión pública interna e internacional al gobierno de Allende, el incentivo para una campaña contra EE.UU., motivada por un ataque público en su contra de parte del gobierno norteamericano. "La postura abierta 'fría pero correcta' —señala el Informe del Senado Norteamericano— denegaba al gobierno de Allende un enemigo manuable a ser utilizado como elemento de solidaridad interna e internacional" (80) Puesto que se suponía, que habría una reacción del gobierno de Allende ante la feroz agresión económica y las actividades golpistas cada vez más intensas, era preferible que el primer ataque público partiera de Chile y la actitud oficial de EE.UU., apareciera sólo como una réplica a dicho ataque. Ahora bien, si el gobierno de Chile se dejaba tranquilamente, en virtud de la postura oficial "fría pero correcta" del gobierno de EE.UU., apuñalar por la espalda y desangrar hasta la muerte sin chistar, tanto mejor. Este último era el verdadero objetivo del gobierno norteamericano y no, como sostiene Garcés, el obtener que el gobierno chileno lanzara la primera piedra, para luego contratacarlo. Mientras más silencioso fuera este duelo, en el que EE.UU., estaba —una vez más— comprometido en sucias maniobras y agresiones contra un país pequeño, más conveniente era para los intereses del gobierno norteamericano. ¡Júzguese, pues, el beneficio que le hicieron al gobierno de Allende, quienes, como Garcés, lo aconsejaron contra toda movilización amplia y abierta contra el imperialismo norteamericano! Chile, sufrió todas las desventajas de una agresión imperialista que apeló a todos los medios, salvo la invasión directa, y no utilizó ninguna de las ventajas que habría logrado de una movilización popular anti-imperialista. Por cierto, que la directiva del

P“C”, que temía más a la movilización popular que al imperialismo y sus agentes, con quienes, por el contrario, anhelaba aliarse, fue uno de los campeones de esta postura claudicante y castrada frente al imperialismo norteamericano. Es una de las razones, por las que se opusieron a la proposición del Presidente Allende de llamar a un referéndum para hacer aprobar los artículos vetados de la reforma constitucional destinada a nacionalizar el cobre. No deseaban que dicho referéndum sirviera de estímulo a un movimiento de masas anti-imperialista, que entorpecieran el proyectado pacto con la DC.

Los sectores reaccionarios chilenos, al igual que el gobierno de EE.UU., estaban extremadamente conscientes de los peligros que encerraba para ellos, el que el gobierno y la UP tomaran en sus manos la bandera de una profunda movilización de masas en oposición al imperialismo norteamericano. Una movilización de esa especie habría arrastrado a vastos sectores de la población, incluso, posiblemente, a ciertos sectores nacionalistas de las FF.AA., y habría aislado por completo a quienes pretendieron oponérsele. Es por esta razón, que la reforma constitucional destinada a nacionalizar el cobre es aprobada por **unanimidad** en el Parlamento. Temiendo así mismo, esa movilización anti-imperialista, que los habría colocado en una situación difícilísima, levantan su protesta cuando, prematuramente, el Eximbank niega el crédito solicitado por el gobierno de Allende, para comprar aviones para la Línea Aérea Nacional. El diario El Mercurio, el más fiel servidor de los intereses norteamericanos, escribe el 17 de agosto de 1971, respecto a esa medida: “Esta política norteamericana hace peligrar las relaciones interamericanas y constituye la repetición de antiguos errores históricos (se refieren seguramente a Cuba, nota del autor) que se suponían comprendidos”. El Partido Nacional, por su parte, declara: “Actitudes y declaraciones como las que señalamos sólo contribuyen a entorpecer las relaciones internacionales y a dificultar la solución de los problemas... demuestran una lamentable falta de tino y de conocimiento de la realidad chilena”. La más clara advertencia, sin embargo, está contenida en la declaración de la Democracia Cristiana, aparecida el 16 de agosto de ese año, en el diario “La Prensa”, perteneciente al grupo de Frei: “La decisión de la que aparece como responsable el presidente del Eximbank tiene toda la torpeza de una provocación... Así el gobierno norteamericano aparece una vez más, y prematuramente, identificado con intereses privados, olvidando un interés político superior... No es un ministerio para nadie —y las Misiones de variado orden que tiene Estados Unidos en Chile deben haberlo informado así a su gobierno— que en el (Gobierno) de nuestro país, por el momento al menos, coexisten dos tendencias. Hay la de un sector que desea conducir la revolución chilena dentro del respeto a la Constitución, sin violencia en el plano interno, y sin crisis internacional. Hay otro sector que desea provocar una ruptura violenta que, necesariamente, ha de proyectarse también en el plano internacional. Son éstos los que piden o anuncian, de partida, que las empresas expropiadas no deben ser indemnizadas. El Eximbank ha comenzado a hacerle el juego a esta tendencia, que no quiere nada más que provocar, precisamente, tales reacciones”.

Por su parte, la Sociedad de Fomento Fabril, principal organización gremial de la alta burguesía chilena, le escribe al Presidente del Eximbank, señalando: “Chile vive un proceso de profundas transformaciones económico-sociales que afectan radicalmente su estructura económica y en consecuencia, la situación de sus empresarios. Frente a él, nuestra institución gremial —la más antigua de las Américas— se encuentra empeñada en minimizar el costo de las transformaciones que se viven y en garantizar plenamente que él se desenvuelva en un marco de libertad y democracia y con pleno respeto a las garantías fundamentales... por eso, frente a la negativa de préstamos por parte de Eximbank... como empresarios privados y sobre todo por respeto a nuestra noble tradición democrática, no podemos aceptar que se subordinen resoluciones de esa índole, condicionándolas a decisiones que pueda adoptar nuestro gobierno dentro del régimen jurídico que democráticamente se ha dado el país”.

Tenemos, pues, a El Mercurio, al Partido Nacional, al sector freista de la DC y a la Sociedad de Fomento Fabril, es decir, al estado mayor civil de la conspiración golpista contra el gobierno de Allende, aconsejando al gobierno norteamericano, que no cometa errores con agresiones “prematuras”, que pueden ayudar al sector de la UP que desea impulsar una política anti-imperialista dura y combativa. Es esta política, por consiguiente, la que temen los sectores más serviles frente al imperialismo y más opuestos al gobierno de

Allende. Resulta claro, al mismo tiempo que, tanto los dirigentes del P" C", como Garcés con sus consejos, contribuyeron a que el gobierno de Allende se colocara en la posición más favorable al imperialismo norteamericano. Más adelante, frente a agresiones económicas muchísimo más graves que la negativa de 21 millones de dólares para comprar aviones, convencidos ya de que el gobierno no piensa promover un poderoso movimiento popular anti-imperialista que es lo que temen, todos esos sectores guardarán silencio.

Los argumentos esgrimidos por Garcés, así como por los dirigentes del P" C", para rechazar una firme política anti-imperialista, derivan de una actitud derrotista frente al poderío del imperialismo norteamericano. Aquel señala: "Adoptada por Estados Unidos una estrategia indirecta contra Chile, pocos fenómenos podían ser más favorables para su buen éxito que la parte más débil en el enfrentamiento adoptara una estrategia directa. Prestándose así a la más fácil, expedita y brillante victoria de la contrarrevolución". (81) Sin embargo, la experiencia histórica demuestra exactamente lo contrario. Sólo los pueblos que han desarrollado una firme y consecuente lucha anti-imperialista han logrado importantes victorias y aún su liberación completa. Es completamente ridículo e inconsecuente, sentirse derrotado de antemano frente al imperialismo y, no obstante, emprender reformas que afecten sus intereses. La única lógica posible para los derrotistas es aceptar resignadamente la opresión y la explotación. "Quien tiene alma de esclavo, señala Marx, merece ser esclavo". ¿O es que se pretendía engañar a los monopolios y al gobierno norteamericano o cogerlos en un momento de "buena voluntad", de modo que se dejaran expropiar, sin necesidad de combatir para imponer esas reformas? En este plano es mucho más coherente la posición derrotista —inspirada además en el temor al pueblo— de los falsos dirigentes "comunistas", que presionan por obtener una alianza con las fuerzas pro-imperialistas y se resignan a compartir (en países como Chile) la explotación con el imperialismo. Pero, en cambio, hacer del derrotismo una estrategia, no tiene ningún sentido y conduce exactamente e inevitablemente a lo que hoy día sufre el pueblo chileno. Es la misma lógica que se desprendía de la propaganda en "apoyo" a Vietnam o Camboya de aquellos que, en lugar de destacar allí la heroica lucha del pueblo que habría de terminar en una completa victoria, sólo ponían de relieve los sufrimientos que imponía la agresión imperialista a dichos pueblos. Como para que todo el mundo dijera: ¡lo mejor es que cese allí la lucha!; ¡es preferible que los norteamericanos continúen dominando esos países, ya que no hay ninguna posibilidad de que esos pueblos los derroten!

Garcés señala que Allende, solía aludir con ironía a la afirmación de Mao Tse-tung de que el "imperialismo es un tigre de papel". Sin embargo, habría sido mucho más útil, que tanto él como sus consejeros políticos, en lugar de ironizar al respecto, hubieran meditado a fondo en el significado de esa frase. Su sentido es, que no es posible vencer a un enemigo si no se le desprecia estratégicamente, es decir, si no se tiene la convicción de que es posible derrotarlo a través de la lucha. Sin esta convicción es estúpido emprender cualquier acción para liberarse. Si se le considera invencible no hay más que resignarse a su dominación. Si esta hubiera sido la convicción dominante en Vietnam, Camboya o Cuba, aún seguirían bajo la dominación del imperialismo yanqui. Ahora bien, el complemento de la idea de despreciar estratégicamente al enemigo y, por lo mismo, disponerse a vencerlo, —en el pensamiento Mao Tse-tung— es el concepto de que, tácticamente, es necesario tomarlo muy en serio y desarrollar la lucha más hábil y poderosa posible para derrotarlo. No obstante, una estrategia derrotista, como la que inspiró al gobierno de Allende, provoca, así mismo, una táctica derrotista, que no puede sino conducir al más completo de los fracasos. No tiene mucho sentido, sin embargo, hacer estas consideraciones, válidas para un verdadero movimiento revolucionario y anti-imperialista, a un movimiento como la Unidad Popular en cuya dirección predominaban elementos reformistas, oportunistas y tergiversadores del marxismo.

A mayor abundamiento, cabe decir, que de haberse impuesto en el movimiento popular ideas revolucionarias o consecuentemente anti-imperialistas, el momento en que se produjo el triunfo electoral de la UP, habría sido extraordinariamente favorable para una exitosa lucha contra el imperialismo norteamericano. Este estaba sufriendo graves derrotas en los países donde intervino con sus tropas. lo que hizo afirmar a Kissinger: "Yo estoy tentado de pensar que la introducción de fuerzas militares americanas es el peor medio de hacer frente (a los movimientos contrarios a los intereses de EE.UU.) porque eso

implica un elemento extranjero. Si nosotros queremos prestar servicio es preferible que nos quedemos en el exterior para tratar de reforzar la capacidad de resistencia (de nuestro aliado) y proporcionarle ayuda, sin enviar fuerzas americanas". (82) Sin embargo, esta táctica, también fracasó en Vietnam, Camboya y Cuba. Por otra parte, las condiciones internacionales en ese momento eran también favorables pues, EE.UU., había tomado agresivas medidas contra los países del mundo capitalista para defenderse de su competencia económica, y aún no se había cerrado la cadena de dictaduras militares en América Latina. Chile, había logrado unanimidad en la reunión de la Comisión Especial Coordinadora para América Latina (CECLA), en septiembre de 1971, de todos los países asistentes, para reclamar "unánime y energicamente" la supresión de la sobretasa de un 10 por ciento impuesta por EE.UU., a la importación de productos manufacturados. Con una firme política anti-imperialista apoyada en las masas populares, Chile, habría asumido un papel de líder en América Latina y se habría fortalecido la solidaridad de los pueblos y aún de ciertos sectores gobernantes, hacia sus posiciones. Más aún, habiendo ya comenzado a manifestarse los primeros síntomas del conflicto -que habría de estallar en 1973- entre los países productores de petróleo y los países imperialistas, Chile tenía la oportunidad de ejercer una fuerte presión y liderazgo en la Organización de Países Exportadores de Cobre (OPEC), a la cual pertenecía.

En cambio, en lugar de encarar virilmente la lucha contra el imperialismo norteamericano, se procedió frente a él con el mismo criterio de impotencia y conciliación, con el que se actuó dentro del país contra las fuerzas que impulsaban la sedición. Se confió (y esto se refiere sólo a quienes no actuaron así con segundas intenciones), en forma absolutamente idealista, en que la "solvencia moral" que daba el actuar dentro de la ley, bastaría para que las reformas fueran aceptadas por los afectados. Se aplicó una táctica de apaciguamiento, semejante a aquella con que algunos quisieron, vanamente, detener a Hitler en Europa. Se permitió la base de operación de importantes intereses monopolistas norteamericanos en la industria manufacturera y hasta se establecieron empresas mixtas con ellos y se alentó nuevas inversiones; se aceptó sus agresiones sin organizar un poderoso movimiento de protesta; no se aprovechó el bloqueo, para proceder a una suspensión o anulación del pago de la deuda externa con EE.UU., fondos "prestados" a los gobiernos Chilenos, de las mismas utilidades fabulosas extraídas con capitales iniciales mínimos, durante decenios. El propio gobierno de EE.UU., esperaba y temía una medida de esta especie. El Informe del Senado Norteamericano, señala al respecto: "Un memorandum de Inteligencia de febrero de 1971 hace ver que Chile no era vulnerable de inmediato a sanciones impuestas en las inversiones o de carácter monetario o comercial por parte de EE.UU. De hecho agrega el Informe, la imposición de sanciones, mientras ellas pudieran herir eventualmente a Chile, fue vista como acarreado un posible beneficio a corto término -eso podría haber dado a Chile una justificación para renunciar a la deuda de cerca de mil millones de dólares a Estados Unidos". (83) Más adelante, al constatar que no existía ninguna decisión de respuesta por parte del gobierno chileno, se procedió a intensificar en todo su rigor las medidas de bloqueo.

Por otro lado, al mismo tiempo que se conciliaba con el imperialismo yanqui, que desde el comienzo fue un enemigo jurado y a muerte del gobierno chileno, tampoco las medidas tomadas en su contra fueron aprovechadas para una amplia movilización anti-imperialista y para reforzar las posiciones del gobierno. Incluso, una medida tan seria y grave, no sólo en sí misma sino por el precedente que significaba para el mundo entero, como lo fue la de considerar como "beneficios excesivos" las utilidades de las empresas expropiadas del cobre que sobrepasaban el 14 por ciento, negándose a pagarles indemnización y, más aún, estableciendo que debían a Chile más de 700 millones de dólares, fue adoptada con sordina y pasó casi desapercibida para los chilenos. De ese modo, se suscitó la furia más extrema del imperialismo, sin ninguna contrapartida en el pueblo de Chile.

Para concluir, sólo cabe agregar, que la táctica de apaciguamiento del gobierno chileno frente al imperialismo, no influyó en nada para detener o aminorar los ímpetus de las acciones más efectivas emprendidas por EE.UU., para derribarlo. Más aún, le ahorró al gobierno norteamericano, el grave problema para su prestigio de aparecer públicamente agrediendo a Chile y le facilitó el ocultar su agresión tras su política oficial "fría pero correcta". En tanto más débil fue la respuesta del gobierno chileno, más intensa fue la agresión

económica y la ingerencia encubierta destinada a provocar un golpe. Esta es justamente la "paradoja" que constatan en su investigación y que hacen notar, los miembros de la Comisión Church. Sin embargo, no era el gobierno norteamericano, como lo prueban los hechos, quien se equivocaba, sino el gobierno chileno, cada vez más conciliador en su actitud, como lo registran los propios informes de la CIA. La conciliación interna y externa, condujeron a lo que tenían que conducir: al golpe de Estado fascista, sin que el pueblo tuviera ninguna capacidad de defensa o de respuesta efectiva. Frente a una poderosa movilización de masas antiimperialista y a una actitud abiertamente hostil del gobierno norteamericano como respuesta a ella, en cambio, incluso las maniobras golpistas en las FF.AA, se habían enfrentado con serias dificultades, pues habrían aparecido claramente como una defensa de intereses foráneos. Esto es justamente lo que temían los diversos sectores reaccionarios, que hicieron advertencias al gobierno norteamericano con motivo de las represalias del Eximbank. Más aún, en caso extremo, una agresión directa del imperialismo, aún si tenía temporalmente éxito, habría permitido generar un poderoso movimiento popular y un amplio frente anti-imperialista, no sólo en Chile, sino en vastos sectores de Latinoamérica. Frentes de este tipo, en respuesta a agresiones imperialistas, son precisamente, los que permitieron en China, en Vietnam, en Camboya y en tantos otros países, no sólo conquistar la independencia nacional, sino desarrollar el proceso revolucionario. Todas estas consideraciones, sin embargo, insistimos una vez más, puesto que es absurdo pedirles "peras al olmo", no son hechas en función de una estrategia que pudiera haber adoptado la dirección de la Unidad Popular. Por el contrario, las hacemos para contrastar lo obrado por dicha dirección oportunista, con lo que debe ser la conducción revolucionaria y verdaderamente anti-imperialista de las luchas del pueblo chileno.

Conciente el gobierno norteamericano, de que la política oficial en Chile no consistía en oponerles una fuerte movilización anti-imperialista y medidas concretas de represalia frente a sus acciones contra Chile, pudieron concentrar sus medios propagandísticos encubiertos en combatir la única alternativa que quedaba al renunciar a una franca oposición al imperialismo: la conciliación con quines representaban en el país sus intereses. Pudieron dedicar todos sus fondos, que no necesitaban defenderse de ningún ataque, en financiar grupos políticos o gremiales y toda una actividad propagandística, con el objeto de agudizar la polarización de fuerzas y cerrar el paso a una conciliación política que, a costa claro está de aspectos decisivos del programa de la UP, le hubiera permitido a ésta sobrevivir. Si hacemos fe al Informe del Senado Norteamericano sobre la intervención de la CIA en Chile, en las Fuerzas Armadas, aparte de los 20 mil dólares destinados a Viaux y de 50 mil dólares puestos a disposición del general Valenzuela, no necesitaron realizar más inversiones. Su profundo espíritu "constitucionalista" les aseguraba una contribución gratuita de parte de ellas al golpe de Estado, con el incentivo posterior, claro está, de quedar a cargo del gobierno.

El 25 de marzo de 1970, el 40 Committee, aprueba 135 mil dólares para oponerse a la postulación de Allende y frenar todo posible entendimiento con la Democracia Cristiana, que pudiera haber llevado a un candidato conjunto. (84)

El 18 de junio, el Embajador Korry, propone dos proyectos: intensificar la campaña contra Allende y preparar, para el caso de que salga elegido, su rechazo en el Parlamento. Propone, para ambos objetivos, 500 mil dólares, pero sólo se aprueban 300 mil dólares para el primero de ellos y, respecto al segundo, se acuerda esperar los resultados de las elecciones, pues todavía se confía en el triunfo de Alessandri.

Más adelante, se suman a estos aportes los de las empresas multinacionales. **La ITT hace entrega de 350 mil dólares y otro tanto el resto de las compañías interesadas en impedir la elección de Allende.** La CIA les indica canales apropiados para hacerlos llegar a la candidatura de Alessandri y al Partido Nacional.

Con esos fondos, la Cia, pone en acción en 1970 una media docena de proyectos, que implican: apoyo a grupos cívicos anti-comunistas, propaganda "del terror", etc. Se apoya así mismo, al sector anti-UP del Partido Radical y se hacen esfuerzos por sembrar la discordia entre el PS y el P"C", para frenar las tendencias de éste último de apertura hacia la DC. Se emplean fondos, también, para fundar un Partido Radical y se apuntala económicamente al diario El Mercurio.

Una vez elegido Allende, el 9 de septiembre, **la ITT hace ofrecimientos de un millón de**

dólares (como mínimo, pues hablan de una cantidad de "hasta 7 cifras") para impedir la elección de Allende en el Congreso.

El 15 de septiembre comienzan ya a diseñarse las diversas alternativas golpistas, ya sea para antes de la elección en el Congreso (Track I con sus dos alternativas) o para el caso que Allende sea designado por el Congreso (Track II). El 14 de noviembre, se destinan 250 mil dólares, "para lo que Frei y sus asociados estimen necesario", a fin de impedir la designación de Allende por el Congreso. El Informe de la Comisión Church, en piadosa actitud hacia la honra del señor Frei, sostiene que no fueron utilizados. La CIA, por su parte, emprende una campaña de propaganda, para "que Frei se ponga los pantalones", como le aconsejaría el Embajador Korry, y se decida a avalar el golpe.

El 28 de septiembre, son trasladados a Chile, periodistas que son agentes de la CIA, de 10 países diferentes y se agregan de otros 8, bajo la influencia de dicha central. Se otorgan al mismo tiempo 38 mil 500 dólares para "Patria y Libertad", a fin de utilizarlos en provocaciones que faciliten el golpe.

Hay, luego, modestos desembolsos ligados al proyecto de rapto de Schneider. Al ser designado Allende por el Congreso, se dá por fracasado el Track I.

Para conjurar el precedente peligroso que se ha establecido al aceptar Allende las "garantías constitucionales" impuestas por la DC, lo que motivará que lo apoyen en el Congreso los parlamentarios de ese partido, el 13 de noviembre, el 40 Committee aprueba, por primera vez en toda esa campaña contra Allende, la suma de 25 mil dólares para la DC.

En enero de 1971, preocupados por el auge de la lucha de masas y convencidos ya del fracaso de la estrategia de pretender obtener un golpe en forma fácil y a corto plazo, el 40 Committee acuerda el día 28 de ese mes, un millón 240 mil dólares, para un plan a largo plazo destinado a derribar a Allende. Junto con destinar esa suma, el 25 de febrero, es decir, un mes después, Nixon, inaugurará como cobertura la política oficial de su gobierno, "fría pero correcta", declarando: "Estamos preparados para tener la clase de relaciones con el gobierno chileno, que éste esté preparado para tener con nosotros". El día 11 de febrero, se forma el comité de las empresas multinacionales contra Allende.

El 22 de marzo de 1971, el 40 Committee, preocupado todavía de las posibles veleidades unitarias del PDC, aprueba 185 mil dólares para dicho partido, a ser administrados, por cierto, por el sector de Frei. El 10 de mayo, se aprueban 77 mil dólares para la prensa del PDC, manejada por el sector freista. No contentos con estos aportes, entre el 20 y el 26 de mayo, los servidores de EE.UU., en el PDC piden y reciben, 250 mil dólares para "deudas a corto plazo", según consigna el Informe del Senado norteamericano. En el mes de abril de ese año, la UP, ha logrado casi el 50 por ciento de los votos.

En el mes de junio de 1971, se produce el asesinato por un grupo terrorista, presumiblemente infiltrado por la CIA, del ex-ministro del Interior de Frei, Edmundo Pérez Zujovic. Este atentado habría de servir al sector freista para distanciar de la UP a los sectores demócrata cristianos, que "coqueteaban" con el gobierno y para iniciar la alianza del PDC con los sectores más derechistas de oposición. La primera manifestación concreta de esta unidad, será el apoyo en Valparaíso, en una elección complementaria a celebrarse el 18 de julio, del candidato del PDC por los partidos de derecha. El 6 de julio, el PDC, recibe de EE.UU., 150 mil dólares para el buen éxito de esa lección, que si bien no alteraba las fuerzas en el Parlamento, tenía gran significación política.

El 9 de septiembre, el Ministro del Interior José Tohá, denuncia la existencia de complots de derecha para derribar al gobierno. Ese mismo día, el 40 Committee, ha asignado 700 mil dólares para apoyar económicamente a El Mercurio. El día 15 de ese mismo mes, la CUT realiza un mítin en oposición a los insistentes rumores de conspiración existentes. La CIA, confiesa haber tomado los primeros contactos con el grupo golpista: "con más probabilidades de éxito" y estar en contacto con su líder. Se hablaba de un proyecto de golpe con motivo de la "Parada Militar" tradicional del 19 de septiembre, en que se celebraban las Fiestas Patrias. El diario de extrema derecha, La Tribuna, aparecería luego editorializando contra la DC, acusándola de haber "una vez más", carecido de valor y espíritu patriótico.

En el mes de octubre de 1971, la ITT propone a la Casa Blanca su plan de 18 puntos para que Allende salga del poder antes de los 10 meses siguientes. En noviembre de ese

año, EE.UU., otorga 815 mil dólares para los partidos de oposición y para desgajar a un partido de la Unidad Popular (el PIR). Se había producido un peligroso acercamiento (para EE.UU.) nuevamente entre el PDC y el gobierno. No obstante, el 1º de diciembre, la oposición unida realiza una marcha contra el gobierno, en la que se implementan una serie de provocaciones, que al ser reprimidas, motivarán la acusación constitucional del Ministro del Interior, en la que por primera vez toma la iniciativa la DC. No obstante, el 17 de diciembre, se realiza la conversación privada entre Allende y Tomic, en la que no se llega a ningún resultado concreto. El 15 de diciembre, la CIA ha recibido un aporte de 160 mil dólares para apoyar a los candidatos unidos de la oposición, que se presentarían en enero de 1972, a elecciones complementarias en dos provincias.

El 19 de enero, aunque sin nombrar a Chile, Nixon, declara que espera que la compensación por expropiaciones hechas a empresas norteamericanas, sea "pronta, adecuada y efectiva". Agrega, que si no es así, EE.UU., puede cancelar la ayuda bilateral al país expropiador y suspender su apoyo en los bancos multilaterales de desarrollo.

El 19 de febrero, el Congreso Pleno, aprueba la Reforma Constitucional de las Tres Areas de la Economía, presentada por la DC, que habrá de ser una pieza vital en el futuro conflicto constitucional entre el Ejecutivo y el Parlamento, utilizado como uno de los pretextos para el golpe de Estado.

En marzo de 1972, se descubren en un regimiento de Temuco los hilos de un complot contra el gobierno. Hay esfuerzos a comienzos de marzo de acercamiento entre el gobierno y el sector más progresista de la DC, pero ellos fracasan. También a comienzos de marzo, se efectúa una reunión entre altos personeros de la oposición, tanto del sector político como del sector empresarial, para concertar una ofensiva contra el gobierno. El Ejecutivo, durante este mes, en "antecedentes de un plan conspirativo que proyectaban llevar a cabo durante la noche del 24 al 25 del presente mes de marzo" las fuerzas de oposición, había prohibido dos marchas solicitadas por éstas.

El 11 de abril, el 40 Committee, aprueba 965 mil dólares para reforzar al diario *El Mercurio*, en la ofensiva que emprendía la oposición contra el gobierno. El 5 de abril, la mayoría de oposición de la Cámara adopta una resolución pidiendo al gobierno que incluya en la convocatoria extraordinaria del Parlamento, la Ley de Control de Armas, que habría de ser una pieza vital más adelante en la preparación del golpe de Estado. El 24 de abril, la CIA recibe 50 mil dólares para desgajar el PIR (de la Unidad Popular y del gobierno, donde tiene dos ministros). Ese mismo mes renuncian los ministros del PIR y dicho partido se pasa a la oposición. Pinochet, por su parte, habría de declarar después del golpe a un periodista de Reuter, que: "El 13 de abril de 1972, en el Estado Mayor del Ejército hemos analizado las posibilidades y ese día hemos llegado a la conclusión de que el conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo no tenía una solución constitucional".... Es decir, ya se había encontrado el pretexto legal que se pedía para el golpe. El 12 de abril la oposición realiza una marcha, a la que denominan "Marcha de la Democracia".

En junio se produciría un nuevo aporte del 40 Committee, de 46 mil 500 dólares para apoyar a la oposición en la elección de un parlamentario. En ese mes, además, hay un informe de Inteligencia al gobierno norteamericano, que predice que es probable que el gobierno intente acomodarse a la oposición y preservar sus avances, haciéndolos más lentos. El gobierno y la UP, aceptan la tesis de los dirigentes del P"C" de hacer importantes concesiones en el programa de reformas, a objeto de llegar a un acuerdo con la DC. El 29 de junio, fracasan las conversaciones que por 15 días había mantenido el gobierno con la DC en torno, fundamentalmente, a la Reforma Constitucional de las Tres Areas de la Economía.

En los meses de julio y agosto, según declarará más tarde Pinochet, hay memorándums de las FF.AA., en los que se plantea ya "la posibilidad de tomar el control de la nación". El 21 de agosto se inicia un paro del comercio con graves desórdenes, que obligan al gobierno a decretar el "Estado de Emergencia".

El 21 de septiembre, EE.UU., aprueba la suma de 24 mil dólares para una organización empresarial chilena. En el mismo mes, aborta el complot militar del general Canales y éste, así como el general Hiriarte y otros oficiales, son llamados a retiro.

El 10 de octubre, los camioneros inician su paro nacional, al cual habrían de incorporarse después los comerciantes y varios gremios profesionales. Hay declaraciones de diri-

gentes políticos de oposición, que hablan de la "ilegalidad del gobierno". El 40 Committee, para apoyar la ofensiva de la oposición, aprueba el 26 de octubre, un millón 500 mil dólares. Pese a que, como hemos señalado en otros lugares de este libro, el paro es derrotado por los trabajadores, el gobierno realiza importantes concesiones a la oposición y designa un gabinete integrado por las FF.AA. A raíz del paro y por imposición de las FF.AA., y de la oposición, el gobierno, contribuye con sus votos a la aprobación de la Ley de Control de Armas.

A fines de 1972, quince generales (5 de cada arma), se reúnen para planear en concreto el golpe de Estado contra el gobierno. A fines de enero de 1973, el ministro de Economía, miembro del Secretariado del P"C", crea una comisión para negociar con la DC las empresas que se pasarían al área estatal. El 12 de febrero, el 40 Committee, aprueba 200 mil dólares para apoyar a los partidos de oposición en la elección de parlamentarios que se realizará en el mes de marzo.

A mediados de mayo de 1973, el sector freista toma oficialmente el control del PDC ganando una elección interna. El 30 de mayo, el Tribunal Constitucional se declara incompetente para arbitrar en el conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento, motivado por la Reforma Constitucional de las Tres Áreas de la Economía. Se encuentra en preparación un nuevo paro del transporte y otros gremios manejados por la oposición, para ayudar al golpe de Estado. "El 28 de mayo -según declaraciones de Pinochet a la revista "Vea"- se dictó una directiva de seguridad interior donde se cambiaron las bases. De la defensa pasábamos a la agresión".

El 20 de junio, los mineros del cobre de El Teniente, llevan ya 63 días de huelga. El 29 de junio se produce el "tancazo", es decir, el intento de golpe inducido por el Regimiento de Blindados N° 2 Santiago. El 26 de julio comienza nuevamente la huelga de los camioneros. El 6 de junio vence el plazo constitucional del gobierno para llamar a referéndum por la Reforma Constitucional de las Tres Áreas de la Economía. A estas alturas, ya han comenzado los allanamientos de poblaciones, locales sindicales, industrias y fundos, por las FF.AA., en aplicación de la Ley de Control de Armas. El 30 de julio, como último y desesperado intento, el gobierno logra reiniciar, a instancias del Cardenal de Santiago, un diálogo con el presidente de la DC, senador Patricio Aylwin. El otro interlocutor es el Presidente de la República.

El 2 de agosto, más de 10 mil buses y taxis de la locomoción particular se incorporan a la huelga. El 20 de agosto, el 40 Committee, aprueba un millón de dólares para apoyar a los partidos de oposición y organizaciones privadas, en su embestida final contra el gobierno. El 23 de agosto, se logra la renuncia de Prats como Comandante en Jefe de las FF.AA. y asume ese cargo Pinochet. El 27 de agosto, se pliega el comercio a la huelga, así como varios gremios profesionales. A comienzos de ese mes ya se han dado, así mismo, por fracasadas las conversaciones del gobierno con la directiva de la DC y en el Parlamento ha surgido el acuerdo de mayoría declarando la "inconstitucionalidad" e "ilegitimidad" del gobierno. Las FF.AA., tienen ya el pretexto legal para actuar. Finalmente, después de frustrado el intento de golpe de Ruiz Danyau a mediados de agosto de 1973, el 11 de septiembre, tiene lugar el golpe de Estado que habría de conquistar el gobierno asesinando al Presidente Allende.

Se enfrentan, pues, en Chile, no sólo dos bloques internos: el de oposición y el del gobierno, sino, dos políticas internacionales: la del imperialismo norteamericano y la del social-imperialismo soviético. El primero, confiesa haber gastado 8 millones de dólares entre 1970 y 1973, para derribar al gobierno de Allende. Esa suma (que sólo contempla una parte de los gastos del imperialismo yanqui), cambiada en el "mercado negro" correspondía a una suma de 5 a 10 veces mayor que el precio oficial que tenía el dólar. Todo ese dinero y la actividad de los agentes de la CIA y de la DIA que operaron en Chile, se utilizó para promover sabotajes, atentados, huelgas, acaparamiento y "mercado negro", así como para acelerar la decisión golpista de las FF.AA. y de la oposición civil. La estrategia del imperialismo norteamericano, consistió, no sólo en impedir toda posible consolidación del capitalismo de Estado, del sedicente "socialismo" a la soviética, sino, en oponerse firmemente a los intentos de la dirección del P"C" por imponer su "compromiso histórico" con la DC, destinado a alcanzar sus objetivos mediante un rodeo, adaptando su estrategia de infiltración a las condiciones de un país situado en el área de influencia norteamericana-

na.

Por otra parte, la estrategia soviética consistió en oponerse firmemente a todo lo que significara desarrollo de las luchas populares y hegemonía de una línea proletaria, conducente a la destrucción del Estado burgués. Consistió en esforzarse por todos los medios, aún oponiéndose abiertamente a la organización de una resistencia popular contra el golpismo fascista, para lograr el pacto con el sector populista pro-yanki y generar, así, un gobierno híbrido que, impidiendo toda solución revolucionaria, les permitiera infiltrarse en el gobierno chileno, imponiendo al imperialismo norteamericano una explotación compartida del pueblo de Chile. Como veremos más adelante, esta estrategia del social-imperialismo, instrumentalizada en nuestro país por los dirigentes del P“C”, continua siendo promovida hoy día, después del golpe de Estado, “como solución” frente al régimen militar.

TERCERA PARTE
LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR

CAPITULO VI

¿QUE INTERESES ATACO EL PROGRAMA DE LA UNIDAD POPULAR?

La Unidad Popular, con su triunfo en la elección presidencial de 1970, sólo conquistó una pequeña "cabecera de playa" en el poder reaccionario tradicional imperante en Chile. Asumió una parte del poder Ejecutivo. Ni siquiera la totalidad de dicho Poder, pues, numerosas atribuciones de éste estaban restringidas por la Constitución, por las leyes y por las atribuciones de los poderes Legislativo y Judicial. Por otra parte, numerosos funcionarios de los ministerios, así como de las empresas y reparticiones fiscales designados en gobiernos anteriores y adversarios de la Unidad Popular, gozaban de derechos legales de inamovilidad. Muchos de ellos terminaron saboteando abiertamente las decisiones del gobierno, sin poder ser despedidos. Hubo reparticiones fiscales en las que se debió nombrar una planta directiva paralela a la designada por otros gobiernos, a costa de enormes gastos y manteniendo casi inactivos a los funcionarios heredados de las anteriores administraciones, que no podían ser destituidos.

Todo el resto del aparato estatal era dominado por los representantes de los monopolios norteamericanos que operaban en Chile y de los explotadores internos más poderosos: la burguesía industrial, comercial y financiera monopolista y la oligarquía terrateniente. Este aparato estatal, aparte del Ejecutivo, contaba con: un sistema legal al servicio de las clases dominantes; un Parlamento con mayoría opositora al gobierno; Tribunales de Justicia, que son verdaderos bastiones de los sectores más reaccionarios; unidos a lo anterior, poderosos medios de publicidad, en los que la oposición controlaba el 80 por ciento de la circulación diaria de periódicos, el 50 por ciento de la sintonía diaria de radioemisoras y el 60 por ciento de la sintonía diaria de la televisión; una Contraloría General de la República, manejada también por la oposición, con amplias atribuciones de fiscalización sobre las decisiones legales del gobierno; y, por último, lo que era más decisivo que todo, Fuerzas Armadas y policiales, al servicio del imperialismo norteamericano y de los sectores más reaccionarios del país.

Si bien un gran número de militantes de base del P" C" de Chile y de los otros partidos de la UP, así como algunos dirigentes honestos de estos últimos, aunque sin tener una idea clara acerca de su verdadero contenido, pensaban y anhelaban construir el socialismo en Chile, como hemos ya señalado, no era ésto, objetivamente, lo que perseguían los dirigentes del P" C" pro-soviético. Para ellos, "socialismo", es lo que existe en la URSS, Polonia, Checoslovaquia y en los otros países adheridos al Pacto de Varsovia, con los que se sienten plenamente identificados. Pensaban alcanzar en Chile, a partir de un capitalismo dependiente, lo mismo a lo que se llegó por degeneración del socialismo en dichos países de Europa oriental. Es decir, una especie de capitalismo de Estado, en el que se encuentra al mando del poder y de las empresas estatizadas y reemplazando a los antiguos capitalistas, una nueva burguesía burocrática con intereses opuestos al pueblo. La idea de ligar posteriormente dicho capitalismo de Estado con los intereses dominantes en el social-imperialismo soviético, tampoco era ajena a sus planes.

Con todo, el proyecto de transformaciones levantado por la Unidad Popular, si bien no conducía al socialismo, significaba un contundente golpe a los intereses de los terratenientes, a los de algunos monopolios norteamericanos que operaban en Chile y a los de los más poderosos sectores de la burguesía industrial, comercial y financiera. Precisamente, a costa de esos intereses se pensaba ampliar el capitalismo de Estado y forjar la nueva burguesía burocrática. Por lo mismo, si bien el Programa y la estrategia de la UP sólo eran reformistas, pues no se proponían liquidar a fondo el poder económico de dichos sectores dominantes, ni arrebatárles el poder destruyendo el aparato estatal de un modo revolucionario; ni poner los medios de producción expropiados o el poder en manos del pueblo, en el conteso en que se realizaron dichas reformas, resultaron ser una aventura "izquierdista". Se actuó en el plano económico y social como si se hubiera conquistado el poder político, en circunstancias que sólo se controlaba una parte del Poder Ejecutivo.

La experiencia de los tres años de gobierno de la Unidad Popular consistió, en esencia, en un intento de aprovechar (o de burlar a través de "resquicios legales"), una institucio-

nacionalidad y legalidad hechas para servir a los intereses más reaccionarios, consistió, en un intento de restringir y desplazar dichos intereses, respetando las reglas del juego establecidas precisamente para consolidarlos y ampliarlos; en suma, fue un esfuerzo plagado de todas las frustraciones que es posible imaginar y condenar de antemano al fracaso, para cambiar "pacíficamente" un sistema social, que utilizaba tan sólo una máscara de democracia burguesa para ocultar la violencia armada que le servía de base de sustentación real. Fue un intento fallido de ejercer el poder sin haber conquistado el poder y sin el propósito siquiera de aprovechar de un modo revolucionario lo logrado a raíz del triunfo electoral de 1970, para desarrollar un combativo movimiento de masas capaz de conquistarlo realmente, aplastando el poder armado reaccionario. Esta última posibilidad, en verdad —y esta es la tesis fundamental de este libro— era absolutamente incompatible con el proyecto de sociedad, basado en una explotación centralizada y estatal del pueblo, que buscaban los dirigentes del P" C" pro-soviéticos y algunos que les secundaban en la UP. A un pueblo movilizado de un modo revolucionario le habría sido fácil más adelante, "cambiar el fusil de hombro" y volverse contra sus nuevos explotadores.

Para constatar lo absurdo de este camino "pacífico" al capitalismo de Estado (disfrazado de socialismo) y las raíces de un fracaso, absolutamente previsible anticipadamente para quienes enfocaron esta experiencia con un criterio verdaderamente marxista, es importante iniciar estos capítulos de análisis de la política económica del gobierno de la UP, con un recuento esquemático de los intereses reaccionarios que resultaron afectados o amenazados por el Programa del gobierno allendista.

1.- Los intereses del capitalismo norteamericano en Chile

La dominación del imperialismo norteamericano sobre Chile se ejercía y se ejerce a través de muchas y muy variadas formas. Cuando se inicia el gobierno de Allende, los monopolios yanquis controlaban las grandes riquezas mineras chilenas: el cobre, el salitre, el hierro. Mantenían aún el control de algunas empresas de utilidad pública como la Compañía de Teléfonos, de propiedad de la ITT. Monopolizaban una parte decisiva del comercio internacional de Chile, comprando sus productos en bruto o semi-elaborados a bajo precio y vendiéndole productos manufacturados a precios muy elevados. Eran propietarios o tenían inversiones (cada vez mayores) en numerosas empresas de la industria manufacturera, las más rentables; y explotaban al conjunto de la industria a través de: préstamos financieros, venta o arriendo de tecnología, venta de maquinarias, materia primas, repuestos, combustibles, etc.

Un rubro importante de las exacciones del imperialismo yanqui a la economía chilena, lo constituían los préstamos a interés, ya sea a corto o a largo plazo, realizados por organismos dependientes del gobierno norteamericano. Estos préstamos estaban ligados a exigencias respecto a la aplicación de una política favorable a los intereses de los monopolios de EE.UU., y, por lo general, se trataba de préstamos "atados", es decir, que debían invertirse en adquirir bienes de capital o de otro tipo en el propio EE.UU. Las inversiones y los préstamos eran siempre inferiores a las utilidades que obtenían en el país de los monopolios que los realizaban y proveían, por consiguiente de las propias utilidades extraídas de Chile. Al mismo tiempo, debido a su carácter condicionado, contribuían a hacer aún mayores esas utilidades, a deformar el desarrollo económico, a intensificar la crisis y la dependencia y, por ende, la necesidad de nuevos y mayores empréstitos. Se trataba de una espiral en continuo desarrollo, que estrangulaba la economía del país. Durante el gobierno de Allende, ese endurecimiento externo, considerando los créditos obtenidos ya en gobiernos anteriores y las nuevas deudas, llegaba casi a los 4 mil millones de dólares. El solo servicio de la amortización anual y pago de intereses de esa fabulosa deuda, consumía más de la mitad del ingreso total de divisas del país. Más del 70 por ciento de esas deudas correspondían a préstamos provenientes de EE.UU.

Para EE.UU., Chile, ya en el año 1964, era el séptimo país del mundo en relación al monto de las inversiones norteamericanas, que ascendían ese año a más de mil millones de dólares. En 1970, operaban en Chile, ciento diez sociedades norteamericanas y muchas otras en las que existían capitales yanquis, aunque estuvieran radicadas en otros países.

Para comprender la magnitud de los intereses imperialistas que resultaron afectados o se sintieron amenazados por el gobierno de Allende, es necesario decir algo sobre la gran minería del cobre de Chile. En Chile existen tres grandes minas de cobre: Chuquicamata, El Salvador y El Teniente. Las dos primeras pertenecían al gigantesco consorcio llamado Anaconda Copper Mining y la última, a la Kennecott Copper. Chuquicamata y El Teniente son, respectivamente, los minerales de cobre más grandes del mundo, a tajo abierto el primero y subterráneo éste último. El 80 por ciento de la producción total de cobre de Chile provenía de estas tres grandes minas, expropiadas en el primer año del gobierno allendista. A lo largo de su historia de dependencia se calcula que Chile ha exportado alrededor de 22 millones de toneladas de cobre. En el año del triunfo electoral de Allende a la Presidencia de la República (1970), Chile, aportaba el 11 por ciento de la producción total de cobre del mundo, que sobrepasaba los 6 millones 200 mil toneladas. El valor total de las exportaciones chilenas en ese mismo año, ascendía a mil 123 millones de dólares, de las cuales más de 700 millones correspondían a las exportaciones de cobre. Se estima que, entre 1911 y 1970, las grandes compañías norteamericanas que explotaban el cobre chileno, obtuvieron más de 4 mil 600 millones de dólares de utilidades "legales". El Senador Demócrata Cristiano, Radomiro Tomic, analizando cifras hasta el año 1960, expresó en el Parlamento el 18 de julio de 1961: "A lo largo de cuarenta años, estas compañías (se refería a los monopolios norteamericanos que explotaban el cobre chileno), han retirado del país tres mil millones de dólares. Ha sido, pues, un gran negocio. Esa suma de tres mil millones de dólares representa un tercio total del capital físico de Chile, formado no en 40 años sino en 400 años". Posteriormente, sin embargo, en el gobierno del correligionario Eduardo Frei, las compañías norteamericanas habrían de llevarse, tan sólo en 4 años (1965-1968), más de mil millones de dólares de utilidades "legales".

No obstante, como ya hemos señalado, el cobre no era la única fuente de lucro de los inversionistas norteamericanos. El monopolio Bethlehem Steel Corporation, que explotaba el mineral de hierro chileno, obtuvo desde 1911 hasta 1970, casi 400 millones de dólares de utilidades; la Anglo Lautauru, también norteamericana, propietaria de los grandes yacimientos de salitre natural existentes en el norte del país, obtuvo en el mismo lapso, 500 millones de dólares; la ITT con inversiones en los servicios de teléfonos y otros rubros y comprometida con la CIA en los planes de "desestabilización" del gobierno de Allende, logró de 1951 a 1970, unos 200 millones de dólares de utilidades. Sus inversiones en Chile alcanzaban en 1970 a unos 100 millones de dólares. Por último, "Chilectra", a través de la cual los inversionistas yankis controlaban la distribución de energía eléctrica en Chile, tuvo utilidades entre 1928 y 1969, de unos 170 millones de dólares. Todas estas empresas, salvo la última de ellas, fueron expropiadas por el gobierno de la Unidad Popular.

Sólo hemos hecho mención, de las utilidades obtenidas en las grandes minas y servicios de utilidad pública, de las cuales existe un relativo control. Es muy difícil estimar las utilidades obtenidas por los inversionistas de EE.UU., en la industria manufacturera, en las grandes firmas distribuidoras mayoristas y en otras empresas. Está claro, sin embargo, que Chile representa una valiosa presa para los monopolios de Norteamérica, no sólo por el elevado monto de las inversiones allí existentes, sino, también, por el alto porcentaje de utilidades que obtenían de esas inversiones. En el año 1968, sobre un capital invertido de unos 400 millones de dólares, las inversiones extranjeras directas en Chile, lograron una utilidad de más de 320 millones de dólares, incluyendo utilidad neta, depreciación e intereses de capital, es decir, alrededor del 23 por ciento del capital invertido. El propio presidente Allende denunció en las Naciones Unidas, en noviembre de 1972, que tan sólo las compañías norteamericanas habían extraído de nuestro país entre 1955 y 1970, cerca de 4 mil millones de dólares de utilidades.

Por otra parte, como ya hemos señalado, existían ya a partir de la política de "Alianza para el Progreso" iniciada por Kennedy, planes muy concretos de los monopolios e inversionistas norteamericanos, destinados a apoderarse de la industria manufacturera chilena. Ya hemos señalado los avances que esta penetración de capitales norteamericanos tuvo en dicha industria durante el gobierno de Frei. Estas inversiones en la industria, si bien se sintieron amenazadas durante el gobierno de Allende, no fueron tampoco tocadas sustancialmente. Precisamente el informe de Rockefeller, que recomienda reemplazar a los partidos

políticos por las FF.AA. en los países latinoamericanos, tiene como objetivo el proseguir esta política tendiente a apoderarse de las industrias manufactureras más rentables del Continente. Incluso la "ayuda" de EE.UU. a estos países obedece a esos objetivos. El comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de dicho país, señala al respecto: "La más importante razón (para la "ayuda" económica) es que esas naciones (en vías de desarrollo) están determinadas a desarrollarse. Y sólo participando en ese proceso tendremos oportunidad de dirigir su desarrollo en la dirección que sirva mejor a nuestros intereses".

Pensamos que los antecedentes entregados sumariamente, acerca de los intereses de los monopolios norteamericanos en Chile, son más que suficientes para concluir lo absurdo que era suponer que Estados Unidos aceptara "pacíficamente" la expropiación así como la amenaza respecto a sus planes a largo plazo, de control de la economía chilena. Más aún, que arriesgara —dada la influencia dominante en la Unidad Popular de un P" C" pro-soviético— una creciente penetración del social-imperialismo soviético en Chile. Por intereses económicos, políticos y estratégicos mucho menores que los que estaban en juego en Chile, el gobierno norteamericano intervino para derrocar gobiernos y hasta se empanató en prolongadas y costosas guerras con sus propias tropas. Aún ovidándose, pues, de los enemigos internos de clase y por la sola presencia del imperialismo norteamericano en Chile, el proyecto de "transición pacífica al socialismo" (o a lo que los soviéticos y sus seguidores acostumbran llamar "socialismo") era un proyecto absolutamente aventurero.

2.- La Oligarquía Terrateniente.

Otro poderoso sector de las clases reaccionarias dominantes en Chile al que enfrentó la UP con su programa de reformas, es la oligarquía terrateniente. Este sector social construyó históricamente su poderío a partir de la propiedad de gigantescos latifundios, arrebatados por sus antepasados a la población indígena, a través de los cuales monopolizaban las mejores tierras del país. El IV Censo Nacional Agropecuario, realizado en 1965, señala la siguiente distribución de las tierras según su tamaño:

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN CHILE (1)

dimensión de las explotaciones	número	superficie	porcentaje del número de las explotaciones	porcentaje de superficie
menos de 10 ha.	156.708	437.300	61,8	1,4
de 10 a 99 ha.	74.120	2.348.200	29,3	7,7
de 100 a 999 ha.	19.333	5.572.400	7,6	18,7
1.000 ha y más	3.331	22.290.800	1,3	72,2
	253.492	30.648.700	100,0	100,0

(1) IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1965

Si se considera como latifundio a aquellos predios de 200 hectáreas para arriba, tenemos que estos terratenientes, con menos de 5 por ciento del número total de predios agrícolas, acaparaban más del 85 por ciento de la superficie agrícola total del país. Entretanto, más del 95 por ciento de los propietarios agrícolas, es decir, más de 200 mil propietarios, poseían menos de un 15 por ciento de la superficie agrícola total. Junto a ellos, en una situación de aguda miseria, se encontraban más de 750 mil trabajadores agrícolas sin tierras.

La política de los grandes terratenientes consistió tradicionalmente en cultivar sólo una pequeña extensión de sus inmensas propiedades, al margen del progreso técnico y, básicamente, explotando brutalmente a los trabajadores agrícolas. Así mismo, esquilmbaban por

diversos procedimientos a los agricultores medianos y pequeños. En verdad, los terratenientes en Chile, han aprovechado su "derecho" de propiedad sobre grandes extensiones de las mejores tierras, para enriquecerse, no produciendo, sino saboteando la producción agropecuaria. En efecto, amparados por su derecho "intocable" de propiedad, restaban a la producción la mayor parte de las tierras bajo su control monopólico. Con ello, generaban un déficit crónico (y creciente en la medida que aumentaba la población) de productos agrícolas. Puesto que es imposible prescindir de estos productos (en particular de los alimentos), su sabotaje obligaba, por una parte, a importarlos a los elevados precios del mercado internacional; y, por la otra, a llevar al mercado productos generados a un precio muy elevado, en tierras de mala calidad y alejadas de los centros de consumo. Cada aumento de la población del país, agudizaba la crisis agrícola inducida por los latifundistas y obligaba a importar una mayor cantidad de productos agropecuarios y a enfrentar esa demanda con productos nativos de costos muy elevados. Dada esa situación creada en lo fundamental por ellos mismos, a los latifundistas les bastaba vender sus productos (con costos de producción muchísimo más bajos), a los altos precios que su sabotaje generaba en el mercado, para obtener una inmensa utilidad suplementaria (renta diferencial) por sobre la utilidad promedio de los otros agricultores.

Esta política retrógrada en extremo, unida hasta no hace mucho a formas semi-feudales de explotación de vastos sectores campesinos (pago en especies, prestaciones personales, mediería, etc.) le permitió a los grandes terratenientes amasar inmensas fortunas con un mínimo de inversiones. Al mismo tiempo, dado su papel dominante en el aparato estatal y en sus instituciones, obtenían importantes créditos sobre la base de sus propiedades agrícolas, constantemente revalorizadas por el alza continua de los precios de los productos agropecuarios. Esto no era obstáculo, sin embargo, para que se negaran sistemáticamente a llevar contabilidad controlable en sus latifundios o a permitir que ellos fueran avaludados en su real valor comercial, cuando se trataba de pagar los impuestos fiscales.

Por otra parte, puesto que su propósito no era precisamente volcar grandes inversiones en la producción agrícola, las fortunas que acumulaban las orientaron a negocios especulativos y financieros, a inversiones en empresas de importación y exportación, así como a lucrativas empresas industriales, comerciales o de servicio. De este modo, muchos integrantes de la oligarquía terrateniente, se transformaron en burguesía monopolista de tipo financiero, industrial o comercial o fundieron, progresivamente sus intereses con dichos sectores.

Este período económico multifacético de la oligarquía terrateniente, determinó que este sector social no fuera liquidado como clase por completo al realizarse la reforma agraria en los gobiernos de Frei y Allende, que en conjunto significaron la expropiación de casi 6 mil latifundios, que totalizaban una superficie cercana a los 5 millones de hectáreas de riego y secano cultivable. En los momentos de asumir Allende, en particular el sector terrateniente, continuaba siendo extremadamente poderoso. Durante el gobierno de la UP, no obstante, la expropiación de la mayor de sus tierras, continuaron siendo poderosos. Continuaron siéndolo, debido a la mantención del Estado burgués en cuyas instituciones poseían (y poseen) una muy poderosa influencia; a la aplicación de una reforma agraria que contemplaba fuertes indemnizaciones por las tierras expropiadas, así como la exigencia legal de pagarles al contado sus maquinarias, animales, cosechas, construcciones, plantaciones forestales, etc.; a la obligación, así mismo, de acuerdo con la Ley de Reforma Agraria, de dejarles una importante reserva de las mejores tierras, cuando eran expropiados; y, por último, al fuerte poderío económico que poseían en el terreno bancario, comercial e industrial. Es así, como su agresividad política se redobló al ser afectados por las reformas una parte de sus intereses económicos, sin ser aplastados por completo como clase y sin que les fuera arrebatado el poder político que controlaban con el imperialismo y la burguesía monopolista, con quienes les ligaban, como hemos dicho, estrechos intereses. Todo esto, con el agravante de que fueron afectados en sus propiedades agrícolas, es decir, precisamente, en aquello en lo que fundaban su orgullo aristocrático como clase y su sentido de superioridad social sobre aquellos que no eran "más que" comerciantes, banqueros o industriales.

No es casual, por lo tanto, que la Unidad Popular y su Gobierno, tuvieran en los terratenientes, a quienes con mucha ligereza se suponía poco menos que liquidados política-

mente y económicamente después de ambas reformas agrarias, a uno de sus más enconados y poderosos enemigos. A quienes en ningún momento aceptaron transar y no cesaron hasta derribar al gobierno.

3.- La Burguesía Monopolista y Financiera.

El otro sector de clase dominante en el Estado chileno, con estrechos lazos con el imperialismo norteamericano y con la oligarquía terrateniente, es la burguesía monopolista (industrial, comercial y financiera).

Chile es un país, en el contexto de las naciones del Tercer Mundo, que posee un relativo desarrollo industrial. Las dificultades de Chile para importar y exportar debidas a la crisis mundial de los años 30, primero, y luego, a la Segunda Guerra Mundial, determinaron una fuerte afluencia de capitales acumulados por el sector terrateniente y por quienes se habían enriquecido anteriormente en los negocios ligados a la importación y exportación, hacia la creación de una industria manufacturera. El hecho de ser Chile hasta antes de la crisis mundial mencionada, el único poseedor de salitre natural, aparte de carbón, cobre, plata y otros minerales; así como la ventaja (hasta que se construyera el Canal de Panamá), de ser el paso obligado a través del Estrecho de Magallanes, entre el Océano Pacífico y el Atlántico, generó en el país grandes fortunas y un hábito muy desarrollado de consumo de productos importados. Precisamente, el desarrollo de la industria manufacturera chilena estuvo ligado a la necesidad de sustituir dichos productos que antes se importaban, cuando el comercio internacional fue fuertemente bloqueado por los acontecimientos que hemos señalado. Por otra parte, debido a lo limitado del mercado interno esta industria se desarrolló desde su nacimiento, con una estructura altamente monopólica.

Cuando se iniciaba el primer año de gobierno de la Unidad Popular en 1971, la Oficina de Planificación (ODEPLAN), en su plan anual, registraba la siguiente estratificación de las empresas industriales:

ESTRATO	ESTABLECIMIENTOS	OCUPACION	CAPITAL	VALOR AGREGADO
	(en tantos por ciento)			
Gran Industria (más de 200 trabajadores)	3	44	58	51
Mediana Industria (20 a 200 trab.)	30	40	35	38
Pequeña Industria (5 a 20 trab.)	67	16	7	11

Expresando en síntesis la fuerte estructura monopólica de la industria manufacturera en los momentos en que Allende asume la Presidencia de la República, podemos decir que: 130 establecimientos industriales, que representaban sólo el 1,2 por ciento de número total de industrias "controladas", es decir, de aquellas que son calificadas como tales por los censos, pues cuentan con 5 operarios o más, copaban alrededor del 35 por ciento del valor agregado de cada rama industrial, poseían casi el 40 por ciento del capital fijo y se apropiaban del 38 por ciento de los excedentes brutos.

La concentración de capital, además, en la gran industria era muy alta en relación al resto. Estadísticas de la CORFO indican que hasta 1970, la densidad de capital en la gran industria era 180 por ciento más alta que aquella de la pequeña industria y 50 por ciento más elevada que en la industria media. Esta última, por su parte, tenía una densidad de capital 85 por ciento mayor que la pequeña industria. Más aún, nueve unidades de la gran industria concentraban un 45 por ciento de todo el capital de la gran industria, que representaba un 25 por ciento del capital total de la industria manufacturera. De todo el capital fijo (incluyendo maquinarias, equipos, construcciones e instalaciones) el 86 por ciento era concentrado en la industria manufacturera "controlada" y sólo un 14 por

ciento en las unidades artesanales, casi dos veces más numerosas.

Por su parte, en lo que respecta al comercio: 12 firmas distribuidoras mayoristas, o sea, el 0,5 por ciento del total de ellas, efectuaron en el año 1967, el 44 por ciento del total de las ventas del área mayorista. En lo que respecta a los comerciantes minoristas, el 54 por ciento de las firmas efectuaba el 74 por ciento de las ventas de esa área.

El crédito bancario estaba también fuertemente controlado por los sectores monopolistas de la tierra, la industria y el comercio, pues los directorios de los bancos estaban estrechamente ligados a las grandes empresas. Datos de 1968, indican que el 2,7 por ciento de los deudores de los bancos privados obtuvieron el 58 por ciento del total de créditos otorgados, y otro 0,4 por ciento obtuvo casi un 30 por ciento de los créditos. Entretanto, un 28 por ciento de los deudores logró apenas un 2,6 por ciento del total de préstamos.

Los intereses monopolistas de la industria, la tierra, la banca y el comercio, íntimamente ligados a los intereses de los monopolios imperialistas, eran plenamente solidarios en su oposición resuelta al gobierno allendista. Los lazos existentes entre ellos determinan que en Chile, el conjunto de la economía, sea dominado sin contrapeso por 12 poderosos clanes, con vastas ramificaciones en la industria, la banca y el comercio monopolista, así como en el latifundio y en el comercio exterior. Estudios realizados por el Ministerio de Economía de la Unidad Popular, afirmaban que: "en 1966, el 17 por ciento de las empresas controlaban el 75 por ciento de todos los activos de las sociedades anónimas; 28 sociedades anónimas controlaban prácticamente cada sector y cada rama de la economía. Además, de las 160 empresas más grandes, 81 tenían participación (y un tercio del control) extranjera". (85)

Contra estos 12 clanes que, en conjunto con el imperialismo norteamericano, controlaban (y controlan) la economía y el poder en Chile, estaban dirigidas las principales reformas planteadas por el Programa de la Unidad Popular. Dicho Programa plantea en uno de sus puntos: "El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropian. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. Así, quedarán integrando este sector de actividades nacionalizadas las siguientes:

- 1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral;
- 2) El sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros;
- 3) El comercio exterior;
- 4) Las grandes empresas y monopolios de distribución;
- 5) Los monopolios industriales estratégicos;
- 6) En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones, la producción, refinación y distribución del petróleo y de sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel."

Está claro, pues, que las reformas de la Unidad Popular destinadas a ampliar el capitalismo de Estado, golpearon directamente los intereses de estos poderosos clanes que controlaban el poder en Chile. Era perfectamente previsible, por lo tanto, que esos sectores reaccionaran con profundo odio de clase y se opusieran por todos los medios posibles: legales e ilegales, institucionales y sediciosos a quienes amenazaban sus privilegios y su control mismo del poder. Era, así mismo, completamente iluso contar con un verdadero "suicidio pacífico" de su parte, suponiéndoles un respeto a sus leyes e instituciones más poderoso que el amor por sus riquezas y su control tradicional de la política chilena.

CAPITULO VII

LAS RAICES DEL DESABASTECIMIENTO Y DEL "MERCADO NEGRO"

Salvador Allende fue elegido Presidente de la República el 4 de septiembre de 1970. Obtuvo un millón 75 mil votos, es decir, el 36,3 por ciento de la votación total. Ganó a su más cercano oponente, Jorge Alessandri, por 39 mil votos. Como no obtuvo la mayoría absoluta de votos (la mitad más uno) era necesario, según la legislación chilena, que el Congreso Pleno eligiera al Presidente de la República entre los dos candidatos que obtuvieron las más altas votaciones.

Desde el mismo momento en que Allende obtuvo la más alta votación comenzaron las maniobras de la extrema derecha chilena y del imperialismo norteamericano, para impedir que asumiera el mando. En el propio Congreso Norteamericano se ha demostrado la activa participación que tuvo la CIA yanqui en estas turbias maniobras, destinadas a impedir que Allende llegara a la Presidencia, así como en las posteriores destinadas a derrocarlo. Ofreció cuantiosas sumas de dinero para sobornar parlamentarios y obtener una votación adversa a él en el Congreso Pleno y más adelante, aún antes que asumiera el mando, estuvo comprometida en el asesinato del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, destinado a obtener un pronunciamiento militar que impidiera la llegada de Allende al Gobierno.

La maniobra para impedir la designación como Presidente de la República de Allende en el Congreso Pleno, consistía en que los parlamentarios opuestos a la Unidad Popular, eligieran a Jorge Alessandri, había obtenido la segunda mayoría. Este permanecería por un breve tiempo en la Presidencia de la República y luego renunciaría, llamando nuevamente a elecciones. En dichas elecciones sería presentado como candidato único de la Democracia Cristiana y de las fuerzas de extrema derecha, Eduardo Frei. Frei ofrecía más garantías a los derechistas partidarios de Alessandri, que Radomiro Tomic, que había sido en 1970 opositor en las elecciones presidenciales a Allende, levantando un programa bastante similar al de la Unidad Popular. Con esta maniobra se obviaba, al mismo tiempo, la prohibición constitucional de que una misma persona fuera presidente por dos períodos seguidos. Entre la presidencia de Frei, que terminó su período en 1970 y su reelección, mediaría el breve lapso presidencial de Alessandri. Este último, a requerimiento de sus partidarios, aceptó públicamente esta maniobra y ofreció renunciar, pese a que uno de los slogan de su propaganda en la campaña presidencial había sido: "quien obtenga un voto más debe ser Presidente". La maniobra politiquera destinada a impedir que asumiera Allende era, además, perfectamente legal y constitucional y se suponía que debía ser aceptada y respaldada por las Fuerzas Armadas. Uno de los más interesados en este despojo del vencedor en las elecciones, era Eduardo Frei, político reaccionario, ambicioso e hipócrita en extremo, a quien le enfurecía ser llamado el "Kerenski chileno" y figurar en la historia como abriendo paso al "comunismo", inmediatamente después de su gobierno.

No obstante, después de aguda lucha, predominaron en la Democracia Cristiana las fuerzas que se oponían a esta intriga constitucionalista. La derecha se había opuesto tenazmente a las reformas aplicadas por Frei en su gobierno a instancias de Estados Unidos. Se temió el descontento de las bases demócratas cristianas, así como una fuerte reacción popular, si el Congreso violaba lo que era una antigua tradición en Chile: elegir a quien hubiera obtenido una votación más alta en las elecciones, aún cuando no lograra mayoría absoluta. Por otra parte, un presidente impuesto por medio de una maniobra parlamentaria, habría tenido que enfrentar una oposición popular desengañada del proceso electoral, es decir, una oposición fuertemente predispuesta a emprender un camino revolucionario de conquista del poder. Es así como el propio oponente a Allende en las elecciones de 1970, Radomiro Tomic, fue uno de los primeros en concurrir a felicitarlo por su triunfo. Este gesto de Tomic motivó un violento altercado de éste con Frei.

La Democracia Cristiana, sin embargo, aprovechó su influencia decisiva en el Congreso Pleno, para condicionar su votación por Allende en ambas cámaras, obligándolo previamente a suscribir un así llamado "Estatuto de Garantías Constitucionales". Dicho Estatuto, sirvió para atarlo aún más desde la partida de su mandato a los estrechos marcos de la legalidad e institucionalidad burguesas y, más adelante, fue una pieza vital para acusar a Allende de violación de esos compromisos y promover con ese pretexto abiertamente su

derrocamiento. El Estatuto, entre otras cosas, prohibía tomar medidas restrictivas contra los partidos de oposición y sus medios de publicidad, aún cuando su actividad fuera -como efectivamente lo fue- abiertamente sediciosa; establecía expresamente que las únicas Fuerzas Armadas debían ser las ya existentes y que sólo los Comandantes en Jefe de ellas podían designar a sus subordinados, cerrando el paso así a toda democratización de sus mandos y oficialidad; prohibía la modificación por parte del gobierno del contenido clausista de la educación, etc. etc.

1.- La "Huelga" de inversiones en la industria privada.

Uno de los propósitos básicos del Gobierno de la Unidad Popular fue reactivar la producción industrial y el comercio, fuertemente deprimidos en los últimos años del gobierno de Frei. En efecto, el crecimiento industrial que alcanzó un 7 por ciento en los dos primeros años del gobierno demócrata cristiano, bajó en 1967 a menos del 2 por ciento, disminuyendo, así mismo, los índices de crecimiento del producto interno.

El Gobierno de Allende, para lograr una fuerte expansión de la producción industrial y del comercio, proyectó estimular intensamente la demanda popular de productos industriales. Para lograr este objetivo se propuso disminuir drásticamente la cesantía; redistribuir el ingreso nacional, aumentando significativamente la participación de los trabajadores en él; y, subvencionar los artículos de consumo esencial para mantenerlos con precios oficiales que los hicieran accesibles a un amplio consumo. Al mismo tiempo se pensaba utilizar el crédito bancario, que con las expropiaciones de los bancos en manos privadas quedaría casi en su totalidad bajo el control del Estado para estimular el desarrollo de la pequeña y mediana industria. Se suponía que la oferta crediticia barata y orientada hacia la industria privada, unida al desarrollo de una poderosa demanda masiva de productos industriales, constituirían un estímulo decisivo a la inversión en las empresas privadas.

Una parte importante de estos planes tendientes a expandir el mercado interno y democratizar los recursos crediticios, se pusieron en práctica en el curso del primer año de gobierno de la Unidad Popular. La cesantía, que había alcanzado en 1970 a un 8 por ciento de la población activa, fue rebajada a poco más de un 4 por ciento, índice que se mantuvo como promedio durante los tres años que duró el gobierno. Tan sólo en 1971 se dió trabajo a casi 200 mil personas y en 1972 a 98 mil más.

Por otra parte, en el primer año de gobierno, sobre la base de sustanciales reajustes de sueldos y salarios, se elevó la participación de los trabajadores en el total de ingresos del país, de un 51 por ciento al 60 por ciento. Se calcula que en ese lapso el poder real de compra de los obreros fue aumentando en un 20 por ciento. Todo esto repercutió positivamente en el aspecto político para la Unidad Popular, que aumentó a un 44 por ciento en las elecciones municipales de abril de 1971, el porcentaje de votos, de 36,3 por ciento obtenido en las elecciones presidenciales. Precisamente, la Junta Militar, después del golpe de Estado, se ha encargado de revertir en forma brutal esta redistribución favorable a los trabajadores realizada en el primer año del gobierno allendista. Como lo señalara el dirigente demócrata cristiano Radomiro Tomic en una entrevista publicada por el periódico universitario "Rigth On" de Texas, el 15 de noviembre de 1974, tan sólo la libertad de precios, unida a la fijación por decreto de bajos sueldos y salarios que han realizado Pinochet y sus secuaces, han determinado "el descenso de la participación del Trabajo en el PNB de un 55 por ciento (promedio 1970-1972) al 37 por ciento. Esto, agrega Tomic, "ha significado el desplazamiento, del equivalente en Escudos, de más de mil millones de dólares en poder de compra, de manos de 3 millones de asalariados chilenos (incluyendo a las Fuerzas Armadas y Carabineros) a manos de unos cuantos miles de empresarios".

Al estímulo de la demanda, que significó el alza del poder de compra popular, se sumó en beneficio de la industria manufacturera, una ruptura del monopolio del crédito que detectaban los sectores económicos más poderosos. Es preciso tomar en cuenta al respecto, que ya a mediados de 1971, el Estado controlaba el 57,2 por ciento de las acciones de los bancos privados y en 1973, manejaba el 90 por ciento del crédito bancario. Esto permitió, a través de un decreto expedido en el mes de febrero de 1971, bajar la tasa de interés bancario de un 24 por ciento a un 18 por ciento y para la pequeña y mediana empresa reba-

jarla a sólo un 12 por ciento.

Como consecuencia de estas medidas, en el primer año de gobierno allendista, la tasa de crecimiento del producto interno experimentó un alza de entre 8 y 9 por ciento. El volumen de la producción manufacturera creció en un índice que fluctuó entre un 12 y un 14 por ciento. La inflación, por su parte, que había alcanzado en 1970 a un 36 por ciento, fue disminuyendo en 1971 a un 22 por ciento.

No obstante, la "expansión" de la producción de la industria manufacturera privada fue más aparente que real. Los empresarios privados entregaron efectivamente más productos al mercado en 1971, pero, fundamentalmente, movilizándolo la capacidad ociosa de sus industrias, que funcionaban en los años 1969-1970 (como promedio), a un 68 por ciento de su capacidad productiva; y, dando salida al mercado a los fuertes stocks de mercaderías acumulados en 1970. En la mayor parte de las industrias, además, incluyendo las que pasaron a manos del Estado, se registró una aparente mayor entrega de productos al mercado (que a menudo se confundió y se presentó como aumento de la producción), debida a un mayor control, que impidió la tradicional venta de mercancías sin facturación, que realizaban los industriales para eludir el pago de los impuestos. Tan sólo en Sumar, una de las mayores industrias textiles del país, cuando la Dirección de Industria y Comercio (DIRIN) se hizo cargo de la empresa, comprobó que alrededor del 40 por ciento de la producción no era facturada por sus antiguos propietarios. Todos estos factores contribuyeron inicialmente a producir en el gobierno de la Unidad Popular, la "ilusión óptica" de que habían logrado interesar a los industriales privados en la conveniencia de invertir en sus empresas, como respuesta a un vigoroso desarrollo de la demanda y a las facilidades crediticias que se les otorgaban.

Sin embargo, pese a que los industriales privados realizaron inmensas utilidades en función de la intensificación de la demanda promovida por el gobierno, la verdad es que la inversión neta de sus empresas fue de 0. Prefirieron sacar sus utilidades al extranjero en moneda dura, especular con divisas o dedicar sus ganancias a negocios especulativos, en lugar de invertir en sus empresas. En 1971 la balanza de pagos de Chile tuvo un déficit de 320 millones de dólares, de los cuales 270 millones corresponden a la exportación oficial de capitales privados. No sólo se resistieron a ampliar y modernizar sus industrias, sino que, en muchos casos, vendieron materiales de esas empresas para transformarlos en dólares, redujeron drásticamente la compra de materias primas e, incluso en algunos casos, distribuyeron las reservas de las empresas entre los accionistas.

Así pues, la política destinada a promover la inversión en la industria privada, política a la que (como veremos) el gobierno allendista se jugó por entero aún a costa de generar gravísimos problemas a la economía general del país, constituyó una de las primeras y más graves grietas en los planes económicos de la Unidad Popular. Al respecto, lo importante es consignar que se trató de un fracaso de origen eminentemente político. Pese a que los mecanismos de estímulo funcionaron desde el punto de vista económico, el Gobierno de Allende no logró conquistar para una política de inversiones y de expansión de sus empresas a los sectores medios de industriales. Esto, no obstante las ventajosas oportunidades de crédito y de ventas que les ofrecía. Por el contrario, los más encarnizados enemigos del gobierno: los sectores monopolistas internos y los consorcios norteamericanos afectados por las reformas, fueron quienes lograron ganar a dichos empresarios medios para una política de oposición cerrada e intransigente contra el gobierno y sus planes. La mayor parte de los comerciantes fueron, también conquistados por la oposición. Es así, como los industriales plegándose a una verdadera "huelga" de inversiones, a menudo sabotearon sus propias industrias e intentaron paralizarlas en conjunto con los transportistas y comerciantes. Este sabotaje a los planes de desarrollo de la economía del gobierno de la UP, por parte de los empresarios de las industrias no estatizadas, fue extremadamente grave, ya que, aún después de efectuadas el total de expropiaciones que logró materializar el gobierno de Allende, ellos continuaron controlando las 3/5 partes del total de la producción industrial manufacturera.

2.- La debilidad genera el aislamiento.

El fracaso en ganarse a las capas medias de empresarios industriales y a los comerciantes, para que complementaran el desarrollo productivo que se pensaba lograr expropiando a los grandes monopolios internos y extranjeros, fue un fracaso de la estrategia misma de conquista del poder a la que los dirigentes del P“C”, arrastraron a la Unidad Popular. Dichos sectores medios de comerciantes e industriales, estuvieron siempre plenamente conscientes que quienes continuaban controlando realmente el poder eran los sectores monopolistas de la industria y del comercio, las grandes empresas norteamericanas que operaban en Chile y la oligarquía terrateniente. Sabían que dichos sectores mantenían una influencia dominante tanto en las instituciones básicas del aparato estatal (incluyendo en él a las Fuerzas Armadas), como desde el punto de vista político, económico y propagandístico. La Unidad Popular, en última instancia, con su triunfo en la elección presidencial, sólo había logrado conquistar una parte del Poder Ejecutivo, de un Poder Ejecutivo por lo demás, maniatado por las otras entidades del poder burgués y plenamente infiltrado en sus instancias burocráticas por fuerzas adversas de la oposición. Lo había logrado, por otra parte, por medio de una precaria mayoría electoral fruto de la división de sus adversarios.

Los golpes económicos que el gobierno allendista propinó a algunos poderosos sectores monopolistas internos y foráneos, así como a los latifundistas a través de sus expropiaciones, no contribuyeron tampoco a generar en los sectores medios una fuerte y convincente imagen de poder del gobierno de Allende. Dichas empresas intervenidas o expropiadas, fueron hasta la caída misma del gobierno, disputadas fieramente a éste por sus antiguos propietarios; y su administración por parte del Estado, fue continuamente interferida por la Contraloría General de la República, por los Tribunales de Justicia y por el Parlamento. Por lo demás, como veremos más adelante, dichas empresas lejos de ser una importante fuente de ingresos y una palanca rectora de la economía en su conjunto, se transformaron en la fuente de un gigantesto déficit y en un pesado lastre para el gobierno. Como una demostración póstuma de que los sectores monopolistas mantuvieron siempre, pese a las expropiaciones e intervenciones, una clara conciencia de su poder dominante y de que no cejaron jamás en su intención de recuperar sus empresas, está el hecho de que la casi totalidad de ellas han retornado a sus manos después del golpe de Estado, demostrando que las expropiaciones no eran irreversibles como pensaban los dirigentes de la Unidad Popular. Más aún, los industriales que aceptaron vender sus empresas al gobierno han sido sometidos a procesos judiciales por parte de la Junta Militar.

La Unidad Popular y el Gobierno de Allende, por consiguiente, no contaron con la influencia real sobre las capas medias, que sólo puede alcanzar un movimiento popular cuando ha logrado movilizar combativamente (y no sólo electoralmente) a las grandes masas, en función de una conquista revolucionaria del poder. Influencia que se redobra una vez que se ha conquistado y se controla efectivamente el poder estatal y se cuenta con la fuerza suficiente y necesaria para defenderlo. Sólo un control de esta especie del poder, como fruto de una auténtica revolución dirigida por el proletariado y capaz de destruir el Estado burgués, permite tanto realizar exigencias a las capas medias como ofrecerles, a costa de los intereses monopolistas e imperialistas expropiados y del control del poder, ciertas garantías y ventajas.

El fracaso en conquistarse a los sectores medios de industriales, así como a los comerciantes, profesionales, pequeña burguesía artesanal y de servicios y aún a numerosos sectores de empleados y obreros, que debido a la crisis y a la evidente debilidad del gobierno se plegaron a la oposición, no fue exclusiva o simplemente el resultado de errores tácticos cometidos en el trato con dichos sectores. Esta tesis que pretende explicar la pérdida de los sectores medios por parte del gobierno de Allende, atribuyéndola a “errores tácticos” cometidos en el trato con ellos, es sostenida aún hoy por aquellos dirigentes de la Unidad Popular que se niegan a sacar lecciones correctas de lo ocurrido en Chile e insisten en defender la falsa estrategia del “camino pacífico” al poder. Se trata en esencia de oportunistas recalcitantes, que no quieren reconocer el fracaso al que arrastraron a vastos sectores populares aplicando la línea de Jruschov y sus sucesores a Chile y pretenden endosar la responsabilidad de su fracaso a pretendidas tendencias “izquierdistas” infiltradas en la

Unidad Popular o marginales a ella. La verdad es que, su desplazamiento hacia una oposición intransigente comandada por las fuerzas más reaccionarias, se derivó, básicamente, de un problema concerniente al poder alcanzado por la Unidad Popular y su Gobierno o, para ser más precisos, concerniente al muy débil control de poder con el que la Unidad Popular pretendió imponer sus reformas. Debilidad de poder político, derivada de la falsa estrategia para conquistarlo impulsada por los dirigentes del P“C” y aceptada en lo fundamental por la dirigencia de la Unidad Popular. Ni la mejor de las tácticas con los sectores medios podía compensar la convicción de dichos sectores respecto a la muy débil base de sustentación en la que se apoyaba la Unidad Popular y su Gobierno, en sus pretensiones de aniquilar a las fuerzas económicas y políticas más poderosas del país. Ningún malabarismo táctico podía hacerlas olvidar el poderío decisivo que conservaban esas fuerzas dominantes en el aparato estatal, poderío que, por lo demás, se fue dejando sentir en forma implacable y creciente durante todo el gobierno allendista, comenzando desde antes que Allende asumiera el mando. Al fin y al cabo, pese a las contradicciones que tienen los sectores medios tanto con la burguesía monopolista y financiera, como con la oligarquía terrateniente y con el imperialismo norteamericano, es con esas fuerzas con las que poseían (y poseen aún) los más fuertes vínculos y ataduras económicas. Por lo mismo, para las vacilantes capas medias, resultaba como dar un salto en el vacío el volverse contra los sectores dominantes, para apoyar tan sólo en aras de beneficios inmediatos, a un gobierno empeñado en destruirlos con muy pocas probabilidades de éxito.

Por otra parte, los sectores medios, no sólo no confiaban en las posibilidades de éxito del gobierno de la Unidad Popular, sino que, al mismo tiempo, tenían por sus intereses si es que los planes de estatización seguían aplicándose. Este temor de la pequeña burguesía y burguesía media fue también hábilmente estimulado por la muy eficaz propaganda de la oposición derechista. La oposición reaccionaria desplegó al respecto campañas tan audaces como arteras, llegando, incluso, a emplear falsos encuestadores que visitaron numerosas casas para indagar, “a nombre del gobierno”, las habitaciones que había disponibles en ellas para “instalar allí en el futuro a indigentes que carecían de viviendas”. No obstante, insistimos, más que el temor al gobierno, influyó en los sectores medios el poderío ostensible del sector reaccionario y el temor de lo que les ocurriría en el futuro, cuando la Unidad Popular fuera desplazada, si es que tenían una posición de colaboración con su gobierno. Frente a las amenazas (reales o ficticias) contra la propiedad privada que los hacía temer por sus intereses, los sectores medios, no tenían más que dos alternativas: o intentaban preservar sus intereses y aún obtener mayores franquicias, apoyando la política del gobierno de Allende destinada a liquidar a los grandes monopolios; o bien, se unían en defensa de sus intereses a esos monopolios amenazados, haciendo causa común con ellos contra el gobierno. No cabe duda que fue este último camino el que prefirieron la mayor parte de los industriales y comerciantes medios y aún pequeños, pese a las franquicias que tuvieron para expandirse. Lo ocurrido demuestra, una vez más, cómo el temor y las vacilaciones de los sectores medios, pueden jugar en un doble sentido contradictorio: o bien a favor o bien en contra de los cambios sociales anti-imperialistas y anti-monopolistas. Si los cambios son impulsados por un movimiento revolucionario realmente fuerte y poderoso, capaz realmente de conquistar el poder, el temor que sienten por el avance proletario los sectores medios (unido a las concesiones que les ofrece el movimiento revolucionario), los impulsa a ceder, a amoldarse a los cambios para sobrevivir y hasta a oponerse al gran capital. Por el contrario, si son los sectores más reaccionarios quienes demuestran ser más fuertes, quienes controlan sólidamente el poder, las capas medias se pliegan a ellos y su temor a los cambios, los lleva a servir de base social a las tendencias fascistas del gran capital. En esencia, se trata de si el Frente Único lo dirige el proletariado, con una línea marxista-leninista acorde a sus intereses; o si lo dirigen sectores oportunistas, reformistas y revisionistas del marxismo, como ocurrió en Chile.

3.- Desequilibrio entre la oferta y la demanda y crisis de la Balanza de Pagos.

El fracaso político de las medidas económicas tendentes a lograr una expansión de la industria privada, fue uno de los principales factores desencadenantes del desabasteci-

miento, estimulado para preparar la caída del gobierno de Allende. Ese desabastecimiento, unido a la desenfrenada especulación que lo acompañó, fue uno de los factores fundamentales utilizados por la extrema derecha para desarrollar la base social necesaria para el golpe de Estado y la implantación del fascismo. Dada la negativa absoluta de los industriales privados a invertir en sus empresas y, por el contrario, su creciente compromiso con campañas de sabotaje a la producción y a la distribución, la política destinada a incrementar fuertemente la demanda, no podía menos que traducirse en una aguda escasez de productos en el mercado. Esta aguda escasez comenzó a hacerse sentir, no bien los industriales terminaron de llenar sus bolsillos poniendo en movimiento la capacidad ociosa de sus industrias y agotando sus stocks de productos acumulados en bodega en 1970, y se agravó cuando se produjo el colapso en el presupuesto de divisas de fines de 1971.

Hay que considerar que la expansión de la demanda, no sólo se debió a la disminución drástica del desempleo, al aumento significativo del poder de compra de los trabajadores materializado el 71 o a la congelación de los precios. Hubo también un fuerte incremento de la demanda de productos por parte de los sectores empresariales, precisamente porque estaban decididos a restar sus utilidades de la inversión productiva y a emplearlos como capital especulativo, comprando para revender en "mercado negro". Estas utilidades disponibles de los industriales se multiplicaron, además, ya que el gobierno mantuvo a precios artificialmente bajos (en la ingenua esperanza de estimular así el desarrollo de las empresas privadas), las materias primas y energía generadas en las empresas controladas por el Estado. Esas ganancias fueron a parar también al bolsillo de los especuladores, cuando no a cuentas de dólares en bancos extranjeros.

En este poderoso incremento de la demanda es preciso incluir también los gastos del ávido sector de la burguesía burocrática, que se desarrolló a partir de las capas dirigentes y cuadros medios de la Unidad Popular. Esta nueva burguesía burocrática se fue implantando, básicamente, al mando de las empresas que pasaban, de una u otra manera, a control del Estado: bancos, grandes industrias, minas, servicios de utilidad pública, empresas de distribución mayorista, etc. Si bien es cierto, que a esos administradores de un capitalismo de Estado en pleno desarrollo, se les fijó una remuneración "tope" equivalente a 20 sueldos vitales de un empleado (un vital se consideraba como base para la subsistencia); no es menos cierto, que dicho "tope" correspondía a casi 30 veces el salario mínimo de un obrero. Por otra parte, ese "tope" de 20 vitales fue aumentando considerablemente al dictaminarse, en enero de 1971, que se trataba de 20 sueldos vitales "liquidos", es decir, una vez deducidos de ellos todos los impuestos a pagar. Ya a mediados de 1971, una remuneración "liquida" de este monto, equivalía a una suma superior a la renta mensual de que podía disponer un empresario cuyo capital ascendiera a alrededor de un millón de escudos, es decir, un capitalista mediano bastante poderoso en el contexto chileno. Pero, el sueldo "tope" no era todo. Entre las remuneraciones legales de estos funcionarios estatales, existía la posibilidad de lograr entradas no afectas al "tope" de los 20 vitales, por concepto de viáticos y otras regalías en dinero o en usufructo de determinados bienes como: derecho a casa, a alimentación, a auto y bencina, a combustibles, etc. que los habían a menudo superado con creces y hasta doblar los 20 vitales "tope". El "tope" era un poco como el "techo" de los aviones, dependiente de la pujanza y de los "motores" de quien debía enfrentarlo. Por otra parte, la remuneración "tope" se refería sólo a la remuneración en tanto funcionario, pudiendo estos mantener importantes ingresos derivados de otras empresas o funciones privadas.

Lo anterior, como hemos señalado, se refiere sólo a las remuneraciones legales, "legítimas" obtenidas por la burocracia estatal que operó durante el gobierno de Allende. No obstante, y es preciso decirlo, muchos de esos funcionarios o administradores de empresas o reparticiones fiscales, a diversos niveles, se enriquecieron también con ganancias extra-legales. Exigiendo "coimas" por determinados servicios; cobrando comisiones, a menudo en dólares, para autorizar importaciones o exportaciones, practicando el "mercado negro" o el trueque con otras empresas, de artículos que podían obtener a precios oficiales artificialmente bajos; exigiendo un pago extra a comerciantes para otorgarles una cuota de productos a precios oficiales, etc. El propio Ministro de Economía, Orlando Millas, alto dirigente del P" C", se ve obligado a reconocer en un pleno del CC de su partido, la existencia de "quienes se arreglan los bigotes (se enriquecen a la mala) saltando 15 grados de

un viaje en los escalafones, continúan gozando de sueldos fabulosos en determinadas empresas, se trasladan a vivir en las casas de los antiguos gerentes y emplean los vehículos del Estado para sus fines particulares". Por su parte, Orlando Muñoz, gerente de ventas de la Distribuidora Nacional (DINAC), organismo central de comercio mayorista, expresó en una circular dirigida al personal de dicho organismo: "Ultimamente se han debido tomar medidas disciplinarias serias en contra de varios compañeros por: malos manejos de fondos, realizar comercios por cuenta propia y mal encaminados, adulterar documentos tomando el nombre de clientes, hacer ventas preferenciales, comprar y revender a mayores precios, adulterar boletas, comprobantes, entregar llaves de las bodegas a personas no responsables o que no corresponden, hacer ventas a particulares cuando está terminantemente prohibido hacerlo".

La formación de una burguesía burocrática relativamente numerosa en comparación con los capitalistas desplazados por las estatizaciones, multiplicó considerablemente la demanda de productos y el desabastecimiento que ello generó al operar sobre una industria que no se expandía y sobre una capacidad de importación fuertemente restringida debido a muchos factores. La nueva burguesía burocrática emergió con poderosos apetitos de consumo, de bienestar y aún de lujo. A quienes no poseían automóvil, casa propia, frigidaire, televisor, ropa o alimentos en abundancia, se les abrió súbitamente la posibilidad de adquirirlos. Muchos de ellos, incluso abandonaron las casas que arrendaban en barrios proletarios o de clase media, para adquirir casa en los barrios de clase alta. Esta tendencia arri vista a mejorar aceleradamente el nivel de vida se intensificó al extemo a raíz de las ofensivas de la oposición reaccionaria destinadas a derribar al gobierno y cuando cundió la incertidumbre y la desmoralización acerca de su futuro. En esas circunstancias, numerosos funcionarios estatales, desesperanzados ya de encontrar una salida a los problemas del país, se desplegaron a la psicología de: "después de mí el diluvio" y se propusieron enriquecerse antes de que fuera demasiado tarde. En esos momentos, pese a los llamados del presidente Allende a la honestidad se multiplicaron los casos de corrupción y de obtención de ganancias por medios extra-legales. Todo ello repercutió en el consumo, generando fuertes presiones sobre un mercado muy restringido. La capacidad de consumo de 10 o más funcionarios con sus respectivas familias es, sin duda, mayor que la capacidad de un capitalista, que ya posee lo esencial en bienes durables y cuya posibilidad de consumo de bienes perecederos está limitada por el número de sus familiares. Esto, aún cuando dichos funcionarios en conjunto dispusieran de las mismas entradas que el capitalista.

El fuerte incremento de la demanda, no sólo chocó con un desarrollo industrial deliberadamente "congelado" por parte de los industriales, sino, también, con una agricultura estancada desde mediados de siglo y en retroceso respecto al crecimiento vegetativo de la población. En efecto, el aporte de la agricultura al Producto Geográfico Bruto, que era de un 17 por ciento en 1940, había descendido ya a poco más del 7 por ciento en 1969. Esto, no obstante que en el quinquenio 1965-70, a raíz de la iniciación de la reforma agraria por parte de la Democracia Cristiana, había subido el crecimiento promedio anual a cerca de un 3 por ciento, mientras en los últimos 30 años sólo alcanzaba un promedio anual de un 1,8 por ciento. Sin embargo, el crecimiento del último decenio, cuando Allende asumió la Presidencia, era aún inferior al crecimiento vegetativo de la población.

A ese retraso de la producción agro-pecuaria, heredado de regímenes anteriores, se sumó la negativa de parte de numerosos agricultores medios a sembrar e invertir en sus fundos y un abierto sabotaje por lo que toca a los latifundistas. Estos últimos, quemaron cosechas; mataron (tan solo en la región de Magallanes) alrededor de 120 mil ovejas hembras; sacaron, para vender en el extranjero a comienzos del gobierno de Allende, unas 200 mil cabezas de ganado; crearon en las zonas rurales un fuerte poder de compra privado, para sabotear la entrega de productos de los fundos expropiados al gobierno y estimular así el "mercado negro", etc. etc.

Por otra parte, en la mayoría de los casos, los campesinos que permanecieron trabajando en las tierras de los latifuncios expropiados, sólo recibieron una satisfacción moral al verse liberados de la arbitrariedad despótica prepotente de los latifundistas. Cayeron, en cambio, en manos de una burocracia estatal más demagógica y más difícil de combatir, pues era secundada desde el interior mismo de las filas de los trabajadores por los activistas políticos. La verdad es que en los fundos reformados se trabajaba mucho más intensa-

mente que antes, tras una hipotética utilidad que permitiría mejorar las remuneraciones, correspondientes al salario mínimo campesino. Esta presunta utilidad sólo podía obtenerse después de pagar al Banco del Estado el dinero anticipado para financiar la producción del año, más un 12 por ciento de interés anual. No obstante, de obtenerse dicha utilidad, un cincuenta por ciento de ella estaba destinado en los Centros de Reforma Agraria, a incrementar un fondo comunal que se empleaba para amortizar la deuda de aquellos fondos expropiados que no alcanzaban a cubrir el monto de lo prestado por el Banco de Estado para la producción; un 25 por ciento de lo que restaba era empleado como fondo de capitalización; y, sólo un 25 por ciento de la utilidad podía ser distribuida entre los campesinos. Un estudio efectuado en enero de 1972 en la provincia de Talca, por estudiantes de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile, que efectuaron allí su práctica en Asentamientos de la región, demuestra que todos los Centros de Reforma Agraria de esa provincia, lejos de obtener utilidades, terminaron el año agrícola con deudas con el Banco del Estado. En vastos sectores de trabajadores agrícolas pertenecientes a los fundos expropiados, que pese a trabajar más intensamente sólo lograban percibir el exiguo salario mínimo campesino, existía consenso de que al antiguo patrón podrían haberle arrancado a través de la lucha una remuneración mucho mayor. No es de extrañarse pues, que pasada la mística inicial, se comenzara a practicar en los fundos reformados en gran escala el "mercado negro" falseándose las cifras de producción y negándose a entregar los productos a los organismos estatales. Incluso el Presidente Allende, debió denunciar la venta en "mercado negro" por parte de ciertos Asentamientos, de papas seleccionadas que le fueron entregadas como semilla para la siembra. De este modo los campesinos defendían su nivel de vida en la medida en que se daban cuenta que sólo habían cambiado de patrón. Muchos campesinos, conociendo lo que ocurría en los fundos reformados por el gobierno, prefirieron conquistar la tierra a través de una lucha directa contra el terrateniente y cultivarla al margen del control de la Corporación de Reforma Agraria.

Una de las consecuencias de la no inversión en la industria privada y de los problemas que hemos descrito sumariamente, que afectaron la producción agropecuaria ya en crisis cuando asumiera Allende, fue la precipitación a fines de 1971 de una grave crisis de la Balanza de Pagos. Ante las insuficiencias de la agricultura y de la producción industrial y para enfrentar la demanda hipertrofiada que había desencadenado, el gobierno, se vio obligado a incrementar las importaciones. Esto debió hacerlo en condiciones extremadamente desfavorables, debido a la intensa baja del precio del cobre en el mercado internacional (de cuya venta dependen las 3/4 partes de los ingresos de divisas de Chile); el alza espectacular de los precios de los alimentos en el mercado mundial; y, al bloqueo de créditos y trabas a la renegociación de empresas norteamericanas. En 1971, tan sólo los gastos para importar alimentos habían aumentado en un 60 por ciento respecto al año anterior. Si se da crédito a datos de un estudio publicado en abril de 1972 por la Sociedad de Fomento Fabril, que no fueron desmentidos en su oportunidad: "La Balanza de Pagos de Chile fue deficitaria en 1971 en 225 millones de dólares, cifra que se eleva hasta 385 millones si se consideran postergaciones, deudas vencidas y créditos especiales otorgados por el Fondo Monetario Internacional. Las reservas internacionales netas, agrega el estudio, descendieron de 377,6 millones de dólares en septiembre de 1970, a 57,6 millones de dólares en diciembre de 1971". De este modo, los esfuerzos por evitar el desabastecimiento sobre la base de la importación de productos, al generar una grave crisis en la disponibilidad de divisas, habrían de transformarse en un nuevo y más grave factor de desabastecimiento, esta vez, de elementos aún más esenciales. En noviembre de 1971, el Banco Central, se vio obligado a prohibir la importación de alrededor de 400 artículos cuya internación al país estaba anteriormente autorizada.

El profundo desequilibrio entre la oferta y la demanda, con su secuela de escasez de productos en los mercados habituales, se transformó muy pronto en una de las contradicciones principales del gobierno allendista. Dicha contradicción, fue utilizada y promovida hábilmente por la oposición, asesorada por la CIA yanqui como se ha demostrado, para lo que ésta última llamó eufemísticamente "desestabilizar" al gobierno de Allende, es decir, para agudizar la crisis, expandir el descontento y preparar las condiciones para el golpe de Estado militar. Es así, como la escasez creciente de productos fue explotada hábilmente

por los medios publicitarios de la oposición, logrando generar en la población una verdadera "psicosis" colectiva de desabastecimiento. De esta manera lograron que todos aquellos que disponían de algún recurso para hacerlo y de ciertas instalaciones caseras como para almacenar productos, se empeñaran en acapararlos tan sólo por el temor de quedar más adelante sin ellos. Luego, la oposición, utilizando aquellas empresas de distribución mayoristas que mantuvo bajo su control, así como conquistando para ello a importantes sectores de comerciantes, comenzó a fomentar planificadamente el ocultamiento de mercancías y su reventa a elevadísimos precios en "mercado negro". Incluso numerosos particulares, que jamás habían ejercido como comerciantes (aún en círculos afectos al gobierno), se plegaron a esta lucrativa actividad especulativa. Por otra parte, aprovechando la gran diferencia entre el precio oficial artificialmente bajo del dólar y su precio en "mercado negro", tanto chilenos como extranjeros, se llevaron grandes cantidades de productos fuera del país, ya sea para negocio o para uso personal. Baste decir, que en determinados períodos era posible adquirir en Chile un par de zapatos en menos de un dólar vendido en "mercado negro", dólar que por su parte había sido comprado a precio oficial exiguo. En noviembre de 1971, había más de 500 toneladas de mercancías en tramitación para ser exportadas tan sólo a Argentina.

Los propios precios oficiales de los productos de consumo esencial, fijados por el Gobierno (para frenar la inflación y expandir la demanda) muy por debajo de las expectativas de venta que ofrecía una demanda insatisfecha, contribuyeron a estimular fuertemente el acaparamiento y la reventa especulativa. Con sólo adquirir a precio oficial un producto, ya sea en una industria o en una distribuidora mayorista, era posible venderlo en "mercado negro" a 10 y más veces su precio oficial. De este modo resultó que plegarse a los planes de la oposición destinados a sabotear la economía a través de la especulación, se transformó en un negocio infinitamente más lucrativo que ejercer una actividad productiva o comercial normales. Por lo demás, gracias a las "mágicas" virtudes de la propaganda reaccionaria, esta forma de robo, la especulación más desenfrenada, el ocultamiento de mercancías y, en general, todo lo que contribuyera a hacer insoportables las condiciones de vida del pueblo y a intensificar el descontento, repletando al mismo tiempo, los bolsillos de los especuladores, se transformó en un "meritorio" sistema de oposición a la implantación del "comunismo" en Chile; en una actividad "patriótica", "noble" y "democrática". Las mismas damas aristocráticas, que tenían las bodegas de sus casas repletas de mercancías escondidas y que habilitaron camionetas y hasta camiones como almacenes improvisados para oficiar como especuladoras, salían a desfilar con todo cinismo golpeando ollas vacías. De este modo, influían sobre vastos sectores medios y aún de trabajadores, reales víctimas de la escasez y de la especulación, fomentando el descontento y preparando las condiciones y la opinión pública para el golpe de Estado. Tan sólo desde el 5 de enero de 1973 al 25 de ese mismo mes, la prensa de gobierno denunció por parte de comerciantes y particulares (con fotos de los lugares, nombres de los responsables y direcciones) acaparamientos de: 650 mil litros de vino; 133 mil kilos de carne; más de tres millones de kilos de arroz; 9.350 litros de aceite; 20.500 kilos de harina; 3.400 sacos de cemento; 57.600 latas de conserva; 83 mil kilos de azúcar y otros numerosos productos que eran negados al público como "inexistentes" en el comercio y que sólo se podían adquirir a precios oficiales, a veces y en pequeña cantidad, después de horas y horas de insoportables "colas". Una prueba suplementaria de la complicidad de la mayor parte de los comerciantes en el acaparamiento y "mercado negro" es que, al día siguiente del golpe de Estado como por "arte de magia", aparecieron a la venta en los almacenes todos los productos que antes eran negados al público como "inexistentes".

Las medidas que intentó tomar el gobierno contra el acaparamiento y la especulación debieron materializarse sin ningún respaldo legal, pues la oposición, pese a sus hipócritas protestas contra la especulación y la escasez, se negó siempre a aprobar en el Parlamento una Ley contra el delito económico, propuesta por el gobierno. Dichas medidas de control del gobierno, por lo demás, debido a la debilidad con que fueron aplicadas, no sirvieron para detener la especulación. Sirvieron, en cambio, para que la oposición las utilizara para antagonizar aún más a los comerciantes con el gobierno.

4.- Un intento frustrado de control de la distribución.

A mediados de 1971, el gobierno inicia la organización de las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), organismos de base supuestamente destinados a combatir la especulación, el acaparamiento de productos y a asegurar su distribución a precios oficiales. *Nacieron, sin embargo, viciados por la típica ambigüedad de la línea reformista dominante en la Unidad Popular. No llegaron a ser ni organismos de "poder popular", como los definiera el Ministro de Economía Pedro Vuskovic en la Primera Asamblea Provincial de las JAP de Santiago, celebrada en junio de 1972; ni tampoco organismos reconocidos por la Ley y con atribuciones legales. Su único vínculo con algún organismo dotado de atribuciones legales, es la posibilidad de cada JAP de designar dos inspectores de precios ad-honorem, que eran reconocidos por el Ministerio de Economía. No bien son organizadas las JAP, los partidos de oposición comienzan la guerra contra ellas. Toman la resolución de no integrarse a tales organismos "ilegales" y revitalizan en oposición a ellas, las Juntas de Vecinos, que sí son organismos reconocidos por la ley. Se genera de este modo una aguda pugna sectaria entre las Juntas de Vecinos, instrumentadas por la oposición, y las JAP controladas por los partidos de gobierno, en relación con la distribución de productos a la población. Los partidos de gobierno, que controlan a través de la Central Estatal la distribución mayorista alrededor del 33 por ciento del comercio al por mayor, se esfuerzan con el concurso de las JAP, en favorecer a los comerciantes y a aquellos sectores de la población que les son afectos. Los partidos de oposición hacen otro tanto a través de su control de los dos tercios del comercio mayorista, con el concurso de las Juntas de Vecinos. Es así, como en la medida en que se agudiza la especulación y la escasez, cada vez más vastos sectores son obligados a polarizarse en forma forzada en torno a los dos bloques en lucha, en función de la necesidad de obtener lo más indispensable para alimentarse y subsistir.*

En octubre de 1972, se desencadena uno de los golpes más contundentes dados por la oposición a la economía en general y, en particular, el ya grave problema de desabastecimiento y especulación: el paro patronal. Dicho paro duró desde comienzos de octubre de ese año hasta comienzos de noviembre y se plegaron a él: los comerciantes (sólo un 35 por ciento de ellos no acató la orden de paro); los propietarios de camiones destinados al transporte de productos (unos 12 mil); la movilización colectiva de pasajeros y numerosos gremios profesionales (bancarios, etc). Se intentó, así mismo, a través de presiones patronales un lock-out de la industria. En este paro, tanto en su dirección estratégica como en su financiamiento, tuvo una activa participación (reconocida públicamente por ese mismo organismo a raíz de las encuestas hechas por el Congreso de EE.UU.) la CIA norteamericana. El paro no sólo agravó hasta extremos insostenibles para la población el desabastecimiento y la especulación, sino que, significó un duro golpe a la producción agrícola. Hubo cuantiosas pérdidas de leche, hortalizas y frutas, es decir, precisamente los alimentos que no podían ser escondidos por los acaparadores y se impidió el transporte de semillas, combustibles y fertilizantes para las siembras de primavera recién iniciadas en esa época. A raíz de ello, las cosechas de arroz, trigo, oleaginosas, remolacha azucarera, etc. resultaron seriamente dañadas. Según expresara el propio Presidente Allende, se perdieron alrededor de 132 millones de escudos por conceptos de fletes, pasajes y peajes; 3 mil millones de escudos en productos no comestibles, debido al cierre del comercio; 364 millones perdidos por conceptos de recaudación de impuestos. Todo esto sólo en contribuciones que se dejaron de percibir. El Presidente concluye evaluando los daños causados por el paro, unas dos semanas antes que este terminara, en unos 100 millones de dólares. El segundo paro organizado por la oposición, en vísperas ya del golpe de Estado (agosto de 1973), significaría ya una pérdida de más de 200 millones de escudos diarios, arruinándose, además, el 50 por ciento de la cosecha de hortalizas, por falta de transporte a los centros de consumo. Estos paros, unidos al sabotaje abierto que los acompañó, fueron una verdadera carga de dinamita colocada por la oposición en la importante grieta existente en la economía que significaba el desabastecimiento, generado por el bloqueo y las dificultades para importar, por los sabotajes y el acaparamiento, por la "huelga" de inversiones privadas en la industria, así como por el fracaso en el manejo de las empresas estatales.

El gobierno, en lugar de impulsar la importante contra-ofensiva que protagonizó el

pueblo y, particularmente, la clase obrera, para derrotar el primer paro de la oposición, detuvo (como veremos más adelante) dicha contra-ofensiva popular e intentó resolver los problemas surgidos a través de tibias medidas administrativas y legales. En enero de 1973, envía al Parlamento una Ley contra el delito económico y hace un intento, a través del Ministerio de Hacienda, por tomar el control de la distribución de productos.

La Ley de delito económico fue discutida en el Parlamento a comienzos de 1973. El Partido Nacional (de extrema derecha), votó, simplemente, contra la idea de legislar. La Democracia Cristiana y el Partido de la Izquierda Radical (PIR), hicieron algo aún peor: votaron a favor de la idea de legislar, pero con el propósito, según lo expresara el Senador Carmona de la DC, de transformar el proyecto "en uno diametralmente opuesto", como efectivamente lo hicieron. El proyecto del Ejecutivo proponía sanciones de cárcel "a quienes hagan declaraciones falsas o entreguen falsos antecedentes sobre sus actividades económicas; a quienes destruyan o eliminen del mercado artículos de uso o consumo habitual, con el propósito de producir desabastecimiento, alterar el orden público, causar daño a la seguridad, la administración, la salud o la economía pública". Son penados, así mismo, "los que destruyeren o inutilizaren maquinarias, instalaciones, plantíos u otros medios de producción industrial, minera, agrícola o comercial; a los que atesoren materias primas o productos en un volumen mayor a sus necesidades personales o empresariales", etc. etc. Una vez aprobada la idea de legislar, fue el Partido Nacional el encargado de presentar un contra-proyecto, opuesto al del gobierno. En dicho proyecto, por cierto, no se menciona siquiera a quienes practican el acaparamiento, el "mercado negro", el sabotaje y otros delitos de este tipo. Se establecen, en cambio, penas contra los funcionarios públicos que se excedan en sus funciones; se pena la intervención del Estado sobre una empresa por más de 30 días; se condiciona la emisión de moneda (que es en Chile atribución del Ejecutivo) a una autorización previa del Senado; se establece que los industriales expropiados podrán apelar a la Corte Suprema de Apelaciones, la que podrá invalidar las resoluciones del gobierno, etc. etc. En suma, la mayoría parlamentaria de oposición hace mofa sangrienta del proyecto de delito económico del gobierno y levanta otro destinado exclusivamente a impedirle la aplicación de su programa.

Las medidas administrativas, paralelas al proyecto de delito económico, servirán también para mostrar la extrema impotencia del gobierno de la Unidad Popular, sin un control efectivo del poder y sin atribuciones legales efectivas en los marcos de la sociedad burguesa, que anhela transformar en un capitalismo de Estado. El 11 de enero de 1973, el Ministro de Hacienda Fernando Flores, perteneciente al Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), plantea la creación de una Secretaría Nacional de Distribución, que celebrará contratos de exclusividad con las empresas industriales privadas que producen bienes de consumo esencial, tomando en sus manos la comercialización de dichos productos. No obstante, esos contratos no son planteados como obligatorios y para hacerlos efectivos sólo se establece que el gobierno "tomará en cuenta en que medida las empresas se han acogido y han cumplido los contratos de comercialización". Medida absolutamente irrisoria dado el carácter abiertamente sedicioso y resuelto que ya ha adoptado la ofensiva de la oposición con el propósito de derribar al gobierno. En las empresas del Area Social, en cambio, se establece como obligatorio entregar la producción a las distribuidoras estatales. El punto que se refiere a las empresas estatales, dicho sea de paso, contiene disposiciones que muestran hasta qué punto los privilegios sectarios y el "mercado negro", eran también practicados en gran escala en esas empresas, pues se establece que en ellas debe terminar: "el trueque y la venta directa al público". Se señala, así mismo, que no se permitirán "las remuneraciones en productos".... y "las preferencias para su adquisición en la empresa". Por lo que toca al campo se plantea en el documento del Ministerio de Hacienda, el simple propósito de "canalizar lo sustancial de la producción agropecuaria a través de los mecanismos de comercialización estatal". Se hace, al mismo tiempo, un llamado a los "trabajadores del campo a evitar que los productos agrícolas ingresen al mercado negro". En lo que respecta a la distribución mayorista, se establece que la "Secretaría Nacional de Distribución ejercerá su autoridad sobre las empresas distribuidoras de abarrotes y alimentos".... "Además, regulará e integrará al sistema programado a las empresas mayoristas privadas, las que justificarán siempre la procedencia de sus productos esenciales". Se señala, además, que el gobierno: "no aceptará la persistencia de monopo-

lios privados sobre la distribución de ningún producto". Finalmente, en lo que respecta al comercio minorista, junto con reiterar el documento las funciones de las JAP en las denuncias y en la "acción directa" para impedir el acaparamiento y la especulación, se plantea el establecimiento de 30 productos básicos destinados a ser entregados a cada familia, a través de un acuerdo entre las JAP y los comerciantes de cada sector.

En verdad, como se verá al poco tiempo de ser dado a la publicidad, el documento del Ministro Flores, no correspondía ni a una decisión a ser aplicada a través de una movilización popular, es decir, de hecho; ni a una formulación que tuviera fuerza legal para ser aplicada e, incluso, a juzgar por todo lo que ocurrió con las medidas en él propuestas, ni siquiera a una política compartida por todos los sectores de la Unidad Popular. Al parecer, sólo fue un intento de su partido, para colocar al gobierno en una situación de hecho, que lo movilizara a controlar la distribución y a dar un primer paso hacia un racionamiento de productos básicos. No obstante, como emanaba de un gobierno que no controlaba en absoluto el poder y que por la naturaleza oportunista de las fuerzas hegemónicas de la Unidad Popular, no estaba dispuesta a movilizar a las masas para imponer sus decisiones, sólo terminó siendo un manifiesto de intenciones, destinado a enardecer aún más a la oposición y a exhibir aún más la debilidad del gobierno. La indignada respuesta de la oposición no se hizo esperar. "Esta es una acción clara y definitiva para el control totalitario del país... El pueblo de Chile no puede tolerar que se le someta a esta dictadura sin regreso", opinó el líder demócrata-cristiano Eduardo Frei. "Los chilenos tienen la obligación y el deber de resistir las medidas dictatoriales que el gobierno marxista de la Unidad Popular ha decidido implantar en nuestra patria... No vamos a tolerar que se nos instalen las 'checas' cuadra por cuadra, ni que se nos vaya a encuestar familia por familia, para entregarnos un pedazo de pescado, un poco de sal o un poco de aceite... Aquí la gente tiene que repudiar, negarse a entregar la información, organizar los comités de defensa cuadra por cuadra", expresó el Senador demócrata-cristiano Rafael Moreno. "En Chile -señaló el Senador del Partido Nacional Francisco Bulnes- se está cumpliendo la implantación de un régimen similar al de Cuba... El Castrismo se aprovechó del hambre del pueblo cubano para establecer la tarjeta de racionamiento, y, desde ahí, siguen controlando la voluntad y la reacción de todos los cubanos". Juan Hamilton, por su parte, Senador demócrata-cristiano, opinó: "Es un discurso descarado y siniestro (el del Ministro Flores). Los que han hundido al país en el hambre, quieren imponer la dictadura por el estómago. El que no se someta a las JAP y a la UP, no comerá". Por su lado, el Comando de Acción Gremial, que dirigiera el paro de octubre del 72, dice: "Conscientes de su deber de encabezar la lucha por su libertad, los gremios de Chile notifican al gobierno que no aceptarán la instauración del racionamiento". La Confederación de la Democracia (CODE), que agrupa a los partidos de oposición, señala a su vez: "Ante las arbitrariedades y amenazas anunciadas por el Ministro de Hacienda y el carácter inconstitucional de esas medidas llamamos al pueblo a resistir enérgica, pero serenamente, todas las presiones, a oponerse a cualquier empadronamiento en sus casas o en sus barrios".

Los anuncios del Ministro Flores son rechazados también con vehemencia por los organismos dirigentes de los comerciantes. La mayor parte de dichos dirigentes, comprometidos con la oposición, participan en la "patriótica" actividad de acaparamiento de productos y en su reventa en "mercado negro" y la estimulan y, por lo mismo, no quieren ni oír hablar de control de la distribución ni menos de racionamiento. El día 12 de enero elaboran un documento conjunto la Confederación del Comercio Establecido, la Cámara Central de Comercio de Chile y la Confederación Nacional Unica de la Pequeña Industria y Artesanado. En dicho documento señalan que: "La fijación de una cuota de productos necesarios por familia, como anunció el Ministro Flores es, lisa y llanamente, racionamiento". El documento analiza también las supuestas violaciones contra las Garantías Constitucionales (compromiso firmado por Salvador Allende con la DC, como condición impuesta por ésta para votar favorablemente en el Parlamento su designación como Presidente de la República), que contenía el documento publicitado por el Ministro Flores. Por último, estas directivas gremiales, "ante la gravedad que reviste la situación", ordenan a sus bases, entre otras cosas: "No integrarse o, en su caso, retirarse de la JAP, por cuanto estos organismos se han transformado en verdaderas 'tropas de asalto', que están persiguiendo e incitando a la destrucción del comercio, sin aportar solución alguna a los problemas de

abastecimiento que vive el país. No aceptar ningún procedimiento que implique la puesta en marcha, de hecho, del sistema de racionamiento que pretende implantar el gobierno". (86)

Ante esta contra-ofensiva de la oposición, el gobierno, dada su precaria base de poder y renuencia a movilizar a las masas para resolver los problemas fundamentales, como es usual, se coloca a la defensiva. El Presidente Allende envía una carta al diario "El Mercurio", desmintiendo las afirmaciones de este periódico de que habrá racionamiento, en la que señala: "No habrá racionamiento alimenticio, sino una distribución verdaderamente equitativa y humana de los artículos esenciales para el mantenimiento del grupo familiar". El Director de "El Mercurio", por su parte, le responde afirmando que: "La frase que citamos tomada del discurso del señor Allende en la concentración de Mayo de 1971 -'Chile no está acostumbrado al racionamiento y no lo queremos'- no es una mentira y fue interpretada como manifestación de fé del Presidente en la democracia. La enorme mentira, que el país no acepta, agrega "El Mercurio", es que, andando el tiempo, el marxismo fue privando de fuerza esa declaración y avanzó velozmente, al margen de la ley, para organizar el dictatorial sistema de las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), al que ahora se agrega el racionamiento de facto, disponiendo lo que cada persona pueda consumir y los requisitos para conseguirlo.... Hay que atenerse, concluye, a las expresiones auténticas del Ministro de Hacienda aparecidas en la revista 'Chile Hoy'.... El autor de esas declaraciones, señor Fernando Flores, ha dicho: 'El problema del racionamiento, de encargar la necesidad de producir las cuotas de consumo y no dejar actuar al mercado libremente, era una necesidad que hace tres o cuatro meses podría desentonar políticamente: parecía una política ultra. Hoy día no' ". (87)

El 22 de enero de 1973, por medio de un decreto, en un vano esfuerzo por atenuar los ataques de la oposición, el Presidente Allende, crea la Secretaría Nacional de Comercialización y Distribución y su Consejo Nacional, nombrando a su cabeza a un general en servicio activo, el general Alberto Bachelet, a quien habría de costarle este nombramiento más adelante, después del golpe de Estado, su muerte en prisión.

Entretanto, el gerente de la distribuidora mayorista estatizada "Agencias Graham", Luis Inostroza, que al parecer había tomado en serio las afirmaciones del Ministro Flores, realizó un censo en algunas poblaciones y entregó una tarjeta de abastecimiento a cada familia, iniciando luego la distribución de 15 a 20 mil "canastas populares", que incluían 20 o 30 artículos. La Secretaría Nacional de Comercialización y Distribución, rechazó de inmediato esta iniciativa y pidió al gobierno la destitución del gerente de "Agencias Graham", la que se concretó poco después. Esta destitución generó un incidente de proporciones, pues, más de 500 pobladores beneficiados con las "canastas" realizaron un mitin en las oficinas de la "Agencia Graham", logrando a su vez la destitución del sucesor de Inostroza, sin conseguir, sin embargo, que éste fuera restituido en su cargo. Más adelante, para prevenir iniciativas como las del gerente de "Graham" el general Bachelet pidió en el mes de marzo con la venia del gobierno, la renuncia de todos los gerentes y subgerentes de las empresas distribuidoras estatales, nombrando en esos cargos a militares y a algunos "técnicos". Por su parte, el Ministro de Economía Orlando Millas, del Secretariado del P "C", reafirmó públicamente que la "racionalización" (no racionamiento) de la distribución de productos correspondía exclusivamente a la Secretaría Nacional de Distribución y Comercialización. El Presidente Allende, además, se dirigió al país a comienzos de abril por cadena de radios y televisión, para afirmar que existía: "una campaña, que no es de rumores, sino que obedece a la determinación de un sector de pobladores o trabajadores, para llevar adelante una escalada destinada a tomar algunas industrias, algunas empresas, fundamentalmente las distribuidoras estatales y privadas". Y señala al respecto: "En repetidas oportunidades me he dirigido a los trabajadores para hacerles entender que una cosa son sus derechos -que por cierto nadie me va a enseñar a respetar- y otra, es el compromiso contraído con mi conciencia para convertir en realidad el programa de la Unidad Popular, y otra cosa son las precipitaciones, las actitudes demagógicas, las improvisaciones o el espontaneísmo en que, en diversas ocasiones, sectores de trabajadores han creído conveniente caer" (88) De este modo se echaba un balde de agua fría sobre la movilización popular destinada a luchar contra la especulación, que había suscitado el discurso del Ministro Flores y algunas iniciativas de distribución directa a la población de lo indispensable,

que fueran aplicadas en algunos sectores.

No obstante, ni siquiera esta actitud capitulacionista del gobierno frente a las protestas derivadas del modesto y tímido intento que se sugirió de controlar la distribución, tuvieron la virtud de aplacar esa ofensiva. A mediados de mayo de 1973 el Partido Nacional presenta una acusación constitucional en el Parlamento, destinada a destituir el Ministro de Economía, acusado de crear ilegalmente las JAP y la Secretaría Nacional de Distribución y Abastecimiento. A comienzos de junio se sumó a esa acusación el partido demócrata-cristiano. El 20 de ese mismo mes el Ministro fue suspendido de su cargo por el Parlamento y, finalmente, el 5 de julio, destituido.

Es así, como el gobierno se debatía sumido en la más extrema impotencia debido a su naturaleza reformista, frente a la especulación y el desabastecimiento que azotaban cruelmente a los trabajadores y sectores medios. De esta manera, la oposición logró, incluso antes que se desatara un incontrolable proceso inflacionista, anular en buena medida los efectos positivos que había tenido para los trabajadores la redistribución de ingresos en su beneficio, puesta en práctica en el primer año de gobierno. Estos ganaban nominalmente más dinero, pero sólo con suerte y a costa de grandes sacrificios lograban comprar lo indispensable a precios oficiales. En general se veían obligados a pagar los elevados precios del "mercado negro". Esto afectó aún en forma más generalizada e intensa a los trabajadores de "cuello y corbata" y a los sectores medios en general, ya que, por no vivir en campamentos o poblaciones de "emergencia" ("callampas"), dotadas de una organización, que les permitía hasta cierto punto defenderse de la especulación y reclamar colectivamente abastecimiento, estaban por lo general a merced de los especuladores.

De esta manera, vastas capas de la población fueron sometidas a enormes sacrificios, que se sumaban a la explotación misma en el caso de los trabajadores, para obtener hasta lo más indispensable para vivir: el combustible para cocinar y calefaccionar las viviendas, así como el pan, la leche, las legumbres y verduras, la ropa. Algunos productos, como la carne por ejemplo, prácticamente desaparecieron del consumo para los trabajadores y aún para vastos sectores medios. Hubo momentos en que se llegó al extremo de que en restaurantes y salones de té, se debió ofrecer sacarina en lugar de azúcar.

A partir de 1972, además, habría de sumarse a este agudo desabastecimiento, la intensificación del proceso inflacionista, que se tornó en los últimos meses de gobierno de la UP prácticamente incontrolable, alcanzando a más de un 1 por ciento diario el aumento del índice de precios. Por otra parte, la movilización colectiva, absolutamente deficiente y semi-paralizada debido a la dificultad para importar repuestos, era literalmente asaltada en cada paradero por avalanchas de personas, muchas de las cuales viajaban colgando de las ventanas, como verdaderos racimos humanos. La movilización de los sitios de trabajo a la casa, se transformó así en otro martirio, que se sumó al de las "colas" para obtener alimentos. Todo esto, condimentado con los eficaces medios de propaganda de la oposición, que se encargaban de culpar de todo al gobierno y de mostrar que "esto era el socialismo", fue generando un fuerte descontento contra aquél. Aún en sectores que simpatizaban con el gobierno, fue cundiendo la idea de que "cualquiera cosa que ocurriera" que pusiera fin a esta situación insostenible, era preferible a lo que se estaba viviendo. Este estado de ánimo era justamente el que necesitaban los golpistas para consumir sus planes y corresponde a lo que la propia CIA yanki confesó haber estimulado y financiado para "desestabilizar" al gobierno de Allende, aunque, por cierto, hizo bastante más que crear una corriente de opinión adversa en favor del golpe fascista.

CAPITULO VIII

EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO DE ESTADO

Uno de los aspectos básicos del Programa de la Unidad Popular, precisamente el que les servía para exhibir su capitalismo de Estado como "socialismo", consistía en la estatización de los sectores claves de la economía. Fundamentalmente la industria manufacturera de tipo monopolista, ciertas empresas de distribución mayorista, los bancos privados tanto nacionales como extranjeros, así como ciertas empresas mineras y de utilidad pública, que estaban en manos de consorcios norteamericanos.

1.- Procedimientos de Estatización de las Empresas.

Los procedimientos para controlar estatalmente dichas empresas fueron básicamente dos: la compra de sus acciones por parte del gobierno a sus propietarios, o bien, la requisición o la intervención. La compra de acciones a los propietarios de las empresas, dado el espíritu legalista que inspiraba a la Unidad Popular, sólo podía realizarse cuando estos accedían a venderlas. Hubo casos, como el de la gran industria monopolista del papel, en que la oposición realizó una campaña para impedir la venta de acciones e incluso reunió fondos para adquirir a mejor precio que el gobierno, aquellas de quienes podían vacilar ante las ofertas oficialistas. En general, la necesidad de sentar precedentes publicitarios para "tentar" a otros accionistas a vender sus títulos, movió al gobierno a pagar elevadas sumas por las acciones que adquiría, iniciando así el camino hacia el despeñadero posterior del agotamiento de los recursos fiscales. Cálculos modestos hacen ascender los gastos destinados a comprar bancos, así como minas y otras empresas en poder de los norteamericanos, hasta diciembre de 1971, a unos 100 millones de dólares, sin contar la deuda de la gran minería del cobre de la cual se hizo cargo el gobierno al expropiarla. Esa misma fuente (revista "Causa N° 22, de diciembre de 1971-enero 1972), calcula en unos 200 millones de dólares lo pagado por expropiaciones de bancos nacionales, industrias e indemnización por latifundios expropiados, en 1971.

Respecto a aquellas empresas en la que no existía el propósito de venderlas por parte de sus propietarios se utilizó, para ponerlas bajo la administración del Estado, los llamados "resquicios legales", que permitían su confiscación o intervención. Dichos "resquicios", consistían en la aplicación de un viejo Decreto-Ley (el N° 520) dictado en un gobierno de facto que existió en 1932, que permitía al Estado intervenir la administración de una empresa paralizada por algún conflicto laboral, haciéndola funcionar bajo la administración de un delegado del gobierno; y requisar industrias esenciales que no estuvieran abasteciendo debidamente el mercado de consumo. Ni la requisición ni la intervención, sin embargo, traspasaban la propiedad de la empresa al Estado.

Hasta el golpe de Estado, el gobierno logró estatizar a través del procedimiento de la compra de acciones unas 90 empresas y la mayor parte de los bancos. Al mismo tiempo, requirió unas 170 empresas e intervino 155. De esta manera, elevó el control que poseía el Estado de un 40 por ciento del producto nacional a través de 43 empresas estatales, antes del triunfo electoral de Allende, a un control del 60 por ciento del producto nacional, sobre la base de 415 empresas, compradas, requisadas e intervenidas.

En 1971, antes que se desencadenara la crisis, el gobierno de la UP, realizó los avances más espectaculares de este proceso de control estatal de empresas. Por uno y otro de los procedimientos mencionados, pasaron a control o propiedad del Estado, unas 70 empresas industriales. Entre ellas, las grandes textiles, los monopolios de la cerveza y del cemento, las empresas metalúrgicas que elaboraban el cobre y el acero, así como varias empresas electrónicas. Fueron nacionalizados, así mismo, el cobre, el hierro, el carbón y el salitre. Se realizó, además, la compra de 16 bancos privados nacionales y extranjeros, con lo que quedó bajo control estatal el 90 por ciento del crédito bancario. Con estas medidas de control estatal, a fines de 1971, el gobierno manejaba el 85 por ciento de las exportacio-

nes y el 45 por ciento de las importaciones del país.

A través de esta vigorosa ampliación del área estatal, el gobierno de la UP, pensaba controlar una palanca decisiva en el desarrollo económico (así como político) de Chile; pensaba otorgarse, además, la capacidad de planificar y orientar dicho desarrollo, entre otras cosas, controlando la mayor parte del excedente invertible del país. ODEPLAN, señala al respecto: "La extraordinaria responsabilidad que les cabe a las empresas del área de propiedad social, las que deben generar un monto de ahorros equivalente a alrededor del 10 por ciento del producto. Esta meta, agrega el informe, podría parecer exagerada, pero debe recordarse que allí se concentrarán las empresas y complejos industriales más grandes y de mayor productividad de la economía, lo que, no obstante, implica una extraordinaria responsabilidad para los trabajadores y ejecutivos de esa área, que deberán tomar conciencia de que en su capacidad de generar excedentes está la posibilidad de que el país como un todo, una vez liberado de las ataduras del imperialismo y el monopolio, consiga un avance importante y sostenido en sus niveles de producción". (89)

En un verdadero sueño de alquimistas medievales, pretendían transmutar una sociedad capitalista dependiente del imperialismo y, por lo mismo, de bajo desarrollo económico, en un capitalismo de Estado manejado por una nueva burguesía burocrática. Todo esto, sin arrebatárles previamente el poder a los antiguos explotadores y con la pretensión de expropiar sus empresas a raíz de un mero triunfo electoral, como quien gana una partida de poker a jugadores honestos y les reclama después que entreguen su dinero. Intentaban escamotearles a los sectores realmente dominantes sus riquezas, utilizando sus propios instrumentos legales e institucionales y a través de los mecanismos económicos clásicos que operan en la sociedad capitalista. Es decir, sin la ruptura radical de esas leyes e instituciones, así como de dichos mecanismos económicos, que implica una real conquista política del poder. Olvidaron así, entre otras cosas, la influencia que poseen, utilizando dichas leyes e instituciones así como su fuerza económica, quienes ejercen su dictadura de clases controlando el poder. Es esa fuerza e influencia sobre el conjunto de la sociedad, que otorga el poder, la que permitió, por ejemplo, en China, a raíz del triunfo de la revolución, resolver en pocos meses uno de los procesos inflacionistas más agudos que se hayan podido conocer en el mundo entero. No obstante, en Chile, esa influencia que da el poder, operaba con signo contrario, pues éste era detentado precisamente por las fuerzas que se deseaba aniquilar.

Tal proyecto de la UP sólo pudo nacer de la confluencia del maquiavelismo de algunos y de la utopía de otros: del maquiavelismo de quienes sabían, como los dirigentes "comunistas" pro-soviéticos, que para su proyecto de capitalismo de Estado no podían movilizar al pueblo de un modo revolucionario; y del utopismo de aquellos que honestamente, como parece haber sido el caso del propio Presidente Allende, se dejaron engañar por los primeros y por su propia formación social-demócrata, y creyeron que era posible avanzar de ese modo hacia el socialismo.

No obstante, Chile es un país de bajo desarrollo capitalista y deformado, además, por la dominación imperialista. Allí, sólo es posible avanzar hacia el socialismo expropiando previamente sus medios de producción al imperialismo dominante, a la gran burguesía urbana y a los terratenientes latifundistas. Para ello, a su vez, es indispensable conquistar el poder y destruir el aparato estatal burgués, aplastando la feroz resistencia, armada y no armada, que opondrán los reaccionarios. Sólo es posible, ganando a la burguesía media y pequeña, poniéndola bajo la dirección del proletariado y neutralizando al menos los que no puedan ser movilizados contra los enemigos principales. Este frente único en torno al proletariado, sólo puede ser construido sobre la base de la fuerza y poderío que alcancen el proletariado y campesinado en su lucha revolucionaria. Esa fuerza y poderío le permitirá al proletariado, a la vez que controlar firmemente a la burguesía no expropiada e imponerle condiciones, ofrecerle garantías de supervivencia y de desarrollo dignas de crédito. El avance hacia el socialismo sólo es posible, por último, realizando, sobre la base del desarrollo de la conciencia política de las grandes masas, serios esfuerzos y sacrificios para salir adelante apoyándose, fundamentalmente, en las propias fuerzas. Sólo un pueblo que ha pasado por esa experiencia de lucha y al cual no le cabe la menor duda -pues ha combatido para ello- que ha conquistado y controla realmente el poder, estará dispuesto a realizar cualquier sacrificio por desarrollar la economía del país y consolidar su inde-

pendencia.

Como nada de esto ocurrió en Chile y el poder -después de la elección de Allende- continuó muy claramente en manos de los reaccionarios de siempre, se optó por operar demagógicamente hacia los trabajadores y hacia los sectores medios de industriales, comerciantes y agricultores. Puesto que la precaria base de sustentación política del gobierno UP no derivaba de un pueblo que hubiera combatido por el poder y lo hubiera conquistado, el gobierno, continuó incentivándolo "desde el exterior", como se opera tradicionalmente con una clientela electoral. De allí, que en el primer año de gobierno se promoviera en buena medida artificialmente, el pleno empleo; se realizara una acelerada redistribución de los ingresos en favor de los trabajadores; se frenara también artificialmente la inflación, sobre la base de un control administrativo de los precios y subvencionando los artículos de primera necesidad; y, más adelante, para hacer frente a la demanda insatisfecha así estimulada, se intensificaron a costa de las reservas de divisas, la importación de artículos de consumo. No hemos querido decir ni por un instante que, a raíz del triunfo de un auténtico proceso revolucionario, no fuera justo y necesario realizar esas y otras medidas de beneficio popular. No obstante, en ese caso, medidas de esa especie se habrían aplicado en un contexto absolutamente diferente. Se habrían llevado a la práctica sobre la base de una expropiación drástica y sin indemnización de sus medios de producción a los explotadores (internos e imperialistas) más poderosos, paralizando, al mismo tiempo, su capacidad de sabotaje a la economía, que en Chile operó en forma devastadora. Se habrían aplicado controlando y recuperando, a través de los eficaces mecanismos que otorga el poder político, las inmensas utilidades que realizaron las empresas privadas, a raíz de la ampliación del consumo popular. Se habrían materializado exigiendo la reinversión de una parte importante de dichas utilidades, deteniendo la fuga de capitales al extranjero, restringiendo las importaciones a lo más indispensable, así como combatiendo severamente el acaparamiento y la especulación. Habrían sido posibles fiscalizando la real utilización productiva de los importantes créditos concedidos a las empresas privadas, que fueron a parar en gran parte también al capital especulativo. Se habrían llevado a la práctica, impidiendo la instalación de una nueva y voraz burguesía burocrática, que se apoderaba de una importante proporción de la plusvalía generada por los obreros. Todo ello haciendo referencia, a modo de ejemplo, a lo que se podría haber logrado en el contexto de una política supuestamente semejante a la que aplicó el gobierno de Allende, si se hubiera conquistado realmente el poder. No obstante, nada de esto era posible dentro de la lógica reformista y legalista, de la ficción de conquista del poder, que caracterizó al proyecto oportunista impulsado por los dirigentes del P" C" a través de la Unidad Popular.

Por otra parte, una auténtica conquista del poder, habría permitido generar a partir del pueblo mismo una conciencia política suficientemente elevada como para aplicar las medidas de beneficio popular, en consonancia con el desarrollo económico del país, garantizando así su solidez y permanencia. Es preciso no olvidar que en Chile, cuyo ingreso por habitante alcanzaba en 1972 a 972 dólares anuales, no puede resolverse el problema de elevar el nivel de vida general del pueblo, con simples medidas de redistribución de los ingresos. Aún un imaginario reparto igualitario de los ingresos del país entre los 10 millones de habitantes y suponiendo el absurdo de que no se dejara fondos para capitalización y otros gastos productivos, sólo alcanzaría para entregar a cada chileno apenas 66 dólares mensuales. Junto con expropiar a los principales explotadores nacionales y extranjeros sus medios de producción, por lo tanto, es indispensable desplegar un gigantesco esfuerzo para promover un acelerado desarrollo de la economía en todos sus aspectos. Desarrollo que el pueblo sólo realizará con el máximo de energía, cuando tenga la certeza que lo realiza en su propio beneficio, es decir, cuando haya conquistado y controle efectivamente el poder. En tal caso, que no es por cierto el del falso socialismo existente en la URSS y sus satélites, el "espíritu empresarial", que tanto alaban los apologistas del capitalismo presentándolo como motor del progreso, no sólo es patrimonio de un puñado ífimo de explotadores, sino, de los millones de integrantes de las masas populares. No es la consecuencia del egoísmo y del espíritu de lucro, sino de la preocupación por los intereses colectivos de la sociedad.

Sin embargo, la Unidad Popular y su gobierno, lanzaron su campaña de redistribución del ingreso, de pleno empleo, de control de precios, de importaciones para el consumo, de

ampliación del crédito a los empresarios, así como de ampliación de área estatal y reforma agraria (que implicaron compras de acciones e indemnizaciones); sin ningún poder efectivo para controlar la respuesta a esas medidas de parte de la burguesía, de la pequeña burguesía y aún de vastos sectores de trabajadores. Siguiendo el método político electoral, que se parece mucho al que utilizan quienes deben vender un producto en la sociedad de consumo, confiaron en la aceptación de su mercancía. Pensaron, subjetivamente, que las facilidades otorgadas incentivarían a la burguesía no monopolista a retribuir las invirtiendo en sus empresas; a los comerciantes a interesarse, dada la ampliación del consumo, por un desarrollo normal y vigoroso de sus actividades, en armonía con la política oficial; y, por último, a los trabajadores, beneficiados en el pleno empleo y la redistribución de los ingresos en su favor, a constituirse en el más sólido baluarte del gobierno. De ese modo, idílico, supuestamente, todo el cuantioso desembolso inicial que significaba al gobierno la aplicación de esa política, se recuperaría a través de un desarrollo floreciente, tanto de la industria en manos privadas como de la que pasaría a manos del Estado, así como del comercio y, en otro plano, de la productividad.

No obstante, como ya hemos señalado, la burguesía no monopolista, que se suponía manejable con simples incentivos economicistas, actuó fundamentalmente con criterio político y con criterio político reaccionario, orientándose, desde el comienzo hacia quienes efectivamente detentaban el poder. Más aún, les sacó el jugo a todas las facilidades que el gobierno le otorgaba y más adelante (a través de la especulación), a los gravísimos problemas de desabastecimiento que se originaron, sin favorecer en lo más mínimo las expectativas ilusorias que en ella cifraba el gobierno. Finalmente, resultó que el gobierno, con la frustración e impotencia propias de un reformismo que sólo construyó castillos en el aire, debió pagar de su bolsillo (o mejor dicho, de los bolsillos de los trabajadores), los esfuerzos que había realizado, para compensar su carencia de poder real, por medio de incentivos de tipo económico. Se vió obligado a echar mano de los excedentes invertibles, de las reservas monetarias y hasta de las utilidades de las empresas estatales, con las que pensaba jugar un papel dirigente en la economía. Más adelante, cuando esos recursos se agotaron, empecinado en forma tozuda en una política que no tenía eco, comenzó a fabricar dinero para continuar incentivándola, desencadenando así la inflación más grande que hasta ese momento (la Junta Militar la ha superado con creces), se conocía en la historia de Chile.

De esta manera, en medio de una demanda hipertrofiada, no sólo no se contó con la inversión privada y con la renovación de la industria que era necesaria para hacer frente a esa demanda, sino que se paralizó en gran medida la inversión pública, que representaba en Chile en esa época más del 75 por ciento del total de inversiones del país. El Estado, en efecto, depende en Chile para invertir de los créditos externos que, como hemos visto fueron bloqueados en importante medida, y de las utilidades de sus exportaciones, que resultaron gravemente afectadas por la baja del precio del cobre, por el descenso de la producción en las grandes minas y por el alza espectacular de todo aquello que Chile importaba. Depende, también, de los impuestos, afectados asimismo por el sabotaje parlamentario a las leyes de presupuesto, por los paros empresariales y por el giro especulativo que asumió la actividad económica. Por ejemplificar con los únicos de estos tres aspectos recién mencionados que es posible cuantificar, podemos señalar, que la Ley de Reajustes de Remuneraciones de 1971, debido a los rechazos del Parlamento al financiamiento propuesto por el gobierno, sólo obtuvo financiamiento en un 18,4 por ciento y la 1972 en un 22,5 por ciento. Por su parte, los ingresos tributarios (en relación al financiamiento del Presupuesto) bajaron de un 83,7 por ciento en 1970 a un 69,7 por ciento en 1971 y a un 58,3 por ciento en 1972. Ni soñar, pues, con el propósito inicial de ocupar un papel dirigente en la economía a través de una importante política de inversiones estatales. La inversión fiscal, que en los años 1964-70 alcanzó como promedio a un 26,9 por ciento, descendió a un 22,4 por ciento en 1971 y a un 17 por ciento en 1972. Las reservas existentes inicialmente y más adelante las emisiones, sirvieron apenas para impedir un derrumbe más rápido de la economía y para apuntalar el sistema de dádivas sin retorno con el que se creyó posible controlar un poder no conquistado.

Por otra parte, como hemos señalado, las empresas que pasaron a manos del Estado, o fueron compradas a elevado precio; o bien, requisadas o intervenidas a través de los "resquicios legales", con todas las trabas y dificultades que el uso de dicho cuestionado proce-

dimiento encerraba: derechos restringidos sobre ellas, disputa legal permanente con sus propietarios y, por último, contradicciones cada vez más agudas con la Contraloría, con el Parlamento y con los Tribunales de Justicia. Estos organismos estatales, no sólo se oponían verbalmente al uso de estos procedimientos de estatización, sino que, cada vez más de hecho, tomando medidas para entorpecer su administración, ordenando su devolución a los antiguos propietarios y hasta enviando a la cárcel a los interventores o a las autoridades de gobierno que negaban la fuerza pública para restituir esas empresas a sus propietarios legales. Es así, como cada nueva ampliación de área estatal, lejos de fortalecer el poder del sector que controlaba el gobierno y de ayudar a resolver los problemas económicos, generaba más déficit, más emisiones inorgánicas, más conflictos con los órganos de poder controlados por los reaccionarios, una mayor imagen de debilidad del gobierno y más frustración oficial.

2.- Algunos antecedentes de la Crisis Fiscal.

Dada la agudísima pugna que existía entre la oposición y el gobierno de la UP y los propósitos de aquella por desprestigiar a éste para "desestabilizarlo", por lo general, los datos entregados por opositores acerca de la crisis que afectó al gobierno allendista, son exageraciones de la realidad. Frecuentemente, así mismo, los datos que entregaba el gobierno, por razones defensivas, tendían a ocultar la realidad y a presentar la crisis como menos grave. Con todo, la crisis era de tal magnitud, que casi no era necesario exagerarla ni tampoco era posible ocultarla a la opinión pública. Como aún la experiencia de la UP y su gobierno constituye un tema fuertemente controvertido, hemos preferido respecto a la crisis consignar tanto datos de la oposición como de fuentes oficiales, que permitan formarse una idea de la gigantesca sangría de recursos fiscales, a la que condujo ese frustrado ensayo de desplazamiento de los sectores dominantes tradicionales por un camino reformista.

Comencemos por el problema del déficit fiscal. En un boletín del Banco Central, organismo estatal regulador de las finanzas, se habla de una baja de un 2 por ciento en los ingresos fiscales en 1971, de un alza de un 47 por ciento de los egresos y de un déficit fiscal bruto de 9 mil 330 millones de escudos para ese año. (90) Por lo que respecta a 1972, a mediados de ese año, la Sociedad de Fomento Fabril, organismo de oposición al gobierno que agrupa a los grandes industriales, prevee un déficit fiscal de 18 mil millones de escudos. A mediados de diciembre de 1972, José Musalem, parlamentario de oposición de la DC, habla de un déficit fiscal de 12 mil millones de escudos en 1972, déficit que, según él, se elevaría a 50 mil millones de escudos en 1973. (91) Finalmente, el Ministro de Hacienda impuesto por la Junta Militar, Lorenzo Gotuzzo, habla en octubre de 1973, de un déficit calculable para ese año de 148 mil 400 millones de escudos. (92)

Respecto al déficit en la Balanza de Pagos, el Banco Central reconoce ya a mediados del año 1971, una baja de 156 millones de dólares en la reserva, entre septiembre de 1970 y abril de 1971. (93) En diciembre de ese año, el parlamentario DC Andrés Zaldivar, ex-ministro de Hacienda de Frei, cargo que aprovechó antes que asumiera el mando Allende para lanzar una campaña alarmista programada por la CIA a fin de intensificar la crisis, opina que: "el déficit de la balanza de pagos es de 350 millones de dólares, uno de los más altos que haya tenido Chile", y sostiene, que el gobierno "se ha comido los 450 millones de dólares de reserva". (94) En general comentaristas, tanto de oposición como partidarios del gobierno de la UP, reconocen un déficit de la balanza de pagos, de poco más de 300 millones de dólares para 1971. Por lo que respecta a 1972, Alfonso Inostrosa, Presidente del Banco Central, informa que a fines de ese año el déficit de la balanza de pagos se acercaría a los 350 millones. (95) Por último, en febrero de 1973, se hace público un informe confidencial cuya paternidad reconoce después un sector del MAPU (partido integrante de la Unidad Popular), en el cual se sostiene que el 3 de enero de 1973 las divisas llegaron a 0 y que el Presidente Allende, a raíz de su viaje a la URSS, obtuvo dólares sólo para 4 meses más. La influencia del bloqueo externo en este déficit de la balanza de pagos lo analizaremos más adelante.

Por lo que toca al aumento de circulante a raíz de emisiones inorgánicas del gobierno,

los parlamentarios de la DC, Juan de Dios Carmona y José Musalem, rabiosos opositores del gobierno, hablan a comienzos de julio de 1971, de una emisión en favor del sector público de 6 mil 100 millones de escudos, efectuada entre el 30 de octubre de 1970 y abril de 1971. (96) El diario "El Mercurio", a fines de 1971, aparece mencionando a "expertos monetarios a nivel mundial", que habrían sostenido que Chile duplicó su circulante en el ejercicio fiscal 1970-1971, pasando de 7.651 millones de escudos a 15.253 millones. (97) Por su parte, el boletín del Banco Central, reconoce en febrero de 1972, un aumento promedio del circulante de 11,2 millones de escudos diarios en 1971. (98) Luego, en septiembre de 1972, Alberto Baltra, Senador del Partido de Izquierda Radical (PIR), organización cuyo financiamiento reconoce la CIA y que defeccionó de la UP para pasarse a la oposición, afirma que la emisión en 1970 alcanzaba a 8 mil millones de escudos y que al 20 de junio de 1972, pasó a más de 28 mil millones, es decir, aumentó en un 25 por ciento. (99) Poco después, el Banco Central, a petición de la Cámara Alta, informó oficialmente que en 1972 se emitió 36 mil 367 millones de escudos, lo que representa un aumento de un 171,4 por ciento respecto a lo emitido en 1971. (100) Finalmente, los voceros encargados de desacreditar retrospectivamente al gobierno de Allende por cuenta de la Junta Militar, hablan de 20 mil millones de escudos de emisión en 1971 (200 millones de dólares de la época) y de 216 mil millones de escudos emitidos en los 8 meses que duró el gobierno de Allende en 1973. (101)

En lo que respecta a la disminución de la producción o a pérdidas en las empresas estatales, los antecedentes, interpretaciones y fuentes son muy diversas. Consignamos aquí algunos datos aparecidos en la prensa y algunas cifras globales.

En enero de 1972, David Silberman, Gerente General de la empresa estatal del Cobre Chuqui, asesinado por la Junta Militar, reconoce para 1971 una disminución de un 9 por ciento en la producción de Chuquicamata, el Salvador y El Teniente, respecto al año anterior. En estas tres minas de cobre, las más grandes del país, la producción bajó de 553 mil toneladas a 483 mil. (102) La prensa de oposición consigna, al mismo tiempo, tan sólo en Chuquicamata la contratación de tres mil nuevos trabajadores, lo que eleva su número total a 9 mil 500. En el mes de junio de 1972, el Vice Presidente Ejecutivo de la Sociedad Minera El Teniente, Armando Arancibia, habla de un déficit en 1971 de 18.339.240 dólares. En enero de 1973, la Corporación del Cobre (CODELCO), anunció pérdidas por 500 millones de dólares en sus ingresos de los años 1971-1972. (103)

En la Sociedad Química Minera de Chile (SOQUIMICH), que explota el salitre, comprado a los norteamericanos en unos 11 millones de dólares, se habla de pérdidas de 12 millones de escudos en 1971, pérdidas que los sectores de oposición evalúan en más de 42 millones de escudos. En dicha empresa se contrató, desde noviembre de 1970 a marzo de 1972, a 732 nuevos trabajadores. (104)

En junio de 1972, William Jalaf, Presidente del Instituto Textil de Chile, sostiene que tan sólo la industria textil Sumar, una de las más grandes del país, perdía de 7 a 8 millones de escudos mensuales. (105) En febrero de 1973, el Secretario del Comité Textil de la CORFO, Andrés Van Lacker, afirma que la pérdida total de las industrias textiles estatizadas alcanza en 1972 a mil millones de escudos. (106)

La prensa de oposición se refiere el 20 de noviembre de 1972 a pérdidas (hasta octubre de ese año), de la importante industria metalúrgica de línea blanca, FENSA, de 133 millones de escudos. De ellos, 63 millones debido a que uno de los interventores designados por el gobierno, pactó erróneamente la venta de dos meses y medio a precios antiguos. Se habla, así mismo, de un descenso promedio de la capacidad productiva en dicha empresa de un 35 por ciento. El capital total de ella asciende a 180 millones de escudos. (107)

Por su parte, la distribuidora mayorista estatal DINAC, en su balance al 30 de junio de 1972, consigna pérdidas por más de 20 millones de escudos y deudas, incluyendo impuestos y leyes sociales, por 172 millones de escudos. Su capital autorizado asciende a 50 millones de escudos. (108)

En febrero de 1973, Guillermo Gacitúa, Presidente del Sindicato de CHILECTRA, empresa de distribución de energía eléctrica, habla de una pérdida en esa empresa estatal de 60 millones de escudos en 1971 y de 250 millones de 1972. (109)

A mediados de 1972, evacua un informe una Comisión Especial designada por la Cámara de Diputados para estudiar la situación de las empresas estatizadas o intervenidas. En

dicho informe se expresa, entre otras cosas, que hay 263 empresas intervenidas y que se encuentra ya el 47 por ciento de las industrias en manos del Estado. Se afirma, así mismo, que las pérdidas en dichas empresas alcanzan hasta ese momento a 23 mil millones de escudos. (110)

El organismo de planificación estatal ODEPLAN, reconoce para 1972 pérdidas para el área estatal de la economía de 21 mil 871 millones de escudos. (111)

En lo que respecta a 1973, sólo contamos con los datos de la Junta Militar, interesada en desprestigiar al máximo al gobierno de Allende para justificar sus tropelías y la intensificación de la crisis y de la superexplotación bajo su dictadura, o de políticos como Alberto Baltra, simpatizante de la Junta. Este último habla de pérdidas de cuatro empresas del área estatal: Cervecerías Unidas, Compañía de Acero del Pacífico, Empresa Nacional de Minería y Sociedad Química Chilena, de 21 mil millones de escudos en 1973. (112) Habla, así mismo, de pérdidas de 2 mil 149 millones de escudos en 8 empresas textiles estatizadas. La Junta Militar, habla de pérdidas globales en las empresas dependientes del Estado en 1973, de 175 mil 809 millones de escudos, lo que sería superior en poco más de 27 millones de escudos al déficit fiscal total que ascendió a 148 mil 400 millones de escudos. (113)

Las causas que explican el déficit en las empresas controladas por el Estado, son de muy diversa especie. Sus pérdidas, en primer lugar, están vinculadas a la crisis general que afecta la economía, que obliga al gobierno a echar mano de sus fondos no para promover nuevas inversiones productivas, sino, para cubrir otros déficit. Están vinculadas, además, a la fijación forzada, en aras de frenar artificialmente la inflación y promover la ampliación del consumo y la inversión en la industria privada, de precios oficiales extremadamente bajos a los productos de esas empresas. Se debe también a factores de orden social, entre ellos, la falta de experiencia empresarial de los administradores estatales; la carencia de un real compromiso político de los trabajadores con el proceso, lo que a menudo se traduce en franca indisciplina; el sabotaje o el abandono de sus servicios por parte de numerosos técnicos reaccionarios; los negociados y el mercado negro practicado por numerosos sectores de la alta burocracia; así como la baja de la productividad debida a contrataciones excesivas, destinadas a reducir la cesantía. La propia CORFO, expresa en su balance acerca de las empresas estatizadas correspondientes al año 1972, que: "La producción por hombre ha sido deteriorada, por contratos excesivos hechos el año pasado".

Finalmente, también incide en el déficit del área estatal, la crisis que se desata en la capacidad de importación, lo que impide renovar oportunamente la maquinaria, importar repuestos y materias primas indispensables en dichas empresas.

La consecuencia del déficit en aquellas empresas destinadas justamente a producir excedentes, así como en el presupuesto fiscal en general, enfrentado por el gobierno a través de emisiones inorgánicas de dinero, fue el desencadenamiento a partir ya de fines de 1971 de una inflación que se tornó cada vez más incontrolable. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en el mes de agosto de 1972 se registró una inflación de un 22,7 por ciento, la más alta en 20 años. (114) En los 8 primeros meses de ese mismo año la inflación alcanzó a un 63,5 por ciento. Ya en agosto de 1972, la oposición habla en la Cámara de Diputados, de un 243 por ciento de inflación en los 20 meses de gobierno de la UP. (115) En noviembre de 1972, la prensa de oposición, habla de una inflación de 130,2 por ciento en los primeros 10 meses de ese año, que sería la más alta registrada en la historia de Chile hasta ese momento. (116) Esa misma prensa, calcula en mayo de 1973 el alza del costo de la vida en los 12 meses anteriores al estudio, en un 195,5 por ciento (117) Por último, el Instituto Nacional de Estadísticas, consigna en julio de 1973, un alza de 283,4 por ciento del costo de la vida en los últimos 12 meses. (118) Es decir, en los índices oficiales, que como es sabido con su sistema de encuestas y de cálculos tienden a ocultar la real magnitud del alza del costo de la vida, se habla de una inflación para 1973 de casi un 1 por ciento diario. De todos modos esta inflación fue superada con creces posteriormente por la Junta Militar, cuyo índice oficial de alza del costo de la vida en 1973, fue de 508 por ciento y cuyos índices reales de inflación, como es sabido internacionalmente, superan el 2 por ciento diario

CUARTA PARTE

LAS INSTITUCIONES BURGUESAS QUE ENFRENTO EL GOBIERNO ALLENDISTA

CAPITULO IX

LA OPOSICION DESDE EL PARLAMENTO, CONTRALORIA Y TRIBUNALES

El Parlamento, fue otro de los bastiones de las clases dominantes, que debió enfrentar la Unidad Popular y su Gobierno. Como resultado de las elecciones parlamentarias celebradas en 1969, cuando asumió la Presidencia de la República Salvador Allende, la composición del Parlamento era la siguiente: de un total de 150 diputados, la oposición contaba con 89 (34 del Partido Nacional y 55 de la Democracia Cristiana); el Gobierno controlaba 61 diputados (24 del Partido Radical, 15 del Partido Socialista y 22 del Partido "Comunista"). En el Senado, el Gobierno estaba también en minoría, pues de un total de 50 senadores sólo tenía 21. En 1971, antes que se hiciera sentir la crisis económica, el Gobierno, logró aumentar su representación parlamentaria conquistando el apoyo de algunos senadores y diputados demócrata-cristianos, que junto con un grupo de militantes, rompieron con su partido y se sumaron a las fuerzas gobiernistas. De este modo, alcanzó a tener en ambas cámaras, 90 parlamentarios de un total de 200. En 1972, bajó nuevamente la representación parlamentaria del Gobierno, a un tercio del total, al pasarse a la oposición de derecha 22 parlamentarios radicales. Finalmente, en la elección de marzo de 1973, el Gobierno, empeñándose en una encarnizada contienda electoral, en la que se gastaron decenas de millones de dólares y sobre la base de mantener artificialmente un cuasi pleno empleo ficticio, a expensas de agravar en extremo la crisis económica y el déficit fiscal, obtuvo el 44 por ciento de los votos. Sin embargo, su representación en ambas cámaras descendió a 83 parlamentarios (7 radicales, 7 independientes, 35 socialistas y 34 "comunistas"). La oposición, en cambio, si bien no obtuvo los dos tercios de parlamentarios que anhelaba para destituir legalmente al Presidente de la República, logró elegir 117 parlamentarios (69 demócrata-cristianos, 42 nacionales y 6 radicales).

Aprovechando su mayoría, la oposición, utilizó sistemática e implacablemente el Parlamento, al igual que todas las otras instituciones del poder burgués que controlaba, como un instrumento de obstrucción de todos los planes del Gobierno; usó e interpretó a su arbitrio sus atribuciones y las leyes vigentes, para intensificar la crisis económica, para cerrar todo cauce legal de solución a los problemas por parte del Gobierno y para desprestigiarlo con vistas a su derrocamiento. Se habló allí permanentemente y con el mayor cinismo, de supuestos "actos ilegales" de un Gobierno absolutamente apegado al legalismo, mientras se impulsaba al mismo tiempo toda una actividad ilegal tendiente a derrocarlo: paros patronales, sabotajes, contrabando de armas, mercado negro, asesinatos, acaparamiento de productos y, como culminación de todo eso, la materialización del golpe de Estado fascista, que anularía absolutamente todas las garantías legales, en cuyo nombre se decía combatir al Gobierno de Unidad Popular. Fue un espectáculo verdaderamente repugnante, el ver a los politicastros burgueses, hablando con voz encolada y solemne de la necesidad de que se respetaran las leyes y la Constitución (que sólo ellos violaban), mientras preparaban febrilmente el advenimiento de los verdugos fascistas, que habrían de implantar con su abierta complicidad y al servicio de sus intereses bastardos, las torturas, las masacres, la cárcel y la anulación de toda garantía legal y constitucional, como sistema de gobierno.

1.- La Obstrucción Parlamentaria.

Uno de los procedimientos utilizados por la mayoría parlamentaria de oposición para combatir al Gobierno, tal vez el más inocente de los que emplearon, consistió en lanzar proyectos de ley destinados a restringir atribuciones tradicionales del Ejecutivo u otras iniciativas, que obligaran al Gobierno a utilizar su derecho a veto. Este consiste en la facultad que posee en Chile el Presidente de la República, para suprimir, agregar o modificar determinados aspectos de las leyes aprobadas por simple mayoría en el Parlamento. En caso de veto, el Parlamento, debe insistir, para lograr anular el veto, en sus proposiciones originales, pero con los dos tercios de los votos. Si no cuenta con esos dos tercios se impo-

ne el criterio presidencial. Si bien la oposición sabía de antemano que el Ejecutivo votaría las proposiciones reaccionarias o contrarias a su política, el obligarlo continuamente a utilizar su derecho a veto, servía propagandísticamente para mostrar al Gobierno en oposición a la facultad de legislar del Parlamento; en pugna con la supuesta mayoría ciudadana representada por la mayoría parlamentaria.

El 20 de agosto de 1971, por ejemplo, el Gobierno, se ve obligado a enviar un veto a la Cámara de Diputados a un proyecto de ley mediante el cual, la oposición intentaba privar al Presidente de la República de la atribución que éste tenía para fijar las características de las monedas y billetes que se imprimen en el país. En septiembre de ese mismo año, debe vetar otra ley mediante la cual la oposición, a costa del fisco, pretendía establecer redes nacionales de televisión, a objeto de extender a todo el país la influencia de uno de sus más poderosos medios de propaganda y de ataque contra el Gobierno: el Canal 13 de Televisión. El veto contra dicho proyecto fue utilizado para desarrollar durante todo el Gobierno allendista protestas de estudiantes y otros sectores, presentándolo "como un atentado contra la libertad de expresión".

Respecto a los proyectos enviados por el Ejecutivo al Parlamento, la táctica de la oposición, consistió, en rechazar la idea de legislar, en postergar indefinidamente su aprobación con estratagemas dilatorias, o bien, en alterar absolutamente su contenido, a través de la discusión particular de su articulado. Así, por ejemplo, los Proyectos de Ley de Presupuesto, fueron sistemáticamente modificados en su financiamiento. Cada vez que el Gobierno intenta combatir la inflación financiando la Ley de Presupuesto, así como los reajustes de remuneraciones, con impuestos a los sectores de más elevados recursos, la mayoría parlamentaria, despacha esas leyes con un financiamiento inflacionista, basado en los impuestos a los productos de amplio consumo. Son, así mismo, anuladas en los proyectos de Presupuestos u otras leyes, las proposiciones del Ejecutivo tendentes a aumentar los impuestos a los sectores de más altas rentas o al consumo suntuario. Una ley que fuera presentada, para castigar la evasión tributaria, que tan sólo en 1971 fue mayor que todo el déficit del Presupuesto de ese mismo año, es también rechazada por el Parlamento. La mayoría opositora, realiza, al mismo tiempo, fuertes reducciones en Items básicos del Presupuesto. En una ocasión es disminuido el Item destinado a los ferrocarriles del Estado, en consonancia con los paros destinados a sabotear el transporte; son eliminados los fondos destinados a alfabetización; y se reduce, en dos mil millones de escudos, el presupuesto de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), organismo clave del desarrollo económico del sector estatal.

En junio de 1971, es rechazado un Item presupuestario del Gobierno destinado a contratar mil carabineros de la policía uniformada. El pretexto que se esgrime para el rechazo es que el Gobierno, previamente debe proceder "a la disolución de grupos armados (?) que actúan al margen de la Constitución, incautándole sus armas". Se frustra así, uno de los tímidos intentos hechos por el Ejecutivo para introducir, por la vía de la contratación, alguna gente de su confianza en la policía.

Sería largo enumerar los diversos aspectos que asume la obstrucción a todas las iniciativas enviadas por el Gobierno al Parlamento, obstrucción que llega al extremo de rechazar incluso el permiso para que viajen ministros de Estado al extranjero. Sólo haremos referencia breve aquí a algunos de los principales proyectos de ley, que son rechazados en el Parlamento por la mayoría opositora, o bien, alterados sustancialmente en su contenido esencial. No es necesario referirse nuevamente al proyecto de ley contra el delito económico, del que ya hemos hablado en otro capítulo, que es transformado sustancialmente en un proyecto contra el Gobierno, alterándose por completo su finalidad original. Podemos mencionar, en cambio, un proyecto de ley del Ejecutivo destinado a reformar la Constitución Política, para crear una cámara única en el Parlamento, que jamás llega a votarse. Igual suerte corre otro proyecto de ley presetado en diciembre de 1971, a través del cual se intenta reglamentar la distribución de papel a los periódicos, creando el Instituto Nacional del Papel. Así mismo, el propósito del Gobierno de reformar la educación, a través del proyecto llamado de la "Escuela Nacional Unificada" (ENU), es atacado con tal furia por los sectores de oposición, no sólo a través de sus medios publicitarios, sino a través de manifestaciones masivas en la calle (de estudiantes, centros de padres y profesores de oposición), que el propio Gobierno se ve obligado a paralizar por completo dicha

iniciativa. No obstante, aunque el Gobierno echa pie atrás a esa reforma, ella es utilizada, hasta la caída misma del Gobierno, para plegar a vastos sectores ligados a la educación a los movimientos gremiales y patronales destinados a derribarlo. Finalmente, un proyecto conciliador, presentado sin consultar a los otros partidos de la Unidad Popular, por el dirigente P" C" y Ministro de Economía Orlando Millas, en el que se reducía considerablemente el número de empresas a incorporar al área social de la economía, tampoco prospera en el Parlamento.

Toda esta labor ciega e inflexible de obstrucción que se realiza desde el Parlamento, demuestra lo ilusos que fueron quienes creyeron la mentira propalada por los dirigentes del P" C", de que era posible aprovechar estas instituciones burguesas, en lugar de destruirlas como plantea el marxismo, para avanzar hacia el "socialismo". El Parlamento ni siquiera operó, como era habitual, como una instancia donde se armonizaban y conciliaban de un modo relativamente flexible los intereses de los diversos sectores burgueses. Puesto que el proyecto de capitalismo de Estado disfrazado de socialismo, que preconizó la Unidad Popular, amenazaba los intereses de los sectores más poderosos que controlaban el poder, el Parlamento, se trocó en un muro rígido, más aún, en una verdadera máquina de demolición de todas y cada una de las iniciativas del Gobierno. En esa oposición cerrada e implacable, no contaba para nada el que se tratara de iniciativas de beneficio popular o destinadas a paliar la aguda crisis económica existente; ni siquiera contó el que se tratara de iniciativas coincidentes con algunos puntos contemplados en los programas electorales de los partidos de oposición. Sólo primó, el propósito de demoler, obstruir y cerrar toda salida a fin de lograr el fracaso necesario, para derrocar al Gobierno.

2.- Las Acusaciones Constitucionales.

Otro de los procedimientos que utilizó la mayoría parlamentaria de oposición para desprestigiar al Gobierno allendista y desarticular la aplicación de sus planes, fue el de la Acusación Constitucional contra los ministros de Estado y otros funcionarios de confianza del Ejecutivo. Para esto se aprovechó la facultad que ofrece a la Cámara de Diputados el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, para "Declarar si han o no lugar las acusaciones que, diez a lo menos de sus miembros, formularen en contra de los siguientes funcionarios: a) El Presidente de la República (...) b) los Ministros de Estado, por los delitos de traición, concusión (abuso de poder), malversación de fondos públicos, soborno, infracción de la Constitución, atropellamiento de las leyes, por haberlas dejado sin ejecución, y por haber comprometido gravemente la seguridad y el honor de la nación". La Cámara tenía atribución, una vez aprobada la acusación, para suspender al ministro en cuestión y, posteriormente, el Senado, para destituirlo. Esto, sin contar con lo que pudieran realizar más adelante los tribunales de justicia con la persona acusada. El procedimiento ofrecía la ventaja adicional de que no se trataba de un sistema de acusación engorroso como el de los tribunales, sino de una simple apreciación "en conciencia" por parte de los parlamentarios, de la infracción al artículo de la Constitución, lo que se establecía por simple mayoría de votos. Si este procedimiento no se aplicó para destituir al Presidente de la República, es tan sólo porque en ese caso, se requería contar con los dos tercios de los votos, que la oposición nunca logró reunir.

El procedimiento de las Acusaciones Constitucionales, absolutamente inhabitual en la práctica política chilena que se empleó sólo en raras ocasiones después de la dictación de la Constitución en 1925, fue utilizado como un arma contundente contra el gobierno de Allende. Las acusaciones fueron multiplicándose en forma progresiva, en plena coordinación con el desarrollo de la ofensiva, legal e ilegal, tendente a derribar a dicho gobierno. Se trataba, no sólo de entorpecer toda política estable y coherente del equipo de Gobierno, sino de exhibir claramente, en concordancia con lo que hacían con objetivos iguales la Contracaloría y los Tribunales de Justicia, **quien** controlaba realmente el poder en Chile. Esa prueba de fuerza, habría de ser decisiva para mostrar la extrema debilidad y carencia de poder real en que se basaba la experiencia de la Unidad Popular e inclinar, como

efectivamente ocurrió, a los vacilantes sectores medios a unirse a la oposición sediciosa liderada por las fuerzas más reaccionarias.

Las acusaciones constitucionales se inauguran con la que presentara, el 2 de febrero de 1971, el Partido Nacional, contra el Ministro de Justicia, Lisandro Cruz Ponce, alegando la ilegalidad e inconstitucionalidad de algunos indultos a personas de izquierda condenadas en el gobierno anterior. Dicha acusación no prospera, pues se abstiene en la votación la Democracia Cristiana, sosteniendo que dichos indultos habían sido de responsabilidad exclusiva del Presidente de la República. Más adelante, el 10 de marzo, el Partido Nacional nuevamente, acusa al ministro del Trabajo, José Oyarce, "por abusos de poder y atropellos al orden constitucional vigente", al nombrar interventores en algunas industrias, invocando los ya mencionados "resquicios legales". Tampoco logra ser aprobada. No obstante, el 12 de mayo, es desaforado el Intendente de la provincia de Colchagua, por "abuso de poder", tomando como pretexto la muerte accidental por un ataque al corazón de un latifundista, cuando le son expropiadas sus tierras.

El Partido Nacional, todavía solitario en estas iniciativas, lanza una Acusación Constitucional el 8 de septiembre del 71 contra el Minsitro de Economía, Pedro Vuskovic, por "abuso de poder, atropello a las leyes e incumplimiento de ellas". Como ejemplo de estas supuestas violaciones a la ley (ejemplo en realidad de la arbitrariedad clasista con que los reaccionarios interpretan la ley), los nacionales señalan: la estatificación de los bancos mediante la compra directa de sus acciones y las requisiciones de empresas. Esta acusación contra Vuskovic, que no prospera, debido a que no es apoyada por la DC, es reiterada nuevamente en el mes de diciembre de ese mismo año por el Partido Nacional, el más golpeado por esas expropiaciones.

En diciembre de 1971, cuando ya se han hecho sentir los primeros síntomas de la crisis económica en la gestión de la Unidad Popular, la Democracia Cristiana varía su posición que le había llevado a abstenerse en materia de Acusaciones Constitucionales. El 2 de diciembre de 1971, es la DC la que presenta una acusación contra el Minsitro del Interior, José Tohá, pretextando la responsabilidad que le cabría en la no disolución de supuestos grupos armados afines al Gobierno. Estos grupos, según la DC, habrían agredido a los integrantes de una manifestación hecha por la oposición para protestar por el desabastecimiento. Como era de esperar, al día siguiente se pliega el Partido Nacional a esa acusación. ¡Por fin, al incorporarse la DC, se ha impuesto este método de oposición iniciado por ellos, ganando así una mayoría de votos en el Parlamento como para hacer efectivas dichas acusaciones! Es así, como el 6 de enero de 1972, la Cámara de Diputados aprobó la acusación contra el Minsitro Tohá por 80 votos contra 59, quedando de inmediato suspendido de su cargo de acuerdo al artículo 39 de la Constitución Política, interpretada, claro está, al arbitrio de los intereses de la oposición de derecha. El 24 de ese mismo mes, el Senado, completa el procedimiento de la Acusación Constitucional y destituye al Ministro del Interior, por supuestas "infracciones a la Constitución, atropellamiento de las leyes, por haberlas dejado sin ejecución, y haber comprometido gravemente la seguridad de la nación (?)". El día 3 de enero se realizó un espontáneo acto de masas frente al Palacio Presidencial de protesta contra la suspensión de Tohá. Los sectores allí reunidos quieren marchar contra el Parlamento y tomarlo. El Presidente de la República calma los ánimos, sosteniendo: "Nuestra fuerza es la conciencia política... Si llegara la hora de que el pueblo adopte otra actitud, el que lo llamará para esto seré yo, asumiendo todas las responsabilidades". No obstante, como es sabido, este llamamiento no se concretó jamás y sólo se escucharon llamados a la conciliación, destinados siempre a frenar la combatividad popular. Finalmente, el Presidente Allende, sólo respondió a la destitución de su Jefe de Gabinete, con otra maniobra tan artificiosa como la de la oposición, nombrándolo en el Ministerio de Defensa Nacional, para intentar así, tímidamente, salvar el prestigio del Gobierno. La debilidad de la respuesta oficial, habría de dejar abierta las puertas para que la oposición transformara en un verdadero deporte, como en el juego de palitroques, su táctica de tumbar ministros del Gobierno.

El 21 de junio de 1972, una Comisión Investigadora designada por la Cámara de Diputados, en torno a la intervención de unos bultos llegados desde Cuba, que no pasaron por los trámites aduaneros, responsabiliza al nuevo Ministro del Interior, Hernán del Canto, de haber cometido al respecto "delito e irregularidades". El 23 de ese mes, el Partido

Nacional presenta una Acusación Constitucional contra del Canto, sumado a la acusación de "responsabilidad en delitos comunes de contrabando y fraude al Fisco", el "incumplimiento de las disposiciones de orden público, frente a las ocupaciones ilegales", haciendo mención en el texto a ocupaciones de tierras por los campesinos, o de industrias por los obreros en conflicto. Es decir, con la acusación se quiere dejar claramente establecida "la obligación" del Gobierno de reprimir todo movimiento de masas que se considere una amenaza para los intereses de las clases dominantes. El 5 de julio del 72 la Cámara de Diputados aprueba la acusación contra el Ministro del Interior, por "haber comprometido gravemente la seguridad de la nación, haber infringido la Constitución política del Estado, haber atropellado las leyes, haberlas dejado sin ejecución y haber abusado gravemente del poder". El 27 de ese mismo mes, con la del Senado a la acusación, el Ministro del Canto es destituido. Como puede observarse, el fondo de la acusación, es por no hacer uso represivo contra el pueblo, de todo un sistema legal destinado a defender los intereses de quienes detentan los medios de producción. Se califica, así, de "ilegal" la política misma del Gobierno, en la medida que no hace uso de la represión contra determinadas formas de lucha popular. De este modo, el Gobierno de la Unidad Popular, comienza a ser enfrentado, no tan sólo ya contra una serie de instituciones del poder burgués controladas por los sectores más reaccionarios, sino, también, contra el sistema legislativo creado para servir los intereses de estos sectores. Nuevamente, el Presidente Allende, encara la destitución de otro de sus jefes de Gabinete, cambiándolo al cargo de Secretario General del Gobierno. De paso y en el mismo contexto de acusaciones hechas contra el Ministro del Interior, el Senado, desaforó al Intendente de Santiago, a petición de un Ministro en Visita designado por la Corte de Apelaciones, por no haber reprimido una toma del Juzgado de Melipilla (localidad cercana a Santiago), realizada por un grupo de campesinos en protesta por actuaciones arbitrarias del juez de ese tribunal. Al grito de: "Jueces, vendidos, ladrones y corrompidos!", se reúnen frente a los edificios del Parlamento y de los Tribunales de Justicia, un importante número de campesinos y obreros, en una concentración no autorizada, para protestar por la destitución del Intendente y del Ministro del Interior. Expresando plenamente el sentir popular, un dirigente campesino dice allí: "Debemos unirnos para destruir la guarida de los "momios", la del Parlamento y la de la justicia burguesa. A las vacas del Parlamento —con todo el respeto que me merecen las vacas, compañeros— les decimos que cualquier cosa que hagan en contra de nosotros tendrán que responder ante el pueblo". El Presidente de la Corte Suprema Enrique Urrutia Manzano, envía al Presidente de la República un reclamo por el mitín realizado frente a los tribunales y éste le responde dándole garantías que estos actos no se repetirán. Urrutia Manzano, insiste todavía ante el Presidente: "Afirma V.S. que el señor Presidente de la República ha prohibido la realización de manifestaciones públicas en el sector donde se verificó la comentada y ha dado, en algunos casos, orden de que los trabajadores no extiendan sus desfiles a esos lugares. Esta Corte se complace en que así haya ocurrido; pero mayor habría sido su complacencia si las órdenes del señor Presidente hubieran sido efectivamente cumplidas en el caso concreto que nos ocupa. Esperamos, concluye advirtiendo, que en lo venidero ni siquiera espontáneamente y por sorpresa puedan ser desobedecidas tan elevadas disposiciones". (119) Urrutia Manzo y aquellos que los acompañaban en lo que calificara con razón el dirigente campesino como "guarida de momios", es decir, la Corte Suprema, utilizaron al máximo dicho tribunal para obstaculizar toda reforma que afectara los intereses reaccionarios y para brindar protección jurídica e impunidad a saboteadores y asesinos fascistas. Todo ello, por cierto, a nombre de un sedicente "respeto sacrosanto" a las leyes vigentes. Su real "respeto" por la Constitución y las leyes se demostraría después del golpe de Estado, en que se han dado respaldo irrestricto a todas las arbitrariedades ilegales e inconstitucionales de la Junta Militar. Los reales móviles de todas sus actuaciones los exhibió Urrutia Manzano, al reclamar a los militares con la mayor impudicia, inmediatamente después del golpe de Estado, la devolución de sus dos latifundios expropiados, siendo llevado en helicóptero por aquellos a hacerse cargo de sus antiguas propiedades, como pago por sus servicios.

En el mes de agosto de 1972, el Partido Nacional, pretende esgrimir nada menos que la crisis existente en la agricultura como causal de una Acusación Constitucional contra el

ministro del ramo. Dicha acusación no prospera por el momento por lo burdo del pretexto, pero reiterada exitosamente más adelante en el contexto de una acusación colectiva contra varios ministros. A mediados de octubre, sin embargo, como para no perder la iniciativa, es acusado constitucionalmente el Intendente de la Provincia de Bío-Bío, por haber ordenado la clausura temporal de una radio, que incitaba plegarse al paro ilegal del transporte, comercio y otros gremios, impulsado ese mes por la oposición con el abierto propósito de derribar al Gobierno. El pretexto se lo ofrece la Contraloría al Parlamento, al dictaminar que dicho decreto de clausura "no se ajusta a derecho". El 25 de octubre, es destituido el Intendente de Bío-Bío. Es obvio, que el Parlamento, la Contraloría y los Tribunales conjugan su actuación para cerrar el paso, mediante mil argucias leguleyas a la utilización por parte del Gobierno de las leyes existentes para defenderse; en tanto que utilizan activamente dicho sistema legal al servicio de los planes sediciosos destinados a derribarlo.

El mismo día que es destituido el Intendente de Bío-Bío, la Cámara de Diputados, aprueba un proyecto de acuerdo protestando porque el Gobierno ha obligado a las emisoras de radio a integrar una cadena nacional, para hacer frente al paro opositor. "El Gobierno, señalan, ha violado en forma permanente y reiterada disposiciones constitucionales, y aún en materias tan fundamentales para una democracia como es la libertad de expresión, lo cual coloca a dicho Gobierno al margen de la legalidad. Tal situación de ilegalidad, altera y trastorna el régimen de derecho, compromete la seguridad de la nación y amenaza gravemente la paz social" (120) Es difícil imaginar una declaración que exprese un mayor cinismo e hipocresía que éste. Invocar la Constitución, las leyes, el régimen de derecho y la paz social, para protestar por algunas tímidas medidas, habituales en todos los gobiernos anteriores, destinadas a conjurar un movimiento abiertamente sedicioso y golpista, con el que se pretendía, como los hechos lo han demostrado, arrasarlo por completo con todo el sistema legal y constitucional !

El 28 de octubre, en pleno plano patronal, la oposición, agrupada en la llamada Confederación Democrática (CODE), acordó acusar constitucionalmente, no ya a uno, sino a 4 ministros: el del Interior, el de Economía, el de Agricultura, y el de Educación. No llegó a consumarse la destitución de esos ministros, debido a que el 31 de ese mes presentó su renuncia todo el Gabinete. La oposición no cesa, sin embargo, y el 2 de noviembre es destituido por el Senado el Intendente de Santiago, por supuestos delitos de : "detenciones arbitrarias, por haber prohibido una marcha, porque amenazó con invadir ciertos barrios de Santiago".

El año 1972, se cierra con una Acusación Constitucional presentada el 13 de diciembre por el Partido Nacional y la Democracia Radical, contra el Ministro de Hacienda y miembro del Secretariado del P" C", Orlando Millas. Se le acusa de represalias adoptadas contra los que participaron en el paro del mes de octubre de ese año. El 28 de diciembre, en que se celebra en Chile el "Día de los Inocentes", la Cámara de Diputados lo suspende de su cargo por 75 votos contra 42. De inmediato el Presidente Allende, con uno de los habituales "enroques" con que acostumbraba hacer frente a las acusaciones Constitucionales, nombra a Millas Ministro de Economía y al dirigente del MAPU, Fernando Flores, Ministro de Hacienda. El 10 de enero, la Acusación Constitucional contra Orlando Millas es aprobada en el Senado, pero la destitución no resulta aplicable, pues ya ha sido sacado de su cargo de Ministro de Hacienda.

El 28 de marzo de 1973, la Democracia Cristiana esta vez, presenta una Acusación Constitucional contra el nuevo Intendente de Santiago, Jaime Faivovich, "por no cumplir con su obligación de mantener la paz y el orden público". Paz y orden público, alterados, fundamentalmente, por grupos fascistas armados y por sectores estudiantiles de los partidos de oposición. El 15 de abril es suspendido por la Cámara y el 25 de ese mes es destituido por el Senado, por 28 votos contra 0. Los parlamentarios de gobierno ya no concurren a la discusión de las acusaciones, pues los argumentos ya no cuentan para nada, sólo opera la máquina de votaciones mayoritaria de la oposición.

El 7 de junio, el Partido Demócrata Cristiano, presenta una nueva Acusación Constitucional contra Orlando Millas, esta vez como Ministro de Economía, "por la autorización inconstitucional de atribuciones a las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP)". Millas, dicho sea de paso, es uno de los campeones de la directiva del P" C", de la teoría

de que es posible construir el "socialismo" en Chile, utilizando las leyes e instituciones de la sociedad burguesa. El 5 de julio es destituido por el Senado.

Pero esto no es todo. En octubre de 1972, se desencadenaba una nueva ofensiva de paros y atentados destinada a derribar al Gobierno. Como parte de esos planes, existía el propósito de la oposición de desarticular la actuación del Gobierno multiplicando las destituciones de ministros. Es así, como paralelamente a la acusación contra Millas, el 24 de mayo, la Democracia Cristiana, presenta sendas Acusaciones Constitucionales contra los Ministros del Trabajo y de Minería, sindicándolos como causantes de la huelga de obreros del cobre. El 6 del mes siguiente, la Cámara aprueba por 78 votos contra 0 la suspensión de sus cargos de dichos ministros y el 20 de junio, el mismo día en que era suspendido el Ministro de Economía, son destituidos los ministros del Trabajo y de Minería. Además, como si todo esto fuera poco, también ese día, los parlamentarios nacionales y demócrata-cristianos, presentaron una Acusación Constitucional contra el Ministro del Interior, Gerardo Espinoza, por haber autorizado un allanamiento del canal 6 de Televisión de la Universidad de Chile. El 3 de julio es suspendido por la Cámara de Diputados.

El 2 de agosto, prosigue la ofensiva de destitución de ministros en plena coordinación con la ofensiva general que derrocaría poco más de un mes después al Gobierno, y es acusado constitucionalmente el Ministro del Interior Carlos Briones. El pretexto esta vez, es un supuesto "maltrato" que habrían recibido algunos diputados de oposición por parte de personal de Carabineros.

Finalmente, el 4 de septiembre de 1973, el Partido Demócrata Cristiano, presentó una Acusación Constitucional -a una semana ya del golpe de Estado- contra todos los Ministros del Estado, responsabilizándolos por no haber puesto término "a las inconstitucionalidades e ilegalidades" de las que la mayoría opositora de la Cámara de Diputados había acusado al Gobierno, con el exclusivo objeto de ofrecer un pretexto legal a Pinochet y su camarilla fascista para materializar el golpe de Estado.

3.- La Reforma Constitucional de la Democracia Cristiana.

Hemos dejado para el final el análisis del Proyecto de Reforma Constitucional acerca de las Tres Areas de la Economía (estatal, mixta y privada), presentado por los Senadores de la DC, Hamilton y Fuentealba, por el papel decisivo que jugó dicho proyecto como cobertura "legal" para el golpe de Estado. El proyecto de Reforma Constitucional, pretendió ser en los hechos una verdadera "acta de rendición" impuesta a la Unidad Popular y a su Gobierno. Dicho proyecto, transfería al Parlamento, es decir, a la mayoría opositora allí existente, la atribución de decidir las empresas que podrían incorporarse al área estatal o mixta (combinación de capitales estatales y privados) de la economía y cuales deberían quedar en el área privada. Eso, en el supuesto de que dicha mayoría parlamentaria estuviera dispuesta a ampliar el área estatal y mixta, pues el proyecto de Reforma Constitucional, servía, también, para que la oposición cerrara el paso a toda estatización o transferencia al área mixta, de las empresas privadas. Por otra parte, el procedimiento que utilizó el Ejecutivo para oponerse a dicho Proyecto de Reforma, fue clave en la generación del grave conflicto de poderes de dicha entidad con el Parlamento, la Contraloría y el Tribunal Constitucional, que serviría de pretexto para proclamar la "ilegalidad" e "ilegitimidad" del Gobierno y "justificar" los llamados abiertos a las Fuerzas Armadas para que procedieran a derrocarlo.

El Proyecto de Reforma Constitucional, fue presentado el 20 de octubre de 1971 y fue aprobado por el Congreso Pleno, el 19 de febrero de 1972. La Reforma modificaba, esencialmente, el artículo 10 de la Constitución Política, en el que se garantizaba el derecho de propiedad y se establecía el procedimiento de estatización de algún bien, cuando era considerada dicha estatización: "de utilidad pública". Según dicho artículo constitucional, nadie podría ser privado de sus propiedades, sino en virtud de una ley y debía ser indemnizado por ello. En todo caso, esa disposición constitucional, dejaba al Gobierno la iniciativa de decidir en cada caso y de acuerdo a la evolución del país, qué bienes, empresas o medios de distribución, producción o financiamiento consideraba conveniente expropiar por razones de utilidad pública, aunque dicha estatización dependiera en última

instancia de una ley, es decir, de una mayoría parlamentaria. La Reforma Constitucional de la Democracia Cristiana, en cambio, intenta "congelar" de una vez por todas el procedimiento, exigiendo que se defina mediante la Ley, los medios o bienes de producción que será posible incorporar al sector social de la economía y de los cuales el Estado será propietario exclusivo, en tanto representante de la comunidad nacional; los que formaran parte del sector mixto, que le pertenecerán a la vez al Estado y a los propietarios privados; los restantes formarán parte del sector privado.

Más adelante, la Reforma, cerrando la posibilidad de que el Estado pueda estatizar empresas privadas mediante la compra de acciones, establece que: Solamente en virtud de una ley se puede autorizar al Estado, las Municipalidades y los organismos y empresas del sector público a adquirir acciones o derechos pertenecientes a personas privadas, en vista de nacionalizar o estatizar los bienes o medios de producción u otros. De esta manera, aún respecto a aquellas empresas definidas por Ley, según la Reforma, como susceptibles de ser traspasadas al área estatal, se cierra el camino que utilizaba el Gobierno de la Unidad Popular de proceder a su estatización mediante la compra de sus acciones a través de algún organismo oficial como la CORFO. Con esta disposición, no sólo se anula un procedimiento que había utilizado, bajo diversos gobiernos desde su fundación, dicha entidad, sino que, se priva al Ejecutivo de un derecho que posee en Chile cualquier ciudadano. Más aún, una vez que fuera definida el área estatal, se le obliga a supeditar el paso de cada una de esas empresas a la oposición, pues se requiere una ley que depende de la mayoría parlamentaria.

En otro punto, la Reforma, deroga todas las disposiciones que podían, directa o indirectamente, permitir nacionalizar o estatizar empresas, bienes o medios de producción, distribución, financiamiento u otros, incorporándolos al sector social o mixto de la economía. De esta manera, se pretende anular la utilización que hacía el Gobierno de los llamados "resquicios legales", para controlar ciertas empresas mediante requisición o intervención, aprovechando el viejo Decreto-Ley 520 de 1932, que lo autorizaba a ello si debido a diversas causales una empresa no era capaz de abastecer el mercado.

Finalmente, la Reforma Hamilton-Fuentealba, con una retroactividad de casi medio año, anula lo obrado por el Gobierno en materia de estatización mediante la compra de acciones, señalando: "Decláranse nulos y sin valor alguno los actos o convenios ejecutados o celebrados por el Estado, los organismos o entidades que lo integran, que están bajo su control o que de él dependen, a contar del 14 de octubre de 1971, para adquirir acciones o derechos de personas jurídicas de derecho privado, con el fin de nacionalizar o estatizar empresas productoras de bienes o servicios, que no hubieren sido expresamente autorizados por la ley dictada en conformidad a lo prescrito en el N° 16 del artículo 44 de la Constitución Política del Estado". Esta disposición dejaba sin efecto la estatización de los monopolios de cemento, de numerosas empresas textiles, de los bancos y muchas otras, que pasaron al área estatal sobre la base de la adquisición de acciones. Así, no sólo se atropellaba el derecho ya ejercido del Ejecutivo a adquirir, al menos en igualdad de condiciones con un ciudadano cualquiera, acciones de una empresa; sino, también, el derecho de los accionistas que habían aceptado venderle sus acciones.

Resumiendo, podemos decir, que se trataba de una Reforma Constitucional, que no sólo golpeaba el corazón de los planes de desarrollo del capitalismo de Estado, que proyectaba y estaba poniendo en práctica la Unidad Popular y su Gobierno, sino de una franca reversión del régimen presidencial a un régimen parlamentario, suprimido ya hacía mucho en Chile. Desde este punto de vista, al restar una serie de atribuciones que eran privativas del Ejecutivo, la Reforma en cuestión, estaba destinada a jugar el papel de una verdadera provocación. Su aceptación significaba de hecho una rendición incondicional del Gobierno y, por lo mismo, al parecer, no era eso lo que se esperaba, sino, su rechazo por parte del Ejecutivo. Este rechazo, por su parte, por la vía del veto, dada la ambigüedad de las disposiciones de la Constitución acerca del quórum con que el Parlamento debía insistir en sus proposiciones, se prestaba para un enfrentamiento entre el Parlamento y Gobierno, como efectivamente ocurrió. Esto ofrecía la oportunidad a la oposición de acusar al Ejecutivo de violación a la Constitución. En efecto, mientras la Constitución de 1925, exigía expresamente, para rechazar un veto, una insistencia con los dos tercios del Parlamento; la reforma de la Constitución aprobada en enero de 1970, dejaba el quórum nece-

sario en la ambigüedad. En esto se apoyaba la oposición para sostener que, puesto que la Constitución no exigía expresamente, los dos tercios de los votos para insistir en el proyecto original de Reforma, "debía entenderse" que era suficiente una simple mayoría de votos. El Gobierno daba, entre otros argumentos, para sostener que la mayoría parlamentaria debía contar con los dos tercios de los votos para insistir en el proyecto original de Reforma, el que el artículo 108 de la Constitución en su inciso 1, afirmaba que "la reforma de las disposiciones constitucionales se someterá a las tramitaciones de un proyecto de ley", los cuales exigen al Parlamento los dos tercios de sus votos para anular un veto del Ejecutivo. Sería ocioso, sin embargo, ponerse a hacer disquisiciones, acerca de quién tenía razón en esta polémica de Derecho Constitucional, si el Gobierno o la oposición, pues, obviamente, la esencia de la pugna no residía, respecto a ninguno de los dos contendores, en un problema de purismo jurídico. Lo que contaba era una pugna de poder, un enfrentamiento de clases y los argumentos jurídicos no eran más que un pretexto. Prueba de ello es que no había ningún "especialista puro" en materia jurídica de la oposición, que diera la razón al Gobierno en su tesis; ni ningún especialista de Gobierno, que compartiera el punto de vista de los opositores. El problema en cuestión se interpretaba en uno u otro sentido, de acuerdo a intereses políticos bien concretos.

La otra "salida" que quedaba al Gobierno, de acuerdo a lo establecido por la Constitución para el caso de desacuerdo sobre una Reforma Constitucional entre el Ejecutivo y el Parlamento, era llamar a un plebiscito, para que la ciudadanía se pronunciara sobre los puntos controvertidos. No obstante, cuando se planteó en concreto esta posibilidad, bien avanzado ya el año 1972, justamente se habían pasado recién a la oposición 22 parlamentarios del Partido Radical que apoyaban al Gobierno, precisamente por el veto de aquél al Proyecto de Reforma Constitucional, quedando la representación parlamentaria gobiernista reducida a un tercio de los parlamentarios. Esto hizo temer con mayor razón al Gobierno, ya a la defensiva en muchos aspectos, una derrota en un plebiscito, que estimó aún peor que un fracaso en el ámbito parlamentario. Dicho sea de paso, esta negativa del Ejecutivo de recurrir al plebiscito en un asunto que afectaba aspectos básicos de su programa de gobierno, confirma nuestra tesis de la débil base de sustentación que este tenía en su control de poder y, como consecuencia de esto, su aislamiento creciente de las masas, en especial, de los sectores medios.

El caso es que, el 21 de febrero, el Presidente Allende, afirma: "Propondré al Congreso, en ejercicio de la facultad que la Constitución me otorga, la supresión o sustitución de todas aquellas disposiciones del proyecto que entrañan un desconocimiento de las atribuciones que, hasta hoy, nunca se pretendieron ignorar al Poder Ejecutivo". Descartó, al mismo tiempo, la idea de llamar a plebiscito y declaró que recurriría como árbitro al Tribunal Constitucional. Al día siguiente, parlamentarios de oposición, rechazan la idea de que sea el Tribunal Constitucional quien resuelva el diferendo entre la mayoría parlamentaria y el Gobierno, pues eso supondría el reconocimiento de un "superpoder", por encima de los tres poderes del Estado.

El 6 de abril de 1972, renuncian los dos ministros del Partido de Izquierda Radical (PIR) y sus parlamentarios pasan a la oposición. El Presidente del PIR, Luis Bossay, expresa: "El problema de interpretación constitucional, surgido en torno a los vetos de esta clase de proyectos (se refiere a la Reforma Constitucional de la DC), se traduce en un conflicto de poderes de imprevisibles consecuencias". Y, mostrando su conformidad con la Reforma, agrega: si el veto "fuere aprobado en los términos propuestos, significaría que los pequeños y medianos productores continuarían sumidos en una situación de total incertidumbre e inseguridad". Obviamente, el conflicto de poderes que se veía venir, tenía para este sector consecuencias "bien previsibles" y deseaban colocarse oportunamente al lado de la oposición reaccionaria.

En el mes de junio, el Presidente Allende, inició una conversación con la directiva de la Democracia Cristiana, intentando llegar a un acuerdo sobre la delimitación de las Tres Áreas de la Economía, que permitiera evitar el conflicto que se planteaba. La conversación sólo tuvo como resultado, sin embargo, una postergación de 15 días en la votación parlamentaria destinada a rechazar los vetos presidenciales al proyecto de Reforma. Las conversaciones se dieron por terminadas a fines de junio, sin llegar a un acuerdo en torno a las empresas que debían integrarse al área social y a las atribuciones del Ejecutivo, que

se anulaban en el proyecto de Reforma. La verdad es que, el Presidente de la República, confiado en el carácter "constitucionalista" y "apolítico" de los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas, que le inspiraban los dirigentes del P" C", seguía creyendo contar con una capacidad relativamente amplia de maniobra, como para negarse a un compromiso con la Democracia Cristiana, que le significara renunciar a una serie de aspectos del desarrollo del capitalismo de Estado o compartirlo con ese partido.

A comienzos del mes siguiente, los vetos del Ejecutivo fueron rechazados por el Parlamento. En el mes de octubre de ese año (1972), los comerciantes, gremio del transporte, profesionales y otros, que protagonizaron el paro destinado a derribar al Gobierno, incluyeron en el pliego de exigencias presentado a éste, la promulgación completa de la Reforma Constitucional o, en caso contrario, su sometimiento a un plebiscito.

En mayo de 1973, el Presidente Allende, informó por cadena de radios: "Me dirijo al país para informarle que en el día de ayer requerí la intervención del Tribunal Constitucional. Lo hice para pedirle un pronunciamiento sobre la forma en que el Congreso tramitó los vetos que formulé al proyecto -de los señores parlamentarios- que modifica la Ley Fundamental. Esta iniciativa obstaculiza la formación del área social y consolida el régimen capitalista. El procedimiento seguido por la actual mayoría de ambas Cámaras encierra una grave amenaza contra la esencia misma de nuestro sistema institucional. Se pretende desconocer el mandato de la Constitución que determina que la mayoría del Congreso no puede imponer su voluntad por sobre la del Jefe de Estado, sin contar con los dos tercios de los votos de sus miembros". El Presidente Allende dejaba en claro, pues, y en esto tenía plena razón, que aceptar nada menos de una reforma a la Carta Fundamental, a la que el Ejecutivo sólo podía oponerse contando con mayoría de votos en el Parlamento y cuyos vetos eran rechazados por simple mayoría, significaba en los hechos entregar a la mayoría parlamentaria de oposición, el gobierno del país. **Y esto es evidente, ya que todas las atribuciones del Ejecutivo están determinadas por la Constitución Política del Estado y podían ser suprimidas a través de Reformas Constitucionales. Inclusive aquella, que determina la necesidad de contar con los dos tercios de los votos para acusar constitucionalmente y destituir al Presidente de la República.** La oposición, junto con afirmar que el Tribunal Constitucional, no era competente para pronunciarse sobre este tipo de problemas, señaló que, precisamente, para resolver conflictos de poderes de esta especie, existía la facultad del Ejecutivo de llamar a un plebiscito, a lo que el Presidente de la República se niega, "porque sabe bien que está gobernando contra la voluntad mayoritaria del pueblo".

El 15 de mayo, el Presidente Allende, promulgó aquellos artículos de la Reforma Constitucional con los que el Gobierno estaba de acuerdo y envió los restantes, aquellos sobre los que no había acuerdo con la oposición, al Tribunal Constitucional. Dos días después, el Senado y la Cámara de Diputados, a través de la mayoría opositora, señalaron la incompetencia del Tribunal Constitucional para pronunciarse respecto a las discrepancias entre el Ejecutivo y el Congreso, en materia de reformas constitucionales, y advirtieron que una decisión de dicho Tribunal en esta materia sería nula, carecería de valor y no obligaría a nadie.

A fines de mayo, el Tribunal Constitucional, se declaró incompetente para pronunciarse sobre el procedimiento de despacho de la Reforma Constitucional en el Parlamento. Ante esto, el Gobierno, declaró: "En tales circunstancias y no siendo dable, a uno de los dos Poderes que intervienen en la formación de las leyes, imponer al otro su criterio interpretativo de las normas constitucionales sobre tramitación de los proyectos de reforma de la Constitución Política, al Presidente de la República sólo le cabe, en este caso, promulgar aquella parte del proyecto sobre la cual no existe disconformidad con el Congreso, esto es, proceder a la promulgación prescindiendo de aquellas disposiciones que, pese haber sido vetadas, supresiva o sustitivamente, no fueron objeto de insistencia en ambas ramas del Congreso". En respuesta a esto, el Presidente del Senado, Eduardo Frei y el de la Cámara, Luis Pareto, enviaron, conjuntamente, al Contralor General de la República el texto de la Reforma Constitucional, sosteniendo que una promulgación parcial del mismo, "implicaría vulnerar claras y expresas disposiciones de la Carta Fundamental", pues la Constitución establece que si el gobierno no llama a plebiscito dentro del plazo constitucional, "se promulgará el proyecto que hubiere aprobado el Congreso". No obstante, este argu-

mento no hacía más que reproducir el diferendo, ya que para el Gobierno la parte vetada no había sido aprobada, pues no se insistió en ella con los dos tercios de los votos.

La actitud intransigente de ambos contendores en la interpretación de las atribuciones del Congreso o del Ejecutivo, instancias en las que oposición y Gobierno, respectivamente, habían centrado el aspecto formal de su disputa, derivó el conflicto al plano en que siempre se resuelven en última instancia los antagonismos de poder: al plano de la fuerza. Es decir, precisamente al plano que la oposición deseaba y en que estaba preparada para resolverlo a su favor. El Gobierno, en cambio, y la coalición política que lo apoyaba, desarmados material, política e ideológicamente por la prédica oportunista, pacifista y legalista de los dirigentes del P“C”, continuaban empeñados en inútiles argumentos jurídicos, en sembrar esperanzas en que las FF.AA., no tomarían parte en el enfrentamiento que se avecinaba y, por el contrario, lo impedirían y en una solución negociada del conflicto. Las exigencias de la oposición, en cambio, tenían cada vez más el carácter de un ultimatum respaldado por la fuerza. “Si el Presidente Allende, declaró Patricio Aylwin, Presidente de la Democracia Cristiana, en junio de 1973, busca la paz social y quiere evitar la guerra civil, tiene en sus manos el instrumento: recurrir democráticamente al pueblo para dilucidar aquellas materias en conflicto”. Estas amenazas no derivaban, por cierto, de que la Democracia Cristiana o sus aliados en la oposición, estuvieran dispuestos y preparados como fuerzas políticas civiles a encabezar una guerra civil contra el Gobierno, sino de su confianza en quienes dirigían a los que tenían en sus manos los fusiles: las Fuerzas Armadas, estaban de su lado. Por lo mismo, la consigna traidora y plañidera que levantó por esos días la dirección del P“C”: “no a la guerra civil”, no contribuía ni a conmover ni a atemorizar a las fuerzas políticas civiles de oposición, que tenían quien manejara las armas por ellos; sino, que exclusivamente, a desmovilizar e intentar amedrentar a los sectores populares, que podrían haber combatido el golpe militar fascista.

El 6 de junio de 1973, venció el plazo constitucional que tenía el Gobierno para llamar a plebiscito. Ya se había desencadenado también la ofensiva final de la oposición, a través de paros, sabotajes, manifestaciones callejeras, incluyendo más adelante, a fines de junio, un ensayo de golpe de Estado protagonizado por un regimiento blindado. El 2 de julio, la Contraloría, aportó su contribución a lo que servía de pretexto para mostrar al Gobierno violando la Constitución y rechazó la promulgación parcial del proyecto de Reforma Constitucional impulsada por el Ejecutivo. Sergio Diez, parlamentario del Partido Nacional, opinó al respecto: “A este Gobierno se le están acabando los resquicios legales. Buscó primero, como tabla de salvación, el Tribunal Constitucional. Cuando éste se reconoció incompetente, recurrió a la Contraloría, la que le dijo que pretender promulgar parcialmente el proyecto de las tres áreas era inconstitucional... Sólo le cabe promulgar completamente la Reforma o salirse de la Constitución”. El senador de la DC, Juan Hamilton, f fue todavía más lejos que el parlamentario Nacional y dijo, el 5 de julio, que: “el Gobierno ya incurrió en incumplimiento de la Constitución al no promulgar íntegramente la enmienda a la Carta Fundamental tan pronto como la Contraloría rechazó su intento de promulgarla en forma parcial”.

La verdad es que estas no eran las primeras declaraciones tendientes a preparar la opinión pública para la destitución del Gobierno a través de las Fuerzas Armadas o forzar su renuncia. Hubo una sostenida campaña. Esta ofensiva comienza en abril de 1973, pasadas ya las prolongadas vacaciones de verano. Rompe los fuegos el Presidente del Partido Nacional y ex-militante nazi, Sergio Onofre Jarpa, quien declara: “La inmoralidad política de la Unidad Popular ha quebrantado en Chile el Estado de Derecho... ha llegado el momento en que el Congreso analice las consecuencias que se derivan de la permanente conducta arbitraria, ilegal y antidemocrática del Gobierno, y declare que éste ha perdido definitivamente su autoridad y la legitimidad de su mandato”. Lo segunda de inmediato, tres días después, su colega de partido el Senador Francisco Bulnes, quien dice: “desde los primeros siglos de la era cristiana, los juristas han establecido que un Gobierno legítimo en su origen, cae en la ilegitimidad si abusa habitualmente del poder, violando las normas básicas a las que debe someterse. Esta es la llamada ‘ilegitimidad de ejercicio’ y es la que, desgraciadamente, afecta al Gobierno del señor Allende. Los ciudadanos que queremos seguir viviendo en democracia, no podemos seguir ignorando la ilegitimidad del Gobierno o limitándonos a considerarla académicamente. Estamos obligados a em-

plear contra un gobierno ilegítimo, que marcha derechamente a la abolición de la democracia y que, además, está destruyendo el patrimonio económico de Chile, cuantos medios estén a nuestro alcance y que no signifiquen un mal mayor”.

El 28 de mayo, se lanza la Corte Suprema contra el Gobierno, señalando: “Esta Corte Suprema debe presentar a V.E., por enésima vez, la actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilícita intromisión en asuntos judiciales, así como la obstrucción de Carabineros en el cumplimiento de órdenes emanadas de un Juzgado del Crimen que, de acuerdo con la ley, deben ser ejecutadas por dicho cuerpo sin obstáculo alguno; todo lo cual significa una bierta pertinacia en rebelarse contra las resoluciones judiciales, despreciando la alteración que tales actitudes u omisiones producen en el orden jurídico, lo que —además— significa, no ya una crisis del Estado de Derecho, como se le presentó a S.E. en el oficio anterior, sino una perentoria e inminente quiebra de la juricidad del país”. El mismo día, el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de la Defensa Nacional, envía una carta al Presidente de la República, en que expresan: “Si la Constitución es mañosamente interpretada o no se la respeta, la acción que se derivaría sería ilegítima, lo que importaría cortar la conexión existente entre las autoridades y las Fuerzas Armadas”. Terminan diciendo: “Ya no cabe tener una actitud contemplativa frente a los acontecimientos en Chile, ni menos los que han llevado, alguna vez, el uniforme de la patria, por la responsabilidad que a cada cual corresponde asumir ante el severo juicio de la historia”.

A mediados del mes de junio, el Partido Nacional, emite una declaración en la que señala: “A la luz del derecho y de la moral, nadie está obligado a respetar ni obedecer a un Gobierno que deja de ser legítimo”. Y agregan: “Quienes aún crean que el mandato presidencial del señor Allende no está viciado por la ilegitimidad de su ejercicio, tienen ahora la prueba definitiva de que la validez de ese mandato ha terminado (la negativa presidencial de promulgar íntegramente el proyecto ley de las tres áreas de la economía). El señor Allende ha violado en forma deliberada y sistemática su promesa solemne de respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Fue esa promesa la que le permitió ser elegido Presidente de Chile por la mayoría del Congreso Nacional”. El Gobierno, respondió a la declaración del PN publicada bajo el título: “El señor Allende ha dejado de ser Presidente Constitucional de Chile”, afirmando que tal declaración “era constitutiva del delito de sedición” y ordenando a los Ministros, Subsecretarios e Intendentes, que no se concedieran audiencias a representantes de dicho partido..., como respuesta a tal actitud sediciosa.

La Democracia Cristiana, hasta ese momento mantenía una actitud ligeramente más cauta, esperando aún una rendición del Gobierno que la favoreciera. Este matiz político se refleja en el acuerdo que tomara el 12 de julio la Cámara de Diputados, en el que se dice: “Considerando: La orden impartida por S.E. el Presidente de la República y llevada a cabo por los partidos de la Unidad Popular, en el sentido de ocupar las industrias para ‘defender al gobierno’... Ante esta situación de abierta ilegalidad en que han incurrido el propio Presidente de la República y todos los personeros y partidos de Gobierno, la Cámara de Diputados acuerda: Hacer presente a S.E. el Presidente de la República, que se está colocando en una situación de abierta ilegalidad y que su actitud pone al país al borde del conflicto armado”... Dicha orden de toma de las industrias se había dado, efectivamente, a raíz de la generalización de un nuevo paro patronal y de ciertos gremios de profesionales, que formaba parte de la ofensiva final destinada a facilitar el golpe de Estado Militar. Como un reproche a la debilidad de la posición demócrata cristiana, el senador Bulnes del Partido Nacional, sostiene: “Frente a un Gobierno que ha caído en indiscutible ilegitimidad en ejercicio, los parlamentarios no podemos limitarnos a recoger las migajas de legislación que nos arroja el Ejecutivo, mientras éste resuelve a espaldas nuestras los más graves asuntos que deberían ser materia de ley, viola cotidianamente las disposiciones legales y constitucionales... Si no tomamos a tiempo todas las actitudes que la Constitución y la ley nos franquean, seremos tan culpables como los que impulsan este proceso”.

Aún, el 14 de agosto de 1973, sin embargo, la Democracia Cristiana sólo insiste en denunciar una supuesta “ilegalidad” de la acción del Gobierno. Afirman: “El Gobierno de la Unidad Popular se mantiene en la ilegalidad y en abierta violación de la Constitución Política, al no promulgar la reforma aprobada por el constituyente, que exige someter a la ley la formación del área social...” El 22 de ese mes, la Cámara de Diputados, toma un nuevo acuerdo, que constituye ya una abierta incitación a las FF.AA. al golpe de Estado, las

que, a través de sus Comandantes en Jefe, integraban un gabinete en el que las había forzado a participar el Presidente Allende, para conjurar la ofensiva final de paros, sabotajes, atentados con que se intentaba derribar al Gobierno. La Cámara acordó representar a los Ministros de las Fuerzas Armadas y Carabineros que, "frente al grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, no les corresponde en el Gabinete prestarse para avalar determinada política partidista. El proyecto de acuerdo de la mayoría parlamentaria señala que, en caso contrario, la presencia de los Ministros militares en el Gobierno comprometería gravemente el carácter profesional de las Fuerzas Armadas y Carabineros, "con abierta infracción a lo dispuesto en artículo 22 de la Constitución Política y grave deterioro de su prestigio institucional".

En vísperas del golpe de Estado, aparecen numerosas declaraciones de gremios controlados por las fuerzas de oposición, planteando la ilegitimidad del Gobierno y exigiendo su renuncia, tales como el Colegio Médico, el Colegio de Abogados, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y otras.

Como se desprende de todo lo que hemos analizado, la tradición "institucionalista" y "legalista" de Chile, lejos de servir para hacer factible reformas, que afectaran los intereses de los sectores dominantes, por la vía "legal", "pacífica" e "institucional", como proclamaron los falsos comunistas, a lo sumo sirvió para que los sectores más reaccionarios se sintieran obligados a revestir sus planes sediciosos y golpistas de hipócritas pretextos legales. Probablemente, sirvió, también, para que la represión fuera aún más brutal y la eliminación de toda garantía legal más profunda, debido a que era necesario extirpar de raíz esos hábitos de legalidad, institucionalidad y vigencia de ciertas libertades democráticas, para implantar la dictadura fascista. De este modo, los intereses de clase, echaron por tierra esa superestructura en la que el revisionismo sembraba tantas ilusiones; borraron de una plumada la "originalidad" y la "excepcionalidad" del proceso chileno -"la Inglaterra de América Latina"- que esgrimían, a menudo, los dirigentes del P"C", para fundamentar sus teorías anti-marxistas. Una vez más, la práctica misma, habría de confirmar lo afirmado por Lenin: "La sola idea de subordinar a los capitalistas pacíficamente a la voluntad de la mayoría de los explotados, de la transición pacífica y reformista al socialismo, no sólo es una extrema estupidez filisteasino, además, un engaño directo a los obreros, un embellecimiento de la esclavitud asalariada, un ocultamiento de la verdad. La verdad es que la burguesía, aún la más instruida y democrática, no vacila ya en recurrir a cualquier fraude o crimen, en masacrar a millones de obreros y campesinos, con el objeto de salvar la propiedad privada de los medios de producción". Y esto, se cumplió, también, en relación con la experiencia de la Unidad Popular y su Gobierno, no obstante que la expropiación a la gran burguesía y a ciertos monopolios imperialistas, sólo estaba encaminada a desarrollar el capitalismo de Estado y no un auténtico socialismo. ¡Con cuanta mayor razón deberá el pueblo prepararse para enfrentar esa resistencia, cuando se disponga efectivamente a conquistar el poder para sí!

4.- La Guerrilla del Gobierno con la Contraloría y los Tribunales.

Como hemos señalado, la administración de las empresas confiscadas o intervenidas a través de los "resquicios legales", fue constinuantemente cuestionada por sus propietarios. Contaron para ello, con el apoyo irrestricto de la Contraloría General de la República, encargada de "velar por la legalidad" de las resoluciones del gobierno, y de los Tribunales de Justicia. Organismos ambos, que exhibieron su "celo legalista" en todo aquello que permitiera entorpecer los planes del gobierno y que hoy día, mostrándo a las claras tanto su carácter de clase reaccionario como la hipocresía con que procedieron cuando decían defender las instituciones y leyes vigentes, han aceptado y han colaborado abiertamente con todas las arbitrariedades ilegales, anti-constitucionales y genocidas de la Junta Militar. La culpa, sin embargo, no es sólo de ellos, sino de quienes se decían marxistas y estimularon el respeto hacia esas instituciones del poder burgués, así como hacia las Fuerzas Armadas, impidiendo que el pueblo las destruyera en tanto guaridas de las fuerzas más reaccionarias.

Para sortear dicha oposición de la Contraloría, el gobierno, debió ápelar continuamente a un recurso que la Constitución le concede para casos urgentes y excepcionales: el de-

creto de insistencia, que debe llevar la firma del Presidente de la República y de todos sus ministros. A los reparos e interferencias de la Contraloría, destinados a intensificar la crisis del área estatal desde el lado administrativo, se sumaba el sistemático rechazo judicial por parte de los Tribunales de las resoluciones del Ejecutivo.

De esta manera se obstruía continuamente la administración de las empresas confiscadas o intervenidas; se mostraba al Ejecutivo ante la opinión pública como gobernando al margen del espíritu de las leyes; y se daba pie a las acusaciones constitucionales presentadas por la mayoría parlamentaria de oposición, para destituir a los ministros de Estado, por infracciones supuestas a la legalidad y otras casuales. Toda esta guerrilla del Parlamento, de los Tribunales, de la Contraloría y otras instituciones de poder controladas por la oposición, contra el gobierno, terminaría por proporcionarles la imagen de un gobierno "ilegítimo" y al "margen de la legalidad", lo que permitió, a su vez, reemplazar esa guerrilla, por la guerra declarada en su contra de las Fuerzas Armadas, para destituirlo por medio de la violencia.

Este proceso, esta ofensiva sistemática, como casi toda la experiencia del gobierno de la Unidad Popular en los más diversos terrenos, ilustra la tesis fundamental de este libro: el fracaso de la "vía pacífica", del camino legalista y reformista, para desplazar del poder a los sectores dominantes en Chile. Eso, no obstante, que lo que estaba en juego no era ni siquiera la construcción del socialismo, o una revolución auténticamente popular anti-imperialista, anti-oligárquica y anti-monopolista, sino, simplemente el reemplazo del viejo sistema de explotación por uno nuevo: el capitalismo de Estado.

Veamos algunos ejemplos de esta pugna institucional que, por cierto, sólo constituye un aspecto de la multifacética ofensiva que desencadenó la oposición, en una escalada siempre creciente, hasta lograr derribar al gobierno.

En junio de 1971, la Contraloría emite un dictamen señalando que: "La ocupación de una industria, por constituir un ilícito penal, no autoriza ni haría viable la requisición de los establecimientos de que se trata". Al mismo tiempo, devolvió sin tramitar, es decir, sin darle curso legal, la resolución de la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO), que ordenaba requisar la gran industria textil "Manufactureras Yarur". En el mes siguiente, devolvió sin tramitar las resoluciones de DIRINCO que requisaban las industrias textiles: Progreso, Paños Oveja Tomé, Rayón Said, Lanera Austral, y Algodones Hirmas. En el mes de agosto, el Contralor insiste, señalando a DIRINCO, que: "la Contraloría General se ve en la necesidad jurídica de manifestar a usted, que no es posible, en derecho, mantener la eficacia de las resoluciones", que decretaron la intervención de varias textiles.

A fines de agosto, los obreros de la Industria Nacional de Neumáticos (INSA), se tomaron las dependencias de la fábrica, señalando que la "Corporación de Fomento debe hacerse cargo de la empresa". El 3 de septiembre, el gobierno resolvió la requisición de las 9 plantas del monopolio llamado Compañía Cervecerías Unidas, argumentando a través del Ministro de Economía Pedro Vuskovic, que la requisición se basaba en la falta de suministro de cerveza, debido a los conflictos entre los trabajadores y la empresa. Cinco días después, el Partido Nacional, presenta una acusación constitucional contra el Ministro de Economía. Se le acusa de abuso de poder, atropello de las leyes e incumplimiento de ellas, señalando que la estatización de los bancos sin una ley que la autorice es contraria a la Constitución y que los requisamientos de empresas "son ilegales y configuran un flagrante atropello a la Constitución y a la legalidad vigentes". En el debate parlamentario de ese mismo partido, señaló que: "casi todas las requisiciones decretadas hasta el momento se basan en huelgas ilegales provocadas por el Gobierno, el cual primero desatiende las peticiones de los particulares y promueve la asfixia económica de la industria, negándole los precios y los créditos". El 10 de septiembre, la Contraloría insiste en que la denominada "toma" de una empresa, no autoriza la "dictación de medidas de autoridad tales como la reanudación de faenas (destinada a intervenirla), cuando esa ocupación constituye un ilícito penal". El reparo se refiere a la orden de reanudación de faenas en las industrias INSA (de neumáticos) y NYLINSA. Por último, el 13 de septiembre, la Contraloría se negó definitivamente a dar curso a las requisiciones e intervenciones de varias industrias, entre las que estaban las grandes textiles Rayonhil y Manufacturas Sumar, ordenando devolver dichas empresas a sus propietarios. El 28 de septiembre, la Contraloría devuelve a DIRINCO nuevas resoluciones de ese organismo destinadas a requisar otras indus-

trias pesqueras y textiles, afirmando que los antecedentes acompañados por dicho organismo para justificar esa medida, no acreditaban los requisitos que la ley exige. Finalmente, el gobierno decidió requisar sin apelación las 8 más grandes industrias textiles del país, utilizando un decreto de insistencia. El primero de octubre, el Senador del partido Nacional Víctor García, denuncia en el Parlamento la estatización ilegal de diversas empresas y bancos, ya sea comprados, confiscados o intervenidos hasta ese momento por el gobierno. Otro diputado de derecha, Mario Arnello, afirmó que el decreto de insistencia, utilizado por el gobierno para la requisición de empresas, era "absolutamente ilegal". En diciembre de ese mismo año (1971) el Partido Nacional presentó una nueva acusación constitucional contra el Ministro de Economía, Pedro Vuskovic, señalando que "ha hecho uso constante de la arbitrariedad, la ilegalidad, el atropello a la Constitución y a la ley, el abuso y desviación de poder, a lo largo de toda su gestión ministerial". En ese mismo mes, la Sociedad de Fomento Fabril, declara que: "Se reinicia así la acción estatificadora de empresas por un procedimiento observado por la propia Contraloría General de la República por ilegal e impuesto a través de decretos de insistencia", refiriéndose a la reciente requisición de la industria El Volcan por el Gobierno.

No obstante, los reparos de la Contraloría y de la oposición, el gobierno termina el año 1971 requisando las industrias CALAF de la provincia de Talca y FANALOZA de la localidad de Penco, provincia de Concepción. La requisición de CALAF sería rechazada por la Contraloría el 9 de febrero de 1972. Pero, antes de eso, en enero de ese año, se suman los Tribunales de Justicia a la labor de obstrucción de la Contraloría. El 4 de enero, la Corte Suprema, acogió el recurso de queja presentado por la industria textil Yarur contra la requisición, hecha por DIRINCO, de la empresa. Ese mismo día, los Tribunales habían restituido a su propietario el diario "La Mañana", ocupado por sus trabajadores que solicitaban la intervención de esa empresa por el gobierno.

El 18 de enero, la Contraloría se niega a tramitar un decreto de reanudación de faenas en la industria GASCO, que se mantenía en huelga desde el 11 de enero. El gobierno se ve obligado, días después, a ordenar la reanudación de faenas mediante un decreto de insistencia. A fines de ese mes, el Contralor insiste respecto a esa compañía distribuidora y productora de gas, que: "el ilícito penal que representa la usurpación de locales no es fundamento suficiente para dar por acreditado el hecho de la paralización de las actividades vitales para la economía nacional", que justificarían una requisición.

El Partido de Izquierda Radical (PIR), al incorporarse a comienzos del 72 con dos ministerios al Gobierno, realiza una declaración acerca de cómo debiera conducirse la política de la UP, señalando, entre otras cosas: "Creemos que, en ningún caso, los conflictos laborales pueden utilizarse para transferir al área social o mixta empresas que no figuren en la determinación legal que exigimos"... El incumplimiento de éstas y otras exigencias, le serviría de pretexto a este partido más adelante para retirarse del Gobierno y plegarse a la oposición, a instancias de la CIA norteamericana, como lo demuestra el Informe al respecto del Senado de EE.UU.

Refiriéndose a una autorización del Consejo Ejecutivo de la CORFO, para que ese organismo de gobierno abriera un poder comprador destinado a adquirir las acciones de 91 empresas que se descaba estatizar, la Sociedad de Fomento Fabril, declara a través de uno de sus voceros: "No nos llamó la atención esta determinación de la CORFO, que demuestra una vez más el propósito del Gobierno de utilizar medios extralegales para constituir el área social de la economía". Todas las presiones, pues, confluían a forzar al gobierno a someter al Parlamento su proyecto de estatizaciones para allí liquidarlo a través de la mayoría de oposición existente. A este mismo objetivo tendería más adelante, la Reforma Constitucional presentada por la Democracia Cristiana, destinada a delimitar las tres áreas de la economía, pieza clave en el plan destinado a mostrar la "ilegalidad" e "ilegitimidad" del gobierno y justificar los llamados abiertos a su derrocamiento por las Fuerzas Armadas.

El 14 de febrero de 1972, la Contraloría devuelve sin tramitar la resolución de DIRINCO que requirió la industria El Volcan, por cuanto dicha institución no pudo acreditar la legalidad de esta medida ni el supuesto desabastecimiento de volcánita, yeso y aislán, además de confirmarse que el paro ilegal surgido en la empresa era provocado expresamente para lograr su requisición, señalan los considerandos del rechazo.

A fines de febrero del 72, los dirigentes de la SOFOFA dirigen una carta al Presidente Allende, en la que le señalan que "el método de traspaso de empresas mediante la apertura de un poder comprador por parte de la CORFO, y la negociación de ésta con los propietarios de las acciones, es irracional e intrínsecamente injusta". Es decir, se pretende negar al gobierno el derecho que posee cualquier particular de comprar acciones de una empresa cotizadas en el mercado. Esta prohibición quedó estampada como una severa e injusta restricción a las actividades del gobierno, en la Reforma Constitucional de las Tres Áreas de la Economía presentada por la PC. En marzo recrudece la tensión en el Parlamento, contra el sistema de requisiciones e intervenciones. El jefe de los parlamentarios demócrata-cristianos, Luís Pareto, señala: "Creo que requisar e intervenir industrias que están siendo afectadas por la reforma constitucional, para que ellas sean expropiadas por la ley de la República, es un desafío al Congreso y una demostración más de la prepotencia y falta de respeto al señor Vuskovic" (se refiere al Ministro de Economía). Por su parte, Domingo Godoy, diputado del Partido Nacional, agregó: "El Presidente de la República tiene la palabra: si está de acuerdo con la actuación de su Secretario de Estado, deberá éste presentar su renuncia. Si no lo hace, cabe pensar que el Presidente ha sido sobrepasado por los comunistas, o que realmente está de acuerdo con esta política arbitraria del Ministro, a pesar de sus declaraciones en contrario". Entretanto, la SOFOFA, a través de su Presidente, Orlando Saenz, vuelve a insistir: "El Gobierno no está siguiendo los cauces legales y democráticos en el traspaso de industrias al área social. Está usando las requisiciones con ánimo de expropiación, lo que significa una situación ilegal". Prosiguiendo esta campaña destinada a crear la imagen en la opinión pública de una actuación ilegal del Gobierno, que en realidad se ceñía escrupulosamente a sus atribuciones legales, el Partido de Oposición Democracia Radical, declara: "Mientras se encuentra en poder del Gobierno el Proyecto de Reforma Constitucional (de las tres áreas económicas) el Ministro Vuskovic, como grotesca burla al Parlamento, ha procedido a continuar con su actitud de atropello, colocando al poder legislativo en una situación ridícula nacional e internacionalmente". A su vez, Rafael Cumsille, Presidente de la Confederación Nacional del Comercio Detallista Establecido y de la Pequeña Industria, uno de los cabecillas que habría de organizar la oposición para derribar al gobierno, afirmó: "La incorporación de una empresa al área social debe hacerse con causas realmente justificadas, mediante leyes específicas, y no por la acción de métodos desconocidos en Chile, como lo hace el señor Ministro de Economía en persona, tratando de hacer creer a la población que son los trabajadores independientes de la industria y del comercio los responsables de la crítica situación de desabastecimiento en que se encuentra el país".

En medio de esta ofensiva publicitaria tendente a descalificar la conducta legal del gobierno, la Contraloría vuelve a la carga. El 17 de marzo de 1972 rechaza una vez más la requisición de la gran empresa elaboradora de cobre Madeco y el 23 de ese mes devuelve sin tramitar la resolución de requisición de la industria Ceresita. El 19 del mes siguiente, declara ilegales las resoluciones de la DIRINCO para requisar la industria "Aguas Minerales Cachantun" y las plantas alcohólicas de la "Compañía Cervecerías Unidas". A comienzos de mayo, se suma a la ofensiva contra el gobierno, el juez del Cuarto Juzgado Mayor Cuantía de Santiago, quien ordena a la DIRINCO que devuelva, en el plazo de cinco días, la industria requisada Rayon S Said a sus dueños, pagándoles indemnización de perjuicios. En el fallo se señala que DIRINCO carece de facultades para requisar industrias. Por su parte la Superintendencia de Seguros y Sociedades Anónimas, evacuó un informe en el que señala que el interventor designado por el gobierno en la industria CALAF, "carece en absoluto de facultades para asumir ninguna función en ella, porque el decreto o resolución que eventualmente lo nombraría quedó incompleto en su tramitación al ser rechazado por la Contraloría". Por último, la Contraloría, dando un nuevo paso en su escalada contra el gobierno, suspendió de sus funciones al Director de DIRINCO, Patricio Palma, por dejar sin respuesta tres oficios en que se le solicita antecedentes sobre intervenciones de empresas.

El gobierno, entretanto, continua aplicando los procedimientos condenados por la oposición. El 13 de junio de 1972, ordena a través de un decreto de insistencia firmado por el Presidente y todos los Ministros, la reanudación de faenas y la intervención de la empresa metalúrgica de línea blanca FENSA. El Contralor dió cuenta de este hecho a la

Corte Suprema de Justicia, por estar pendiente en el Séptimo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía, la investigación "de los delitos de usurpación y violación de la libertad de trabajo cometidos en FENSA". Más adelante, el propio Presidente de la República, solicitó a la Corte Suprema que el Juez del Séptimo Juzgado del Crimen, cesara sus actuaciones judiciales en relación con FENSA, las que entraban la actuación del interventor del gobierno. La Corte Suprema acordó, por la unanimidad de sus miembros, rechazar la petición del Presidente y el Juez a cargo del proceso de FENSA, inició un juicio contra el interventor por hacerse cargo de la planta que estaba a disposición del tribunal. El 26 de junio, fue encargado reo el interventor de gobierno de FENSA, por "impedir la ejecución de una providencia judicial". Más adelante, a comienzos de julio, los ejecutivos de la industria FENSA, alentados por el apoyo judicial y de la Contraloría, presentaron una demanda judicial contra el ex Ministro de Economía Pedro Vuskovic (el gobierno, discretamente, previendo la acusación constitucional en su contra, lo había reemplazado en su cargo), así como contra el interventor de la empresa, "por actuaciones dolosas que hasta el momento han provocado daños por 15 millones de escudos". Por último, el 8 de noviembre, la Contraloría devuelve sin tramitar una resolución de DIRINCO en la que se pretendía la requisación de FENSA. La prensa de oposición habla, hasta ese momento, de pérdidas hasta por más de 70 millones de escudos en dicha empresa.

En junio 29 de 1972, la Contraloría las emprende contra el intento del gobierno de dictar normas de funcionamiento del Estanco Automotriz, devolviendo el decreto del Ejecutivo porque "no se ajusta a derecho". A comienzos de julio, luego de rechazar dos decretos anteriores del Ejecutivo, la Contraloría cursa un decreto de insistencia al gobierno, destinado a reglamentar el Estanco Automotriz.

A fines de junio, la justicia, ordena el desalojo con empleo de la fuerza pública de la Industria Perlak, tomada por los trabajadores para que fuera intervenida. El mes siguiente, el Gobierno se ve obligado a enviar un nuevo decreto de insistencia para requisar varias industrias en permanente litigio con sus propietarios, entre ellas, las ya mencionadas: Madeco, Cachantun, Calaf y 2 plantas de Cervecerías Unidas.

En octubre de 1972, se realiza el paro del transporte, comercio, movilización colectiva y otros gremios profesionales y patronales, dirigido por la oposición. Dichos gremios presentan un memorándum de peticiones al gobierno. En uno de sus puntos se señala como exigencia para tramitar el paro: "devolución de los bienes requisados o intervenidos"... "más las indemnizaciones correspondientes".

Avanzando ya en su propósito de declarar la "ilegalidad" o "ilegitimidad" del gobierno, el Presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, en su discurso de apertura del año judicial 1973, califica los decretos de insistencia utilizados por el Ejecutivo, de "resquicios legales" y sostiene: "Con motivo de los diversos problemas que han traído los movimientos sociales en los últimos años, y a propósito de los casos que a esta Corte le ha correspondido rever, tanto por la vía de la queja como por otros recursos, se ha podido comprobar una suerte de ineficacia de la revisión que le corresponde a la Contraloría sobre la legalidad de los decretos que dicta el Ejecutivo, pues la representación que aquella le puede hacer se salva por un simple decreto de insistencia dictado por el mismo Ejecutivo, si bien con la firma de todos los miembros del gabinete, los que, por lo general, tienen un carácter político, y el decreto ilegal surge a su aplicación".

Más adelante, en el mismo mes de marzo, se desarrolla una aguda polémica entre el Contralor y el Ministro de Economía, a raíz del rechazo por la Contraloría del decreto del Gobierno destinado a requisar la fábrica de cemento "Bio-bio". El Ministro acusa al Contralor, de "modificar constantemente sus opiniones... y de emitir pronunciamientos que tienden a enervar la acción administrativa de la DIRINCO". El Contralor, por su parte, responde que: "La Constitución Política del Estado y sus leyes complementarias señalan claramente el campo de las atribuciones del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General. Al primero le corresponde la administración del país, la cual debe realizarse dentro de la Constitución y de la Ley. A la Contraloría por su parte, le corresponde fiscalizar a esa Administración, precisamente para que ella se desarrolle dentro de los marcos constitucionales y legales, y tiene el deber de representar aquellas actuaciones que se aparten de esos moldes. Eso es, justamente, lo que la Contraloría ha hecho, y lo que esta vez ha llamado la atención al señor Ministro. Por otra parte, concluye, ni la Constitución Política, ni ley

alguna, dan al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción ni a ningún otro, el poder de fiscalizar los actos de la Contraloría General”.

No obstante los problemas surgidos, el gobierno, vuelve a enviar a la Contraloría un decreto de insistencia el 10 de abril de 1973, al parecer el último de este tipo antes del golpe de Estado, para hacer cumplir los decretos de requisiciones rechazados por aquella.

Es preciso considerar que toda esta guerrilla de la Contraloría contra el Gobierno, no se efectuó aislada. Ella se coordina y va adquiriendo más fuerza, en conjunto con la ofensiva desencadenada desde el Parlamento; de los Tribunales de Justicia, que se opusieron sistemáticamente al Ejecutivo, en muchos otros aspectos aparte de aquel que se refiere a la requisición de empresas; con toda la actividad tendiente a fomentar la especulación y el desabastecimiento; y, con una ofensiva política, que abarca desde ataques publicitarios y actos de masas de protesta, hasta paros de actividades básicas y atentados y sabotajes a centros vitales de la economía. Incluso, en los momentos en que se produjeron los dos grandes paros del transporte por camiones, la Contraloría, rechazó el decreto del Gobierno destinado a requisar esos medios de transporte en paro legal, pretextando que “las requisiciones masivas carecen de la individualización específica del objeto requisado”. Hay que dejar constancia que la Contraloría, jamás tuvo escrúpulos legalistas respecto a otros gobiernos burgueses.

No cabe duda que lo que permitió entabrar, mediante una hostilización permanente, por parte de la Contraloría y otras instituciones, los planes del Gobierno, es precisamente, la ambigüedad y la debilidad de la política reformista de éste, en contradicción con sus ambiciosos proyectos destinados a privar de sus medios de producción a los sectores dominantes de clase. Las acciones de hecho del Gobierno, por ejemplo, algunas tomas de empresas o conflictos suscitados como pretexto para las requisiciones, fueron siempre débiles y parciales; por no decir hipócritas, lo que permitía a la oposición a través de sus medios publicitarios, exhibir la inconsecuencia del Gobierno con respecto al legalismo estricto que decía profesar. No se trataba de un movimiento de masas abierto y vigoroso, destinado a aplastar las maniobras que los sectores reaccionarios efectuaban aprovechando las leyes e instituciones a su servicio y bajo su control, sino de algunas movilizaciones restringidas y tímidas, destinadas a servir de pretexto para la utilización de los “resquicios legales”. Por otro lado, las leyes e instituciones, creadas por los sectores explotadores para servir sus intereses y manejadas por ellos, servían de bien poco como instrumento para desposeerlos y, por lo mismo, el Gobierno, al actuar dentro de la legalidad, debía exhibir su debilidad utilizando algunos decretos inadecuados y anacrónicos y apelando a cada paso a medidas de excepción, como es el caso de los decretos de insistencia. De allí que la Contraloría, que temiendo al comienzo del Gobierno una real movilización popular, dejó pasar varios decretos de requisición sin objetarlos, “pasado el primer momento de sorpresa y desconcierto”, como diría posteriormente la Junta Militar en sus escritos contra el Gobierno Allendista, comenzó a rechazar sistemáticamente esos decretos y, en conjunto con los Tribunales, a entabrar su aplicación.

CAPITULO X

LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES CHILENAS

El Ejército chileno está dotado de una fuerte disciplina interna. Hace más o menos un siglo fue reorganizado de acuerdo a los cánones del ejército prusiano. Incluso su uniforme, hoy en día, recuerda el uniforme del ejército nazi. La marina chilena, tradicionalmente ha sufrido la influencia británica. La aviación, por su parte, de más reciente data, ha sido organizada siguiendo el modelo de la fuerza aérea norteamericana. No obstante, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, la influencia de los EE.UU., sobre las FF.AA. chilenas, ha sido decisiva.

1.- Los planes yanquis de militarización de América Latina.

La encuesta realizada por Roy Hansen, establece que ya en 1965 (esto después se incrementó considerablemente), el 55 por ciento de los oficiales superiores del Ejército chileno habían pasado como promedio más de un año en EE.UU. o en la zona del Canal de Panamá, donde se efectúan los cursos anti-guerrilla. Entre 1950 y 1965, más de 2 mil oficiales de las FF.AA. chilenas fueron entrenados en diversos lugares bajo control norteamericano. Por otra parte, entre 1966 y 1973, tan sólo a Panamá, han concurrido 1182 oficiales chilenos.

En lo que respecta a la ayuda militar y venta de armas, Chile ocupa, entre 1953 y 1966, el segundo lugar, después de Brasil, país con casi 100 millones de habitantes, en el monto de esos suministros bélicos. Es posible formarse una idea de su magnitud, observando los cuadros siguientes contenidos en el Informe de la Comisión Church:

TABLE III.- MILITARY ASSISTANCE

FISCAL YEAR	PROGRAMED	DELIVERED
1966.	8.806.000	8.366.000
1967.	4.143.000	4.766.000
1968.	1.801.000	7.507.000
1969.	784.000	2.662.000
1970.	852.000	1.966.000
1971.	698.000	1.033.000
1972.	870.000	2.227.000
1973.	941.000	918.000
1974.	912.000	619.000

TABLE IV.- MILITARY SALES I

FISCAL YEAR	ORDERS	DELIVERED
1966.	1.057.000	1.490.000
1967.	2.559.000	1.690.000
1968.	4.077.000	2.100.000
1969.	1.676.000	2.147.000
1970.	7.503.000	9.145.000
1971.	2.886.000	2.958.000
1972.	6.238.000	4.583.000
1973.	14.972.000	2.242.000
1974.	76.120.000	4.860.000

1) Figures are from a Department of Defense response to a Senate Select Committee document request and are unclassified.

La ayuda no se suspende ni tampoco las ventas de armamentos a las FF.AA. chilenas (121) durante el gobierno de Allende, pese a las amenazas hechas por el embajador Korry, demostrando la confianza que el gobierno norteamericano tiene en sus Altos Mandos.

La preocupación del gobierno de EE.UU., por las fuerzas armadas latinoamericanas se ha intensificado considerablemente, desde que Rockefeller las considera como el más seguro sustituto de los partidos políticos en los países de América Latina. Ya en 1964, el general Robert J. Wood, Director de Asistencia Militar del Departamento de Defensa de EE. UU., señalaba: "Hay en ejecución un programa de Seguridad para la Alianza para el Progreso... que tiene como objetivo fundamental un liderazgo militar latinoamericano". (122) Estos conceptos están ya contenidos en el documento elaborado en 1963; por el Departamento de Defensa de los EE.UU.; el cual definiendo los objetivos del Pacto de Ayuda Militar (PAM), sostenía: "El PAM también contribuye a los objetivos políticos de los Estados Unidos a través de sus programas de entrenamiento que traen a este país a muchos líderes militares extranjeros... no sólo sirve para mejorar la capacidad técnica del personal militar, sino también para exponerlos a los requerimientos de un responsable liderazgo militar en una sociedad contemporánea" (123) ¿A qué obedece este deseo del gobierno yanqui de preparar un "liderazgo militar" en América Latina? El Secretario de Defensa de EE.UU., Melvin R. Laid, lo definió ante el Congreso de su país, el 3 de junio de 1969: "El PAM hará cuanto pueda para asegurar que todo dólar invertido en ayuda donada tendrá su más efectivo uso en apoyo de la política exterior y la seguridad de los Estados Unidos".

Estos contactos entre el Pentágono y las FF.AA. chilenas, lejos de aminorarse durante el gobierno de Allende se intensificaron. De los 21 vuelos logísticos que realizó la Fuerza Aérea Chilena al exterior, todos ellos fueron hechos a Estados Unidos. En este mismo año y hasta el 25 de mayo, los Altos Mandos de las FF.AA. de Chile, fueron visitados por un almirante, un contraalmirante de la Marina de los EE.UU., un general del ejército y un general del aire de dicho país, responsables del Comando Sur. En la Escuela Militar y en la Academia Naval de Playa Ancha en Valparaíso, participaron en cursos de contenido anti-comunista, miembros de la Misión Militar Norteamericana, como "profesores invitados". Estos son apenas ejemplos muy parciales del vínculo estrecho y permanente que existe entre el Pentágono y los Altos Mandos latinoamericanos. El centro de esa influencia es el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU., situado en el Canal de Panamá. La crónica aparecida en "Le Nouvel Observator" de octubre de 1973, da una idea de esos vínculos. Allí se expresa: "Los panameños lo llaman el muro de la vergüenza. Es la barrera de alambre y rejas que separa el universo sudamericano de la 'Zona del Canal', bajo jurisdicción norteamericana. Tras el tejido de alambre reina el american way of life. Enormes edificios albergan los servicios de un organismo que hoy hace temblar a América Latina: el Southern Command. Su última victoria: Chile... El Southern Command es al mismo tiempo una central de información, una 'universidad militar', pluridisciplinaria, y una base operacional. En la escuela antiguerrillera, miles de oficiales, suboficiales latinoamericanos se entrenan para la guerra contra la subversión. Los oficiales reciben una formación técnica completa en las diversas escuelas militares diseminadas por la Zona del Canal: Escuela de Telecomunicaciones, Escuela de Estado Mayor, Escuela de Aviación, etc. Construcciones subterráneas, locales excavados en las rocas alojan el centro neurálgico de un sistema de comunicaciones que cubre todo el continente... Aquí, los responsables norteamericanos se encuentran en contacto directo; por teléfono o por teletipo, con sus responsables instalados en todas las capitales sudamericanas donde su papel es más importante que el de los embajadores norteamericanos 'oficiales'. Una red aérea se superpone a las telecomunicaciones. Para trasladarse a Río, Santiago, etc., los agentes civiles y los 'alumnos' militares del Southern Command disponen de sus propios aviones, de sus propios aeropuertos... La creación del centro se remonta a los comienzos de la década de 1960. Significa una opción estratégica realizada por Washington, los norteamericanos decidieron jugar la carta de los militares... En las Escuelas Militares de la Zona de Panamá nació un mito: el de la 'solidaridad' de los soldados sudamericanos. La acción psicológica dió excelentes resultados. Tema: 'tenemos las mismas preocupaciones, somos patriotas, queremos reformas, y tenemos un enemigo común, el comunismo'. Entre los oficiales y suboficiales católicos de los ejércitos del Sur, generalmente provenientes de las clases medias, estas fórmulas simplistas

bastaban casi siempre para cimentar una conciencia política elemental. 35 mil de ellos recibieron las enseñanzas del Southern Command. Formaban los cuadros de los ejércitos que tomaron el poder en Brasil, en Bolivia, en Chile, etc.". Para corroborar lo anterior con un sólo ejemplo entre muchos: Pinochet, estuvo en Fort Leavenworth en 1955, en el Southern Command en 1956 y, en ese mismo año, en la Misión Militar de las FF.AA. chilenas en Washington.

Es fácil imaginarse el impacto y la influencia de esos contactos y vínculos de los militares chilenos con las FF.AA. norteamericanas, así como sus consecuencias en lo ocurrido, si se toma en cuenta el relativo abandono en que los sectores dominantes tenían en Chile a las FF.AA. En efecto, los gobiernos que antecedieron a Allende, dieron por descontada la fidelidad de las FF.AA., a sus intereses y partieron de la base de la solidez del espíritu profesional con que ellas los defendían. Como por otra parte, dada la fuerte influencia de un partido "comunista" conciliador y legalista, no enfrentaban una insurgencia de masas poderosas, no existía una preocupación muy intensa por incrementar el presupuesto militar. Normalmente, prestaban un mejor servicio para frenar las luchas populares los burócratas sindicales y los oportunistas políticos, que las FF.AA. Para la generalidad de los momentos difíciles, de luchas más agudas, bastaba la acción del Cuerpo de Carabineros, organización bastante bien armada para sus funciones y altamente disciplinada en Chile. Las remuneraciones del personal de las FF.AA., por su parte, correspondía a este papel de segundo orden que le asignaban las clases dominantes. A todo esto, como fuente de resentimientos, que explican aunque sólo de un modo muy parcial y secundario, la brutalidad de que han hecho gala los militares después de tomar el poder y su tendencia a controlarlo todo, se suma al desprecio que en general se sentía por ellos en la sociedad chilena. Los uniformados eran, en general, mirados en menos en especial en la clase alta. La carrera misma era sinónimo de fracaso en los estudios e incapacidad de obtener un título profesional. Muchos jóvenes eran incorporados a las escuelas militares, como un castigo por su mala conducta en las escuelas civiles y por sus bajos resultados en los estudios. A todo esto, se agrega la frustración de quienes han seguido la carrera de las armas y no las han utilizado, como no sea en las ocasiones en que las fuerzas policiales no han bastado para masacrar a los trabajadores, en casi 100 años.

Con razón el estudio de Roy Hansen, auspiciado por la CIA en 1965, sostiene: "Se ha demostrado que el ejército chileno es una organización en declinación. Esta declinación se reflejaba no solamente en su presupuesto, nivel de crecimiento y deterioro técnico, sino también en el menguante prestigio de la carrera (militar) y el subsiguiente ensanchamiento de su base social de reclutamiento. Hemos, también, mostrado —agrega— que el cuerpo de oficiales está altamente consciente de este declinamiento y sus implicancias para ellos mismos, su profesión y sus metas como institución". Y comenta: "La declinación militar inevitablemente genera hostilidad y resentimientos, especialmente hacia las instituciones políticas, y así, actúa como un incentivo para participar en política". (124).

La actitud de los sectores dominantes de negar toda participación a los militares en el aparato estatal y más aún, a considerarlos incapaces para esas funciones, no sólo reforzaba esa incapacidad que era un hecho real, sino alimentaba, asimismo, el resentimiento de los uniformados. El mismo Frei, planteaba como una de las razones de la reticencia a intervenir de las FF.AA., en los comienzos del gobierno Allende, el que "los militares no tienen ningún entrenamiento o formación para la administración pública, a diferencia de los militares de otros países de Sudamérica, y son muy conscientes de ello". Es, efectivamente, una de las razones por las que se postergó el golpe militar: querían prepararse para gobernar y no seguir siendo simples comparsas de los políticos civiles, aún cuando fueran de derecha.

No habrían de pasar muchos años para que se confirmaran las predicciones del estudio de la CIA ya mencionado, respecto a los apetitos frustrados de los militares. En 1969, a fines del gobierno de Frei, surgiría el movimiento del que ya hemos hablado ("el Tacnazo"), dirigido por Viaux. Sin duda que la CIA acertó al respecto, no sólo porque contó con todas las facilidades para su investigación, sino a causa de que, tanto esa central como el Pentágono, trabajaban ya activamente para que las FF.AA. chilenas comenzaran a ejercer, como en otros países, un papel predominante en la política chilena, de acuerdo a las reco-

mendaciones del Informe Rockefeller. "Nosotros estamos aquí —diría Viaux al hacerse fuerte en el regimiento de Tacna después de ser llamado a retiro— para tratar de salvar al ejército del derrumbe como institución... y si las fuerzas armadas se derrumban, se derrumba la patria". El Mayor Arturo Marshall, que habría de jugar más adelante un importante papel en la organización de los grupos fascistas durante el gobierno de Allende, se había negado a concurrir con su unidad al Tedeum de Fiestas Patrias, por motivos semejantes a los que esgrimiría pocos días después, Viaux. Fue dado de baja por ello, enviando luego un oficio al Comandante en Jefe como "descargo" por su acción, en el que expresa, entre otras cosas, que existe en relación con las FF.AA., "pérdida del respeto debido a sus integrantes, a pesar de las protestas hipócritas de cariño, medallas y condecoraciones, de quienes en el fondo nos consideran siempre solamente como un mal necesario y no una garantía de solidez nacional". Y reclama: "Necesidad de realización efectiva de nuestra carrera con posibilidades reales para todos los que se mantienen en una línea de corrección y cumplimiento del deber; necesidad de justicia en las remuneraciones, que deben ser niveladas con responsabilidades a otros niveles públicos; necesidad de solución de la falta de elementos de instrucción, de equipos ineficientes, de armamento, etc.". Y agrega: "Es necesario advertir que el personal militar en todos los grados está cansado que como institución no estamos a la altura de la sagrada misión que nos corresponde cumplir, cansados de promesas insatisfechas, cansados de la inoperancia administrativa a la que se ven todos enfrentados por causa del sistema". En relación a los partidos políticos señala: "Desconfiamos absolutamente de ellos, como la mayoría del país. La ceguera mental que los invade impide que nadie de nosotros les confíe sus anhelos. Varias veces, sin embargo, fuimos tentados, por varios lados, en el transcurso de la formación del movimiento, para desviarlos en uno u otro sentido".

Obviamente, la CIA y, en especial, el Pentágono, trabajaban activamente fomentando ese resentimiento, que hacía proporcionalmente más importante que la preocupación de los gobiernos de Chile por las FF.AA., la ayuda, la valoración y el entrenamiento que recibían de EE.UU. Era allí, en función de los proyectos represivos destinados a mantener una firme dominación sobre América Latina, luego de fracasados los planes reformistas de la Alianza para el Progreso, donde los militares chilenos se sentían verdaderamente estimados en la importancia que merecían. El golpe militar en Chile, por lo tanto, y en esto al parecer se equivocaron incluso los políticos de la derecha, si bien fue hecho al servicio de sus intereses reaccionarios; responde a una política global del imperialismo de militarización de los gobiernos del continente. El resentimiento de los militares chilenos, fue un excelente caldo de cultivo para el cumplimiento de estos planes, que se manifiestan, asimismo, hoy día en Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil y Paraguay. Es posible que en algunos de esos países se vuelva a gobiernos civiles, pero, las FF.AA., mientras no sean destruidas por el pueblo, no serán más un simple instrumento de los políticos civiles, sino, que, a la inversa, serán estos el instrumento transitorio de las FF.AA.

La instauración en América Latina de esta nueva política del imperialismo norteamericano, explica muchas de las características (sorprendentes incluso para sus promotores civiles) del golpe de Estado en Chile. Explica la reticencia, pese a la torpe prisa inicial de Nixon, para no dejarse arrastrar por los políticos civiles a aventuras y la decisión, pese a la suspicacia de las fuerzas de derecha, a participar en todas las oportunidades que les ofreció el gobierno de Allende, para formar a sus cuadros en las empresas e instituciones estatales y en los propios ministerios; explica la eliminación de la vida chilena de todos los partidos políticos y la tendencia a instalar militares en servicio o jubilados, en todos los cargos claves; explica, la intensa campaña que realiza la Junta Militar en todos los ámbitos, desde la escuela hasta los medios publicitarios de masas, para crear conciencia de la importancia de las FF.AA.; explica, por último, en gran medida, la brutalidad de la represión, destinada a imponer una larga dominación militar esforzándose por suprimir cualquier germen de resistencia.

El carácter reaccionario de los Altos Mandos de las FF.AA. chilenas y su disposición a empalmar con quienes siempre los halagaron, los apoyaron y los adoctrinaron, mientras las fuerzas políticas dominantes los despreciaban, es decir, a servir los planes de dominación del continente por el imperialismo norteamericano, explica, también, el fracaso del

gobierno Allende para ganarse siquiera a un sector importante de las FF.AA. Los muchos esfuerzos que hizo en este sentido, con la evidente ventaja de que sus antecesores no lo habían hecho, llegaron demasiado tarde. Había quienes llevaban decenios trabajando entre las FF.AA., y quienes les ofrecían más que una simple participación en un gobierno civil: les ofrecían, directamente, tomar en sus manos el gobierno. Más aún, el gobierno de Allende, aparecía en franca oposición con esos, sus protectores de tantos años del Pentágono. Por eso, de nada valieron los espectaculares aumentos de sueldos a las FF.AA.; el incremento del presupuesto militar; los planes de viviendas para los uniformados; la importante participación que se les otorgó en las empresas, reparticiones públicas y ministerios; los elogios y halagos públicos a sus integrantes. La suerte ya estaba hechada de antemano, con el fracaso de la Alianza para el Progreso, el más grande esfuerzo emprendido de engaño político a las masas populares. Lenin, señala que los secotres reaccionarios utilizan contra el pueblo: "el dulce y el látigo", es decir, el engaño y la represión. Al parecer, para América Latina, ha pasado el momento "del dulce" y sólo resta "el látigo" esgrimido por los militares.

2.- El prontuario represivo de las FF. AA. chilenas.

A las fuerzas armadas reaccionarias sólo es posible oponerles el pueblo armado. De hecho su papel esencial en el Estado burgués consiste en impedir que el pueblo se sacuda de encima la explotación mediante el único "argumento" que entienden sus opresores: la violencia revolucionaria. No es el pueblo quien busca o quien ama la violencia. El pueblo la sufre en forma permanente y cotidiana. "La necesidad de educar sistemáticamente a las masas en ésta, precisamente en esta idea de la revolución violenta -señala Lenin- es algo básico en toda la doctrina de Marx y Engels" (125). El sólo hecho de la renuncia a este principio básico del marxismo, por parte de los falsos dirigentes "comunistas" del P"C", debiera ser suficiente hasta para los más desprevenidos, para comprender que ellos no buscan la liberación del pueblo, sino asociarse o sustituir a los antiguos explotadores. En función de estos propósitos ocultos, es que no pueden aceptar la destrucción del ejército burgués y sólo pueden aspirar a conquistarlo, convenciendo a sus jefes, que ellos no son más que socios o continuadores de los antiguos reaccionarios. Las alabanzas, por lo tanto, de la dirección del P"C" a las FF.AA., no son una muestra de ingenuidad por su parte. Nosotros seríamos los ingenuos si creyéramos tal cosa. Son tan sinceras como las de cualquier otro sector reaccionario y, por lo mismo, van más allá de lo que el pueblo padezca bajo su opresión. Es por eso, que prosiguen hoy día, pese al terrible exterminio que han realizado esas FF.AA. contra nuestro pueblo. Más aún, fueron preparatorias de ese exterminio anunciado por los verdaderos marxistas, en la medida en que sembraron, sistemáticamente, una confianza ciega en ellas.

El 19 de septiembre de 1970, quince días después de elegido Allende, el diario "El Siglo", órgano oficial del P"C", afirma: "No hay hechos a lo largo de nuestra historia que empañen gravemente la idea de unas fuerzas armadas al servicio de la libertad, la democracia y la libre decisión del pueblo chileno... El ejército fundado por O'Higgins, no podría jamás dirigir sus fuegos contra el pueblo. Sería necesario negarse a sí mismo. Por el contrario. Su razón de ser es convertirse en garantía de que la voluntad popular prevalezca sobre los intereses bastardos, sobre el antipatriotismo, sobre la mezquindad de quienes confunden la patria con sus intereses". Afirmaciones como ésta, no casuales ni esporádicas, sino, sistemáticas, propaladas casi a diario, antes, durante e, incluso, ahora, después de la caída del gobierno de Allende, no sólo constituyen una abjuración completa de principios básicos del marxismo (a esto ya nos tienen acostumbrados), sino, por lo que toca a Chile, son una burla sangrienta y una ofensa a los miles y miles de trabajadores masacrados por las FF.AA., desde que existe como nación independiente. Una tergiversación tan cínica y descarada de la historia de nuestro país no se explica por el simple deseo de adular a los militares, que bien saben lo que han hecho, pues ese es su oficio. Sólo se explica por el propósito de mostrarle a las FF.AA. y a los reaccionarios que estas defienden su disposición a cooperar con ellas, desarmando ideológicamente al pueblo para aminorar sus problemas cuando deban reprimirlo.

Un breve recuento de lo obrado por las FF.AA., y policiales, desde comienzos del presente siglo hasta antes del golpe del 11 de septiembre del 73, es suficiente para mostrar la magnitud de la falsificación que pusieron en obra los falsos "comunistas" pro-soviéticos en Chile, en su intento de ser admitidos como socios en el sistema de explotación vigente.

A comienzos de siglo, en el año 1903, son masacrados por las tropas 40 obreros portuarios de Valparaíso, a raíz de una huelga de más de un mes realizada por reivindicaciones económicas.

En 1905, son ultimados a bala y a golpes de sable numerosos obreros que realizaban un mitin, dejando, así mismo, un saldo de numerosos heridos.

En 1906, la marinería del buque de guerra "Blanco Encalada", en colaboración con la guardia blanca reaccionaria llamada "Guardia de Honor", mataron a decenas de trabajadores en el Puerto de Antofagasta (al norte del país), por el "delito" de realizar una concentración.

En 1907, en el recinto de la escuela de Santa María de la ciudad nortina de Iquique, se realiza una de las más brutales masacres (al menos hasta ese momento) de la historia del proletariado chileno (los indígenas habían sido exterminados por decenas de miles por los

conquistadores españoles). Los trabajadores de las oficinas salitreras, no sólo eran explotados al máximo por las empresas imperialistas, sino, además, estafados por ellas. No se les pagaba en dinero, sino por medio de fichas-salario emitidas por las compañías. Estas fichas debían ser gastadas en almacenes pertenecientes a las mismas empresas imperialistas. En dichos almacenes, no sólo se cobraba elevadísimos precios, sino que, se les robaba en el peso y en las medidas de los artículos que debían adquirir en ellos. Para protestar contra esas formas extremas de arbitrariedad, los trabajadores salitreros realizaron una marcha hacia Iquique. Sólo pedían el derecho a que entraran otros comerciantes en la zona y la utilización obligatoria de pesos y medidas en los almacenes de la compañía. Una vez que se agruparon en la Escuela Santa María, las tropas utilizaron ametralladoras para disparar contra la multitud de obreros y sus familiares allí concentrados. Los cañones de tres barcos de guerra apuntaban contra la ciudad; esta fué patrullada por el Ejército y la Marina; los regimientos locales fueron reforzados con otros trasladados de Copiapó, Antofagasta, Tacna y Talca. La narración del propio general Silva Renard, encargado de la masacre, es el testimonio más elocuente. Dicho informe, salió publicado en El Mercurio de Antofagasta del 22 de diciembre de 1907 y señala: "Convencido que no era posible esperar más tiempo sin comprometer el respeto y el prestigio de las autoridades y de la fuerza pública, penetrado también de la necesidad de dominar la rebelión antes que terminase el día, ordené a las 3,45 pm. una descarga por un piquete del regimiento O'Higgins hacia la azotea mencionada y por un piquete de marineros situado en la calle Lautaro hacia la puerta de la escuela, donde estaban los huelguistas más rebeldes y exaltados.

A esta descarga se respondió con tiros de revolver y aún de rifles, que hirieron a tres soldados y a dos marineros y mataron a dos caballos de granaderos. Entonces ordené dos descargas más y fuego de ametralladoras con puntería fija hacia la azotea donde vociferaba el Comité entre banderas y toques de corneta. Hechas las descargas y a ese fuego de ametralladoras que no duraría sino treinta segundos, la muchedumbre se rindió". En esos "treinta segundos", fueron asesinados "3 mil 500 trabajadores y restaron miles y miles de heridos".

En 1919. las FF. AA., asesinan a numerosos obreros de los frigoríficos de la austral, provincia de Magallanes, a raíz de una manifestación efectuada en la ciudad de Puerto Natales. Al año siguiente, en esa misma zona, las autoridades regionales del gobierno prenden fuego, en los momentos en que se realizaba una concentración en su interior, al local de la Federación Obrera de Chile. (FOCH). No contentos con eso, balean a los obreros que lo gran escapar de las llamas.

En 1921, el escenario de la masacre, es nuevamente la pampa salitrera. Había allí en ese año alrededor de 8 mil cesantes. Pese a ello, las compañías salitreras tomaron la determinación de cerrar la planta de salitre San Gregorio, en la que trabajaban cerca de tres mil personas. El propio presidente de la República, Arturo Alessandri, era uno de los accionistas de esa empresa. Ante la amenaza de cesantía, los trabajadores de San Gregorio se movilizaron con el apoyo de la FOCH. Sólo pedían indemnización por los despidos anunciados, pasajes para viajar al sur a casa de sus familiares mientras encontraban trabajo y la reapertura de las pulperías, cerradas para obligarlos a marcharse. Para discutir dichas peticiones con los patrones, resolvieron marchar hacia las oficinas de la compañía. Al aproximarse a ellas, fueron asesinados 100 obreros. No satisfechos con ésto, al día siguiente es llevado a San Gregorio el regimiento Esmeralda, penetrando la soldadesca al hospital donde estaban los heridos para destrozarles la cabeza a culatazos. Luego, se dedicaron a una verdadera cacería de los que habían logrado huir, matando a otro centenar. Otros muchos fueron conducidos, amarrados con alambres, para ser torturados en el regimiento Esmeralda de Antofagasta.

En 1925, lo que constituye un testimonio de que las cosas no habían cambiado en casi 20 años, los obreros de las plantas salitreras de Pontevedra y La Coruña, se ven obligados a levantar peticiones casi iguales a las que motivaron la masacre de 1907. En junio de 1925, el gobierno de Arturo Alessandri y las empresas salitreras a las cuales se habían sumado ya capitales yankis, tomaron diversas medidas represivas contra los trabajadores. Clausuraron sus periódicos, allanaron sus domicilios, encarcelaron a sus dirigentes envián-

dolos a la zona sur del país y suprimieron el derecho de reunión. Como protesta, los obreros, realizaron un paro en cerca de 100 empresas salitreras. De inmediato se envió a la pampa para reprimir a los obreros, tropas provistas de ametralladoras e incluso cañones. Se realizó el desembarco del crucero O'Higgins y del destructor Lynch. La matanza se inició en las oficinas del Alto San Antonio. La masa inermemente huyó de la oficina salitrera de La Coruña, dejando numerosos muertos y heridos en el camino. En la planta de Pontevedra, entre tanto, se había iniciado también la masacre. En La Coruña, donde estaba el grueso de los trabajadores, fueron bombardeados los edificios con artillería pesada del batallón Rancagua y asaltados por la marinería del crucero O'Higgins. Tan sólo allí murieron unos 600 obreros. El resto se rindió cuando se les prometió perdonarles la vida. Sin embargo, la matanza prosiguió en la pampa contra los obreros desarmados. Se les obligó a cavar su propia tumba antes de asesinarlos cobardemente. Otros muchos fueron llevados al crucero O'Higgins y fondeados en alta mar. Otros, por último, fueron asesinados en el velódromo de Cavancha donde habían buscado refugio. La matanza sistemática duró más de dos meses, con un saldo de varios miles de muertos.

En 1928, el coronel Carlos Ibañez, Ministro de Guerra que había dirigido la matanza de La Coruña y Pontevedra, en función de sus "méritos" al servicio de los reaccionarios, ocupó la Presidencia de la República. En el interior del regimiento Copiapó hizo matar a más de 100 mineros. Numerosos opositores al gobierno fueron fondeados en alta mar.

En 1934, bajo la segunda presidencia de Arturo Alessandri, se comenzó a desalojar de sus tierras en beneficio de los latifundistas, a los campesinos de la región del Alto Bío-Bío. El problema se había originado en 1926, cuando el gobierno confirmó a un terrateniente el derecho de propiedad sobre 175.000 hectáreas en las que vivían numerosos colonos. Como los campesinos se resistieron a marcharse de tierras en las que habían vivido por generaciones, se les atacó con fuerzas militares y policiales. Alrededor de 500 campesinos rebeldes fueron apresados, se les ató a las cinchas de los caballos para conducirlos a Temuco y Concepción, ciudades situadas a cientos de kilómetros del lugar. Del total de prisioneros sólo 23 llegaron vivos a Temuco. Y los prisioneros eran sólo los sobrevivientes de aquellos que fueron muertos en sus propias tierras.

Bajo la presidencia de González Videla (1946-1952), continúan los asesinatos de trabajadores y se instaura una dictadura legal en la que, con el concurso de las fuerzas represivas, decenas de miles de personas son encarceladas, torturadas, expulsadas de sus trabajos, enviadas a campos de concentración y privadas de sus derechos ciudadanos.

Bajo la segunda presidencia de Ibañez, (1952-1958), se continúa aplicando las leyes represivas del gobierno anterior. El 2 de Abril de 1957, como respuesta a sostenidas manifestaciones de trabajadores y estudiantes, en oposición a las alzas de precios y a la "congelación" de salarios, impuesta por el organismo controlado por los norteamericanos: el Fondo Monetario Internacional, se emplea a carabineros primero, y luego a las FF.AA., contra los manifestantes. El gobierno, incluso, hace soltar a los maleantes de las cárceles para que realicen desmanes que justifiquen la masacre. Varios centenares de personas son muertas por las tropas.

Bajo la presidencia de Jorge Alessandri (1958-1964), hijo del masacrador de San Gregorio, La Coruña, Ranquil y Loquimay en el alto Bío-Bío son muertos a raíz de un paro nacional, dos obreros y decenas de ellos heridos a bala. Posteriormente, en 1962, la Fuerza Aérea ametralla a los pobladores de la población obrera "José María Caro", matando a 8 personas e hiriendo a más de 40.

Durante el gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei (1964-1970), que prometiera una "Revolución en Libertad", son atacados por la tropa los obreros en huelga de la mina de cobre El Salvador, en defensa de los intereses imperialistas. Mueren allí, no sólo trabajadores, sino también mujeres y niños. En 1969, la policía armada ataca, en la ciudad de Puerto Montt, a cerca de cien familias, por el "delito" de ocupar un sitio baldío para construir una miserable vivienda de tablas, latas y cartones. Ocho pobladores son muertos y unos 30 heridos a bala. Sus modestas casas, con todos sus enseres, son rociadas con bencina e incendiadas.

Incluso, durante el gobierno de Allende, antes del golpe de estado, caen bajo la represión obreros, estudiantes y campesinos, ya sea muertos por las fuerzas policiales o por los latifundistas. Algunos marineros que osaron oponerse a la prédica de sus oficiales en pro del golpe de estado, ante la tolerancia del gobierno, son torturados del modo más bestial,

como un preludio de lo que habrían de sufrir más adelante decenas de miles de personas. Se efectúan, al mismo tiempo, en preparación del golpe de estado, allanamientos brutales a poblaciones obreras, sindicatos, industrias y fundos, dejando un saldo de un muerto y numerosos heridos. La propia policía civil, bajo el mando de un socialista y cuyo jefe era un miembro del P“C”, detiene y tortura con saña a militantes de una fracción del propio Partido Socialista, que anhelaban preparar la lucha armada contra el golpe militar.

Este breve resumen de las masacres perpetradas hasta el baño de sangre de 1973, sólo incluye aquellas matanzas que hicieron historia y no registra a los miles de trabajadores o estudiantes, que por ser asesinados individualmente en alguna manifestación no llegaron a transformarse en una noticia de importancia. Aún así, se puede afirmar que, desde comienzos de siglo hasta antes del golpe de Estado último más de diez mil personas —fundamentalmente obreros y campesinos— han sido asesinados por las FF.AA. y policiales chilenas. Esto, en un país que sólo recientemente ha alcanzado una población de diez millones de habitantes. Si a ellos se suman los 30 o 40 mil muertos a raíz de la bárbara masacre que se inició el 11 de septiembre del 73, ese número se eleva a unas cincuenta mil personas. De la breve exposición que hemos hecho de la obra de las fuerzas represivas chilenas, se advierte que, a partir de la postguerra, la más eficiente labor de control policial y de represión legal preventiva, unida al papel de freno de las luchas populares que juegan los dirigentes de los cada vez más influyentes partidos de la izquierda tradicional, tienden a disminuir las masacres masivas de centenares de trabajadores, frecuentes en el pasado. No obstante, si se considera en qué desembocó todo ese proceso en que adquiere preeminencia el engaño por sobre la represión sangrienta: la brutal matanza hecha por Pinochet y sus secuaces, que cuadruplicó el número de víctimas de más de medio siglo, se puede advertir que, el papel represivo al servicio de los explotadores de las FF.AA y policiales, en nada ha cambiado.

Por otra parte, para calibrar en toda su dimensión el papel represivo de las FF.AA. y policiales chilenas, es preciso tomar en cuenta que sólo hemos enumerado algunas de las principales masacres de trabajadores. Habría que agregar a los centenares y centenares de miles, que han resultado heridos en esas masacres, así como a los torturados, encarcelados, despedidos de sus trabajos, enviados a campos de concentración, relegados a sitios inhóspitos, privados de sus derechos o víctimas de una “justicia” abiertamente clasista. Todo ello ha sido hecho, también, con el concurso directo del aparato armado y policial a través del cual los sectores dominantes ejercen su dictadura.

La represión que ha seguido al 11 de septiembre del 73, no sólo ha tenido la saña de quienes temen al pueblo y desean escarmentarlo largo tiempo. Es expresión también de la furia clasista y reaccionaria de los Altos Mandos y oficialidad de las FF.AA. y policiales que quisieron vengarse del modo más cruel de quienes osaron presentarlos como “progresistas” y afectos a las reformas anti-imperialistas y anti-oligárquicas. Obviamente, no desean dejar ni sombras de duda respecto de a qué lado están y al sentirse utilizados por aquellos que odiaban, se han vengado ferozmente. No son pocos los que fueron torturados brutalmente, mientras se les hacía repetir, para diversión de sus sádicos torturadores, las consignas de la Unidad Popular, como aquella: “soldado, amigo, el pueblo está contigo”.

He aquí, pues, una muestra de estas FF.AA. y policiales “constitucionalistas” y que, al decir de algunos, no exhiben hechos a “lo largo de nuestra historia que empañen gravemente la idea de unas fuerzas armadas al servicio de la libertad, la democracia y la libre decisión del pueblo chileno”.... pues, para ello, “sería necesario negarse a sí mismo”. ¿Se puede concebir falsificadores más desvergonzados de la historia del pueblo chileno? ¿Es posible inferir una mayor ofensa, a los miles y miles que han sido masacrados por las fuerzas represivas?

Una muestra más de la inescrupulosidad y del increíble cinismo con el que procedieron a fin de congraciarse con las FF.AA., se manifiesta en el hecho de que todas estas masacres fueron ampliamente publicitadas por la propia prensa del P“C”, antes de que Allende ganara la presidencia. ¿Cómo se explica entonces la amnesia posterior? Se explica, por la muy sencilla razón de que en el pasado, antes de llegar al gobierno, necesitaban difundir la historia de esas masacres, para amedrentar a los trabajadores y plegarlos a su línea pacifis-

ta y electoralista. En cambio, una vez alcanzado su objetivo electoral, necesitaban halagar a las FF.AA. y embellecerlas ante el pueblo para hacer olvidar su prontuario represivo. Como gobierno, el recordar sus masacres, los dejaba en una situación muy incómoda, ante las FF.AA. y ante el pueblo.

Pero aún hay más. Incluso hoy día, después de la monstruosa carnicería realizada por las FF.AA. y policiales chilenas, que ha horrorizado al mundo entero, los dirigentes del P“C” insisten, en una “Carta Abierta” enviada a los militares chilenos, en afirmar que la derecha: logró romper “las honrosas tradiciones de las Fuerzas Armadas...”, “arrancar a los hombres de armas de sus tareas profesionales y colocarlos al servicio de una minoría” así como, “convertir a muchos de ellos en verdugos, torturadores y carceleros”. Cabe preguntarse, entonces: si recién el 11 de septiembre de 1973, fueron “colocados” al servicio de una minoría, “arrancadas” de sus nobles tareas profesionales y “convertidas” en verdugos, torturadores y carceleros, ¿quién realizó las masacres de la Escuela Santa María, de La Coruña, de Ranquil y Lonquimay, de El Salvador, de Puerto Mott y tantas otras? ¿Quiénes han sido los que, por servir a la minoría gobernante, han torturado y encarcelado en los sucesivos gobiernos que han existido en Chile? ¿Quiénes han obligado a los trabajadores, que constituyen la inmensa mayoría del país, a soportar la explotación y la miseria en que los mantiene sumidos una ínfima minoría? ¿O es que todos estos hechos históricos pueden ser olímpicamente ignorados a voluntad en función de una posición rastretra delante de las fuerzas armadas, para hacerse perdonar por ellas?

3.- La campaña de tergiversación sobre las FF.AA. y policiales.

La sostenida campaña de alabanzas a las FF.AA., por parte de los falsos “comunistas”, es un pilar básico de su proyecto de avanzar hacia el capitalismo de Estado en alianza con las fuerzas populistas pro-yanquis. Dicho proyecto sólo podía tener una remota posibilidad de ser aceptado por dichas fuerzas e impuesto como un hecho consumado al gobierno de los EE.UU., a condición de conservar las fuerzas represivas tradicionales y de frenar toda movilización popular revolucionaria. Los resultados de dicha política son conocidos: ello condujo a una masacre aún más brutal que las habituales, la peor en la historia de Chile, enfrentada por un pueblo inerte, tanto desde el punto de vista material como ideológico.

Dicha campaña de tergiversación comienza tempranamente. El 19 de septiembre de 1970, a pocos días de la elección presidencial, el P“C” editorializa en su periódico El Siglo, señalando: “Quiénes han querido llevar a nuestras fuerzas armadas a aventuras destinadas a favorecer los intereses antipatrióticos de una clase privilegiada y minoritaria se han estrellado con las firmes convicciones de nuestros soldados de no ser jamás fuerzas pretorianas, sino fuerzas armadas profesionales, con un sentido muy claro acerca de su misión y de su papel en el quehacer común por el progreso, la soberanía y la integridad de nuestra patria... En más de una ocasión las FF.AA., han mostrado su repugnancia y su oposición a ser utilizadas en tareas represivas al servicio de un ‘status’ que las fuerzas más progresistas estaban y están empeñadas en romper”... Y concluyen señalando: “El pueblo no duda del patriotismo y del respeto y fidelidad a la Constitución de las FF.AA. Y seguirá aplaudiendo su paso por las calles, hoy y mañana”...

Un mes después se insiste en otro editorial de El Siglo, diciendo: “Chile confía, y tiene razones y derecho para hacerlo, en las FF.AA. Ellas son por muchos motivos, cauteladoras de nuestra independencia y de la normalidad de nuestra vida constitucional. Sin practicar la vida política, son garantes de la normalidad institucional de nuestro pueblo. Hombres del pueblo, por otra parte, forman su sólida base. Y el pueblo las considera integrantes de sí mismo. Esta es una apreciación justa que los hechos culminantes de nuestra historia confirman con absoluta plenitud”. (126)

Y al día siguiente, El Siglo, insiste: “En los momentos en que ese mismo pueblo se prepara para llegar al poder, para ser ejecutor de su programa y el diseñador de su futuro y del porvenir de nuestra patria, esa identificación entre los institutos armados y las fuerzas populares, cobra mayor vigencia y oportunidad.

Las FF.AA. de Chile están destinadas a ser una garantía de que el pueblo podrá dedi-

carse tranquilamente a las nobles tareas que el mismo se ha encomendado. Dueñas de un espíritu profesional y de un amplio respeto por las tareas cívicas del pueblo, ellas constituyen un obstáculo insuperable para quienes pretenden desviar el cauce normal y democrático de la vida política chilena". (127) ¡Que tal obstáculo!....

En marzo de 1971, cuando ya ha asumido el gobierno Allende, el diario del P" C" plantea:.... "el gobierno es invencible... porque cuenta con el disciplinado respaldo de los organismos armados del país".

En septiembre de 1971, a poco más de un año de la elección de Allende, El Siglo señala en su página editorial: "Hoy, las Fuerzas Armadas tienen la oportunidad entregada por el Gobierno elegido por el pueblo, y gracias al Programa de la Unidad Popular, de jugar un papel destacado en la búsqueda de un futuro venturoso para todos los chilenos y por consiguiente para la Patria.

Las FF. AA., no son un sector ciudadano ajeno al devenir histórico, a la lucha que hoy lleva el pueblo todo en conquista de su futuro.... El Gobierno del Presidente Allende, los Partidos Políticos de la Unidad Popular y otros sectores ciudadanos que forman parte de la base de sustentación política gubernamental, tienen conciencia de tales hechos. No escapa a su criterio el orgulloso carácter profesional de las Fuerzas Armadas del país. La clase obrera chilena templada en mil duros combates, representada en la acción del Gobierno, ha tendido su mano hacia el soldado y la estrecha en la seguridad de encontrar allí a un amigo fiel. El pueblo todo se entrega a la tarea de edificar el gran hogar nacional, porque sabe que su hijo, su hermano, su amigo que viste uniforme, también participa, también construye y también recibirá el beneficio de la futura sociedad.

Las Fuerzas Armadas tienen como orgulloso pendón su posición de respeto por el desarrollo político del país. Y hoy están insertos en el proceso. El pueblo chileno, los obreros y campesinos, lo saben. Por eso el aplauso de hoy será más sonoro. Y cuando 'roto' auténtico grite: '¡Viva Chile!' al paso de las tropas, estará reflejando el saludo multitudinario del chileno a sus Fuerzas Armadas". (128) Recordemos al respecto, lo que el informe del Senado norteamericano sobre la intervención de la CIA en Chile, señala, en ese mismo mes en que El Siglo realiza tales afirmaciones: "en septiembre de 1971 una nueva cadena de agentes estaba colocada y la Estación (de la CIA) estaba recibiendo casi diariamente antecedentes de nuevas conspiraciones golpistas". ¡Estos son los "amigos fieles" hacia los cuales los dirigentes del P" C" aconsejaban al pueblo "tender su mano"!

Durante todo el año 1972, en que se suceden los complotos golpistas y en que la oposición emprende ofensivas de gran magnitud para derribar al gobierno, continúan ininterrumpidamente las alabanzas de la dirección del P" C" y de sus seguidores de la UP a las FF. AA. No las incluiremos aquí para no extendernos excesivamente. En cambio, transcribiremos lo que se decía en 1973, año en que el gobierno vivía sus últimos meses y en que ya nadie ignoraba que se preparaba febrilmente un golpe de Estado en las FF. AA.

El 21 de marzo de 1973, el diario El Siglo, editorializa con motivo del Cuarenta y Un Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, el arma más ligada al imperialismo yanqui, que se destacó por su crueldad en las matanzas y torturas después del golpe de Estado, diciendo: "Orientada sólidamente a las labores profesionales la FACH ha conquistado merecidamente el afecto de toda la ciudadanía que respeta sus tradiciones, que aplaude el paso de sus unidades, de sus jefes, de su presencia total, porque ella está por entero al servicio de Chile y de todos los chilenos". Y concluye el editorialista: "Con la FACH, con el Ejército y la Marina de Chile, el país avanza con plena confianza hacia el futuro. El pueblo y las FF. AA., quieren una patria nueva sin chilenos al margen del proceso, con todos ellos en pleno goce y disfrute de la existencia". ¡Que disfrute!....

A fines de ese mismo mes aparece en el periódico mencionado un artículo firmado por Marcel Garcés, que especula sobre el "amor" de las FF. AA., por las realizaciones programáticas de la UP. Allí dice: "Fuera del gabinete ministerial del gobierno popular; las FF. AA., seguirán, sin duda, vigilantes en el cumplimiento de su misión fundamental: la defensa de la soberanía nacional y el resguardo estricto de la seguridad. Al mismo tiempo, a tenor con los tiempos modernos, seguirán ocupando un papel destacado en la política de desarrollo económico y social, laborando en conjunto con los trabajadores, con los sectores más progresistas de la sociedad. Así lo entendió el gobierno popular y no es ninguna casualidad que haya sido este gobierno y no los de la burguesía, el que haya entendido

que las FF.AA., no son elementos decorativos de la comunidad nacional, sino que tienen el derecho y el deber de participar en el gran impulso nacional por sacar al país del subdesarrollo, de la dependencia. Por el rescate y la defensa de las riquezas básicas, por el control estatal de las industrias estratégicas y por el desencadenamiento de las fuerzas productivas atrapadas en la telaraña del latifundio, de los monopolios y de las oligarquías bancarias y financieras privadas.

Fuerzas Armadas y pueblo -concluye el editorialista- no son sectores opuestos en la comunidad nacional. Están consustanciados en el desafío histórico del progreso, de la verdadera liberación nacional" (129). Lo que está claro para todos hoy es que, lejos de cumplirse estos anuncios ilusos y mentirosos, los Altos Mandos de las FF.AA., no han hecho otra cosa después del golpe de Estado, que devolver a "la telaraña del latifundio, de los monopolios y de las oligarquías bancarias y financieras", todo aquello que les había sido expropiado por el gobierno anterior, así como intensificar la dependencia del país respecto al imperialismo norteamericano.

El 20 de abril de 1973, El Siglo, editorializa planteando que: "Está en marcha una vasta conspiración reaccionaria contra el pueblo de Chile, sus organizaciones sociales, sindicales y políticas, su gobierno y, en síntesis, contra el propio país y sus instituciones fundamentales. Con nuevos ingredientes y recetas también nuevas, los mismos promotores nacionales y extranjeros de los sucesos de octubre del año pasado pretenden sembrar de nuevo el caos y empujar a los chilenos hacia la guerra civil", Y no pudiendo ya cerrar los ojos ante las conspiraciones militares, agrega: "Los jefes ocultos de la reacción han puesto, desde hace tiempo sus ojos en las Fuerzas Armadas. Han recurrido a muchas y diversas maniobras para tratar de sacarlas de sus tareas profesionales y proyectarlas hacia la política partidista". Sin embargo, no se trata aquí tampoco de una denuncia, pues a continuación agregan: "Las FF.AA., de Chile tienen una formación profesional rigurosa y un sentido de la responsabilidad, del honor y del patriotismo que las honra... Ahora, cuando de nuevo el fascismo levanta su cabeza bestial, la arremetida contra las instituciones armadas acrecienta su caudal. El pueblo está vigilante y alerta. Las FF.AA., demostrarán una vez más la solidez de sus principios institucionales y su ética profesional".

El día 17 de ese mismo mes, Volodia Teitelboim, miembro del Secretariado del P "C", en una columna que firma en El Siglo, celebra las alabanzas a las FF.AA., de Orlando Millas, miembro también del Secretariado de dicho partido y Ministro de Economía, dichas en el Parlamento cuando se defendía de la acusación constitucional de la oposición para destituirlo. Volodia señala: "Nos agradó mucho el justo lenguaje de razonada firmeza con que el compañero Orlando Millas desenmascaró al momiaje filisteo y golpista que presentó una torpe acusación constitucional en contra del Ministro de Economía. Estos caballeros de la derecha, agrega, que se lanzan en picada contra las FF.AA., recibieron un merecido tapabocas". A continuación cita las vergonzosas y serviles alabanzas a los militares formuladas por Millas:.... "Expreso mi protesta más enérgica por el procedimiento empleado en el libelo de lanzar dictérios contra jefes de las FF.AA., de la República que cumplen abnegadamente con sus funciones y prestan colaboración para dar solución a los problemas nacionales".

Y luego, con aire dramático, se ofrece así mismo como víctima a cambio de la honra de las FF.AA., diciendo: "Yo soy político señores diputados. Pueden atacarme a mí y asumo plenamente mis responsabilidades. Pero no se tiene derecho a extender los odios de algunos parlamentarios y los procedimientos de la politiquería queriendo atentar contra la honra de los miembros de las FF.AA., para preparar en concreto el golpe de Estado".

El 6 de julio, vuelve a la carga Marcel Garcés en El Siglo y escribe: "Las FF.AA., de la patria, no están ajenas al bullente proceso social que protagoniza el pueblo, constructor de la nueva sociedad. Ellas forman parte de la comunidad nacional y por lo tanto les es muy caro todo lo que sucede en el campo de la economía, de la cultura y de otros aspectos de la vida social.... Chile ha dado un ejemplo al mundo y entregado una página plena de enseñanzas a la historia, de como un pueblo logra recuperar las riquezas básicas, organizar la economía, distribuir en forma justa los ingresos y terminar con la explotación del hombre por el hombre. De cómo ese proceso se efectúa y se defiende, en forma democrática, contando con las FF.AA., constitucionalistas, fieles a su doctrina institucional y también participantes en lo que Allende definiera como la 'gran política' de la Soberanía Eco-

nómica Nacional". De este modo, este "lúcido" analista y real estafador, presenta a las FF.AA., que hervían de sectores golpistas deseosos de madrugarse los unos a los otros, no tan sólo como estrictamente "profesionales" y "constitucionalistas", sino como entusiastamente incorporadas nada menos que a una política supuestamente destinada a "terminar con la explotación del hombre por el hombre". ¡Realmente son afirmaciones dignas de un alquimista de la Edad Media!

Al día subsiguiente, también en El Siglo, toma la palabra Jorge Insunza, dirigente del P" C", quien continúa sembrando ilusiones en las FF.AA., uno de cuyos sectores ha protagonizado ya a fines del mes anterior uno de los primeros intentos abiertos de golpe de Estado, el "tancazo" del que ya hemos hablado. Señala: "las voces de orden de la CUT para enfrentar las acciones sediciosas de los reaccionarios del país y del exterior que impulsan el desencadenamiento de la guerra civil, no pueden ser interpretadas de ningún modo como medidas que tiendan a enfrentar al pueblo con los institutos armados, que mantienen sus tradiciones de respeto al Gobierno Constitucional. El pueblo se organiza para defender sus fuentes de trabajo, para garantizar el desarrollo democrático de Chile, para culmenar el proceso de cambios revolucionarios evitando el enfrentamiento armado que busca la reacción, para enfrentar la sedición reaccionaria impidiendo que cause a nuestra patria daños irreparables en vida y bienes.... Es una pretensión absurda por tanto, presentar la organización sindical o de población como una 'fuerza insurreccional', cuando las medidas orgánicas que se adoptan tienden precisamente a evitar la sedición reaccionaria y esta actitud las une estrechamente a las Fuerzas Armadas, que se sienten garantes del desarrollo democrático de los procesos políticos de nuestro país... Los esfuerzos por crear un abismo entre las FF.AA. y el pueblo fracasarán. El hecho mismo que la liquidación del golpe de estado del 29 de junio, fuera el resultado de la acción decidida de las FF.AA., Carabineros e Investigaciones y la movilización de las masas, sirvió para fundir estrechamente a miles de soldados con el pueblo. No en vano en la concentración el pueblo coreó: 'soldado amigo, el pueblo está contigo' ". Ya vimos el uso, que a esta estúpida y traidora consigna difundida por la dirección del P" C", le dieron los torturadores de las FF.AA., después del golpe de Estado.

4.- ¿FF.AA. "constitucionalistas" y meramente "profesionales"?

Existe una grave equivocación en los analistas del proceso de la UP (como Garcés, el consejero de Allende, por ejemplo) que supusieron y aún suponen, que el golpe de Estado en Chile demoró tres años en producirse, debido a un supuesto espíritu "legalista", "meramente profesional" y "constitucionalista" de las FF.AA., que habría primado por encima de los intereses de clase con los cuales están comprometidos sus Altos Mandos. La verdad es que, hasta que se dió el triunfo de la Unidad Popular, no eran precisamente esas consideraciones doctrinarias y moralistas las que habían determinado el carácter de la actuación de las FF.AA., sino el hecho de que la Constitución, las instituciones y las leyes vigentes servían plenamente los intereses de los sectores reaccionarios dominantes en Chile, incluido el imperialismo norteamericano. Las FF.AA., por lo tanto, no eran "legalistas", "constitucionalistas" y "profesionalistas" porque fuera apolíticas, sino en tanto defensoras de los sectores que controlan el gobierno porque éstos respetan las instituciones y las leyes (Allende las respetó escrupulosamente), sino que, a la inversa, apoyaban dichas instituciones y leyes en tanto servían a los grandes explotadores internos y foráneos. Por ello, precisamente su "profesionalismo" represivo las consagra como el más eficiente instrumento de opresión sobre el pueblo, ya que sólo se aplicaban disciplinadamente a esa, su labor, sin interferir en las pugnas de los diversos sectores burgueses que se disputaban el gobierno o el parlamento. Esto, claro está, en el bien entendido que fueran los sectores burgueses tradicionales los que se turnaban en la administración, del sistema de explotación y opresión vigente. En este papel profesional represivo, las FF.AA., chilenas han dado buenas y abundantes pruebas de su eficiencia y de su orientación clasista, a través de toda la historia de Chile. Ya hemos señalado ejemplos de la labor represiva, siempre contra el pueblo y en favor de quienes lo explotaban, que demuestra su verdadera posición política reaccionaria. Como un testimonio suplementario de que su fidelidad no es

hacia abstractos preceptos legales o institucionales como se supone, existen variados antecedentes del desprecio que a Altos Mandos y oficiales de las FF.AA., les merecían los políticos civiles, es decir, precisamente los administrativos de toda esa legalidad e institucionalidad propias de la democracia burguesa. En su profesionalismo se sentían mejores defensores del orden capitalista que dichos políticos civiles, aunque estos se encuadraban en la legalidad y en la institucionalidad y eran sus administradores oficiales.

Justamente, cuando resultó elegido Allende (legal y constitucionalmente), se planteó una grave incompatibilidad entre los hábitos legalistas y profesionalistas de las FF.AA., y el claro espíritu reaccionario de sus Altos Mandos y de la mayor parte de su oficialidad: el profesionalismo y legalismo que practicaban, había cambiado de signo y no servía ya a los intereses reaccionarios habituales. Allende, bajo la consigna "marxista" de construir el "socialismo", se proponía (y comenzó en serio a hacerlo) estatizar sus medios de producción. Además, se proponía expropiar bienes de EE.UU., principal proveedor de armamentos, créditos, donaciones, así como de entrenamiento profesional e ideológico de las FF.AA. Todo ello por añadidura, al decir de EE.UU., ponía en peligro el equilibrio de fuerzas con el más poderoso enemigo del Mundo Occidental y Cristiano al que Chile pertenece: la Unión Soviética, representada en el gobierno por el P" C". Finalmente, Allende, no reprimía con la energía de sus antecesores la movilización popular y existía el serio peligro de formación de grupos armados para-militares de izquierda (los de derecha los estimulaban y ayudaban los yanquis mismos).

Es fácil suponer la reacción frente a todo esto de los Altos Mandos y oficialidad de las FF.AA., acostumbrados a enviar, desde el año 1968, a todos sus graduados de la Escuela Militar a pasar dos meses de entrenamiento en los cursos anti-guerrillas hechos por EE.UU., en la zona del Canal de Panamá. FF.AA. que enviaron, según el estudio realizado por el sociólogo norteamericano Roy Hansen en 1964-65 con los auspicios de la Rand Corporation, la Universidad de California y la Fundación Ford (tres instituciones con fuertes vínculos con la CIA), el 55 por ciento de los miembros de élite del Ejército chileno un promedio de 14 meses a EE.UU. Ese mismo estudio, además, encuestando a 37 generales recién pasados a retiro, había constatado que sus padres en un 73 por ciento de los casos eran profesionales, empresarios y gerentes; y de sus mejores amigos civiles, un 86,1 por ciento eran gerentes y profesionales, un 8,3 por ciento terratenientes, un 2,8 por ciento políticos y un 2,8 por ciento empresarios. Empleados y obreros: ninguno. Constató, además, que los 4 uniformados que llegaron en 1964 al grado de general, todos eran de la clase alta. (128)

Es perfectamente natural, por consiguiente, que, pese a sus hábitos constitucionalistas y profesionalistas, puesto que ellos obedecían a su posición de clase, no se sintieran en absoluto ligados al gobierno de Allende, no obstante, que realizó grandes esfuerzos por ganarse su simpatía. En efecto, Allende, durante su gobierno brindó un trato a las FF.AA., que jamás había recibido de los gobiernos anteriores, los cuales, seguros de la fidelidad clasista de las FF.AA., las mantuvieron mal equipadas, con bajas remuneraciones y sin ninguna participación en las instituciones y empresas civiles de tipo estatal. Precisamente, esas omisiones sirvieron de pretexto al intento de golpe de Estado, dirigido por el general Viaux, en el año 1969, bajo el gobierno de Frei. Allende, en cambio, comenzó por realizar un notable mejoramiento discriminatorio de las remuneraciones de las FF.AA., especialmente de los generales; quienes pasaron de 12 sueldos vitales en 1970 a 21 sueldos vitales en 1972, logrando, así, un mejoramiento de un 75 por ciento sobre los ingresos de los trabajadores. El presupuesto del Ministerio de Defensa fué aumentado considerablemente y ya a fines de 1971 más de 265 cargos en el aparato económico estatal eran ocupados por militares en servicio activo. Todos los vínculos de las FF.AA., con EE.UU., son mantenidos: viajes a entrenamiento, Misión Militar yanqui en Chile, Operación "Unitas", etc. Por último en varias ocasiones, Allende, incorporó a sus gabinetes a altos jefes de las FF.AA. No obstante, era tan sólido el espíritu clasista de los Altos Mandos y oficialidad de las FF.AA., que el gobierno logró allí sólo una mínima influencia y los cálculos del Presidente Allende y de sus consejeros respecto al ascendiente que se creía tener fueron, hasta el final, absolutamente equivocados y subjetivos. Hasta poco antes de morir, según cuenta Garcés, Allende hablaba de "tres traidores...", en tanto los pocos partidarios de la Unidad Popular en las FF.AA., fundamentalmente, de la tropa y del contingente de reclu-

tas, había sido ya aniquilado en los cuarteles mismos. Sólo muy reducidos grupos alcanzaron a ofrecer cierta resistencia. Llegó a tal punto la habilidad con que los jefes de las FF. AA., engañaron a Allende que, individuos como el coronel Washington Carrasco, que viajó en julio de 1971, en comitiva con el Canciller a Cuba (ascendido luego a general y jefe de la Tercera División), y que era considerado como "progresista" y tan solo en la mañana del día 11 de septiembre, hizo matar a 250 dirigentes sindicales obreros y campesinos. Incluso, el general Torres de la Cruz, uno de los más desenfundados fascistas en las FF. AA. fue considerado por el propio Allende y por otros dirigentes de la UP, casi hasta el final, como "allendista". Conocida es, además, la frase de Pinochet dicha a Allende en la víspera misma del golpe que el dirigiría: Ud., tendrá siempre mi lealtad incondicional, Presidente".

De lo que realmente ocurrió en las FF. AA., velado por la campaña del gobierno y en especial de la directiva del P" C", de desenfundadas alabanzas a ellas con el vano propósito de seducirlas, se desprende que: si el golpe demoró tres años en materializarse ello no se debe al espíritu "constitucionalista", ni menos, como se dijo, "democrático" y hasta "progresista" de las FF. AA., sino, por el contrario, al excesivo número de tendencias golpistas, tanto de origen interno como externo, que pugnaban por abrirse paso en su interior. Estas tendencias golpistas derivadas de: presiones de la CIA y de la DIA yanquis, del Partido Nacional, de la Democracia Cristiana, del grupo fascista "Patria y Libertad" e, incluso, de las ambiciones personales de ciertos militares, ponían en peligro la unidad y el "profesionalismo" de las FF. AA., como fuerza represiva, al intentar contra su espíritu de cuerpo. Dichas tendencias provocaron de hecho numerosos intentos prematuros de golpe, que ponían en peligro su eficacia. La necesidad de disciplinar todas esas tendencias golpistas y de colocarlas bajo un mando único, jerárquico, de alto nivel, que no amenazaría la unidad de las FF. AA., y eligiera el momento más propicio, fué una de las razones que demoró la materialización del golpe de Estado.

Si en alguna medida influyó el "constitucionalismo" e "institucionalismo" chilenos para retardar el golpe, no fue, precisamente, porque suscitaban escrúpulos entre los militares debido a su "fidelidad" a esos principios, sino por la dificultad que significaba aplastar, de la noche a la mañana, garantías democráticas y derechos legales que habían tenido vigencia en Chile por decenios. Un factor extra, que demoró los propósitos golpistas (hasta que se logró removerlo), fue la presencia en la Comandancia en Jefe de las FF. AA., del general Prats, uno de los poquísimos generales sobre el que parece haber alcanzado cierta influencia el Presidente Allende y la dirección del P" C". Este quedó en dicho cargo por un azar favorable al gobierno, por ser el militar de mayor antigüedad después del general Schneider, asesinado en uno de los primeros intentos golpistas.

Los elementos de más jerarquía en las FF. AA. (entre ellos según parece el propio Schneider) exigían ciertas condiciones mínimas para comprometerse con un golpe de Estado. Entre ellas, que se promoviera la "desestabilización" del gobierno de Allende intensificando la crisis económica y, a través de ello, creando un fuerte movimiento de opinión pública en su contra. Exigían, así mismo, que el golpe fuera dirigido al más alto nivel jerárquico (y no por cualquier aventurero); de modo de preservar la unidad de las FF. AA., y hacer frente así a los riesgos que implicaba en Chile cancelar bruscamente un largo proceso de democracia burguesa. Este último factor implicaba (aunque no necesariamente), la remoción de Prats.

No obstante, el gobierno norteamericano y, en particular, Nixon, sin atender para nada a la situación chilena y actuando como si se tratara de un país habituado a los golpes de Estado, crearon una grave situación a las FF. AA., con sus presiones desmesuradas para obtener un pronunciamiento militar antes que asumiera Allende. Nixon, tenía sus razones particulares para actuar así, las que son puestas en evidencia en comentario de un alto funcionario de la Casa Blanca, contenido en los documentos sobre la intervención de la ITT en Chile investigada por el Senado norteamericano, quien afirma: "Esta nota de instrucciones de la Casa Blanca puede sugerirle a Ud. la profundidad de la preocupación presidencial por la situación chilena. Nixon, creó, entre otras razones, incluyendo el establecimiento en el hemisferio de un eje comunistas entre La Habana y Santiago, piensa que esto puede afectarle ya desde ahora la elección del año 1972, con la imputación de que los comunistas alcanzaron un avance sustancial en el hemisferio durante su administra-

ción”, (131)

Ante esta prisa táctica del señor Nixon, que se suma a la decisión estratégica de derribar a Allende, ya analizada, deseoso de promover el golpe inmediatamente después del triunfo de Allende y antes de que éste asumiera el mando, la CIA y la DIA, se encontraron en graves dificultades. La CIA informaba: “Una operación militar es imposible; el Ejército no tiene ni la capacidad ni el deseo de apoderarse del poder. Nosotros no estamos en condiciones de provocar ni de desencadenar un golpe de Estado”. (132) Sin embargo, las órdenes dadas por Nixon en la reunión del 15 de septiembre de 1970, eran terminantes. El director de la CIA, Richard Helms, comenta después de esa reunión: “Yo salí de la reunión con la impresión neta de que se nos pedía una cosa imposible, y que iba a ser una empresa mayúscula el ensayar de hacérselos comprender”. (133) El Jefe del Grupo de Intervención en Chile, por su parte, comenta: “Yo tenía el sentimiento que los imprevistos eran muy grandes, que se trataba de una cosa que no marcharía. Que nosotros nos quemaríamos si nos dejábamos embarcar en esa aventura... ¿que chances teníamos de llevar a buen término un golpe de Estado o, en todo caso, de impedir a Allende llegar a la Presidencia?... Nosotros no teníamos ni una chance sobre diez de tener éxito... Yo puedo asegurarles que el sentimiento general, de la gente con la que yo estuve en contacto en la Agencia, era: ‘¡Dios mio! ¿por qué nos habrán confiado esta misión?...’”. (134) No obstante, las presiones de la Casa Blanca continúan, forzando a los agentes de la CIA y DIA, prácticamente, a una aventura.

Frei, desde la Presidencia de la República, realizaba todos los esfuerzos a su alcance para crear en pocas semanas el caos económico que sirviera de pretexto a las FF.AA., pero, como ya hemos visto, sin decidirse él mismo a llamar a un golpe de Estado. Mientras las fuerzas de oposición y las empresas multinacionales saboteaban activamente la economía, el Ministro de Hacienda de Frei, Andres Zaldivar, habla por cadena de radios y televisión, el 23 de septiembre, señalando que se ha producido una grave crisis económica tan sólo “por el temor del triunfo electoral de Allende”, con el obvio propósito de sembrar el pánico y agudizar la crisis. El pánico inducido por sus declaraciones se sumó al sabotaje preconcebido, motivando que se retiraran del Banco del Estado, unos 600 millones de escudos (alrededor de 50 millones de dólares); de los depósitos de ahorro del mismo banco, otros 54 millones de escudos; y, de las cuentas de ahorro y préstamo para la construcción de viviendas, unos 322 millones de escudos. El Banco del Estado, se vió obligado a entregar a los bancos privados unos 80 millones de dólares, la quinta parte de su reserva total de divisas, para hacer frente a la “corrida” de fondos de sus depositantes. Al mismo tiempo, la negativa de las grandes empresas nacionales y extranjeras a vender a crédito a las empresas medianas y pequeñas y al comercio, produjeron graves impactos en su actividad económica.

Sin embargo, el corto plazo del que se dispuso para pretender generar un descalabro económico (ante la prisa de Nixon) y lo artificial que resultaba, ante la opinión pública, culpar de todo eso a Allende, que aún ni siquiera asumía el mando, determinaron la imposibilidad de generar un movimiento de masas importantes en apoyo de los golpistas. Frente a eso, al parecer, Schneider, el Comandante en Jefe de las FF.AA., exigía, por lo menos, un pretexto legal para desencadenar el golpe. El mismo lo sugirió, anticipadamente, realizando declaraciones de que respetaría “el veredicto de las urnas o del Congreso Nacional”. Se trataba pues, de sacar adelante el rechazo a la designación de Allende por el Parlamento. Si esto provocaba desórdenes, tanto mejor, las FF.AA., los aplastarían, defendiendo una prerrogativa legal del Parlamento: designar a cualquiera de los dos candidatos que hubieran obtenido las mas altas mayorías. No obstante, como es sabido, Frei no logró comprometer a su partido en esta maniobra y se sabía, de antemano, que el Congreso designaría a Allende.

En esas circunstancias, la CIA y la DIA, siempre urgidas en forma perentoria por su gobierno, deben estimular a aventureros de las FF.AA., que le ofrecen raptar a Schneider. De ese modo, al mismo tiempo, se echaba a un lado a quien vacilaba en dar un golpe sin un pretexto legal; y se culpaba de ese hecho a la izquierda, para incitar al levantamiento armado. No trepidan, pues, en ensayar la división de las FF.AA. En un telegrama fechado el 23 de septiembre de 1970, la Estación de Santiago de la CIA reporta a su Central: “fuertes razones para pensar que ni Frei ni Schneider pasarán a la acción en estas condi-

ciones, todo el escenario en el cual sea uno sea el otro tendrían un rol activo a jugar aparecen en lo sucesivo totalmente irrealistas. Pueden, claro está, intentarse aperturas en dirección de oficinas de más bajo rango (Valenzuela, por ejemplo). Esto supone que nos será necesario provocar una escisión en el seno de las FF.AA.” (135) El 6 de octubre, como consecuencia de esos sondeos, llega un telegrama de la Estación de Santiago a la Central de la CIA, en el que se expresa: que Viaux (general en retiro por su intento fallido de golpe en 1969), “estaba listo para desencadenar un golpe de Estado el 9 de octubre en la tarde o el 10 en la mañana”. La CIA, además, como lo señala el Informe del Senado sobre su intervención en Chile, “supo que los planes de todos los grupos de complotadores comenzaban con el rapto del constitucionalista Comandante en Jefe de las FF.AA. chilenas, general René Schneider”. “Rápidamente, señala el citado Informe, se hizo evidente para ambos, los representantes de la Casa Blanca y de la CIA, que un golpe militar era el único camino para prevenir el ascenso de Allende al poder”, es decir, para cumplir la exigencia perentoria de Nixon. “Para lograr ese fin, agrega el Informe, la CIA estableció contacto con algunos grupos de militares conspiradores y eventualmente pasó armas y gas paralizante a un grupo”. Se había logrado contacto y un cierto entendimiento, entre el grupo que capitaneaba Viaux y el Camilo Valenzuela, Comandante de la Guarnición de Santiago, quien desconfiaba de los contactos efectivos del primero.

Los informes de la Estación de Santiago de la CIA, entre tanto, siguen siendo pesimistas en relación a las testarudas decisiones de Nixon. La Central, se ve obligada a llamarles la atención y les señala: “Los informes no deben lanzarse en análisis y argumentaciones, sino que limitarse a rendir cuenta de las acciones emprendidas”. (136) El 8 de octubre, el grupo de intervención en Chile de la CIA, había informado que: “... Al más alto nivel, las FF.AA., son incapaces de entenderse para bloquear a Allende”. (137) En reuniones celebradas entre el 10 y el 22 de octubre, según señaló Karamassines en su declaración ante el Senado de su país, “el Presidente hizo remarcables esfuerzos por hacer compartir a todos los presentes su convicción según la cual era esencial que la elección de Allende a la Presidencia fuera contrarrestada”. (138) El mismo día 10 sale un telegrama de la Central a Santiago, que señala: “Queremos estimular a Viaux a ampliar y perfeccionar sus proyectos de golpe de Estado. Ensayo de influenciarlo”. (139) Se trataba, pues de estimularlo, pero al mismo tiempo, de prevenir que se lanzara a una aventura. El estímulo, para este “honorable” general de la República, consistió en 20 mil dólares y un seguro de vida para sus asociados de 250 mil dólares.

El día 15 de octubre, dos generales chilenos intentan por última vez convencer a Schneider para que se sume al golpe de Estado. Este rechaza. Sin duda, este rechazo no se debe tampoco, como se señaló con insistencia, al espíritu constitucionalista de Schneider, ya que, en ese caso habría tomado medidas contra los golpistas. Por lo demás, se trataba de un militar estrechamente ligado a EE.UU., pues fue él quien estableció la norma de que toda la promoción de cadetes salidos de la Escuela Militar, viajara cada año a EE.UU., y fue él, así mismo, quien autorizó la investigación de Roy Hansen en las FF.AA., chilenas, con acceso incluso a los materiales del Estado Mayor vedados para los civiles chilenos. todo esto, sin embargo, no significaba que estuviera dispuesto, siguiendo los caprichos de Nixon (ni Frei siquiera quiso hacerlo), a embarcarse en una peligrosa aventura, en una batalla que encerraba altos riesgos de perderse. Prueba de que la actitud de Schneider fue, por lo menos, razonable, es que el propio gobierno de EE.UU., y la Central de la CIA, aunque demasiado tarde, cambiaron de opinión e intentaron (así dicen al menos), detener a Viaux para mejorar sus planes.

La Central de la CIA, termina por calificar la tentativa de Viaux como: “dotada de muy pocas expectativas de éxito y susceptibles de dañar toda acción ulterior más seria”. (140) El 15 de octubre, al parecer sin la presencia de Nixon, se reúnen en la Casa Blanca, Thomas Karamassines, Jefe del Servicio Secreto de la CIA, el general Alexander Haig, Adjunto de Kissinger (posteriormente jefe de las fuerzas de la OTAN) y el propio Kissinger. De esa reunión sale un telegrama que la Estación de Santiago de la CIA debe hacer conocer a Viaux, en el que se señala: “Nosotros hemos estudiado vuestro plan. Basándonos en vuestras informaciones, nosotros concluimos que vuestro proyecto de golpe de Estado no puede por el momento tener éxito. Si usted fracasa eso puede reducir sus posibilidades de éxito en el futuro. Guarde sus cartas en la mano. Nos mantendremos en contacto. Vendrá

el tiempo en que usted y sus amigos podrán hacer algo. Usted conserva nuestro apoyo". (141) La decisión de retrasar el golpe de Viaux, fue transmitida el día 17 a uno de sus asociados, quien respondió que lo que le decían tenía poca importancia, pues habían decidido de todas maneras desencadenar el golpe de Estado. Los resultados de la aventura de Viaux son bien conocidos: Schneider, fue asesinado en el intento de rapto y fue tal la torpeza de los comandos civiles que participaron en los hechos, que fueron descubiertos a los pocos días.

Todo este intento prematuro de golpe configura claramente las dos características básicas que hemos planteado como causa del retardo que tomó en materializarse el golpe que habría de derribar a Allende. Por una parte, la decisión de los Altos Mandos de las FF. AA. de actuar unidos en su propósito golpista y no capitaneados por cualquier aventurero; y de realizarlo en condiciones más favorables. Es decir, con ciertos pretextos legales y en condiciones de desgaste del gobierno de la UP más agudas, de modo de contar con una base social favorable al golpe de Estado. Para lograr el primer objetivo, en tanto se alcanzaba el segundo, el grupo golpista a más alto nivel, debió contener a los innumerables sectores que anhelaban en forma anárquica lanzarse a un golpe y someterlos a su conducción. Hubo, no obstante, como lo mostraron más adelante, no menos de seis tentativas, que llegaron a conocimiento público, de golpe de Estado, antes de la definitiva. El análisis de esas tentativas y los antecedentes que entrega la propia CIA, acerca de la gran proliferación de grupos conspiradores, confirma nuestra tesis de que ese espíritu clasista reaccionario de los Altos Mandos y oficialidad de las FF. AA., era realmente lo que contaba y no un pretendido espíritu "constitucionalista" y "profesionalista" a toda prueba. Esta última tesis, no es más que la prolongación de la vergonzosa y traidora campaña que realizaron los dirigentes del P" C" durante el gobierno de Allende, de alabanzas a las FF. AA. para desarmar al pueblo frente a ellas. Esa misma postura la mantienen hoy día, presentando lo ocurrido como la obra de unos pocos "generales traidores", que habrían "apartado" a las FF. AA. de su tradición "legalista" y "apolítica", con el obvio propósito de reeditar la fracasada política de alianza con la DC y de obtener el beneplácito de las FF. AA. para retornar algún día a actuar en Chile legalmente y continuar así engañando al pueblo.

La verdad es, que las tentativas de golpe contra Allende, comenzaron en el año 1964, ante la sola presunción remota de que pudiera triunfar en esas elecciones. La comisión senatorial presidida por Church, establece en su Informe, que, el 19 de junio de ese año, "el Consejo de Defensa de Chile (organismo de coordinación de las FF. AA.)... fue donde el Presidente Alessandri a proponerle un golpe de Estado si Allende ganaba". "Este ofrecimiento -agrega el Informe- fue transmitido al Jefe de la Estación de la CIA, quien comunicó al Consejo de Defensa de Chile a través de un intermediario, que los Estados Unidos eran absolutamente opuestos a un golpe". La respuesta en ese momento es absolutamente normal, pues habían invertido más de 3 millones de dólares para hacer elegir a Frei y las encuestas predecían que sacaría sobre el 50 por ciento de los votos, como efectivamente ocurrió. Pero hay más: "El 20 de julio -señala el mismo Informe- el Jefe de la Misión de la Embajada de Estados Unidos, fue requerido por un general de la Fuerza Aérea de Chile, quien amenazaba con un golpe si Allende triunfaba". "El Jefe de la Misión le reprochó por proponerle un golpe de Estado y no se hizo más mención de él". Por último, el Informe señala que: "Tempranamente, la CIA supo que el candidato radical a la elección (presidencial), algunos chilenos, y ex-políticos de otros países latinoamericano se habían juntado el 2 de junio para organizar un grupo derechista llamado la Legión de la Libertad. Ellos decían que dicho grupo prepararía un golpe de Estado si Allende triunfaba, o si Frei ganaba y establecía un gobierno de coalición con el Partido Comunista. Dos de los chilenos informaron en la reunión que algunos oficiales del Ejército deseaban preparar un golpe de Estado antes de la elección, si el gobierno de EE.UU., les prometía ayudarlos. Esas proposiciones -concluye el Informe- fueron rechazadas por la CIA". (142) ¡Estas son las FF. AA., "constitucionalistas" y "profesionalistas", de las que nos habla la directiva del P" C" y sus adláteres! Hay que considerar respecto a los ofrecimientos de golpe recién mencionados, que ellos son prácticamente espontáneos y generados en los marcos "profesionales" de las FF. AA., ya que en ese momento ni la extrema derecha, ni la DC o el gobierno norteamericano, seguros del triunfo de Frei, tenían el menor interés en estimular un golpe de Estado. Cabe impaginarse, pues lo que acontecería en el interior de esas mismas FF.

AA., durante el gobierno de Allende, en que todos esos sectores se esforzaban por provocar un golpe.

Posteriormente, en las proximidades de la elección presidencial de 1970, la CIA comienza a prepararse para la eventualidad de necesitar un golpe de Estado en Chile. "En julio de 1969 -nos señala el Informe de la Comisión Church- la Estación de la CIA en Santiago solicitó y recibió aprobación de la Central para un programa encubierto destinado a establecer activistas de inteligencia en las FF.AA. chilenas con el propósito de orientar un golpe de Estado. El programa abarcaba cuatro años: implicaba activistas dispersos provenientes de las tres ramas de los militares chilenos".

Y continúa el Informe señalando: "Durante agosto, septiembre y octubre de 1969, resultaba cada vez más claro de los informes de los agentes que la creciente insatisfacción e intranquilidad dentro de las Fuerzas Armadas estaban conduciendo a una situación inestable. Esos acontecimientos culminaron en la abortada revuelta militar de octubre de 1969 -El Tacnazo- nombre derivado del regimiento de Tacna de Santiago". Y comentan: "Cuan cerca estuvo el 'amateur Tacnazo' de tener éxito fue una lección para recordar, particularmente con vistas a las elecciones presidenciales venideras de 1970 y a la fuerte posibilidad que Salvador Allende emergiera victorioso". (143) Con ese intento, a través del cual sólo se reivindicaron ciertas peticiones de orden económico para las FF.AA., que fueron otorgadas por el gobierno, Viaux, en realidad comenzaba a ofrecerse para las necesidades de EE.UU., en caso de que Allende triunfara.

El Informe de la Comisión Church, continúa más adelante ilustrándonos de las facilidades que tenía la CIA (y como veremos no eran los únicos en buscarlas), para encontrar grupos de militares chilenos dispuestos a dar un golpe. En el periodo que habría de culminar con el segundo intento de Viaux ya descrito, nos señala: "Entre octubre 5 y octubre 20 de 1970, la CIA, realizó 21 contactos con oficiales claves del Ejército y Carabineros de Chile. Estos chilenos que se inclinaban a organizar un golpe recibieron seguridad de un fuerte apoyo al más alto nivel del gobierno de EE.UU., para antes y después del golpe". (144)

Posteriormente, el Informe del Senado nos dice: "En septiembre de 1971 una nueva cadena de agentes estaba colocada y la Estación (de la CIA) estaba recibiendo casi diariamente antecedentes de nuevas conspiraciones golpistas". ¡Seguramente inspiradas en el espíritu "constitucionalista" de las FF.AA.! Y prosigue el Informe: "La Estación y la Central comenzaron a explorar caminos para utilizar esa cadena". (145) Luego, el Informe entrega un antecedente que demuestra que la CIA ha sacado lecciones del error cometido al estimular a Viaux y que ha comprendido que debe esperar que las propias FF.AA., generen unitariamente, su cabeza golpista. En el mes de octubre de 1971, la CIA, decide "pasar información 'verificable' al líder del grupo golpista que la Estación y la Central percibían como teniendo la más alta probabilidad de éxito". Y señalan luego: "Durante 1972 la Estación continuó orientando al grupo que podía montar un golpe exitoso y se empleó una cantidad significativamente más grande de tiempo y esfuerzo penetrando ese grupo, que el que se había empleado en los anteriores. Ese grupo había llamado la atención originalmente de la Estación en octubre de 1971. En enero de 1972 la Estación lo había penetrado con éxito y estaba en contacto a través de un intermediario con su líder". (146) Como puede verse, el grupo con "más probabilidades de éxito", no surgió, como opinan los partidarios de la tesis "constitucionalista" de las FF.AA., por una "traición" de última hora, sino, entre muchos otros grupos golpistas, fue detectado ya en 1971.

Si la CIA tenía tal éxito en tropezar con grupos golpistas en el interior de las FF.AA., chilenas, es fácil suponer lo que ocurriría allí dentro considerando que también se movían con esa misma perspectiva, los diversos partidos de oposición al gobierno de Allende. ¡Si hasta el minúsculo grupo fascista Patria y Libertad, tuvo éxito en desencadenar un intento de golpe!: el fracasado "tancazo" del 29 de junio. Pero, además, por lo que toca a EE. UU. sin duda el "estímulo" más escuchado por los golpistas, es preciso considerar que no actuó en Chile sólo la CIA. El Informe del Senado señala: "El Embajador Korry,... fue autorizado para alentar un golpe militar, a condición que Frei concurriera en esa solución. En la reunión del 40 Committee del 14 de septiembre, él y otros 'apropiados miembros de la misión diplomática' fueron autorizados para intensificar sus contactos con oficiales del Ejército chileno para evaluar su voluntad para apoyar el 'gambito Frei' ". (147) El llama-

do "gambito Frei", en el que éste no se atrevió después a comprometerse, consistía en que entregara, con el pretexto de evitar una guerra civil, el mando a una junta militar. Dicha junta, llamaría luego a elecciones a las que se presentaría el propio Frei. Para sacar adelante el golpe, el Embajador de EE.UU., fue autorizado incluso para mentir a las FF. AA., amenazándolas con que cesaría toda ayuda militar y venta de armas a ellas, si Allende llegaba a la Presidencia. Para darle visos de verosimilitud a esta amenaza "Korry fue autorizado para informar a los militares chilenos que todo el PAM (Pacto de Ayuda Militar) y las ventas militares serían suspendidas hasta la elección del Congreso el 24 de octubre" (148), es decir, cuando este debía decidir si designaba o no a Allende. La amenaza de cortar los suministros, no sólo no se cumplió, sino que, ellos aumentaron notablemente una vez que Allende asumió el mando, lo que demuestra la confianza del gobierno norteamericano en las tendencias golpistas de las FF.AA.

Aparte de la intervención del Embajador de EE.UU., para promover un golpe, es sabido que actuó también, activamente, el Pentágono a través de la Defense Intelligence Agency (DIA). Pese a que se ha intentado, incluso en el Informe del Senado, ocultar celosamente su participación, que compromete a las FF.AA., de EE.UU., en intrigas golpistas de baja calaña, existen numerosos testimonios de su compromiso, tanto con la preparación como con la ejecución del golpe de Estado. Hay quienes piensan, incluso, que tuvo un desempeño más eficaz en el golpe que la propia CIA, por sus amplios contactos con los militares chilenos. Es a ella, sin duda, a la que se refiere veladamente el Informe del Senado, cuando alude entre comillas a "otros apropiados miembros de la misión diplomática". ¿Quiénes más apropiados que los militares yanquis, con amplios y fluidos contactos con los chilenos?

Respecto a la tan oculta y ocultada participación de la DIA en el golpe, es preciso señalar que, ya durante el gobierno de Frei, hubo problemas entre las Cancillerías de Chile y de EE.UU., por un hecho que causó verdadero escándalo: poco antes de las elecciones presidenciales entraron al país alrededor de 100 oficiales de la marina norteamericana, que se hicieron pasar por una "fanfarria naval" de la Operación Unitas (cancelada ese año por las elecciones chilenas). Más adelante se descubrió que se trataba, no de inocentes músicos, sino de oficiales de alta graduación. Sintomáticamente, más adelante, se hizo coincidir la fecha del golpe con el momento preciso en que la flota norteamericana tenía numerosos buques en aguas territoriales chilenas, con motivo de la Operación Unitas.

Por lo demás, el Informe Church, no puede menos que reconocer que: "Agregados Militares mantuvieron contactos con militares chilenos con el propósito de recolectar información". Y comenta: "Si esos contactos estuvieron encaminados a alentar a los militares chilenos a moverse contra Allende; o si los militares chilenos -habiéndose sido aguijoneados ya hacia un golpe durante el Track 11- recibieron de esos contactos, estímulos para actuar contra el Presidente, aún cuando los oficiales no se propusieran dárselos, esa es una de las mayores interrogantes inherentes a las actividades encubiertas de EE.UU. en el período del gobierno de Allende". (149) ¡Sútiles consideraciones, para quienes no trepidaron en invadir Santo Domingo, Vietnam, Camboya y tantos otros países! No obstante, es obvio que la intervención de la DIA, adquirió especial importancia luego del fracaso del primer intento de golpe de Estado promovido a través de Viaux. Es decir, cuando se constató que era una torpeza intentar dividir a las FF.AA., a través de contactos "desde abajo" con grupos golpistas y que sólo un comando golpista de la más alta jerarquía militar podía disciplinar a esos grupos y actuar con eficacia. Sin embargo, ya antes de ese fracaso, Karamassines, Director de Operaciones de la CIA y el principal agente de enlace de dicha Central con el gobierno norteamericano, busca coordinación con la DIA, como lo señala ante la Comisión de Encuesta del Senado: "Nosotros teníamos igualmente necesidad en entrar en contactos con los más amplios sectores de las FF.AA. (chilenas), **en particular con sus oficiales superiores** con los cuales no estábamos en ligazón regular, por no haber previsto la necesidad anteriormente. Pero nosotros estábamos ciertos que nuestro representante militar en Chile los conocía bien... A fin de asegurarnos el concurso de ese Agregado en nuestras tentativas para procurarnos informaciones, nos hacía falta obtener el acuerdo de la DIA". Este propósito algo tardío de coordinación entre ambas centrales, no significa que la DIA no estuviera ya actuando por su cuenta, y también como ya hemos visto, lo hacían por su lado la Embajada y las empresas multinacionales. La CIA, en-

tonces, se dirige al Director Adjunto de la DIA, James M. Philpott, quien envía el 28 de septiembre de 1970, el siguiente mensaje al Agregado Militar norteamericano en Chile: "... debe trabajar en estrecha colaboración con el jefe de la CIA o, en su ausencia, con su adjunto, y asesorarle sobre las principales figuras militares que puedan jugar un papel decisivo en cualquier movimiento que pueda, eventualmente, negar la presidencia a Allende". (150) La segunda parte del mensaje, muestra la prudencia con que se encubrió la actividad del Pentágono en Chile, que al parecer ni el Senado norteamericano ha tenido el derecho a revelar: "No ponga al corriente de este mensaje ni al Embajador ni al Adicto de Defensa, ni les dé indicios de su sentido. En sus actividades de rutina, siga las instrucciones del Embajador. Simultáneamente, yo quiero -y le ordeno ahora- que proceda de manera concertada con el Jefe de la CIA. Este mensaje es sólo para Ud, y no debe ser discutido con nadie más que con los agentes de la CIA que serán reconocibles. La CIA se los identificará". Sintomáticamente, tanto Kissinger como Bennet, Director de la DIA, negaron en sus deposiciones ante la Comisión del Senado, haber conocido estas instrucciones, las que, sin embargo, constan en las declaraciones de los jefes de la CIA ante la misma Comisión de encuesta sobre la intervención en Chile. El empeño de los círculos gobernantes yanquis por negar la participación del Pentágono en el golpe contra Allende, resulta tan ingenuo como los esfuerzos del senador Church y su equipo, por salvar la reputación de Frei: es el único político chileno que mencionan por su nombre en el Informe, a cada paso, para señalar: "él nada supo de tal operación" o "él se negó a participar en tal otra", lo que, a las claras, deja en evidencia todo lo contrario.

Para terminar de constatar las múltiples tendencias anti-constitucionalistas y golpistas reaccionarias, que pugnaron por abrirse paso en las FF.AA., chilenas, no sólo se dispone de los antecedentes entregados ante el Senado de su país por los responsables de la CIA, sino, como si eso fuera poco, se cuenta con el historial de los intentos frustrados de golpe de Estado, que hubo desde que asumió Allende hasta el golpe que lo depuso el 11 de septiembre de 1973. Incluyendo el de Viaux, que ya hemos analizado, tenemos seis intentos de golpe previos al del 11 de septiembre. Y esos son, tan sólo, los que salieron a luz pública. ¡Cuántos habrán sido frenados en el interior mismo de las FF.AA. antes de que lograsen hacer noticia!

En marzo de 1972, el Coronel Julio Canessa Roberts, del regimiento de Temuco, fue descubierto organizando un aparato de sabotaje de la producción agrícola en conjunto con los latifundistas de la zona. Más adelante intentó promover el acuartelamiento de su regimiento, al que debían sumarse el de los regimientos de Valdivia y Osorno. Tenía estrechas conexiones con la organización fascista "Patria y Libertad" de la zona y con el Comando "Rolando Matus", del Partido Nacional, a los que daba adiestramiento para-militar y facilitaba el contrabando de armas desde Argentina. Estos militares tenían, según se descubrió más tarde, conexiones con el general Alfredo Canales, de la Guarnición de Santiago. En conocimiento de estos hechos, Allende, los denunció al general Prats, quien, en consulta con la Junta de generales, resolvió trasladar a Canessa a Santiago a la Escuela de Suboficiales, para frenar sus arrestos golpistas prematuros.

En septiembre de 1972, en una fiesta en Viña del Mar a la cual asistían altos jefes de las FF.AA., el general Alfredo Canales, bastante borracho, se fué de lenguas y confidenció al contraalmirante Horacio Justiniano, que preparaban un golpe para derribar a Allende, expresándose de éste en términos insultantes. Justiniano, que no estaba aún al tanto de esta maniobra golpista, se lo consultó al general Prats en la capital. Prats, por su parte, consultó con los generales, que junto con Canales, formaban parte de la Guarnición de Santiago. Estos considerando el peligro que significaba las infidelidades de Canales y el hecho de que era probable que el Presidente de la República fuera informado por Prats, acordaron llamar a retiro al general Canales. Al mismo tiempo, para no despertar sospechas en el gobierno, resolvieron que dicho complot aparecería como descubierto y denunciado por el SIM (Servicio de Inteligencia Militar). Pese a que Canales era conocido por su testarudez (por lo que recibía el apodo de "El Macho") y a que había declarado: "A mi no me sacan así no más. Yo no soy Viaux; yo arrastro conmigo a la mitad del Ejército", mas pudo la necesidad de instrumentar el golpe en forma jerárquica e institucional (cosa que a estas alturas parece haber comprendido ya la CIA y el gobierno norteamericano), y Canales fue llamado a retiro. Su intento golpista, es lo que el Presidente Allende denunciara el 14 de

septiembre de 1972, como el "Plan Septiembre", destinado a "derrocarlo".

El plan golpista a más alto nivel, sin embargo, incluía una serie de objetivos tácticos previos destinados a favorecer su ejecución. Desde el punto de vista de la búsqueda de un pretexto legal para el golpe, se esperaba que venciera el plazo constitucional del que disponía el Presidente de la República, para llamar a plebiscito en relación con la Reforma Constitucional de las Tres Areas de la Economía, que lo dejaba a merced de la mayoría de oposición del Parlamento. Esto ocurrió el 6 de junio de 1973. Poco después, el 2 de julio, se produciría el rechazo por parte de la Contraloría, del intento del gobierno de promulgar sólo los artículos no vetados por el Ejecutivo de dicha Reforma. Eran los elementos que esperaba la mayoría de oposición del Parlamento para declarar la "ilegitimidad" del gobierno, por haber "violado" la Constitución, ofreciendo así a las FF.AA., el pretexto "legal" que exigían. El 2 de julio, el senador DC Juan Hamilton (hombre de confianza de Frei, en política y en "negocios" extraoficiales), declararía que "el gobierno ya incurrió en incumplimiento de la Constitución al no promulgar íntegramente la enmienda a la Carta Fundamental (Reforma de las Tres Areas) tan pronto como la Contraloría rechazó su intento de promulgarla en forma parcial". Las FF.AA., esperaban, así mismo, el nuevo paro del transporte por camiones, que habría de iniciarse el 25 de julio, al que se sumaría en agosto la locomoción particular y otros gremios profesionales. Además, desde el punto de vista operativo y a modo de sondeo de una posible resistencia popular, aplicando la Ley de Control de Armas cuya aprobación aceptó tanto la oposición como el gobierno, se había planeado realizar una serie de allanamientos a industrias, locales sindicales y poblaciones populares. Al mismo tiempo, en el interior de las FF.AA., se comenzó una severa represión de todos sus integrantes que pudieran tener alguna simpatía por el gobierno o siquiera escrúpulos de tipo legalista o constitucionalista. Finalmente, estaba planeado obtener a través de una serie de provocaciones, la renuncia del general Prats como Comandante en Jefe de las FF.AA. Uno de los oficiales ligados al golpe declararía al New York Times, el 27 de septiembre: "Nosotros habríamos actuado aún si Allende hubiera convocado un referendum o hubiera logrado un compromiso con la opinión pública. Nada podía detener el golpe, tras la dimisión de Prats. Tan sólo estábamos dándole los últimos toques al plan".

En la mañana del 26 de junio, los militares complotadores en conjunto con la CIA y con sectores de oposición, iniciaron las provocaciones abiertas contra Prats. Una mujer de la oligarquía con aspecto de marimacho, llamada Virginia Cox, cuando Prats se dirigía a su despacho, comenzó a bloquearlo con su auto y a insultarlo. Prats, al parecer creyendo que se trataba de un hombre, interceptó al otro auto y descendió del suyo pistola en mano. En ese momento, varios automóviles rodearon al del general y descendieron a insultarlo grupos de personas confabuladas en la provocación. Prats, debió huir en un taxi que pasó por el lugar. Su auto fue enteramente rayado con frases como: "generales gallinas", "Prats maricón"... Como "por milagro", había numerosos periodistas en el lugar de los hechos. Al día siguiente Prats, sería presentando como insultando, amenazando con su arma e intentando agredir a "una mujer". Era sólo el comienzo de una campaña destinada a obtener su renuncia y garantizar así la conducción del golpe al más alto nivel jerárquico, para garantizar la unidad de las FF.AA. Las provocaciones terminarían por cumplir su cometido. El 23 de agosto, Prats, presentará su renuncia al Presidente Allende, a raíz de una manifestación de mujeres en su contra realizada en la puerta de su casa, en la que participaron esposas de varios jefes de las FF.AA. El día 22, Prats, se había reunido con los 22 generales, pidiendo que se redactara una solución de desagravio a su persona. Sólo 4 generales aceptaron su petición y 18 se opusieron. Entre los que aceptaron el "desagravio", estaba el general Augusto Pinochet.

Sin embargo, antes que se crearan estas condiciones diseñadas en el plan del alto comando golpista, hay un grupo militar que intenta "madrugarlos", incitado por contactos con el grupo fascista "Patria y Libertad". Al día siguiente de la provocación inicial contra Prats, es arrestado un capitán del Regimiento Blindados N° 2, que incitaba a sus compañeros a levantarse contra el gobierno y contra el Comandante en Jefe de las FF.AA. Al subsiguiente, fue relevado de su cargo este comandante de dicha unidad, teniente coronel Roberto Souper. El día 29 se insurreccionaría el regimiento blindado enviando seis tanques que bombardearon La Moneda y liberaron al capitán detenido en el Ministerio de la

Defensa. Conocedores de las actividades golpistas que se desarrollaban por doquier en las FF.AA., estos militares intentaron apresurar las cosas y tomar el liderazgo del movimiento golpista. No obstante, el comando más importante del golpe de Estado en preparación, en estrecho contacto ya con la CIA, esperaba que se cumplieran varias condiciones (como las enumeradas más arriba) para lograr el buen éxito del golpe. Se instó a los amotinados a rendirse, quienes lo hicieron al advertir que no habían logrado arrastrar a otras unidades. De inmediato los dirigentes de "Patria y Libertad" se asilaron en la embajada del Ecuador.

Sin embargo, el Presidente Allende ha sido informado (probablemente por el propio Prats antes de renunciar), que están comprometidos además en un complot para derribarlo, los generales: Bonilla (simpatizante DC, quien habría de morir en un "accidente" después del golpe), Nuño, Baeza, Arellano, Javier Palacio y Torres de la Cruz. Es la ocasión, que ya hemos descrito, en que Allende se propone llamarlos a retiro y la directiva del P"C", consultada entre el 21 y el 23 de agosto, se opone. Pinochet, por su parte, jefe del complot, se las ingenia para convencer al Presidente que es mejor darlos de baja a raíz de la constitución de la Junta Calificadora del Ejército, que debía reunirse a mediados de septiembre. Entretanto, Allende y los dirigentes de la UP., deciden articular un organismo de coordinación entre la CU y las FF.AA., con un plan para oponerse a los intentos golpistas. El oficial de enlace entre las FF.AA., el gobierno y la CUT, para establecer ese plan de "defensa contra el golpe" es: Augusto Pinochet.

Todavía antes del golpe definitivo, habrá un nuevo intento, esta vez encabezado por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General César Ruiz Danyau. Este, aprovechando sus estrechos contactos con EE.UU., intenta anticipar el golpe algunos días, de modo de adquirir un papel predominante en su jefatura. Ante la gravísima crisis política existente, el Presidente Allende ha nombrado un gabinete integrado por los cuatro comandantes en jefe de las tres ramas de las FF.AA. y Carabineros. Ruiz, se propone aprovechar este hecho para obtener el amotinamiento de la Fuerza Aérea y desencadenar el golpe. Para lograrlo, renuncia a su cargo de ministro de Obras Públicas, lo que, dado el propósito del Presidente de contar en su gabinete con los Comandantes en Jefe de las FF.AA. implicaba al mismo tiempo, su renuncia como Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. Sin embargo, Ruiz, ha comprometido a la oficialidad de la Fuerza Aérea a no aceptar su salida como comandante de esa rama de las FF.AA., y a utilizar ese pretexto para amotinarse, arrastrando así al resto de las FF.AA. El sábado 18 de agosto, Allende, se reunió con Prats, con el Jefe de la Armada, Almirante Raúl Montero y con el general, que detentaba la segunda antigüedad en la Fuerza Aérea, después de Ruiz Danyau, el general Gustavo Leigh, hoy miembro de la Junta Militar. Allí les exhibió antecedentes del complot que preparaba Ruiz Danyau, que probaban su participación en planes golpistas y sus vínculos con los norteamericanos en dichos planes y amenazó con denunciar todo esto públicamente, lo que significaba un serio riesgo para el plan general de golpe de Estado. Acto seguido les solicitó que se diera de baja al general Ruiz y que Gustavo Leigh asumiera la jefatura de la Fuerza Aérea. El general Ruiz fue obligado a renunciar a su cargo de comandante de dicha rama de las FF.AA. No obstante no cejó en sus propósitos. Estando ya designado Leigh en su reemplazo, se presentó en uniforme de comandante de la Fuerza Aérea al programa del Canal 13 de Televisión llamado "A esta hora se improvisa". Personalmente participaba en dicho programa y cuando salí de él me encontré con la periodista Frida Modak, jefe de la OIR (Oficina de Información y Radiodifusión de la Presidencia de la República), la cual a instancias del Presidente Allende, había intentado infructuosamente hacerme llegar un mensaje a la sala de emisión del programa, para que denunciara que Ruiz Danyau ya no era Comandante de la Fuerza Aérea. No obstante, los funcionarios del canal 13 le bloquearon absolutamente la posibilidad de hacerme llegar ese mensaje. Entretanto, en el programa, el fascista Jaime Guzmán, miembro prominente del Opus Dei y actualmente ideólogo y asesor de la Junta Militar, cooperaba con la provocación de Ruiz Danyau, señalando: "Estamos ante el hecho más grave que se haya producido en la actual Administración... El Presidente de la República pone como condición, según desprendo de sus palabras (lo dicho allí por Ruiz Danyau), que para que una persona sea Comandante en Jefe de alguna rama de las Fuerzas Armadas, debe ser Ministro de su Gabinete, en un Gobierno eminentemente político. Es decir, el Señor Allende cree que las Fuerzas Armadas son una especie de guardia pretoriana suya... Nunca se había registrado

un caso semejante... Yo sostengo que aquí ha habido un engaño. Porque si a Vd. general, le ha dicho el Presidente que tenía que dejar el cargo de Comandante en Jefe si Vd. no continuaba como Ministro, porque él quería tener a los tres Comandantes en Jefe en el Gabinete, él lo ha engañado a Vd.... Pero mucho más grave es que el Presidente pueda llegar a considerar y a poner como condición a un Comandante en Jefe que integre el Gabinete para seguir siendo Comandante en Jefe" (151). Al día siguiente amanecieron acuarteladas las bases aéreas, solicitando la solidaridad de otras unidades de las FF.AA. No obstante, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, manejado ya por el equipo central golpista, envió emisarios a convencer a los integrantes de la Fuerza Aérea de deponeer su actitud y esperar. Es así, como Ruiz Danyau, por sus ambiciones personales, perdió la opción de ser uno de los integrantes de la Junta Militar y, después del golpe, debió contentarse con un cargo de Rector en la Universidad de Chile.

Ya con la comandancia en Jefe de las FF.AA. en sus manos y con el jefe del complot golpista en íntimo contacto y acuerdo con la CIA y con la DIA, sólo faltaba esperar el momento más oportuno, es decir, cuando se hubieran reunidos las condiciones que hemos descrito brevemente más arriba, para fijar la fecha del golpe. Dicha fecha debió anticiparse algunos días para evitar que el día 12 Allende anunciara su disposición a enviar con carácter de urgencia al Parlamento los proyectos sobre los que se había llegado a acuerdo con la DC; cuando ésta era presidida por Fuentealba. Si no existía mayoría para legislar sobre ellos, el Presidente Allende estaba dispuesto a promulgar las reformas constitucionales aprobadas por la oposición en el Parlamento o a llamar a un referendun si no había acuerdo. La dirección del P" C" le había entregado una carta en que aceptaba el referendun y le daba plenos poderes para obtener el acuerdo con la DC, a costa aún de una rendición prácticamente incondicional. Para el gobierno norteamericano se planteaba, pues, el peligro, pese a la extrema polarización a la que había conducido en conjunto con la oposición al país, de que se impusiera "la predilección chilena por el compromiso político". Es decir, precisamente lo que deseaban los soviéticos.

El momento del golpe, había sido esperado y preparado activamente largo tiempo. Pinochet, declaró a un periodista de Reuter, el 29 de diciembre de 1973: "Mire, aquí hay un memorandum de agosto de 1972. Aquí hay otro fechado en julio, que ya planteaba la posibilidad de tomar el control de la nación. En 1972 nosotros hemos comenzado a preparar unidades para enfrentar a grupos extremistas alrededor de la capital". La CIA, por su parte, como ya hemos visto, reportaba haber detectado a éste, el grupo golpista más importante, en octubre de 1971; y, en enero de 1972, es decir, pocos meses antes de la decisión de la que habla Pinochet, sostienen haberlo penetrado y estar en contacto con su líder. Una de las tareas de esa espera, como hemos demostrado, consistía en frenar los numerosos golpistas, policentristas, suscitados por las voraces ambiciones despertadas por la CIA, la DIA y las diversas fuerzas de oposición, manteniendo, al mismo tiempo, en secreto al comando máximo del golpe. Una razón extra más de este proceder, a la luz de lo ocurrido después del 11, tal vez la de mayor importancia, consistía en mantener la **autonomía** de las FF.AA., frente a los partidos políticos, de modo de establecer un contacto directo con el gobierno de EE.UU., que les permitiera perpetuarse en el gobierno. Esto coincidía plenamente con la nueva línea planteada a través del Informe de Rockefeller, de reemplazar en los gobiernos latinoamericanos a los partidos políticos por las FF.AA. Es así, como el comando golpista, se sirvió incluso de los partidos de oposición, haciéndoles creer que heredarían el gobierno después del golpe, para luego establecerse ellos en el gobierno y obligarlos a un receso forzado. En este sentido, las franquicias concedidas por el gobierno de Allende, para que participaran miembros de las FF.AA. en ministerios, empresas fiscales, servicios públicos y otras repartciones estatales, fueron aprovechadas hábilmente para preparar a miembros de las FF.AA. para las futuras tareas de gobierno. De hecho, los asesores civiles que han requerido son mínimos. Esta es otra razón de que estimularan la confianza del gobierno de la UP en su espíritu institucionalista y de que no desearan anticipar un golpe de Estado que, en otras condiciones, sólo habría servido a los políticos civiles.

Esta articulación orgánica del golpe y la necesidad de reunir ciertas condiciones objetivas para apoderarse del gobierno y poder, luego ejercerlo sin necesidad de tutoría política, es lo que los ideólogos del gobierno (entre ellos el consejero de Allende Joan E. Garcés)

confundieron o aparentaron confundir, con el pretendido espíritu "constitucionalista" y meramente "profesionalista" de las FF.AA. Garcés, por ejemplo —y lo citamos en especial por la gran confianza que Allende tenía en sus opiniones—, durante el gobierno de la UP se hizo cómplice de los dirigentes del P"C" en alabanzas públicas al espíritu "progresista" y "democrático" de las FF.AA. En los análisis posteriores al golpe presenta a las FF.AA., como al margen de la lucha de clases, como espectadores, decididos, dado su espíritu eminentemente legalista y profesional, a apoyar al gobierno si éste lograba que la economía y las instituciones marcharan bien. Como eso no fue posible según él debido a la agresividad de la oposición y a la intervención de la CIA, a todo lo cual se sumaron los desacuerdos y las tendencias "izquierdistas" en la UP, las FF.AA., fueron "arrastradas" por algunos de sus integrantes a intervenir. Es probable que ésta fuera también la opinión de Allende en la parte final de su gobierno, cuando ni el más inocente de los políticos podía ignorar los movimientos golpistas que había en el interior de las FF.AA. En un libro posterior al golpe de Estado, por ejemplo, Garcés, expresa: ... "la actitud de Allende (de marginar a las FF.AA. de la política) no era unilateral, sino que era compartida por las propias FF.AA., que, en cuanto instituciones y haciendo abstracción de sus contrapuestos grupos internos, se asignaron durante el gobierno de la UP un papel profesional, netamente diferenciado de los centros de decisión política dentro del estado". En otro punto sostiene: "Sólo mientras Allende logró identificar con su gobierno y su persona la posibilidad de paz civil y mantenimiento de las instituciones políticas del estado, el aparato armado profesional lo respaldó, reduciendo a la impotencia a los núcleos partidarios de su derrocamiento" (152). El seguir, sin embargo, haciendo gala de tal ingenuidad política después de todo lo ocurrido —y no sólo lo ocurrido después, sino antes del 11 de septiembre— o esconde segundas intenciones, como las de los dirigentes del P"C" interesados en presentar el golpe como obra de unos cuantos traidores, "que apartaron a las fuerzas armadas de su rol apolítico", con la esperanza que éstas les acepten retornar a la política legal en Chile, o bien, el anhelo de salvar sus responsabilidades frente a los errores a los que indujo a Allende. Garcés se atreve a afirmar todo esto, después de los testimonios de la propia CIA acerca de los innumerables grupos golpistas que operaban en el interior de las FF.AA.; después que son conocidos los numerosos intentos de golpes frustrados; después de que él mismo reconoce que "en forma sistemática y deliberada las instituciones militares latinoamericanas... han venido siendo adoctrinadas para enfrentar a un supuesto 'enemigo interno' (las organizaciones sociales populares antioligárquicas o prosocialistas) cuya forma de lucha se teme que sea la insurreccional" (153). ¡Y Garcés, posaba de "marxista" al oficiar de consejero de Allende! Ahora, se esfuerza por salvar la coherencia de los disparates reformistas que inspiró, sosteniendo: "El que en septiembre de 1973 se impongan las fuerzas puchistas no puede invalidar el hecho de que durante tres años acumularon fracaso tras fracaso", y para corroborar este notable juicio, cita a la CIA, cuando ésta afirma ante la Comisión del Senado: "Tuvimos información de que iba a tener lugar (el golpe) unas treinta veces antes de que tuviera lugar realmente"... Y concluye, Garcés... "más allá de los deseos de los golpistas, por más que a estas alturas pueda aparecer paradójico, el significado explícito de la función de las FF.AA., en este período, es el de respaldo armado a la política de la UP" (154). ¡Vale decir: este sujeto intentó treinta veces, infructuosamente, robarme mi dinero!, "lo cual prueba su desinterés y su honradez a toda prueba". ¡Vaya conclusión! El razonamiento de Garcés, tendría un mínimo viso de realidad si, habiendo existido un Alto Mando de las FF.AA., efectivamente más constitucionalista que reaccionario —como pensaba él y el gobierno— hubiera sido finalmente avasallado y sobrepasado por oficiales de menor rango y de menos escrúpulos legalistas. Garcés, en efecto, sostiene que "entre estos últimos (los de rango inferior)... germinó mejor la presión golpista". Sin embargo, ¡oh paradoja!, quienes, una vez removido Prats, comandaron el golpe, fueron los Comandantes en Jefe de las FF.AA., con el apoyo de prácticamente toda la plana mayor de ellas. Ni el propio Garcés puede nombrar en su libro a más de 3 o 4 generales, que se abstuvieran de sumarse al golpe, retirándose prudentemente del servicio cuando éste se iba a materializar, para preservar la "unidad" de las FF.AA., la unidad golpista, naturalmente. Obviamente, Garcés, confunde las tendencias golpistas centrífugas, que por ambiciones caudillistas se hicieron sentir a destiempo entre oficiales de menor rango y debieron ser frenadas, con un pretendido

espíritu "anti-golpista" de quienes lo detuvieron para preparar el golpe en la forma más efectiva. La CIA, por lo visto, sólo se equivocó inicialmente y muy pronto comprendió a quienes debería ligarse. La misma convicción acerca del espíritu clasista reaccionario de las FF.AA., y, muy especialmente, como es natural, de sus Altos Mandos, existía en los sectores de la oposición política al gobierno de Allende. Sólo el gobierno no lo veía o no quería verlo. Arturo Matte, contacto entre esas fuerzas y las empresas multinacionales, según consta en los documentos de la ITT investigados por el Senado yanqui, ya en septiembre de 1970, sostiene: "las Fuerzas Armadas se dan cuenta del gran peligro que representa para la democracia la asunción de Allende al poder. Están de acuerdo en que debe ser denido. No obstante, la jefatura de las FF.AA., y Frei prefieren una salida constitucional (es decir, elección de Alessandri en el Congreso); esto no excluye la violencia -espontánea o provocada"... (155) La CIA, pese a la prisa del señor Nixon, había sistematizado también muy tempranamente, que lo que pedían los jefes de las FF.AA., era tan sólo un pretexto legal, por lo que a ese aspecto toca. El 14 de octubre de 1970, la Central de la CIA instruye a la Estación de Santiago señalándole: "Parece que el golpe... no cuenta con un pretexto o justificación suficiente para hacerlo aceptable en Chile o América Latina. Parece, por consiguiente, necesario crear uno para sostener lo que va a ser probablemente su invocación en un golpe... Pueden incluir varios temas de justificación del golpe para ser utilizados por los militares". (156)

Si el golpe demoró tres años en materializarse, es por el temor a las masas populares; por el anhelo de los militares de prepararse para prescindir de los partidos políticos; y por la división en facciones sediciosas generada, inicialmente sobre todo, por las presiones golpistas ejercidas por el gobierno norteamericano. El pretexto constitucional, en todo caso, ni siquiera era una exigencia perentoria, sino apenas un factor compensatorio reclamado inicialmente, para poder actuar como cuerpo a falta de una preparación suficiente en los otros terrenos: intensificación de la crisis, movimiento social adverso al gobierno, etc. Prueba de ello, es que el golpe se dió sin un real motivo de violación de la Constitución por el gobierno y, tras argumentos "constitucionalistas" de muy dudosa validéz. Se anticipó por lo demás, justamente, cuando los Altos Mandos de las FF.AA., supieron que Allende estaba dispuesto a ceder, aceptando las trampas legales que, le había puesto la oposición.

A mayor abundamiento, para quienes todavía duden del espíritu ultra-reaccionario de la jefatura de las FF.AA., y de su mentalidad anti-constitucionalista, es suficiente contemplar lo que han hecho después del golpe de Estado. ¿Qué queda de la Constitución? ¿Qué queda de las leyes que existían en Chile? ¿Qué resta de las instituciones que antes funcionaban? ¿Cuáles son los partidos políticos o los organismos sindicales, que pueden funcionar? ¿Qué resta de la libertad de prensa y de los derechos ciudadanos? Si hasta los registros electorales fueron quemados, para evitar tentaciones.....

Frente a un testimonio tan irrefutable, que no puede explicarse por un cambio de mentalidad que haya ocurrido de la noche a la mañana, sólo cabe decir: "¡Dios nos libre, de militares tan constitucionalistas!"

5.- La aplicación de la Ley de Control de Armas.

En marzo de 1973, las FF.AA., comienzan a hacer uso para preparar el golpe de Estado del arma que generosamente le habían concedido los partidos de gobierno al aprobar la Ley de Control de Armas. Esta ley fue aprobada por la unanimidad de los parlamentarios de gobierno y de oposición. La ley fue presentada al Senado por el parlamentario de la DC, Juan de Dios Carmona a comienzos de 1972. El 5 de abril de ese año, la Cámara de Diputados celebra una sesión especial para analizar el hallazgo de armas del Ejército en una camioneta, a la que la prensa de oposición señaló falsamente como fiscal y a sus integrantes como miembros de un dispositivo de seguridad del Presidente de la República. Más adelante se comprobaría que uno de los que viajaban en dicha camioneta, Osvaldo Delgado, era "ex-comando" del Ejército, donde hizo cursos de "especialización: paracaidista, comando y hombre rana". El otro de los detenidos, también sospechosamente "ex" militar, confesó haber robado las armas cuando pertenecía a la Escuela de Paracaidistas.

En suma, se trató de una provocación montada por el Servicio de Inteligencia Militar y la CIA, como pretexto para acelerar la aprobación de la Ley de Control de Armas. En la mencionada reunión de la Cámara para tratar de este hecho, se aprobó un proyecto de acuerdo solicitando al gobierno que incluyera en la convocatoria extraordinaria del Parlamento el proyecto pendiente en el Senado de la Ley de Control de Armas. Más adelante, a raíz de la conciliación con la oposición a la que se llegó para resolver el paro de octubre de 1972, a objeto de detener la ofensiva que habían emprendido los sectores populares, luego de una discusión conjunta entre las FF.AA., y el gobierno sobre el proyecto de Ley de Control de Armas de Carmona, éste fue aceptado en lo esencial por el gobierno y aprobado por unanimidad en el Parlamento. Fue publicado como ley, el 21 de octubre de 1972, en el Diario Oficial. La aprobación de esta ley había sido exigida en el punto N° 5 del llamado Pliego de Chile, presentado al gobierno por los gremios de oposición en huelga, durante el paro de octubre del 72. El propio Joan E. Garcés, consejero de Allende, reconoce que dicha ley fue producto de un acuerdo entre el gobierno y las FF.AA. En su libro posterior al golpe de Estado, señala que el proyecto definitivo de esa ley (que fue hecha aún más drástica en el Parlamento por la mayoría opositora), "fue -según el Ministro Tohá- elaborado conjuntamente por el gobierno y el Alto Mando de las FF.AA." Estos antecedentes desmienten absolutamente las evasivas alusiones respecto a dicha ley hechas después del golpe por dirigentes de la UP, que sostienen que su aprobación fue producto de un "error técnico" en la actuación de los parlamentarios de gobierno.

La Ley de Control de Armas, entrega a las FF.AA., el derecho a realizar investigaciones y allanamientos frente a cualquiera denuncia (incluso de un particular) acerca de la posesión de armas por parte de civiles. Condena hasta a 10 años de prisión a quienes posean un arma y califica como tales, no sólo a las armas de fuego, sino a numerosos objetos contundentes o punzantes. Contiene penas que llegan hasta el presidio perpetuo y la pena de muerte, "a quienes maltraten de obra a un miembro de las Fuerzas Armadas". E, incluso, incursionando directamente en el terreno de represión política, la ley condena a "aquellos que tiendan... a alzarse contra los Poderes del Estado".

Los allanamientos practicados en aplicación de la Ley de Control de Armas, cumplieron no sólo la finalidad de detectar cualquier foco posible de resistencia en preparación del golpe, sino de amedrentar a los trabajadores y desalentar de antemano toda posible resistencia. Los trabajadores víctimas de dichos allanamientos fueron tratados con extrema brutalidad, como un anticipo de lo que les esperaba cuando el golpe se llevara a efecto. Uno de los primeros de estos allanamientos fue hecho nada menos que contra el Cementerio Metropolitano, donde fueron violadas numerosas tumbas y se mantuvo a los cuidadores de rodillas, bajo la lluvia, un gran número de horas. El 12 de agosto, con 200 soldados del Regimiento de Montaña N° 19 de Colchagua, se allanó, en la ciudad de San Fernando, un organismo fiscal: el Centro de Mecanización Agrícola, destrozando muebles y materiales y deteniendo a 40 trabajadores. En Santiago, el Grupo 10 de la FACH, utilizando 5 buses con 150 soldados, allanó la industria Cobre Cerrillos, causando daños calculados en más de 2 millones de escudos. En el mismo mes de agosto, el general Manuel Torres de la Cruz (calificado como hemos visto de "allendista"), al mando de la Quinta División del Ejército, realizó un operativo conjunto de 2 mil hombres de tierra, mar y aire, para allanar el barrio industrial de la ciudad de Punta Arenas. Utilizó para ello, tanques, cañones sin retroceso, carros de asalto, helicópteros y aviones, en un evidente ensayo de golpe militar. Los obreros fueron obligados a permanecer 6 horas tendidos sin moverse en el suelo, con una temperatura de bajo cero, golpeados e insultados por la tropa. Un obrero fue asesinado disparándole por la espalda. En todo el operativo se requirió un revolver calibre 22 del cuidador de la fábrica textil Lanera Austral.

Durante los meses de abril, mayo y junio de 1973, se realizó un promedio de tres allanamientos por semana. En el mes siguiente el promedio montó a casi un allanamiento por día y en el mes de agosto se efectuaron más de 45. De los 24 allanamientos que se efectuaron en el mes de julio, 10 de ellos, fueron hechos contra fábricas, tres contra oficinas del gobierno, cuatro contra locales de partidos de la UP, tres contra locales sindicales y, sólo dos, contra organizaciones de oposición..., para guardar las apariencias.

Con estas acciones las FF.AA., iniciaban la ofensiva para derribar al gobierno. Recordemos la opinión ya citada de Pinochet (después del golpe) a la revista *Vea*, donde sostiene:

“el 28 de mayo se dictó una directiva de seguridad interior donde se cambiaron las bases. De la defensa pasábamos al ataque”. El 26 de julio, habría de comenzar el paro de los camioneros, al cual se sumaron en agosto los comerciantes, la movilización colectiva, los profesionales, etc.

Mientras las FF.AA., allanaban brutalmente los centros populares, los grupos fascistas, asesorados por la FF.AA., y por la CIA, desencadenaban, impunemente, una cadena de atentados y sabotajes. Contra ellos no iban dirigidos los allanamientos, pese a que confeccionaban públicamente estar armados. En el propio diario *El Siglo* del 28 de agosto de 1973, realizando un balance de estos atentados desde el comienzo del paro de los camioneros y hasta el 15 de agosto, se habla de 250 actos terroristas de la oposición: 71 contra camiones que no participaban en el paro, muchos de ellos con dinamita; 80 contra microbuses y autobuses, que trasladaban pasajeros; 40 contra vías férreas; 10 contra puentes; 6 contra oleoductos (dejando uno de ellos 2 muertos y 12 heridos); 31 contra fábricas, servicios públicos, centros comerciales, etc. Cinco asesinatos habían sido cometidos hasta el 15 de agosto. Entre enero de 1973 y mayo de ese año, se habían perpetrado más de 200 atentados de diverso tipo por parte de la oposición. De ellos, sólo 100 fueron investigados por los tribunales de “justicia” y las 83 personas inculpadas dejadas en libertad “por falta de méritos”.

Ni siquiera la indiferencia de las FF.AA., contra los reales autores de atentados y sabotajes y, por el contrario, su activa labor de amedrentamiento de las fuerzas populares, sirvieron a los dirigentes del P“C” para sacudirse de su deliberada “ingenuidad”, respecto a la colaboración de los militares con la oposición en la preparación del golpe de Estado. Se limitan a manifestar “extrañeza” frente al carácter anti-popular de los allanamientos y a implorarles, a los jefes militares que los dirijan contra los sectores de ultra-derecha. Todo lo presentan como una “maniobra de la derecha” para “separar” a las FF.AA., del pueblo.

El 23 de julio, en *El Siglo*, se comenta una declaración de la Central Unica, realizada allí por los burócratas del P“C” en el sentido antes señalado, diciendo: “Hasta ahora los allanamientos, la inmensa mayoría infructuosos, como los registrados en la CUT de Osorno, en el Canal 9 de la Universidad de Chile, se han hecho en organizaciones populares, entre los trabajadores. Ninguno ha afectado a los verdaderos promotores de la violencia, entre los que promueven abiertamente derrocar al gobierno, entre los que llaman a las FF.AA., a derrocar al Presidente Constitucional de Chile”. Y prosigue: La CUT emitió una enérgica nota de protesta en contra de los que pretenden oponer a las FF.AA., con los trabajadores”. Luego, cita una parte de esa “enérgica” declaración de la CUT en la cual se dice: “Nos causa profunda extrañeza que los allanamientos se estén realizando exclusivamente contra industrias y poblaciones populares, es decir, contra los trabajadores, en circunstancias que son otras organizaciones como “Patria y Libertad” quienes públicamente han expresado su decisión de armarse, realizar atentados e impulsar subversión”. Y continúa la “enérgica” declaración: “Para nadie es un misterio que la CUT no es una organización que esté conspirando contra el orden... Se pretende una vez más, provocar problemas entre los trabajadores y las FF.AA. Todo ello con miras a debilitar arteralmente las posiciones de quienes apoyamos al gobierno y estamos contra el golpismo”.

Complementando lo anterior, para que no queden dudas de que se mantiene el servilismo frente a las FF.AA., en la página editorial de *El Siglo* se señala ese mismo día: “La declaración de la CUT dice que se pretende provocar una vez más problemas entre los trabajadores y las FF.AA. Los hechos prueban que las intrigas son graves y que tienen que ser desenmascaradas y aclaradas de una vez por todas. Las FF.AA., cuentan con todo el respeto y afecto del pueblo: nadie puede atentar contra esto”.

El día 4 de agosto, se realiza el más brutal de los allanamientos: aquel que ya hemos reseñado contra el centro industrial de Puerto Natales. Ese mismo día, en *El Siglo*, sale una nueva declaración de la CUT en la que se expresa, entre otras cosas: “Los trabajadores estamos dispuestos a participar junto a las fuerzas del orden (léase FF.AA. y policiales) con nuestra organización sindical para impedir que los elementos desalmados logren sus objetivos”. ¡Como se reirían los jefes golpistas de las FF.AA. ante proposiciones tan serviles y estúpidas como esta!

El día 8 de agosto, a un mes del golpe de Estado, aparece una declaración del Comité Central del P“C”, en la que manifiestan tímidamente: “No ocultamos nuestra viva preo-

cupación por la forma en que en algunas partes se ha estado aplicando la Ley de Control de Armas". No obstante, ese mismo día, en la página editorial se dice: "Hoy las FF.AA., están llamadas por la realidad y la confianza que en su capacidad ha puesto el gobierno, a cumplir tareas de transcendencia en los campos del desarrollo económico, de la Defensa y de la soberanía nacional. Los trabajadores no logran comprender estos tipos de operativos, con despliegue de tanques y cañones. ¡Los trabajadores no quieren que prosperen las maniobras de los golpistas que buscan crear odiosidad entre las FF.AA. y el pueblo".

Como contraste entre dos líneas: la de los falsos "comunistas" y la de los verdaderos, al día siguiente, el diario ultra-reaccionario El Mercurio, reproduce escandalizado para atacarlo, uno de los tantos impresos del Partido Comunista Revolucionario, en el que se señala: "Basta de ilusiones. Mientras los reaccionarios allanan, dinamitan, matan trabajadores, nosotros ¿qué hacemos? Poder popular... si, pero con las manos vacías... Nuestro pueblo sólo debe confiar en sus propias fuerzas para conquistar el poder y no en las FF.AA., creadas por la burguesía. ¡A luchar por un ejército popular!... ¡A armar al pueblo política, ideológica y militarmente!".

En el diario oficial del P"C", El Siglo, en cambio, hasta el final se mantiene la actitud de engañar al pueblo y presentar los allanamientos de las FF.AA., como producto de "denuncias irresponsables" de la oposición, destinadas a "enemistar a las FF.AA. con el pueblo". Respecto al más grave de ellos, por ejemplo, al de Puerto Natales, El Siglo señala: "Esta acción de la FACH obedece a las irresponsables denuncias que elementos derechistas formulan a las FF.AA., para que procedan a aplicar la Ley de Control de Armas, en un intento por contraponer a las FF.AA., con los trabajadores". Su preocupación principal no es la suerte de los trabajadores vejados por estos allanamientos o su suerte si las FF.AA., toman el poder, sino la posibilidad que hechos de esta especie malogren la mentirosa imagen que ellos han creado de las FF.AA., y que el pueblo comience a organizarse para combatir contra ellas. Las directivas del resto de los partidos de la UP se encuentran, así mismo, paralizadas por los propios elogios a los que han sido arrastrados respecto a las FF.AA. Incluso, el Secretario General del MIR, en su discurso pronunciado en el Teatro Caupolicán de Santiago, en mayo de 1972, en una concentración del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR), expresa: "Con el proyecto de Carmona (de la Ley de Control de Armas), se quiere arrastrar a las FF.AA., a tareas policiales y represivas de gobierno interior, que sólo han asumido en países dictatoriales como Brasil, Uruguay, Grecia o Indonesia. Se quiere colocar a las FF.AA., contra el pueblo. Se pretende colocar a las FF.AA., al servicio de los odios, rencores y rivalidades de los parlamentarios de la reacción".

6. Oposición a toda preparación del pueblo para el enfrentamiento armado.

Las fervientes alabanzas a las FF.AA., reaccionarias, como ya lo hemos señalado, son consustanciales al proyecto de régimen de explotación que pretende imponer el P"C" tras el disfraz de "socialismo", a su proyecto de capitalismo de Estado, en alianza con las fuerzas pro-imperialistas. En aras de este proyecto, su mayor temor es que el pueblo sea ganado por las corrientes revolucionarias y comience a prepararse para combatir con las armas. Esta labor de desarme -ideológico y material- del pueblo, se mantiene a través de todo el gobierno de la UP, se continúa manteniendo durante el golpe de Estado, y se mantiene incluso hoy, en contra de una resistencia al fascismo destinada a derribarlo.

Los planteamientos al respecto del PCR y de otros sectores antireformistas de la UP o cercanos a ella, fueron ridiculizados, caracterizados como "provocaciones ultra-izquierdistas" o como posiciones "aventureras". Todo intento de formar grupos armados en el seno del pueblo es condenado formalmente y reprimido. Ya el 10 de octubre de 1970, Daniel Quintana, expresa en El Siglo, en tono paternalista y sobrador: "en los grupúsculos de ultraizquierda, puede haber y hay evidentemente muchos de buena fe, niños equivocados, simples buscadores de emociones fuertes y acaso, muy en el fondo de su corazón, seres bien intencionados". Orlando Millas, por su parte, el 13 de junio de 1971, sostiene en el mismo periódico: "Las tesis en favor de un enfrentamiento armado y las apelaciones irresponsables a la violencia deben terminar de una vez y, si no terminan, ser definidos y

denunciados a fuego como comportamientos opuestos al gobierno popular”.

El Presidente Allende, así mismo, dada su formación social-demócrata y la influencia de la masonería, sería arrastrado con facilidad a estas posiciones de los “comunistas” prosoviéticos. El 15 de septiembre de 1971, la CUT organiza una concentración para oponerse a maniobras golpistas que se han detectado. Numerosos sectores de las masas gritan reclamando armas para oponerse a la sedición. Allende expresa, entonces: “No se trata de pedir demagógicamente armas, porque las armas están en la convicción política y en la decisión de lograrla; las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile constituyen instituciones que reflejan su sentido profesional y acatamiento de la constitución y la ley, y por eso es que soy presidente de Chile”. Al mes siguiente y ese mismo año, en conferencia de prensa, Allende dirá: “En el país no hay más Fuerzas Armadas que las que establece la Constitución Política, es decir, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Por lo tanto, todo grupo armado que trate de actuar, está creando problemas al Gobierno”. Señaló luego: “que se han dado instrucciones terminantes para que apenas sean detectados estos grupos armados, pasen a los Tribunales para ser juzgados por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Agregó que el gobierno actuará implacablemente, cualquiera sea el nombre o el apellido político de las personas que se vean implicadas en maniobras de este tipo”. (157)

Esta posición no es sólo de los momentos iniciales de su gobierno. Se mantiene hasta el final. En el crítico mes de agosto de 1973, el día 11, publica el diario *El Siglo* sus declaraciones con motivo de la designación del gabinete militar; en las que reitera: “En este país no habrá más Fuerzas Armadas que las que establecen la Constitución y la Ley. En este país no habrá ejército paralelo. En este país se mantendrá la verticalidad del mando. En este país las FF.AA., Carabineros e Investigaciones, han escrito en la historia del desarrollo democrático su lealtad y su acatamiento al poder civil. Por eso el gobierno rechazará toda tentativa de infiltración subversiva en las FF.AA., Carabineros e Investigaciones”. No obstante, el mes anterior, el mismo periódico había publicado el día 8 una entrevista a Allende, en la que deja traslucir las dudas que le asaltaban y su disposición -aunque débil y vacilante- a apelar al pueblo para oponerse a los intentos de derrocar al gobierno. Recordemos que Allende, al menos, tuvo intenciones de crear, aprovechando la Ley de Defensa Civil, grupos cívicos no armados (pero que pudieran serlo en el momento oportuno), capaces de cooperar con los sectores “leales” de las FF.AA., a aplastar a los grupos fascistas y a los sectores golpistas de las FF.AA., cuando estos intentaran un *putch*. En la entrevista mencionada señala: “Hemos confiado, confiamos y seguiremos confiando en las FF.AA., en las Fuerzas del Orden de Chile. El programa de la Unidad Popular establece que no habrá otras Fuerzas Armadas -y lo he repetido hasta la saciedad- que las que establece la Constitución y las leyes. **Pero si viene una guerra civil, desaparecen los programas, desaparece la Constitución y supongo que un gobierno tiene el derecho y la obligación de defenderse como pueda y como sea...** Cuando yo lo he estado diciendo al pueblo, que creo en lo que se llama el poder popular, lo concibo y lo acepto tan sólo como una forma de organización del pueblo para cooperar a la dirección del gobierno. Entonces, tengo que indignarme, cuando arteramente, los mismos que antes estarían esperando que fructificara el atentado subversivo, buscan ahora el camino para pretender decir que son los partidos de la Unidad Popular, que es la CUT, que es el gobierno el que va a armar al pueblo y está creando el poder popular aparte del gobierno... Yo tengo la evidencia y la certeza de que la inmensa mayoría de los soldados de Chile, no aceptarán jamás el papel que algunos pretendieran darle a las FF.AA. Ni en su historia ni en su tradición está el poder convertirse en satrapía para aplastar a los trabajadores, para aplastar al pueblo”.

La conclusión correcta aunque no, claro está, para el proyecto que alentaba el P“C” en Chile, la sacará la viuda de Salvador Allende después del golpe de Estado y del asesinato de su marido por los militares. En entrevista al periódico *Excelsior* de México, el 20 de Septiembre de 1973, señaló: “No es suficiente llegar al poder por las elecciones. El pueblo debería haber estado armado o tener un Ejército a su servicio”. ¿Hasta que punto ella expresó en esa espontánea declaración inicial las conclusiones a las que comenzaba a arribar -aunque demasiado tarde- el propio Presidente Allende? Es difícil saberlo, pues, muy pronto, su viuda cayó en manos de la campaña internacional organizada por los dirigentes del P“C” y de la Unión Soviética, destinada a ocultar sus responsabilidades en lo ocurrido en Chile y a interpretar los hechos a su manera. Nunca más se le volvió a escuchar declara-

ciones de esta especie.

La política de la dirección del P“C” y de quienes los siguieron en la UP, frente al implacable y progresivo compromiso de las FF.AA., con los planes golpistas del Pentágono y de la CIA, así como de los sectores reaccionarios internos de oposición, fue a la vez de bravatas y amenazas y, en última instancia, de desmontaje, sabotaje y desertión frente a todo intento de resistencia al golpe. Las bravatas y amenazas, son características especialmente de la primera parte del gobierno de Allende, aunque no faltan tampoco algunas en su etapa final y contribuyeron, finalmente, puesto que sólo eran eso: bravatas y amenazas, a hacer más brutal la represión contra el pueblo.

Uno de los que más se destacó en estos alardes de “lo que se haría” en caso de que la oposición intentara derribar al gobierno, fue Luis Corvalán, el Secretario General del P“C”. El 6 de septiembre de 1971, en el Aniversario de las Juventudes Comunistas expresa: “Se dice que la vida tiene muchas vueltas. Que tenga vueltas la situación chilena eso lo vamos a ver. Pero entretanto podemos decir que nadie nos quitará lo bailado, que vamos a pelear contra cualquier intento de volver atrás y que desde luego hay cosas irreversibles... Nosotros sabemos que hay problemas incluso gérmenes de descontento en el seno del pueblo por tal o cual asunto que no se soluciona o que no resuelve bien. Pero al mismo tiempo sabemos que inmensa fuerza y reserva tiene la revolución chilena. Y estas se jugarán enteras en contra de aquellos que pretendan hacer girar hacia atrás la rueda de la historia. En las últimas semanas los reaccionarios se sienten más alentados en sus sueños de recuperar el Gobierno. El golpe ‘gorila’ de Bolivia les ha caído como de perilla. Se envalentonan en vano. Porque no aflojaremos camiseta ni a cañon. Que esto lo tengan presente y después no se lamenten si el pueblo les saca la cresta”. (158) El 4 de diciembre de ese mismo año, Corvalán, diría por cadena de emisoras: “Esta semana han ocurrido una serie de hechos graves que ponen de relieve el torvo propósito de un sector reaccionario de provocar el caos y derribar el gobierno. Frente a ello, lo primero que debemos decir, para que los facciosos no alienten la menor sombra de duda sobre nuestra actitud, es que no van a encontrar luz verde para la sedición y todos los que vengan por lana saldrán esquilados... La clase obrera y el pueblo de Chile están dispuestos a no permitir que vuelvan a salir bandas fascistas a la calle. No permitiremos otra asonada como la del miércoles. Estas no son simples palabras. Esta es la voluntad de millones de hombres y mujeres del pueblo, voluntad que compartimos plenamente los ciento cincuenta mil militantes de nuestro Partido y el medio centenar de miles de aguerridos jóvenes comunistas. Los fascistas no pasarán. En la cancha se verán los gallos!”. (159) No obstante, las bandas fascistas se apoderaron casi sin resistencia de las calles y lo señalado por Corvalán, al contrario de lo que expresara, resultó ser “simples palabras”. El mismo día en que hablaba es asaltado impunemente el local de las “aguerridas Juventudes Comunistas” y hablando con ese motivo, Corvalán insiste: “Pretenden derrocar al Gobierno Popular. Crear un clima caótico para buscar una salida golpista. En ello están empeñados y hacia ese fin están encaminados sus pasos. Pero se encontrarán con un pueblo movilizado, con una clase obrera dispuesta a todo para defender sus conquistas. Esta gigantesca muralla humana parará cualquier intento reaccionario y golpista con energía y violencia, en la misma medida en que la derecha utilice la fuerza. ¡Si siguen conspirando los ‘momios’, el pueblo les sacará la cresta!”. (160)

En el mes de octubre de 1971, aparecen declaraciones de Orlando Millas, de Isidoro Carrillo, gerente de la mina de Lota y miembro del CC. del P“C” y de Victor Diaz, también miembro del CC. Todos ellos hablan en la Conferencia Nacional celebrada por el P“C”. El primero señala: “Por eso mismo, cabe notificar que el pueblo no tolerará se traicione a Chile, que si quieren lucha la habrá y que todo intento de alzar la mano contra el Gobierno del Presidente Allende será aplastado ejemplarmente”. Victor Diaz repite lo dicho por Millas: “El pueblo no tolerará la traición a Chile. Todo intento de alzarse contra el gobierno popular será aplastado ejemplarmente con todo el peso de la ley y mediante la movilización combativa y unitaria de las masas”. Isidoro Carrillo, por su parte, señala: “La Conferencia servirá para emprender la movilización del pueblo, para defender las conquistas obtenidas, y a la vez para notificar a los enemigos del pueblo que la revolución no la detiene nadie, aunque se enoje el imperialismo yanqui”. (161) Carrillo, sería encontrado por los militares a raíz del golpe en el local de su sindicato y fusilado junto a otros dirigentes. Esperaban allí instrucciones de la dirección de su partido de qué hacer frente al

golpe de Estado...

En el año 1972, Corvalán, todavía mantiene (al menos de los dientes para fuera), opiniones semejantes. En una entrevista concedida y publicada luego como folleto, con el nombre: "Corvalán, 27 horas", dice: "Si las fuerzas reaccionarias o si una parte de las fuerzas reaccionarias se lanzaran mañana por el camino de la sedición y ella estallara, el Gobierno, todos los partidos de la Unidad Popular, la clase obrera y el pueblo se cruzarán en su camino y se propondrán aplastarlas con decisión y con rapidez, recurriendo a todos los medios a su alcance. Esa es nuestra voluntad, esa es la voluntad popular, la voluntad del Gobierno, y esa es también nuestra obligación. Ese es nuestro deber con la patria y con la revolución".

Luego, ante una pregunta del periodista, quien le señala que el "que las fuerzas populares en Chile estén sin armas facilita el triunfo de una insurrección de derecha", Corvalán responde:

"La clase obrera y el pueblo tienen sus armas, y una de las más poderosas es la huelga general. No puede haber duda en el sentido de que frente a una intencionalidad tal —y esta es la orientación que ha dado la Central Unica— los trabajadores del país irían a un paro completo y nacional de sus actividades, con la ocupación de industrias, y ya eso sería muy importante, yo diría decisivo. Pero, además, el proletariado y el pueblo podrían contar —y yo creo que contarán— con otros elementos, con todo lo que tuvieran a mano, hasta con herramientas de trabajo convertidas en armas de combate". ¡Y éste es el que califica de "aventureros" a quienes propiciaban un armamento y una preparación seria del pueblo para el enfrentamiento armado!

Todavía en enero de 1973, en plena campaña electoral para renovar el Parlamento, Corvalán continúa con sus amenazas: "No les importa nada la suerte del pueblo —dice en un mítin frente al Palacio de Gobierno— ni los destinos de Chile. Saben que sus propósitos revanchistas, cualquiera intencionalidad de derribar al Gobierno, sea mediante la sedición o la utilización de un resquicio constitucional, como sería el de acusar y destituir al Presidente de la República, significaría lisa y llanamente arrastrar al país a un baño de sangre. Cuando escriben en las murallas la palabra 'Yakarta', que es el nombre de la capital de Indonesia, donde un golpe de estado se tradujo en el asesinato de cuatrocientos mil patriotas en menos de 24 horas, están confesando hasta donde son capaces de llegar en su sed de sangre. Una vez más decimos que no queremos el enfrentamiento y que haremos todo lo posible por evitarlo. Pero, como el que busca encuentra, si la reacción se lanza por ese camino, encontrará su merecido (162).

Sin embargo, todas estas bravuconerías cesaron después de la elección de marzo de 1973. Más concretamente, en el Pleno del Comité Central que celebra el P" C" a fines del mes de mayo. Allí se levanta de manera oficial la consigna meramente derrotista: "no a la guerra civil", que ya había usado por su cuenta Volodia Teitelboim, en su pañidera campaña a Senador. ¿A qué se debe este brusco cambio? ¿Al fracaso del viaje realizado ese mes por el general Prats a la URSS?. Probablemente ello influyó. Pero lo más decisivo fue que ese mismo mes la dirección del P" C", constató que todos sus esfuerzos por lograr alguna base de sustentación en el seno de las FF.AA., habían fracasado. Prats estaba cada vez más aislado. En su ausencia los Altos Mandos de las FF.AA., terminaron por unirse por completo en la formulación de su plan golpista dirigido a alto nivel y pasaron de la planificación a la acción. Como lo señalara Pinochet en una entrevista posterior al golpe: "en mayo se dictó una directiva de seguridad interior donde se cambiaron las bases. De la defensa pasábamos a la agresión". Ese mismo mes, por lo demás, se hundieron las esperanzas de la directiva del P" C" de lograr un pacto con la DC. La directiva del PDC fue controlada luego de una elección interna —ahora oficialmente— por el sector de Frei, que había impedido todo acuerdo.

Por primera vez, los dirigentes del P" C" y aquellos sobre los que influían en la UP, comienzan a enfrentarse con la evidencia de que en las FF.AA. se prepara un golpe de Estado, al servicio del imperialismo y de las fuerzas internas más reaccionarias. Anteriormente, en su subjetivismo y en su seguidismo respecto a sus ideólogos soviéticos y a fuerza de engañar a la opinión pública acerca del papel de las FF.AA. habían terminado por convencerse a sí mismos que éstas jugarían el papel de árbitros más o menos imparciales, si se producía un enfrentamiento violento entre las fuerzas del gobierno y de la opo-

sición. Necesitaban a las FF.AA., reaccionarias para implantar su capitalismo de Estado, se dedicaron a alabarlas con ese propósito y eso mismo los indujo a pensar que podrían realmente contar con ellas en caso de una rebelión armada de sectores de la oposición. Es así, como los dirigentes reformistas de la UP, llegaron a pensar que un eventual enfrentamiento armado de la oposición contra el gobierno, podía reducirse a un choque entre fuerzas civiles. Creyeron, además, que una vasta campaña publicitaria contra la guerra civil y la oportuna intervención de los militares para detener un enfrentamiento de esa especie, determinarían que él fuera de corta duración, imponiéndose luego la ansiada conciliación que anhelaban. Es por ello que Corvalán, en la entrevista ya citada de fines de 1972, señala: "Yo he hablado de una situación de fuerza, o de una situación extraconstitucional, de la salida de los reaccionarios; o de una parte de los reaccionarios, de los marcos de la Ley y del marco de la Constitución y del empleo, del uso de armas por parte del adversario por recuperar el Gobierno del país, que en el caso extremo, según el deseo de una minoría enloquecida, podría llegar a la guerra civil. Yo pienso —agrega— que incluso una situación de ese tipo, en este tiempo, sería más o menos pasajera. Me parece difícil que una lucha tal demore mucho tiempo. Yo creo que se resolvería más o menos con relativa rapidez". Y luego, agrega, respondiendo a la pregunta del periodista: "¿Por qué?" "Porque este país no creo que admita una lucha larga de esa naturaleza. Por eso me parece que en pocos días o en pocas semanas se definiría la situación... Me baso en el hecho de que el 90 por ciento del país rechaza la guerra civil".

Se trata de los momentos en que la directiva del P" C", junto con proseguir su campaña de adulación a las FF.AA., con pintar con colores dramáticos lo que significaría una guerra civil, formula, al mismo tiempo, drásticas amenazas y sostiene que combatiría "transformando hasta las piedras en armas", para aniquilar a los que intenten derribar el gobierno. En el bien entendido, claro está, de que esa "minoría enloquecida" de la que habla Corvalán, será sólo de civiles.

En el mes de mayo de 1973, sin embargo, si bien se mantiene la campaña "no a la guerra civil" y, más aún, se oficializa en el Pleno del Comité Central del P" C" celebrado ese mes, ella ha cambiado ya de contenido y de significación. Como hemos señalado, ya a estas alturas existe la evidencia de que sectores decisivos de las FF.AA., están comprometidos con los planes sediciosos de la oposición. Sin embargo, ni el P" C" ni sus seguidores en la UP, pueden decir esto en voz alta. Llamar abiertamente a conjurar un golpe de Estado militar, significaba movilizar al pueblo a enfrentarse con las FF.AA., y ya hemos visto las razones por las que jamás la dirección del P" C" estaría dispuesta a emprender un camino de esta especie. En consonancia con esa situación, la campaña tras la consigna: "no a la guerra civil", adquiere características verdaderamente protestas. Como existe ya conciencia que quienes anhelan el golpe no constituyen una simple "minoría enloquecida" de civiles y que toda amenaza de combatir a "sangre y fuego" a quienes desencadenen una guerra civil, aunque no se hable de golpe de Estado, se volvería contra las FF.AA., cesan por completo las bravatas y amenazas anteriores. El "no a la guerra civil", por lo tanto, deviene en una campaña absolutamente fuera de foco, pues nadie en la oposición civil piensa enfrentar una guerra civil y sólo tienen por misión crear las condiciones y pretextos legales para el golpe de Estado en preparación, el "no a la guerra civil" de Corvalán y los suyos, sólo mueve a hilaridad en las filas de oposición. En efecto, el papel de las fuerzas opositoras al gobierno, en esos momentos consistía en promover la Reforma Constitucional de las Tres Áreas, destinada a crear un conflicto irreversible entre el Ejecutivo y los otros poderes públicos; en impulsar una campaña tendente a acusar de fraude electoral al gobierno en los comicios de marzo de 1973; en promover la huelga de transporte, comercio y otros gremios; en la destitución sistemática de los Ministros de gobierno; en facilitar la aplicación de la Ley de Control de Armas; en diversas provocaciones destinadas a obtener la renuncia del general Prats como Comandante en Jefe de las FF.AA., etc. etc. La oposición, pues, tenía por misión sólo el crear las condiciones sociales y fabricar los pretextos legales, para que los militares procedieran a destituir el gobierno. Es explicable, por lo mismo, que replicaran con sorna y cinismo a los clamores de la propaganda del P" C" empeñada en pintar en forma apocalíptica los horrores de una guerra civil. Jorge Navarrete, por ejemplo, representante de Frei y su equipo en el programa político más difundido de la televisión chilena ("A esta hora se improvisa"), se permitió afirmar allí:

“precisamente para evitar los horrores de la guerra civil de que se nos habla, creemos que la mejor solución es que las FF.AA., intervengan a un gobierno, que se ha salido de la Constitución y de la legalidad y ha conducido el país a una crisis económica y política irreversibles”. Luego, al preguntársele si con esa afirmación está propiciando un golpe de Estado, respondió que él, “personalmente”, prefería un golpe de Estado a los “horrores” de una guerra civil.

A esas alturas, Corvalán y los suyos no hablan ya de un enfrentamiento que durará sólo algunos días, pues “el 90 por ciento del país rechaza la guerra civil”. El 28 de mayo, por el contrario, Corvalán, afirma en *El Siglo*: “Los autores de la escalada pretenden restarle importancia y veracidad a las denuncias que han hecho los sectores populares, el P “C” en especial, (acerca del peligro de la guerra civil). Para eso se han propuesto desprestigiar una campaña que ha crecido extraordinariamente... No faltan quienes creen que exageramos el peligro, o simplemente que no hay tal. Para que haya guerra civil, dicen, tendría que producirse una división en las FF.AA., y éstas se mantienen unidas. La realidad indica —prosigue— que la sociedad chilena está siendo dividida en dos mitades: que estamos a un tris de un conflicto de poderes, que la atmósfera política se recarga de odio; es decir, que se dan o se van dando los factores principales que pueden conducirnos a una lucha fratricida. Y ésta en cierta escala podría comprometer sólo a los civiles”. Luego, en prevención de las burlas y de la risa que ésta última afirmación causaría en los medios de oposición, plenamente enterados de la preparación del golpe de Estado, agrega una velada amenaza de que esa “división” alcance también a las FF.AA. “De otra parte —dice— es cierto que las FF.AA., se mantienen unidas en cumplimiento de sus deberes profesionales y es en interés del país que siga siendo así. Pero cuando en la sociedad chilena se acumulan los elementos que conducen a la ruptura violenta de las normas que rigen el orden interno y hay quienes quieren que la lucha de clases se transforme en un enfrentamiento armado, hasta la unidad de los institutos militares puede sufrir quebrantos, toda vez que no existe institución ni persona del todo impermeable a las corrientes en pugna”.

En esencia, la consigna final de la dirección del P“C”, fue una consigna torpe, equivocada, pues no daba en el blanco de lo que ocurría, y, deliberadamente ambigua, mitad amenaza irresponsable (en especial al comienzo) y mitad súplica “humanista” y rendición anticipada, ante quienes se proponían derribar al gobierno. Cada vez fue menos una amenaza y en mayor grado una actitud suplicante frente a los reaccionarios. Se trató de una consigna desmovilizadora del pueblo y coherente (en su extrema incoherencia) con la política habitual de tales oportunistas, de cifrar esperanzas en imploraciones a sus adversarios. Plantean: “no a la guerra civil” como consigna central, precisamente en los momentos en que tanto ellos mismos como sus opositores, están seguros que no habrá guerra civil, pues el pueblo está inerme y las FF.AA., unidas en torno al golpe. En los hechos, por lo tanto, se trataba de una consigna destinada a que el pueblo aceptara una rendición completa con tal de evitar los “horrores de una guerra civil” o, más concretamente, del golpe de Estado, aunque no se atrevían a llamar a las cosas por su nombre.

Tal política de cobarde apaciguamiento, corresponde a la línea diseñada ya en 1972 y expresada en la larga entrevista citada de Corvalán, política que habría de reiterarse oficialmente como táctica a seguir, en el Pleno del Comité Central del P“C”, de mayo de 1973. En dicha entrevista señala: “lo que está planteado hoy es, ante todo, que en un instante de dificultades graves, las fuerzas reaccionarias traten de terminar con el gobierno actual por caminos extraconstitucionales o supuestamente constitucionales. Si esto no ocurriera —y nuestra obligación es hacer todo lo posible porque esto no ocurra— en otros términos, si logramos atar las manos del enemigo, impedir el golpe de Estado, impedir la sedición y asegurar la marcha constitucional del país; si logramos, por lo tanto, que el Gobierno del Presidente Allende termine su período y cumpla su Programa, por lo menos en lo fundamental, podremos conquistar a aquellos sectores populares que en este minuto no están con nosotros o pudieran estar llenos de dudas e incomprensiones. Y en tal eventualidad no veo la posibilidad de que el adversario pudiera recuperar tan fácilmente las posiciones perdidas a través de las elecciones de 1976”.

En mayo de 1973, esta táctica puramente defensiva y el anhelo de una alianza a cualquier precio con la DC, se refuerza aún más, tanto por las amenazas ya muy concretas de golpe como por la convicción de que si logran llegar al 76, la Unidad Popular no tiene nin-

guna chance de triunfar electoralmente. Lo más urgente, sin embargo, dada la lógica oportunista de quienes hegemonizan la UP, es que, por lo menos, se les permita durar hasta el 76, sin ser barrido antes por un golpe militar. Eso dejaba una remota esperanza de alcanzar la soñada alianza con el populismo pro-yanki. Es así como Corvalán plantea como línea táctica en el mencionado Pleno de mayo del 73: "Llegar a las elecciones de 1976 y asegurar el triunfo de un nuevo gobierno popular", obviamente, convenciendo a los que "no están con nosotros"... o están "llenos de dudas e incomprendiones".

Entre tanto, puesto que no estaban dispuestos a movilizar realmente al pueblo para defender al gobierno (como fanfarroneaban en sus amenazas anteriores), sólo les resta describir en forma terrorífica la guerra civil, para intentar desalentar el golpe de Estado o, en último caso, todo intento de resistencia a él, que haría más difícil, si él se llevaba a cabo, la proyectada alianza futura con la DC, que debía contar con el beneplácito de las FF.AA. Al decir: "no a la guerra civil", deponiendo de palabra y de hecho todo intento de organizar la resistencia al golpe, estaban de antemano deslindando campos con cualquiera que intentara oponerse al golpe. Estaban señalando anticipadamente a los golpistas: "no seremos nosotros quienes nos cruzaremos en vuestro camino, ténganlo en cuenta". En los hechos, sólo se trataba de la continuación de su política de servilismo y elogios a las FF.AA., a objeto de merecer, esta vez bajo la muy concreta amenaza de un golpe, su tolerancia para continuar engañando al pueblo. No es más que la actitud lógica de quienes necesitan contar con las FF.AA. reaccionarias, en su anhelo de transformarse en explotadores. Tal consigna, solo era la quinta esencia de la misma política traidora y capitulacionista, que practicaron durante todo el gobierno de la Unidad Popular.

El 8 de julio de 1973, en una concentración realizada por su partido en el teatro-circo Caupolicán de Santiago, Corvalán implora una vez más: "Siempre hemos sostenido —y lo reiteramos hoy a pesar de los sucesos recientes— que en las condiciones de Chile existe la posibilidad real de llevar a cabo la revolución anti-imperialista y anti-oligárquica y de marchar al socialismo sin guerra civil, aunque, naturalmente en medio de una intensa lucha de clases.

El enemigo —agrega— trata de tapiar por completo esta posibilidad. Nosotros debemos hacer lo contrario. Mientras ella no esté del todo cerrada, debemos trabajar por mantenerla abierta y ensancharla. Ello va en interés del pueblo, de las generaciones presentes y futuras, de la seguridad de la Patria. La guerra civil, además de llevar consigo sufrimientos indescriptibles, vidas tronchadas, pérdidas materiales irreparables colocaría a Chile en la indefección, concretamente, frente a los gorilas del altiplano que, con la ayuda de países más poderosos, sueñan avanzar sobre parte de nuestro territorio nortino". (163) La parte final del argumento está obviamente destinado también a convencer a las FF.AA., de los peligros de una situación de violencia en Chile.

Toda conducta práctica posterior de los dirigentes del P' C', fue coherente con esta política capitulacionista frente a los golpistas. Semanas antes del golpe fueron retiradas las pocas armas que existían en poder de militantes del P' C'. En 1974, me tocó conocer en Perú a militantes de ese partido, obreros de la gran industria textil estatizada "Hirmas", quienes, en su ingenuidad, alababan la "previsión" que habían tenido los dirigentes de su partido al obligarlos a entregar las armas que tenían, poco antes del golpe. "Imagínense lo que habría sucedido, comentaban, si nos encuentran con ellas". Por su parte, los dirigentes de la CUT, presidida por un miembro de la dirección del P' C', dieron orden a los trabajadores de permanecer en sus sitios de trabajo, es decir, exactamente lo mismo que exigieron los militares golpistas al establecer un toque de queda, de día y de noche, por varios días. Eso es lo que deseaban: mantener inmovilizados a los trabajadores, mientras las tropas armadas controlaban los centros vitales y cercaban los sitios de trabajo para asesinar o encarcelar a quienes figuraban en sus listas negras. Joan E. Garcés, cuenta al respecto, la siguiente conversación sostenida en la mañana del día 11 de septiembre en el Palacio de Gobierno, con Jorge Godoy, Ministro de Trabajo, ex-presidente de la Central Única de Trabajadores y miembro de la Comisión Política del P' C'. "Compañero ministro..., dice Garcés, parece que el golpe afecta esta vez tanto a la Marina como a la Aviación y el Ejército.... Cada minuto que pasa es precioso... Me pregunto si no convendría que los trabajadores se desplegaran hacia algunos objetivos concretos, concentrados dentro de las industrias". Y Godoy, responde: "No. Los trabajadores están bien en sus centros de trabajo.

Allí saben lo que tienen que hacer". Garcés, comenta recordando su reflexión del momento: "La respuesta es tajante. No juzgo oportuno insistir. Pero no entiendo. Las fuerzas insurrectas están empezando a desplegarse por la ciudad. En cambio, los trabajadores están inmovilizados en sus fábricas. Ante un adversario en movimiento, centralmente coordinado, dotado de medios ofensivos y de aprovisionamiento infinitamente superiores a los pocos centenares de fusiles y metralletas a los que tienen acceso los trabajadores, éstos esperan en puntos fijos, prácticamente desconectados unos de otros. Como plan de combate, no veo su adaptación al momento que se vive. **Más bien parece un plan de no combate**". (164) Justamente, se trataba de lo último que plantea Garcés en su reflexión: "un plan de no combate". La rendición frente al golpe, que planeó la dirección del P" C" desde que oficializó su consigna de: "no a la guerra civil", la cual, obviamente, sólo tenían un efecto desmovilizador sobre los trabajadores, entre los cuales la UP tenía una influencia dominante. Para desarmar a quienes no estaban dispuestos a acatar esta orientación capitulacionista se dictó y aplicó, precisamente, la Ley de Control de Armas. Poco después de su conversación con Garcés, el ex-presidente de la CUT, Ministro de Trabajo y miembro de la Comisión Política del P" C", Jorge Godoy, habría de aparecer, a exigencia de la Junta Militar golpista, por cadena de radios y televisión, llamando a los trabajadores a deponer toda resistencia y a obedecer al nuevo gobierno. Hasta el momento no se conoce ninguna condenación o siquiera crítica de la directiva del P" C", a esta actitud traidora de un miembro de su Comisión Política. Se trataba, por lo tanto, de una decisión traidora de toda la dirección de su partido. De esta manera se "cumplieron" las promesas de Corvalán de "sacarles la cresta" a los que intentaran derrocar al gobierno; su fanfarronada de que "en la cancha se ven los gallos"; su tajante afirmación, de que: "se parará cualquier intento reaccionario y golpista con energía y violencia"... , pues, esa es ' nuestra obligación. Ese es nuestro deber con la patria y la revolución".

En cambio, "los ciento cincuenta mil militantes de nuestro Partido y el medio centenar de miles de agueridos jóvenes comunistas", que, según Corvalán, harían efectiva la consigna: "¡Los fascistas no pasaran!", fueron conducidos por sus dirigentes a una rendición incondicional, que costaría la vida o largos años de cárcel a gran parte de ellos, sin siquiera intentar oponerse a las FF.AA. reaccionarias.

A esa misma posición de capitulación ante los golpistas, largamente planificada y preparada por los dirigentes 'comunistas', fueron arrastrados el resto de los dirigentes de la Unidad Popular. Según narra Garcés: "En los mismos momentos que Allende y su equipo personal resolvían rechazar la oferta de rendición y continuar resistiendo, otra reunión tenía lugar en la industria Sumar. La del Comité Político de la Unidad Popular. Tras media hora de deliberación, agrega, los dirigentes de los partidos políticos llegaban a una conclusión: no ofrecer resistencia". (165)

Es así como el gobierno norteamericano, recogiendo los frutos de una paciente y prolongada labor en las FF.AA., chilenas, en aplicación de la política recomendada por Rockefeller ya en 1969: de reemplazar en latinoamérica a los partidos políticos por los militares, obtuvo en Chile una fácil victoria aniquilando, con una mínima oposición, a decenas de miles de chilenos que se oponían al imperialismo; encarcelando por diversos períodos a más de 100 mil; y, obligando a emigrar al extranjero a varios centenares de miles. De ese modo, el imperialismo norteamericano, agregó un nuevo país, un nuevo eslabón a la cadena de dictaduras militares, que se ha propuesto implantar en América Latina en defensa de sus intereses.

Ninguna autocrítica se ha escuchado de quienes hasta dos días antes del golpe, el día 9 de septiembre de 1973, sostenían en El Siglo: "No hay ni puede haber antagonismo alguno entre el pueblo, su gobierno y los institutos armados". Por el contrario, con el mayor cinismo, han utilizado a los miles y miles de muertos, torturados, exilados o encarcelados, así como a los millones de chilenos que sufren hoy una muerte lenta derivada de la feroz explotación y miseria a la que abrió paso la dictadura militar, para desplegar en el mundo entero, con el millonario apoyo de los soviéticos y sus cómplices, una campaña destinada a reeditar la misma política que ha arrastrado al pueblo de Chile a una indescriptible tragedia. Solo se proponen, publicitando los sufrimientos del pueblo chileno de los que ellos son en una medida decisiva responsables, presionar internacionalmente para que el gobierno norteamericano se digne a instalar al mando en Chile, a militares menos sanguinarios

que los que encabezan la Junta actual, que les toleren, paso a paso, la reiniciación allí de sus actitudes habituales. Sus actividades de engaño del pueblo en pro de un falso socialismo y de la explotación conjunta de los chilenos por ambas super-potencias. Para ello, hoy día como ayer, se oponen a la organización de una resistencia armada destinada a derrocar a la Junta fascista; buscan desesperadamente militares "progresistas" a quienes ensalzar; y la alianza con el sector freista de la Democracia Cristiana. En suma, continúan aplicando la línea que les dictarán los soviéticos, como si nada hubiera pasado en Chile.

QUINTA PARTE
LAS CONTRADICCIONES EN EL SENO DE LAS FUERZAS DE
OPOSICION Y GOBIERNO

CAPITULO XI

LAS PUGNAS INTERNAS EN LAS FUERZAS GOLPISTAS Y ANTIGOLPISTAS

El desarrollo del capitalismo de Estado a través de la "vía pacífica", que por inspiración de la directiva del P.C. intentó promover el gobierno de la Unidad Popular, tuvo la "virtud" de unificar progresivamente a los diversos sectores de clase afectados por las reformas de dicho gobierno. Eso determinó que se materializara, a partir de mediados de 1.971, una ofensiva en su contra cada vez más sistemática, multifacética y planificada tendiente a derribarlo. En dicha ofensiva, fueron los sectores internos más retrógrados y las fuerzas más reaccionarias del imperialismo norteamericano, quienes terminaron por ganar la dirección del movimiento de oposición, imponiendo en él su estrategia francamente golpista y sediciosa y descartando así toda posible conciliación o transacción con el gobierno por parte de la DC, que hiciera innecesario el golpe de Estado.

— Las Fuerzas de Oposición Reaccionarias.

Inicialmente, en efecto, se advierten ciertas diferencias más pronunciadas de estilo entre la oposición al gobierno allendista encabezada por el Partido Nacional, con aquella que impulsaba la Democracia Cristiana. Sólo mencionamos a estos partidos por ser ellos las dos principales fuerzas políticas que actuaban en la oposición, liderando en torno a ellos a otras de menor importancia.

Las diferencias de táctica (así como sus vínculos en tanto fuerzas opositoras), de la DC y del PN, deriva de los sectores de clase tanto internos como foráneos representados por los equipos dirigentes de dichos partidos.

La Democracia Cristiana, por lo que toca a su dirección, es expresión en Chile de sectores relativamente desarrollados de la burguesía no monopolista, aunque también refleja los intereses de algunos monopolios aislados. Representa también anhelos de desarrollo, en alianza con el imperialismo norteamericano, de sectores relativamente amplios de la burguesía media, así como los de una burguesía en formación a través de un cierto desarrollo del capitalismo de Estado, que se da durante el gobierno de Frei. Representa, además, y muy especialmente a juzgar por las fuertes inversiones confesadas por la CIA yanqui para su promoción, y por los avances del imperialismo en Chile durante el gobierno de Frei, a ciertos sectores monopolistas y financieros norteamericanos. Se trata de sectores interesados en impulsar ciertas reformas tendientes a desarrollar el capitalismo y ampliar el consumo, con vistas a apoderarse de la parte más rentable de la industria manufacturera chilena. A ello se debe que el gobierno de Frei, inspirado en la política llamada de "Alianza para el Progreso", que inaugurara Kennedy, emprendiera ciertas reformas que afectaron los intereses de la oligarquía terrateniente. Entre ellas, una moderada reforma agraria, la fijación de un salario mínimo campesino y una ley de sindicalización de los trabajadores del campo, que obedecían al propósito de fomentar el desarrollo capitalista en las zonas rurales y ampliar así el mercado interno de consumo para las industrias, entre ellas las con inversiones norteamericanas. Este mismo propósito de ampliación del consumo, se materializa en el terreno internacional a través de la integración económica de varios países latinoamericanos mediante pactos regionales (como el Pacto Andino), que fomentara el gobierno de Frei. Estas reformas pro-yankis del gobierno de Frei, que afectaron intereses de la oligarquía agraria y de ciertos sectores de la burguesía monopolista, constituyeron un obstáculo insuperable para que la DC y el PN marcharan unidos en la elección presidencial de 1.970, lo que abrió la posibilidad de triunfo a la candidatura de Allende, incluso con un porcentaje de votos inferior al obtenido en la presidencial de 1.964 (39 por ciento de los votos en ese año y 36,3 por ciento en 1.970).

Estas mismas reformas anti-monopolistas y en oposición a la oligarquía terrateniente, unidas a una intensa propaganda demagógica generosamente pagada por organismos financieros dependientes de EE.UU. y por la CIA, fueron aprovechadas para desarrollar

un movimiento populista de apoyo a la DC. Esto le ha permitido a la DC, como partido mayoritario en la política chilena, contar entre sus militantes y en su vasta clientela electoral no afiliada al partido, a numerosos sectores de pequeños industriales y comerciantes, profesionales, artesanos, empleados e incluso, a un número considerable de trabajadores del campo y obreros urbanos. Es preciso recordar que en pleno gobierno de la UP (mayo de 1.972), a la DC se le asignó, en la elección de la directiva de la CUT, casi el mismo porcentaje de votos que el P.C. y el P.S. (29 por ciento P.C., 26,5 por ciento P.S. y 26 por ciento DC), ganando, además, la presidencia del Consejo más importante de ese organismo, el de Santiago.

Junto con la demagogia que acompañó a sus reformas, la DC profita del anti-comunismo estimulado por quienes, intencionadamente, presentan como modelo de "comunismo" los regímenes represivos y de explotación existentes en la URSS y en los países afiliados al Pacto de Varsovia. Capitaliza también, la influencia dominante del catolicismo en el pueblo chileno y el apoyo de aquellos sectores de la Iglesia que se oponen a las posiciones ultra-reaccionarias del Opus Dei.

Si bien la directiva de la DC no realiza su política para favorecer estos sectores populares que la apoyan, sin embargo, necesita de ellos y de su apoyo electoral y, por lo mismo, debe tenerlos en cuenta y realizarles concesiones, aunque sean de tipo formal para no perderlos. Entre otras cosas, la necesidad de tomar en cuenta a esta base electoral anti-derechista, motivó que se diferenciaron en cierto grado los procedimientos de oposición contra Allende utilizados inicialmente (aunque hasta el final existieron ciertos matices de diferencia) por la DC, a aquellos empleados por la extrema-derecha. La DC, por ejemplo, no se oponía en forma cerrada a la ampliación del capitalismo de Estado a través de ciertas expropiaciones. Por eso no se suma inicialmente a las acusaciones constitucionales presentadas por el Partido Nacional contra los ministros allendistas que las llevaban a la práctica. Se propone, eso sí, restringir dichas expropiaciones; forzar a que ellas sean hechas a través de leyes aprobadas en el Parlamento, donde cuenta con votos suficientes como para decidir ya sea formando mayoría con la oposición o con los partidos de gobierno; y, por último, forzar así al gobierno a negociar con ellos dichas expropiaciones para lograr control también sobre las empresas estatizadas. Sin duda, detrás de estas exigencias de control están los intereses del imperialismo norteamericano que representa la DC. Esto no se opone a una ampliación del área estatal, que les permita negociar, e invertir en empresas más estables y sólidas, con garantía estatal; pero, obviamente no podía aceptar que dicha área fuera controlada por un gobierno en que un partido manejado por "comunistas" pro-soviéticos jugaba un papel hegemónico. La Reforma Constitucional para establecer las tres áreas de la economía presentada por la DC, obedece a estos propósitos mencionados. Posteriormente, sin embargo, cuando la DC es arrastrada por los sectores más reaccionarios internos y por el propio imperialismo a una oposición sediciosa, dicha reforma se transformaría, más que en un instrumento destinado a negociar, en un pretexto legal para justificar el derrocamiento del gobierno. Prueba de ello, es que inicialmente es levantada como una condición básica para el entendimiento DC-gobierno y, posteriormente, cuando Allende en carta a la DC expresa: "En caso de acuerdo estaría dispuesto a promulgar la reforma constitucional, para que así desaparezca la dificultad formal y entremos a discutir lo sustancial que preocupa a los trabajadores y a todos los chilenos", (166) ese ofrecimiento es desestimado.

Por otro lado, la DC se esfuerza en diferenciarse del estilo de oposición del PN, pues, en aras de la preservación de su lectorado popular, no deseaba verse asociada públicamente a planes golpistas y sediciosos, así como a los sectores de extrema derecha o fascistas, que los impulsaban más o menos abiertamente. Prefiere liderar una ofensiva legal y gremial a más largo plazo contra el gobierno o intensificar los factores de la crisis económica, para forzar ya sea su rendición y poder así controlarlo o su renuncia para oficiar de herederos. Si esos objetivos no se lograban a mediano plazo, se pensaba de todos modos crear así las condiciones para derrotar a la Unidad Popular en la elección presidencial que se celebraría en 1.976. Un proyecto alternativo y en cierto modo intermedio a ambos, fue levantado por breve tiempo con motivo de las elecciones parlamentarias de marzo de 1.973, en las que se pensó podría obtenerse una mayoría de votos de oposición suficiente como para destituir legalmente al Presidente de la República. La DC, en verdad, temía el

golpe de Estado francamente ilegal, pues no tenía seguridad de heredar el gobierno a raíz de su derrocamiento ni del tiempo que demoraría el restablecimiento de las elecciones, en las que podía hacer pesar su fuerza como partido individualmente mayoritario (28,5 por ciento de los votos en la elección parlamentaria de 1.973). “Se sabe cuando los militares llegan al gobierno, pero no cuando decidirán irse de él”, era una frase que acostumbraban a repetir con insistencia, frente a los impacientes, los elementos más moderados de la DC. El tiempo demostró cuanta razón tenían estos últimos, ya que, la Junta Militar, hizo quemar incluso los registros electorales para que los “políticos” no se hicieran ninguna ilusión de un pronto regreso a las prácticas electorales.

No obstante, estas razones y otras que determinan la reticencia de la directiva demócrata cristiana a plegarse con tanta vehemencia como el Partido Nacional a los esfuerzos por gestar un golpe de Estado, van influyendo —por la fuerza de los hechos— cada vez más débilmente en su conducta práctica y terminan por configurar sólo sutiles diferencias entre ambos sectores de oposición. El rápido deterioro económico y político del gobierno (que a partir de 1.972 no se atreve ya a llamar a un plebiscito), y la prisa de los sectores oligárquicos y del imperialismo norteamericano por echarlo abajo, les hace temer la gestación de un golpe de Estado en cuyos resultados no tengan una influencia decisiva. De allí que sean arrastrados a una política cada vez menos diferenciada de la que impulsan quienes preparan el golpe, sumándose a sus embestidas tendientes a derribar al gobierno. Finalmente, sólo se diferenciaron, tras cada ofensiva destinada a derrocar al gobierno, por su empeño en ser los portavoces de los ultimatum que las acompañan y eventuales depositarios de una posible rendición. No pocas veces son criticados en la prensa de extrema derecha por estas “debilidades” y por sus tendencias conciliadoras frente al “marxismo”. Esta creciente coincidencia entre la directiva de la DC, en la que toma el control en los últimos meses del gobierno de Allende el sector más reaccionario y pro-yanki encabezado por Frei, con los sectores golpistas, se hace aún más estrecha y evidente después de las elecciones de marzo de 1.973. El empate que allí se produce entre las fuerzas de oposición y las del gobierno, cierra las expectativas de una destitución “legal” del gobierno por medio de una acusación constitucional al Presidente, salida que aceptaba incluso el sector menos fascista del Partido Nacional.

En el Partido Nacional (21,2 por ciento de los votos en marzo de 1.973) y otros partidos menores de oposición que lo secundan; en el grupo fascista “Patria y Libertad”; y en un sector decisivo de los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, estrechamente ligado al Pentágono y a la CIA, los esfuerzos de oposición se centraban en crear las condiciones para derrocar al gobierno al más corto plazo posible. Estos sectores representaban los intereses de las fuerzas dominantes en el poder más influyentes económicamente en el país; los terratenientes, la burguesía monopolista y financiera y, por lo que toca a Estados Unidos, los intereses de los monopolios mineros expropiados, los de la ITT, así como los intereses militares del Pentágono en América Latina. Es sabido, además, especialmente a raíz de la investigación del Senado norteamericano sobre la acción de la CIA en Chile contra el gobierno de Allende, que el gobierno norteamericano y, muy concretamente, Kissinger y Nixon, se plegó a la política tendiente a derribar al gobierno chileno de un modo rápido e implacable, que contemplaba todos los medios salvo la invasión directa por fuerzas militares norteamericanas. Esto, pese a ciertas influencias moderadoras que intentaron mediar para que el gobierno chileno fuera tratado con menos rigor y se intentara una conciliación con él a través de la DC.

Al promover resueltamente el golpe de Estado, el gobierno norteamericano, afectado por una grave crisis económica y por el desprestigio de sus fracasos en Vietnam, Camboya y otros lugares, prefirió una salida drástica al caso chileno, reafirmando así (como lo ha hecho también en otros países de Latinoamérica) su intención de no permitir que movimientos con influencia soviética amenacen su hegemonía sobre el continente. Si bien una derrota de la UP en las elecciones presidenciales de 1.976 le habría permitido realizar una intensa campaña propagandística, exhibiendo el fracaso de la pretendida experiencia de “socialismo” por la vía pacífica y su “tolerancia” frente a ella, las fuerzas de la izquierda tradicional agrupadas en la UP habrían quedado intactas y dispuestas, aprovechando los errores de sus sucesores, a volver a la carga con más fuerza, “autocriticando” sus errores. Por otro lado, el Departamento de Estado, buscaba impedir la tentación de cier-

tos sectores de la DC chilena, inspirados por fuerzas más liberales de los Estados Unidos, a buscar un posible acuerdo con el gobierno de Allende. Un acuerdo de esta especie, aún si significaba una rendición de éste a aquélla, implicaba una transacción entre los intereses hegemónicos del social-imperialismo soviético y del imperialismo norteamericano, en una región situada netamente en la esfera de influencia de Estados Unidos y, por lo mismo, una victoria neta de la URSS y un "nefasto" ejemplo para otros países más alejados, entre ellos los de Europa.

Sin embargo, el aspecto más importante que frustró un entendimiento de esa especie y decidió al gobierno norteamericano a acelerar su proyecto de golpe de Estado, que impulsaba desde la elección misma de Allende, fue la constatación del extraordinario auge que adquirió la lucha de masas durante el gobierno de la Unidad Popular y la creciente incapacidad de éste para controlarla y frenarla. Este hecho, que ya había dado por tierra con los planes reformistas pro-yankis de Frei y con sus esfuerzos por crear un populismo domesticado y que de paso, fue un factor importante en el triunfo electoral de Allende en 1.970, amenazaba con generar una situación incontrolable, aún si se materializaba el pacto entre las directivas de la UP y la DC, si en ese movimiento masivo prendían las verdaderas ideas revolucionarias. El auge de la lucha popular, explica, además, la brutalidad y la profundidad de la represión que se desata a raíz del golpe de Estado, que a muchos resulta inexplicable, dado que no corresponde a una fuerte resistencia al golpe por parte de la Unidad Popular. Mediante el terror fascista se ha pretendido realizar un escarmiento contra el pueblo, frenar drásticamente sus luchas, atemorizar a la población y anular numerosas conquistas realizadas a través de su combatividad y, muy especialmente, impedir que dicho movimiento de masas se fundiera con el auténtico marxismo-leninismo, volviendo las espaldas al revisionismo. Si el proyecto de capitalismo de Estado, con fuertes ataduras al social-imperialismo soviético de la UP, significaba un peligro para la hegemonía norteamericana en su disputa con la otra superpotencia, el triunfo de un auténtico movimiento revolucionario significaba un peligro mucho mayor.

Por lo que toca a los terratenientes y a los sectores de la burguesía monopolista y financiera chilenas afectadas por las reformas de la UP, el golpe de Estado, les garantizaba una fuerza represiva y una influencia sobre el futuro gobierno (que no estaban en condiciones de alcanzar electoralmente o si se consumaba un compromiso UP-DC), capaces de anular las reformas (las mismas que los líderes de la UP consideraban "irreversibles"), que afectaban sus intereses. Les hacía posible, al mismo tiempo, aplicar una política capaz de imponer brutalmente la eliminación de las conquistas realizadas por los trabajadores, así como un drástico freno a su combatividad. Les permitía, así mismo, golpear a los sectores medios de industriales y comerciantes que habían utilizado como aliados para derrocar al gobierno, de manera, no sólo de no tener que hacerles nuevas concesiones sino de poder conducirlos a la quiebra para acentuar la concentración de poder económico y político en sus manos. Todo esto, por cierto, no podía concretarse si se llegaba a un entendimiento entre la DC y el gobierno de Allende.

Lo concreto, como señalábamos al comienzo de este capítulo, es que la tendencia de la oposición es a unirse cada vez más en torno a propósitos y métodos de acción conducentes al golpe de Estado. Dichas fuerzas de oposición, a partir de mediados de 1.971, no sólo comienzan a encarar en conjunto algunas elecciones parciales (parlamentarias, gremiales, estudiantiles, etc.) en las que derrotan al gobierno, sino que, ya en vísperas de la primera gran ofensiva general contra el gobierno, el paro de octubre de 1.972, constituyen un organismo unitario de oposición, la Confederación de la Democracia (CODE). Allí se agrupan la Democracia Cristiana, el Partido Nacional, el Partido Democrático Nacional (PADENA), el Partido Democracia Radical y muy pronto el Partido de Izquierda Radical (PIR), hechura de la CIA, que a instancias de sus promotores se retiraría del gobierno en momentos críticos. A través de la CODE, la oposición no sólo enfrentó en conjunto las elecciones parlamentarias de marzo de 1.973, sino toda la ofensiva, legal e ilegal, destinada a derribar al gobierno.

En el PDC, durante casi todo el gobierno de Allende, se da una corriente encabezada por Tomic, Leighton y Fuentealba, que se siente atraída por los llamados unitarios del gobierno. Sin embargo, pese a ocupar la directiva del PDC, hasta el mes de mayo de 1.973, esta corriente no logra contrarrestar la fuerte influencia en dicho partido del sector freista

que se opone a todo pacto con el gobierno allendista. En junio de 1972, a raíz de importantes concesiones otorgadas por el gobierno y por la directiva de la UP, se estuvo a punto de firmar un acuerdo entre la UP y la DC, sin embargo, dicho acuerdo fue torpedeado y derrotado por el sector de Frei. El carácter conciliador de esta corriente en el PDC, no significa que sus integrantes se hayan restado a la ofensiva multifacética contra el gobierno. Por el contrario, mediante esa ofensiva esperaban forzarlo a una rendición y a un compromiso plenamente favorable a los intereses representados por el PDC. Es preciso no olvidar que Fuentealba, sin ir más lejos, hoy exilado y uno de los líderes de los sectores DC francamente opuestos a la Junta Militar, fue uno de los coautores del proyecto de Reforma Constitucional de las Tres Áreas de la Economía, que habría de ser un pretexto legal clave para el derrocamiento del gobierno de Allende.

2.— Las pugnas en el interior de la Unidad Popular.

Por lo que toca a las fuerzas de la UP (o si queremos hablar en un sentido más amplio, a las fuerzas anti-golpistas, aunque no necesariamente adictas al gobierno), el análisis de sus contradicciones durante el gobierno allendista, resulta bastante complicado. Si bien la política general de ese período —vista superficialmente— aparecía formalmente simplificada por el agudo enfrentamiento entre dos poderosos bolques políticos: el de oposición y el de gobierno, el problema era muchísimo más complejo, en especial por lo que toca a las fuerzas contrarias al golpe de Estado. Gran parte de los libros y casi todos los films que han intentado mostrar lo que ocurrió en Chile, tienden a exhibir sólo esa división esquemática y superficial: por un lado un gobierno “del pueblo” y, por otro, una oposición reaccionaria y sediciosa, la cual, finalmente, logra ganar para su causa a los sectores medios. Las fuerzas de gobierno son mostradas a través de concentraciones multitudinarias, asambleas, ocupaciones de industrias, trabajos voluntarios, labores de propaganda, etc., como sólidamente comprometidas con la política del gobierno. De esta presentación esquemática resulta, que nadie comprende el papel que jugaron todas esas fuerzas supuestamente adictas sin restricciones al gobierno, en los momentos decisivos del golpe y cómo fue posible que la oposición y la CIA, logran montar una ofensiva de tan demoledora eficacia. Como es natural, la sola “explicación” que entregan los responsables del P.C. y sus mentores ideológicos, los dirigentes soviéticos, es la “traición” de algunos dirigentes de las FF.AA. y la brutalidad de la represión que acompañó al golpe de Estado. Tal “explicación”, si bien no exonera de culpa a tales dirigentes, que hasta el día mismo del golpe continuaron sembrando confianza en las FF.AA. y desmovilizando al pueblo, está destinada, al mismo tiempo, a esconder el aspecto esencial de su traición: su política oportunista y anti-marxista. La verdad es que las fuerzas que debieron haber enfrentado a los golpistas, pese a ser muy numerosas (aún descontando a las que ganó o neutralizó la oposición), carecieron de toda eficacia para enfrentar el golpe fascista, a causa de la política oportunista predominante en la UP. Carecieron de ella, además, porque estaban de hecho divididas y sólo se les permitía “unirse” en torno a esas acciones inocuas y exhibicionistas, con las que los falsos comunistas pretendían asustar a la burguesía, para luego negociar con ella —a cambio de ciertas concesiones— su capacidad para desmovilizar a las masas y castrar su combatividad revolucionaria. Es así, como el grueso de las fuerzas anti-golpistas, sólo fueron movilizadas a concentraciones y marchas de estilo electoral; a ocupaciones pasivas de empresas; a tomar acuerdos de asamblea contra el golpismo, sin aludir por cierto a las FF.AA.; y, finalmente, a la trampa mortal que significó el estar en los lugares de trabajo cuando los militares ocupaban las ciudades y decretaban un toque de queda de varios días. La acumulación de fuerzas que exhibía el gobierno contra el golpismo, por consiguiente, era como un elefante ciego: incapaz de contraatacar con eficacia y que sólo presentaba blancos al enemigo, sin llegar a atemorizarlo por su tamaño. Con razón Lenin señalaba: “Invocar en los problemas concretos de una revolución, a la mayoría del pueblo (y la UP ni siquiera tenía esa mayoría), no es aún nada decisivo. La simple invocación, es precisamente un ejemplo de ilusiones pequeño-burguesas, es no reconocer que en las revoluciones hay que vencer a las clases enemigas y derrocar el poder estatal que las defiende y para ello no basta la “voluntad de la mayoría”, sino que se precisa la fuerza de las

clases revolucionarias que desean luchar, que son capaces de hacerlo y que en el momento y en el lugar decisivos, pueden aplastar la fuerza enemiga". "Cuántas veces —agrega luego— sucedió en las revoluciones que una pequeña fuerza, pero bien armada, organizada y centralizada de las clases dirigentes, de los terratenientes y burguesía, aplastara por partes la fuerza de la "mayoría del pueblo", mal organizada, insuficientemente armada y dividida.

En las fuerzas que calificamos como opuestas a los sectores golpistas, al mismo tiempo que existían contradicciones y divisiones, ya sea en los planteamientos como en el accionar mismo, predominaba la tendencia oportunista, reformista y revisionista, es decir, adulteradora del marxismo, impuesta por los dirigentes del P.C. pro-soviético. Como veremos más adelante, todos los intentos de plasmar una línea o una acción política divergentes se frustraron y no lograron ganar la conducción de la Unidad Popular en su conjunto ni determinar la actuación del gobierno. La línea oportunista de los dirigentes del P.C., era acatada —pese a la oposición de ciertos sectores de base y a declaraciones de los dirigentes o resoluciones de torneos aparentemente divergentes— por la dirección del Partido Socialista (PS). Era apoyada, además, por varias pequeñas agrupaciones integrantes de la UP, como el Partido Radical (PR); el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), mientras dominó allí la infiltración del P.C. encabezada por Gazmuri; la Acción Popular Independiente (API); el Partido Social Demócrata (PSD). El intento de impulsar una línea relativamente diferente a la dominante, se dio en ciertos sectores de base del Partido Socialista (el Regional Cordillera, por ejemplo); en el MAPU, cuando a raíz del congreso celebrado en diciembre de 1.972, triunfó una corriente opuesta a Gazmuri; en la Juventud Radical, que habría de ser a fines del gobierno de Allende expulsada del PR; en la Izquierda Cristiana (IC); y, en el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), que si bien nunca fue admitido en la Unidad Popular, actuó en los marcos generales de la política de dicha agrupación. Por su parte, el Partido Comunista Revolucionario (PCR), como veremos, no pertenecía a la Unidad Popular y tenía una línea de principios divergentes con la dominante en dicha agrupación política.

Pese a ser pequeñas, la mayor parte de las agrupaciones políticas que integraban la UP tenían derecho a un voto en las deliberaciones de ese conglomerado, aunque en el "cuoteo" de los cargos públicos y ministerios sólo se les concedía una representación menor. El Presidente Allende, por su parte, que en líneas generales siguió la línea de los dirigentes del P.C., aunque con motivaciones diferentes a ellos, tenía también derecho a un voto en las deliberaciones de la UP.

La política impuesta a la UP por la dirigencia del P.C., expresada aquí de un modo muy esquemático pues es motivo de análisis a través de todo el libro, se traducía en una oposición resuelta a toda movilización revolucionaria del pueblo para conquistar el poder y aún como medio para oponerse a los golpistas; por una negativa rotunda a denunciar el carácter reaccionario de las FF.AA. y movilizar al pueblo para destruirlas; por la vana pretensión de seducir e infiltrar a sus Mandos para ponerlos al servicio del gobierno; por un respeto reverente a las leyes e instituciones del Estado burgués; por poner en primer plano como tarea de los trabajadores, el producir más, oponiéndose a sus luchas reivindicativas; por la búsqueda constante de la alianza con el sector pro-yanki de la DC, exigida por los dirigentes soviéticos. La esencia de esta política por lo que respecta a los dirigentes del P.C., como lo hemos señalado con insistencia en este estudio, no derivaba de simples errores ideológicos ni menos de meras fallas tácticas. Se trataba de una política oportunista y anti-marxista, consustancial e inseparable de su proyecto de capitalismo de Estado disfrazado de socialismo. Este, puesto que no era más que otro sistema de explotación, sólo podía realizarse manteniendo en lo fundamental el Estado burgués con sus leyes e instituciones (entre ellas las FF.AA.) y, frenando primero y aplastando después, toda movilización popular revolucionaria. Debía ser así, además, porque para dichos dirigentes del P.C. este proyecto estaba íntimamente ligado a los esfuerzos del social-imperialismo soviético por obtener influencia de tipo militar, económica, política e ideológica en América Latina a través de Chile, aunque sin enfrentar abiertamente al imperialismo norteamericano. Es decir, esforzándose en imponer a través de la alianza con la DC, una ingerencia conjunta en Chile de ambas super-potencias.

La corriente de la UP y vecina a la UP, que intentó en algunos aspectos oponerse a esta

línea dominante, fue inspirada esencialmente por la ideología pequeño-burguesa. Si bien a algunos sectores fueron y son permeables a ciertas ideas marxista-leninistas, el peso allí del revisionismo "castrista", del trotskismo, del anarquismo y de otras influencias anti-proletarias es muy poderoso. En vastos sectores de esa corriente existía la decisión y el anhelo de combatir por el socialismo, como muchos lo demostraron con su propia vida. No obstante, esa decisión y ese anhelo, fueron frustrados por una ideología confusa, vacilante y equivocada en aspectos fundamentales, que les impidió transformarse en alternativa destinada a conducir una lucha revolucionaria por el poder y los condenó a ser tan sólo el ala radicalizada del reformismo revisionista. Su oposición a la corriente oportunista dominante en la UP, es por aspectos secundarios, que no tocan a la esencia de dicho proyecto político. Se quedan, así, a mitad de camino, sin llegar a romper con los dirigentes oportunistas, condición indispensable para ganar a las amplias masas para una línea revolucionaria. A menudo, les oponen posiciones utópicas e "izquierdizantes", las que combinadas con el oportunismo de derecha dominante, facilitaron el derrumbe de la experiencia de capitalismo de Estado de la UP, aunque de un modo muy secundario y no decisivo, como pretende hoy cínicamente la dirección del P.C., intentando ocultar su responsabilidad fundamental en el fracaso del gobierno de Allende.

Las diferencias consistieron, en el propósito de apoyar el proyecto de la UP con una movilización más combativa de las masas, para lograr lo cual se esforzaron en fortalecer organismos (como los Comandos Comunales y los Cordones Industriales), al margen del control que ejercía la burocracia oportunista en la CUT y en los grandes sindicatos y federaciones; en propiciar acciones más independientes respecto a la institucionalidad y legalidad burguesas, las mismas que el gobierno y la corriente dominante en la UP, se habían propuesto respetar estrictamente; en el esfuerzo por preparar a militantes en el terreno militar, aunque sin promover una preparación de las masas para el enfrentamiento armado contra los golpistas y por una real conquista del poder; en la oposición a los esfuerzos denodados de la dirección del P.C., por llegar a un acuerdo con la DC, aún a costa de hacer importantes concesiones en el Programa de la UP; en el empeño por "avanzar hacia el socialismo", ampliando el área de estatizaciones y expropiaciones del gobierno, incluso, más allá del Programa de la UP; por último, en el intento de forjar, sin haber conquistado de hecho el poder, organismos de masas a los que calificaron como "poder popular".

Las contradicciones que encerraban éstas y algunas otras posiciones con la línea oficial hegemónica en la UP y en el gobierno, llegaron a producir agudas crisis en las fuerzas que apoyaban al gobierno, sin llegar, sin embargo, a configurar una línea realmente independiente y resolviéndose, por lo general, desde arriba con la imposición de la línea del P.C. No obstante, dichos desacuerdos, sin duda, restaron coherencia y efectividad al proyecto de la dirección del P.C. y sumados a las pugnas por razones proselitistas y de mando, contribuyeron a la ineficacia de la UP para enfrentar a sus adversarios. Haremos a continuación un breve análisis de algunas de estas crisis provocadas por la pugna de las dos corrientes existentes entre quienes apoyaban al gobierno de la UP.

Antes, sin embargo, es necesario decir algo acerca del Partido Socialista, debido al papel clave que jugó como uno de los dos partidos más poderosos de la UP, en la mantención de la hegemonía de la línea de la dirección del P.C. en dicha coalición. El PS, tiene más las características de un frente heterogéneo que de un partido. Es una verdadera federación de fracciones diversas, que van desde los franc-masones y social-demócratas a corrientes trotskistas y "castristas". Por otra parte, ha sido objeto de infiltraciones por parte de diversos grupos políticos, en busca de influencia o de militantes en sus filas. No falta, por cierto, allí la infiltración del P.C. y aún de la KGB soviética (presente con sus agentes en casi todos los partidos).

Aunque con fuertes reticencias frente a sus propósitos de alianza con la DC, en general, en los hechos, la posición de la dirección del PS se ha plegado a las orientaciones de la del P.C. Formal y verbalmente, no obstante, para retener a los sectores radicalizados bastante numerosos en su militancia y con fuertes y viejos resquemores con el P.C., han adoptado resoluciones o realizado declaraciones, sin embargo, han quedado casi siempre en el papel, generando una profunda contradicción entre el decir y el hacer, fuente de un fuerte resentimiento y malestar de numerosos militantes. Por ejemplo, en el XXI Congre-

so del PS, celebrado en la ciudad de Linares durante el gobierno de Frei, acuerdan: "nuestra estrategia descarta de hecho la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de toma de poder". Y en el XXII Congreso, celebrado en Chillán en 1.967, se señala: "La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del Estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista..." Y agregan: "Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada".

Estos acuerdos no fueron obstáculo para que durante el gobierno de Allende, sólo apelarán a esos "instrumentos limitados de acción", sin hacerse nada por destruir "el aparato burocrático y militar del Estado burgués" y, por el contrario, sumándose a las alabanzas de los dirigentes del PC a las FF.AA. y Policiales. Más aún, en 1.969, en una declaración en que se refieren al intento de golpe de Viaux, su CC declara: "La posición del Partido Socialista en relación al problema de las Fuerzas Armadas fue oportuna y claramente manifiesta. Hemos defendido siempre las justas aspiraciones de carácter económico, profesional y técnico de nuestros Institutos Militares, al mismo tiempo que hemos propugnado que ellos, se incorporen al proceso de cambios radicales que nuestra sociedad exige perentoriamente". No se trata ya, pues, en ese momento, de "destruir el aparato burocrático y militar", como se acordó nada menos que en un Congreso, sino de fortalecer desde el punto de vista "económico, profesional y técnico", y de incorporarlo "al proceso de cambios radicales" ¡Sólo un partido tan heterogéneo como el Socialista, puede resistir tamañas contradicciones en sus formulaciones!

Sin embargo, las contradicciones entre las formulaciones y el quehacer práctico, son todavía mucho mayores que las que han aparecido por escrito.

Una de las primeras pugnas entre la línea dominante en la UP y el sector más radicalizado de ella se da, aunque con carácter local, con motivo de las elecciones parciales de dos parlamentarios que debían celebrarse en enero de 1.972, en las circunscripciones electorales de Linares y de O'Higgins-Colchagua. En ellas, la oposición unida llevaba a un demócrata-cristiano por O'Higgins-Colchagua y a un dirigente del Partido Nacional en Linares. Para enfrentar dicha elección, en Linares, el Consejo Provincial Campesino y el Comité Político de la Unidad Popular, así como el MIR, firmaron en esa provincia un acuerdo en diciembre de 1.971, levantando una plataforma más radical que el Programa de la UP en el terreno de la reforma agraria. En dicha plataforma se plantea, entre otras cosas, "la expropiación de los fundos a puertas cerradas", es decir, incluyendo los animales, instalaciones, herramientas, etc., que no contemplaba la Ley de Reforma Agraria en aplicación, dictada durante el gobierno de Frei. Se planteaba, asimismo, rebajar "de 80 a 40 hectáreas (de tierras irrigadas o su equivalente) el límite de expropiación", ampliando el número de pradios a expropiar. En otro punto, sostenía que "la tierra expropiada no debe ser pagada" y se abogaba contra el derecho establecido a los patrones en la Ley de Reforma Agraria de la DC, a mantener, después de expropiados, una reserva de tierras. Se establecía, asimismo, la "inexpropiabilidad de toda propiedad de menos de 40 hectáreas de tierras irrigadas (o su equivalente)". Los otros puntos concernían a la demanda de ayuda técnica a los fundos expropiados, al estímulo de las cooperativas y de los consejos campesinos. Pese a tratarse sólo de banderas de lucha, los puntos de esta plataforma fueron rechazados por el Comité Central del PC y sufrieron de hecho el rechazo de la dirección nacional de la Unidad Popular, lo que engendró contradicciones y tropiezos entre los diversos sectores que trabajaron en la campaña electoral. Esta plataforma fue rechazada pese a que planteaba en un considerando final: "Nosotros llamamos con firmeza a luchar por estas consignas, a impulsarlas a través de cada una de las batallas que los campesinos libren contra los "momios", a evitar que este programa se burocratice en las oficinas"... y terminaba llamando "a luchar en el campo y en la ciudad porque sea aprobada una nueva Ley de Reforma Agraria". Vale decir, la dirección del PC, en aras de su anhelada alianza con la DC, no deseaba ni siquiera luchar por cambiar la ley de Reforma Agraria vigente aprobada por el gobierno de Frei y se oponía a todo programa que

postulara siquiera la modificación de sus limitaciones. Sólo cabe agregar, que ambas elecciones, la de Linares y la de O'Higgins-Colchagua, las perdió el gobierno.

A fines del mes de enero de 1972 (las elecciones habían sido el 16 de enero), se efectuó una reunión de "autocrítica" de la UP en la localidad de El Arrayan. Allí, sin embargo, sólo se realizó una discusión superficial, condenándose el sectarismo, el burocratismo y haciendo un llamado a la "moral funcionaria". Hubo un pronunciamiento, así mismo, contra las ocupaciones de tierras por los campesinos y en una condenación indirecta a la lucha reivindicativa de los trabajadores, se planteó que: el "mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores... puede ser alcanzado por mecanismos distintos de la remuneración individual", es decir, a través de obras sociales.

En marzo de 1972, se vigoriza una nueva ofensiva de la oposición por tumbar al gobierno. El 6 de marzo de ese año, se reunieron en un fundo del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Jorge Fontaine: el Presidente de la Corte Suprema; el Presidente del Senado (un demócrata-cristiano); el Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (organización patronal de los latifundistas); el Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (que agrupa a los industriales) y el Subdirector de "El Mercurio". Participaron, así mismo, representantes del Opus Dei y de los partidos políticos de oposición. Es decir, estuvieron presente los representantes de las instituciones estatales, empresariales y políticas fundamentales, a través de las cuales las fuerzas más reaccionarias controlaban el poder. Sólo fueron mantenidas al margen, aunque seguramente bien informadas de los acuerdos como lo demuestra el intento de golpe que surgió poco después, las FF.AA. A fines de ese mismo mes, en efecto, se materializó el ensayo ya descrito del mayor Marshall de dar un golpe de Estado. Este intento debía implementarse con una marcha de la oposición del día 28 de marzo, que fue prohibida por el gobierno en conocimiento de los intentos golpistas. La reunión del 6 de marzo de los principales jefes de la oposición por su parte, era la respuesta a un nuevo diálogo iniciado tres días antes por el ministro de Justicia (miembro del PIR) con dos parlamentarios de la DC. El 6 de abril, el diálogo, que tenía todas las características de una simple maniobra diversionista de la derecha, se rompe y el PIR, a exigencia de la CIA, se retira del gobierno y se pasa a la oposición. A mediados del mes de abril, el día 11, la oposición realiza la "Marcha de la Democracia", a la que responde el día 18 el gobierno, con otra marcha de sus partidarios.

En los marcos todavía de esta ofensiva, la oposición intenta realizar una marcha en Concepción, fuerte bastión de las fuerzas de carácter de masas a sus intentos sediciosos. Las fuerzas de la UP y, en general, todos los sectores anti-golpistas (incluidos MIR y PCR), deciden salirle al paso a las fuerzas reaccionarias y efectuar ese mismo día una marcha en Concepción. No obstante, el Comité Central del PC, desautoriza al CR de dicha provincia y ordena al Intendente y militante suyo, Vladimir Chavez, prohibir la marcha de la izquierda (posteriormente lo hará también con la oposición). De todos modos en el "Campus" de la Universidad se reúnen más de 15 mil personas de las fuerzas anti-golpistas e inician una marcha, al enterarse que grupos de derecha se congregan en la plaza principal. Se desencadena entonces, bajo las órdenes del Intendente "comunista", una feroz represión policial, en la que es asesinado un estudiante de 16 años, Eladio Camaño, militante de "Espartaco", organización juvenil del PCR. Alrededor de 40 personas resultan heridas, algunas de ellas de gravedad.

La Unidad Popular de Concepción y el MIR, elaboran (por cierto, sin la participación del PC) una declaración de principios donde critican la actitud del gobierno y lo acusan de "condescender con los enemigos del pueblo". Más adelante, la dirección del PS, desautorizando a su CR, hará causa común con los dirigentes del PC y se opondrá a dicho manifiesto. En el manifiesto se señala la existencia de dos políticas en las fuerzas adictas al Gobierno: "Una, que cree que puede condescender con los enemigos del pueblo, lo que en el hecho significa olvidar la existencia de la lucha de clases, que busca apoyarse básicamente en el aparato de Estado, y no en el poder del pueblo y las masas y que, incluso apunta la represión de aquellos sectores de la izquierda que no comparten su política de conciliación, pretendiendo, en la práctica, transformar el actual gobierno en un árbitro, restringiendo su acción a los marcos de una institucionalidad que dé iguales garantías a las fuerzas del pueblo y a las fuerzas de la contrarrevolución.

La otra política se afirma en la convicción de que no es posible la conciliación con

los enemigos de la clase trabajadora. Sostiene que es necesario apoyarse en la fuerza y movilización organizada de las masas, rechazando toda expresión del dogmatismo y sectarismo en el seno del pueblo, abriendo cauce a la discusión en el seno de la izquierda sobre la conducción y futuro del proceso revolucionario”.

La primera respuesta a esta “subversión” de algunos pequeños partidos de la UP, de ciertas bases del PS y del MIR, fue dada, a fines de mayo, por la alta burocracia de la UP (dirigentes del PS y del PC) en la elección de la directiva de la CUT. En un conciliábulo a puertas cerradas entre dichos dirigentes y cuadros sindicales de la DC, que duró varias semanas, se repartieron “por secretarías” los cargos dirigentes de dicha Central e hicieron desaparecer numerosos votos de los otros partidos, entre ellos del PCR, para hacer calzar los escrutinios con el fraude planificado a alto nivel.

Posteriormente, el 5 de junio de 1972, los dirigentes del PC, emprenden en la reunión de la UP celebrada en la localidad de Lo Curro, una fuerte ofensiva destinada a paralizar el proceso de estatizaciones y realizar concesiones al sector freista de la DC y a la oposición en general, a objeto de lograr el anhelado pacto con el populismo pro-yanki. Corvalán, había convocado a una conferencia de prensa después de lo acontecido en Concepción, señalando que debía considerarse “muy grave” y que era preciso dar un “golpe de timón” en el gobierno. El diario “La Prensa”, del sector de derecha de la DC, les había llamado ya la atención señalando que “la creciente actitud de rebeldía descontrolada en los campos empieza ahora a producirse en las ciudades”. Era preciso hacer mayores concesiones para retornar al diálogo y llegar a una alianza. La política planteada por Orlando Millas en Lo Curro, contenía una serie de concesiones a los sectores monopolistas de la burguesía, a las empresas imperialistas y a los terratenientes, bajo la falsa consigna de “consolidar ahora para avanzar después”. En realidad se trataba de retroceder ostensiblemente en el Programa de la UP, para lograr el acuerdo con la DC. Sus proposiciones en esencia consistían en restringir las expropiaciones a un número de empresas aceptable para la DC, logrando mayoría parlamentaria para su aprobación; en congelar la Reforma Agraria; y, en someterse a las exigencias del organismo de control yanqui, llamado Fondo Monetario Internacional, restringiendo el crédito, disminuyendo el presupuesto fiscal, congelando los salarios y sueldos pagando indemnizaciones a las empresas norteamericanas expropiadas. Salvo ciertas garantías propuestas para los pequeños y medianos empresarios, se trataba fundamentalmente de concesiones a la burguesía monopolista, a los terratenientes y al imperialismo norteamericano y no una política destinada a ganar a los sectores medios, como se ha dicho. Al mismo tiempo, Millas, a nombre de la dirección del P.C., calificó de “anarquismo puro” los esfuerzos del sector más radicalizado de la UP por movilizar a las masas y obtener un control de la producción desde la base y evidenciando el capitalismo de Estado que aspiraban a implantar en Chile, definió la “participación” de los trabajadores, tan sólo como un “respeto a la jerarquía”, a la “dirección democrática central” y como a la obediencia a una “disciplina social férrea”.

El ataque más coherente contra sus posiciones lo desarrollaron en la reunión de Lo Curro los representantes del MAPU. No obstante, cayeron en la trampa tendida por Millas de concebir el avance hacia el “socialismo”, en el terreno puramente economicista en que aquel planteó los problemas y no en la organización de las amplias masas para desbaratar el Estado burgués y conquistar el poder. Es así como plantearon como “respuesta” al retroceso argumentado por Millas, un avance acelerado en las expropiaciones y en el control sobre 1.500 o 2.000 empresas productivas y de distribución claves, todo ello con el poder, básicamente, en manos de las fuerzas más reaccionarias. Después de la discusión en la que se impusieron las tesis del PC, el PS, que las había impugnado con debilidad, terminó por plegarse a la política de Millas, quien fuera nombrado Ministro de Hacienda en reemplazo de Vuskovic (partidario de acelerar las expropiaciones e intervenciones), y designaron para secundarlo al socialista Carlos Matus en el Ministerio de Economía.

El día 12 de junio, el Presidente del PDC, Renan Fuentealba, iniciaba un diálogo con el Presidente de la República, pero, en lugar de aceptar las ya vergonzosas concesiones ofrecidas por Millas, planteó un verdadero ultimátum, que implicaba el abandono casi completo del Programa de la UP. Exigían la aprobación de la Reforma Constitucional de Hamilton-Fuentealba sobre las Tres Áreas de la Economía, cuyos alcances ya hemos analizado. De la lista de 90 empresas a las que el gobierno había ya reducido las 250 que aspi-

raba inicialmente estatizar, aceptaban tan sólo 15, en el área estatal, 20 serían organizadas como "empresas de trabajadores" y el resto debía constituirse como empresas mixtas con aportes particulares, de los trabajadores y del Estado. Exigían perentoriamente que la gran empresa monopolista del papel se mantuviera en manos privadas y la devolución de 160 empresas intervenidas. Se establecía que la publicidad del área estatal debía distribuirse en cuotas iguales, entre todos los medios de comunicación, fueran opositores o de gobierno. Este es, en esencia, el acuerdo que, según expresa la dirección del P.C. en declaración posterior al golpe de Estado, estuvo a punto de firmarse con la directiva de la DC y que fue frustrado por el sector Frei. El 29 de junio de 1972, se dio por fracasado este nuevo intento de acuerdo con la DC impulsado por los dirigentes del P.C., con el apoyo de algunos de sus seguidores y se interrumpieron las conversaciones. El 5 de julio, el Parlamento votaba en forma negativa la postergación del trámite de los vetos del gobierno a la Reforma Hamilton-Fuentealba (suspendido por las conversaciones) y, ese mismo día, se presentaba una censura constitucional contra el Ministro del Interior.

Por esos mismos días (comienzos de julio), los trabajadores del Cordón Cerrillos del sector sur-poniente de Santiago, cortaban las rutas de acceso de la costa a la capital y el día 12 organizaban una marcha hacia el Parlamento, en conjunto con campesinos de la zona de Maipú. En vano los policías y numerosos burócratas sindicales, intentaron desviar la columna de su objetivo. Se oponían a las transacciones de Millas con el Programa de la Unidad Popular y lanzaban consignas contra el Parlamento y contra el poder judicial. Dicho mitin habría de provocar la protesta de la Corte Suprema a la que hacemos mención en la página 154.

A fines de ese mismo mes de julio, Orlando Millas, en su desesperación por obtener a cualquier precio el acuerdo con la DC que le exigían los soviéticos, envía al Parlamento, por su cuenta y sin consultar a los partidos de la UP, su primer proyecto de Ley en el que establecía para las empresas estatales, un Sistema Nacional de Autogestión, semejante al yugoslavo. A este sistema se integrarían también las empresas intervenidas en el área textil y del calzado. El proyecto fue rechazado tanto por DC, que lo consideró una distorsión de su "empresa de trabajadores", como por el PS, que lo calificó en su periódico "Última Hora" de "nuevo menjunje del reformismo".

El 27 de julio se reinicia en Concepción la rebelión contra la línea oportunista del P.C. y de quienes les secundaban en la directiva de la UP. El PS, el PR, el MAPU, la IC y el MIR, hacen un llamado conjunto (a iniciativa del MAPU) a una "Asamblea del Pueblo", destinada, según sus iniciadores, a "asegurar que el proceso revolucionario de la región se desarrolle, no por cauces burocráticos y paternalistas, sino en conformidad a una correcta línea de masas". Según el MIR, la Asamblea demostraría "que el pueblo comienza a construir su propio poder". El dirigente regional del PS, por su parte, en conferencia de prensa declaraba que la Asamblea del Pueblo estaba en el Programa de la UP y "formaba parte de la política del partido". Declaraciones parecidas realizó la directiva regional del PR. El dirigente regional del P.C., en cambio, a instancias de la dirección nacional de su partido, la combatió públicamente como una "maniobra de ultraizquierda". Respondiendo a esto, el secretario regional del PS, sostuvo: "Creemos que es grave que un partido de la UP de desautorice a la Asamblea del Pueblo con un lenguaje que lo confunde con el Partido Nacional". Aparte de los partidos, habían firmado la convocatoria a la Asamblea: 60 sindicatos (madereros, siderúrgicos, mineros del carbón, textiles, metalúrgicos, de la construcción, etc.); 31 campamentos de pobladores; 16 organizaciones estudiantiles; 27 centros de madres; y, 5 organizaciones campesinas. El 31 de julio, el propio Presidente Allende, envía una carta a los dirigentes de los partidos de la UP, condenando la iniciativa de los regionales de Concepción, en la que señala que "el poder popular no surgirá de la maniobra divisionista de los que quieren levantar un espejismo lírico surgido del romanticismo político al que llaman, al margen de toda realidad, Asamblea Popular". En dicha carta siembra esperanzas en las elecciones parlamentarias que se celebrarían en marzo de 1973 y concluye; "El régimen institucional debe ser profundamente cambiado... pero será cambiado con la voluntad de la mayoría del pueblo, a través de los mecanismos de expresión pertinentes". El Presidente Allende, actuó, no sólo movido por su fe en las instituciones burguesas, sino por presiones del equipo dirigente del P.C., que habló de maniobras de "ultraizquierda para dividir a la UP y aislar al PC", así como influenciado por la furibunda

reacción de la prensa de oposición contra la Asamblea de Concepción. El diario demócrata cristiano "La Prensa", señalaba: "En reemplazo del Congreso, ellos forman la Asamblea del Pueblo en Concepción", señalando, luego, que se trataba de un "acto de sedición". Finalmente, la iniciativa, que expresaba efectivamente un esfuerzo por sacudirse de la tui-ción oportunista y por apelar a las masas, desautorizada por quienes detectaban la hege-monía sobre la UP y defendía tibiamente por algunos dirigentes de los partidos compro-metidos en esa iniciativa, terminó con un simple y prolongado torneo oratorio, del que no salió ninguna iniciativa concreta de acción.

El 4 de agosto, como una demostración suprema de su anhelo de llegar a una alianza con la DC, la dirección del P.C. a través del Subsecretario del Interior y hombre de sus fi-las, realiza el brutal allanamiento (precursor de los que habrían de efectuar más adelante las FF.AA. aplicando la Ley de Control de Armas) contra la población Lo Hermida, con el saldo de un poblador muerto y varios heridos a bala (ver página 63).

Pese a esta demostración de "buena voluntad" hacia la derecha, a fines de agosto en los primeros días de septiembre de 1972, se intensificaron las acciones callejeras de la oposición en preparación del paro patronal que habría de estallar al mes siguiente. En la provincia de Llanquihue son asesinados tres campesinos por un comando de agricultores. En la capital y otras ciudades importantes, son utilizados los estudiantes secundarios (dirigidos por la oposición) con el apoyo de grupos fascistas, para realizar desórdenes masivos en las calles. El gobierno se ve obligado a declarar Zona de Emergencia la capital.

La respuesta del gobierno, como era habitual, sólo consistió en realizar un desfile de sus partidarios semejante al de las campañas electorales, con motivo del aniversario del triunfo electoral de Allende, el 4 de septiembre.

Posteriormente, a raíz del paro de octubre de 1972 organizado por la oposición al gobierno, en conjunto con una ofensiva general (sabotajes, atentados, etc.) destinada a derribarlo, nuevamente se ponen de manifiesto las contradicciones entre la línea oficial de la UP y sus sectores más avanzados. Esta contradicción es aún más patente, por cierto, res-pecto a los planteamientos y acciones que impulsa el PCR. Los dirigentes del P.C., así como el estado mayor reaccionario del paro de octubre, se aterrorizan de las iniciativas que comienzan a tomar las masas populares, en especial la clase obrera y de la combativi-dad con que responden a la ofensiva golpista. Se suscitan en todos los frentes de masas (y yo fui testigo personalmente de ellas en el Comando Comunal de Nuñoa) agudas dispu-tas entre burócratas sindicales o políticos del P.C., por una parte, y militantes o cuadros medios del Partido Socialista, MAPU, MIR, IC, etc. por la otra, respecto a los procedi-mientos para encarar el paro y la ofensiva reaccionaria. Los primeros se oponen, sistemá-ticamente, a las iniciativas de las masas apoyadas o dirigidas por las fuerzas más avanzadas, en orden a reabrir los comercios paralizados bajo el control de las masas, a confiscar me-dios de transporte detenidos, a organizar grupos que se preparen para defender las indus-trias y repeler a los terroristas y saboteadores, a efectuar la distribución directa de pro-ductos en las poblaciones y de materias primas y combustibles en las industrias, a los es-fuerzos por armarse en previsión de los intentos golpistas, etc. Los dirigentes del P.C. in-sisten en que debe entregársele la iniciativa en la "solución del paro a las FF.AA., y poli-ciales y sostienen que los Cordones Industriales y Comandos Comunales, no deben tomar-se atribuciones que la ley no les otorga. Finalmente, como es sabido, más para detener el paro ya en plena desintegración por la respuesta popular, y en verdad, para frenar la con-traofensiva de las masas en ascenso, se establece un acuerdo entre el gobierno y la oposi-ción. A través de ese acuerdo se le realizan a los promotores del paro vergonzosas conce-siones y se nombra un gabinete militar al que se atribuye enteramente la solución del con-flicto. Al mismo tiempo, el gobierno se apresura en anular todas las conquistas de hecho que han realizado los sectores populares más avanzados y efectúa una ofensiva para des-montar los organismos de masas (Cordones, Comandos, etc.), que han jugado un papel di-rigente en la lucha, presionando a todos los activistas de la UP para que los abandonen y volcando a las fuerzas integrantes de esta coalición a la preparación de la elección parla-mentaria de marzo de 1973. En esos precisos momentos el 21 de octubre de 1972, como una garantía a las FF.AA. que se incorporaban al gobierno y a las fuerzas de oposición, de que no se estaba dispuesto a tolerar que las masas populares se escaparan nuevamente, amenazando salirle al paso a los sectores sediciosos, ya sea por su cuenta o bajo conduc-

ción revolucionaria o antirreformista, es aprobada con los votos del gobierno y de la oposición, la Ley de Control de Armas, cuyo fatídico papel en el golpe de Estado ya hemos señalado.

Por cierto, Corvalán y los suyos se apresuran en aplaudir el gabinete militar, al que secundaron designando como Ministro del Trabajo al dirigente de dicho partido y presidente de la CUT, Luis Figueroa. Corvalán, señalaba en un reportaje, que el gabinete militar: "Constituye un avance y un signo de fuerza, más que de la UP, del Gobierno constitucional, de la democracia chilena. Con la formación de este Gabinete —agrega— se ha producido un cambio cualitativo muy importante, cierta modificación en la correlación de fuerzas. Sin duda que el Gabinete en el cual están las tres ramas de las FF.AA. y la clase obrera... constituye un dique insalvable contra la sedición". (167) El PS, por su parte, después de un arrebató verbal contra la "solución" del paro en el que afirma que "El pueblo se opone a cualquiera política que signifique congelar el proceso, aunque sea hasta marzo próximo" y que es preciso "sustentándose en la fuerza demostrada por el pueblo, golpear y derrotar definitivamente a los sediciosos", termina, como de costumbre, por transar con la directiva del PC a alto nivel y designa a Rolando Calderón, Secretario General de la CUT, como Ministro de Agricultura. Sin embargo, los sectores de izquierda del PS protestan contra lo obrado por el gobierno, afirmando que la crisis de octubre "ha tenido por resultado una elevación de la conciencia de clases y un progreso cualitativo de las organizaciones populares, así como un reforzamiento de la unidad de clase. En ese contexto —agregan— las masas esperaban del Partido Socialista y del Gobierno una respuesta que se encarnará en la formación de un ministerio "para avanzar". Sin embargo, la dirección política del proceso, consecuente con su línea reformista, ha adoptado una vez más por "la paz social de la burguesía". La entrada de los principales jefes de las Fuerzas Armadas en el gabinete significa en efecto un freno al ímpetu revolucionario de los trabajadores. Con esta solución dada a la crisis de octubre, el Gobierno ha cedido a las exigencias de la burguesía y a las presiones de los sectores reformistas, a pesar de la lucha de la tendencia revolucionaria (del PS)... La presencia de representantes de la CUT en un gabinete que tiene estas características, comprometiendo a través de ellos a la clase obrera en una alianza superestructural con los generales, es una inconsecuencia más de los partidos proletarios...". Luego, proponen una plataforma de 8 puntos; "1.— Ampliación del Área de Propiedad Social a todas las empresas grandes o medianas donde los trabajadores piden la nacionalización. Generalizar el control obrero en el APS. 2.— Expropiar los latifundios superiores a 40 hectáreas de tierras irrigadas a "puertas cerradas" y sin reserva (para el terrateniente). Dar a los Consejos Comunales Campesinos el poder de distribuir los recursos y de orientar las expropiaciones. 3.— Impedir la institucionalización de los Comandos Comunales, que no deben estar subordinados ni al gobierno, ni a la UP. 4.— Crear los Comandos Provinciales, y, después, la Asamblea del Pueblo, órgano supremo de la soberanía nacional, en la cual los trabajadores deben estar representados como clase. 5.— Establecer el derecho a voto para los suboficiales y la tropa y el escalafón de avance único (fin de la división interpuesta entre la carrera de suboficial y la de oficial). 6.— Crear una red estatal de distribución y dar el control de la distribución al detalle, a los Comandos Comunales y a la CUT, el derecho a pedir la destitución de los funcionarios corrompidos. 8.— Suspender el pago de la "deuda externa". Y termina la plataforma con la siguiente consideración: "Sobre la base de este programa de transición al socialismo, es necesario replantear el problema de las relaciones PS-PC. La unidad con los comunistas debe ponerse al servicio de los principios revolucionarios y en ningún caso se puede ser partidario de la unidad por la unidad, encadenando a nuestro Partido al carro reformista".(158).

La directiva del MAPU encabezada por Gazmuri en ese entonces, no obstante, la oposición de las bases que habrá de traducirse en el Congreso celebrado en diciembre del 72 en un cambio de dirigentes, apoya incondicionalmente las posiciones del PC. La IC, manifiesta públicamente su disgusto con el gabinete militar, así como la juventud del Partido Radical, mientras el PR, el API y el PSD se suman a la posición de los dirigentes del P.C.

El MIR llamaba, el 8 de noviembre de 1.972 "a la clase obrera y al pueblo a rechazar la constitución de ese gabinete" y sostenía: "La incorporación de algunos generales en el Gabinete ha cambiado en una importante medida el carácter que el Gobierno hasta aquí tenía: —los partidos populares tradicionales dejan de ser el eje político del Gobierno.

Ahora deben ceder parte importante de ese papel a las FF.AA. —el Gobierno, aunque no pierde propiamente el apoyo del pueblo, indudablemente debilita más aún su ya deteriorada relación con el impulso y la voluntad de lucha de los trabajadores. Por su parte, aunque obtiene en cambio el apoyo de las FF.AA. queda también sometido a sus presiones”. Y terminan señalando: “Si los reformistas intentan, con la constitución del gobierno UP-generales, cerrar el camino a la creación de un Poder Popular, hoy más que nunca la clase obrera y el pueblo deberán luchar por fortalecer y desarrollar los Comités Coordinadores, para convertirlos en embriones de poder, en los Consejos Comunales de Trabajadores, que culminarán en una Asamblea del Pueblo y en un Gobierno Revolucionario de Obreros y Campesinos...

¡Luchemos por derrotar la política del nuevo gobierno UP-Generales encaminada a reglamentar y paralizar la lucha del pueblo y a hacer concesiones a los patrones!

¡Vigilancia obrera y popular sobre el nuevo gobierno UP-Generales!

¡Vivan los Comités Coordinadores y los Consejos Comunales de Trabajadores!

¡Abramos el camino a la contraofensiva de la clase obrera y el pueblo!

¡Abramos el camino al Poder Popular!

¡Control obrero inmediato de las pequeñas y medianas empresas requisadas o tomadas durante el paro patronal!

¡Expropiación definitiva de las grandes empresas requisadas o tomadas durante el paro patronal!”. (169).

Sin embargo, en los Cordones Industriales y Comandos Comunales, dicha oposición a la solución conciliadora del paro de octubre, en lugar de centrarse en una movilización y preparación de las masas para enfrentar el golpe de Estado y organizar la lucha por una real conquista del poder, se orientó (por influencia de los sectores radicalizados de la UP y del MIR) a divulgar la ficción del “poder paralelo”, a defender algunas de las atribuciones conquistadas de hecho durante el paro por dichos organismos y a oponerse a la devolución de una serie de empresas tomadas por los obreros durante la huelga patronal. De ese modo, en lugar de forjar un amplio movimiento de masas centrado contra los enemigos principales y las FF.AA. que los defendían, por influencia en especial de los sectores trotskistas infiltrados en los diversos partidos de la izquierda tradicional y en el MIR, se mantuvo una verdadera guerra de posiciones a menudo contra pequeños y medianos propietarios cuyas empresas se mantuvieron ocupadas, fortaleciendo así el frente de la oposición reaccionaria. Así, la frustración provocada por la actitud conciliadora del gobierno y de los círculos dirigentes dominantes en la UP respecto a las fuerzas que controlaban el poder, se volcó contra sectores medios y aún pequeños, en cuyos sindicatos tenía más influencia el sector radicalizado de la UP y el MIR.

El 24 de enero de 1973, los dirigentes del PC dan un nuevo paso en su desesperado esfuerzo por obtener a cualquier precio un pacto con la DC. En ese mismo mes, la oposición había destituido del Ministerio de Hacienda al dirigente del PC, Orlando Millas, quien fue designado entonces en el Ministerio de Economía. Desde allí, Millas lanza un proyecto de ley en que reduce las empresas destinadas al Área Estatal a sólo 42 y ofrece negociar alrededor de 123 grandes empresas intervenidas por el gobierno y ocupadas a raíz del paro de octubre. La ley prevee, asimismo, la cogestión de muchas de ellas por el Estado, los patrones y los trabajadores. Como ya hemos visto, el PS y la IC, se pronuncian contra el proyecto Millas, (Ver pág. 65.). El MAPU, por su parte, lanza el 27 de enero a través de su Comisión Política (lo que le costará la división al mes siguiente promovida por agentes del P.C. infiltrados en sus filas), una declaración en que llama a movilizarse por:

“a) La aplicación consecuente e intransigente de la política prometida al pueblo a través del Ministro Flores (Ver pág. 132.). Sólo con las masas se derrotará al mercado negro, la especulación, la inflación y el desabastecimiento. Los mecanismos burocráticos deben apoyar a los organismos de masas y subordinarse a ellos.

b) Crear, desarrollar y multiplicar todos los órganos de control y poder popular, especialmente las JAP y los Comandos Comunales en todas las provincias del país. Sólo construyendo y desarrollando el poder popular se resuelven los problemas económicos fundamentales del país.

c) Exigir una modificación sustancial del proyecto de ley sobre la incorporación de empresas al A.P.S. (proyecto Millas) anunciado recientemente. Los obreros no aceptan ni

aceptarán jamás administrar sus empresas en conjunto con sus antiguos explotadores. Los obreros no aceptan ni aceptarán jamás devolver ninguna empresa importante, grande o mediana. Los obreros exigen la expropiación de todos los monopolios industriales y comerciales del país y no sólo de 90 de ellos". (170).

Entretanto, los días 25 y 26 de enero, los obreros del Cordón Cerrillos-Maipú colocan barricadas y cierran el acceso a la capital desde la costa. Al día siguiente, se suman a la acción los obreros de la construcción y varios miles de trabajadores movilizados por los cordones Vicuña y Mackenna, San Miguel y Nuñoa. En Valparaíso y otras ciudades importantes se realizan asimismo manifestaciones de repudio al proyecto de Millas. Los trabajadores de los cordones de Santiago emprenden el día 26 una marcha que termina en el centro de la capital, frente al Palacio de Gobierno. Corvalán se lamentará más adelante por la realización "Frente al Palacio de Gobierno, de una manifestación en que se pedía la cabeza de Orlando Millas, se atacaba al Partido Comunista y que en tal acto hayan participado sectores de la Unidad Popular."

En el curso de esas manifestaciones de repudio al proyecto Millas, algunos sectores políticos de los cordones de Santiago levantan una plataforma "conjunta" en la que señalan:

"Nosotros, trabajadores de los cordones industriales, proponemos como programa de acción de clase inmediata:

1.— La lucha por el paso a manos de los trabajadores, del sector socializado de todas las empresas que producen bienes de primera necesidad, del sector alimentario y de las industrias de materiales de construcción.

2;— La lucha por la expropiación inmediata de las grandes empresas privadas de distribución.

3.— La expropiación de las explotaciones de más de 40 hectáreas (irrigadas); confiscación de la tierra y nacionalización de la explotación.

4.— Constituir un control obrero de la producción y un control popular de la distribución. Los trabajadores decidirán lo que produciremos para el pueblo, la utilización de las utilidades y los lugares donde se depositarán los alimentos. Para ello, llamamos a la constitución inmediata de comités de vigilancia obrera en todas las empresas del sector privado.

5.— La lucha por implantar una dirección obrera en todas las empresas del sector socializado.

6.— Que no se devuelva ninguna empresa, ni las del sector de la construcción, ni las otras empresas que están en manos de los trabajadores. Retiro inmediato del proyecto Millas...

7.— Poder de sanción de las JAP y de los comandos comunales. Control de lo que se entrega a los comerciantes y castigo para los que no venden, acaparan o especulan. Cierre de sus comercios y venta directa a los pobladores. Los obreros de los cordones industriales se movilizarán para hacer efectivo este poder..."

El documento termina señalando: "Nosotros creemos que controlar los medios de producción y distribución es consolidar el proceso, es crear una nueva economía en manos de la clase obrera, es avanzar. Es por esto que nosotros nos oponemos a todo tipo de concesión a la burguesía." (171).

Obviamente, tal plataforma no surgió efectivamente de la base obrera de los cordones y comandos, sino de los sectores políticos trotskizantes del sector radicalizado de la UP y del MIR, que concebían el "avance hacia el socialismo" con un criterio meramente economicista. La real necesidad de conquistar el poder y de luchar para ello es olvidada y se opera con la ilusa creencia de lograr una transferencia de poder económico y político hacia los trabajadores demandando eso al gobierno, al mismo gobierno que vivía sus últimos meses cercado y atacado por la oposición reaccionaria. De este modo, lo más importante de la contraofensiva popular que derrotó el paro de octubre: implantar el fascismo, fue dispersado y minimizado tras el supuesto tácito, y absurdo, de que se controlaba un "poder" paralelo y éste se consolidaría defendiendo o exigiendo nuevas atribuciones económicas relacionadas con la producción o la distribución. Decimos "dispersado" y "minimizado", pues de hecho, tales consignas se tradujeron en que cada sindicato se aferrara al esfuerzo por controlar su industria, tomada durante el paro patronal o ciertas franquicias logradas en la distribución de los alimentos, dejando la iniciativa respecto al problema fundamental: la preparación de la demolición armada del gobierno, de los cordones, de

los comandos, de los sindicatos, etc. a la oposición reaccionaria. Prueba de ello es que la Ley de Control de Armas, aprobada por los propios parlamentarios de la UP más los de la oposición, no suscitó ninguna movilización de protesta como la recién mencionada en los cordones o comandos.

En todo caso, la movilización de los cordones y comandos, motivó el retiro por parte del gobierno del proyecto Millas y frustró el no menos ilusorio propósito de los dirigentes del PC de calmar a la oposición renunciando a aspectos básicos del programa de la UP.

Posteriormente, aprovechando la relativa estabilidad que surge del inesperado éxito que la UP obtiene en las elecciones parlamentarias de marzo del 73, el equipo dirigente del PC inicia una ofensiva para deshacerse de la oposición que se había cruzado en su camino en el interior mismo de la UP. Tanto las fuerzas opuestas al gobierno a través de sus medios publicitarios, como la directiva del P.C., se esfuerzan por "inflar" al MIR (aunque por razones diversas), atribuyéndole más importancia de la que realmente tenía en la política chilena. La oposición lo "infla" (incluso atribuyéndole acciones en las que no tuvo participación), con el propósito de mostrarlo como el "verdadero conductor" de la política de la UP y presentar el espíritu conciliador, legalista y meramente reformista dominante en dicha coalición, como una "máscara hipócrita", en tanto sus intenciones reales coincidían con la línea "extremista" del MIR. La dirección del P.C., después de los tropiezos que encuentra el proyecto Millas y pasada la elección parlamentaria, se suma a esta táctica de la oposición, con el objeto de atacar a quienes se les oponen en la UP, como elementos infiltrados por el MIR o bajo su influencia y justificar la "depuración de ultraizquierdistas", que deseaban poner en práctica. Tres días después de la elección de marzo, Corvalán, en un mítin en el Teatro-Circo Caupolicán, expresa: "Cerrar filas en torno a su Gobierno, es la tarea política más importante, la tarea más patriótica y revolucionaria de este momento. Por eso condenamos, una vez más, la conducta de los dirigentes del MIR, su afán de crear organismos de poder y de contraposición al Gobierno Popular, su empeño en llevar a los trabajadores la falsa idea de que este es un gobierno reformista; su plan dirigido a escindir la Unidad Popular en dos bloques contrapuestos metiendo su cola en uno de ellos.

Está claro que al MIR no le gusta la presencia de las Fuerzas Armadas en el Gobierno. Por nuestra parte, queremos decir que compartimos la opinión del Presidente de la República expresada en una reciente conferencia de prensa en el sentido de que las FF.AA. han desempeñado, en estos meses, un papel realmente histórico. Junto a la clase obrera han contribuido a atar las manos de los que han buscado la guerra civil, el baño de sangre. Leales al Gobierno legítimamente constituido y respetuosos de la Carta Fundamental no han sido ni son contrarios al deber del Presidente de cumplir con su programa de Gobierno. La inmensa mayoría del país guarda gratitud a las Fuerzas Armadas por la lealtad a su doctrina profesional y por su tradicional comportamiento en las contiendas electorales...

Los resultados de estas elecciones favorecen la aplicación consecuente del programa y una actitud más enérgica del Gobierno frente al sector sedicioso de la Derecha. Pueblo y Gobierno deben llevar adelante la lucha contra el mercado negro. Pueblo y Fuerzas Armadas deben seguir constituyendo las principales garantías de la seguridad interna contra los locatellis partidarios de la guerra fratricida." (172).

Poco después de las elecciones parlamentarias, la directiva del P.C. puso en marcha también su conspiración para dividir al MAPU, donde había triunfado una corriente de "locatellis" que se oponía a su línea. Los elementos infiltrados por el P.C. en el MAPU, hicieron llegar a El Mercurio un documento interno de dicho partido en el que sus opositores hacían una severa crítica a la conducción de la UP y analizaban la profunda crisis económica existente. Con ese pretexto, el 7 de marzo, los elementos desplazados de la dirección del MAPU, se tomaron la sede central de dicho partido y otros locales y ocuparon la radio Sargento Candelaria, que pertenecía a la organización. Al mismo tiempo, convocaron a una conferencia de prensa y anunciaron la "expulsión" de la mayoría del Comité Central designado en el Congreso de diciembre de 1.972. Recibieron de inmediato, el apoyo del diario "El Siglo". A raíz de la ruptura se comprobó que la dirección del P.C., no sólo tenía elementos infiltrados en las filas del MAPU, sino que, financiaba a todo el sector adicto a sus posiciones. El propio Corvalán termina apoyando públicamente a la fracción divisionista y señala: "El PC no se mete en los problemas internos de las colectivida-

des hermanas, pero tampoco es indiferente a lo que sucede en el seno del MAPU. Porque no lo podríamos ser cuando una fracción de ese partido entrega a El Mercurio un documento que ataca al gobierno, lo trata de reformista y vilipendia al Partido Comunista. No tenemos simpatía para esos grupos. Lo decimos claramente". (173). Días después en el Partido Radical, se producía la expulsión de una serie de miembros de la Juventud Radical, que se oponían a la subordinación de la dirección de ese partido a la del P.C. Por su parte, en el PS, eran reemplazados tres miembros de la Comisión Política, precisamente, los más opuestos a la línea de los dirigentes del P.C.

Los procedimientos utilizados por la dirección "comunista" para aplastar a quienes se les oponían en el interior de la UP, a costa, incluso, de dividir a los partidos, muestra una de las características actuales del revisionismo en la época en que éste actúa, al mismo tiempo, como "quinta columna" del social-imperialismo soviético. A su tradicional línea oportunista, se suman los procedimientos policiales y de infiltración y espionaje propios de la KGB soviética (la CIA del social-imperialismo), practicados, incluso, entre sus supuestos aliados. Meses antes habían intentado también dividir al PCR, sirviéndose de un agente que lograron infiltrar en su dirección. Al no poder defender sus posiciones oportunistas desde un punto de vista ideológico, emplean los complots secretos, el espionaje, la provocación, las calumnias y otros torcidos procedimientos para abrir paso a su política reaccionaria y opuesta al pueblo.

Finalmente, en sendos plenos simultáneos celebrados el 28 de marzo por los comités centrales del PS y del PC, refuerzan estos últimos su hegemonía sobre la dirección "depurada" del PS y ambas colectividades realizan declaraciones en que subrayan la unidad "comunista"—socialista, como la "columna vertebral" de la Unidad Popular, cerrando así el paso a los intentos realizados por los sectores más radicales de la UP y el MIR de constituir un nuevo polo de reagrupamiento de fuerzas, con una orientación diferente.

A raíz del intento de golpe de Estado (el llamado "tancazo"), que se da el 29 de junio de 1.973, se produce una intensa movilización de las masas y se revitaliza nuevamente la actividad de los Cordones Industriales y de los Comandos Comunales. Nuevamente se genera la posibilidad de pasar a una contraofensiva popular contra los sectores golpistas. Sin embargo, en el mitin realizado contra los golpistas frente al Palacio de Gobierno en la misma tarde del día 29, el Presidente de la República dedicó a realizar un homenaje a los jefes de las FF.AA., atribuyéndoles el aplastamiento de los conspiradores. Varios de ellos, incluso, fueron exhibidos desde los balcones de La Moneda, para que fueran aplaudidos por el pueblo, entre ellos, algunos de los cabecillas del futuro golpe militar, como: Pinochet, Bonilla (quien sería Ministro del Interior de la Junta), César Ruiz (quien intentaría su propio golpe poco después), etc. Las peticiones de las masas concentradas de armar al pueblo y disolver el Parlamento, son rechazadas en la intervención del Presidente Allende. Entretanto, en el seno de las FF.AA. siguen las deliberaciones y las presiones sobre el gobierno. Hay quienes desean materializar el golpe de inmediato, mientras Pinochet y su grupo, ya en estrecha vinculación con la CIA, prefieren esperar una ocasión más propicia, es decir, contar con pretextos legales, deshacerse de Prats, controlar el golpe al más alto nivel y aprovechar a fondo (como comenzar a hacerlo a partir de ese momento) la Ley de Control de Armas para conjurar cualquiera posible resistencia popular. El 8 de julio, Luis Corvalán, interviene en una concentración llamada por su partido e insiste en el diálogo con la DC, ya controlada oficialmente por el sector freista. Al igual que el Presidente Allende, que en su discurso había señalado: "mañana de nuevo las usinas a levantar su humo para saludar a la patria libre; de nuevo al trabajo para recuperar las horas que significó el paro del jueves; mañana cada uno a trabajar más, a producir más, a sacrificarse más por Chile y por el pueblo", Corvalán, desmoviliza a los trabajadores y los relega a preocuparse sólo de las tareas de producción. "Seguimos y seguiremos —dice— empuñando la bandera de la lucha contra la guerra civil y esforzándonos por superar las dificultades por las cuales atraviesa la nación. Las tareas relativas a la producción siguen a la orden del día. Parte del juego enemigo es distraer nuestra atención del cumplimiento de estas tareas. No le damos ni le daremos el gusto". (174). Mientras todas las organizaciones de la UP (salvo claro está algunos grupos satélites del PC, financiados por éste), se pronunciaban por pasar a la ofensiva e impulsar la combatividad de las masas, el Presidente Allende, se dejó arrastrar una vez más por la confianza en las FF.AA. inducido por la dirección del P.C. y por el mi-

to de la alianza posible con la DC y realizó, el 25 de julio, un llamado público al diálogo con la dirección de dicho partido. Era justamente el respiro que necesitaban los militares, alarmados por la movilización de masas y “madrugados” por el intento aventurero del Blindado No. 2, para preparar el golpe de gracia contra el gobierno y el pueblo.

A partir de julio de 1.973, la oposición encara el golpe con una doble táctica: el Partido Nacional, “Patria y Libertad”, así como la CIA y el equipo de Pinochet, asesorado por ésta, sólo se preocupan de crear las condiciones propicias para derribar al gobierno a través del golpe de Estado. Estos sectores propiciaban un golpe drástico, un “yakarta” como rayaban en los muros, que paralizara el movimiento de masas por largo tiempo, sembrando el terror. La dirección de la DC, sin descartar esa alternativa, buscaba el copamiento del gobierno a través de un gabinete militar y una rendición incondicional que, al aislarlo completamente de sus bases, facilitara la renuncia de Allende en beneficio de Frei. Por ello, sin dejar de promover con todo el resto de la oposición una feroz ofensiva de paros, manifestaciones callejeras, atentados y sabotajes, aceptaban en principio el diálogo con el gobierno, imponiendo, eso sí, exigencias que significaban prácticamente borrar las reformas realizadas por éste en los tres años. La directiva del PDC se inclinaba por un “golpe blanco”, en que el gobierno aceptara capitular en su beneficio con el aval de las FF.AA. De esa manera, copando al gobierno por dentro y cercándolo mediante la ofensiva en desarrollo pensaban forzar su rendición y, al mismo tiempo, ganar la mano a quienes (como el PN y otras fuerzas de extrema derecha), preferían un gobierno militar a secas y una represión a fondo contra toda la Unidad Popular, incluso, contra quienes, como los dirigentes del P.C., imploraban por llegar a un acuerdo.

La posición de los primeros sectores más duros la expresa ya en febrero de 1.973, es decir, antes de la elección de marzo de ese año (en que algunos sectores de oposición acariciaban la idea de obtener una mayoría parlamentaria suficiente como para destituir a Allende), el líder de “Patria y Libertad”, Roberto Thieme. Este señala: “Se va a agotar definitivamente en Chile el sistema democrático liberal. Este juego de los partidos políticos sean de Gobierno, sean de oposición, se acaba... sabemos que no hay solución política... el sistema democrático liberal muere para nosotros el 4 de marzo; sabemos que la solución no se va a dar por los cauces tradicionales de los partidos... se va a dar por los cauces de las Fuerzas Armadas... Sin ellas sería vano todo y aún suicida todo esfuerzo”. Esta solución era precisamente la que se esforzaba por evitar la DC, solución marginal a la política habitual, que le impedía imponer su “mejor derecho” de sucesión en tanto fuerza mayoritaria de la oposición y del país en general y en tanto interlocutor buscando con insistencia por la directiva del P.C. y por quienes les seguían en su política claudicante.

Por otra parte, desde el ángulo de los sectores anti-golpistas, las promesas de diálogo de Frei y su equipo, tenían la “virtud” de dividir aún más profundamente a dichas fuerzas y de garantizar la activa movilización de los círculos oficiales de gobierno, de los dirigentes del P.C. y de quienes les secundaban en la UP, contra todo intento de organizar la resistencia y de movilizar y armar a las masas. Dados los reflejos condicionados oportunistas de los “comunistas” pro-soviéticos que ejercían su hegemonía en la UP, esas promesas de diálogo los transformaba en un factor más importante para “desarmar los espíritus y las manos”, como planteara el Cardenal Silva usado como cebo para avalar el diálogo con la DC, que la propia Ley de Control de Armas aplicada por las FF.AA. El P.C. se lanzó en una ofensiva a fondo por liquidar los Cordones Industriales y los Comandos Comunales y, pese a acusarlos de divisionistas, llegó a promover incluso la formación de organismos paralelos a ellos en algunas comunas, para restarles eficacia. Por su parte, el Ministro del Interior, Carlos Briones, designado allí por sus fuertes vínculos con la DC para facilitar el diálogo, autorizó por primera vez el uso de la fuerza pública para desalojar industrias tomadas durante el “tancazo”. Sus actuaciones anti-populares llegaron a tal extremo, que el PS debió expulsarlo de sus filas.

Es así, como la ofensiva y cerco contra el gobierno y la preparación militar del golpe, corren paralelos con el intercambio de misivas y las entrevistas entre el Presidente Allende y el presidente de la DC, Patricio Aylwin. El 26 de julio comienza de nuevo la huelga de camioneros, que había causado estragos en octubre de 1.972. Ese mismo día, Aylwin declara: “Públicamente, ante el pueblo de Chile desde el seno de mi Partido y pidiendo a Dios que me asista para responder a la confianza que todos mis camaradas han depositado

en mí, acepto la invitación que el Presidente de la República hace a la directiva nacional de mi partido para buscar un consenso mínimo". A las 12.30 del día 30 de julio, se inició el diálogo. Allí, Aylwin planteó como condiciones previas e intransables a todo entendimiento: 1) la formación de un gabinete con la presencia de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y del Director General de Carabineros; 2) el sometimiento irrestricto del Gobierno a los dictámenes del Poder Judicial, del Parlamento y de la Contraloría; 3) la promulgación de la Reforma Constitucional de las Tres Areas y el reconocimiento de que bastaba una simple mayoría de industria tomadas a raíz del "tancazo"; 5) intensificación de la campaña para obtener el desarme de grupos políticos, sindicales o civiles; 6) fin de la actividad "ilegal" de las JAP; cesión definitiva de los canales de TV 9 y 13 a las directivas reaccionarias de las Universidades de Chile y Católica.

Un Pleno del CC del Partido Socialista, declaraba respecto a las conversaciones que "si las condiciones que el PDC plantea para el "consenso mínimo" solicitado por Cardenal y otras personalidades, implican la aceptación de una transacción del programa o una claudicación de los objetivos del proceso revolucionario, el PS entonces decidirá incluso su retiro del Gobierno". Posteriormente sostuvieron: "El Partido Socialista no aceptará jamás conciliar con los enemigos de Chile, del Gobierno popular, de los trabajadores. En estos momentos, cualquiera fórmula de transacción con la Democracia Cristiana sólo sirve para alentar a los grupos facciosos que operan en su seno, y en el resto de la reacción, cuyo único e inalterable objetivo es recuperar el poder y sus privilegios".

El día 2 de agosto, condimentado por la incorporación al paro de los buses y taxis, continúa el diálogo entre el Presidente Allende y la DC, en forma epistolar. Allende ofrece promular la Reforma Constitucional de las Tres Areas, pero considera que "Llevar a cabo un nuevo cambio de Gabinete, apenas un mes después que asumiera el actual, no aportaría ninguna solución a lo que el país nos exige"... Al día siguiente la directiva del PDC, dio por terminado el diálogo sosteniendo: "Es penoso constatar que el Presidente de la República y su Gobierno no tienen una percepción diferente de la mayoría de los chilenos sobre la gravedad y la urgencia de los problemas que aquejan al país". Ese mismo día renuncian todos los ministros, dejando al Presidente en libertad de acción para intentar reanudar el diálogo. El día 4 el general de División, Manuel Torres de la Cruz, realiza en la zona sur el primer ensayo de golpe, coordinando bajo su mando a todas las Fuerzas Armadas de la región, en el brutal allanamiento contra varias industrias del que ya hemos hablado.

El día 9 de agosto, el Presidente Allende, cumplía con la exigencia de la DC y designaba un nuevo gabinete en el que participaban los tres Comandantes en Jefe de las FF.AA. y el Director General de Carabineros. Dos días después, el PS, olvidándose de las declaraciones de su reciente Pleno del CC, firmaba una declaración conjunta (de ambas Comisiones Políticas) con el P.C., aprobando el gabinete militar. Se hace allí un recuento de las actividades sediciosas de la oposición, señalando que esto "enseña claramente una conjura de peligrosidad extrema dirigida contra el Gobierno de la Unidad Popular y la clase trabajadora... Enfrentarla es tarea del nuevo gabinete... que el compañero Salvador Allende ha definido como de la Seguridad Nacional". Luego, abrogándose, sin más, la representación de toda la Unidad Popular, prosiguen: "Junto con no ocultar la dificultad de la tarea, socialistas y comunistas y la Unidad Popular toda, expresamos nuestra confianza en que la conjunción de la fuerza irresistible del pueblo, de su unidad de objetivos y el cumplimiento de sus deberes constitucionales por las Fuerzas Armadas y Carabineros, desalentarán al golpismo derechista e impondrán un clima de autoridad y respeto que permita el desarrollo de la fuerza creadora y productiva de los trabajadores". (175).

En contra del gabinete militar se pronunciaban, en cambio, sectores de izquierda del PS, la IC, el MIR, el MAPU, y, por supuesto, el PCR. La Comisión Política del MAPU declaraba: "La política de la conciliación se expresa en este instante en la incorporación de un sector de las FF.AA. al gabinete, en condiciones que van más allá de todo lo aceptable para las fuerzas revolucionarias... El MAPU rechaza semejante medida porque significa debilitar y confundir aún más a la clase obrera y al pueblo... Constituir un nuevo gabinete que pretende imponer una supuesta "paz social", es engañarse una vez más. Significa creer que con promesas y debilidades la derecha dejará a un lado sus planes golpistas, cualquiera que sean las formas concretas que asuman. Significa creer también que la lealtad de los sectores constitucionalistas de las FF.AA. sólo puede ganarse ofreciéndoles cargos en la

conducción del gobierno". Y concluía expresando: "La alternativa es golpear o ser golpeados! ¡Con el poder popular y a la ofensiva aplastaremos y liquidaremos a los fascistas!." (176).

El MIR calificaba al gabinete como el "Gabinete de la Capitulación" y sostenía que "en este Gabinete, los partidos obreros que antes ocupaban posiciones en el eje del Gobierno, tenderán a ser desplazados por las Fuerzas Armadas, las que constituyen históricamente la columna vertebral del orden burgués patronal". Señalaban, por último: "El señor Allende, para justificar su nuevo Gabinete, se permitió afirmar que había subversión ultraizquierdista entre los marineros de la Armada y que, una vez más, la extrema izquierda se da la mano con la extrema derecha y con el fascismo. La verdad es que el único personero de izquierda que, públicamente, se ha dado la mano con un reaccionario ha sido el señor Allende, cuando inició su capitulación con Patricio Aylwin." (177).

En el diario "El Siglo", en cambio, aparece el 12 de agosto un artículo de Jorge Insunza, en el que señala: "La seguridad nacional sólo puede garantizarse realmente mediante la fusión del pueblo y las fuerzas armadas... Los elementos de ultraizquierda... tratan de sembrar la desconfianza en el seno del pueblo, y en particular, en el seno de la clase obrera acerca del significado que el gabinete tiene para el desarrollo del proceso revolucionario... La constitución del nuevo gabinete crea condiciones para cerrar las grietas, entre las FF.AA. y el pueblo, que había provocado la ofensiva reaccionaria, cerrando así el paso al golpe de Estado y a la guerra civil".

A fines de agosto, se produce el intento de golpe de Ruiz Danyau y la renuncia del general Prats como Comandante en Jefe de las FF.AA. Respecto a la sucesión de Prats por Augusto Pinochet en dicho cargo, Víctor Díaz, miembro de la Comisión Política del P" C" comenta en declaración al periódico argentino "Nuestra Palabra": "la asunción del general Augusto Pinochet...es interpretada como un triunfo de la línea constitucionalista". Eso, trece días antes que el propio Pinochet encabezara el golpe de Estado definitivo. Ese mismo día salía publicado el acuerdo de la Cámara de Diputados, que contenía el pretexto "legal" que esperaban los golpistas para actuar, en el que se señalaba: "...el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta".

El gabinete militar, último del gobierno de Allende, fue, por su parte, expresión de un nuevo desacuerdo entre los sectores más radicalizados de la UP con la tendencia dominante allí, manipulada por la dirección del P" C". Eduardo Aquevedo, subsecretario del MAPU, narra del siguiente modo la reunión en que se decidió, en lugar de resistir, la formación del gabinete con las FF.AA., como último intento de un acuerdo con la DC. "El levantamiento militar estaba, por lo ya dicho, anunciado con anticipación. La renuncia de Prats al gabinete y a la Jefatura del Ejército, y la carta en la que se hacía referencia al claro respecto al comportamiento futuro de las FF.AA. Además existían informaciones concretas en este sentido. Sin embargo, no sabíamos con exactitud de qué manera y en qué momento preciso se llevaría a cabo. La información era grande y la confusión todavía mayor. Unos días antes, el viernes 7 y el sábado 8 de septiembre participé en una reunión de los jefes de partido con Allende. Se planteó directamente la cuestión del golpe de Estado, se expusieron distintas posiciones. Por nuestra parte, en acuerdo con otros partidos que tenían planteamientos semejantes (PS, Izquierda Cristiana y MIR —que no participó en la reunión—), propusimos el enfrentamiento armado, la insurrección y la guerra civil, que dividiera favorablemente a las FF.AA. como única salida a la situación. El golpe militar estaba a la puerta.

Otro sector, conformado por el P" C", la derecha del PS, el grupo de Gazmuri —excesión de derecha del MAPU— y el propio Presidente, sostenían que el enfrentamiento había que evitarlo y que existían posibilidades reales de impedirlo por la vía institucional y legal. Allende había convocado a esta reunión para saber la opinión de los distintos sectores y después de escucharlos, dijo que si los partidos no se ponían de acuerdo, él tenía la solución. Lo planteado por el ala izquierda de la UP no encajaba en ese esquema, que era de evitar la guerra civil a cualquier precio. Planteó tres alternativas. La primera era el plebiscito, que no contaba con el apoyo ni del presidente ni de los partidos. La segunda era el enfrentamiento. Fue descartada por Allende. No quería un baño de sangre, y dijo que el enfrentamiento lo perdíamos de antemano, dada la correlación de fuerzas en aquel mo-

mento. No hizo un análisis profundo de la situación. Sencillamente quería evitar el derramamiento de sangre y la guerra civil. Esto lo repitió insistentemente. Estaba aferrado a la idea de que era indispensable mantener el control del gobierno hasta las elecciones de 1.976 e incluso realizar antes un plebiscito con movilización de masas. En tercer lugar, propuso lo que a su parecer era la salida correcta, la única solución positiva a la situación. Dijo que había estado conversando con la DC y que habían llegado a un entendimiento directo para dilucidar la crisis con la formación de un gabinete militar. La condición que anteponía la DC era el ingreso de las FF.AA. al gobierno, con participación de civiles. 'Ya que no se ponen de acuerdo les pido libertad de acción. He estado conversando con la democracia cristiana y tengo la solución para la semana próxima' (estábamos a tres días del 11 de septiembre)". (178).

3.- Los errores de la oposición pequeño-burguesa.

La oposición pequeño-burguesa a la corriente dominante en la UP y en el gobierno allendista, adoleció —como hemos dicho— de una serie de errores y debilidades, que le impidió levantar una alternativa revolucionaria. Nos proponemos a continuación señalar algunas de estas falsas concepciones, que —no obstante las condiciones muy favorables existentes— le impidieron hacerlo.

1.— Una de las fallas principales de esta tendencia más radical de la UP, así como del MIR, es que no fueron capaces de comprender (y muchos sectores no lo comprenden incluso hoy día), el falso proyecto de socialismo que intentaban implantar los dirigentes del P" C" y quienes les secundaban conscientemente; ni tampoco las razones de fondo de la estrategia indirecta de alianza con la DC, derivada de las características de dicho proyecto en las condiciones dadas en Chile de hegemonía del imperialismo norteamericano. Creyeron que se trataba de un auténtico proyecto de avance hacia el socialismo, sólo que llevado a la práctica tras la conducción de quienes utilizaban, "equivocadamente", métodos reformistas y oportunistas. El MIR, por ejemplo, que planteó las divergencias más pronunciadas con el sector hegemónico de la UP, sostenía en sus documentos: "Ellos van por camino distinto al nuestro y nunca han visto con simpatía nuestro desarrollo. Pero por encima de todo, nada los convierte en nuestros enemigos...", olvidando que, de acuerdo a las enseñanzas de Lenin, los dirigentes revisionistas son: "mejores defensores de la burguesía que la propia burguesía" y que: "sin su dirección de los obreros, la burguesía no podría permanecer en el poder". Debido a esta incomprensión de la naturaleza profundamente reaccionaria de la dirección revisionista (falsificadora del marxismo), pensaron que se trataba simplemente de una corriente reformista (aún actualmente lo califican de "reformismo obrero") y creyeron que era posible corregir o sobrepasar su línea, sin desmascararlos a fin de privarlos de su apoyo de masas y sin combatirlos, rompiendo con la hegemonía que ejercían en la UP y en el Gobierno. Sin embargo, los revisionistas, si bien impulsan ciertas reformas para aprovechar el movimiento de masas en su beneficio y engañar demagógicamente al pueblo, no son simples reformistas burgueses, ni mucho menos "reformistas obreros". Las diversas capas de la burguesía pequeña y media —en la medida que son reformistas— aspiran a desarrollarse a costa de la gran burguesía y del imperialismo (cuando el proletariado logra arrastrarlos a ello y a desplazarlos del poder. En este plano, el proletariado puede y debe aprovechar esas contradicciones objetivas, para liquidar al gran capital interno e imperialista, a condición de que conserve la superioridad de fuerzas y la dirección del proceso. Esa fuerza y ese rol dirigente, deben garantizar: tanto que la burguesía pequeña y media no conduzcan el proceso, llevándolo a la conciliación y a la derrota; como el que no aprovechen para transformarse ellos en gran burguesía, si éste tiene éxito. De hecho, en nuestro país, dada la debilidad de los sectores burgueses medianos y pequeños, y sus fuertes vínculos y ataduras con el capital imperialista y monopolista interno, la primera de estas posibilidades es la más probable, si ellos dirigen el proceso. Es decir, la capitulación y la conciliación con el gran capital imperialista y criollo.

La dirección reformista burguesa de corte revisionista o falsamente marxista, en cambio, pretende alterar el rol histórico del proletariado; falsificar su ideología y engañarlo,

en provecho de su proyecto de capitalismo de Estado. Por un lado, se esfuerza por anular la misión revolucionaria del proletariado, a través de falsas concepciones políticas e ideológicas; por suprimir su papel dirigente; por impedir que a la cabeza del pueblo, destruya el Estado burgués y conquiste realmente el poder. Por otro lado, se empeña en promover ciertas reformas, en utilizar su influencia sobre el proletariado (y aún la alianza de éste con las capas burguesas pequeñas y medias), para ocupar con su alta burocracia el rol como explotadores que tenía la gran burguesía y los monopolios imperialistas. Se propone, asimismo, ya sea desplazando a algunos de estos antiguos explotadores y/o asociándose transitoriamente con otros, controlar la economía y el poder. Es a este proceso de sustitución del gran capital interno e imperialista por una nueva burguesía burocrática salida de sus filas, realizado a través de la implantación de un capitalismo de Estado, a lo que llaman "construcción del socialismo". Por su mismo carácter reaccionario, este proyecto deben emprenderlo sin destruir las leyes e instituciones fundamentales del Estado burgués. El proletariado, por lo mismo, no puede aceptar una alianza con los sectores dirigentes del revisionismo, con estos falsos marxistas, tomándolos como presuntos "reformistas burgueses", pues lo que pretenden es nada menos que suplantar la dirección proletaria y atribuirse falsamente la representación ideológica y política del proletariado, para traicionar sus intereses y reemplazar a los grandes explotadores.

Más aún, hoy por hoy, en que falsos marxistas de esta especie controlan el poder en una serie de países y se han constituido en una de las dos superpotencias mundiales en burguesía burocrática social-imperialista, su rol de estafadores políticos se ha hecho más peligroso y eficaz en el mundo entero. Ya no representan tan sólo sus propios intereses y ambiciones locales de transformarse en gran burguesía burocrática estatal, sino, también, los voraces intereses de hegemonía internacional y explotación de los pueblos del mundo, de la burguesía burocrática social-imperialista soviética. Esto los hace doblemente peligrosos y los distingue aún más nítidamente de los sectores burgueses tradicionales.

Obviamente, al caracterizar a los falsos comunistas, nos referimos a los círculos dirigentes de los partidos en que se agrupan. En la base de dichos partidos hay numerosos militantes engañados por dichos dirigentes —en el caso de Chile incluso numerosos obreros— que deben ser ganados por y para una auténtica dirección proletaria. En este sentido la constatación de la existencia de numerosos obreros engañados en las filas de los falsos partidos comunistas (que lleva a algunos a calificarlos de partidos "reformistas-obreros", para justificar la alianza con sus dirigentes), lejos de justificar esa calificación y esa alianza, sólo muestra la urgencia de desenmascarar y combatir a tales dirigentes. La militancia obrera que logran arrastrar y engañar evidencia, precisamente, su papel de estafadores políticos y su diferencia con las auténticas corrientes reformistas-burguesas habituales.

Esta incomprensión de la esencia reaccionaria del revisionismo, condujo al sector radicalizado de la UP y al gobierno (ambos bajo la hegemonía de la dirección del P"CC"), a través de una crítica enfilada contra defectos secundarios de su política: sectarismo, tendencia a la conciliación, freno a la lucha de masas, etc., o bien, intentando —sin romper con su dirección— colocarlos ante hechos consumados, para ensayar de alterar su rumbo escandalosamente oportunista. No advirtieron que existía una incompatibilidad total, entre el falso proyecto de "avance al socialismo" de la dirección del P"CC", o, mejor dicho, entre su proyecto de capitalismo de Estado, y la movilización revolucionaria del pueblo para la conquista del poder, bajo dirección proletaria. No comprendieron, que su estrategia de levantar una falsa "vía pacífica" al poder; su veneración por la legalidad y las instituciones del Estado burgués; sus alabanzas y su supeditación a las FF.AA. reaccionarias; así como su propósito obsesivo de llegar a un pacto con la DC, eran inherentes, inseparables, de su propósito de transformar un sistema de explotación por otro en el que soñaban estar al mando.

2.— Un segundo aspecto de los errores que inspiraron la conducta del sector radicalizado de la UP, así como del MIR, es su falsa concepción de la unidad. Al no comprender la naturaleza esencialmente reaccionaria de los falsos dirigentes "comunistas", no comprendieron la necesidad de romper con ellos, generando un nuevo polo de reagrupamiento tras la dirección revolucionaria. Olvidaron lo señalado por Lenin: "La única línea marxista en el movimiento obrero mundial consiste en explicar a las masas que la escisión con el oportunismo es inevitable e imprescindible, en educarlas para la revolución en una lucha des-

piadada contra él". Se dejaron embaucar por una falsa unidad que, en última instancia, se tradujo en mantener todas esas fuerzas políticas atadas a la dirección hegemónica del revisionismo, mediante el chantaje de calificar cualquier intento de independencia de ella, como "divisionista". No advirtieron que una "unidad" tras una línea anti-proletaria y anti-popular, mientras mayor cantidad de masas arrastre, es expresión de un mayor divisionismo contra los verdaderos intereses del proletariado y del pueblo. Si el pueblo entero la sigue, es todo el pueblo que ha sido escindido de sus intereses y atado a los intereses de la burguesía (sea la antigua burguesía o aquella que anhela sustituirla). No comprendieron que la única unidad justa respecto al P" C" era con sus militantes de base engañarlos, precisamente para ganarlos para una línea correcta a través de una intransigente lucha de principios y práctica, contra sus dirigentes oportunistas. Esta fue, precisamente, la táctica que siguió Lenin y los bolcheviques, cuando se unieron transitoriamente en los soviets a los mencheviques, que ocupaban sus organismos dirigentes. Fueron allí, a combatir resueltamente a la dirección menchevique y a ganarle a las masas, para romper luego con ella y conducir a los soviets a una política revolucionaria, insurreccional.

Del falso concepto de "unidad", de la "unidad" en torno a la línea reaccionaria de la dirección del P" C", que siempre terminó, en última instancia, por imponerse, surgió la flasa acumulación de fuerzas, que caracterizó a la UP. Fuerzas agrupadas en torno a la paralización sistemática de sus luchas; en torno a ostentosos desfiles que sólo oponían una inocua exhibición cuantitativa a la oposición reaccionaria; en torno a relegar a los trabajadores al simple deber de producir más, en función de nuevas competencias electorales y, por último, agrupadas en torno a un repudio verbal a la guerra civil, a la confianza ciega en las FF.AA. y al rechazo de toda preparación contra el golpe de Estado ¿De qué sirvió esa "unidad"? ¿De qué sirvió esa acumulación de fuerzas, como no sea servir a más largo plazo, los intereses de los falsos "comunistas"? Un ejemplo patético de su inutilidad (desde el punto de vista de los intereses del pueblo), lo constituye el hecho de que la UP realizó el 4 de septiembre de 1973, es decir, una semana antes del golpe, la manifestación más grande de la historia de Chile, movilizand o alrededor de un millón de personas. Del mismo modo que no sirve de nada dar a un enfermo millones y millones de antibiótico equivocado, de nada servía a los intereses del pueblo acumular fuerzas, "unirse", en torno a una línea y a una política contraria a sus intereses.

La corriente radicalizada de la UP y el MIR, no comprendieron, pese a los golpes recibidos, que la dirección del P" C" mientras los chantajeaba con frases de "unidad", aplicaba en los hechos una brutal política divisionista y liquidacionista de toda tendencia que se apartara de sus designios reaccionarios. Es así, como no trepidaron en pasar por encima de sus "aliados" cuando estimaron conveniente; en provocar la división de los partidos a través de sus infiltrados; en falsificar los resultados de la elección de la Central Única de Trabajadores; en oponerse en forma drástica —incluso a través de la represión violenta— a los tímidos intentos de unir a las masas en torno a una línea más combativa y menos oportunista que la suya. Mientras así actuaban con el ala radicalizada de la propia UP, la arrastraban a una "unidad" vergonzosa con la oposición reaccionaria, a través de la aprobación de la Ley de Control de Armas y de la negociación del programa de gobierno con la DC.

Esta falsa concepción de la "unidad", estimuló al mismo tiempo, una ciega hostilidad contra fuerzas (como el PCR), que estaban planteando en lo fundamental una posición correcta y llamaban, insistentemente, a la formación de un polo de reagrupamiento de masas tras una alternativa realmente revolucionaria. Un reagrupamiento de esta especie, que, claro está, implicaba romper con la dirección oportunista del P" C", habría permitido ofrecer —a la lucha de masas en pleno ascenso— una clara perspectiva de acción, para oponerse con eficacia a los gopistas y avanzar realmente en la lucha por el poder. No obstante, objetivamente, la tendencia radicalizada que analizamos sirvió de receptáculo a un gran número de sectores descontentos con la dirección oportunista de la UP, pero... para atajarlos a mitad de camino e impedir que arribaran a una crítica de fondo y con ello a una consecuente posición revolucionaria. Mantuvieron de este modo atados a dichos sectores, a través de un apoyo crítico a la dirección de la UP y al gobierno, al proyecto en vigencia, ofreciendo a lo sumo como "alternativa" ciertas acciones diversionistas, que no llegaron a configurar un camino correcto. Jugaron, así, el papel de tampón entre el revisionismo y el marxismo-leninismo, en beneficio —consciente y no consciente— de aquél.

3.— Otro aspecto básico de las ideas erróneas de la corriente pequeño-burguesa que analizamos, radicó en su concepción equivocada y ambigua respecto al carácter del gobierno y, en general, respecto al socialismo. Confundieron estatización con socialismo, presentando a menudo como “socialista” a un gobierno como el de Allende, que si bien estatizaba empresas, no era de ninguna manera expresión de la dictadura del proletariado y ni siquiera había logrado desplazar del poder a los explotadores tradicionales. Frecuentemente, confundieron a las masas presentando la labor del gobierno (que aplicaba en esencia, pese a la buena intención de algunos, el proyecto de capitalismo de Estado de la dirección del P”C”) como construcción del socialismo. Es así como el MIR, por ejemplo, levantó consignas como la de “Más fábricas para el pueblo” o aquella de “no una fábrica o un fundo: todas las fábricas y fundos para el pueblo, eso es socialismo”, que hacían creer que se estaba avanzando hacia el socialismo a través de meras reformas económicas y sin destruir previamente el poder reaccionario y conquistarlo realmente. Incluso como consignas agitativas, así planteadas, eran falsas, pues inducían a las masas a pensar que las expropiaciones del gobierno, ponían las fábricas y otros medios de producción en manos del pueblo y realmente integrados a un área socialista. Sin contar que estas formulaciones ignoraban la verdadera esencia del proyecto revisionista, opuesto al socialismo, encerraban una concepción economicista y también reformista del avance al socialismo, marginando este problema del asunto político más decisivo: la conquista del poder. De esa manera, creyendo que se avanzaba al “socialismo” simplemente estatizando, sólo se logró colgarle al gobierno —en las condiciones de aguda crisis y de feroz ofensiva reaccionaria— una piedra de molino cada vez más pesada al cuello, acelerando su hundimiento. Esto sin contar que, bajo la influencia trotskista, se pretendía corregir las inconsecuencias del gobierno en su proceso de “socialización” de empresas, disparando contra todos los sectores burgueses y exigiendo su estatización, con lo cual no se hacía más que sumar aliados al comando golpista de oposición.

Paradójicamente, esa misma concepción economicista y reformista de “avance hacia el socialismo”, condujo, no sólo a subestimar y desaprovechar el anhelo y el movimiento de lucha de los trabajadores por impedir que la crisis fuera descargada sobre sus espaldas (politizándolo y transformándolo en lucha por el poder), sino, incluso, a condenarlo como una tendencia “economicista” y “anti-socialista”, siguiendo en ello a la dirección del P”C”. De ese modo se facilitó que la oposición golpista utilizara, demagógicamente, algunas veces, dicho anhelo de lucha, para integrar a algunos sectores de las masas a sus planes sediciosos.

4.— Otro de los errores, común a la corriente radicalizada de la UP y del MIR, fue el de encarar de un modo equivocado el problema de la conquista del poder. Obnubilados o inhibidos por las alabanzas de los dirigentes del P”C” a las FF.AA., no comprendieron que la conquista del poder pasaba necesariamente por la organización y armamento de las masas, para destruirlos. Cerrando los ojos a este hecho esencial para un marxista, sembraron la ilusión de que se alcanzaría el poder desarrollando, cuantitativa y cualitativamente, un pretendido poder paralelo —construido a la sombra del gobierno— el que se calificó de “poder popular”. ¿En qué consistió lo que se calificaba de “Poder popular”? Se trataba de organizaciones que agrupaban a una parte de las masas obreras, campesinas, de pobladores y estudiantes, con relativa independencia de la CUT y de las Federaciones sindicales en las que tenía un peso dominante la burocracia del P”C”. Su forma concreta de organización consistió en: los “Cordones Industriales” (asambleas de delegados de los sindicatos obreros de una zona de gran concentración industrial); en los “Comandos Comunales” (dichos Cordones, a los que se sumaban los delegados de los “Campamentos” de pobladores y de los centros estudiantiles del sector); y, algunos “Consejos Campesinos”, que lograron generarse democráticamente desde las bases. Solía considerarse, también, como expresión del “poder popular”, las JAP del sector. Lo más significativo de estos organismos, fueron los vínculos que ellos tenían con la base; su funcionalidad, pues, integraban las diversas luchas y reivindicaciones de un sector de la población; su mayor preocupación por los problemas de las masas (salarios, abastecimiento, control de precios, etc.), y el peso ideológico y político que en ellos tenían las corrientes que no se sentían interperadas por la política oficial de la UP y del gobierno.

Para generar la ilusión de que eran organismos “de poder”, con especulaciones típi-

cas del trotskismo, se intentó esgrimir la experiencia de la Rusia pre-revolucionaria, en los momentos en que allí se generó a través de los soviets un poder paralelo al del gobierno burgués de Kerenski o, mejor dicho, un "germen de poder", como los calificara Lenin. Sólo que estos teóricos olvidaron que los soviets fueron producto de arduas luchas insurreccionales de las masas, del aplastamiento de las fuerzas policiales zaristas en algunas ciudades, del paso de grandes contingentes del ejército al lado del pueblo y de la ausencia del grueso de las fuerzas armadas reaccionarias, comprometidas en lejanos frentes de batalla en la guerra imperialista de 1.914. Todo esto culminó con el derribamiento del zarismo y el surgimiento transitorio de dos poderes paralelos: el gobierno burgués y los soviets. Aún así, para transformar dichos "gérmenes de poder" que eran los soviets, en poder real, los bolcheviques debieron derrotar la dirección oportunista en ellos y emprender la insurrección armada para conquistar verdaderamente el poder de manos de la burguesía. Sólo los mencheviques y los trotskistas (también en ese entonces) se satisfacían con autoproclamar a los soviets como poder paralelo, contentándose con reclamar al gobierno burgués mayores atribuciones. De este modo, subestimaron y hasta se opusieron a la preparación y puesta en marcha de la insurrección, que planteaban con urgencia, Lenin y los bolcheviques.

En Chile, las atribuciones con que dichos organismos de masas contaron (en parte con la tolerancia del gobierno) durante el paro patronal de octubre del 72, como: distribución directa de productos a los sindicatos y poblaciones, fiscalización de los comerciantes y acaparadores a través de las JAP, entrega de materias primas a las industrias; así como otras atribuciones que fueron producto de la iniciativa de las masas, tales como: confiscación de medios de transporte adheridos al paro, apertura de locales comerciales en huelga y administración de ellos, distribución de comestibles, materias primas y alimentos, formación de equipos de vigilancia en las industrias, etc., contribuyeron aún más a que se fomentara la ilusión de que se trataba de una forma de "poder popular". No obstante, la mayor parte de estas atribuciones fueron drásticamente suprimidas por el propio gobierno, a exigencia del gabinete militar que se constituyó a raíz del acuerdo entre gobierno y oposición, al que se atribuyó la derrota del paro patronal. Después de dicho acuerdo, la mayor parte de los militantes de la UP, que habían concurrido durante el paro a los cordones y comandos, desertaron de ellos a instancias de sus dirigentes y se concentraron en la preparación de las elecciones parlamentarias de marzo de 1.973.

La verdad es que la mayor parte de las actividades de los cordones, comandos y consejos campesinos, fueron fundamentalmente defensivas y dichos organismos no cumplieron el papel realmente importante que pudieran haber asumido: el de centros de transmisión hacia las grandes masas de una línea revolucionaria, para movilizarlas, reagruparlas y prepararlas para enfrentar —con todos los medios posibles— el golpe militar que se veía venir. Menos aún, por cierto, cumplieron el papel de centros de orientación y reagrupamiento con vistas a la conquista del poder. En gran medida esta posibilidad fue frustrada, precisamente, por la falsa orientación ya mencionada, contenida en consignas como aquella de: "crear, crear poder popular", que hacían creer que el poder —que ni siquiera el gobierno de la UP lo controlaba— se obtendría simplemente acumulando una fuerza numérica en estos organismos, para ejercer algunas atribuciones ya descritas y autoproclamarse en virtud de ellas, como "poder popular". Justamente esa ilusión de que ya se "era poder", contribuyó poderosamente a velar y oscurecer algo que era primordial y urgente que el pueblo comprendiera: QUE NO TENIA EL PODER y que quienes lo ostentaban realmente, se preparaban a toda marcha para realizar un feroz escarmiento en su contra y arrebatarse todas sus conquistas. Vistas las cosas hoy día, después de todo lo ocurrido a raíz del golpe, no cabe duda que un simple desarrollo de lo que se llama "poder popular", concebido como sustituto de la real necesidad de prepararse para enfrentar al golpismo y conquistar verdaderamente el poder, lejos de impedir el golpe como piensan aún hoy algunos, sólo habría determinado que los muertos no fueran 30 o 40 mil, sino 100 mil, 200 mil o más.

Otro de los factores que se sumaron a la confusión que estos organismos llamados de "poder popular", generaron respecto a la necesidad de prepararse en serio para una lucha por el poder, fue la ambigüedad permanente con que fueron concebidos en su relación con el gobierno. Ambigüedad, claro está, producto de las confusas y erróneas ideas de mu-

chas de las fuerzas que allí participaban respecto al carácter del gobierno. Es así como los militantes de la UP que participaban en dichos organismos, así como los del MIR, mantuvieron siempre una posición ambigua y confusa, entre concebirlos por sí mismo como expresión de un "poder popular" paralelo e independiente del propio gobierno; y la idea, promovida por los sectores oficialistas de la UP que los toleraban, de que eran solamente instrumentos de un presunto "poder popular" expresado por el gobierno. Jamás permitieron que se esclareciera plenamente, si se intentaba (aún a través de las menguadas atribuciones conquistadas por estos organismos) de forjar un "poder" independiente del gobierno y de su dirección oportunista, o de organismos destinados a apoyar el "poder" gubernamental. La pugna entre estos dos criterios, no sólo paralizó en gran medida el desarrollo y eficacia de estos organismos de masas, sino que, impidió la posibilidad de que se impusiera allí una interpretación correcta del papel que podían jugar en la lucha contra el golpismo y por la conquista del poder.

Como hemos expresado al comienzo de este punto, la concepción errónea sobre el verdadero carácter del gobierno y sobre las FF.AA., derivada de la influencia nefasta de la ideología revisionista, logró velar casi por completo la necesidad de movilizar a las masas a la lucha por el poder. Si bien en los sectores que analizamos, no se consideraba por completo conquistado el poder a raíz del triunfo electoral de 1.970, e incluso, se hacían cada vez más frecuentes alusiones a la inevitabilidad de un enfrentamiento, la preparación para ello no fue nunca —como debiera haberlo sido si se inspiraran en una posición marxista— el centro de su política. En la práctica, se concebía la "conquista del poder" como a través de una especie de sistema de vasos comunicantes, en que éste era transferido de manos de los explotadores a manos del pueblo, intensificando las expropiaciones. En una primera etapa, en que aún no se ha hecho tan patente la conducción oportunista de la UP por la dirección del P"CC", la lucha de masas es concebida como una manera de llevar nuevos medios de producción a manos del gobierno y de consolidar la adhesión a las masas a él. Por ese entonces (nos referimos especialmente al año 1.971) no germinan aún tentativas de concebir los organismos de "poder popular" con independencia del gobierno, aunque jamás se concibió un rompimiento franco con los dirigentes oportunistas. La "transferencia" de poder es concebida entonces, como a través de un doble mecanismo de vasos comunicantes: el gobierno aumentaba su control de "poder" estatizando; y los organismos de "poder popular", los transferían gradualmente a sus propias manos, aumentando sus atribuciones, intensificando la participación de la base en las empresas estatales y el "control obrero" en las empresas particulares.

Como ilustración de la primera de estas etapas, podemos mencionar las opiniones entregadas por el MIR en octubre de 1.971 (con motivo del asesinato de uno de sus dirigentes campesinos) a la socióloga francesa Catherine Lamour: el gobierno —dicen— "no comprende, o da a entender que no comprende, que nuestra política no se limita a reclamar más tierras. Lo que hay que hacer, es suscitar la iniciativa revolucionaria de los campesinos. No que reciban la tierra pasivamente, como un derecho, sino que tengan el sentimiento que la conquistan; que tengan conciencia de la lucha por el poder que se libra en el país". Y agregan luego, mostrando lo que para ellos significaba dicha "conquista del poder" por aquella época: "Es la única manera para la Unidad Popular de obtener un verdadero apoyo de las masas del campo, como en otros sectores" (179). En ese mismo homenaje a Moisés Huentelaf, el dirigente máximo del MIR, Miguel Enríquez (asesinado por la Junta Militar), expresa: "La política consistente en hacer concesiones y sacrificar a las capas populares en aras de la legalidad, no refuerza en nada a la Unidad Popular". Luego, en esa misma intervención, si bien critica "las tendencias reformistas" del gobierno, no las muestra como consustanciales a un proyecto que no marcha hacia el socialismo, sino hacia el capitalismo de Estado, sino como "incomprensibles" por parte de un gobierno "que incorporaba a grandes sectores de masas a la lucha por el socialismo". "Pero no es todo tan claro para los trabajadores —señala— hay hechos y medidas de gobierno que los confunden, que los desconciertan, que no entienden, que nadie les explica y que sólo unos pocos intentan justificar". Luego de señalar diversas medidas anti-populares del gobierno, se contenta con amenazar: "A pesar de las medidas positivas de este gobierno, de los avances que la Unidad Popular ha hecho, las debilidades, las concesiones y las tentaciones de algunos de sus sectores de convertirse en árbitros de la lucha de clases, no les dejan

a los trabajadores otro camino que **recobrar una cuota de la confianza entregada**, y apoyando las medidas positivas de este gobierno, combatiendo sus concesiones, **pasar** los trabajadores a definir un camino propio". (180). Naturalmente, a partir de una crítica de esta especie, era imposible "pasar a definir un camino propio" y el MIR continuó hasta el golpe mismo, intentando inducir una rectificación en la política dominante en la UP y en el gobierno. Un avance del MIR en cuanto a cuestionar al gobierno, se da en noviembre de 1972, a raíz del nombramiento del gabinete militar para "solucionar" el paro de octubre. Allí se expresa: "Nace por tanto una nueva relación entre el gobierno y el movimiento de masas. A partir del cambio de gabinete, con dificultad los trabajadores podrán aspirar y luchar por que el gobierno sea un instrumento al servicio de sus luchas y una palanca de apoyo a la construcción de nuevas formas de poder popular... Si los reformistas intentan con la constitución del gobierno UP-Generales cerrar el camino a la creación del Poder Popular, hoy más que nunca la clase obrera y el pueblo deberán luchar por fortalecer y desarrollar los Comités Coordinadores, para convertirlos en embriones de poder, en los Consejos Comunales de Trabajadores, que culminarían en una Asamblea del Pueblo y en un Gobierno Revolucionario de Obreros y Campesinos... ¡Luchemos por derrotar la política del nuevo gobierno UP-Generales encaminada a reglamentar y paralizar la lucha del pueblo y hacer concesiones a los patrones!"(181). Por último, en el mes de marzo de 1973, Miguel Enríquez, señala: "Nosotros sostenemos que la tarea fundamental es acumular una fuerza suficiente a partir de las masas para poder impedir la guerra civil, o ganarla, si por azar ella es desencadenada por una decisión de la reacción. No lograremos esta acumulación de fuerzas sino esgrimiendo un programa revolucionario del pueblo, que surgirá de la discusión en el seno de la clase obrera y del pueblo, y en el desarrollo y reforzamiento de órganos de masas que, incorporando a todos los sectores del pueblo, permitan a la clase obrera ejercer su rol de vanguardia sobre las otras capas del pueblo, en la perspectiva del desarrollo de un poder popular que reemplace al orden burgués e **independiente del gobierno**, a saber: los Comandos comunales de Trabajadores". (182). Sólo el 4 de agosto de 1973, a raíz del diálogo del Presidente Allende con Aylwin, el Secretario General del MIR, señala: "El diálogo entablado con Aylwin y Frei tiene por objetivo la rendición incondicional del gobierno..." Y concluye: "La capitulación hoy día no ha sido aún consumada, pero nadie puede hacerse ilusiones: el producto de esta capitulación no será un gobierno de izquierda, un gobierno popular o un gobierno pequeño-burgués de izquierda. La capitulación no es solamente un retroceso, sino que significa de hecho un nuevo gobierno: ella significa que el gobierno se convierte en un **gobierno burgués**". (183) Lamentablemente, dicha postulación de que el gobierno se "convertiría" en burgués, sólo fue postulada por el MIR a un mes del golpe de Estado, no obstante que era la organización con posiciones más independientes de entre las que analizamos.

5.— Otra de las fallas básicas de la corriente radicalizada es no haber comprendido a fondo el papel que jugaban en el problema de Chile las superpotencias imperialistas. La lucha contra el imperialismo norteamericano, gestor básico del golpe de Estado, fue relegada a segundo plano. Por un lado, dichas fuerzas aceptaron en líneas generales el programa antiimperialista parcial y limitado que formularon la UP y, lo que es más grave, no contribuyeron a corregir el error del gobierno de enfrentar de un modo conciliador la ofensiva del gobierno norteamericano, sin empeñarse en movilizar a las masas energicamente en su contra. Ya hemos visto las consecuencias que esta política capitulacionista tuvo y las perspectivas que encerraba, de haberse llevado a la práctica, una lucha antiimperialista firme.

Por otra parte, la falta de comprensión de los objetivos perseguidos por el social-imperialismo soviético en Chile y su influencia ideológica, directa o indirecta, sobre el sector radicalizado de la UP y sobre el MIR, fue determinante en el hecho de que estos sectores no llegaran a comprender la naturaleza reaccionaria del proyecto que el social-imperialismo impulsaba en Chile a través de la dirección del P" C". Influyó en que rehusaran romper con la dirección oportunista y en que sufrieran la influencia de diversas formas de falsificación del marxismo propias de dichos revisionistas. Esta actitud "neutralista" (propiciada de hecho por los soviéticos para aquellos sectores que no han logrado arrastrar a sus posiciones), ya se había manifestado en la reticencia y oposición de los sectores mencionados, a tomar posiciones en el gran debate internacional entre los marxista-

leninistas y los revisionistas contemporáneos, iniciado por el Partido del Trabajo de Albania y por el Partido Comunista de China, en la década del 60.

La influencia ideológica (y en algunos no sólo ideológica) de la burocracia soviética operó sobre estos sectores "rebeldes" de la UP y sobre el MIR, en especial a través de la dirigencia cubana. Dichos dirigentes, y, muy especialmente, Fidel Castro, avalaron públicamente los tres aspectos básicos que caracterizaban el proyecto de capitalismo de Estado de los dirigentes del P"CC" de Chile: su subordinación a la burguesía burocrática social-imperialista; su engaño respecto a la posibilidad de conquistar el poder y abrir paso al "socialismo" por la "vía pacífica", y, la farsa de presentar (como en la URSS) una forma de capitalismo de Estado como socialismo. Respecto al primer punto, no sólo existe el testimonio de los hechos, que muestran al gobierno cubano apoyando, incluso, la invasión a Checoslovaquia, sino declaraciones como aquella de Fidel Castro, el 1 de mayo de 1972, en que dice: "Nosotros tenemos plena y absoluta confianza en la política exterior de la URSS", que se suma a la que ya había hecho antes, en que dijo compartir dicha política: "hasta en sus detalles". En relación con el segundo aspecto: la "vía pacífica", Fidel Castro, sostiene en una entrevista concedida el 4 de agosto de 1970 al diario "Puro Chile", regentado por el P"CC": "Categóricamente, sí. En este momento concreto en Chile, creo que es posible llegar al socialismo mediante el sufragio, o sea mediante una victoria electoral. Chile es uno de los pocos países latinoamericanos donde se libra la lucha política constitucional dentro de los cauces establecidos, y la única ventaja de la derecha consiste en tener mayores medios económicos. La lucha se plantea dentro de un marco institucional, y por eso reitero: en este caso concreto, en Chile de 1970, el socialismo puede ganar una victoria electoral". Por último, en relación con el tercer aspecto, el de considerar lo que hacía en Chile como "revolucionario", Castro afirmó en su visita a Chile durante el gobierno de la UP: "Se nos ha preguntado en ciertas ocasiones, en un tono académico si nosotros consideramos que nosotros estamos aquí frente a un proceso revolucionario. Y nosotros hemos dicho sin vacilaciones: sí". (184) Carlos Rafael Rodríguez, por su parte; el segundo hombre en la jerarquía del P"CC" de Cuba, dando un tapa-bocas a quienes simpatizando con el proceso cubano, insinuaban la necesidad de otra alternativa de conquista del poder, les señala: "Para nosotros no existe alternativa revolucionaria fuera de la Unidad Popular y su gobierno". (185).

Es sabido, por lo demás, que la influencia cubana, no sólo actuó ideológicamente sobre los sectores más radicalizados de la UP y, en especial, sobre el MIR, sino que, se manifestó a través de presiones muy concretas para alinearlos en torno a la conducción revisionista, cada vez que manifestaron veleidades independentistas. De este modo, los dirigentes cubanos, cumplieron a las mil maravillas el papel de servidores de la línea reaccionaria de la burocracia social-imperialista soviética, que les asigna el papel de neutralizar y, en última instancia de alinear a los disidentes, tras la línea de los dirigentes soviéticos.

Una de las consecuencias serias (que aún pesa en las dificultades para formar un amplio frente anti-fascista), de las reticencias de estos sectores radicalizados a tomar posiciones claras, denunciando el falso marxismo de los dirigentes soviéticos y de sus discípulos, así como el falso socialismo, que disfraza en estos países un feroz capitalismo de Estado, ha sido el facilitar el juego a Frei y los suyos de engañar a vastos sectores de masas atándolos a su política pro-yanqui. En efecto, la influencia de Frei y su equipo sobre numerosos sectores de obreros, empleados, campesinos y sectores medios se basa en fomentar el "anti-comunismo", haciéndoles creer que las dictaduras fascistas y los duros sistemas de explotación estatizada, que existen en la URSS y en los países del Pacto de Varsovia, son el exponente de lo que les espera si se implanta el socialismo. Es natural que amplios sectores de las masas rechacen combatir, a riesgo de su vida, para salir del sistema de explotación capitalista y caer en otro aún peor a todas luces. El problema del nefasto "modelo" de socialismo que ofrecen a sus pueblos los partidos "comunistas" pro-soviéticos, en la medida en que se conoce la represión y la feroz explotación existente en esos países, se ha transformado en una conciencia "anti-socialista" tan poderosa que, hoy por hoy, numerosos partidos "comunistas" seguidores fieles de Moscú, han adoptado la táctica de simular diferencias con sus mentores ideológicos e incluso atacan las formas de represión allí existentes, que no logran ocultar. En Chile, el problema es todavía más serio, pues el P"CC" chileno continúa defendiendo lo que se hace en dichos países y presentándolo como "modelo del socialismo". La falta de una clara definición ideológica y política frente a ambas

super-potencias, por lo tanto, no sólo oscureció la indispensable denuncia frente a lo que la dirección del P“C” pretendía implantar en Chile; sino que, impidió ganar a numerosos sectores de masas (incluyendo a las propias bases engañadas del P“C”), para movilizarlos tras una auténtica dirección proletaria.

6.— Otro de los errores básicos de la corriente radicalizada de la UP y del MIR, consistió en no comprender la etapa revolucionaria que se vivía en Chile y el carácter del frente único que era preciso forjar, para combatir al imperialismo, a los latifundistas y a la gran burguesía monopolista y financiera. No obstante, que el Programa de la UP sólo se planteaba la expropiación de dichos sectores y, todo ello, para abrir paso al capitalismo de Estado, se insistió en plantear esas realizaciones como “construcción del socialismo”. En esta definición estratégica tuvo una gran influencia el trotskismo infiltrado en los partidos de la UP y en el MIR. Todas las debilidades de que se dió muestra para aniquilar como clase a dichos grandes explotadores y arrebatarles el poder, se creyó compensarlas verbalmente, definiendo lo que se hacía como “revolución socialista”. En verdad, aún si las transformaciones planteadas hubieran sido el fruto de una real conquista del poder y éste, así como las riquezas expropiadas hubieran sido puestos efectivamente en manos del pueblo, se habría tratado solamente del avance hacia una Revolución Democrático Popular (anti-imperialista, anti-monopolista y antilatfundista) y no de la implantación inmediata del socialismo. Y este objetivo es enteramente justo, pues dicha Revolución Democrático Popular, constituye una etapa previa y necesaria en un país de bajo desarrollo capitalista y por añadidura dependiente del imperialismo, como es Chile. Una definición de los objetivos estratégicos de tipo “izquierdizante”, unida a una práctica estratégica y táctica de tipo reformista (como las que aplicó la UP y su Gobierno), constituye la más adecuada mezcla para lograr un completo fracaso, como efectivamente ocurrió. Mientras verbalmente se “quemaban etapas” en el más típico estilo trostkista, en la práctica ni siquiera se aseguraban las condiciones mínimas para el cumplimiento de la Revolución Democrático Popular. Por un lado, se intentaba expropiar ciertas empresas imperialistas, los latifundios, así como los bancos y las principales empresas monopolistas para forjar un capitalismo de Estado y no una auténtica Democracia Popular. Todo ello, de un modo absurdo, sin conquistar el poder de manos de quienes detentaban dichos medios de producción y sin desarrollar una lucha popular realmente capaz de conquistarlo. Por el otro, al definir lo que se pretendía hacer como “socialismo”, se abría fuego contra todos aquellos que, de una u otra manera, directa o indirectamente, en pequeña o gran medida, vivían del trabajo ajeno y, por lo mismo odiaban o temían el socialismo. De ese modo, de palabra o inútilmente (pues las transformaciones planteadas, aún si hubieran predominado intenciones diversas a las del revisionismo, no generaban una sociedad socialista), se engendraba enemigos por centenares de miles, mientras los explotadores fundamentales, manteniendo el control sobre el poder y su influencia dominante sobre la sociedad, cosechaban a manos llenas el apoyo de los sectores medios. Dichos sectores medios, si el proletariado es fuerte y mantiene una orientación correcta y una justa política de aliados, pueden ser inducidos a oponerse en diversos grados al imperialismo, a los latifundistas y los sectores monopolistas de la burguesía, pero, para mejorar a costa de ellos su condición de propietarios y no a través de la amenaza de ser expropiados en conjunto con los otros, a través de una implantación inmediata del socialismo.

Ya Lenin en su época (y no obstante que Rusia era un país capitalista, aunque con resabios semi-feudales), respondiendo a los Socialistas Revolucionarios, que señalaban: “¿Para qué hace falta apoyar en un principio al campesinado en general contra el terrateniente y después al proletariado contra el campesinado en general, en lugar de apoyar de una vez al proletariado contra el terrateniente?”, afirmaba: “Esto constituye el punto de vista del anarquismo más primitivo y puerilmente ingenuo. La humanidad sueña desde hace muchos siglos, incluso milenios, con destruir de una vez toda explotación. Pero esos sueños siguieron siendo sueños hasta que millones de explotados comenzaron a unirse en todo el mundo a fin de sostener una lucha consecuente, firme y multiforme para transformar la sociedad capitalista en la dirección del propio desarrollo de esta sociedad. Los sueños socialistas se transformaron en lucha socialista de millones de seres únicamente cuando el socialismo científico de Marx vinculó las aspiraciones transformadoras a una lucha de clases determinada. Fuera de la lucha de clases el socialismo es una frase vacía o un

sueño ingenuo. Y en Rusia tenemos ante nuestros ojos dos luchas distintas de dos fuerzas sociales diferentes... El proletariado lucha contra la burguesía en todas partes donde existen relaciones de producción capitalistas. El campesinado, como capa de pequeños propietarios de la tierra, de pequeños burgueses, lucha contra todos los restos del régimen de servidumbre, contra los funcionarios y los terratenientes. Solo gente que desconoce en absoluto la economía política y la historia de las revoluciones en el mundo entero, puede dejar de ver estas dos guerras sociales distintas y de naturaleza diferente. Cerrar los ojos a la diferencia de estas dos guerras recurriendo a las palabras 'de una vez' significa esconder la cabeza debajo del ala y renunciar a todo análisis de la realidad" (186) También en Chile era (y es) un absurdo, pretender movilizar a más de 30 mil propietarios de industrias privadas no monopolistas; a más de 150 mil propietarios agrícolas, no latifundistas; a más de 100.000 comerciantes no monopolistas, e incluso, a los varios centenares de miles de profesionales, empleados, artesanos y otros elementos no proletarios, que viven directa o indirectamente de la explotación de los obreros, y a los que pesa con gran fuerza el arribismo social y la influencia burguesa anti-socialista, a aceptar la implantación del socialismo, sólo con "la masa de los elementos semi-proletarios de la población, para destrozarse por la fuerza la resistencia de la burguesía y paralizar la inestabilidad de los campesinos y de la pequeña-burguesía". Eso, naturalmente, una vez que ha conquistado sólidas posiciones volcando a vastos sectores burgueses medios y pequeño-burgueses medios de la ciudad y del campo, contra los terratenientes y los sectores más retrógrados de la sociedad.

En la formulación de la estrategia revolucionaria en Chile, era (y es) preciso considerar que los anhelos de clase de vastos sectores medios y aún de numerosos sectores pequeño-burgueses y semi-proletarios, son el salir de su miseria, o bien, mejorar su status, no precisamente a través del socialismo, sino de su prosperidad individual. Esta prosperidad la buscarán, ya sea poniéndose de lado de la gran burguesía y del imperialismo; o del proletariado, según sea aquella o éste el que demuestre más fuerza y realice una más correcta política de alianzas. Durante el gobierno de la UP, en cambio, prácticamente todos los partidos de dicha coalición, así como el MIR, (incluso quienes no suscribían esa estrategia) rivalizaron en hablar de "revolución socialista", facilitando así grandemente la política de aliados del imperialismo y de la gran burguesía. Esto es doblemente grave en un país dominado y situado en su zona de influencia directa. La verdad es que la influencia trotskista logró transformar en vergonzante el hablar de otra cosa que de la implantación del socialismo e, incluso, los falsos "comunistas", con su inveterado oportunismo se plugaron a esta fraseología.

Uno de los argumentos más usados por los trotskistas para rechazar toda posible alianza del proletariado con los sectores no monopolistas de la burguesía (agraria, industrial y comercial), consistió en señalar los fuertes vínculos económicos existentes entre dichos sectores y el imperialismo y el gran capital monopolista. De allí derivó la tesis fatalista y unilateral de que era imposible que el proletariado lograra oponerlos al imperialismo, a los terratenientes o a la gran burguesía. No obstante, si bien es cierto que existen dichos lazos y ataduras, no es menos cierto que ellos tienen un carácter contradictorio y son expresión también de los diversos procedimientos a través de los cuales el gran capital monopolista (interno y externo), expolia y conduce a la ruina en su beneficio a los sectores capitalistas más débiles. Como es natural, dichos sectores capitalistas no monopolistas si ven al proletariado débil (como en el gobierno de la UP), se resarcirán de las pérdidas que les provoca el imperialismo y los sectores monopolistas de la burguesía, a costa del proletariado y aliándose con aquellos.

Otro de los socorridos argumentos del trotskismo, no menos falso que el anterior, consiste en señalar que la política de formación de amplios frentes dirigidos por el proletariado, para aplastar a sus enemigos por etapas, es inherente a la estrategia oportunista y reformista del revisionismo, a su línea de oponerse a la lucha armada y oponerse a la destrucción del Estado burgués. Sin embargo, esta formulación es enteramente absurda, pues, todas las revoluciones sin excepción, que han conseguido éxito contra la burguesía (aunque algunas hayan después degenerado), lo han conseguido, justamente, a través de una política de frente único y de revolución por etapas. Los frentes únicos impulsados

por los falsos marxistas, por los revisionistas, se diferencian profundamente de aquellos dirigidos por los marxista-leninistas. Los revisionistas, pretenden que el proletariado realice una "alianza" con la burguesía, sobre la base de abandonar su rol dirigente en dicha alianza, de realizar sólo concesiones a la burguesía, de hacer abandono de los métodos revolucionarios de lucha, de respetar la legalidad y las instituciones del Estado burgués. El frente único, tras una línea proletaria, en cambio, se basa, ante todo, en la fuerza revolucionaria del proletariado, en su capacidad de demostrar en los hechos que puede aplastar a la gran burguesía y en función de eso, de otorgar ciertas garantías a la burguesía media en la medida que secunde su lucha.

Se puede afirmar, que el golpe militar en Chile y, muy especialmente, la política aplicada por la Junta Militar, que se ha volcado brutalmente sobre vastos sectores capitalistas conduciéndoles a la ruina, luego de haberlos utilizado políticamente contra el gobierno de la UP, ha tenido la virtud no de demostrar cuales eran los enemigos fundamentales sobre los que —en una primera etapa— es necesario centrar los fuegos, sino la fragilidad de los vínculos de los sectores medios con el gran capital, así como el carácter eminentemente contradictorio de esos vínculos. La gran burguesía y el imperialismo, luego de arrebatarse esos aliados a la UP, (que por su debilidad fue incapaz de ganarlos) con el propósito de derrocar al gobierno allendista, se ha volcado con brutalidad en su contra, conduciéndolos a la quiebra para concentrar más capital en sus manos. La ferocidad de la represión fascista a su servicio, les permite hoy día actuar sin máscaras y sacrificar a su voracidad a todo el pueblo, incluyendo a los sectores burgueses medios. Han mostrado así, que la pugna económica del gran capital monopolista con dichos sectores burgueses medios es más profunda y permanente que la alianza con ellos que ponene en práctica cuando necesitan aislar al proletariado.

Sólo cabe agregar que lo sucedido después del golpe, ha puesto en apuros ideológicos a los teóricos trotskistas, quienes se debaten entre su dogmatismo que los lleva a rechazar todo papel de los sectores medios en un frente dirigido por el proletariado, así como la necesidad de etapas revolucionarias: y los hechos concretos, a través de los cuales se constata que es la propia burguesía monopolista y el imperialismo, quienes se han ocupado de empujar a esos sectores hacia el proletariado. El carácter ultra-reaccionario de la política de los sectores dominantes en Chile, está generando el frente único que dichos teóricos rechazan "por principio". De paso, el golpe de Estado, mostrando la fuerza económica y represiva que poseían dichos sectores que controlaban realmente (y controlan) el poder, aún sin contar todavía con la intervención directa del imperialismo, ha puesto más en evidencia lo absolutamente indispensable que era (y que es) situarlos como blanco de la revolución en una primera etapa y oponerles el más amplio frente único, bajo una auténtica dirección proletaria.

4.— El Partido Comunista Revolucionario de Chile.

Nos cabe decir algo de la posición marxista-leninista y correcta en lo fundamental, sustentada frente al gobierno de la UP por el Partido Comunista Revolucionario (PCR), que no puede confundirse con la oposición pequeño-burguesa a dicha experiencia.

El PCR, a diferencia de la tendencia radicalizada que acabamos de analizar, realizó en lo esencial una caracterización correcta del gobierno de la Unidad Popular. Su oposición al proyecto de "vía pacífica al socialismo", es de larga data, pues se remonta, como discrepancia pública y expresa, al año 1963. Aún antes, sin embargo, dicha lucha comenzó en el interior del viejo P"C", inmediatamente después que sus dirigentes hicieron suya la línea abiertamente oportunista del XX Congreso de PCUS.

No bien resultó elegido el gobierno de Allende, el PCR, señaló (en su periódico "El Pueblo", en la revista "causa M-L" y en innumerables folletos), la naturaleza reaccionaria de la dirección del P"C" (que tenía influencia decisiva en la UP) y el oportunismo de su política; el error de quienes creían que los propósitos de dicha dirección eran avanzar hacia el socialismo; los vacíos y limitaciones del programa de la Unidad Popular; así como, la necesidad de centrar el blanco de la lucha contra los enemigos fundamentales del pueblo chileno, generando un frente único en su contra, eso sí, bajo dirección proletaria y

no oportunista. Casi todos estos conceptos, por ejemplo, están contenidos en artículos publicados en el No. 20 de la revista "Causa M-L", aparecida en los meses de noviembre-diciembre de 1.970, es decir, inmediatamente después que Allende asumiera la Presidencia de la República. Allí, entre otras cosas, se señala respecto a la política futura de la UP y del gobierno, aquello que constituiría la línea divisoria entre los sectores más avanzados de la UP, respecto a la dirección del P" C" y sus seguidores: la actitud de apoyo a la lucha de masas, que se sabía que estos últimos se esforzarían por frenar por todos los medios, en aras de su proyecto de capitalismo de Estado. Se señala allí: " No sólo la actitud del gobierno de Allende frente al imperialismo, sino también la que tenga respecto a las masas nos servirá para calificarlo. Esto lo veremos en las posibilidades que este gobierno y los partidos que lo apoyan brinden al proletariado, a las masas explotadas y a todos los sectores revolucionarios de nuestra sociedad para ampliar, profundizar y desarrollar sus luchas y canalizarlas a la conquista de todos los instrumentos del poder. Esta actitud y la disposición a apoyar firmemente esas luchas para derrotar a los enemigos del pueblo, es la única consecuencia de quienes se digan progresistas y revolucionarios. Por el contrario, si pretenden impedir la lucha de las masas, impulsar la conciliación de clase ilusionándolas con que ellas están en el poder y sus problemas sólo podrán ser resueltos desde arriba (precisamente lo que habrían de hacer los dirigentes del P" C" y sus seguidores), estarán demostrando que sus fines no son servir al pueblo y ayudar a abrir el camino para su liberación, sino afianzar y consolidar el régimen de explotación y sobrevivir, adaptándose a las reglas impuestas por los enemigos del pueblo. Por lo tanto, se concluye, el problema fundamental no es cómo el pueblo apoyará a Allende y a la UP, sino cómo Allende y la UP apoyarán las luchas del pueblo".

En ese mismo artículo se plantea a los revolucionarios (y entre ellos a los militantes del PCR) la necesidad de unirse a los elementos de base de la UP, para impulsar los aspectos positivos del programa de gobierno y, al mismo tiempo, para impulsar la lucha de las masas, combatir a las directivas oportunistas y levantar objetivos programáticos más avanzados. Esta unidad por la base se plantea, incluso, llamando a integrarse a los Comités de Unidad Popular (CUP), que en número de más de 15 mil habían sido creados por la UP durante la campaña electoral, a condición de que estuvieran allí presentes las masas y de que existieran garantías para tomar resoluciones en forma democrática. No obstante, dichos organismos, luego de ser utilizados en la elección de municipalidades en abril de 1.971, fueron disueltos, especialmente a instancias de la dirección del P" C", precisamente, para evitar la presión desde la base contra su línea oportunista.

Posteriormente, en junio de 1.971, a ocho meses de gobierno de la UP, aparece en la revista "Causa M-L", una importante entrevista a la dirección del PCR. Ella contiene ya una caracterización exacta y completa de lo que era el gobierno de la UP, bajo la hegemonía de la dirección del P" C" y sus seguidores. Refutando la afirmación de quienes decían con ese gobierno construir el socialismo, se señala: "Al socialismo se llega derrocando el poder del imperialismo y a la burguesía y reemplazando la dictadura burguesa por la dictadura del proletariado. Para construir el socialismo no basta que los medios de producción estén en manos del Estado. Es preciso, además, que el Estado esté en manos del proletariado. No es esto lo que sucede en Chile. El gobierno de la UP, aunque pretende atribuirse la representación del proletariado y hace creer que él está en el gobierno, debe aceptar la presencia del imperialismo en los rubros de nuestra economía que a éste le interesan; debe aceptar la supervivencia económica y por ende política de los grandes explotadores nacionales al expropiarlos con indemnización; debe aceptar la existencia de numerosas instituciones burguesas controladas por la oligarquía (como la Corte Suprema); y, lo que es fundamental, debe aceptar la mantención de la misma fuerza armada creada por la burguesía. Esto último, es particularmente importante, ya que, al ser la fuerza armada el principal componente del poder estatal, el carácter de clase del Estado está dado por el carácter de clase de la fuerza armada que lo sustenta."

Más adelante, caracterizando claramente el proyecto de capitalismo de Estado, que buscaba la directiva del P" C" y sus seguidores conscientes, se señala: "Buscan a través de este camino reformista, desarrollarse económica y políticamente, constituyéndose como un nuevo sector de la burguesía burocrática. Piensan obtener lo anterior a través del manejo del sector estatal y mixto de la economía". Y más adelante: "Esto, por lo demás, no

es nuevo. Corresponde exactamente a una situación, a la que por regresión hacia el capitalismo, han llegado los países "socialistas" gobernados por los revisionistas".

En el mismo documento se plantea una correcta posición frente a los planes reformistas del gobierno, inspirada en la idea de Lenin, de que: "La fuerza motriz real de la historia es la lucha revolucionaria de clases; las reformas son un producto accesorio de esta lucha, accesorio por cuanto son el resultado de los intentos frustrados por atenuar esta lucha, por embotarla", así como en su afirmación de que "El único sostén firme de las reformas, la única garantía sería de que no sean ficticias, de que beneficien al pueblo, es la lucha revolucionaria independiente del proletariado, que no rebaja sus consignas". Se llama en la entrevista a apoyar y defender aquellas reformas positivas para las masas, sin permitir que ellas sean utilizadas para frenar sus luchas, sin aceptar que les sean escamoteadas por la burguesía burocrática y, sin plegarse, por el apoyo táctico a esas reformas, al programa revolucionario del PCR.

Más adelante, se señala el peligro del golpe de Estado y el propósito del imperialismo norteamericano de servirse en toda América Latina, de las fuerzas armadas locales para imponer sus intereses. "Actualmente —se expresa— asistimos en América Latina a un proceso de participación creciente de los militares en política, lo que los lleva a ejercer un control cada vez más directo y acentuado del aparato estatal. En la mayor parte de los países latinoamericanos las fuerzas armadas hace ya bastante tiempo que ejercen el poder y gobiernan directamente. En otros países, en que esto aún no ocurría se avanza hacia lo mismo. Aquellos que gobernaban y dictaban las leyes se apoyaban en la fuerza de las armas; en lo sucesivo serán los que manejan las armas los que gobiernen y dicten esas leyes... Lo anterior nos indica que el golpe de Estado —violento o no violento— cada día se constituye más en una enfermedad crónica en América Latina". Luego, refutando la inveterada mentira de los falsos comunistas de que la amenaza de golpe se conjura conciliando, se dice: "El promover el apaciguamiento de clases y sacrificar los intereses de las masas, no es un camino válido para enfrentar las maquinaciones sediciosas y avanzar en el camino de la revolución, consiste en apoyar firmemente la lucha de las masas y facilitar las condiciones para que, a través de ella, éstas puedan aplastar y liquidar a los golpistas. A los "momios" (ultrarreaccionarios) armados debe enfrentarlos el pueblo armado".

Finalmente, como política frente a las FF.AA. burguesas, en los momentos en que la UP y el gobierno las cubren de elogios, se señala: "En las Fuerzas Armadas chilenas existen sectores nacionalistas y anti-imperialistas. El único camino para que ellos puedan oponerse a los intentos del imperialismo yanqui y de la ultrarreacción y atraerlos al lado del pueblo, no consiste en debilitar la lucha revolucionaria de las masas, sino, por el contrario, en impulsarla vigorosamente. Sólo los combates más resueltos de las masas, hasta llegar a la lucha armada, pueden polarizar a un sector de las FF.AA., junto al pueblo. Esto nos señala la experiencia histórica internacional. El reformismo es incapaz de impedir el avance del fascismo. La social-democracia reformista ha sido siempre la antesala del fascismo. Sólo la lucha revolucionaria de las masas puede ponerle atajo". Existen además numerosos documentos y artículos del PCR (y su propio Programa), antes y durante el gobierno de la UP, en que se señala el carácter reaccionario de los Altos Mandos de las FF.AA. y Policiales chilenas y se recuerdan las innumerables masacres y represiones antipopulares que llevaron a cabo desde que Chile existe como país independiente. Estas denuncias, en la medida en que avanzaban la ofensiva reaccionaria y los planes golpistas y se acentuaban las alabanzas de los dirigentes de la UP a las FF.AA. se van haciendo más y más enérgicas.

Por otro lado, en la medida en que las masas vivían la experiencia del oportunismo en acción, desde un gobierno en que primaba la influencia de los falsos comunistas, se acentúan las denuncias del PCR en su contra, mostrándolos como contrarrevolucionarios y no como simples "reformistas equivocados". Se plantea, así mismo, claramente, la necesidad de romper con tales dirigentes, creando un nuevo polo de reagrupamiento popular, tras un programa y una estrategia realmente revolucionarios. Se señala, también, la inconsecuencia de quienes, inspirados por los dirigentes cubanos, los consideran como fuerzas de la revolución, aunque vacilantes y reformistas.

En numerosas publicaciones del PCR, se combaten, además, las ideas y prácticas "izquierdistas" y aventureras —inspiradas por el trotskismo— con las que algunos pretenden

oponerse al reformismo dominante. Se señala allí la necesidad de centrar el blanco de la lucha contra los enemigos principales: el imperialismo norteamericano, la oligarquía terrateniente y la burguesía monopolista y financiera. Se plantea la necesidad —en una primera etapa de la revolución, de carácter Democrático Popular— de no despojar a los sectores medios y pequeños de la burguesía urbana y rural y, por el contrario, defendiendo los intereses de los trabajadores que ellos explotan, de ofrecerles seguridades y garantías para atraerlos al lado del proletariado o, por lo menos, para impedir que aquellos que no sea posible ganar, fueran movilizados activamente por la oposición golpista. En dichas publicaciones se polemiza con las falsas ideas trotskizantes, que tienden a aislar al proletariado y que, postulando de palabra el “socialismo”, de hecho lo sabotean en la práctica y conducen al proletariado a la derrota.

Hay, asimismo, numerosos análisis del PCR, en que se señala el error de quienes creen que se logrará una especie de transferencia gradual y mecánica del poder hacia el pueblo, simplemente, desarrollando organismos que se autoproclamen como “poder popular” en lugar de movilizar a las masas para aplastar a las fuerzas reaccionarias y conquistar realmente el poder. Se muestra allí, cómo las fuerzas reaccionarias, comprendiendo con más claridad que muchos “revolucionarios”, que el “poder nace del fusil”, habían impuesto a la UP la aprobación de una Ley de Control de Armas, que utilizaban activamente para reafirmar mediante un golpe de Estado su control del poder. En los últimos meses del gobierno allendista, se llama en un documento del Comité Central del PCR, con urgencia y dramatismo, a todos los que anhelaban detener a través de la lucha a los golpistas, a no contentarse (como estaba sucediendo) con formar pequeños núcleos armados de militantes, sino a formar una dirección política unificada antirrevisionista, a construir un polo de reagrupamiento revolucionario, capaz de movilizar a las grandes masas y promover su organización y armamento, para resistir el golpe en preparación.

Finalmente, podemos decir que también respecto a ambas superpotencias, la política planteada por el PCR, fue esencialmente correcta. Desde la instalación del gobierno de la UP, se planteó que en Chile “sólo se podía gobernar contra el imperialismo norteamericano o con el imperialismo”. Que no existían términos medios al respecto. Junto con ello, se levantó un consecuente programa anti-imperialista, destinado a erradicar, a través de la movilización popular, por completo su presencia en Chile.

En relación al social-imperialismo soviético se denunció sus intenciones de penetración en nuestro país y la paternidad que poseía sobre el proyecto de capitalismo de Estado, disfrazado de socialismo, que los dirigentes del P“C” intentaban aplicar.

Estas ideas correctas del PCR sobre todos los aspectos fundamentales de la política de la UP no son opiniones de “generales que critican después de la batalla” y fueron oportunamente formuladas, antes y durante dicha experiencia. Más aún, fueron la razón por la que un conjunto de militantes rompieron en 1.963 con el viejo P“C” y están contenidas en el Programa aprobado en el Congreso Constituyente del PCR, celebrado a comienzos de 1.966.

El que estas ideas correctas en lo fundamental fueran oportunamente formuladas, no merece duda alguna. Allí están para comprobarlo centenares de documentos: folletos, periódicos, revistas, afiches, volantes, etc. El desconocer este hecho, en aras de presentarse ahora, después del golpe, como hacen algunos, como pionero de la crítica a la UP o como “descubridor” de sus fallas políticas e ideológicas, sin reconocer que existió un partido marxista-leninista con una posición de principios correcta, no es más que una manifestación más de oportunismo. Lo que sí es preciso esclarecer, es la razón por la que dichos planteamientos correctos, no alcanzaron una influencia significativa en los sectores políticamente más avanzados de dentro y de fuera de la UP y entre las grandes masas populares. Esto último demuestra que, si bien el PCR tuvo un indiscutible papel de vanguardia proletario en el aspecto ideológico, no logró dicho papel en el aspecto práctico: fundiendo sus planteamientos con un poderoso movimiento de masas.

Para contribuir a esclarecer las causas de esto último, nos proponemos adelantar aquí algunas opiniones personales del autor del libro, a este respecto.

En primer lugar, según mi opinión, hubo diversas manifestaciones de sectarismo en la actividad política concreta del PCR, así como en algunas de sus formulaciones tácticas. No siempre se centró con la debida fuerza e insistencia, el blanco del ataque sobre los ene-

migos principales del pueblo chileno: el imperialismo y las fuerzas más reaccionarias, graduando a la vez el necesario y justo ataque contra los dirigentes oportunistas del P“C”, al grado de comprensión de las masas y a la posibilidad práctica de desenmascararlos a través de hechos concretos. No siempre se realizó una clara distinción —aunque ella en general se hizo en los materiales de la dirección del PCR— entre los dirigentes, conscientemente oportunistas y las bases engañadas por ellos; o entre quienes secundaban a dichos oportunistas y otras fuerzas que intentaban oponérseles, aunque de un modo errado y sin comprender su naturaleza. Existió, asimismo, sectarismo en la actuación práctica respecto a las bases y dirigentes honestos de la Unidad Popular, de la Democracia Cristiana y de otras fuerzas políticas. Acción práctica, para llegar a acuerdos aunque fueran parciales, con quienes no se estaba completamente de acuerdo y forjar acciones conjuntas en aquello en que se concordaba. A menudo, se confundió al respecto, la necesaria lucha ideológica con la actuación política, distanciándose de aquellos con los que se discrepaba.

En esa falta de contactos más activos con las bases y con dirigentes de otras fuerzas, pesó también, una suerte de complejo de partido pequeño y marginal, respecto a los dos grandes bloques en torno a los que se concentraba el grueso del quehacer político. Por lo general, se trabajó en un plano paralelo y en cierto modo colateral a la actividad de las fuerzas que integraban la UP y otras fuerzas donde militaban sectores de masas con los que era posible una acción común. Si bien, por cierto, existieron contactos y acciones comunes, no se buscó con la debida energía e iniciativa, un reconocimiento por parte de dichos sectores, una mayor influencia directa sobre ellos y una más amplia actividad conjunta. En esto, entre otras cosas, influyó también el error de no destacar, en especial en el plano nacional, a algunos cuadros del PCR, que asumieran abiertamente su representación, no sólo para tales contactos, sino para esforzarse por romper el bloqueo y el complot del silencio que existió en contra del PCR.

Existió, también, por parte del PCR, debido a su inexperiencia política, dificultades para traducir en hechos políticos los planteamientos que se realizaban. Por ejemplo, no se comprendió oportunamente la necesidad de crear frentes amplios de tipo nacional, que sirvieran para aglutinar fuerzas en torno a ciertas plataformas de lucha y como instrumentos de un más amplio contacto del partido con las grandes masas. Algunos ensayos que se realizaron a nivel regional, como la creación del “Netuaiñ Mapu” para impulsar las luchas del sector indígena, dieron buenos resultados. Como consecuencia de la falta de una política clara al respecto, la actividad de las organizaciones de base del partido se diluyó en numerosos frentes de masas, sin lograr la presencia y el peso político, que da la coordinación y unificación de muchas de esas acciones, al expresarse en frentes unitarios de mayor envergadura.

Debido a esa misma inexperiencia y a la carencia de una estructura más foguada y sólida en la defensa de la línea del partido, se cometieron errores o fallas en el enfrentamiento de las contradicciones internas surgidas en éste. Ello determinó la incapacidad para ganar ideológica y políticamente a un número importante de militantes influidos por ideas burguesas (separándolos de los que eran realmente enemigos infiltrados), a raíz de lo cual se rompió con ellos, por no tener la fuerza para convencerlos, reeducarlos y ganarlos para la línea del partido. Esta debilidad fue hábilmente aprovechada por un agente revisionista largamente infiltrado en la Dirección del PCR (desde su Congreso Constituyente), quien sin mostrar la cara, se dedicó a agudizar al máximo todas las contradicciones internas que pudieran causar daño al PCR y las aprovechó para infiltrar a otros agentes revisionistas y montar un complot secreto para destruirlo. Si bien el liberarse de ese puñado de provocadores dejó profundas enseñanzas a todos los militantes y fue de gran beneficio para el partido, la movilización contra ellos —en plena ofensiva reaccionaria a mediados de 1972— obligó a una dura lucha interna, con el consiguiente retraso en las tareas de masa en que se participaba.

Junto a estos errores y problemas internos, que según mi opinión enfrentó el PCR, y a otros que serán sacados a la luz en la medida en que se avance en el análisis de su actividad, es preciso decir, también, que encaró obstáculos objetivos tremendamente poderosos que se opusieron al éxito de su actividad política. En primer lugar, es preciso consignar que debió realizar su labor —sobre todo a comienzos del gobierno de la UP— en medio de la euforia y de la ilusión (no sólo nacional sino internacional) que se produjo en torno al

triumfo electoral y a ciertos avances reformistas de la UP y su gobierno. Muchos sectores honestos que trabajaban con el PCR y aún algunos que trabajaban en el PCR, se dejaron arrastrar por quienes sostenían que en Chile se había inaugurado "una nueva vía al socialismo". Otros fueron ganados por estímulos menos "idealistas" y obtuvieron cargos en la frondosa burocracia estatal, o bien fueron seducidos por quienes ocupando esos cargos, podían ofrecerle una serie de franquicias y granjerías.

Por otro lado, la feroz hostilidad contra el gobierno allendista del imperialismo y de los más poderosos explotadores internos, así como de las fuerzas políticas más reaccionarias (interesadas por lo demás en presentar esa experiencia como "marxista") contribuyeron a engañar a no pocos sectores y a hacerles creer que dicho proyecto, manejado por renegados del marxismo, era realmente revolucionario. La feroz ofensiva de la oposición contra los intentos de implantar el capitalismo de Estado (la cual oposición y gobierno calificaban de "socialismo"), produjo por una parte una extrema polarización de fuerzas entre gobierno y oposición. O se estaba con el gobierno o contra el gobierno; con la oposición o contra la oposición. En esas condiciones, aunque ninguno de los dos representaba realmente los intereses del pueblo, resultaba extremadamente difícil plantear una alternativa revolucionaria.

El PCR, además, debió luchar, en los marcos de dicha polarización, contra el engaño reformista y contra las fuerzas ultra-reaccionarias que conducían la oposición, en las condiciones en que se realiza la competencia política en un régimen de relativamente amplia democracia burguesa, pero sin poder, en su calidad de partido revolucionario, plegarse al estilo de trabajo de los partidos burgueses. Mientras la casi totalidad de los otros partidos y organizaciones trabajan legalmente, en forma abierta: con locales, asambleas de militantes, miles de funcionarios políticos, publicaciones plenamente legales y propaganda en gran escala al estilo comercial; el PCR, debía mantener una organización esencialmente clandestina. Y debía mantenerla, no sólo porque sus militantes eran perseguidos y expulsados de sus trabajos, sino, sobre todo, porque planteaba una línea realmente revolucionaria y tenía plena consciencia del carácter absolutamente transitorio de la democracia burguesa. Esta clandestinidad fue aprovechada, tanto por la oposición como por todas las fuerzas que apoyaban al gobierno, para forjar un verdadero muro de silencio frente a las actividades del PCR y hasta sobre su existencia misma. Como resultaba arduo polemizar en contra de sus planteamientos, era más cómodo negar su existencia. Todos estaban interesados en bloquear el conocimiento de sus ideas así como de sus acciones de masas. Más aún, a menudo, la prensa de oposición, interesada en mostrar a la UP y al gobierno como sobrepasados y aún como orientados por el MIR, para mejor atacarlos, atribuía, a plena consciencia, luchas dirigidas por el PCR a esa u otra organizaciones. Mientras el diario de los latifundistas, por ejemplo, de la provincia de Cautín, ponía el grito en el cielo y titulaba casi a diario contra las luchas campesinas dirigidas por el "Netuain Mapu", señalando que era dirigido por el PCR; estas noticias eran reproducidas por el resto de la prensa, sin ninguna mención a dichas organizaciones o atribuyendo esas luchas a otras.

La participación de los delegados del PCR en el Congreso de la CUT, donde por primera vez, en medio de las agresiones y de las amenazas de los revisionistas, hicieron escuchar planteamientos revolucionarios, fue absolutamente silenciada. Los obreros y estudiantes del PCR que distribuyeron volantes entre los delegados al Congreso de la CUT, fueron brutalmente reprimidos por la policía y algunos de ellos encarcelados. El diario "El Siglo" los presentó como "provocadores fascistas"... Para la elección de la directiva de la CUT, no sólo se prohibió al PCR (arteramente cuando ya había impreso su propaganda) inscribir una lista con su nombre, medida absolutamente arbitraria y opuesta a los Estatutos, sino que, en el escandaloso fraude en contubernio con la DC que reemplazó el escrutinio de votos, se destruyó la casi totalidad que correspondían a los candidatos presentados por el PCR. En efecto, en lugar de realizar escrutinios públicos inmediatamente después de la elección, los dirigentes del P"C" y del PS se reunieron con los de la DC y a puertas cerradas durante casi un mes, la distribución entre ellos de los cargos dirigentes fundamentales. Luego, para "avaluar" esa repartija por secretaría, se atribuyeron más del 80 por ciento de los votos. Al PCR, que había obtenido ya en una elección anterior dos cargos en el Consejo Provincial de Santiago de la CUT, en el que existe la más alta concentración de trabajadores del país, sólo le concedieron, algo así como un 0,5 por ciento de

los votos. El PCR inscribió, entre candidatos a los consejos provinciales y al consejo nacional de la CUT, más de 200 nombres, todos ellos dirigentes de organismos de masas. No obstante, hubo sindicatos en los que el presidente del mismo, llevado como candidato a la CUT, aparecía en dicha elección sin ningún voto, ni siquiera el suyo propio. A tal punto fue descarado el fraude, con la cobarde certeza de la impunidad. En verdad, esa elección, fue una de las más vergonzosas estafas protagonizada por los agentes del social-imperialismo y algunos de sus cómplices en la UP, lo que demuestra, dicho sea de paso, que para engañar a los trabajadores no tienen ningún obstáculo para ponerse de acuerdo.

La campaña de ostracismo y de silencio contra el PCR (que aún hoy continúa en muchos aspectos), no sólo comprometió a los partidos y medios publicitarios de la oposición y a los del gobierno más comprometidos con la dirección del P" C". Debido a las simpatías o concomitancia con la revolución cubana, dicha política fue practicada también, por aquellos partidos más pequeños de la UP, que exhibían diferencias con la dirección del P" C", así como por el MIR. La hostilidad de los dirigentes cubanos con todo el movimiento marxista-leninista de América Latina y del mundo, es sobradamente conocida. No sólo les negaron a dichas organizaciones el derecho a participar en la reunión "anti-imperialista" que dio origen a las OLAS, celebrada en Cuba, sino que, han desplegado ingentes esfuerzos para montar fracciones en dichas organizaciones y destruirlas. Promoviendo falsas "alternativas revolucionarias", dentro y fuera de ellas, han cumplido un papel diversionista, que no estaban en condiciones de cumplir en ese medio a causa de su descarado oportunismo, los pseudopartidos comunistas. Esa hostilidad de los dirigentes cubanos contra los marxista-leninistas y, muy especialmente contra el PCR, uno de los primeros del mundo que denunció su oportunismo y su papel de sirvientes del revisionismo soviético (en una época en que no era tan evidente como ahora), no podía menos que influir en fuerzas políticas fuertemente influenciadas por dichos dirigentes. Así, por ejemplo, el MIR, no sólo aceptó pasivamente y con entusiasmo que se le atribuyeran luchas promovidas y dirigidas por el PCR, sino, que llegó en algunos casos, al extremo de atribuirse militantes del PCR asesinados por las fuerzas policiales, como fue el caso de Eladio Caamaño, militante de "Espartaco", organización juvenil del PCR, a quien intentaron acompañar al cementerio con banderas del FER, presentándolo como militante de dicha organización creada por el MIR.

Finalmente, cabe decir, que el PCR no podía, no sólo por los intereses que representaba sino por razones de principio, plegarse al estilo publicitario y de gran empresa comercial, con que tanto los partidos de oposición como los de gobierno intervenían en la política chilena. Dichos partidos, ya sea por representar poderosos intereses económicos o por utilizar el aparato de gobierno; ya sea por contar con el apoyo de una u otra de las superpotencias (o de instituciones satélites de ellas, como la CIA, el Vaticano, la KGB, la Socialdemocracia, etc.), disponían de medios multimillonarios para engañar a la opinión pública. Todo esto se traducía en programas de televisión; en centenares de periódicos, radios y revistas; en más de 150 emisoras radiales; en el control de casi todas las imprentas y editoras del país; en una red de locales y oficinas partidarias; en miles y miles de funcionarios políticos, sindicales o fiscales a su servicio, en suma, en la utilización de una gigantesca máquina de engaño, aceitada con millones, no de escudos, sino de dólares. A todo este despliegue monstruoso de medios políticos y publicitarios, el PCR debió (y prefirió) oponer la política de fundirse realmente con las masas y ayudar a que éstas lucharan por su liberación apoyándose, fundamentalmente, en sus propias fuerzas. De este modo, y al servicio del trabajo directo entre las masas, se editaron periódicos y revistas de tipo nacional, volantes, folletos y afiches, así como numerosos periódicos y otros medios de propaganda regionales, en los que los propios trabajadores expresaban su punto de vista y ayudaban a su sostenimiento. Si bien dicha propaganda no podía competir a corto plazo, desde el punto de vista de su difusión y de su calidad técnica, con la que hemos descrito antes, tenía la ventaja de nacer del corazón del mismo pueblo, que vive, día a día, la experiencia del engaño y de la demagogia de la asfixiante propaganda de las diversas corrientes burguesas. Por ello, si bien su influencia era más reducida en amplitud y en efectividad a corto plazo, era y es más profunda, sólida y estable en su influencia de masas. Dicha propaganda, sostenida por las masas, no sólo no ha desaparecido como ha sucedido con la casi totalidad de la propaganda política partidista adaptada a las condiciones legales existen-

tes antes del golpe de Estado, sino que, por el contrario, se ha hecho más regular y abundante en las condiciones de clandestinidad actuales, protegida y difundida por el pueblo. Desde el golpe y hasta la fecha, tan sólo del periódico "El Pueblo" del PCR, han aparecido más de 50 números, editados en Chile en la clandestinidad.

A pesar de los defectos en su actividad y de los enormes obstáculos objetivos que afectaron el éxito de la labor política del PCR, éste alcanzó un significativo desarrollo e influencia de masas. Libró y libra batallas, que están muy por encima de la publicidad obtenida como partido a través de ellas. Ya en la época de Frei, el PCR, protagonizó algunas de las grandes ocupaciones de tierras realizadas por los campesinos, lo que motivó, a fines de su gobierno, la dictación del Estado de Emergencia en toda una región. Al crear los Comités de Solidaridad Obrero-estudiantil, que actuaron en los lugares de grandes concentraciones industriales, coordinando y politizando las luchas sindicales abandonadas por la burocracia oportunista de la CUT, constituyó los gérmenes de los futuros Cordones Industriales y Comandos Comunales. Más aún, antes del gobierno de la UP, a través de la APAN (Asociación de Sindicatos de la Panamericana Norte) y del Comando Comunal Nuñoa, creó de hecho los dos primeros Cordones Industriales de la capital. En Valparaíso, el Comité de Solidaridad Obrero-Estudiantil, incluso debió ser reconocido por su actividad, como Secretaría Provincial de Conflictos de la CUT. Coordinando la actividad de dichos organismos de masa, el PCR, inició, desarrolló y llevó hasta su triunfo completo una de las batallas políticas más importantes que se libraron en la provincia de Santiago, tanto contra el gobierno de Frei como contra la directiva oportunista de la CUT: la batalla por la libertad de los obreros de la industria "Saba". Dichos obreros, en uno de los procesos más sucios que se conocen de la "justicia" clasista, llevaban casi un año encarcelados. La industria había sido incendiada por las bombas lanzadas por la policía al desalojar la ocupación que hacían de ella los obreros. Sin embargo, el gobierno y la justicia burguesa, quisieron hacer un escarmiento contra todas las ocupaciones de empresas, acusando a los obreros del incendio. La lucha comenzó dando a conocer la injusticia contra estos obreros, celosamente acallada por la burocracia sindical: luego se formó un comando por su defensa y reuniendo miles de firmas de dirigentes sindicales, se llamó a un acto de masas por su libertad. El Primero de Mayo, se organizó una columna de trabajadores, en la que se pedía la libertad de los obreros de "Saba" y se popularizó su problema entre todos los que asistieron al mítin para conmemorar ese aniversario. Todo ello culminó, tras semanas de lucha en las calles, con una huelga de hambre de los familiares de los obreros presos, que ocupaban los jardines del Congreso Nacional. Alrededor del Parlamento se realizaba una combativa manifestación de miles de obreros y estudiantes, en la que se incendiaron dos carros de la policía. Al día siguiente, los obreros fueron dejados en libertad. En el mítin realizado en los jardines del Congreso para celebrar su libertad, fue vivamente repudiado el dirigente de la CUT, que quiso aprovechar en forma oportunista la culminación de esa lucha, a la que siempre se opusieron.

Posteriormente, en el gobierno de Allende, el PCR, dirigió centenares y centenares de batallas en las industrias, en el campo, en las poblaciones y entre los estudiantes. Entre ellas, la primera y combativa huelga del monopolio de calzado "Bata", en la que fueron bloqueados los caminos en torno a la industria y tras una batalla de varias horas, fueron a parar al hospital más de 70 policías, que pretendieron desalojar a los trabajadores. Después, se realizaría un combativo mítin en torno al juzgado en que se mantenía preso al abogado de los obreros de "Bata", lográndose, asimismo, su libertad.

El PCR, encabezando la lucha de numerosos sectores de masas, logró conquistar la dirección de una gran cantidad de sindicatos, incluyendo algunos con varios miles de obreros. Dirigió una federación metalúrgica, así como numerosas direcciones en centros estudiantiles y en organismos de masas de poblaciones, del campesinado y de empleados. Conquistó dirigentes en algunos Consejos Provinciales de la CUT y dirigió la Federación de Estudiantes en la Sede Osorno de la Universidad de Chile, así como la Federación de Estudiantes Indígenas en Cautín, y uno de los más combativos Cordones Industriales de Santiago.

Sin embargo, como hemos señalado, su acción, debido a los factores subjetivos y objetivos ya señalados, no alcanzó la envergadura como para romper el bloqueo de silencio.

impuesto en tácito acuerdo tanto por las fuerzas del gobierno como de la oposición, e imponerse como interlocutor en los marcos de la política burguesa, obligando a que sus planteamientos, su desarrollo y sus luchas pesaran en ella. No obstante, esa presencia y existencia del PCR, no sólo siguen vivas entre las masas en medio de la dictadura fascista, sino que se han acrecentado considerablemente. La justeza de sus planteamientos, que a raíz del golpe comienza a ser comprendida ampliamente por las masas, así como su estructura clandestina, le permiten al PCR jugar, hoy por hoy, un importante papel en la organización de la resistencia anti-fascista. Conservando a la casi totalidad de sus militantes y dirigentes dentro del país, se ha desarrollado y fortalecido su vínculo con las masas. Esos éxitos, en las duras condiciones de dictadura imperantes en Chile, se explican, además, por la elevada moral revolucionaria de los integrantes del PCR, que han enfrentado la muerte y la tortura sin claudicar y que sólo han abandonado el país en los casos en que su dirección lo ha acordado expresamente.

De nada ha valido, pues, ni la represión ni el complot del silencio. Un partido revolucionario, es cierto, no progresa de la manera espectacular con que lo hacen las corrientes burguesas y oportunistas, cuando millonarios medios destinados a hacer demagogia las ponen "de moda". Sin embargo, cada uno de sus progresos, de sus pasos adelante, son infinitamente más sólidos entre las masas. ¡Cuántos partidos burgueses o pequeño-burgueses han estado "de moda" en Chile, viviendo un éxito tan aparente como fugaz! No obstante, la influencia de masas que gana un partido revolucionario, si mantiene su fidelidad a los principios y continúa al servicio del pueblo y de la conducción de sus luchas, no se trata de un desarrollo pasajero, ni de una conquista formal de votos ni publicitaria, sino de un avance real del pueblo mismo, que bajo su dirección, comienza a abrirse camino por sus propias fuerzas. Se trata de un avance, en cierto modo, irreversible. De la demostración que el campo de maniobras de la burguesía a través del engaño y de la demagogia, se va reduciendo día a día y que el pueblo avanza hacia la conquista del poder.

CAPITULO XII

LA EVOLUCION DE LOS PARTIDOS OPUESTOS A LA JUNTA DESPUES DEL GOLPE

Si difícil era el análisis de las corrientes políticas anti-golpistas durante el gobierno de Allende, mucho más lo es aún después del golpe de Estado. La dificultad reside, por una parte, en el carácter extremadamente fluido y cambiante de las posiciones políticas, continuamente rectificadas a través de la intensa discusión interna y polémica con otras fuerzas, que ha acarreado en cada partido, la derrota sufrida. Por otra parte la división entre las diversas corrientes internas en cada partido se ha intensificado, sumándose a la dispersión geográfica en el mundo entero de sus representantes, lo que ha generado, incluso, diferentes centros regionales de los partidos, frecuentemente con opiniones diversas. Esta fragmentación de fuerzas y de opiniones, no es sólo espontánea y ha sido directamente inducida por el revisionismo para hacer prevalecer sus puntos de vista sobre la ex-Unidad Popular.

Hemos intentado, sin embargo, aunque de un modo muy incompleto y sobre la base de una gran proliferación de documentos, oficiales y no oficiales, de reconstruir aproximadamente la evolución de las ideas de los diversos sectores políticos existentes en cada uno de los partidos de mayor significación en la oposición contra la Junta Militar. Dicho análisis permite llegar a algunas conclusiones generales y a trazar algunas perspectivas de la lucha antifascista, aunque de carácter muy provisorio e incompleto.

1.- La posición de la Democracia Cristiana.

Como es sabido, inicialmente Frei y el equipo dirigente del PDC, apoyaron públicamente a la Junta Militar. Es natural que así lo hiciera al comienzo, pues cooperaron al éxito del golpe militar y engañados por las FF.AA. esperaban que la Junta, tras limpiarles el camino de opositores, le entregaría el gobierno a Frei. Este fue en realidad, el pago que le ofrecieron los militares golpistas a Frei para que saboteara el propósito del gobierno de Allende de rendirse a la DC, que prevaleció poco antes del golpe de estado. No obstante, como lo hemos mostrado antes, el Alto Mando golpista de las FF.AA., empalmando con las ideas contenidas en el Informe de Rockefeller de reemplazar a los partidos en el gobierno por los militares, aspiraba el mismo a transformarse en fuerza gobernante y dejaron a Frei y a sus adólatras con un palmo de narices. Lo forzaron de hecho a cosechar todo el desprestigio de haber sido cómplice del genocidio practicado por la Junta, al cual se fue sumando, paso a paso, el derivado del espectacular fracaso de su política económica. Todo ello a cambio de nada, ni siquiera del permiso para actuar como partido en la vida política chilena. El Partido Nacional, en cambio, no sólo tiene a algunos de sus hombres en puestos públicos claves, sino que puede (aunque en receso como partido) seguir operando a través de su control sobre la Sociedad de Fomento Fabril, sobre la Sociedad Nacional de Agricultura y otras entidades gremiales dirigidos por ellos. Frei, luego de aceptar con silencio cómplice la etapa más sangrienta de la represión, aprovechando ahora el fracaso económico catastrófico de la Junta y su aislamiento interno, así como su desprestigio y aislamiento internacional, ha comenzado a criticar al gobierno dictatorial y a presentarse como una alternativa para "restaurar la democracia" y sacar al país de su crisis económica. Trata así, de salvar a la Junta Militar fascista de su derrocamiento por el pueblo; de salvar el prestigio del gobierno norteamericano, cada vez más deteriorado en la medida en que se conocen las tropelías de los militares que promovió al poder en Chile; de salvar a su partido que se asfixia en la ilegalidad y que es golpeado por la Junta; de cosechar la crisis de ciertos sectores de la burguesía, que profitaban en especial del mercado interno y que se encuentran en bancarrota; por último trata de aprovechar y poner a su servicio a los vastos sectores de masas golpeados por la represión y por la crisis descargada brutalmente sobre el pueblo. Anhela pues, ser aceptado como fórmula de recambio por el imperialismo y, engañando otra vez a las masas, ofrecer a éste nuevamente garantías para continuar

apoderándose de la economía chilena, sin temer a corto plazo una sublevación popular. Se trata en el fondo de preservar intacto el fascismo como última palabra para aplastar al pueblo, manteniéndolo tras una fachada democrática como reserva, retrocediendo a una jugada anterior, para evitar así que el pueblo se enfrente directamente con la última alternativa que poseen el imperialismo y las fuerzas más reaccionarias para mantenerse en el poder: la dictadura militar. La dictadura militar como gobierno en Chile, en las condiciones de aguda crisis existente, de feroz super-explotación de las masas populares y ante un pueblo con tradiciones de lucha y de ejercicio de la democracia burguesa es, pese a la brutalidad de la represión, una alternativa extremadamente peligrosa para los reaccionarios.

Frei y su equipo, necesitan para materializar este proyecto contar con el beneplácito de las FF.AA., o de un sector decisivo de ellas. Su gobierno les proporcionará la imagen "democrática", pero ellas deben proporcionarle la fuerza presta a reprimir a aquellos a quienes no les convenza esta imagen. Necesita además contar con el apoyo del gobierno norteamericano para convencer a las FF.AA., de que el cambio de gobierno es necesario. Ni el imperialismo, por razones de hegemonía en América Latina frente a la URSS, ni las FF.AA., ligadas a los intereses internos e imperialistas más reaccionarios aceptan la presencia en este proyecto del P"C", ni menos de otras fuerzas que consideran más a la izquierda de éste. Alwin, se lo señaló ya claramente a Renán Fuentealba en la carta que le enviará el 18 de agosto de 1975, en que le reprocha la asistencia de Leighton a la reunión de Colonia Tovar en Venezuela, donde se intentó un acercamiento entre la DC y la UP, a través de dirigentes del PDC en exilio. Allí señala: "de acuerdo con los propios antecedentes que tu nos envías, resulta claramente que se ha intentado establecer bases posibles para "constituir un reagrupamiento de todas las fuerzas de oposición" comprendiendo al Partido Comunista, todo el Partido Socialista, cada uno de los MAPU, y eventualmente hasta el MIR. Pero usted no puede ignorar que esta proposición esta abiertamente en contradicción con la posición adoptada por el partido, que ha rechazado en forma definitiva, toda posibilidad de un frente con los partidos marxistas-leninistas". Y más adelante señala: "De nuevo a riesgo de parecer majadero, debo recordarte que el Partido ha definido sus objetivos: la reconstrucción de la democracia en Chile, y al mismo tiempo, yo te señalo la vía: llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales democráticas y las Fuerzas Armadas por el restablecimiento de la democracia". Y agrega como argumento: "Nadie tiene el derecho de olvidar la experiencia universal, ratificada en Chile y ahora en Portugal, de la manera totalitaria a través de la cual el Partido Comunista ejerce el poder cada vez que lo conquista".

El último argumento entregado por Alwin, es demostrativo del factor clave que utiliza Frei y su grupo pro-yanki para mantener bajo su influencia a las decenas de miles de personas que militan en la DC o votan por ella: el ejemplo real y reconocido incluso por PC prosoviéticos de Europa, de la feroz represión ejercidas en los regímenes "socialistas" existentes en la URSS y en los países del Pacto de Varsovia. Si a ésto se suma un hecho, que no por no ser reconocido por dichos partidos deja de ser cierto, como lo es la explotación que sufren los pueblos de dichos países por parte de sus burguesías burocráticas, se completa el cuadro de los argumentos que permiten a la directiva de la DC mantener engañados a numerosos obreros, campesinos, empleados, estudiantes y sectores medios. Este hecho demuestra, además, que mientras por ceguera, por falso espíritu unitario o por franco oportunismo, los dirigentes de los partidos de la UP y del MIR, se nieguen a tomar posiciones claras frente a la restauración del capitalismo existente en dichos países; a la falsedad de lo que ellos llaman "socialismo" y al carácter reaccionario de la línea política preconizada por los dirigentes soviéticos, será imposible incorporar a un vasto frente contra la dictadura y por conquistar el poder para el pueblo, no sólo a las bases honestas de la DC, sino a centenares de miles de obreros y de sectores pequeño-burgueses y medios, que conocen estos hechos y que, con plena razón, no aceptan un destino de esta especie para Chile. No podrán tener confianza en dirigentes, como los de la Dirección Exterior del PS, que han rendido un homenaje público al XV Congreso del Partido "Comunista" de Checoslovaquia, presidido por quienes aceptaron la invasión del social-imperialismo soviético a su país, hecho contra el cual el PS protestó en su oportunidad.

Otra frase que desliza Alwin en su carta, es indicativa del papel que están dispuestos a

aceptar en sus planes de democratización” por parte de la UP. Allí dice: “por nuestra parte, si bien estamos bien conscientes que la consolidación en Chile de un régimen democrático estable necesitará a su hora la más amplia base de sostén político y social, nosotros pensamos que eso no se va a obtener por medio de acuerdos entre superestructuras de fuerzas antagónicas, adoptadas en el exterior, al margen de la realidad que vivimos. Tales tipos de acuerdos sólo sirven los objetivos de los partidos marxista-leninistas para identificarse a los ojos del mundo a la Democracia en Chile, yendo a contracorriente de la verdad histórica y liberándose de sus faltas, pero no facilita ninguna vía viable de retorno a la democracia”. Es decir sin ningún género de compromiso, acepta que el P“C”, y los otros partidos, le otorguen a su gestión un apoyo político y social sin condiciones, tan sólo para evitar la posibilidad de que volvieran a asumir el gobierno los militares. No falta el deseo en dirigentes del P“C” de aceptar públicamente estas denigrantes condiciones, sólo que no han podido convencer para ello a sus aliados y ni siquiera a su propia militancia. Esta es, pues, la expectativa concreta a nombre de la cual la directiva del P“C”, mantiene dividida a la UP; soborna a numerosos dirigentes de sus partidos aliados y sabotea abiertamente la organización de la resistencia destinada a derrocar a la dictadura. Este es el objetivo real en el presente, en torno al cual se ejerce la “generosa solidaridad” de la URSS, y de los otros países “socialistas” que están bajo su dependencia, “en apoyo” del pueblo chileno.

2.- La posición del Partido “Comunista”.

Por lo que toca al Partido “Comunista” de Chile, su dirección en lugar de autocriticarse por el infierno al que condujeron al pueblo chileno con su intento frustrado de implantar el capitalismo de Estado, luego de esforzarse inicialmente por suprimir todo análisis crítico del pasado, como no consiguieron hacerlo, culpan por entero de dicho fracaso al MIR y a lo que llaman la “ultra-izquierda”. De paso traspasan también esa responsabilidad a su aliado más “apreciado”, el PS, acusándolo de estar infiltrado por el MIR y de que “las posiciones ultras encontraron audiencia muchas veces en ese Partido”. El documento aludido de la dirección del P“C”, sin embargo más que un intento de “explicar” el fracaso de la estrategia social-imperialista en Chile, constituye un nuevo esfuerzo para sacar a flote dicha estrategia destinada a promover la acción conjunta de ambas superpotencias para explotar a Chile, logrando un pacto con el sector pro-yanki de la DC. Conocidas ya las veleidades “anti-juntistas” de Frei (un mes después aparecería el documento de éste en que critica a la Junta), se trata además de ofrecerle a dicho sector y a la represión de los militares, el “chivo expiatorio” de la llamada “ultra-izquierda”, a cambio de ser admitidos como furgón de cola al menos en los planes de Frei. En verdad el documento contra la “ultra-izquierda” y aquellos en que se ofrecen a Frei como integrantes de su proyecto de maquillaje de la dictadura, son plenamente complementarios.

Para la dirección del P“C”, la causa fundamental de la derrota se debió a que la política de la “ultra-izquierda” los aisló de los sectores medios, impidió el pacto con la DC y la conquista del Alto Mando de las FF.AA. para el apoyo al gobierno constitucional.

Acusan pues, a la “ultra-izquierda” de haberles impedido capitular oportunamente, antes del golpe, traicionando por completo el programa de la UP. Si no hubiera sido por la “ultra-izquierda”, Nixon, Kissinger y las transnacionales, habrían aceptado su rendición; los Altos Mandos, que venían conspirando desde la década del 60 y ofreciendo un golpe ante la mera eventualidad de que saliera elegido Allende, se habrían transformado en sostenes del gobierno; los latifundistas, los grandes industriales y banqueros habrían aceptado de buen grado ser expropiados; Frei y su equipo habrían admitido aliarse con ellos. El análisis de la dirección del P“C” es tan desvergonzado y cínico, que la propia dirección del PS, con más sentido de la vergüenza y de la responsabilidad, responde a él. En un documento de mayo de 1975, señalan entre otras cosas: “La burguesía y su supraexpresión, el imperialismo, no se engañan en cuanto a la defensa de sus intereses históricos y particulares. ¿Que es lo que lleva al imperialismo, a la reacción internacional, a los grandes monopolios y oligarcas nacionales a entregar el apoyo a Frei en 1964? No existía el MIR; en el Partido Socialista parecía no haber audiencia para el ultrismo; la campaña presidencial se dió con un contenido desdibujado.... en fin, se expresaba en toda forma tendiente a per-

suadir de que nuestros cambios también se harían en libertad". Entonces ¿por qué el enemigo jugó todas sus cartas contra la postulación popular? Sencillamente, porque éramos un peligro por lo que representábamos.

Y estas preguntas pueden repetirse en 1970. ¿Por qué inmediatamente después del 4 de Septiembre se organiza "Patria y Libertad"?; ¿Por qué se desata de inmediato el terrorismo?; ¿Por qué Andrés Zaldívar anuncia el caos económico para provocar el pánico nacional?; ¿Por qué intentan impedir que Salvador Allende asuma?; ¿Por qué asesinan al Comandante en Jefe del Ejército, General Schneider? El ultrismo no había entrado en escena. Y prosigue luego la declaración: "la actitud de las clases en la pugna por el poder no se define por los "excesos" de los contrarios sino por el peligro esencial que expresan los objetivos antagónicos que cada clase representa. Chile es el caso típico de conducta de las clases privilegiadas cuando se ven en peligro. Ha ocurrido en el pasado, ocurre en el presente. Su arsenal es infinito, renovado con los sofisticados medios que entrega el desarrollo moderno, junto a elementos "tradicionales" como la calumnia, el soborno, el sabotaje, el terrorismo, el asesinato". Más adelante argumentan contra lo sostenido por la directiva del P" C" de que la causa fundamental de la derrota fue el "aislamiento de la clase obrera". "Afirmamos —sostienen— que no hubo "aislamiento" de la clase obrera y rechazamos que tal "aislamiento habría constituido una causa decisiva de la derrota". Y señalan al respecto: "El MIR obtuvo un 2 por ciento en las elecciones de la dirección de la Central Única de Trabajadores contra un 56 por ciento de socialistas y comunistas. El conjunto de las fuerzas de la UP obtienen allí más de un 65 por ciento de la votación directa de los trabajadores organizados. ¿A quien le teme el imperialismo y la burguesía: al 2 o 3 por ciento que controla la extrema-izquierda, ausente de la alianza popular, o al 65 por ciento dirigido por los partidos obreros que tienen las palancas del gobierno en sus manos? Si aceptamos que el pequeño burguesismo, que manejaba el 2 por ciento en el seno de la clase, provocó el aislamiento de la clase obrera, tendríamos que reconocer en consecuencia, la impotencia de los partidos obreros y la UP para conducir el movimiento popular. Pecamos entonces de una doble incapacidad: incapacidad para impedir los desbordes del 2 por ciento e incapacidad para dirigir y desarrollar nuestras poderosas fuerzas con el fin de derrotar al enemigo y culminar el problema del poder.

En el plano electoral, que entrega sólo una imagen parcial de la realidad social, tuvimos un 51 por ciento en Abril de 1971 para bajar a un 44 por ciento en marzo de 1973. Pero, ¿cual era el valor cualitativo de esas fuerzas? Sostenemos que el 44 por ciento constituía una fuerza cualitativamente superior que el 51 por ciento de 1971. Estas reflejaban el apoyo al triunfador; aquellas eran las masas trabajadoras con una disposición extraordinariamente consciente para asumir todas las responsabilidades exigidas por la toma del poder. Solamente en los grandes momentos de exaltación social son posible esas actitudes colectivas de coraje, dinamismo e iniciativa, que demostraron los trabajadores chilenos durante el paro patronal de Octubre para aplastar la resistencia de la burguesía y del imperialismo. Sólo una masa con una alta conciencia revolucionaria podía votar en marzo de 1973 por su gobierno, cuando escaseaban el pan, la leche, la carne, el café y otros elementos primordiales. La mayoría del pueblo sabía que ese desabastecimiento era provocado artificialmente por sus enemigos de clase y contra ellos, exigía todo el peso de la autoridad. Reclamaba sanciones: mano dura. Intuición y conciencia de clase. Para ellos estaba claro que sólo golpeando al enemigo era posible hacerlo retroceder. Ese 44 por ciento representaba a la vez la inmensa mayoría de la población activa que tenía en sus manos la producción y gran parte de los servicios". Y prosigue la declaración: "¿Esas fuerzas abandonaron a su gobierno en la etapa final dejando aislada a la clase obrera? Quienes afirman esto olvidan además que siete días antes del golpe, con motivo del tercer aniversario del triunfo, se realizaron en todos los rincones y ciudades del país grandiosas manifestaciones de apoyo al gobierno. En Santiago, no menos de 800 mil personas desfilaron frente a La Moneda a los gritos de "Allende el pueblo te defiende"; "Mano dura no venimos por las puras"; "Crear, crear poder popular". Si todos estos cientos de miles de manifestantes eran únicamente de la clase obrera, significa que la responsabilidad de los partidos obreros es mayor por cuanto no supieron conducir a su destino a una clase cuantitativa y cualitativamente desarrollada. Lo cierto es que, en rigor, no se trataba exclusivamente de obreros. ¿Es que no había allí empleados de bancos, de cajas de previsión, correos y telégra-

fos, de la CORFO y de cuanto organismo estatal existía? ¿No habían allí profesionales? Estos, cierto, en minoría. Pero ¿hay alguna revolución apoyada mayoritariamente por estos sectores? ¿no tuvieron los bolcheviques problemas con los empleados de correos, con los funcionarios, con los ferroviarios?

En cuanto a camioneros y pequeños comerciantes, tuvimos sectores minoritarios con nosotros hasta el golpe mismo. No olvidemos como algunos camioneros y pequeños comerciantes pedían ayuda. Unos demandaban piquetes de obreros que les acompañaran en sus viajes para no ser agredidos por los gansters de Vilarín; los otros demandaban protección frente a las hordas de "Patria y Libertad" y poder abrir sus negocios". Y concluye la declaración: "No, la clase obrera no estuvo aislada. Quienes estuvimos ajenos a una política de defensa de la revolución fuimos nosotros, la Unidad Popular. Y sobre esto son muy escasas las autocríticas."

Luego se sostiene: "Se ha planteado también que otra de las causas determinantes de la derrota, fue la falta de una "Dirección Unificada". Estimamos que esto oculta eufemísticamente serias responsabilidades políticas. Supongamos que hubiese existido una sola Dirección, incluso el Partido Unido de la Revolución. Si este mando unido hubiese hecho lo mismo que hicimos, esto es, pretender hacer la revolución con sujeción a los mecanismos legales de la burguesía, confiar en el "patriotismo" y prescindencia de las FF.AA., no prepararse para defender la revolución, no fortalecer el Poder Popular; en resumen, carecer de una estrategia y una disposición real para asumir integralmente el poder, habríamos llegado al mismo resultado. Por el contrario, si esa teórica Dirección Unica hubiese contado con una estrategia de poder, si hubiese partido de la base que el enemigo no aceptaría en definitiva la instauración de un nuevo régimen y que inevitablemente recurriría a la contrarrevolución violenta, habríamos tratado de estar en condiciones de pasar de la utilización máxima del poder legal a la constitución de una legítima fuerza de defensa del proceso. Habríamos preparado el salto cualitativo, justificado por los actos subversivos diarios del frente contrarrevolucionario en ascenso. Sin embargo, esta última hipótesis era posible también con una dirección pluripartidista. El problema era que los integrantes de la Unidad Popular o sus componentes principales estuviesen de acuerdo en una estrategia de ese orden. Y esto es lo que lamentablemente no ocurrió. No hubo consenso en el seno de la Unidad Popular para trazar una estrategia que definiera el problema del poder.

No podemos confundir —concluye— "Dirección Unica" con dirección correcta. Se puede tener una Dirección Unica y trazarse ésta una perspectiva equivocada. Puede haber una Dirección Pluripartidista y ponerse de acuerdo en una línea correcta".

Finalmente concluyen: "La cuestión de fondo era el problema del poder. Habíamos conquistado electoralmente el gobierno sin mayoría absoluta y se nos presentaba la tarea de ganar las masas y el poder pleno". .. "Al precisar las responsabilidades en la conducción del proceso liderizado por la Unidad Popular hay que delimitar las posiciones de cada uno de los partidos integrantes frente al dilema de fondo: el problema del poder y de la defensa de la revolución. Determinar: ¿quien estuvo en la idea de que el enfrentamiento era inevitable, y por lo tanto había que prepararse para defender la revolución?; ¿quien estaba por defender la revolución tomando la iniciativa si era necesario? ¿quien estaba por desarrollar el Poder Popular para defender al gobierno? Sobre estos problemas cardinales de la Revolución, el Partido Socialista tiene que reprocharse no haber podido o no haber sabido convertirlos en la perspectiva común de toda la Unidad Popular.".... "Frente a estos problemas, en el seno de la Unidad Popular se configuran dos líneas centrales alrededor de las cuales surgen una o más variantes que no se diferencian en el fondo. Una cree en el tránsito pacífico al socialismo, en la suma de fuerzas sociales hasta lograr una mayoría que permita afianzar las realizaciones, ganar la próxima elección presidencial (correspondía en 1976) y continuar los cambios a través de los mecanismos democráticos.

La otra estima que las leyes de la lucha de clases se manifiestan inevitablemente en última instancia en términos armados, lo cual lleva a que, en la medida que fuéramos consecuentes con el Programa, el enemigo de clases buscaría las formas y el momento propicio para desatar la contrarrevolución. Por lo tanto junto con profundizar el proceso y hacer irreversible su carácter, era necesario crear y desarrollar las condiciones para la defensa de la revolución. Esto exigía quebrar los mecanismos legales —los mismos que la reacción rompía sistemáticamente— y dar un salto cualitativo capaz de llevarnos a la asunción total

del poder”.

Hemos transcrito extensos párrafos de la declaración del PS, porque son reveladores de hasta que punto se comienza a comprender la responsabilidad de los dirigentes del P“C” en lo ocurrido, así como la impudicia que exhiben al pretender culpar a otros. En el análisis de los dirigentes del PS, se advierte, también, que no ha llegado a dilucidar las causas de fondo de la actitud de dichos falsos dirigentes comunistas, el por qué de su línea oportunista. Continúan considerándolos como “equivocados de buena fe”. Esto último, junto al oportunismo de algunos dirigentes del PS, determinan que sigan todavía prestándose a las maniobras del grupo dirigente del P“C”, que obedece a los mismos propósitos y a la misma línea que condujo a la dictadura militar en Chile.

Una demostración palpable de que la línea continúa siendo la alianza con el sector pro-yanki de la burguesía representado por Frei (y no el interés por los sectores medios, que dicen profesar), la establecen los documentos que los dirigentes del P“C” han hecho públicos, a raíz de las críticas de Frei a la Junta Militar. Dichos documentos junto con tibias críticas a Frei por su apoyo al golpe y a la Junta y por su silencio inicial frente a la represión, críticas que tienden más bien a dar la idea que dicho político pudiera haber actuado de otra manera, en esencia le reprochan el no incluirlos en la “democratización” que quiere implantar en Chile. A ese propósito acumulan los más serviles llamados a Frei para que no los deje de mano en sus proyectos. Allí dicen, intentando tocar las fibras “católicas” de Frei: “Si sólo la verdad nos hará libres, practiquémosla también respecto a nosotros con humildad, que en los cristianos puede llegar hasta la autohumillación. Creemos que todos los chilenos que hoy están contra la Junta (incluidos aquellos que saludaron el golpe con júbilo, esperando que sería la antesala para su retorno al poder) deben unirse en torno al común denominador de terminar con la dictadura fascista”. La lucha contra los intereses imperialistas y burgueses reaccionarios que representa Frei aceptan reducirla a “la clarificación ideológica entre aquellos que desde posiciones diferentes enfrentamos a un adversario común, a fin de evitar confusiones”.

Luego, con frases líricas, le garantizan a Frei que podrá conservar detrás del trono a las mismas FF.AA., del golpe, con pequeños retoques, afirmando: “El rechazo a la Junta atraviesa el corazón de los creyentes. Penetra como una conciencia que despierta en el fondo de las Fuerzas Armadas, donde hoy se agudiza el drama, que clama por desandar un camino de sangre a donde las empujó la metralleta en la mano de una minoría enloquecida, accionada desde el extranjero, que se benefició con la lluvia secreta —ahora pública— de los dólares de la traición”. ¿Y Frei no?, cabría preguntarles.

Más adelante, imploran a Frei que los “unifique” en torno a sus siniestros planes de salvar la dictadura dándole su propia imagen hipócrita de demócrata. “Frei —señalan— modestamente se propone como centro. Pero a ratos no se comporta como un centro unificador, sino como un azuzador de discordias dentro de la oposición, cuando en realidad lo que más se necesita es la unión y una actitud cristalina frente al despotismo”. Luego borrando las menguadas críticas que le han hecho a Frei, lo aplauden por su actitud, cuya torcida inspiración nadie ignora. Señalan: “Todo ello indica cuan inexorablemente sola se queda la Junta. Esas rectificaciones de posición se han demorado (las de Frei) pero saludamos el hecho de que por fin se produzcan. Como es sintomático y positivo que hoy Frei agregue su voz a una evidencia mundial, cuando sostiene que la política internacional de la Junta “es profundamente perjudicial a los intereses de Chile”. Después intentan extraer de las propias palabras de Frei, argumentos para convencerlo que ellos son indispensables en su proyecto, cuando dicen: “Frei escribe algo razonable cuando expresa que “no es a través del apetito de poder, ni mucho menos del partidismo, que Chile podrá encontrar su camino y su acuerdo. Tampoco ningún partido aislado podrá afrontar con éxito esta difícil empresa. Este país para superar sus problemas actuales, necesita de todos sus hombres”.

Más adelante, un tanto en clave, le insinúan a Frei que están dispuestos a aceptar que continúe reprimiendo, claro está, a la llamada “ultra-izquierda”. “Esas libertades que rigieron irrestrictas y desatadas en los días de Allende, enturbiada y falsificada toda la situación por la conjura enemiga, financiada y dirigida por el director de orquesta de la CIA, murieron con el golpe, que no salvó a Chile y a su democracia. Resucitarán el respeto a la persona, la libertad en todos sus aspectos y dominios, la democracia lúcida, que aprenderá

de su propia experiencia y sacará lecciones de su ingenuidad. He aquí —concluyen— un campo posible de fecunda convergencia”. Es fácil suponer, por parte de los que han culpado por completo del golpe a la llamada “ultra-izquierda”, contra quienes ofrecen ejercer (en conjunto con Frei y su equipo) “esa democracia lúcida” en la que “murieron con el golpe” las libertades “irrestringidas” y “desatadas”.

Luego, aplaudiendo algunas otras “denuncias” de Frei contra los aspectos más ostensiblemente repudiados de la Junta, insisten: “Estamos de acuerdo con dichas proposiciones. ¿Por qué no unirse entonces todos los que así lo quieren para alcanzarlo?”.

Posteriormente, se lamentan del “anti-comunismo” de Frei, razón por la que éste los excluye de sus planes. Le muestran como lo apoyaron en su gobierno, en particular cuando fue amenazado por el golpe de Viaux y los elogios que Frei les hizo en ese entonces. Más aún se esfuerzan por convencerlo que está siendo superado ese “anti-comunismo” en las FF.AA. y que si él se empeña podrá conseguir que el P“C” sea admitido por éstas en sus planes (lo trágico para ellos es que ni el propio Frei es admitido). “En el seno de las Fuerzas Armadas —le dicen— en la conciencia íntima de los uniformados, hay una gama heterogénea de ideas y sentires. Hoy la mayoría piensa que el golpe es el más trágico error cometido en la Historia de Chile y del Ejército. Muchos comienzan a comprender que la campaña anti-comunista y antiunidad popular fue parte primordial del gran engaño”. Sería interesante saber como han logrado penetrar “en la conciencia íntima de los uniformados”, justamente después del golpe y la represión, pues antes de él se equivocaron rotundamente, con las consecuencias conocidas. ¿Será la Iglesia, que les ha abierto el secreto de la confesión? Luego vuelven a garantizar a Frei, que si los libra de Pinochet y unos pocos “grandes culpables”, podrá disponer de las FF.AA., reaccionarias pues, “la mayoría inmensa de las FF.AA. —que es verdaderamente patriótica y humana— no sólo no tiene nada que temer, sino que dispondrá de un lugar honorable en la reconstrucción del país, de sus instituciones, de su libertad, de su progreso, dentro de las Fuerzas Armadas dignas de su misión, que contribuirán también como una garantía de que jamás volverá a repetirse la hecatombe de hoy”. ¡El cinismo para posar de ingenuos, supera todos los records!.

Más adelante, insisten en sus súplicas y alabanzas a Frei. “Por ello valoramos todos los cambios afirmativos en aquellos que no estuvieron desde el primer momento en dicha posición. Aplaudimos el acercamiento a posiciones justas, que la Unidad Popular mantuvo desde el primer momento del golpe. No hay alternativas parciales. Existe sólo la alternativa total que no excluya a nadie y que se haga con el pueblo”. Se trata, pues, sólo de diferencias de “posiciones” con Frei y su equipo, no de intereses de clase. ¡Por fin una declaración sincera!

Por último, en este documento realizado por el miembro del Secretariado del P“C”, Volodia Teitelboim, se le recuerda a Frei, que siempre el P“C” ha estado en la línea de unirse con él y con lo que representa. “No olvidemos —señala— que se está buscando esta conjunción de fuerzas, esta convergencia salvadora desde hace mucho tiempo, desde antes del golpe, que el Partido Comunista propuso una y mil veces un diálogo necesario, pero desoído entonces por gente demasiado influyente”.

Posteriormente, en marzo de 1976 (el de Volodia es de Enero), la dirección del PC saca un nuevo documento en el cual, ante el rechazo expreso de Frei de aceptarlos siquiera como furgón de cola de su proyecto, argumentan con desesperación sobre la necesidad que los admita. Lo imploran, “por encima de cualquiera otra consideración o divergencia ideológica que nos haya separado en el pasado”. Frei, sin embargo, echando mano al justificativo argumento de revestir su real anti-comunismo, con el rechazo que despiertan los falsos regímenes socialistas existentes en la URSS y los países vecinos sometidos a ella, dice estar contra el “comunismo”, “porque hemos visto que la sociedad que ellos propugnan invariablemente ha conducido en todas las naciones en que se ha impuesto, a un tipo de estado totalitario”. Los dirigentes del P“C” de Chile, dado su grado de subordinación a los cabecillas de la burguesía burocrática y social-imperialista soviética, no tienen sin embargo, la autonomía como para presentarse como independientes a esos “modelos de socialismo”, que comienzan a repudiar sus congéneres europeos. Por lo mismo, dando nuevos argumentos a Frei para mantener su influencia sobre vastos sectores que repudian con razón esos regímenes, deben insistir en defenderlos y presentarlos como “ejemplo” para Chile. En efecto, en el documento que analizamos, luego de hacer una apología de los éxi-

tos económicos de la URSS y de su “democracia”, sostienen: “Tenemos pleno derecho a postular este régimen verdaderamente humano, democrático y superior a todos los que ha conocido anteriormente la humanidad, como una bandera de lucha del pueblo chileno”. De este modo, Frei, arrastrando a importantes sectores populares a su política al servicio del imperialismo y, por su lado, los dirigentes del P“C”, dándoles pretextos, al pretender que los chilenos se traguen las “ruedas de carreta” de su modelo de “socialismo” y presentando como “anti-comunistas” a los que rechazan la traición al comunismo allí perpetrada, mantienen dividido al pueblo de Chile e impiden una verdadera unidad anti-fascista y un real avance hacia el socialismo.

En la UP, sólo el MAPU O.C. dirigido por Gazmuri, hechura del P“C” para vocear sus posiciones desde otra tribuna, los acompaña plenamente en su aventura de reclamar a Frei que los lleve a la cola de su proyecto. Se quejan en un extenso documento, a nombre del P“C”, que el freismo no obstante preconizar “concepciones democráticas”, adolece de un “antiobrерismo y anticomunismo que los lleva a postularse como alternativa al fascismo y al “comunismo”, con lo que distorsionan la naturaleza real de las opciones que el país tiene”. El documento aludido, sólo repite los argumentos del P“C”, con ciertos esfuerzos literarios para hacerlos aparecer como una línea independiente.

3.- Las tendencias en el Partido Socialistas.

En el Partido Socialista, aún existe confusión ideológica y la lucha de tendencias (corriente oficialista, coordinadora de regionales, etc), aunque las posiciones respecto a los proyectos reaccionarios de la dirección del P“C”, parecen mejorar paso a paso, al menos por escrito. En un documento cuya fecha no hemos podido precisar, en el capítulo III que se refiere a la “Línea Política del PS”, plantean todavía el carácter socialista de la revolución chilena. “El golpe dado por las fuerzas fascistas —dicen— no ha modificado el carácter del sistema económico chileno. Por el contrario, al representar la dictadura militar fascista los intereses de la alta burguesía y del imperialismo, ha puesto en evidencia con mayor fuerza, su naturaleza. Son estos elementos objetivos los que determinan el carácter socialista de la Revolución Chilena”. La lucha contra la dictadura, la plantean como una mera fase táctica en la lucha por el socialismo. No obstante, poco más adelante, señalando los objetivos del amplio frente anti-fascista que preconizan, plantean que debe impulsar “la lucha abierta por una nueva institucionalidad Democrático-Popular que haga imposible el renacimiento del fascismo y erradique sus gérmenes de todo el cuerpo social, a la vez que constituya el marco adecuado para retomar el curso socialista de la Revolución chilena”. Y prosiguen: “las nuevas formas de poder, en la medida en que impidan por la fuerza el renacimiento del fascismo y reemplacen las instituciones que lo sostienen, significa el establecimiento de una democracia revolucionaria. Esta nueva institucionalidad debe asegurar el control efectivo de la dirección del Estado por parte de la mayoría del pueblo. Será necesario destruir las instituciones que el fascismo ha desarrollado y, sobre todo, convertir a las Fuerzas Armadas y policiales en instrumentos del pueblo”. Como puede observarse, en la formulación anterior plantean premisas que suponen una auténtica destrucción del aparato estatal en manos de los fascistas y el “establecimiento de una democracia revolucionaria”, con la “dirección del Estado por parte de la mayoría del pueblo”. Todo ello, unido a las indispensables medidas económicas contra aquellos intereses que sirve la Junta Militar: los monopolios imperialistas, la burguesía monopolista interna y el latifundio, constituye, precisamente, la etapa Democrático Popular de la revolución que el documento se niega a reconocer explícitamente.

Más adelante, el documento, demostrando la incomprensión acerca de la naturaleza de la dirección “comunista”, plantea como eje del movimiento anti-fascista la unidad socialista-“comunista”, confiando que será posible alcanzar una “política única” a través de un “debate serio y extenso con vistas a lograr compenetrarnos profundamente de nuestras respectivas posiciones”. Respecto al MIR, consideran que debe participar en el frente anti-fascista y consideran al respecto: “auspicioso el contenido de la carta pública del MIR al Partido Comunista”, que, sin embargo, la dirección de este partido rechaza con indignación.

Respecto a la DC, plantean como “descable su participación en el frente, agregando, sin embargo, “que no cabe esperar una consecuente actitud de lucha antifascista, en tanto dominen (en la DC) los sectores que expresan los intereses del gran capital y el imperialismo”. Sostienen, finalmente, que el frente debe ser impulsado “con o sin la presencia de los demócrata-cristianos”, lo que, por supuesto, está destinado a chocar con la obstinada decisión de los dirigentes del P“C” de paralizar toda alternativa anti-fascista, que no incluya a la DC dirigida por Frei.

Finalmente, agregan un concepto que demuestra lo infructuoso que será el “debate serio y extenso” con vistas a lograr una “política única” con los dirigentes del P“C”, al plantear que: “En las actuales condiciones, el proceso revolucionario sólo puede proseguirse por la vía armada”. Agregando que: “Cualquier fórmula destinada a crear esperanzas en torno a una supuesta salida pacífica y democrática para la situación presente, no tiene más sentido que debilitar la decisión combativa del pueblo y la voluntad de prepararse de sus vanguardias políticas”. Justamente, la decisión obsesiva de los dirigentes del P“C” de aliarse a cualquier precio con Frei y su equipo, está destinado a sabotear todo movimiento destinado a derrocar a través de la lucha popular a la dictadura militar.

En marzo de 1974, salió un extenso documento firmado por el Comité Central del PS. Allí el análisis de las causas de la derrota se da en los marcos planteados por la dirección del P“C”, tendientes a ocultar la deliberada acción paralizadora que existió de la lucha popular. Se dice que: “El factor fundamental de la derrota de la experiencia de la UP lo constituyó la decidida resistencia de los enemigos del pueblo al proceso y la inmensa fuerza que lograron acumular”. Se menciona, luego, el éxito que tuvo la oposición en impedir el entendimiento con la DC, en la lucha ideológica contra la UP, en la penetración en las FF.AA., etc. en un análisis más descriptivo que autocrítico. Luego, expresan en forma negativa y sin mostrar que existió el predominio muy concreto de una política que condujo a la impotencia a la UP y a su gobierno, las razones por las que a su juicio no se respondió con éxito a la ofensiva contra el gobierno. “La derrota política del movimiento popular” —dicen— estuvo “determinada por el grado de aislamiento de la clase obrera y la ausencia de una real fuerza dirigente capaz de hacer uso, con posibilidades de éxito, de la potencialidad revolucionaria latente en la fuerza de las masas y en los instrumentos de poder institucional al alcance del Gobierno”. El informe realiza luego un análisis académico y abstracto de las fallas que existieron, sin llegar a mostrar la relación que existió entre la oposición oficial a la “potencialidad revolucionaria latente en la fuerza de las masas” y el aislamiento de la clase obrera, y sin destacar, por cierto, las causas de fondo que motivaron ésto, ni a los responsables de esa política.

Más adelante, mostrando hasta que punto se ignora la esencia de la política oportunista a la que se dejaron arrastrar por la dirección del P“C”, señalan que la unidad PS-P“C”, “fue absolutamente insuficiente para enfrentar las circunstancias más decisivas en que estuvo en juego el cambio de calidad en la correlación política de fuerzas, o el propio problema del poder”. No obstante, fue, precisamente el papel jugado por la dirección del PS para “unificar” a la UP tras la hegemonía de la dirección del P“C”, un importante factor que impidió el desarrollo del proceso y condujo a la catástrofe.

Más adelante, por primera vez en un documento oficial del PS, realizan una caracterización correcta del carácter de la revolución planteada en Chile. Señalan: “Hay una estricta relación entre el carácter de la revolución (anti-imperialista, democrática, popular, con perspectiva socialista), el enemigo principal (imperialismo, burguesía monopólica y gran burguesía agraria) y la política de alianzas del proletariado (amplio frente antifascista)”. Y argumentan luego: “La revolución chilena sigue teniendo un carácter fundamentalmente democrático, anti-imperialista y antimonopólico, de tipo muy avanzado y popular. Esto obedece al carácter dependiente y de alta concentración monopólica que constituye al imperialismo, la burguesía monopólica y agraria en el núcleo central, eje de sostenimiento y centro de gravedad de la dominación capitalista del país”. Luego, mostrando que el golpe por lo menos tuvo la virtud de que se comprendiera el núcleo que detentaba el poder en Chile y la necesidad imperiosa de aislarlo, se señala: “La concentración del poder económico y político capitalista en este núcleo dominante, y el peso de los restos de formas precapitalistas de producción (pequeña producción mercantil), condiciona una estructura de clases y un sistema de contradicciones tal, que permite agrupar en

torno al proletariado, no sólo a las capas de la pequeña-burguesía urbana y rural, sino también a las fracciones dominadas de la burguesía mediana y pequeña". Señalan después que: "No es correcto postular la revolución socialista en esta etapa", agregando que: "El carácter de nuestra revolución, no siendo socialista desde el inicio, lleva los gérmenes de su transformación en socialista, en un proceso único", formulación absolutamente correcta. Luego, se describe acertadamente en lo esencial el proceso de instauración del "Estado de Nueva Democracia" y su perspectiva hacia el socialismo.

Respecto a las alianzas, se señala taxativamente que la alianza con la DC, sólo puede establecerse "sobre la base de la hegemonía de su sector democrático y progresista". Y agregan: "El desarrollo del proceso unitario y su fortalecimiento conduce a la derrota de la derecha DC. Frei no es precisamente el llamado a encabezar a la DC en la alianza antifascista", formulación que se aparta por completo de los esfuerzos de la directiva del P"C" de reivindicar a Frei intentando que éste los acepte, y todavía más de sus intenciones de secundarlo sin condiciones.

Se extiende luego el documento, en críticas a los "errores" de las concepciones del P"C", en especial su concepción de la "posibilidad de una vía pacífica, "o no armada", que "fue magnificada, lo que redundó en ilusionismo y en errores fatales de apreciación del carácter de clase de las instituciones democrático-burguesas".

Se concluye señalando la vía armada (combinada con combates de masas legales e ilegales) como el camino para derrocar a la Junta.

El 7 de febrero de 1976, aparece una entrevista realizada al Jefe de la Coordinadora Nacional de Regionales del PS, corriente que dice tener una influencia decisiva en el interior del país y que sustentando una posición más radical que la directiva del PS, mantiene, sin embargo, con ella relaciones orgánicas y, al mismo tiempo, una relativa autonomía. Al parecer, por lo dicho en la mencionada entrevista, se coincide con el documento del PS recién analizado, acerca del carácter de la revolución. En efecto, allí se señala: "es el impulso de las masas organizadas en este frente de nuevo tipo lo que nos permitirá pasar inmediatamente, una vez barrido el obstáculo de la Junta Militar, a implantar el poder popular y marchar ininterrumpidamente hacia la construcción del socialismo en nuestro país".

Intuyendo el papel de freno a la lucha contra la dictadura que representa la influencia de la línea del P"C", así como la paralización a la que arrastran a los dirigentes del PS los conciliábulos "unitarios" con los dirigentes "comunistas", señala que: "Las declaraciones de la Unidad Popular en el exterior, para decir verdad, ayudan muy poco al proceso revolucionario en el interior del país" agregando que, "acciones comunes de estas mismas fuerzas aún no existen en el país. Y ésto es grave. Esa es una de las causas por las cuales la dictadura se mantiene aún en el poder en el país".

La carta aún con más fuerza que el documento de la dirección del PS, abunda en argumentos contra la alianza con Frei y su equipo y en advertencias contra los que en la UP se dejan seducir por esa falsa alternativa.

En el N^o 13 de la revista "Orientación", órgano oficial del Secretariado Exterior del PS aparecido en junio de 1976, se intensifica la polémica de la dirección de este partido contra la dirección del P"C". Es allí donde aparece el documento que hemos citado largamente, refutando el artículo de la dirección del P"C", llamado: "El ultra-izquierdismo, caballo de Troya del imperialismo", en que con la mayor impudicia se pretende atribuir al MIR y a otras fuerzas calificadas como "ultra-izquierda", la derrota del gobierno allendista. La mitad del artículo del PS está destinada a refutar ese escrito del P"C". La "unidad", PS-P"C" pues, subordinada a las veleidades reaccionarias del grupo dirigente "Comunista", comienza a agrietarse a raíz del repudio de la mayor parte de los partidos de la UP, incluyendo bases y numerosos dirigentes del PS, a la persistente línea oportunista por parte de aquellos. No es casual que en ese mismo número aparezca una carta de dos carillas de la dirección del P"C" a la del PS, con motivo de su 43^o aniversario, en la que se menciona 18 veces la palabra "unidad", dentro del típico estilo de los revisionistas de encubrir tras frases de "unidad" sus actividades escisionistas y sus complots reaccionarios.

En el N^o 1 de la revista Arauco, boletín del PS en Francia, aparecido en el mes de agosto de 1976, se cita en extenso el documento de la dirección del P"C" destinado a seducir a Frei y se le oponen diversos documentos de dirigentes del PS, que rechazan esa alternativa reaccionaria.

Resumiendo este examen parcial e incompleto de la evolución de las posiciones políticas en los círculos dirigentes del PS, se puede decir que, en varios aspectos, hay un positivo avance. Avance en cuanto a una caracterización más correcta del carácter de la revolución; en cuanto a la profundización del análisis crítico de las causas del golpe; en cuanto a la revalorización del camino armado para la conquista del poder; y sobretodo, avance en el esclarecimiento de la política oportunista a la que los arrastró la dirección del P“C” durante el gobierno de Allende. Este avance crítico, se torna cada vez más peligroso para dicha dirección revisionista, pues acerca el momento en que se hará patente para muchos la conexión entre dicha línea oportunista y la farsa de socialismo, que postulan tales sedicentes “comunistas”.

4.- La discusión ideológica en el MAPU.

Resulta extremadamente difícil analizar la posición del MAPU, como tal, pues existe una gran proliferación de documentos, oficiales y no oficiales que se corrigen mutuamente. A tal punto es viva allí la discusión ideológica. Lo primero que conocemos es un documento muy sectario e “izquierdizante”, firmado por su Comisión Política y editado en marzo de 1974, en el cual se plantea la necesidad de unificar a las fuerzas opuestas a la Junta “en el cuadro de un programa antidictatorial y anti-capitalista”. Se sostiene luego que: después de una lucha política de masas, se alcanzará una segunda fase “de tipo insurreccional”, en la que ‘la clase obrera y el pueblo se juegan el todo por el todo’. Más adelante “poniendo la carreta detrás de los bueyes”, se sostiene que en “el curso de ese proceso insurreccional... toma forma el ejército popular”.

No obstante, en septiembre de 1974, aparece otro documento de la Comisión Política concebido con mayor amplitud, el llamado Documento N° 3, reproducido en la revista del MAPU “Unidad Proletaria” de septiembre de 1975. Allí se plantea la necesidad de luchar por un Gobierno Popular Revolucionario de Carácter Provisional, al cual, sin embargo, se le asignan objetivos de “restablecer y ampliar las libertades públicas, posibilitando el control del Pueblo sobre el aparato del Estado” y “restablecer y ampliar las conquistas anti-monopólicas, anti-imperialistas y anti-latifundistas”, transformaciones que, si son hechas bajo dirección proletaria, no serán de ningún modo fruto de una acción tan “provisoria” como lo plantean y constituyen de hecho una Revolución Democrática Popular. La táctica para derrocar a la Junta trasluce también una idea ingenua que subestima el poderío de los enemigos que se enfrentan, al sostener que ello será alcanzado por luchas que, “inicialmente asumen la forma de enfrentamientos parciales en lo ideológico, económico y político, y se van intensificando y globalizando hasta culminar con una huelga política general combinada con un levantamiento armado de masas de carácter insurreccional”.

Luego, conciben, sin más, la “unidad de la clase obrera”, a través de un Frente Unico Obrero compuesto por los partidos de la UP y el MIR, sin considerar las líneas pequeño-burguesas y francamente reaccionarias que existen en sectores dirigentes de dichos partidos. Respecto a la DC, reconociendo la necesidad de incorporar a dicho partido al frente anti-fascista, sostienen que ello “supone un cambio de su hegemonía interna en favor de sus sectores progresistas y la neutralización de sus sectores más reaccionarios, que mantienen lazos con la dictadura”.

Corrigiendo, aunque a medias, las tendencias ‘izquierdizantes’ del primer documento mencionado, afirman que “proponerse como objetivo del período la instauración de la dictadura del proletariado, sin entender la necesidad de un paso táctico previo, sin ubicar en la dictadura fascista al enemigo principal y desconociendo la amplia alianza que es posible construir en su contra, sólo lleva a regalar potenciales aliados al enemigo, confunde al pueblo, y en definitiva frena el desarrollo del proceso revolucionario”. Sólo que, “al enemigo principal”, no basta ubicarlo “en la dictadura fascista”, sino, en quienes están detrás de dicha dictadura y, en tal caso, se descubre que hay que enfrentar a enemigos, tales como el imperialismo, la burguesía monopolista y la oligarquía terrateniente, cuyo derrocamiento no será producto de un simple “paso táctico”, ni de un “levantamiento insurreccional” a corto plazo.

El documento N° 3, no tiene ninguna formulación crítica y autocrítica respecto al go-

bierno de la UP, ni respecto a la lucha anti-Junta, pese a que reconoce que no existe aún "una dirección política alternativa, que agrupe y oriente a las clases y fuerzas sociales afectadas por la Junta, lo que permite a la dictadura un control absoluto de la situación".

En el mismo número de la revista "Unidad Proletaria" en el que se publica el documento N° 3 que comentamos, aparecen extractos de un documento N° 4, de abril de 1975, en el que se critica al anterior. Se critica allí "el sobrevalorar la actitud y la disposición del Partido Comunista para asumir esta táctica (lucha resuelta contra la dictadura). En ese momento, agregan, se creía que el PC, dadas las condiciones objetivas que se presentaban, iba a poner el acelerador en ese trabajo e iba a iniciar acciones de resistencia. De hecho no fue así, porque su concepción es diferente... La línea política del PC en Chile ha sido permanentemente la de cuidar sus fuerzas, de no ponerlas en movimiento, sobre todo en la clase obrera, esperando una coyuntura, como la que a su juicio se aproxima... de gran agudamiento de las contradicciones interburguesas".

En el N° 4 de "Unidad Proletaria" (Enero-Marzo 1976), aparece un extenso artículo sobre las expresiones del "poder popular", que existieron durante el gobierno de Allende, pleno todavía de las ilusiones respecto a dichos organismos, que ya hemos criticado en este libro. Vienen, sin embargo, pronunciamientos claros contra la línea del P" C" de alianza con Frei y su grupo y una crítica al documento de la dirección de aquel contra el MIR, en el cual se polemiza con dichos dirigentes, intentando, todavía, "demostrarles" su espíritu reformista y revisionista del marxismo.

Finalmente, poseemos un documento elaborado por 7 miembros del Comité Central del MAPU, sin dudas el más avanzado en sus formulaciones y en sus críticas a la experiencia de la UP, al movimiento por derrocar a la Junta y a la dirección del P" C". El documento se llama: "Una línea de victoria para la resistencia proletaria y revolucionaria" y se propone ser "un borrador básico para la discusión que tiene lugar en el seno del Partido". "Aquí —se señala— se plantea abiertamente un conjunto de tesis claramente distintas a aquellas de carácter reformista, revisionista o simplemente oportunista que ha venido planteando un sector minoritario de derecha en el seno del partido".

Allí se señala que, en el gobierno de UP, "la dirección reformista-revisionista predominante tuvo... su expresión permanente en todos los planos" y que tales concepciones "expresan justamente intereses estratégicos e ideológicos de la burguesía y no del proletariado". Se denuncia luego, el papel que cumplió la URSS ante el gobierno de Allende, señalando que ésta "no se comprometerá en América Latina con procesos que, al romper ciertos marcos reformistas o democrático-burgueses, ponen en peligro un cierto 'status' internacional". Señala más adelante, que la URSS presionó permanentemente al Gobierno de la UP para que éste llegara a un acuerdo con la Democracia Cristiana". Y concluye que: "El rol objetivamente reaccionario de EE.UU., y la URSS en A. Latina... debe constituirse en una premisa elemental de cualquier estrategia revolucionaria dentro de nuestro continente".

Aunque sin llegar a formular directamente respecto al gobierno de la UP la naturaleza del proyecto reaccionario de capitalismo de Estado, que inspiraba (por parte de la dirección del P" C") la línea oportunista que primó en dicha experiencia, el documento avanza más que ningún otro en la exigencia de auto-crítica de quienes integraron ese gobierno. Rechaza la crítica al proceso (de los documentos oficiales del MAPU) como insuficiente. Señala que el MAPU se apartó de su línea inicial de constituir un frente revolucionario y de no integrarse a la UP, por el carácter reformista de su concepción del Estado, terminando, sin embargo, por plegarse a dicha coalición. Señala, por último, que para el futuro: "Pretender construir y estrechar alianzas con fuerzas reformistas al precio de mantener y aún profundizar el desarme ideológico y político de las masas y de sus sectores de vanguardia no es sólo una ingenuidad: es un error y una irresponsabilidad política de proporciones". No obstante, aún se alienta la idea de que tal alianza es posible a condición de "señalar y denunciar cuando sea necesario (y hoy lo es) el carácter reformista y revisionista de las posiciones que predominaron durante los tres años de Gobierno Popular y que causaron su derrota". Exige el documento, además, una autocrítica del MAPU, como "protagonista" de dicha política oportunista.

En las conclusiones del capítulo crítico y autocrítico, señala, entre otras cosas, exhibiendo todavía la debilidad de este análisis, que: "una dirección hegemónica reformista-

revisionista en el seno de las masas representa un peligro y un obstáculo extraordinariamente grande desde el punto de vista del avance de dichas masas hacia fases superiores de la lucha revolucionaria, y que su desplazamiento y derrota ideológica y política es una condición necesaria de la victoria del proletariado". Lo que da la idea de una aceptación de convivencia con dicha dirección, no obstante, que en la conclusión final se señala que: "sin hegemonía proletaria no hay lucha democrática, antiimperialista ni socialista consecuente y exitosa".

Posteriormente se analiza las características del actual gobierno chileno, los intereses que representa y el carácter de modelo de respuesta global que él tiene por parte del imperialismo, a sus problemas en los países dependientes. Rechaza allí el "frente antifascista" como lo conciben los "reformistas", es decir, incluyendo a sectores como los de Frei, que aparecen con "contradicciones" con la Junta, "oponiéndose al desarrollo de las fuerzas propias de la clase obrera y el pueblo a través de los Comités de Resistencia Revolucionaria y Comisiones de fábrica" y que continua planteando una "concepción reformista en relación a las Fuerzas Armadas, y hablan de la "lucha armada" como una 'simple posibilidad'. "Todo ello —señalan— lo necesitan para dar garantías a la burguesía y llegar a alianza con ella".

En su análisis internacional avanzan también más que ningún otro sector de la UP, en sus críticas al sistema imperante en la URSS, aunque tampoco llegan al respecto a una denuncia completa. Señalan "la evolución de la URSS en un sentido cada vez más alejado del socialismo y del campo revolucionario internacional". Señalan que "en lo interno, el abandono de las concepciones proletarias es cada vez más definitivo y evidente, traduciéndose en un proceso de creciente restauración capitalista. La dictadura del proletariado es abandonada progresivamente, especialmente a partir del XX Congreso del PCUS en 1.956. El Estado asume un papel cada vez más represor en contra de la clase obrera y el pueblo. El partido, el ejército y los aparatos estatales son cada vez más controlados por una burocracia burguesa". En suma, para los autores del documento, desde hace 20 años, la URSS sólo "se aleja" del socialismo y hay una "creciente restauración del capitalismo" al parecer, según ellos, aún no consumada. No consignan, por lo demás, el carácter de super potencia social-imperialista de la URSS y sus propósitos y esfuerzos de dominación mundial, en acuerdo y disputa con el imperialismo norteamericano. De allí que no lleguen a formular con claridad el modelo de capitalismo de Estado y de subordinación al social-imperialismo, que constituía el alma de la línea reaccionaria que impuso la directiva del P 'C' durante el gobierno de la UP y que continua impulsando hoy en día. De allí que, si bien consideran a la URSS como un "obstáculo" y enemigo (aunque sea secundario) del desarrollo de la lucha revolucionaria de nuestros pueblos', no lo juzgan así en función de sus esfuerzos de dominación mundial y de promoción de regímenes semejantes al suyo, sino, "en virtud fundamentalmente de sus compromisos con el imperialismo norteamericano", que se expresan "en su política de 'coexistencia pacífica' y de 'distensión', y en el reconocimiento tácito de que América Latina forma parte de la 'zona de influencia' de los EE.UU.". Esta incomprensión del modelo mismo reaccionario que anhelan implantar los soviéticos y "sovietinchas" en Chile, los lleva a creer que la política oportunista que impulsó la dirección del P 'C', fue sólo por aplicar la línea de "coexistencia pacífica" dictada por la URSS y no por la necesidad de preservar el Estado burgués a fin de implantar el capitalismo de Estado. La verdad es que en Chile, como lo hemos mostrado, la línea de compromisos por el reparto del mundo en esferas de influencia entre la URSS y EE.UU., se traduce concretamente en la exigencia de avanzar hacia el capitalismo de Estado, en alianza con el sector populista pro-yanki y con sus líderes: Frei y su equipo. Allí donde estén en condiciones de hacerlo, como en Checoslovaquia y Angola, los social-imperialistas no trepidan en dejar de mano su "vía pacífica" y su "coexistencia pacífica".

Por otra parte, el carácter de enemigo de los pueblos de América Latina de la URSS, no deriva sólo de que promuevan una línea de conciliación allí con el imperialismo norteamericano, sino, directamente de sus intentos de dominación, comenzando por la explotación conjunta con éste, de los pueblos del continente.

Más adelante el documento, no obstante que caracteriza con relativa corrección las tareas de la "etapa estratégica actual" y sus blancos: "la gran burguesía monopólica

(núcleo central de la burguesía y del capitalismo dependiente criollo), el imperialismo norteamericano y los terratenientes" y señala que "Las tareas estratégicas siguen siendo la expropiación del gran capital monopolico, la expulsión del imperialismo norteamericano, la expropiación de los terratenientes, la destrucción del Estado burgués", sostiene que con ello se alcanza "la instauración de un Estado proletario y el inicio de la construcción socialista". Sin embargo, planteando directamente un Estado proletario y el socialismo, se proponen ganar no sólo al proletariado y al campesinado pobre, sino a "los sectores empobrecidos de la pequeña burguesía, y ciertas fracciones de la burguesía mediana y pequeña". De este modo, los objetivos propuestos son muy estrechos para los sectores que pretenden ganar, y además, estos sectores son concebidos con muchas restricciones en relación al poderío (ampliamente demostrado) de los enemigos principales a derrotar.

Como el problema de separar las etapas (democrático Popular y Socialista) de la revolución les resulta demasiado complejo, dados los prejuicios trotskizantes que todavía pesan en los sectores más honestos de la izquierda chilena, terminan con una confusa fórmula ecléctica. "Hablemos —dicen— del carácter nacional democrático-popular y socialista de la revolución en un sentido leninista". Y más adelante señalan: "incluso durante el período de lucha contra la dictadura, contra los monopolios, contra el imperialismo y los terratenientes, el contenido de la lucha no sólo será nacional y democrático popular, sino también estrictamente proletario o socialista". Y "justifican" lo anterior señalando que es socialista: "en el sentido y en la medida que la esencia del propio socialismo no es otra cosa que la realización de la dictadura y hegemonía del proletariado, no sólo en el plano político e ideológico, sino también económico y social". Y agregan: "En tal sentido, decimos que la actual etapa estratégica de la revolución en nuestro país es al mismo tiempo nacional democrático-popular y socialista". Antes de esta peregrina conclusión, han citado en su apoyo una frase de Lenin, de la que se desprende todo lo contrario de lo que concluyen (sin contar las numerosas opiniones de éste en que diferencia clara y expresamente ambas revoluciones). "Y el propio Lenin —escriben— aclaraba y subrayaba en 1.921: 'Resolvimos los problemas de la revolución democrático-burguesa sobre la marcha, de paso, como "producto accesorio" de nuestra actividad principal y verdadera, proletario-revolucionaria y socialista... Las transformaciones democrático-burguesas —lo hemos dicho y demostrado con nuestros actos— son un producto accesorio de la revolución proletaria, es decir, socialista. Digamos de paso que todos los Kautsky, los Hilferding, Martov, Chernov... no fueron capaces de comprender esta correlación e instante entre la revolución democrático-burguesa y la revolución socialista y proletaria. La primera se transforma en la segunda. La segunda resuelve de paso los problemas de la primera, la segunda consolida la obra de la primera. Y sólo la lucha determina hasta qué punto la segunda logra rebasar la primera'. Lo único que plantea Lenin en este escrito, frente a oportunistas como Kautsky y otros, que pretendían marcar el paso en la revolución democrático-burguesa y frenar su transformación en revolución socialista (transformación acelerada en las condiciones de un país como Rusia de un desarrollo capitalista relativamente avanzado), es que el objetivo fundamental de los marxistas es la revolución proletaria y que no es necesario, una vez alcanzado en lo esencial el primer objetivo revolucionario, esperar el cumplimiento completo de todas las reivindicaciones democrático-burguesas para pasar a la etapa de lucha por el socialismo. Sin embargo, Lenin, siempre, e incluso en el párrafo recién citado, habla claramente de dos revoluciones. Cada una de esas revoluciones (y esto vale hoy día para la revolución Democrático Popular, que no es una simple revolución democrático-burguesa pero, tampoco una Revolución Socialista) posee distintas formulaciones programáticas, se dirige o centra su blanco principal en enemigos de clase diferentes y se lleva a cabo con alianzas de clase también distintas. Más aún, la forma de poder que genera cada una de ellas no es igual. En la Revolución Democrático Popular, se trata de una forma particular de dictadura del proletariado, que éste, conservando su dirección, ejerce con el conjunto del pueblo contra sus enemigos principales: mientras en el socialismo, según el propio Lenin, el proletariado ejerce una dictadura "no compartida" y contra toda la burguesía. Si bien una vez realizada la primera etapa revolucionaria es de suma importancia luchar contra las tendencias de derecha a congelar el proceso, a separar ambas etapas con "una muralla china"; antes de esa primera etapa, es muy importante combatir las tendencias "izquierdistas", que pretenden confundir ambas etapas, aislando al proletariado y asignándoles objetivos imposibles de cumplir "de

una vez" (ver pag.). Precisamente, la correcta formulación de los objetivos que corresponden a la primera etapa revolucionaria (en especial en países de bajo desarrollo capitalista y dependientes como Chile) y de la política de alianzas que debe promover el proletariado, son una condición indispensable para el éxito de dicha etapa y el rápido paso a la etapa socialista. El verbalismo "revolucionario", el saltarse etapas de palabras, no sólo no acelera el logro del socialismo, sino que, ni siquiera permite consumir la primera etapa revolucionaria. Decir, por lo tanto, en abono de una confusión entre ambas revoluciones, "que la esencia del socialismo no es otra cosa que la realización de la dictadura y la hegemonía del proletariado", ni favorece el avance a la futura dictadura irrestricta del proletariado, ni favorece la hegemonía que éste debe alcanzar sobre vastas capas del pueblo, para remover los más importantes obstáculos en su avance hacia el socialismo.

Paradójicamente, el documento, mientras se esfuerza por meter en el mismo saco ambas revoluciones, señala: "lo absurdo e infantil que es pretender la expropiación inmediata y general de todas las clases o fracciones burguesas, en particular de toda la burguesía mediana y pequeña". Sin embargo, el evitar esa posición "absurda e infantil", significa levantar un programa en el que se defina claramente que serán expropiados sólo los intereses del imperialismo, los latifundios, los bancos, las empresas industriales monopolistas y claves para la economía; en el que se aclare que el resto de las empresas, en los marcos de ciertas limitaciones y exigencias que les impondrá la revolución a realizar y de ciertas garantías que les otorgará, serán respetadas; en el que se defina qué sectores, de aquellos que no constituyen el blanco de la Revolución, participarán en el gobierno, así como en las nuevas instituciones, que reemplazarán al anterior Estado reaccionario, etc. De otro modo, aunque a la postre no se caiga en esas medidas "absurdas e infantiles", se practicará la estrategia, aún más "absurda e infantil", de hacer creer a todos estos sectores (que no constituyen el enemigo principal), que ellos son también el blanco inmediato de la revolución y que serán aniquilados cuando se conquiste el poder al mismo título que dicho adversario principal, aunque no se piense hacerlo. Y la razón para no cometer este disparate, deriva, no sólo de que es necesario atraer a estos sectores al lado del proletariado o, por lo menos, cuando ello no sea posible, neutralizarlos, debido a que los enemigos principales y sus aliados internacionales son extremadamente poderosos, sino que, al hecho de que el proletariado, que ha tomado en sus manos como fuerza dirigente el manejo de los sectores claves de la economía, no está en condiciones de administrar a corto plazo los centenares de miles de empresas industriales, comerciales, agrícolas, artesanales y de servicio en manos de pequeños y medianos propietarios privados. El ejemplo del gobierno de la UP, en el que ni siquiera se logró (dado, claro está, el activo pero previsible sabotaje) administrar las grandes empresas estatizadas de un modo medianamente eficiente, debiera haber conducido a sacar conclusiones al respecto. El control sobre el poder, por cierto, determina condiciones absolutamente diferentes a las del gobierno de la UP, pero no eliminan la inmensa complejidad del paso a una economía totalmente socializada. Por otra parte, la necesidad de contar —luego de aniquilados los grandes explotadores— con un período de funcionamiento controlado y eficiente de la industria privada mediana y pequeña (así como del comercio, servicios, etc.), no sólo se extiende a la etapa Democrático Popular. Incluso la implantación del socialismo desde el punto de vista del poder político, no implica la obligatoriedad de expropiar de un modo inmediato y simultáneo toda la empresa privada. El ritmo para efectuar la socialización completa de la economía, así como los procedimientos para alcanzarlo, debe determinarlos el proletariado en el poder. Esto hace aún más indispensable ganar o neutralizar a dichos sectores burgueses a través de la alianza que establece con ellos el proletariado en la Revolución Democrático Popular.

Luego, el documento que analizamos, sectarizando en este caso las tareas tácticas del proletariado, levanta como programa mínimo (de carácter meramente táctico) para el derrocamiento de la dictadura, el programa Democrático Popular y sostiene que: "la dictadura actual debe ser derrocada a través de la insurrección popular y reemplazada por una dictadura democrático-popular". Este programa, sería realizado por un Gobierno Revolucionario Provisional.

Respecto al procedimiento de lucha para derrocar a la dictadura, realizan nuevamente una mezcla entre los conceptos de insurrección y de guerra popular prolongada. Si bien reconocen que, "sería completamente idiota y criminal que una dirección arrastrara al

pueblo a un enfrentamiento general y decisivo cuando se dispone de unidades de combate aún más débiles e inexpertas, o en cualquier caso, más débiles que las fuerzas del enemigo', sostiene, al mismo tiempo, que "en el curso de la guerra revolucionaria podrán darse no sólo uno, sino varios momentos insurreccionales de carácter general". Sin embargo, si se reconoce como principio la necesidad de acumular fuerzas a través de un proceso de guerra prolongada, hasta alcanzar superioridad estratégica sobre el enemigo, es absurdo plantear, al mismo tiempo, "varios momentos insurreccionales de carácter general". Estos no serían más que una transgresión de la estrategia general y su derrota (que se dá por su puesta pues se habla de "varios", que serán tales debido a que no tienen éxito), significaría golpes demoledores contra las fuerzas populares y, por lo mismo, un retroceso contundente del desarrollo de la guerra popular prolongada. La verdad es que sólo puede concebirse un momento insurreccional, dada la importancia que en Chile tienen las ciudades: como culminación de la guerra prolongada.

Más adelante el documento, luego que le ha dado la calidad de mera táctica y no de objetivo estratégico a la Revolución Democrático Popular, levanta todavía, una especie de sub-táctica, tras lo que llama una Plataforma Inmediata contra la Junta, en la que se pone el acento en las libertades democráticas, en la defensa de las riquezas básicas frente al imperialismo y del nivel de vida de las masas. La verdad es que una plataforma de esta especie, que incluya algunos aspectos del Programa Democrático Popular, poniendo el acento en aquellos que conciernen a las libertades y derechos democráticos y al nivel de vida de las masas, constituye la verdadera táctica del movimiento anti-fascista, todavía más amplio que el frente destinado a luchar por la Revolución Democrático Popular. La lucha contra la dictadura y contra los aspectos más aberrantes de su política, conforman el paso táctico actual, que abrirá paso al objetivo estratégico de implantar una Democracia Popular. Es el hecho de rebajar el carácter estratégico de la Revolución Democrático Popular, lo que lleva a los autores del documento a concebir esta especie de sub-táctica, que sustitima los objetivos a alcanzar después y a través del derrocamiento de la Junta levantando un programa Democrático Popular, pero sólo como "táctica" de un gobierno provisorio.

Finalmente, el documento, expresa que: "Los sectores reformistas y revisionistas son en el seno de la clase obrera, el enemigo principal de las fuerzas y posiciones revolucionarias. Pero a escala nacional y frente al enemigo principal del proletariado y el pueblo en su conjunto, son hoy día un aliado objetivo. Por lo tanto, no debe haber ninguna vacilación de parte nuestra —agregan— en buscar consciente y responsablemente la alianza o acción conjunta con ellos, en torno a la Plataforma Inmediata o, en general, en torno a objetivos democráticos, pero sin subordinarse a ellos, sin perder nuestra independencia ideológica y política, sin dejar de dar la lucha ideológica más clara en contra de aquellas posiciones o acciones impulsadas por dichos sectores que frenen o perjudiquen la lucha de masas contra la dictadura". Este planteamiento, así expuesto, resulta peligroso si no se precisan varios aspectos que condicionan la táctica para encajar a la dirección revisionista. Es verdad, que no son por ahora tan peligrosos como el grupo de Frei, que representa a la potencia imperialista dominante en América Latina y concretamente en nuestro país, pero, su carácter de falsa dirección proletaria, su proyecto de reemplazar a los grandes explotadores a través de la implantación del capitalismo de Estado y su tendencia objetiva a aliarse con el sector que representa al imperialismo yanqui, obliga a ser muy cautos en el aprovechamiento de sus contradicciones con el imperialismo norteamericano y con la alta burguesía chilena. Lo que obliga a considerarlos en la actual lucha anti-dictatorial, más que su validez como "aliados", son las masas populares que han logrado engañar y mantienen bajo su influencia, a las que es preciso ganar para una dirección proletaria. En todo caso, es inaceptable la participación con ellos en un pretendido "frente anti-fascista", en el que impongan su dirección y su estrategia y táctica reaccionarias. Eso sólo se justificaría —como lo hizo Lenin al participar en los soviets dirigidos por los mencheviques— ante la perspectiva real y acelerada de desenmascararlos y arrebatarles su influencia de masas. Sin embargo, hoy por hoy, los dirigentes del P" C" emplean su influencia en paralizar la organización de un frente de la resistencia destinado a derrocar a la Junta, en aras del ansiado pacto con el imperialismo yanqui a través de Frei y su grupo. La tarea fundamental es, por lo tanto, crear ese frente amplio, bajo dirección proletaria, terminando con el sabotaje a él que realizan los revisionistas. Sólo el desarrollo de un frente de esta especie, le proporcio-

na al proletariado la fuerza y la hegemonía como para utilizar en su provecho las contradicciones del revisionismo con sus enemigos principales y, sobre todo, a la base de masas engañada por aquel. No basta, pues, dejarse arrastrar a un falso frente anti-fascista, en el que conserven la hegemonía los revisionistas, tan sólo a condición de ser autorizado a criticarlos y a "dar la lucha ideológica" contra su línea reaccionaria. Un avance de gran importancia en este aspecto, es la declaración conjunta firmada por los representantes en Suecia de la Coordinadora de Regionales del PS, del MIR y del MAPU, en septiembre de 1976, en la que sostienen que: "la reconstitución de la ex-Unidad Popular en el exterior no refleja el proceso unitario que se vive en Chile y es en los hechos un obstáculo para construir la amplia unidad antidictatorial con línea y dirección revolucionaria".

5.- La línea Post-golpe del MIR.

El MIR, sin sacar lecciones del poderío que han demostrado los enemigos fundamentales del pueblo chileno ni de la política contra vastos sectores de la burguesía media y pequeña por parte de la Junta, insiste en levantar la consigna del socialismo como etapa inmediata. En junio de 1974, Miguel Enriquez, el ex-secretario General del MIR, señala en una conferencia de prensa realizada en Cuba: "la clase obrera de Chile ha sacado una lección imperecedera de la derrota del 11 de Septiembre. Por ello, cuando logre derrocar a la dictadura gorila, no se contentará con nada menos que con la victoria completa sobre la gran burguesía y el imperialismo. Destruirá el Estado burgués hasta sus cimientos y sabrá levantar un Estado obrero y campesino en reemplazo del viejo Estado". No obstante, en particular en el año 1975, publican en la revista "Correo de la Resistencia" (en el N° 5 del mes de Enero), un artículo en el cual señalan que, sin abandonar el "Programa del Pueblo" (de carácter socialista), han levantado una Plataforma de Lucha" centrada en 4 puntos: libertades democráticas, defensa del nivel de vida de las masas, derrocamiento de la dictadura y establecimiento de un nuevo gobierno, a través de la constitución del Movimiento de Resistencia Popular. Agregan allí, que "las reivindicaciones contenidas en el Programa no son un objetivo inmediato de lucha. A nadie se le ha ocurrido plantear hoy día como objetivo inmediato y directo para la clase obrera y las masas, la conquista del poder y la construcción del socialismo". En abril de 1975, en la misma revista publican un documento de la comisión Política del MIR, que dicen fue elaborado en diciembre de 1973, en el que señalan, también que "en un período como éste, en el que por toda una primera etapa, nuestro programa socialista tomará carácter de objetivo fundamentalmente propagandístico por las enormes dificultades para impulsarlo en la práctica...." Por último, en junio de 1975, señalan que: "Lo más probable es que en el curso de la lucha por el derrocamiento de la dictadura, surja un gobierno provisional, integrado por todas las clases que luchan consecuentemente por derrocar a la dictadura gorila. En ese gobierno, el proletariado debe tener una fuerza decisiva y ganar su dirección". Allí señalan un conjunto de realizaciones más amplias que las contenidas en la Plataforma de Lucha, que contemplan de hecho varios aspectos básicos de una Revolución Democrático Popular, aunque se niegan a reconocerle el carácter de tal.

Respecto al camino para derrocar a la dictadura, corrigiendo muchas de las tendencias "foquistas" que primaron en un época en el MIR, plantean la "línea militar de masas, queriendo con ello precisar que nuestra acción militar estará orientada fundamentalmente a incorporar a extensos sectores del movimiento de masas a las formas de lucha armada, y no a restringir esto exclusivamente a grupos de vanguardia que 'en nombre de las masas' y con la 'simpatía' de éstas actúan militarmente".

Los dirigentes del MIR ha concentrado un importante e infructuoso esfuerzo despues del golpe, para convencer a los dirigentes de los partidos de la UP (en especial a los del P"C", los más opuestos a ellos) de la necesidad de formar un Frente Político de la Resistencia Popular, integrado por los partidos de la UP, los sectores progresistas de la DC y el MIR. Es decir, en esencia, aspiran a ser admitidos en una Unidad Popular con perspectivas de ampliarse con elementos anti-freistas de la DC. Lo que no fue posible antes del golpe, quieren obtenerlo a raíz de la implantación de la dictadura. Sin embargo, han cometido "el crimen" (a los ojos de la dirección del P"C") de criticar la experiencia de la UP como

reformista y de plantear la necesidad de acumular fuerzas para el derrocamiento de la dictadura, y, como si esto fuera poco, se oponen a la anhelada alianza con Frei y sus adláteres, que buscan los dirigentes "comunistas". Estos pecados pueden perdonárselos los dirigentes del P"C", transitoriamente, a sus aliados de la Ex-UP, pero no al MIR a quien han elegido como "chivo expiatorio" para culparlo de la catástrofe a la que arrastraron al pueblo chileno. Por su parte, la dirección del MIR, persistiendo en su ceguera de considerar a los líderes del P"C" pro-soviético como honestos reformistas equivocados, realiza (hace ya más de tres años a partir del golpe), patéticos e ingenuos esfuerzos por convencerlos de sus errores y por unirse con ellos.

Orlando Millas, en entrevista aparecida en "L'Humanité Dimanche" a comienzo de septiembre de 1974, con la esperanza de acallar a los dirigentes del MIR explotando su anhelo de unirse a la UP y ser admitidos en ella, señala: "Debo declarar que el difícil, peligroso y a veces heroico trabajo de la resistencia antifascista se ve seriamente afectado por la obstinación de los ultraizquierdistas de mantener una actitud divisionista y de provocación. Los fascistas explotan por ejemplo la propaganda del MIR que ataca a la Unidad Popular en términos imprudentes y odiosos. El prurito de constituir los 'Comités de Resistencia' fuera de los partidos, tratando de desviar fraccionalmente a los militantes aislados, parece más bien dirigido a minar las fuerzas antifascistas que a molestar a los fascistas"... El dirigente del MIR, Edgardo Enriquez, le responde en el N° 142 de "Politique Hebdo", señalando: "Los militantes de los partidos de izquierda practican ya la acción común... Han sobrepasado de este modo, en la práctica y desde la base, la lentitud de ciertos partidos de la izquierda para comprender la necesidad urgente de constituir el Frente Político de la Resistencia. Los militantes de la izquierda —agrega— no tienen nada que ver con aquellos que todavía retardan la constitución de este frente, esperando incorporar a él un partido político de la gran burguesía que colabora abiertamente con la Junta". Insiste, sin embargo, en sus ilusiones de "convencer" a los Millas y otros reaccionarios de su calaña, cuando dice: "Estamos ciertos que la clase obrera y el pueblo terminarán por vencer a Orlando Millas y a los que piensan como él sobre la realidad profunda de la lucha: lo que explotan los fascistas, lo que sirve a los gorilas, es el increíble retardo para constituir este Frente Político de la Resistencia con todas las fuerzas políticas dispuestas a luchar por el derrocamiento de la Junta militar"... No obstante, los dirigentes del MIR y otros, que persisten en creer que la dirección del P"C" está "Dispuesta a luchar por el derrocamiento de la Junta Militar", han contribuido en gran medida al "increíble retardo" de la organización de un frente de resistencia para derrocar a la dictadura. Al respecto parece que no hubiera servido de nada la trágica experiencia del gobierno de la UP: el anhelo de "unidad" con los dirigentes renegados del marxismo y la incompreensión de lo que ellos representan, les permite continuar imponiendo su hegemonía.

En diciembre de 1974, se hace más intensa la crítica de los dirigentes del MIR a la orientación de la UP durante el gobierno de Allende. Andrés Pascal, secretario General del MIR después del asesinato de Enriquez dice en una conferencia de Prensa: "A juicio del MIR, el fracaso de la UP se debió a que justamente su gobierno no fue 'revolucionario'. En el gobierno de la UP predominaron las políticas reformistas, la creencia de que era posible llegar al socialismo a través de un proceso de reformas dentro de los marcos del Estado burgués; dominó la tendencia a conciliar con los enemigos, la ilusión de que podrían llegar a acuerdos con sectores de la burguesía (la Democracia Cristiana) y la idiotez de confiar en la 'constitucionalidad' y 'profesionalismo' del cuerpo de oficiales reaccionarios de las Fuerzas Armadas. En cambio, la UP desperdició la base de su propio poder: las masas trabajadoras. En su afán de conciliar con la burguesía las direcciones reformistas detuvieron el avance del movimiento de masas, se opusieron al desarrollo del poder político y militar popular, cultivaron en las masas las ilusiones legalistas, las desmoralizaron y confundieron, creando así las condiciones para el triunfo del golpismo burgués". Más adelante, en esta entrevista concedida a diversas agencias y periódicos, señala: que "incluso llegó a realizarse en 1972 y 1973, a proposición del MIR, reuniones conjuntas con las directivas de la UP y el presidente Allende, con el propósito de establecer un acuerdo de lucha conjunta contra la reacción burguesa. Pero una y otra vez estos intentos fueron boicoteados por las direcciones reformistas de la UP que prefirieron combatir la movilización popular y buscar ilusorios acuerdos con la DC. También contribuyeron a es-

te fracaso las vacilaciones de los sectores centristas del Partido Socialista y otros partidos de la UP”.

Y agrega: “Pero el más dramático de estos intentos fue el realizado por la dirección del MIR el mismo día 11 de septiembre de 1973, en que en pleno golpe de Estado nos reunimos con la dirección del PS y el PC para acordar una acción de resistencia común. Pero el dirigente del PC presente en esa reunión fue contrario a desarrollar resistencia, se negó a cualquiera coordinación con el MIR, y señaló que era necesario esperar a ver si los militares cerraban o no el Parlamento”. Luego, mostrando que ni siquiera ese intento “dramático” les sirvió para comprender la esencia reaccionaria de lo que generosamente califican de “reformismo”, señala que después del golpe y ‘ para lograr esta unidad, la dirección del MIR se ha reunido fuera y dentro del país con los dirigentes de los partidos de la UP y de la pequeña burguesía democrática de la DC, con excepción de los dirigentes del PC de Chile, los cuales se han negado a reunirse con el MIR. Nuevamente —agrega— nuestros esfuerzos han sido boicoteados por el resurgimiento de las posiciones reformistas en el seno de las directivas de los partidos de la izquierda tradicional, que parecen no haber aprendido de la sangrienta derrota a que llevaron al pueblo chileno y otra vez sacrifican la unidad de los trabajadores y de la izquierda en su vano intento de subordinarse a fracciones de la burguesía, concretamente al freismo demócrata-cristiano”. Es indudable, también, que la directiva del MIR continua “sacrificando” la verdadera unidad del pueblo chileno para derrocar al fascismo, a la falsa unidad con quienes han traicionado sus intereses.

A través del año 1975, continúan los “abnegados” esfuerzos de la dirección del MIR por convencer a la dirección del P“C” de la “inconveniencia” de subordinarlo todo a la alianza con Frei, aunque ponen el acento, con más fuerza —al igual que todos los otros sectores avanzados de la UP— en la necesidad de no esperar esta “unidad” por arriba e impulsarla por la base en la constitución de comités de resistencia contra la dictadura.

A fines de 1975, la dirección del P“C” se lanza en picada contra el MIR y edita su documento sobre “el caballo de Troya”. En dicho documento, en realidad el MIR es sólo un pretexto, pues de lo que se trata es de atacar la oposición surgida contra su línea reaccionaria en casi todos los partidos de la UP. Un testimonio de ello, es que responden al documento no sólo los miristas, sino, el PS, el MAPU y las otras fuerzas que rechazan la línea los falsos comunistas. No obstante, en el N° 114 de su periódico “El Rebelde”, editado en febrero de 1976, el MIR, pese a que constata que: “Las direcciones reformistas... han preferido obstaculizar la unidad de la izquierda y buscar la unidad sometida con Frei y su fracción burguesa. Han preferido mantener dividida la izquierda, a la clase obrera, al pueblo y al movimiento de resistencia popular, tratando de arrastrar parte de la fuerza de la resistencia popular, tras los objetivos de la fracción burguesa, para conseguir la unidad con Frei y su pandilla”... no obstante, todo eso, expresan aún: “Llamamos a la dirección del PC a formar el frente político de toda la izquierda, incluido el MIR y sectores progresistas del PDC”. Más aún, en el N° 118 del mismo periódico, de Junio de 1976, denuncian que: “Estos sectores (los que califican de reformistas) incluso intentan dividir algunos partidos de la izquierda, para de esa forma tratar de imponer una hegemonía no proletaria al movimiento popular, subordinando al proletariado y al pueblo a la demagogia Freista”, de lo que sacan como la “más importante lección... que la unidad de la izquierda al igual que el fortalecimiento y desarrollo de la resistencia será un proceso lento y gradual”. Es decir, aún alientan esperanzas de que dichos reaccionarios plenamente conscientes, se convenzan que no son más que “reformistas” y, presionados por una unidad construida desde la base, acepten algún día enmendar rumbos. ¿Hasta cuando los militantes de base del MIR y otras fuerzas, cuyos dirigentes comparten esta recalcitrante ingenuidad, continuarán aceptándola como tal, sin denunciarla como complicidad con el sabotaje a la lucha anti-fascista que realizan los revisionistas? Algunos síntomas recientes, como la ya citada declaración conjunta de representantes del MAPU, Coordinadora de Regionales del PS y MIR en Suecia (septiembre de 1976), indican que no está lejano el momento en que esto comience a ocurrir, en beneficio de la constitución de un auténtico frente contra la dictadura, dispuesto a combatirla a la cabeza de las masas y en el que se irá imponiendo una dirección proletaria.

6.- La posición anti-fascista del Partido Comunista Revolucionario.

En el PCR, se da una situación cualitativamente diferente a la del resto de los partidos opuestos a la dictadura. Si bien existe una ineludible necesidad de auto-crítica respecto a los aspectos tácticos de su política, lo ocurrido, no ha hecho más que confirmar plenamente la justeza de sus formulaciones políticas esenciales y de su línea estratégica. El golpe, pues, ha contribuído a fortalecerlo ideológicamente y a unificarlo aún más sólidamente en torno a su línea y a su dirección. Por otra parte, como ya hemos señalado, el carácter básicamente clandestino de su estructura orgánica (mantenido desde sus orígenes), le ha permitido evitar el verdadero aniquilamiento que han sufrido los partidos de la UP y el MIR y no sólo conservar el grueso de sus fuerzas actuando, sino, lo que es más importante, actuando dentro de Chile. Debido a todo ello, el peso específico del PCR en la actual lucha contra la dictadura ha adquirido una enorme gravitación. Entre otros muchos aspectos, en el terreno de la propaganda, con más de 50 ejemplares de su periódico editados después del golpe en Chile en la clandestinidad, así como centenares de volantes, rayados murales, publicaciones de los comités de resistencia, etc, ocupa, dentro de Chile, sin dudas, el primer lugar en la propaganda contra la Junta Militar.

Para el PCR, el objetivo estratégico en esta etapa de realizar una Revolución Democrático Popular, que abra (a través de la hegemonía del proletariado) la perspectiva al socialismo, continúa absolutamente vigente. De hecho el golpe de Estado, al servicio del imperialismo yanqui, de la burguesía monopolista y financiera y de la oligarquía terrateniente, que ha aplastado no sólo a los trabajadores, sino, también a las capas medias, lo confirma plenamente.

Lo ocurrido confirma, asimismo, la formulación que siempre ha hecho el PCR de que la conquista del poder por el pueblo no es posible, si no se aísla a los enemigos fundamentales, oponiéndoles, a todo el pueblo, bajo dirección proletaria. Confirma, también, la tesis que siempre ha mantenido, de que este triunfo sobre los principales explotadores sólo es posible destruyendo por completo su aparato estatal (en especial sus FF.AA.), a través de una lucha popular armada. Esta lucha popular armada, en el concepto del PCR, dado el poderío de los enemigos a combatir y de la situación geográfica de Chile, debe concebirse como una guerra prolongada. Aunque lo que conviene al pueblo es un rápido aniquilamiento de sus adversarios, su poderío militar, económico y político y la necesidad de desarrollar, paso a paso, estos aspectos en el pueblo, imponen la necesidad de evitar toda acción aventurera, que pueda conducir a un aniquilamiento de las fuerzas acumuladas. Es preciso, pues, buscar una aplastante superioridad táctica en cada batalla contra el adversario y de ese modo acumular fuerzas, evitando ser destruído prematuramente para alcanzar la superioridad estratégica.

El PCR, piensa, además, que una lucha consecuente contra los principales explotadores y la acumulación de fuerzas a través de esa lucha para aniquilarlos, es imposible sin desenmascarar y combatir firmemente a los falsos marxistas (sea de "izquierda" o de derecha, aunque en Chile estos últimos representan el peligro más inmediato), con vistas a que las masas se liberen de su influencia nefasta y rompan con ellos.

Las ventajas que hemos enunciado que favorecen al PCR, así como su independencia de la influencia paralizante que ejerce la directiva del P" C" sobre la UP, le han permitido contribuir a organizar en Chile (y en el extranjero), las primeras organizaciones de base unitaria de un frente anti-fascista: el Frente del Pueblo.

La política de impulsar el desarrollo de un frente anti-dictadura, con un programa mínimo, amplio y unitario, obedece a las condiciones concretas en las que, en el presente, se libra la lucha por la Revolución Democrático Popular. Ella se desarrolla en las condiciones impuestas por el golpe de Estado: de dictadura terrorista, anulación de casi todos los derechos democrático-burgueses y aplicación de una política de super-explotación popular, al servicio de los terratenientes y de la burguesía monopolista, interna é imperialista. Se aplica, en las condiciones de un profundo reflujo de las luchas populares, determinado por la traición del revisionismo y por la ferocidad represiva de las FF.AA., golpistas. Este último aspecto constituye la contradicción principal que enfrenta el pueblo, para hacer valer sus derechos y paralizar la política profundamente reaccionaria de la Junta y salir de la crisis a la que ella ha conducido. El objetivo táctico primordial, por lo tanto, es quebrar y de-

rrotar a través de la lucha el instrumento represivo de la política pro-imperialista, y en favor de los terratenientes y de la burguesía monopolista, para comenzar a imponer otra política favorable al pueblo. El frente anti-fascista, por consiguiente, constituye la táctica actual en la estrategia destinada a realizar la Revolución Democrático Popular. Dicha táctica consiste en unir a los más amplios sectores en la lucha por el derrocamiento de la Junta Militar, en la lucha por el aplastamiento del instrumento represivo de que se valen los grandes explotadores del pueblo chileno: las FF.AA. reaccionarias. En función de esta táctica, el Frente del Pueblo ha levantado su programa mínimo, con el cual está de acuerdo el PCR, aunque contiene reivindicaciones que significan un avance significativo en su logro y, especialmente, la creación de condiciones políticas inmensamente más favorables para desplegar la lucha por su cumplimiento. En dicho programa se pone en primer plano el derrocamiento de la dictadura, la recuperación de las libertades y derechos democráticos y la eliminación de los instrumentos represivos de la dictadura. Se plantea, asimismo, a través del derrocamiento de quienes imponen una política ultra-reaccionaria a través de las armas, el comienzo de una política favorable al pueblo (incluyendo a los sectores medios) y opuesta al imperialismo norteamericano, a los terratenientes y a la burguesía monopolista y financiera.

El Frente del Pueblo, plantea, asimismo, luego de derrocada la dictadura, la formación de un Gobierno Democrático de Unidad Anti-fascista. Este gobierno, tendrá como tarea primordial el cumplimiento del programa mínimo del frente anti-fascista, es decir, en esencia, el restablecimiento de las libertades democráticas para el pueblo, el desmontaje completo del aparato represivo de la dictadura, que no haya sido destruido en la lucha por derrocarla y la represión de los sectores de clase a cuyo servicio está la dictadura. Dará también comienzo a una política en favor del pueblo y en oposición a los grandes explotadores ya mencionados.

Una vez derrocada la dictadura, se inicia otro momento táctico, en el que el PCR, de acuerdo al papel dirigente que haya alcanzado el proletariado en la lucha por derrocar a la dictadura y en el nuevo gobierno que surja de ella, levantará en forma completa o parcial (según el caso) su programa para la revolución Democrático Popular, en los organismos amplios.

Tanto en la política anti-imperialista, anti-monopolista y anti-latifundista que inicie el gobierno Democrático de Unidad Anti-Fascista, como en la perspectiva Democrático Popular que se planteará cuando él se haya constituido, perspectiva esta última que no significa ya sólo la eliminación de los instrumentos de la dictadura, sino la destrucción completa del Estado burgués en todos sus aspectos y la implantación de una forma de dictadura del proletariado en alianza con otras fuerzas, la hegemonía que alcance el proletariado en la lucha es decisiva. De dicha lucha y de esa hegemonía, dependen la implantación de una auténtica Democracia Popular y su perspectiva de avance ininterrumpido al socialismo. Esa será una dura lucha, no sólo contra los enemigos fundamentales y contra los intentos de los diversos sectores burgueses por tomar la dirección del movimiento, sino, y muy especialmente, contra los falsificadores del marxismo, que intentarán aprovecharse de los avances del pueblo para implantar su capitalismo de Estado y abrir paso en Chile al social-imperialismo soviético. Decimos, muy especialmente, porque estos últimos actúan a través del engaño, arteramente, presentándose como revolucionarios.

El Frente del Pueblo, si bien está creando formas orgánicas unitarias, que concuerdan con su política anti-fascista, respondiendo así con hechos a la paralización creada en la UP por la influencia de los falsos comunistas, no es ni pretende ser un frente cerrado ni exclusivista, ya sea en lo orgánico o en lo político. Los comités unitarios clandestinos de resistencia, enclavados en las organizaciones de masas, sólo tienen por misión unificar en la forma más segura y eficaz a los sectores más avanzados de las masas, para darles a éstas una dirección común en la lucha anti-fascista, ni a los partidos que destacan militantes en ellos u operan fuera de dichos comités. No se cuestiona allí tampoco las diferencias políticas de los partidos que están por el derrocamiento de la Junta, sino, que dichos comités contribuyen a unificar su dirección política de masas en aquello en lo que están de acuerdo. Los comités de resistencia además, no son concebidos como las bases exclusivas del Frente del Pueblo, sino, también las organizaciones de masas (sindicatos, centros deportivos, centros culturales, agrupaciones de pobladores, etc.), que concuerden con su progra-

ma mínimo. Más aún, la política de frente anti-fascista del Frente del Pueblo, va más allá de las formas orgánicas que éste pueda alcanzar. Está abierto a la acción común por uno, varios o todos los puntos de su programa y aún por reivindicaciones concretas y transitorias (o permanentes), que sumen fuerzas a la lucha por derrocar a la Junta. Por cierto, está abierto a actuar en común o a unificarse (según sea el caso) con otros frentes anti-fascistas promovidos por otras organizaciones que persiguen el mismo objetivo.

Sin embargo, la política del Frente del Pueblo, está claramente destinada a derrocar a la Junta. Para ello considera indispensable promover las más variadas formas de lucha de masas, entre ellas, como la forma más avanzada, importante y decisiva para el logro de su objetivo: la lucha armada. Es decir, se propone derrotar y derrocar a la fuerza represiva armada, que impone en Chile la dictadura. Mientras esto no ocurra, no considera sus objetivos como cumplidos. El Frente del Pueblo, por lo tanto, no está dispuesto a aceptar que la lucha anti-fascista sea desmontada, mientras se mantiene el instrumento armado de la dictadura, a cambio de ciertas garantías democráticas otorgadas por militares o civiles menos teñidos de sangre en apariencia, que Pinochet y sus secuaces. El fascismo debe ser aplastado por el pueblo y no maquillado a objeto de hacerlo más aceptable, tolerándole que conserve los medios para volver a masacrar al pueblo cuando lo juzgue conveniente. Por eso, el Frente del Pueblo, no acepta la alternativa falsamente democrática de Frei, ni acepta el falso anti-fascismo de la directiva del P“C”, que se satisface con que los fascistas acepten el restablecimiento de algunos derechos legales y democráticos, con que se castigue a algunos pocos responsables de la represión, mientras el Alto Mando de las FF.AA., la oficialidad y sectores de la tropa que ha aceptado masacrar, torturar y encarcelar al pueblo se limitan a eclipsarse, manteniéndose “detrás del trono”, prestos para actuar. No acepta tampoco diluirse en el pretendido frente “anti-fascista” representado por la ex-UP, en que los dirigentes del P“C” conservan aún suficiente influencia como para sabotear la lucha por derrocar a la Junta, en espera de vencer a sus aliados de la necesidad de unirse tras Frei o de cualquiera que los militares acepten para servirles de pantalla, y preservar su capacidad represiva. El Frente del Pueblo, está por el desarrollo de un amplio frente anti-fascista, sin exclusiones, pero orientado claramente por la consigna de movilizar a las masas para lograr el derrocamiento de la dictadura. Es necesario, sin embargo, aprovechar al máximo las contradicciones que existan entre estos sectores inconsecuentemente anti-fascistas con la Junta Militar, pero sin someterse a su línea capitulacionista y poniendo esas contradicciones al servicio de quienes luchan por derrocar la dictadura.

El PCR piensa que, si la lucha anti-fascista, la crisis económica y otros factores, determinan el paso a segundo plano de la forma militar de dictadura burguesa y la instalación de un gobierno que otorgue ciertas garantías democráticas, sin que la dictadura sea derrocada, es preciso impedir a toda costa que dicha farsa democrática sea utilizada para desmovilizar al pueblo; para llevarlo a aceptar la supervivencia de los instrumentos armados de la dictadura fascista y con ellos al peligro latente de la reimplantación de la dictadura militar. En este caso, la lucha contra los falsos comunistas, que se jugarán enteros, al menos a nivel de dirigentes, por frenar la lucha de masas a cambio de esas migajas “democráticas”, revestirá particular importancia.

El Frente del Pueblo, no se ha quedado (como otros frentes propuestos por diversas organizaciones políticas) en el terreno de una mera formulación teórica. Sus organizaciones clandestinas se multiplican, pese a la ferocidad de la represión, así como su actividad entre las masas. Aparte de las labores de propaganda de los comités de resistencia, han logrado dirigir ya numerosas manifestaciones y luchas de masas, así como participar en otras promovidas por otras fuerzas o espontáneas. Son numerosos los militantes de base de partidos de la UP (incluso del P“C”) así como del MIR y de la DC, que trabajan en conjunto con los del PCR en dichos comités clandestinos de resistencia. Estos se organizan, a veces, sin la presencia de militantes de partidos, por el sólo influjo de la propaganda y de las instrucciones difundidas acerca de cómo organizarlos. Su desarrollo, sus luchas, su propaganda anti-fascista son un testimonio vivo del creciente interés existente en las masas populares por organizarse para combatir eficazmente por la eliminación del gobierno dictatorial.

CAPITULO XIII

DOS LINEAS EN LA LUCHA CONTRA LA JUNTA MILITAR

Hoy como ayer, uno de los principales obstáculos para la unificación del pueblo contra el fascismo y contra los intereses que él defiende, continúa siéndolo la interferencia en Chile de la política dictada por los dirigentes soviéticos y aplicada servilmente por el equipo dirigente del P“C”. Como si nada hubiera pasado, continúan en forma recalcitrante y obstinada buscando la fórmula de conciliación entre ambas superpotencias para imponer la explotación conjunta de Chile, que les exige el social-imperialismo soviético. Continúan operando en los marcos de la repartición del mundo en esferas de influencia entre ambas superpotencias, que les prohíbe a los soviéticos y a sus seguidores desafiar abiertamente al imperialismo yanqui en América Latina y que les exige, para avanzar hacia su modelo de capitalismo de Estado, un “compromiso histórico” con los representantes políticos del imperialismo norteamericano en Chile. Por ello, reaccionaron plenos de entusiasmo cuando el super agente yanqui Eduardo Frei, se postuló como alternativa a la Junta. El que el PS, el MAPU, la IC, para no hablar del MIR, PCR, etc., se opusieran a esta deleznable alternativa que nada cambia en el fondo; que el propio Frei y su equipo, obedeciendo instrucciones precisas del imperialismo norteamericano, rechace este compromiso con el social-imperialismo y sus agentes, deja imperturbables a los dirigentes del P“C”. Ellos tienen instrucciones al respecto y son monolíticos, al menos a nivel de directiva, en su obediencia a la burguesía burocrática soviética. Nada les importa haber generado una profunda división en el seno de la ex-Unidad Popular y en los partidos que la integran; nada les importa sabotear el movimiento de resistencia destinado a derrocar a la Junta. Piensan, una vez más, utilizando el falso apoyo de la URSS y de otros países revisionistas al pueblo chileno y el abundante dinero que ellos proporcionan para los activistas que sirven a su política, para esforzarse (también una vez más) por amarrar a la directiva del PS y a través de dicho partido al resto de la UP, a sus planes de plegarse al reemplazante que busca el imperialismo a la Junta.

Es así como de hecho (dada la evolución de los partidos opuestos a la Junta que hemos analizado), han surgido dos líneas opuestas respecto a cómo encarar la dictadura militar. Por un lado, se da la línea de todas las fuerzas honestas de la UP y de fuera de ella, que están por la formación de un frente anti-dictatorial amplio, unido en torno a una plataforma común (en la que todos ponen como centro la destrucción de la máquina represiva que oprime al pueblo chileno); que se proponen movilizar a las amplias masas (inclusive a las demócratas cristianas) para, a través de las más diversas formas de lucha, incluyendo la lucha armada de masas, **derrocar** a la Junta Militar. Esta línea presupone la organización clandestina y unitaria de los sectores avanzados de las masas en comités de resistencia (u otras formas) y el aprovechamiento de todas las formas orgánicas abiertas posibles bajo la dictadura, con este propósito. Presupone, centrar el peso principal de la acción contra la dictadura dentro del país y considera el apoyo internacional como un complemento indispensable, pero secundario.

1.— La Línea Capitulationista del P“C”.

Por el otro lado está la línea preconizada por la dirección del P“C” (y por los soviéticos a través de ella), de hacer todas las concesiones que puedan ser exigidas, para lograr que un equipo aceptable para los militares y para el imperialismo, reciba el gobierno e inicie la farsa de exhibir un cierto restablecimiento de garantías democráticas burguesas. Por cierto, con el garrote de las FF.AA., detrás de ellos. Quienes propician esta “solución” frente al gobierno militar cada vez más aislado, se han opuesto públicamente a la formación de comités clandestinos unitarios de resistencia, que puedan imprimir a la lucha de masas una orientación tendiente a derribar a la Junta. Continúan sembrando esperanzas en las FF.AA., presentándolas como “arrepentidas” de lo que han hecho e insistiendo en que fueron apartadas de su papel “meramente profesional” por un pequeño

grupo de traidores. Ponen, además, el centro de la actividad "contra" la Junta, en el terreno internacional y siembran ilusiones de que el gobierno norteamericano ayudará a remover la dictadura militar, si se le ofrecen ciertas garantías. En esencia, aspiran, a corto o largo plazo, a que el imperialismo yanqui y sus agentes, les otorguen nuevamente "un lugarcito bajo el sol" en Chile.

Las razones profundas de esta postura política de la dirección del P" C", no reside sólo en su sometimiento a la estrategia para América Latina del social-imperialismo, sino a las características del proyecto de capitalismo de Estado, que anhelan implantar en nuestro país. En esencia, si bien desean el desplazamiento de la Junta, con la esperanza futura de recuperar, paso a paso, su actividad legal en Chile, ante todo y por sobre todo, **se están jugando por impedir que la Junta sea derrocada por el pueblo en armas.** El sabotaje a esta última alternativa es más importante para la directiva del P" C", que la obtención misma de un gobierno burgués pro-yanqui con tendencia a restablecer en Chile ciertas garantías democráticas. Este último, no es más que la salida lógica para impedir lo anterior; así como el freno a la lucha por derrocar a la Junta, es una de las condiciones para lograr un recambio relativamente estable. Las razones de esta política son evidentes y, básicamente, las mismas que los llevaron durante el gobierno de Allende a sabotear toda lucha popular destinada a aplastar a los golpistas y a su instrumento: las FF.AA. reaccionarias. Un pueblo que derroque a la Junta Militar y que destruya el instrumento armado de los intereses más reaccionarios, particularmente hoy día con la experiencia adquirida por el pueblo acerca del reformismo y del fascismo, tornaría para los dirigentes del P" C" poco menos que imposible la instauración del capitalismo de Estado, que constituye su meta estratégica. Tornaría muy difícil el sistema de ingerencia conjunta de ambas super-potencias en Chile, que tienen por misión desarrollar los falsos comunistas chilenos, a través del pacto DC-P" C".

En la actualidad, ante el rechazo de Pinochet y de su equipo a la alternativa freista, los dirigentes del P" C", incluso, han rebajado sus objetivos. Ante la alternativa propuesta por Frei, al menos, reclamaban no ser dejados de lado y que se les aceptara entre las fuerzas destinadas a reemplazar a la Junta. Hoy no piden ni siquiera eso. Lo plantean como un anhelo, pero están dispuestos a unirse con la DC (con prescindencia de qué sector la encabece), en torno al sólo objetivo de terminar con el gobierno de la Junta. En efecto, en un reciente documento de la dirección del P" C" (septiembre de 1976), realizan tres proposiciones, básicamente a la DC, estableciendo que la primera de ellas tiene prioridad absoluta y no está condicionada a un acuerdo sobre las otras dos. Allí se señala: "ya que estamos en contra de la dictadura, actuemos juntos sólo para terminar con ella; y una vez logrado esto, dejemos que el país decida su futuro y elija a sus gobernantes a través de algún procedimiento democrático, sin ningún compromiso previo entre nosotros". Y agregan: "Si hubiera acuerdo sólo para este efecto, y nada más, habría que concretarlo". Conocida es la posición "anti-Junta" del equipo que dirige en la DC y que contribuyó activamente al golpe de Estado. Sólo aspiran a salvar la imagen de la dictadura burguesa y el prestigio del imperialismo, prestándose como fachada "democrática" de las FF.AA. Jamás han pensado en plegarse a un movimiento tendiente a derrocar a la Junta, que prive a los sectores ultra-reaccionarios de su instrumento armado para restablecer en cualquier momento la dictadura militar. El P" C" en su documento, con ciertas precauciones en la forma literaria para no espantar a sus aliados de la UP, deja entender claramente que ellos están también por un reemplazo de la Junta y no por su derrocamiento. Señalan que "la dictadura se mantiene en pie y hace cuantas fechorías es posible, más que por la fuerza de las armas (óigase bien) por la dispersión de las fuerzas democráticas". Ya antes habían señalado en el mismo documento que "en el seno del Ejército, de la Marina, de la Aviación, de Carabineros, es patente el descontento y se observa el deseo de que cuanto antes, se termine con la represión, se cierren los campos de concentración y se libere a los presos políticos", ya que, esta actividad represiva (inotable tesis marxista!) "no tiene nada que ver con la verdadera función de las instituciones armadas". (191) ¿En qué puede consistir, pues, este compromiso prioritario ofrecido por la dirección del P" C" a Frei (e indirectamente a través de él, a los militares), a objeto de terminar con esta política represiva "ajena a la función de las instituciones armadas" y que éstas desean "cuanto antes" terminar? No se trata, obviamente, pues se plantea como incondicional, de un acuerdo contra los inte-

reses que impulsaron el golpe. No se trata de un acuerdo de lucha para derribar al régimen fascista. No se trata de un acuerdo con un sector político que desee y esté dispuesto a gobernar con el P“C”, y éste, por lo demás, está muy lejos de exigirlo. ¿Qué le ofrece, pues, en concreto como aporte a esta alianza la directiva del P“C” a Frei y a los militares que, puesto que no van a ser derribados, deben aceptar el traspaso del mando? Sin duda, lo que les ofrece tácitamente (tácitamente en el documento por lo menos), es poner todo su empeño y el de los aliados que logre arrastrar a esta innoble maniobra, **para frenar toda lucha de masas, que puede justificar la represión militar, a cambio de retornar a una actividad política tolerada.** Es decir, ya ni siquiera pretenden la alianza con la DC, como en el pasado, presionando a través de su influencia de masas, e incluso, a través de algunas luchas, para co-gobernar con ella. Lo que ofrecen es su capacidad para desmovilizar a las masas y eso sólo a condición de una promesa futura de hacerlo dentro de la ley. Luego, obtenida la posibilidad de demostrar su servilismo y su buena conducta, aspiran, a las otras posibilidades planteadas en el documento. Es decir, a llegar a un acuerdo acerca del sistema político a implantar en Chile y aún, si es posible, a gobernar en conjunto con la DC, dirigida por el sector más servil al imperialismo. Estos dos últimos aspectos, sin embargo, son sólo aspiraciones, formuladas como lo que se “podría” hacer, sobre la base del buen éxito del primer compromiso.

Esta nueva y más profunda medida capitulacionista de los dirigentes del P“C” se da, justamente, cuando la Junta Militar se encuentra extremadamente aislada, nacional o internacionalmente y el país sumido en una crisis económica catastrófica. Es decir, en los momentos en que su base social de apoyo se reduce aceleradamente, tendiendo a 0. En circunstancias en que los sectores de las que la Junta puede esperar obediencia por ascendiente e influencia son mínimos y en que sólo puede imponer su voluntad mediante el terror y la represión. En suma, cuando se dan excelentes condiciones para transformar el descontento generalizado en oposición resuelta, y esta oposición en lucha por el derrocamiento de la Junta fascista. En tales circunstancias, (agravadas para la Junta con el triunfo de un Demócrata en EE.UU.) y calculando que los militares fascistas necesitan imperiosamente una salida, que les permita sin ser destruidos, reganar mediante el engaño y la demagogia una base social más amplia de apoyo, aunque sea a través de un sedicente “opositor” a ellos como Frei, la dirección del P“C” se apresura a ofrecérselas. Vuelven a tentar a los militares con la “solución Frei”, garantizándoles que, a cambio de ella, se empeñarán a fondo por frenar el odio de las masas populares contra el fascismo y sus tropelías, sin exigir otra condición, que la entrega del gobierno a alguien (como Frei u otro) con el que puedan transar de un modo menos desvergonzado que con la Junta misma. Sin embargo, su interlocutor de fondo es la Junta, así como el imperialismo y sectores ultrareaccionarios que la han impuesto, ya que Frei y quienes con él dirigen la DC, jamás han pensado ni deseado derrocar a los militares, ni eliminar su presencia armada.

Conociendo la actividad del pasado de los revisionistas, es fácil imaginarse lo que harán una vez obtenido un tal gobierno “democrático”, que reemplace a los militares. Levantarán, cada día ante el pueblo, el fantasma del retorno del fascismo como pretexto para frenar todas sus luchas; esgrimirán la profunda crisis económica del país, como argumento para llamar a los trabajadores a hacer sacrificios por la reconstrucción del país y a postergar todas sus reivindicaciones; aceptarán la represión sangrienta de cualquiera lucha, como expresión del “ultra-izquierdismo”, verdadero culpable (según ellos) de que se haya implantado el fascismo. En resumen, se esfuerzan por demostrarlo a los militares, que no exigirán a Frei o a quien elijan para reemplazarlos, que gobierne con ellos y que, no obstante esto, cooperarán a frenar cualquier desborde de las masas.

De hecho la política de sabotaje a la resistencia y de paralización de los partidos que integraban la UP, que efectúan tales dirigentes aprovechando la influencia que allí conservan y especulando con una “unidad” mal entendida, sirve al propósito de permitir a la Junta el “parto sin dolor” de un nuevo gobierno, que los salve y les ofrezca garantías. Frenando la lucha por derrocar a la Junta, oponiéndose a la formación de comités de resistencia, ocultando los avances de la protesta popular y poniendo de relieve, para aterrorizar a las masas, sólo las torturas y la represión, se empeñan en mostrar que no existe ánimo del pueblo para derrocar a la Junta y que, por lo tanto, es necesario aceptar una “solución” negociada.

A objeto de instrumentalizar al máximo de fuerzas en su política capitulacionista, emplean el soborno de dirigentes, el asilo en países controlados por el revisionismo, el financiamiento de costosos viajes a activistas, el otorgamiento de trabajo en los países capitalistas donde tienen influencia a través de otros partidos pro-soviéticos, y, en general, todos los recursos propagandísticos y económicos que los otorga el social-imperialismo y sus cómplices. Mientras más aislados y repudiados se encuentran por las bases de los partidos de la UP y por sus propias bases, más se esfuerzan por montar farsas de reuniones "unitarias" de la ex-UP y por sacar declaraciones conjuntas en la superestructura, con dirigentes que no comprenden o no les conviene comprender de qué modo así están sabotando un verdadero movimiento unitario destinado a aplastar a la dictadura. Así, mientras la resistencia avanza a pesar de tales dirigentes y por la actividad de la militancia desde la base, tenemos la Declaración de Budapest, la Declaración de Berlín, la Declaración de México y otras. La más reciente, en septiembre de 1976, es la Declaración de Belgrado. Estas declaraciones, de hecho, aunque no pueden menos que reflejar ideas de las bases de los partidos y de las masas, opuestas a la capitulación que impulsan los dirigentes del P"C", al no desmascararlos les sirven de cortina de humo a su actividad destinada a paralizar toda lucha y a especular a nombre de la UP, buscando la transacción con politicastos reaccionarios como Frei. Dichas declaraciones, además, por la necesidad de ser "unitarias" con quienes no están de acuerdo en movilizar al pueblo por el derrocamiento de la Junta, en lugar de constituir una clara orientación a la lucha popular anti-fascista, son necesariamente ambiguas y llenas de contrabando oportunista. En la última de ellas, por ejemplo, si bien se señala que "no puede cimentarse ninguna salida a la crisis chilena sobre la base del apoyo del imperialismo", al mismo tiempo, se critica la "solución Frei", como una "fórmula antiunitaria que postula una 'democracia restringida'", sosteniendo, luego, "que la pretensión de prescindir de cualquiera de los partidos de la izquierda significa mantener vivas las raíces que sostienen a la Junta", como si su reemplazo por Frei no significara de hecho mantener esas raíces. Señalan más adelante, (retrocediendo al respecto en análisis hechos por la dirección del PS y de otros partidos), que el gobierno de la UP fue derrotado "por la inexistencia de una estrategia común en las fuerzas aliadas", sin precisar lo que habían dicho, que tal "unidad" plena en torno a la línea preconizada por los falsos comunistas, habría conducido con más celeridad aún al fracaso o a la rendición total al freismo DC.

La declaración mencionada, luego de hacer concesiones a quienes anhelan y están empeñadas en combatir por derrocar a la Junta, admitiendo que hay que utilizar "todas las formas de lucha necesaria sin excluir a priori ninguna para aplastar al fascismo", y aceptando los comités de base de la resistencia, que pese al rechazo revisionista ya existente, dejan, al mismo tiempo, el campo abierto a las negociaciones con la DC comandada por Frei. A nombre de no prolongar "el martirio de Chile", proponen "a los demócrata-cristianos y a todos los antifascistas constientes, la acción común en la lucha contra la dictadura en los más diversos campos". Y agregan ex profeso para dejar más en la penumbra si el pacto de acción común que proponen es con los militantes demócratacristianos o con el PDC hegemonizado aún por Frei: "Aunque dentro de la DC hay distintos pensamientos y un grupo de sus dirigentes apoyó el golpe, lo decisivo es que la inmensa mayoría se coloca contra la Junta". Se "olvidan" aquí de que Frei y su equipo, no representan simplemente "un grupo de dirigentes" cualesquiera... que "apoyó" a la Junta, sino el grupo que dirige al PDC y que sólo aspira a sustituir a la Junta sin derrocarla. Termina, por último, la declaración, sospechosamente, planteando la "unidad de acción inmediata" tan sólo para poner término a la Junta, al igual que la dirección del P"C", condicionando con "podemos" y "debemos" la unidad para asuntos más de fondo, es decir, justamente, la lucha contra los sectores de clase que impulsieron la dictadura. En suma, con algunos retoques y concesiones secundarias destinadas a evitar el desbande completo de las fuerzas de la UP, el último documento no parece ser otra cosa que un esfuerzo para arrastrar a dicha coalición y al MIR (con el cual se está hablando al respecto), a la línea de la dirección del P"C".

2.— La Junta fascista puede y debe ser derrocada por el pueblo.

El pueblo de Chile y, muy especialmente, su clase obrera, tienen antiguas tradiciones de organización y de lucha. No ha sido casual que las FFAA reaccionarias hayan debido realizar numerosas y brutales masacres para frenar esas luchas y una represión sistemática de las tendencias revolucionarias. Por otra parte, el pueblo de Chile, ha realizado a través de sus luchas la conquista de importantes reivindicaciones y de derechos democráticos hoy anulados por completo por la dictadura y super-explotación fascistas. Los protagonistas fundamentales de esas luchas: las masas populares, están en Chile y no se resignarán jamás a la opresión de la dictadura y al feroz retroceso que ésta les ha impuesto en sus condiciones de vida, al hambre y la miseria reinantes. Han debido replegarse ante la brutalidad de la represión, para enfrentar a la cual, se encontraban carentes de los medios necesarios a causa de la influencia derrotista y paralizante de poderosas corrientes oportunistas. Si bien la lucha de masas durante el gobierno de la UP alcanzó un alto nivel de amplitud y combatividad, no logró —por dicha influencia oportunista— fundirse con una ideología y una conducción revolucionarias, capacitándose para aplastar a las fuerzas reaccionarias. Para valorar esa potencialidad de lucha del pueblo chileno y las perspectivas que ella ofrece, orientadas por una ideología revolucionaria como arma fundamental para lograr el derrocamiento de la Junta Militar, es preciso recordar algunas de las características que ella tuvo durante el gobierno de la UP e, incluso, ya antes, en el gobierno demócrata-cristiano.

En el avance impetuoso de dichas luchas, influyó tanto la demagogia populista levantada por el gobierno demócrata-cristiano, como la demagogia todavía más intensa —pues se disfraza de socialismo— puesta en práctica por la UP y su gobierno. Por un lado, en el período de la UP, influye el mejoramiento en las condiciones de vida de las masas trabajadoras, que se da en el primer año del gobierno de Allende; y, en contraste con ese mejoramiento, influye todavía con más fuerza en la combatividad popular, la intensa crisis económica que, a partir de 1972, comienza a recaer sobre el pueblo. A estos factores materiales de signo opuesto, se suma, durante el gobierno de Allende como incentivo a la lucha, el importante estímulo moral que reciben los sectores explotados, en virtud de los serios golpes que recaen sobre los explotadores principales, a raíz de las expropiaciones del gobierno. Estos golpes, junto con generar en muchos la creencia de que verdaderamente se trataba de un gobierno dispuesto a establecer el socialismo, alienta el espíritu combativo de vastos sectores. Incluso en el campo o, mejor dicho, especialmente en el campo, donde había predominado por siglos el espíritu despótico y prepotente de los latifundistas, los campesinos se sienten estimulados a desafiarlos. No sólo les arrebataban importantes conquistas materiales, entre ellas la tierra misma, sino que los desafían en sus fueros y prerrogativas semi-feudales: les niegan el saludo, a menudo los encierran en locales del fundo, invaden sus casas o jardines privados, los insultan, les imponen prohibiciones y, en general, toman el desquite por años y años de humillaciones. Otro importante factor del auge de la combatividad popular, fue el hecho innegable que el gobierno de Allende, se negó a hacer uso de las formas más brutales de represión aplicadas contra el pueblo por los gobiernos anteriores. Este es, precisamente, uno de los aspectos que no le perdonaba la oposición reaccionaria y el imperialismo norteamericano y que tuvo, por lo mismo, una influencia decisiva en los propósitos de derrocarlo al más breve plazo posible.

Como hemos señalado, el auge de la combatividad de las masas, se da especialmente en el campo. Ello se debe, a que existen contradicciones más agudas y de larga data y a que en las zonas rurales tenía menos peso la influencia paralizante de la burocracia sindical oportunista del P“C”. A modo de comparación podemos decir que, en 1969, coincidiendo con el comienzo de la demagógica política de reforma agraria del gobierno de Frei, se producen 118 ocupaciones de fundos. Ellas saltan en 1970, último año de dicho gobierno, a 365. No obstante, tan sólo en los 8 primeros meses del gobierno de Allende, tenemos 990 ocupaciones, es decir, un promedio de más de 4 por día. Estas luchas continuarían en pleno ascenso durante todo el gobierno allendista.

No obstante, las luchas masivas durante el gobierno de la UP, no se limitan al campo. En las ciudades se popularizan, así mismo, las “tomas” como procedimiento de acción. Centenares y centenares de industrias y otras empresas, son ocupadas por sus trabajadores, ya sea para solicitar su expropiación, ya sea en apoyo de reivindicaciones que se recla-

man al sector patronal. Las ocupaciones cuentan, frecuentemente, con el apoyo logístico (coordinado en los Cordones Industriales y Comandos Comunales) de los trabajadores de las empresas vecinas. Esto mismo ocurre en el campo, donde cada ocupación cuenta con la solidaridad y apoyo efectivo (en su materialización y defensa posterior) de los fundos vecinos. Las ocupaciones de fábricas, que fueron sólo 23 en 1969, pasan a 155 en 1970 y a 513 en los primeros 8 meses del gobierno de Allende. A raíz de los paros patronales, como el de 1972 y 1973, se produce la ocupación de, prácticamente, todas las industrias. En el campo, (así como en menor escala en las ciudades con las industrias), junto con la toma se organizan equipos de defensa dotados de armas elementales, que al menos en las zonas rurales son capaces de repeler a los grupos armados de latifundistas que intentan recuperar las tierras. Se utilizan, incluso, instrumentos de trabajo improvisados como armas, escopetas de caza y, en las zonas indígenas, hasta lanzas primitivas. En la región donde prima el campesinado indígena, el "Netuaiñ Mapu", dirigido por el PCR, cuando comienzan a efectuarse desalojos de tierras ocupadas utilizando a las fuerzas policiales armadas, emplea la táctica de entregar la tierra cuando es cercada por fuerzas superiores, para luego retomarla una vez que ellas se han marchado. En algunos lugares se producen hasta 4 ó 5 desalojos y retomas sucesivas, terminando, finalmente por triunfar los campesinos, pues obviamente, el gobierno no disponía de fuerzas armadas para proteger de un modo permanente su tierra a cada latifundista.

Junto con las ocupaciones de empresas y fundos se desarrolla, así mismo, la de terrenos baldíos en las ciudades por parte de los "sin casa", para construir una vivienda de emergencia. Estas acciones, aunque antes en menor escala, son de larga data en Chile, así como en otros países de América Latina. En estos países se va produciendo una acelerada y progresiva concentración de población en las ciudades y, particularmente, en las capitales. Ello no se debe a un impetuoso desarrollo de la industria, como ocurrió en los grandes países capitalistas, sino, fundamentalmente, a la intensa crisis de una agricultura pre-capitalista, que obliga a emigrar a la población del campo. Se van constituyendo así, en la periferia de las ciudades, "cinturones" de poblaciones miserables ("Villas Miseria" en Argentina, "Fabelas" en Brasil, poblaciones "Callampas" en Chile), con hacinamientos de "casas" hechas de cartones, latas y maderas viejas, por los propios invasores. En la post-guerra, la intensificación de la explotación imperialista y la profundización de la crisis, obliga a los propios obreros urbanos y aún a empleados, que no están ya en condiciones de alimentarse y al mismo tiempo de pagar un arriendo por ínfimo que sea, a incorporarse, a estas poblaciones de emergencia o a invadir nuevos terrenos. Conviven allí con el lumpen-proletariado y con campesinos que arriban en busca de trabajo. Una de las primeras luchas de envergadura de los "sin casa" en Chile, se da en el mes de enero de 1969, en que un grupo de 300 familias (casi dos mil personas), ocupan terrenos baldíos y construyen con sus propias manos el campamento que llevará como nombre el del día de la ocupación: "26 de Enero". Las ocupaciones prosiguen durante todo el gobierno de Frei. Precisamente una de las sangrientas masacres perpetuadas por éste, fue contra ocupantes de terrenos para viviendas en la provincia sureña de Puerto Montt.

Durante el gobierno de Allende, se instalan del modo descrito decenas y decenas de campamentos "callampas", que unidos a los Cordones Industriales vecinos habrían de transformarse en importantes centros de lucha constituyendo los Comandos Comunales, en los que hubo resistencia, incluso, contra el golpe de Estado, lo que motivó que muchos fueran brutalmente bombardeados y arrasados por los militares. Así mismo, durante el gobierno de la UP, se origina un movimiento por la "toma" de viviendas recién construidas. No obstante, la mayor parte de esas ocupaciones son incitadas por la DC para crear problemas al gobierno, ya que se trata en general de viviendas destinadas a obreros, empleados o sectores medios. El Presidente de la Cámara de la Construcción, controlada por elementos de la oposición, habla el 1 de diciembre de 1970, de 5.700 viviendas (entre ellas 1.700 pertenecientes al sector privado), ocupadas en los meses inmediatamente anteriores al gobierno allendista y hasta el 24 de noviembre de ese año.

La lucha con ocupación de locales se extiende, así mismo, al medio estudiantil, donde es utilizada también por la oposición, generándose agudos enfrentamientos a raíz de sucesivas "tomadas" y desalojos. Casi no se concibe una acción reivindicativa, durante el gobierno de la UP, sin la respectiva "toma" del establecimiento en conflicto y luego, de los

caminos, calles y lugares de acceso a él, donde se instalan barricadas. Hasta uno de los movimientos católicos de izquierda, llamado la Iglesia Joven, se inicia nada menos, que con la ocupación de la Catedral de Santiago.

La Dirección General de Carabineros, en Informe entregado a petición del Senado, consigna el 1 de Julio de 1971, que durante ese año y hasta el 15 de junio, es decir, en cinco meses, han sido tomados: 658 fundos, 339 industrias, 154 establecimientos educacionales y 218 terrenos urbanos, poblaciones ya construidas y edificios de departamentos.

Esta magnífica combatividad de las masas que se desarrolla incitada por el triunfo de la UP, de carácter y orientación bien diferente, por cierto, a las movilizaciones patronales y "gremiales" promovidas por la oposición, tendrá una influencia decisiva (no siempre reconocida por los analistas póstumos de dicha experiencia) en el destino que ella habría de correr. En el temor a esta movilización de masas, lo que apresurará la unión de las fuerzas de oposición para derribar al gobierno, aún más que las reformas puestas en práctica. Es el peligro potencial que ella representa, uno de los motivos principales por los que la CIA y el Departamento de Estado, acelerarán los planes de golpe de Estado en Chile. Son la pérdida de control creciente sobre ella y la incapacidad para frenarla, los que determinarán la política cada vez más abiertamente oportunista y conciliadora de los falsos comunistas y de sus seguidores en la UP.

La verdad es que, la combatividad popular que se desarrolla (muy a pesar de sus dirigentes) a través de la experiencia reformista de la UP, generó una posibilidad concreta de que el pueblo conquistara el poder, aplastando a las fuerzas armadas y no armadas que se le oponían. Ello habría sido posible, si a la cabeza de esas luchas se hubiera colocado una auténtica dirección proletaria, fundiendo el marxismo-leninismo con el ímpetu combativo de las masas. Dicha orientación tendría que haber conducido al movimiento de masas a romper con la corriente oportunista dominante en la UP; a pasar por encima de su constante freno a la lucha de masas; a comprender claramente cuales eran sus enemigos fundamentales y sus falsos amigos y cuales eran las armas con las que había que prepararse para derrotarlos. Más que por el frágil control del poder Ejecutivo por el reformismo, por el aprovechamiento que el pueblo hizo de ello para desplegar sus luchas, se puede afirmar que el gobierno de la UP representó una posibilidad bastante próxima para el pueblo de conquistar el poder y defenderlo. Esa posibilidad, temida por el imperialismo y las fuerzas más reaccionarias y temida también por quienes anhelaban implantar el capitalismo de Estado, se frustró por la fuerte influencia de masas del oportunismo revisionista, por los errores de los sectores pequeño-burgueses que se le pusieron dentro y fuera de la UP y por la incapacidad de los auténticos marxista-leninistas para derrotar estos obstáculos y ponerse a la cabeza de la lucha de masas.

Uno de los objetivos permanentes de la política de los falsos dirigentes "comunistas", a la que lograron arrastrar al propio Presidente Allende y a otras fuerzas políticas, fue el de oponerse tenazmente a las iniciativas y luchas del pueblo. Llevaron a tal extremo esta política de conciliación, que la propia oposición reaccionaria logró un relativo éxito, encabezando demagógicamente algunas de estas luchas. Si los dirigentes del P"C" no reprimieron brutalmente estas acciones de masas, como lo hacen sus mentores ideológicos en Polonia, la URSS, Checoslovaquia, etc. es tan sólo porque enfrentaban los fuegos de una oposición extremadamente agresiva y temieron que ella capitalizara en mayor escala esas luchas. No obstante, como hemos visto, utilizaron también las formas tradicionales de represión y de haber consolidado sus posiciones lo habrían hecho, sin duda, con la misma o mayor ferocidad que los antiguos explotadores.

Sin embargo, al no poder reprimir abiertamente como habrían deseado, redoblaron sus esfuerzos propagandísticos para oponerse a las luchas de masas y a toda manifestación de iniciativa y combatividad de ellas. El propio Presidente Allende, intenta convencer a los latifundistas agrupados en la Sociedad Nacional de Agricultura, del papel que juega su gobierno garantizando un proceso legal de reforma agraria y librándoles de lo que resultaría si se desataba el espíritu de lucha de los campesinos. Entrevistas con ellos, celebrada a mediados de diciembre de 1970, les señala: que lo "que le interesaba era que los agricultores tuvieran cabal conciencia de que su gobierno representaba un cauce destinado, no a hacer diques, pero si canal para conducir justas rebeldías sociales, que de no existir nosotros —agregó— estallarían en forma violenta, como ha ocurrido en otros países. Y aunque

no se nos crea —concluye— sin ser y nunca lo seremos, factor de defensa del status que-remos que se entienda que nuestra presencia permite llevar las cosas de acuerdo a nuestra tradición, nuestra historia, nuestra idiosincrasia” (192). Por lo visto, los elementos reaccionarios, tenían una idea bien diferente de la capacidad del gobierno para frenar la lucha popular, así como de dicha tradición, historia o idiosincrasia, pues no trepidaron ellos mismos en destruirlas para proteger sus intereses y detener las luchas populares.

Por cierto, que los dirigentes del P“C”, estuvieron a la cabeza de todas las iniciativas y acciones tendentes a frenar las luchas, tanto urbanas como campesinas. Respecto a estas últimas, aparecen el 14 de febrero de 1971, en *El Siglo*, declaraciones de Luis Corvalán, en las que señala: “No. Nosotros no justificamos esas tomas (se refiere a la ocupación de fundos). Nos explicamos el problema, comprendemos que si los campesinos de alguna región y los mapuches del sur participan en tales acciones es porque hay un drama allí, una situación social que no puede dejar de tomarse en cuenta. Pero la opinión del PC no es favorable a la toma de predios en las condiciones del gobierno popular”. Y agrega: “Ningún partido de la UP está impulsando esas tomas y lo que yo sé, tampoco las impulsa oficialmente el MIR. Es posible que algunos elementos suyos, que escapan al control de su directiva, y no se si elementos de otras colectividades de izquierda, estén participando en esas acciones. Sean quines sean quines las impulsen a nosotros nos parece un error. A nosotros nos parece que hay que terminar rápidamente con esta situación”.

Poco más adelante, el 25 de febrero, el mismo periódico publica partes de la intervención de Corvalán en el Senado sobre las ocupaciones de tierras. Allí se deshizo en explicaciones ante los parlamentarios representantes de los latifundistas al respecto, diciendo: “En Cautín intervinieron el gobierno y la UP para que no se continuara allí el proceso de tomas que estalló hace algunas semanas. Que en el caso en referencia han participado algunos elementos de izquierda o ultraizquierda es de todos conocido. Pero quiero agregar que según mi información, el propio MIR, oficialmente ha llegado a la conclusión de que no debe seguir por ese camino. De ello se desprende que serían o pueden ser elementos que escapan a los controles de esa organización”. Y agrega, para tranquilidad de los terratenientes allí representados: “Se está empeñado, pues, en esa dirección (el freno a las luchas campesinas). Nosotros particularmente los comunistas, estamos por hablar francamente a los campesinos, explicarles nuestra posición y señalarles que, desde el punto de vista del éxito del proceso de reforma agraria, es un error seguir por ese camino”. En esa misma Sesión del Senado, la Senadora socialista, María Elena Carrera, leyó una declaración de una Federación campesina de la provincia de Colchagua, en la que justifican la toma de tierra. Lo hacen, no sólo denunciando diversas arbitrariedades de los terratenientes en contra de los campesinos, sino que: “la existencia de muchos fundos que están saboteando la producción. No preparan las siembras para este año, con lo cual se aumentará la cesantía y se producirá un mayor gasto de dólares en la importación de alimentos. Denunciamos —agregan, además— que en la provincia se producen reuniones nocturnas. Llegan aviones extraños con bultos a los fundos, muchos de los cuales tienen canchas de aterrizaje. Por eso —concluye la declaración— nos hemos tomado los fundos, para defender la producción y el gobierno”. Terminan solicitando la aceleración de la reforma agraria, “para solucionar nuestros problemas y asegurar la producción para el próximo año”, así como: “la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado a los patronos sediciosos que boicotean la producción”. ¿Cuál es la reacción de Corvalán, frente a esta magnífica lección de vigilancia y espíritu clasista que le dan los campesinos? La que era de esperar: utiliza la declaración para continuar tranquilizando y dando serviles explicaciones a los representantes de los latifundistas. Señala: “Los antecedentes que ha dado a conocer la Honorable Senadora Sra. Carrera confirman lo que yo he sostenido en el sentido de que estas ocupaciones no son tantas. Por lo tanto no puede justificarse el verdadero sabotaje de ciertos sectores terratenientes”. Y agrega: “Respecto a que la UP no está impidiendo estas tomas, debo manifestar que lo ha hecho hasta tal extremo, que en la provincia de Colchagua, por ejemplo, como lo ha referido la Honorable Sra. Carrera, se dieron las condiciones para que en 3 ó 4 días estuviesen no sólo 20 ó 28 fundos de la zona tomados, sino 300. Esto era en ánimo de los trabajadores. Los partidos del UP y en especial el PS por tener más influencia en la zona, impidieron que las cosas fueran más adelante. Estos son hechos concretos”. ¡Y se supone que el que dijo todo esto es “marxista” y “comunis-

ta!"...

Los círculos oficiales del gobierno de la UP, inspirados por ese "marxismo" de Corvalán y los suyos, al igual que el aprendiz de brujo, no hallaban que hacer con las fuerzas que habían contribuido a desatar. Le temen a la movilización de las masas y confían en cambio, que su sometimiento estricto a las leyes e instituciones burguesas y el espíritu "constitucionalista" y "profesional" de las FF.AA, son los factores claves que les permitirán expropiar al imperialismo, a la gran burguesía y a los terratenientes. Mientras la prensa de oposición chillaba con histerismo: "guerrillas", "grupos armados" en el campo, el gobierno trata de restarle importancia a las luchas campesinas y se esfuerza al mismo tiempo por frenarlas. El 22 de enero de 1971, la Sociedad Nacional de Agricultura, denuncia con espanto, que desde el comienzo del gobierno de Allende han sido ocupados 250 fundos. El Ministro del Interior, José Tohá, a quien "suicidarían" más adelante sus torturadores de la Junta Militar, declara: "el gobierno no aceptará bajo ningún concepto que en Chile, en cualquier región del país, existan grupos armados que pretendan organizarse al margen del orden y de la seguridad". Y solicita a los parlamentarios de oposición que afirman su existencia, que entreguen al gobierno los antecedentes concretos sobre ellos, pues "no seremos remisos en actuar". La segunda autoridad del mencionado ministerio, Daniel Vergara, Subsecretario del Ministerio del Interior, y miembro prominente del P"CC", se transforma en el blanco favorito de los ataques y burlas de la oposición, por su política "del avestruz" frente a las luchas campesinas, a las que niega sistemáticamente su importancia y aún su existencia misma. Esta actitud se mantendrá, no sólo durante el primer año de gobierno cuando aparentaban tener éxito las medidas legales e institucionales del Ejecutivo y no aparecían tan evidentes los planes sediciosos de la oposición, sino, hasta el momento mismo del golpe. En los meses anteriores a éste, como hemos señalado, el apaciguamiento se transforma incluso, en una prédica todavía más activa, concretándose de hecho en francos llamados a la capitulación frente a los golpistas. El pueblo y sus luchas, no cuentan para los ideólogos "marxistas" de la UP, son un estorbo a la conciliación con los enemigos fundamentales a través de la cual se intenta "salvar" al gobierno. No cuentan, ni siquiera cuando el avance golpista en las FF.AA. es evidente y cuando la oposición se dá el lujo de salir a la calle a realizar manifestaciones masivas.

Si como hemos señalado, la combatividad de las masas populares chilenas y, muy especialmente, de su clase obrera, abrieron una posibilidad real de conquistar el poder para el pueblo durante el gobierno de Allende, en el presente, esa combatividad será el instrumento fundamental para el derrocamiento del fascismo. Desde el golpe mismo, pese al terror, a la paralización inducida por el oportunismo, al asesinato o encarcelamiento de numerosos dirigentes de masas, ella se ha comenzado a abrir paso de mil maneras. No le ha permitido a la Junta adoptar posturas demagógicas, no le ha permitido forjar entre los trabajadores organismos adictos al fascismo, no le ha permitido mejorar su imagen en la represión, no le ha permitido, siquiera en más de tres años, levantar el toque de queda en los coches. Pese a la ferocidad de la dictadura ha habido huelgas, sabotajes, protestas públicas, propaganda clandestina, castigo a los delatores, negativas masivas a pagar servicios públicos y otras expresiones de lucha anti-fascista.

3.— Es preciso forjar una dirección unitaria a las luchas.

Para desarrollar las luchas del pueblo y elevarlas a un nuevo plano de resistencia masiva y organizada contra el fascismo, es preciso poner en tensión a todas las fuerzas políticas consecuentemente anti-fascistas, coordinar su actividad y unificar sus criterios para la creación de un vasto frente anti-fascista. Tanto el PS como el MAPU, IC, JR, MIR, PCR, así como numerosos sectores de base del P"CC" y de la DC, han manifestado su deseo de combatir y coordinar esfuerzos para impulsar las luchas destinadas a derrocar a la Junta. La mayor parte de esas fuerzas políticas han formulado programas mínimos coincidentes en lo esencial, destinados a unificar del modo más amplio a todos los sectores opuestos a la dictadura. Programas que reclaman el establecimiento de las libertades públicas y de los derechos populares; que plantean el derrocamiento de la dictadura y la destrucción de sus instrumentos represivos; que exigen el mejoramiento de las condiciones de vida del pue-

blo; que reclaman medidas drásticas contra los sectores latifundistas, contra los monopolios capitalistas y contra el imperialismo norteamericano, inspiradores del golpe, sostenedores del fascismo y beneficiarios exclusivos de su política. La mayor parte de esas fuerzas políticas están de acuerdo, ya sea por consideraciones tácticas o estratégicas, que en el momento presente es preciso centrar la lucha contra esos enemigos fundamentales y, particularmente, contra la dictadura que los representa. La mayor parte, así mismo, se ha pronunciado por promover para el derrocamiento de la dictadura, las más variadas formas de lucha de masas, legales e ilegales, incluyendo como la forma más decisiva la lucha armada popular. La casi totalidad de esas fuerzas políticas, si bien no todas ellas han llevado el análisis a fondo, están de acuerdo que el golpe fue posible por el predominio durante el gobierno de Allende de una corriente oportunista, que se negó a movilizar resueltamente a las masas y a armarlas, que sembró confianza en la posibilidad de un pacto con fuerzas en la que Frei mantenía una influencia decisiva; que difundió el mito del carácter "profesional" y "constitucionalista" de las FF.AA.; que exigió el respeto irrestricto a las leyes e instituciones del Estado burgués. La evolución de la mayor parte de los partidos anti-fascistas conduce a profundizar esas críticas y a acrecerse a una comprensión cada vez más clara de los errores que cometieron y de la naturaleza traidora y reaccionaria del revisionismo, cuya línea predominó en la UP. Existen, por lo tanto, condiciones más que suficientes para generar una dirección unitaria anti-fascista, que se ponga a la cabeza del anhelo de las masas de luchar y aplastar al fascismo y que desarrolle esos deseos y luchas, transformándolos en organización y en lucha generalizada contra la Junta.

Sin embargo, a más de tres años de la implantación de la dictadura y pese al anhelo de las bases de los partidos anti-fascistas de coordinar su acción para combatir, las directivas de ellos —arrastrados aún por la influencia del revisionismo, cegadas por el mito de una falsa unidad con quines no quieren luchar— continúan haciendo esfuerzos por resucitar a la UP a través de comunicados y por lograr la supervivencia del fascismo, enmascarado tras de Frei u otro de su calaña, que lo reemplace por una pseudo-democracia. En lugar de ponerse a la cabeza de las luchas, como lo reclaman las bases de los partidos y las masas populares, barajan fórmula tras fórmula, pretendiendo "sacar las castañas del fuego con la pata del gato", en lugar de impulsar la lucha masiva por el derrocamiento del fascismo. Siguen bajo la influencia o se dejan sobornar, por quienes se han rendido y han levantado bandera blanca ante el fascismo, sin siquiera comenzar la lucha en su contra; por quienes prefieren cualquier solución a la movilización combativa del pueblo para sacudirse del yugo no han sacado pues, las lecciones profundas de las motivaciones reaccionarias y no meramente "reformistas" y "equivocadas", que indujeron a los falsos dirigentes comunistas a oponerse a la resistencia de masas al fascismo durante el gobierno de Allende y a promover su capitulación. Dilapidan la generosa ayuda internacional, entregada por los sectores honestamente antifascistas para promover la resistencia y la lucha en Chile, en viajes y conciliábulos destinados a promover el "compromiso histórico" con los agentes del imperialismo, que anhelan los soviéticos y sus seguidores, a fin de impedir el alzamiento popular contra la dictadura. De este modo, comienzan a mostrarse cada vez más como cómplices de quienes anhelaban imponer al pueblo chileno su propio sistema de explotación disfrazado de socialismo, y no como víctimas del engaño revisionista.

Es perfectamente cierto, que se necesita la más amplia unidad de fuerzas políticas y sobre todo de masas, para derrocar al fascismo. Que es preciso, contar con las masas influenciadas por la DC y por el P"C". Sin embargo, esas masas y esas fuerzas políticas, sólo pueden ser útiles si son agrupadas para combatir por el derrocamiento de la Junta. ¿Qué sentido puede tener en beneficio del pueblo, el generar un amplio frente "unitario" tras un proyecto como el que impulsa la dirección del P"C", que ofrece la oportunidad al fascismo militarista de ocultarse tras una pseudo-democracia para volver a masacrar y reprimir al pueblo cuando lo juzgue conveniente? Por otra parte, ¿qué sentido tiene que las fuerzas que se han pronunciado por el derrocamiento del fascismo, frenen las posibilidades de dar un gran impulso a la lucha, generando un comando político dispuesto a marcar el paso en espera de un conciliábulo que constituye una nueva traición al pueblo?

Sin duda, la tarea del momento es forjar ese acuerdo político entre las fuerzas que están realmente por derrocar a la dictadura y ponerse cuanto antes a la cabeza de las luchas

del pueblo. Esa es la unidad que se necesita y no la unidad para capitular. Esa lucha resuelta, atraerá, sin duda, a las bases honestas de la DC y del propio P" C" al combate anti-fascista y aislará a las directivas, que hacen el juego a las superpotencias. Esa lucha acelerará la descomposición de las FF.AA. reaccionarias. Dicho acuerdo político para derribar a la dictadura, exige centrar la actividad en el interior del país; apoyarse mutuamente las diversas organizaciones para defenderse de la represión; canalizar la solidaridad en apoyo de la resistencia en Chile; centrar la propaganda en divulgar, fundamentalmente, los progresos de la lucha y no, casi exclusivamente, las torturas y la represión, como lo hacen los que quieren justificar la capitulación y cooperar con la Junta en aterrorizar al pueblo; exige discutir en conjunto las tácticas más efectivas de combate; el estímulo mutuo a la moral revolucionaria, para poner fin a las delaciones y al temor; la forma en que los militantes que han debido salir al extranjero, retornarán al país cuando existan posibilidades favorables. ¡Ya basta de prédicas a los que no quieren luchar contra el fascismo, para convencerlos que "están equivocados" y que deben dignarse a permitir la unidad para derribar al fascismo! ¡Hasta cuando se les va a tolerar que saboteen la unidad para combatir! Son estos enunciados señalados más arriba y otros de este tipo, los temas que debieran estar discutiendo las fuerzas antifascistas y no los procedimientos para ser aceptados por Frei u otro de su especie, que dé garantías a la Junta.

Sin duda, de una fructífera unidad de combate antifascista, surgirán las bases de acuerdo para avanzar a la cabeza del pueblo en el aniquilamiento de sus enemigos fundamentales y en la instauración del socialismo en Chile. A través de esa discusión y de esa acción deben ponerse al mando las verdaderas ideas proletarias respecto al futuro del país. En esa discusión y a través de la práctica de lucha conjunta contra el fascismo y contra los intereses que éste representa, se irá esclareciendo el carácter del régimen de Democracia Popular que es preciso instaurar, en avance hacia un auténtico socialismo. Allí se echarán las bases de un régimen, que debe contemplar una profunda democracia para el pueblo y una firme dictadura del proletariado, en alianza con otras fuerzas populares, contra los enemigos y explotadores principales del pueblo chileno. Dictadura, también, contra quienes, disfrazándose de revolucionarios e invocando falsamente al marxismo, pretenden abrir paso al capitalismo de Estado y a la penetración de la superpotencia social-imperialista. Es preciso asegurar que, a través de las fuerzas políticas que lo representan honesta y lealmente, sea en realidad el pueblo quien ejerza la dictadura contra sus enemigos de clase, al mismo tiempo, que garantiza una profunda democracia para sí mismo. Impedir, que se monte sobre las espaldas del pueblo una nueva burguesía burocrática que, a nombre de una falsa dictadura popular o proletaria, ejerza su propia dictadura contra el pueblo y el proletariado, en beneficio de sus intereses de nuevo grupo dominante. Es preciso definir y avanzar, además, en las conquistas futuras de un auténtico régimen socialista, profundamente diferente de la farsa de socialismo que existe en la URSS y en los países sometidos a ella, régimen en que, no sólo los medios de producción estén en manos del Estado, sino el Estado realmente en manos del proletariado. Esa definición y esa lucha por un auténtico régimen Democrático Popular, y, luego, Socialista, sin duda despertará el apoyo resuelto de las grandes masas populares del país. Sin duda, dejará sin base de sustentación a quienes como Frei hacen anti-comunismo, exhibiendo como tal a regímenes dictatoriales y de explotación, que hace ya mucho que dejaron de serlo y permitirá ganar a las masas engañadas por falsos dirigentes comunistas.

En esa lucha contra el fascismo, por la Democracia Popular y por el Socialismo, es preciso ir fortaleciendo la auténtica vanguardia del proletariado, el verdadero partido comunista, indispensable para el éxito de estas luchas. Este, no sólo debe ser vanguardia en el terreno ideológico, sino, arrebatando a las grandes masas de la influencia oportunista, del falso marxismo, poniéndose a la cabeza de sus luchas, debe constituirse en vanguardia efectiva del proletariado y del pueblo. Debe ser un partido de nuevo tipo, no sólo firme en su ideología y hábil y flexible en la táctica, sino, dotado de una profunda moral revolucionaria, que le sirva no sólo para resistir los golpes del enemigo y las duras condiciones de la lucha, pero, también, para servir de modelo anticipado al pueblo de lo que será el verdadero socialismo. Para ello no basta cultivar en sus filas las virtudes propias de la eficacia revolucionaria: como el valor, el espíritu de sacrificio, la iniciativa, la disciplina, la flexibilidad táctica y la firmeza en los principios y otras. Es preciso, que en el centro de su

moral revolucionaria, esté el concepto de SERVIR DE TODO CORAZON AL PUEBLO. No basta que esté preparado acerca de cómo conquistar el poder, sino que tenga una clara conciencia de para qué se conquista el poder. La insuficiente comprensión de que el poder se conquista para servir al pueblo, como instrumento de vanguardia y expresión de sus intereses, ha sido uno de los factores importantes en el desarrollo de falsos regímenes socialistas, que tanto han perjudicado el modelo del socialismo en la conciencia de las grandes masas del mundo entero. Más aún, incluso antes de conquistar el poder, la idea de que el principio supremo es "servir al partido" y a sus objetivos sectarios y no, por encima de todo, "servir al pueblo", representado en esencia por el proletariado, ha desligado a muchos partidos bien inspirados, de las masas y de su dirección revolucionaria.

La verdad dialéctica de que para transformar en profundidad y de un modo revolucionario la sociedad, no bastan meros cambios económicos y que quienes participan en ese proceso, y muy especialmente, quienes lo dirigen, deben transformarse a sí mismos y sacudirse de la influencia de la ideología y de la moral burguesa, es clave para el éxito y para el porvenir de la revolución. En la actualidad los problemas de firmeza en los principios marxistas y de la moral revolucionaria, han adquirido aún mayor relevancia. El retroceso hacia el capitalismo de Estado y en el caso de la URSS hacia el social-imperialismo, de países donde el proletariado había conquistado el poder, tiene una relación directa con el abandono de los principios y de la moral revolucionarias. Las transformaciones económicas derivadas de la expropiación de la burguesía, no contribuyen por sí solas, mecánicamente, a la transformación de la conciencia y de la moral de los integrantes de la sociedad. El partido del proletariado tiene el deber de proseguir la lucha de clases en el terreno ideológico, cultural y moral. Es preciso reafirmar y extender a las grandes masas la ideología marxista y su utilización en la solución de los problemas que enfrenten; en preciso combatir el egoísmo, el individualismo (tanto personal como el "individualismo" de nación o chovinismo), el espíritu mercenario de lucro, el burocratismo, el servilismo, el arrivismo y tantos otros vicios heredados de la burguesía. Es necesario forjar un nuevo tipo de hombre, capaz de poner los intereses colectivos sobre sus intereses personales egoístas, es decir, opuestos a aquéllos. El pleno desarrollo personal, debe realizarse en acuerdo y en consonancia con los intereses colectivos. Si esto no se realiza, si esta lucha no se libra con firmeza en el terreno de la superestructura, tanto en la sociedad como en el propio partido dirigente, se generará una contra-corriente reaccionaria y el retorno a un sistema de explotación y opresión del pueblo. Los propios principios serán tergiversados, en aras de intereses mezquinos y el marxismo adulterado para restaurar la explotación.

Una profunda división se ha producido en lo que antes constituía el campo socialista y el antiguo Movimiento Comunista Internacional. Esto determina condiciones diferentes hoy en día, en la lucha revolucionaria de los pueblos del mundo. No se trata tan sólo de la consolidación y promoción abierta en escala mundial de una línea adulteradora del marxismo, que causa enormes perjuicios a la lucha revolucionaria, sino, de la existencia de un falso "socialismo". Esta existencia de un falso "socialismo", no sólo concierne a los países y a los pueblos donde ocurren estos hechos. Ellos tienen una influencia negativa considerable en los países donde se lucha aún por la independencia nacional y por el socialismo. Los "modelos" negativos de esos falsos sistemas socialistas, sólo pueden contribuir a la lucha revolucionaria, en la medida en que sean desenmascarados y combatidos, diferenciándolos del auténtico socialismo. En caso contrario, si las masas piensan que eso es el "socialismo", conocida la explotación y opresión existente en dichos países, su "ejemplo" sólo puede conducir a desmoralizarlas y a apartarlas de la lucha por un auténtico socialismo.

Es natural, por lo mismo, que el proletariado y el pueblo, en el propio mundo capitalista, exijan HOY, a los partidos comunistas que dirigen su lucha por terminar con el sistema de explotación, una clara definición sobre el verdadero y el falso socialismo. En natural, también, que les exijan desde ya para depositar su confianza en ellos —antes de conquistar el poder— el testimonio de una nueva moral, a quienes aspiran a vanguardizar su lucha. No puede tratarse de partidos contruidos como los partidos burgueses: sobre la base del dinero, de la demagogia, del arrivismo, de un ejército de burócratas, de la adaptación al legalismo burgués; no puede tratarse de partidos, cuyos militantes no buscan servir al pueblo desinteresadamente, sino una realización, personal e individualista: destacándo-

se como "héroes", al margen de las masas o, simplemente, de mercenarios y profítadores de la política. Una buena parte del apoliticismo de las masas, está determinado por su desprecio a la politiquería burguesa y a los partidos, de "izquierda" o de derecha, que la practican. Es legítimo que busquen un partido conformado, desde ya, antes de conquistar el poder, por militantes dispuestos a transformarse a sí mismos (no aislados, sino, al calor de la lucha revolucionaria), en fieles servidores de los intereses del pueblo.

Con este libro, no hemos querido otra cosa, que analizar y denunciar el papel jugado por los adúlteradores del marxismo y por el socialismo falsificado, en la tragedia que hoy sufre el pueblo chileno. Ellos no constituyen, por ahora, el enemigo principal de nuestro pueblo, pero para combatir a ese enemigo principal y avanzar hacia un auténtico socialismo, es indispensable desenmascararlos, romper con su orientación reaccionaria y ayudar a que el pueblo se deshaga de su influencia. No es el marxismo el que ha sido derrotado en Chile; no es el socialismo auténtico el que ha sido aplastado por el fascismo. Se trata de adulteraciones del marxismo y del socialismo. La ideología del proletariado, el socialismo científico, y los verdaderos ideales socialistas y comunistas, deben ser reivindicados. Para ello, es preciso llevar a fondo el análisis y la crítica de lo que ocurrió en Chile. De ese análisis deben surgir las ideas correctas, que conducirán a la liberación nacional y social del pueblo chileno. Este libro sólo pretende ser una modesta contribución a esa discusión y a la lucha misma que libra el pueblo de Chile contra el fascismo y por su porvenir socialista.

Para concluir, sólo queremos agregar un pensamiento de Lenin, al respecto:

"Hay un socialismo que muere y un socialismo que debe renacer, pero esta muerte y este renacimiento implican, precisamente, una lucha implacable contra la corriente oportunista, y no sólo una lucha que se desarrolle en el terreno ideológico, sino que trata de extirpar esa excrescencia monstruosa de los partidos obreros, de expulsar de las organizaciones a los representantes de esa táctica extraña al proletariado y romper totalmente con ellos. Esta gente no morirá física ni políticamente, pero los obreros romperán con ella, la arrojarán a la fosa común de los lacayos de la burguesía y utilizarán el ejemplo de su putrefacción para educar una nueva generación o más exactamente, nuevos ejércitos del proletariado, capaces de levantar la bandera de la insurrección."

CITAS DEL LIBRO

- 1.- diario "*El Siglo*", 9 de octubre de 1970, pag. 7
- 2.- Idem, 27 de noviembre de 1970
- 3.- Idem, 11 de enero de 1971
- 4.- Idem, 5 de octubre de 1971, pag. 2
- 5.- Idem, 8 de marzo de 1973
- 6.- Idem, 13 de mayo de 1973
- 7.- Idem, 26 de junio de 1971, pag. 3
- 8.- Idem, 7 de noviembre de 1970
- 9.- Idem, 21 de noviembre de 1970
- 10.- Idem, 22 de mayo de 1971, pag. 4
- 11.- Idem, 29 de marzo de 1971, pag. 4
- 12.- Idem, 6 de octubre de 1971, pag. 7
- 13.- Idem, 20 de marzo de 1971, pag. 5
- 14.- Idem, 22 de marzo de 1971, pag. 6
- 15.- diario "*El Siglo*", 31 de mayo de 1971, pags. 4 y 5
- 16.- Idem, 20 de agosto de 1971, pag. 3
- 17.- Idem, 11 de agosto de 1973
- 18.- Idem, 7 de septiembre de 1973
- 19.- Idem, 11 de octubre, pag. 2
- 20.- Idem, 13 de octubre de 1970, pag. 7
- 21.- Idem, 17 de octubre de 1970, pag. 4
- 22.- Idem, 22 de noviembre de 1970, pag. 7
- 23.- Idem, 22 de diciembre de 1970
- 24.- Idem, 2 de diciembre de 1970
- 25.- Idem, 16 de diciembre de 1970
- 26.- Idem, 27 de diciembre de 1970
- 27.- Idem, 31 de enero de 1971, pag. 4
- 28.- Idem, 31 de enero de 1971, pag. 4
- 29.- Idem, 17 de noviembre de 1971, pag. 7
- 30.- Idem, 17 de noviembre de 1971
- 31.- Idem, 25 de abril de 1971, pag. 6
- 32.- *Pekin Informa* N^o - 10 de mayo de 1976, "Abundan los vicios en la sociedad soviética"
- 33.- *Documents du Mouvement Communiste International*, N^o 5 - Septembre-Octobre 1975, Paris, "La propriété commune selon Moscou"
- 34.- *Pekin Informa* N^o 16, 1974 - "El infame programa neo-capitalista de los revisionistas soviéticos"
- 35.- "*Covert Action in Chile 1963-1973*", Staff Report of the Select Committee to Study Governmental Operations with respect to Intelligence Activities, United States Senate. Decembre 18, 1975 - US. Government Printing Office, Washington.
- 36.- Joan E. Garcés, "*Allende y la Experiencia chilena*", Editorial Ariel, Barcelona, pag. 175
- 37.- diario "*El Mercurio*", 14 de diciembre de 1972
- 38.- "*Covert Action in Chile...*"
- 39.- Idem
- 40.- Idem
- 41.- Idem
- 42.- Joan E. Garcés, "*Allende y la experiencia chilena*"... pags. 279 a 284
- 43.- Idem, pag. 213 y 216
- 44.- Idem, pag. 245
- 45.- Joan E. Garcés, "*Allende y la experiencia chilena*".... pag. 304
- 46.- diario "*El Siglo*", 22 de junio de 1972
- 47.- *Actas de Sesiones del Senado de Chile*, Mayo de 1972
- 48.- Lenin, "*¿Y ahora qué?*", publicado en "*Sozial Demokrat*" N^o 6, 9 de enero de 1915

- 49.- Citado de Juan José Sebreh, "Tercer Mundo, mito burgués" Editorial Siglo Veinte, Argentina
- 50.- "Covert Action in Chile...."
- 51.- Idem
- 52.- Idem
- 53.- Idem
- 54.- Idem
- 55.- Idem
- 56.- Idem
- 57.- Idem
- 58.- Idem
- 59.- Idem
- 60.- Idem
- 61.- Idem
- 62.- Idem
- 63.- Idem
- 64.- Idem
- 65.- Idem
- 66.- "Les complots de la CIA", Stock, France, pag. 34
- 67.- Idem, pag. 34
- 68.- Idem, pag. 35
- 69.- Idem, pag. 45
- 70.- Idem, pag. 45
- 71.- "Covert Action in Chile...."
- 72.- Joan E. Garcés, "Allende y la experiencia chilena...", pag. 260
- 73.- Alain Joxe, "Le Chili sous Allende", Gallimard, France pag. 57
- 74.- Joan E. Garcés, "Allende y la experiencia chilena..." pags. 254 a 256
- 75.- "Covert Action in Chile...."
- 76.- Ministro de Hacienda Orlando Millas, "Exposición sobre la Política Económica del Gobierno y el Estado de la Hacienda Pública", presentado a la Comisión Mixta de Presupuesto del Senado, 15 de Noviembre de 1972
- 77.- "Hearings before the Subcommittee on Multinational Corporations", US. Senate, LXXXIII Congress, Washintong DC, Government Print of. 1973, 2 vols. pags. 656, 657
- 78.- Joan E. Garcés, "Allende y la experiencia chilena..." pag. 258
- 79.- "Covert Action in Chile..."
- 80.- Idem
- 81.- Joan E. Garcés, "Allende y la experiencia chilena..."
- 82.- Kissinger, declaraciones a la TV norteamericana, 6 de mayo 1975 ("Le Monde", 8 de mayo de 1975)
- 83.- "Covert Action in Chile..."
- 84.- Para todos estos datos de aportes económicos entregados por el 40 Committee, ver: "Covert Action in Chile..."
- 85.- Ministerio de Economía, Estudio de la Subsecretaría de Economía, 1971
- 86.- diario "El Mercurio", 17 de enero de 1973
- 87.- Idem, 14 de enero de 1973
- 88.- Idem, 3 de abril de 1973
- 89.- ODEPLAN, "Resumen del Plan de la Economía Nacional 1971-1976", Chile pag. 38
- 90.- diario "El Mercurio", 13 de febrero de 1972
- 91.- Idem, 19 de diciembre de 1972
- 92.- Ministro de Hacienda Lorenzo Gotuzzo, "Exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública", octubre 1973, pag. 14
- 93.- diario "El Mercurio", Primero de Julio de 1971
- 94.- Idem, 7 de diciembre de 1971
- 95.- Idem, 10 de octubre de 1972
- 96.- Idem, Primero de julio de 1971

- 97.- Idem, 11 de noviembre de 1971
 98.- Idem, 13 de febrero de 1972
 99.- Idem, 12 de septiembre de 1972
 100.- Idem, 5 de enero de 1973
 101.- Ministro de Hacienda Lorenzo Gotuzzo, "*Exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública*", Octubre de 1973
 102.- diario "*El Mercurio*", 5 de enero de 1972
 103.- Idem, 9 de enero de 1973
 104.- Idem, 11 de mayo de 1972
 105.- Idem, 20 de junio de 1972
 106.- Idem, 19 de febrero de 1973
 107.- Idem, 20 de noviembre de 1972
 108.- Idem, 27 de enero de 1973
 109.- Idem, 3 de febrero de 1973
 110.- Idem, 13 de junio de 1972
 111.- Idem, 26 de diciembre de 1972
 112.- Alberto Baltra, "*Gestión Económica del Gobierno de la Unidad Popular*", Editorial Orbe, Chile, pag. 61
 113.- Idem, pag. 60
 114.- diario "*El Mercurio*", 23 de agosto de 1972
 115.- Idem, 15 de septiembre de 1972
 116.- Idem, 13 de noviembre de 1972
 117.- Idem, 14 de mayo de 1973
 118.- Idem, 16 de julio de 1973
 119.- Idem, 18 de julio de 1972
 120.- Idem, 25 de octubre de 1972
 121.- "*Covert Action in Chile...*"
 122.- James Petras, "*Estados Unidos y el nuevo equilibrio en América Latina*" Revista de Estudios Internacionales, Santiago-Chile, enero-marzo, 1969
 123.- Idem
 124.- Roy Allen Hansen, "*Military Culture and Organizational Decline: Un estudio del Ejército de Chile*", 1967, Universidad de California, Los Angeles
 125.- Lenin, "*El Estado y la Revolución*"
 126.- diario "*El Siglo*", 26 de Octubre de 1970, pag. 4
 127.- Idem, 27 de octubre de 1970
 128.- Idem, 19 de septiembre de 1971
 129.- Idem, 30 de marzo de 1973
 130.- Roy Allen Hansen, "*Military Culture...*"
 131.- U.S. Senate, "*Hearings before the Subcommittee on Multinational Corporations*", LXXXIII Congress, Washington DC, U.S. Government Print of, 1973, 2 vols. pag. 701
 132.- "*Les complots de la CIA*", Stock, France 1976, pag. 28
 133.- Idem, pag. 45
 134.- Idem, pag. 46
 135.- Idem, pag. 52
 136.- Idem, pag. 64
 137.- Idem, pag. 65
 138.- Idem, pag. 67
 139.- Idem, pag. 69
 140.- Idem, pag. 73
 141.- Idem, pag. 73
 142.- "*Covert Action in Chile...*"
 143.- Idem
 144.- Idem
 145.- Idem
 146.- Idem
 147.- Idem

- 148.- Idem
149.- Idem
150.- "Los complots de la Cia"... pag. 54
151.- diario "El Mercurio", 19 de agosto de 1973
152.- Joan E. Garcés, "Allende y la experiencia chilena..." pag. 294
153.- Idem, pag. 66
154.- Idem, pag. 171
155.- Joan E. Garcés, "Allende y la experiencia chilena" pag. 77
156.- "Los complots de la CIA..." pag. 60
157.- diario "El Siglo", 6 de octubre de 1971, pag. 7
158.- Idem, 6 de septiembre de 1971, pag. 4
159.- Idem, 4 de diciembre de 1971
160.- Idem, 5 de diciembre de 1971, pag. 14
161.- Idem, 1o, 3 y 4 de octubre de 1971
162.- Idem, 26 de enero de 1973, pag. 7
163.- Idem, 9 de julio de 1973
164.- Joan E. Garcés, "Allende y la experiencia chilena..." pag. 381
165.- Idem, pag. 395
166.- diario "El Mercurio", 2 de agosto de 1973
167.- "Corvalán 27 horas", Quimantú, Santiago de Chile, 1972, pag. 13
168.- Alain Joxe, "Le Chili sous Allende", Gallimard, France 1974, pag. 188
169.- Mario Toer, "La vía chilena: un balance necesario", Tiempo Contemporáneo, Argentina, pag. 181
170.- Idem, pag. 191
171.- Alain Joxe, "Le Chili sous Allende"..., pag. 193
172.- Mario Toer, "La vía chilena...", pag. 195
173.- Idem, pag. 197
174.- Idem, pag. 214
175.- Revista "Chile Hoy", 17 de agosto de 1973, pag. 3
176.- Mario Toer, "La vía chilena...", pag. 232
177.- diario "El Mercurio", 14 de agosto de 1973
178.- Mario Toer, "La vía chilena...", pag. 236
179.- Catherine Lamour, "Allende: La nueva sociedad chilena", Dopesa, Barcelona-España 1972, pag. 137
180.- Catherine Lamour, "Allende: La nueva sociedad...", pag. 137
181.- Mario Toer, "La vía chilena...", pag. 181
182.- Alain Joxe, "Le Chili sous Allende"..., pag. 212
183.- Idem, pag. 226
184.- Idem, pag. 101
185.- Mario Toer, "La vía chilena..." pag. 198
186.- Citado de: "Una línea pequeño burguesa y una línea proletaria en la revolución chilena", Santiago de Chile, 1967, Imprenta Bio-Bio
187.- "Una clasificación necesaria" mayo de 1976, Revista "ORIENTACION", órgano oficial en el exterior del Partido Socialista
188.- Artículo de Volodia Teitelboim (multicopiado), enero de 1976, "El documento de Frei"
189.- Partido Socialista (documento mimeografiado)
190.- MAPU, documento de su Comisión Política (Mimeografiado), marzo de 1974
191.- Boletín Informativo No 89 - La Habana - Cuba, Abril-Mayo 1976, "Frei de espaldas al pueblo"
192.- diario "El Siglo", 18 de diciembre de 1970
193.- Lenin, "La voz honrada de un socialista francés"

SIGLAS

AMPICII	=	Asociación de Medianos y Pequeños Industriales de Chile
API	=	Acción Popular Independiente
CERA	=	Centro de Reforma Agraria (Unidades de producción que agrupaban a diversos fundos reformados, en que sus trabajadores formaban una cooperativa de producción, con fondos de inversión colectivos)
CODE	=	Confederación de la Democracia (Constituida como instrumento unitario de oposición a partir de 1973 por los partidos PDC, PN, PIR y DR)
CORFO	=	Corporación de Fomento de la Producción (Organismo público de fomento del desarrollo industrial, que administró las empresas estatizadas durante el gobierno de Allende)
CORA	=	Corporación de la Reforma Agraria (Organismo estatal encargado de la conducción de la Reforma Agraria)
CODELCO	=	Corporación de Cobre. (Organo estatal encargado de la administración de las empresas estatizadas del cobre y de la comercialización de su producción)
CUT	=	Central Unica de Trabajadores (Confederación sindical creada en 1953, con cerca de un millón de afiliados durante el gobierno de Allende)
CUP	=	Comités de Unidad Popular (Comités electorales de barrio, formados para la elección presidencial de 1970 y disueltos después de la elección de regidores de 1971)
CORVI	=	Corporación de la Vivienda (Organismo público de financiamiento y promoción de la construcción destinada a los trabajadores)
DC	=	Democracia Cristiana (o PDC, Partido Demócrata Cristiano)
DR	=	Democracia Radical (Grupo radical de extrema derecha, escindido del Partido Radical en 1969)
FRAP	=	Frente de Acción Popular (Formación electoral que agrupaba al PC y al PS, antes de su ampliación en Unidad Popular con la incorporación de otras fuerzas políticas)
FRENAP	=	Frente Nacional de la Area Privada (Agrupación de varias asociaciones y sindicatos patronales)
IC	=	Izquierda Cristiana (Escisión de izquierda de la DC en 1971)
INDAP	=	Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Organismo destinado al desarrollo agropecuario)
JAP	=	Juntas de Abastecimiento y Precios (Organismos de barrio creados por el gobierno y la UP para combatir la especulación y facilitar la distribución)
MAPU	=	Movimiento de Acción Popular Unitaria (Escisión de izquierda de la DC producida en 1969)
MIR	=	Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Movimiento de inspiración castrista nacido en 1967)
PC	=	Partido Comunista de Chile (Partido revisionista pro-soviético, que abandonara abiertamente la ideología marxista a raíz del XX Congreso del PCUS)
PL o FNPL	=	Frente Nacional Patria y Libertad (Movimiento fascista creado en 1970 después del triunfo de Allende)
PCR	=	Partido Comunista Revolucionario (Auténtico partido comunista nacido del grupo Espartaco, que surgió de una escisión del viejo P" C" cuando este adoptó públicamente las tesis anti-marxistas de Jruschov. El PCR, fue creado en 1966)
PIR	=	Partido de la Izquierda Radical (Fracción derechista del PR que simula apoyar al gobierno de Allende por instrucciones de la CIA, para sabotear su acción)
PN	=	Partido Nacional (Partido de los sectores monopolistas de la burguesía y de la oligarquía terrateniente)
PR	=	Partido Radical (Antigua colectividad que agrupara en el pasado a im-

- portantes sectores medios, logrando desplazar a partir de 1938 el control exclusivo de la extrema derecha del gobierno. En decadencia y descomposición después de la Segunda Guerra Mundial)
- PS** = Partido Socialista de Chile (Principal fuerza política de la UP en influencia electoral, con gran variedad de tendencias en su seno)
- SOFOFA** = Sociedad de Fomento Fabril (Agrupación patronal de la industria manufacturera)
- USOPO** = Unión Socialista Popular (Fracción socialista que restara al margen de la Unidad Popular en 1970)
- UP** = Unidad Popular (Agrupación política integrada por el PS, PC, MAPU, PIR, PR, API e IC, que servía de sostén político al gobierno de Allende)

En el frente laboral a los
EDITORIAL 7 S. S. A.
 Avda. 12 de Septiembre 11
ESARA



editorial 7 S. S. A.

SERIE: POLITICA
OTROS TITULOS PUBLICADOS

¿ANARQUISMO O SOCIALISMO?
(Stalin)

Las bases teóricas del anarquismo, ¿llevan a donde quieren ir los anarquistas, que luchan de corazón contra el régimen burgués? ¿Qué óptica adoptar en esta lucha: el individualismo anarquista o el marxismo?

ELECCIONES MUNICIPALES: LA POLITICA DE LOS COMUNISTAS Y EL PARLAMENTO.

Estos textos —que se reeditan por primera vez en España después del 36— permitirán al lector comparar lo que pensaban los comunistas de las elecciones y el parlamento, con lo que hacen aquí los Srs. Carrillo, García Castro, San Román y otros que se reclaman del comunismo. Se incluyen —igualmente por primera vez en España después del 36— las resoluciones referentes a la actitud de los comunistas respecto a las elecciones municipales y su trabajo en los municipios.

CHINA DEL ROJO AL AMARILLO, LA "TEORIA" DE LOS TRES MUNDOS.

¿Es correcto hacer acuerdos con los Pinochet y compañía y dejar caer al pueblo chileno?

¿Es correcto apoyar en Angola a fuerzas al servicio del imperialismo americano?

¿Es correcto apoyar el reforzamiento de la OTAN?

El imperialismo americano: ¿es o no es enemigo de los pueblos del mundo?

¿Degenera el Partido Comunista Chino a la muerte de Mao?

Un análisis global de la teoría de los tres mundos cuya envergadura, implicaciones y extensión se dan a conocer por primera vez en lengua castellana. Exhaustiva documentación reunida sistemáticamente.

En su librería habitual o en
EDITORIAL 7 1/2, S.A.
Aribau 15, 6º, Barcelona-11
ESPAÑA



editorial 7 1/2

Jorge Palacios, nació el 3 de noviembre de 1926 en Valparaíso (Chile). Profesor de Filosofía y ex-director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile. Fundador y miembro del Secretariado del Partido Revolucionario de Chile. Actualmente exiliado en Francia.



de
un ensayo
COMPRO
HISTORIC

La experiencia del gobierno Allende y los límites ideológicos y políticos que la caracterizaron por su estrategia de "vía pacífica" al poder y de "compromiso histórico" con la fracción pro-yanqui de la democracia cristiana. La rivalidad USA-URSS en Chile. La ofensiva global del imperialismo USA y las fuerzas reaccionarias para "desestabilizar" al gobierno y preparar el golpe de Estado. El sabotaje económico, institucional, social y político. Las instituciones burguesas y la estrategia con la que se enfrentaron al gobierno Allende: parlamento, contraloría, tribunales, fuerzas armadas... Las contradicciones en el seno de las fuerza de oposición y en las del gobierno.

Perspectivas de lucha...



editorial 7½